ècp escola de cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

alerta 2024!

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz



Icaria editorial

Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2024!

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Elaborado por:
Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

escola de cultura de pau

ISBN: 978-84-10328-14-3
Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:
Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa,
Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arestizábal,
Ana Villellas Ariño y María Villellas Ariño.

Diseño: Lucas Wainer Mattosso
Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB
Imprenta: Ulzama
Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Para citar este informe:
Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*
Barcelona: Icaria, 2024.

Esta obra forma parte de la serie *Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz* que anualmente publica la Escola de Cultura de Pau y está sujeta a una licencia internacional de Creative Commons.



Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

Escola de Cultura de Pau
Edifici B13
Carrer de Vila Puig
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (España)
Tel: +34 93 581 14 14
Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat
Web: http://escolapau.uab.cat

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas ____ 6
Resumen ejecutivo ____ 7
Resumen de la conflictividad global en 2023 ____ 19

Capítulos

1. Conflictos armados ____ 21
1.1. Conflictos armados: definición ____ 25
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2023 ____ 25
1.2.1. Tendencias globales y regionales ____ 25
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil ____ 32
1.3. Conflictos armados: evolución anual ____ 36
1.3.1. África ____ 36
- África Austral ____ 36
- África Occidental ____ 37
- Cuerno de África ____ 44
- Grandes Lagos y África Central ____ 50
- Magreb - Norte de África ____ 62
1.3.2. América ____ 63
1.3.3. Asia y Pacífico ____ 65
- Asia Meridional ____ 65
- Sudeste Asiático y Oceanía ____ 69
1.3.4. Europa ____ 74
- Europa Oriental ____ 74
- Sudeste de Europa ____ 76
1.3.5. Oriente Medio ____ 78
- Golfo ____ 78
- Mashreq ____ 80

2. Tensiones ____ 89
2.1. Tensiones: definición ____ 89
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2023 ____ 96
2.2.1. Tendencias globales ____ 96
2.2.2. Tendencias regionales ____ 98
2.3. Tensiones: evolución anual ____ 102
2.3.1. África ____ 102
- África Occidental ____ 102
- Cuerno de África ____ 106
- Grandes Lagos y África Central ____ 110
- Magreb - Norte de África ____ 115
2.3.2. América ____ 117
- América del Norte, Centroamérica y Caribe ____ 117
- América del Sur ____ 124
2.3.3. Asia y el Pacífico ____ 130
2.3.3.1 Asia ____ 130
- Asia Meridional ____ 130
- Asia Oriental ____ 133
- Sudeste Asiático ____ 141
2.3.3.2 El Pacífico ____ 143
2.3.4. Europa ____ 144
- Europa oriental ____ 144
- Rusia y Cáucaso ____ 148
- Sudeste de Europa ____ 150
2.3.5. Oriente Medio ____ 151
- Golfo ____ 151

3. Género, paz y seguridad ____ 157
3.1. Desigualdades de género ____ 158
3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género ____ 159
3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones ____ 159
3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados ____ 163
3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado ____ 164
3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género ____ 168
3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad ____ 168
3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz ____ 171
3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil ____ 172

4. Oportunidades de paz ____ 175
4.1. ¿Esperanzas de paz en la Cuenca del río Nilo? ____ 176
4.2. Senegal: La victoria de la oposición en las elecciones presidenciales parece poner fin a la crisis política en el país ____ 178
4.3. La reanudación del proceso de paz en el sur de Tailandia tras una década de autoritarismo ____ 180
4.4. Chipre: ¿hacia una nueva oportunidad fallida u ocasión para construir vías de acercamiento? ____ 183
4.5. La cumbre del futuro y la nueva agenda para la paz de Naciones Unidas,una oportunidad para fortalecer el multilateralismo ____ 186

5. Escenarios de riesgo ____ 189
5.1. Rwanda, ¿Nunca más? ____ 190
5.2. Sudán, ante el riesgo de cronificación del conflicto armado y de un efecto contagio en la región de desastrosas consecuencias ____ 192
5.3. El aumento de la tensión política y militar entre China y Filipinas en el Mar de la China Meridional ____ 194
5.4. El incremento de la militarización en Europa ____ 196
5.5. Gaza, la erosión del derecho internacional humanitario y el futuro del orden global ____ 199

Glosario ____ 201
Escola de Cultura de Pau ____ 207

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1. Conflictos armados ____ 20

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2023 ____ 22

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2023 ____ 26

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados _ 30

Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones ____ 30

Gráfico 1.4. Proporción de conflictos armados graves en la última década____ 30

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada____ 32

Mapa 1.2. Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2023 ____ 35

Mapa. 2.1. Tensiones ____ 88

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2023 __ 90

Cuadro 2.1. Tensiones de alta intensidad en 2023_ 97

Gráfico 2.1. Evolución del número de tensiones 2018-2023 ____ 97

Gráfico 2.2. Distribución regional del número de tensiones en 2023 ____ 98

Gráfico 2.3. Intensidad de las tensiones por regiones ____ 98

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad ____ 156

Tabla 3.1. Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género __ 158

Tabla 3.2. Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género ____ 159

Tabla 3.3. Actores armados y violencia sexual en conflictos____ 160

Mapa 3.2. Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+____ 167

Tabla 3.4. Conflictos armados en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+____ 167

Tabla 3.5. Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz ___ 169

Mapa 4.1. Oportunidades de paz ____ 175

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo ____ 189

Resumen ejecutivo

Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2023 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2024!* son las siguientes:

- En 2023 se contabilizaron 36 contextos de conflicto, la cifra más alta desde 2014.

- Cinco nuevos casos pasaron a ser considerados como conflictos armados en 2023 –Etiopía (Amhara), Somalia (Somalilandia – SSC Khatumo), RDC (oeste), Sudán y Israel-Hezbollah– mientras que otro dejó de serlo a lo largo de 2023 –Etiopía (Tigré).

- La gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (18) y Asia y el Pacífico (nueve), seguidas por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).

- El 47% del total de los conflictos armados fueron de alta intensidad, caracterizados por elevados niveles de letalidad –por encima del millar de víctimas mortales anuales–, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio.

- Los 17 conflictos armados de alta intensidad en 2023 fueron: Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

- En cuanto a la evolución de los conflictos armados en 2023, en un 42% de los casos se observó un deterioro de la situación.

- Según ACNUR, en el primer semestre de 2023 la cifra global del desplazamiento forzado ascendía a 110 millones de personas. De este total, 36,4 millones de personas eran refugiadas, 62,5 millones eran desplazadas internas, 6,1 millones se contabilizaban como solicitantes de asilo y otras 5,3 se encontraban en la categoría de personas necesitadas de protección internacional.

- Respecto a la población refugiada y en necesidad de protección internacional, a mediados de 2023 más de la mitad (52%) procedía de tan solo tres países afectados por conflictos armados: Siria (6,5 millones de personas), Afganistán (6,1 millones) y Ucrania (5,9 millones).

- En 2023, los conflictos y violencia habrían motivado movimientos internos de población de más de 20 millones de personas en 45 países y territorios. Sudán, RDC y Palestina representan casi dos tercios de este total.

- Durante 2023 se identificaron 114 escenarios de tensión en todo el mundo, seis más que en 2022, en línea con la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años.

- África y Asia y el Pacífico fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (38 y 33 respectivamente), seguidas de América (20), Europa (13) y Oriente Medio (10).

- La mitad de los casos de tensión en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior.

- Aproximadamente casi una cuarta parte de las tensiones (23%) fueron internacionales: Eritrea-Etiopía; RDC-Rwanda; Venezuela-Guayana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); e Irán-EEUU, Israel.

- 23 de los 36 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2023 se dieron en países donde existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género. Además, 46 de las 108 tensiones activas durante el año 2023 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad.

- El informe anual del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armado.

- Por segundo año se registró un retroceso en la participación de mujeres en procesos de paz.

- El 33% de los acuerdos de paz que se firmaron en 2022 (6 de los 18 acuerdos alcanzados ese año) incluían cláusulas en las que se hacía referencia a las mujeres, las niñas o el género.

- El informe *Alerta 2024!* identifica cinco oportunidades de paz en Etiopía-Egipto-Sudán (cuenca del Nilo); Senegal; Tailandia; Chipre; y con relación a la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas y una nueva agenda de Paz.

- El informe destaca cinco escenarios de riesgo en Rwanda; Sudán; China-Filipinas; Europa y Gaza.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Conflictos armados

En el primer capítulo (Conflictos armados)[1] se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2022, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

En 2023 se contabilizaron 36 contextos de conflicto, la cifra más alta desde 2014. En 2022 se registraron 33 casos, 32 en 2021 y 34 entre 2018 y 2020. Cinco nuevos casos pasaron a ser considerados como conflictos armados en 2023. En Etiopía, en la región de Amhara, la decisión del Gobierno Federal de desarmar y disolver a las milicias paramilitares Fano para integrarlas en el Ejército y la Policía derivaron en serios enfrentamientos entre integrantes de estas milicias y miembros de las fuerzas gubernamentales. En el Cuerno de África, las hostilidades entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia –región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa– y milicias de la región de Khatumo –que pretende convertirse en un nuevo estado en el seno de Somalia, aunque forma parte de Somalilandia– escalaron de manera significativa desde principios de 2023 y continuaron activas durante todo el año. Mientras, en la zona oeste de RDC, el conflicto entre las comunidades teke y yaka en torno a disputas por la propiedad de la tierra que se había iniciado el año anterior en la provincia de Mai-Ndombe se agravó y la violencia se extendió a varias provincias vecinas en 2023. En Sudán también se identificó el estallido de un nuevo conflicto armado que involucró principalmente a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) con el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF). Las dinámicas de violencia que escalaron a partir del mes de abril acabaron afectando a gran parte del país y de manera especial a la región de Darfur y a las de Kordofán y Nilo Azul, donde los actores armados de esas áreas se implicaron activamente en las hostilidades. Por ello, los conflictos armados en estas regiones sudanesas, que previamente en este informe se analizaban por separado, en esta edición se analizan conjuntamente como parte del conflicto más amplio en Sudán. El último nuevo escenario de conflicto se ubicó en Oriente Medio, donde la intensificación de tensiones en toda la región derivadas de la crisis en Gaza abrió un frente de especial relevancia en el área fronteriza entre Israel y Líbano. El incremento en la magnitud, frecuencia y alcance de las hostilidades entre las fuerzas israelíes y Hezbollah y los impactos de esta violencia motivaron que el caso pasara a ser considerado conflicto armado a finales de 2023. Por otra parte, también hubo un conflicto armado que finalizó durante 2023: la significativa reducción de la violencia, el repliegue de grupos armados locales y fuerzas extranjeras y el desarme efectivo de combatientes tras la firma de un

Durante el año 2023 se registraron 36 conflictos armados

1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
   - demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
   - la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
   - o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2023*

ÁFRICA (18)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (6)
Burundi -2015- Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018- Etiopía (Amhara) -2023- Etiopía (Oromiya) -2022- Etiopía (Tigré) -2020-** Libia -2011- Malí -2012- Mozambique (Norte) -2019- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este – ADF) -2014- RDC (oeste) -2023- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- Región Sahel Occidental -2018- Somalia -1988- Somalia (Somalilandia – SSC Khatumo) -2023- Sudán -2023- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014- Iraq -2003- Israel-Hezbollah –2023- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen -2004-
		EUROPA (2)
		Turquía (sudeste) -1984- Rusia – Ucrania -2022-
		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado.
** Conflicto armado finalizado en 2023.

acuerdo de paz en noviembre de 2022 entre el Gobierno Federal de Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré motivaron que este caso dejara de ser considerado como conflicto armado en 2023.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (18) y Asia y el Pacífico (nueve), seguidas por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).

Respecto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internos internacionalizados e internacionales. Aunque los conflictos armados internos internacionalizados continuaron siendo la mayoría, siguiendo la tendencia de años previos, en 2023 se incrementó el número de casos tanto de conflictos internos como de internacionales. Los conflictos armados considerados eminentemente internos representaron un 17% de los casos en 2023 y su número creció en términos comparativos con el año anterior. Si en 2022 eran cuatro los casos de este tipo, en 2023 se contabilizaron seis casos. Otros cinco casos de conflicto armado fueron de carácter internacional, una cifra que también aumentó respecto a períodos precedentes, pasando de tres casos en 2022 a cinco en 2023. El resto de casos, equivalentes al 69% –25 de 36– fueron de carácter interno internacionalizado, un porcentaje que evidencia una reducción relevante respecto a años previos –en 2022 representaron el 79% y en 2021 el 81% de los casos. Estos conflictos armados se caracterizan porque, aunque parte de las dinámicas sean internas, alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados, grupos armados de acción transfronteriza y empresas internacionales de seguridad privada, entre otros.

En lo que respecta a las causas de los conflictos armados, en 2023 se confirmó la naturaleza multicausal de los conflictos armados contemporáneos. Siguiendo también la tendencia de años previos, la mayor parte de los conflictos –26 de los 36, equivalentes a un 72%– tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos. Durante 2023, y en consonancia con la tendencia observada en los últimos años, tuvo relevancia el factor causal vinculado a las disputas en torno al sistema, presente en 19 de los 36 casos (53%) y relacionado en la mayoría de ellos a la presencia de actores armados con agendas políticas que reivindican una presunta inspiración yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos se encuentran por ejemplo Boko Haram en la Región del Lago Chad, las milicias talibán pakistaníes de TTP o los distintos grupos que se han reivindicado como filiales y/o "provincias" de ISIS más allá de su área de origen en Iraq y Siria, en contextos como en la región del Lago Chad, Somalia, Libia, Egipto (Sinaí), Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Filipinas (Mindanao), o Yemen. En algunos de estos casos –como Libia, Egipto (Sinaí) o Filipinas (Mindanao)– estos grupos han reducido notoriamente sus actividades respecto a años previos. En otros tres casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba

asociada a otra tipología de insurgencias, con una línea ideológica vinculada al comunismo y al maoísmo. Los conflictos armados con motivaciones relacionadas a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos, que derivan en luchas por erosionar o acceder al poder, estuvieron presentes en 14 de los 36 casos (39%). Entre ellos, cabe mencionar contextos como el de Libia, RCA, Somalia, Sudán, Siria o Yemen.

Otro importante elemento a destacar entre las causas principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, presentes en 21 de los 36 conflictos armados en 2023, es decir, en un 58% de los casos. En línea con años previos, de estas dos motivaciones tuvo mayor peso el factor asociado a demandas identitarias, identificadas en 22 casos (61% del total de casos), frente a 14 casos (39%) en los que fueron relevantes las cuestiones de autogobierno. Las aspiraciones identitarias estuvieron presentes en los nuevos casos de conflictos armados en África en 2023, por ejemplo vinculados a las reivindicaciones del nacionalismo amhara en Etiopía, al interés de la administración de SSC-Khatumo de convertirse en un nuevo estado de Somalia –en el marco de la disputa histórica por regiones fronterizas entre Somalilandia y Puntlandia–, o a los enfrentamientos y luchas de poder entre las comunidades teke y yaka en RDC (oeste). Otros casos con conflictos en torno a cuestiones de autogobierno y/o identidad fueron Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (norte), la región del Sahel Occidental, RDC (este), Sudán, Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Turquía (sudeste), Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

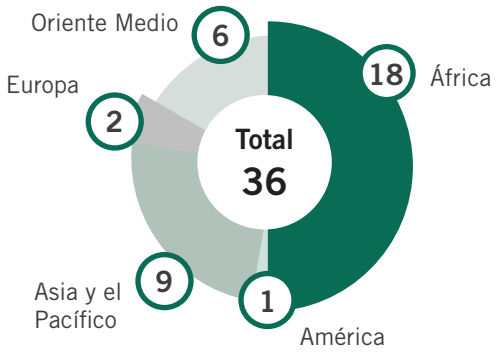
Finalmente, respecto a los factores de causalidad, cabe mencionar que numerosos conflictos armados tuvieron entre sus motivaciones principales el control de territorio y/o de recursos. En 15 de los 36 casos (42%) se identificaron este tipo de factores. En este binomio, las cuestiones vinculadas al control del territorio estuvieron presentes en cinco casos (14% del total), pero destacó especialmente el peso de las disputas en torno a recursos, presentes en un tercio (33%) de los conflictos armados en 2023. En línea con años anteriores, los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. A lo largo de 2023, las disputas en torno a estas cuestiones fueron relevantes en casos como el conflicto de la región del Lago Chad, Libia, RCA, RDC (este) o Pakistán (Baluchistán).

En cuanto a la evolución de los conflictos armados en 2023, en un 42% de los casos se observó un deterioro de la situación. Los casos que presentaron esta tendencia se concentraron en África –Burundi, Etiopía (Amhara), Malí, la región de Sahel Occidental, RDC (este), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia – SCC Kathumo), Sudán–, en Asia –Myanmar, Pakistán y Pakistán (Baluchistán)– y en Oriente Medio –Israel-Palestina, Israel-Hezbollah y Siria. En algunos de estos contextos, como por ejemplo en Malí o en Pakistán, la escalada de violencia puso fin a acuerdos de cese el fuego que habían estado vigentes –durante años en el primer caso, durante unos meses en el segundo. El resto de conflictos armados se distribuyeron de manera prácticamente similar entre aquellos que presentaron unos niveles de hostilidades y violencia similares a los del año anterior (10 casos, equivalentes a 28%) y los que presentaron niveles comparativamente más bajos (11 contextos, que representan el 30%). Entre los que evolucionaron hacia una disminución de los enfrentamientos cabe destacar que, en algunos contextos, esta tendencia estuvo vinculada al aparente debilitamiento y reducción de actividad por parte de algunos de los actores armados en disputa como resultado de las propias dinámicas de las hostilidades. Fue por ejemplo el caso de Mozambique (norte) –donde se produjo una notoria reducción en las cifras de letalidad asociadas al conflicto y en el número de episodios violentos dirigidos contra la población civil–, pero también el de otros como Filipinas (Mindanao) o Egipto (Sinaí). En otros escenarios la disminución estuvo vinculada al impacto de procesos de negociación y acuerdos de paz o de alto el fuego, como en Etiopía (Tigré) –que dejó de ser considerado como conflicto armado 2023 debido a la evolución de los acontecimientos tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2022– o en Yemen –donde se mantuvo de facto el acuerdo de alto el fuego suscrito en 2022 y se mantuvieron activos canales de negociación entre los principales actores involucrados en las hostilidades.

En cuanto a la evolución de los conflictos armados en 2023, en un 42% de los casos se observó un deterioro de la situación

Respecto a la intensidad de los conflictos armados, en 2023 el 47% del total de casos fueron de alta intensidad,

Distribución regional del número de conflictos armados en 2023

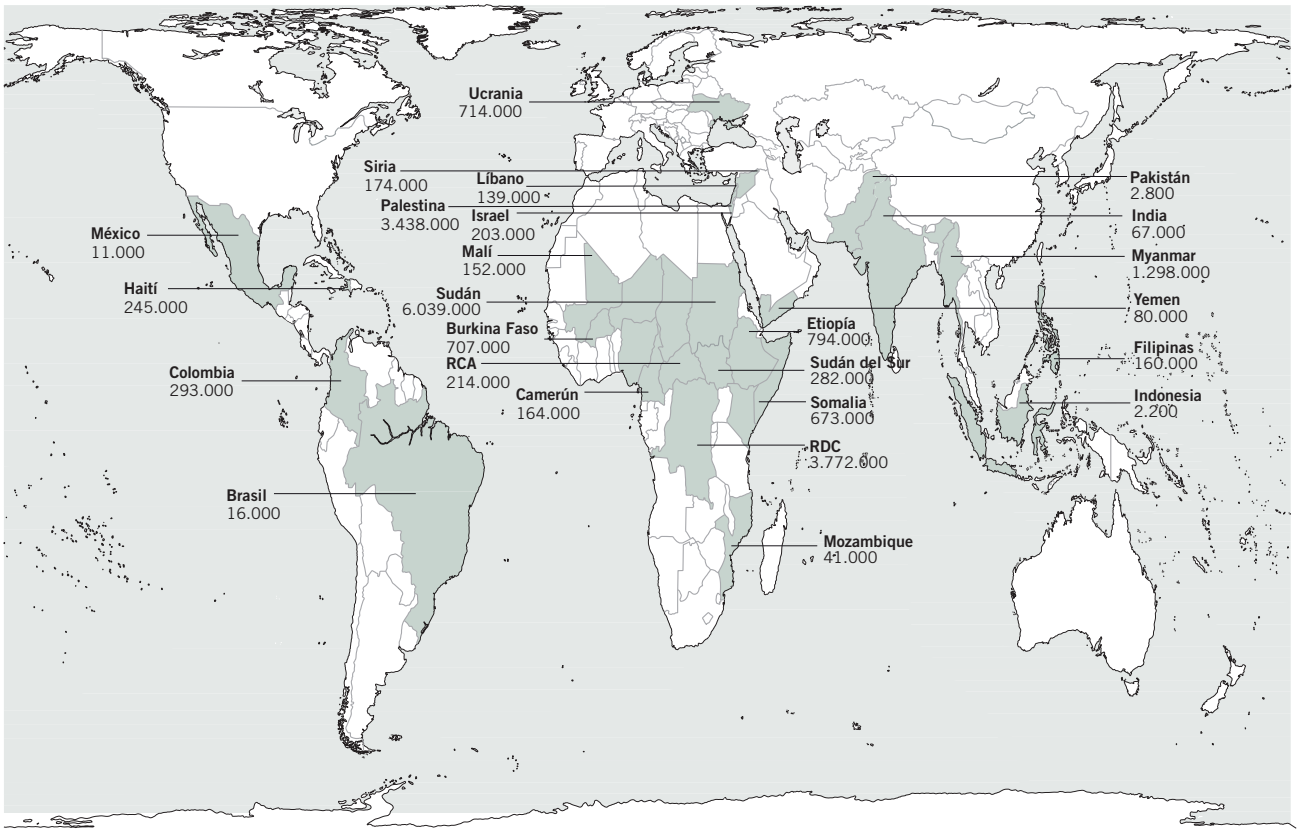


caracterizados por elevados niveles de letalidad –por encima del millar de víctimas mortales anuales–, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Del resto de casos, el 17% fueron de intensidad media y el 36% de intensidad baja. Si consideramos los datos desde 2011, los conflictos armados de alta intensidad solían representar menos de un tercio del total de casos a nivel global –a excepción de los años 2016 y 2017 en los que se situaron en 40%--, pero desde 2020 el porcentaje de casos de este tipo se ha incrementado, situándose en torno a la mitad del total de conflictos armados a nivel global: 47% en 2020, 53% en 2021, 52% en 2022 y 47% en 2023. El mayor porcentaje de casos de este tipo se concentró en África (que albergó 10 de los 17 conflictos armados de alta intensidad), seguida de Oriente Medio (cuatro casos), Asia (dos) y Europa (uno). Los 17 conflictos armados de alta intensidad en 2023 fueron: Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen. Como en años previos, algunos de los conflictos armados de alta intensidad provocaron niveles de letalidad muy superiores al umbral del millar de víctimas mortales anuales, además de otros graves impactos en términos de seguridad humana y repercusiones en infraestructuras y en el territorio. Algunos de los ejemplos que, según algunos balances, habrían sufrido mayores niveles de mortalidad asociada a las hostilidades bélicas fueron los casos de Israel-Palestina –con más de 34.000 víctimas mortales en tan solo tres meses–, Rusia-Ucrania –más de 30.000–, Myanmar –más de15.000–, Sudán o la región del Sahel Occidental –más de 13.000 en cada caso–, Somalia –casi 8.000–, Siria –más de 6.000–, Malí –más de 4.000–, o Yemen y RDC –con más de 3.000.

La población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados en 2023. Estos impactos se interrelacionaron además con otras crisis, como la emergencia climática, la inseguridad alimentaria o la desigualdad, agravando las vulneraciones de derechos y la situación general de seguridad humana en estos contextos. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados dibujó un panorama que confirma las consecuencias en civiles en términos de muertes, heridas, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y desplazamiento forzado. También subrayó que la destrucción de infraestructura esencial –de salud, de electricidad, sanitaria y de agua– privó a miles y miles de personas de acceso a servicios esenciales para sobrevivir. El informe también alertó del impacto del uso de armas explosivas en áreas pobladas, con efectos devastadores en la población civil. Así, en 2022, se identificó que el mayor número de víctimas civiles por este tipo de prácticas se había producido en Ucrania, seguido de Afganistán, Somalia y Siria. Paralelamente, se documentó la utilización de minas antipersonales en contextos como RCA, Colombia, RDC, Myanmar, Ucrania y Yemen, así como bombas de racimo en Ucrania. Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En sus informes periódicos sobre las consecuencias de los conflictos en la población civil, el secretario general de la ONU viene alertando sobre los efectos desproporcionados que padecen las personas de mayor edad, que muchas veces no pueden abandonar las zonas afectadas por las hostilidades y se ven obligadas a afrontar un mayor riesgo de morir, resultar heridas o no tener acceso a servicios básicos o redes de apoyo. En cuanto a los impactos de los conflictos armados en los niños y las niñas, el informe periódico del secretario general constató un aumento en el número de vulneraciones graves contra menores. Si en 2021 se habían confirmado 23.982, en el año 2022 se documentaron 27.180 vulneraciones graves, de las cuales 24.300 fueron cometidas a lo largo de 2022 y 2.880 fueron perpetradas con anterioridad, pero verificadas en 2022. Estos hechos afectaron a casi 19.000 menores, de los cuales la mayoría eran niños, en 24 contextos. Se identificó así que las acciones más graves cometidas contra niños y niñas fueron las matanzas, las mutilaciones, el reclutamiento, el secuestro y la detención de menores por su vinculación real o presunta con grupos armados. Las normas de género condicionaron la exposición de menores a estos impactos. Así, los niños continuaron viéndose más afectados por el reclutamiento, las mutilaciones y los secuestros, mientras que las niñas se vieron desproporcionadamente afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos armados.

Los desplazamientos forzados de población continuaron siendo uno de los efectos más flagrantes y dramáticos de los conflictos armados, comprometiendo las vidas de millones de personas a nivel global. Según los datos recopilados por la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas, ACNUR, este fenómeno continuó agravándose en 2023, batiendo nuevamente las cifras récord registradas en años previos. El balance global del primer semestre de 2023 ascendía ya a 110 millones de personas, incluyendo personas desplazadas forzosamente dentro y fuera de las fronteras de sus países como resultado de conflictos, violencia, persecución y vulneraciones a los derechos humanos. De este total, 36,4 millones de personas eran refugiadas, 62,5 millones eran desplazadas internas, 6,1 millones se contabilizaban como solicitantes de asilo y otras 5,3 se encontraban en la categoría de personas necesitadas de protección internacional. Respecto a la población refugiada y en necesidad de protección internacional, a mediados de 2023 más de la mitad (52%) procedía de tan solo tres países afectados por conflictos armados: Siria (6,5 millones de personas), Afganistán (6,1 millones) y Ucrania (5,9 millones). Si se consideran tanto la población refugiada como la desplazada internamente, Siria continuaba ocupando el primer

Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Report on Internal Displacement 2024*, 14 de mayo de 2024.

lugar –como lo ha sido durante una década– con un total de 13,3 millones de personas. Del total de población desplazada forzosamente a nivel mundial se estimaba que el 88% vivía en países de ingresos medios y bajos. Según el informe anual de IDMC, que se focaliza en la situación de la población desplazada internamente, hasta finales de 2023 un total de 68 millones de personas había dejado sus hogares por conflictos y violencia, una cifra que se ha incrementado en un 49% en los últimos cinco años. Conflictos y violencia habrían motivado movimientos internos de población de más de 20 millones de personas en 45 países y territorios en 2023. Sudán, RDC y Palestina representan casi dos tercios de este total.

Al igual que en años previos, en numerosos conflictos armados continuó perpetrándose violencia sexual. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos armados publicado en 2023, que documenta y analiza hechos ocurridos en 2022, alertó sobre algunas tendencias especialmente preocupantes y advirtió sobre graves afectaciones relacionadas con la utilización de la violencia sexual en países como Ucrania, Afganistán, Malí, Myanmar, Sudán, RDC, Etiopía, Haití y Sudán del Sur. El informe identificó 43 actores como perpetradores de violencia sexual en distintos escenarios de conflicto, la mayor parte de ellos grupos armados no estatales, aunque también se registraron casos de implicación de Fuerzas Armadas y de seguridad. El informe enfatiza que el 70% de estos actores son considerados como perpetradores persistentes, al aparecer en la lista durante cinco años o más y no adoptar medidas correctivas o de reparación. La violencia sexual se utilizó como parte de la violencia política y represiva en diferentes contextos de conflicto armado y tensiones sociopolíticas y fue una de las causas del desplazamiento forzado de población, afectando también a la población previamente desplazada dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres que deben abandonar de manera forzada sus lugares de origen.

Tensiones

En el segundo capítulo (Tensiones)[2] se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2023 se identificaron 114 escenarios de

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

tensión en todo el mundo, seis más que en 2022, en línea con la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (31 casos más desde el año 2018). África y Asia y el Pacífico fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (38 y 33 respectivamente), seguidas de América (20), Europa (13) y Oriente Medio (10). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 13 nuevos casos, concentrados principalmente en África y América: Etiopía-Somalia; Gabón; Madagascar; Senegal; Sierra Leona; Togo; Argentina; Panamá; Paraguay; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Filipinas; y Rusia-EEUU, OTAN, UE. Por otro lado, otros siete casos dejaron de ser calificados como tensión, la mayoría en África: África Central (LRA); Eswatini; Sudán; Somalia (Somalilandia – Puntlandia); India; India (Assam); e Israel-Siria-Líbano. De ellos, los casos de África Central (LRA), Eswatini, India e India (Assam) lo hicieron debido a la reducción de la intensidad, mientras que los casos de Sudán, Somalia (Somalilandia – Puntlandia) e Israel-Siria-Líbano pasaron a ser considerados conflictos armados.

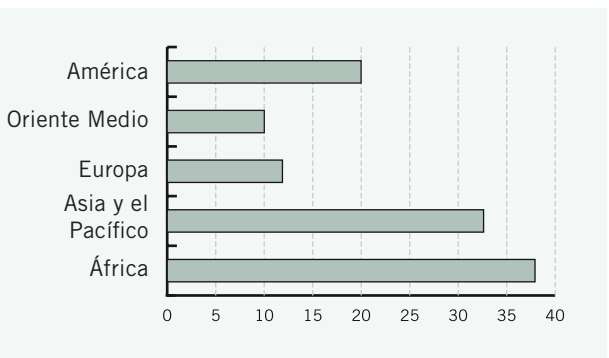
Un año más, uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones en 2023 es que, si bien en un 28% de los casos no se observaron cambios significativos y en un 23% la tensión se redujo respecto del 2022, la mitad de los casos identificados en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior. Ello se tradujo, en parte, en un incremento de los casos de alta intensidad, que pasaron de 28 en 2022 a 31 en 2023: Chad; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Kenya; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC; RDC-Rwanda; Túnez; Ecuador; El Salvador; Haití; Honduras; México; Perú; Venezuela; Venezuela-Guayana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India (Manipur); India-China; Indonesia (Papúa Occidental); Papúa Nueva Guinea; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); Rusia; Irán; e Irán-EEUU, Israel. Además de los 31 casos de alta intensidad, que supusieron cerca de un tercio del total, el 39% de los 114 casos de tensión fueron de intensidad baja (en 2022 eran el 42%) y el 33% de intensidad media (32% en 2022). Por tanto, en 2023 se volvió a observar la tendencia del año anterior, incrementándose el número de tensiones y también su intensidad media. El incremento de la intensidad de las tensiones se concentró especialmente en Europa (donde el 85% de los casos escalaron) o en América (donde lo hizo un 75%). En Oriente Medio el 80% de las tensiones mantuvieron una dinámica similar al año anterior.

La mitad de los casos de tensión identificados en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior y solo en un 23% se observó una mejora

En cuanto a los principales factores de causalidad, las tensiones continuaron siendo predominantemente multicausales, identificándose en el 56% de los casos dos o más causas. La oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, estaba presente en un 75% de las tensiones analizadas; las demandas de autodeterminación y autogobierno, o las aspiraciones identitarias lo estaban en un 35%; y el control de los recursos o del territorio lo estaba en un 31%. Tales cifras mantienen una cierta continuidad respecto de las del año anterior. En un análisis desagregado de factores, la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno volvió a ser la causa con mayor preponderancia y estuvo presente en el 69% de los 114 escenarios de tensión. En este sentido, en África se identificaron 30 casos, que equivale al 79% de los casos de la región; en América 19 casos, que equivale al 95% (solo en el caso de Venezuela-Guyana no estuvo presente); 14 en Asia y el Pacífico (42%); nueve en Europa y siete en Oriente Medio, que representan el 69% y el 70% respectivamente. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de aspiraciones de tipo identitario (33%), especialmente relevante en regiones como Europa (62%) u Oriente Medio (50%). A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las cuestiones relacionadas con el control de los recursos (24%), las demandas de autodeterminación y autogobierno (22%), la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto (20%) y el control del territorio (20%). Los distintos factores de causalidad asociados a las tensiones también observan una gran oscilación entre regiones. A modo de ejemplo, la oposición al Gobierno está presente en el 95% de las tensiones en América, mientras que en Asia y el Pacífico representan el 64% de los casos. Por otro lado, las demandas de autodeterminación y/o autogobierno solo lo están en un 15% de los casos en América, en un 29% en África, frente al 62% de los casos registrados en Europa. En relación con demandas vinculadas al control y acceso a los recursos y al territorio, casi la mitad de los casos en Asia y el Pacífico tenían vinculación (45%).

La mayor parte, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvo un carácter interno (49%), aunque con una pronunciada variabilidad geográfica (90% de los casos en América y 8% en Europa). Aproximadamente casi una cuarta parte de las tensiones (23%) fueron internacionales: Eritrea-

Distribución regional del número de tensiones en 2023



Etiopía; RDC-Rwanda; Venezuela-Guayana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); e Irán-EEUU, Israel. Finalmente, más de una cuarta parte (28%) de las tensiones fueron internas internacionalizadas –aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos–, pero, nuevamente, se observaron importantes variaciones entre regiones (en Europa el 62% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina solo se registró uno, el caso de la tensión en Ecuador).

Género, paz y seguridad

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género[3] en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales. Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre la población como consecuencia de las desigualdades de género y la intersección con otros ejes de desigualdad y también cuáles son las aportaciones que las mujeres y la población LGTBIQ+ están haciendo a la construcción de la paz. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Desarrollo de Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Desarrollo de Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU. 23 de los 36 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2023 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género –Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo), Sudán, Afganistán, India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Egipto (Sinaí), Iraq, Israel-Palestina, Siria, Yemen– y nivel medio-bajo de igualdad de género – Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré)–. No existían datos sobre RCA y Sudán del Sur, países en los que transcurre un conflicto armado respectivamente. En cuanto a intensidad de los conflictos, 15 de los 17 conflictos armados de violencia de alta intensidad de 2023 (88% de los casos) transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad y en el caso de Sudán del Sur no había datos del IDG. Asimismo, en otros ocho países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles altos de igualdad (Libia, Colombia, Tailandia, Rusia, Ucrania, Israel) o medios (Burundi, Mozambique, Filipinas, Myanmar, Türkiye,), de acuerdo con el IDG. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, 46 de las 108 tensiones activas durante el año 2023 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad.

23 de los 36 conflictos armados que tuvieron lugar en 2023 se dieron en países donde existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género

El informe anual del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados. La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales aunque también se señalaron actores armados gubernamentales, en un total de 11 contextos (Haití, Iraq, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur). De los 11 contextos analizados en el informe del secretario general de la ONU, según las clasificaciones de la Escola de Cultura de Pau 10 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad. El informe del secretario general también advirtió de algunas tendencias preocupantes en lo que respecta a la utilización de la violencia sexual en el contexto de conflictos armados y advirtió sobre el deterioro de la situación en países como Afganistán, Malí, Myanmar y Sudán, donde los cambios de gobierno mediante violencia y golpes de Estado han puesto en peligro los avances anteriores en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres y donde estas se han visto gravemente afectadas por la violencia sexual. Además,

3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales. Esta aproximación debe ir unida a un análisis interseccional que relacione el género con otros factores que estructuran el poder en una sociedad, como la clase social, la raza, la etnicidad, la edad, o la sexualidad, entre otros aspectos que generan desigualdades, discriminaciones y privilegios.

Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género

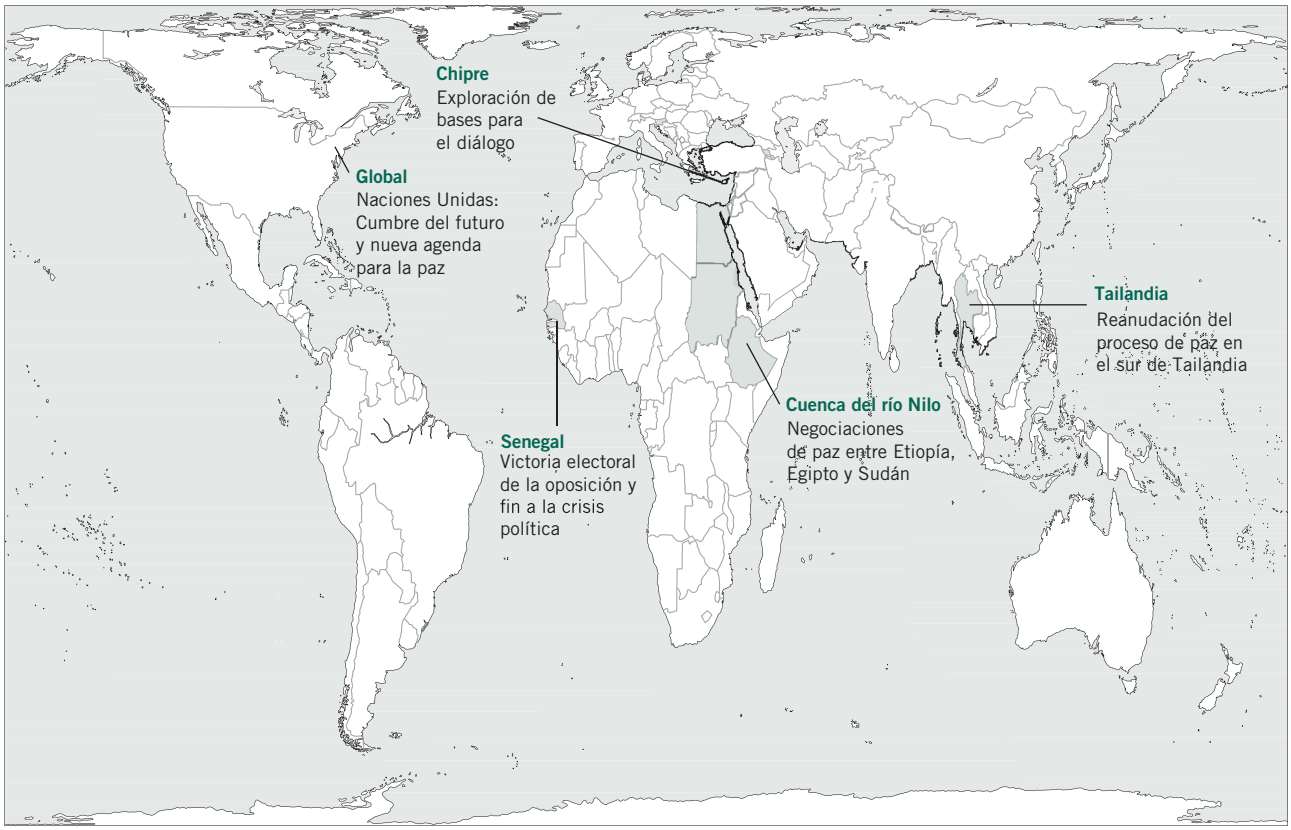
Nivel bajo de igualdad		
Afganistán **Burkina Faso** Región Sahel **Chad** Región Lago Chad **Egipto** Egipto (Sinaí) **Iraq** **India (2)** India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M)	**Malí (2)** Malí Región Sahel Occidental **Níger (2)** Región Lago Chad Región Sahel Occidental **Nigeria** Región Lago Chad **Palestina** Israel-Palestina **Pakistán (2)** Pakistán Pakistán (Baluchistán)	**RDC (3)** RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (oeste) **Siria** **Somalia (2)** Somalia Somalia (Somalilandia-SCC Khamuto) **Sudán** **Yemen**
Nivel medio-bajo de igualdad		
Camerún (2) Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) Región Lago Chad	**Etiopía (3)** Etiopía (Amhara) Etiopía (Oromiya) Etiopía (Tigré)	

Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán Afganistán - Pakistán **Argelia** **Benín** **Burkina Faso** **Chad** **Costa de Marfil** **Djibouti** **Egipto (2)** Egipto Etiopía – Egipto –Sudán **Guinea** **Guinea Bissau** **India (4)** India (Manipur) India (Nagalandia) India – China India – Pakistán	**Irán (4)** Irán Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Irán – EEUU, Israel **Iraq** Iraq (Kurdistán) **Malí** **Marruecos** Marruecos – Sáhara Occidental **Níger** **Nigeria (3)** Nigeria Nigeria (Biafra) Nigeria (Delta del Níger) **Palestina**	**Pakistán (3)** Pakistán Afganistán - Pakistán India – Pakistán **RDC (2)** RDC RDC – Rwanda **Rwanda (3)** Rwanda Rwanda – Burundi RDC - Rwanda **Sierra Leona** **Sudán – Sudán del Sur** **Togo** **Uganda**
Nivel medio-bajo de igualdad		
Bangladesh **Etiopía (5)** Etiopía Etiopía – Egipto –Sudán Etiopía – Somalia Etiopía – Sudán Eritrea – Etiopía	**Lao, RPD** **Tayikistán (3)** Tayikistán Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Kirguistán – Tayikistán	**Uzbekistán (2)** Uzbekistán Uzbekistán (Karakalpakistán)

el informe apunta a un agravamiento en los patrones de utilización de la violencia sexual en República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití y Sudán del Sur.

El informe del secretario general de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad señaló que en 2022 –año al que hacen referencia los datos recogidos en el informe presentado en 2023– 614 millones de mujeres y niñas vivían en contextos afectados por la conflictividad armada. Con respecto a las cifras de participación en procesos de paz, el informe señaló que en 2022 hubo participación de mujeres como negociadoras o delegadas representando a las partes en conflicto en cuatro de los cinco procesos que contaron con la facilitación de Naciones Unidas. En todos estos



procesos hubo espacios de consulta con organizaciones de mujeres de la sociedad civil y se dispuso de asesoramiento experto en género. No obstante, a pesar de esta representación en los procesos de paz dirigidos o codirigidos por Naciones Unidas, por segundo año se registró un retroceso en la participación, ya que esta fue del 18%, frente al 19% de 2021 y el 23% de 2020. En paralelo, el informe recogía que el 33% de los acuerdos de paz que se firmaron en 2022 (6 de los 18 acuerdos alcanzados ese año) incluían cláusulas en las que se hacía referencia a las mujeres, las niñas o el género.

Oportunidades de paz y escenarios de riesgo

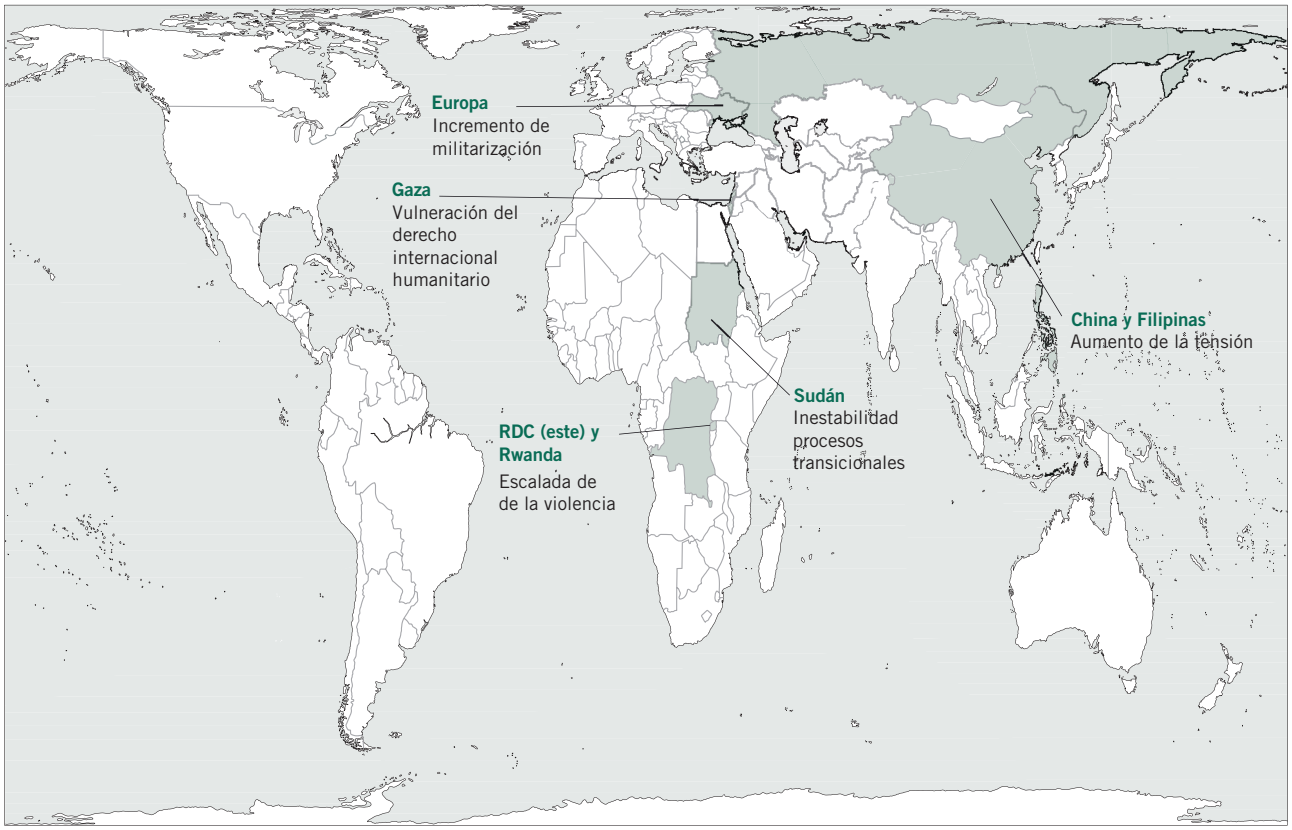
En el quinto capítulo (Oportunidades de Paz para 2024), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz de cara al futuro. Las oportunidades identificadas durante 2023 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

El informe Alerta! identifica y analiza cinco contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz

- **Etiopía-Egipto-Sudán:** El río Nilo ha sido epicentro de disputas en el Cuerno de África y África del Este durante décadas. La construcción desde 2011 de la Gran Presa del Renacimiento Etíope en territorio etíope ha exacerbado la situación y el clima de tensión entre Etiopía y Egipto, y en menor medida, Sudán. No obstante, en 2023 se reanudaron los contactos directos entre los tres países, lo que podría significar una oportunidad para empezar a sentar las bases de la resolución de este contencioso histórico. Aunque el contexto regional no contribuye al optimismo –conflictos armados abiertos en las regiones etíopes de Oromiya y Amhara, la devastadora guerra en Sudán, la denuncia de genocidio en curso por parte de Israel en Gaza, con consecuencias directas en Egipto, y las tensiones crecientes entre países del Cuerno de África– este mismo deterioro y el hecho de que la presa ya esté prácticamente finalizada puede ser una oportunidad que empuje a estos tres países a avanzar en la resolución de un contencioso que requiere de cooperación entre ellos.

- **Senegal:** Tras tres años de tensiones entre el Gobierno de Senegal, presidido por Macky Sall, y la oposición, que abrieron una importante crisis política, el país celebró el 24 de marzo de 2024 los comicios presidenciales que dieron como ganador al líder opositor, Bassirou Diomaye Faye. De este modo, Senegal parece cerrar uno de los capítulos más difíciles y controvertidos de su historia política, abriendo paso a un nuevo Ejecutivo que afronta importantes retos políticos, económicos y sociales.

- **Tailandia:** La reanudación del diálogo entre el Gobierno y el BRN tras casi una década de Junta Militar (2014-2019) o de un Gobierno surgido



de la misma (2019-2023), así como la drástica reducción de la violencia en los últimos años o la consolidación de infraestructura de facilitación del diálogo estable (con mediación de Malasia, y acompañamiento y observación internacional), ofrecen algunas perspectivas positivas de solución del conflicto armado a través de la negociación.

- **Chipre**: La disputa en torno al estatus de la isla dividida de Chipre acumula décadas de negociaciones fallidas, las últimas en 2017. Desde entonces no se han reanudado las negociaciones formales, y en los últimos años las posiciones de las partes se han alejado y el contexto regional y global ha afrontado mayor militarización y complejidad. En ese escenario de complejidad, convergen pese a todo algunos elementos actuales de oportunidad, de la mano del nombramiento de una enviada personal del secretario general de la ONU con el mandato de explorar bases de acuerdo para avanzar en el proceso. Se añaden otros factores, como reciente acercamiento entre Turquía y Grecia y la persistencia de actores de la sociedad civil en favor del diálogo. Son numerosos los obstáculos y, aun con todo, actores locales e internacionales podrían contribuir con esfuerzos complementarios a aprovechar esta cierta oportunidad surgida para el acercamiento entre las partes.

- **Cumbre del Futuro y nueva agenda de paz:** En un contexto de múltiples crisis globales (pandemia por COVID-19, invasión rusa de Ucrania, genocidio en Gaza, entre otras) y de cuestionamiento del multilateralismo, el secretario general de la ONU plantea una propuesta de agenda internacional conocida como Pacto para el Futuro, que podría abrir una oportunidad para dar un nuevo impulso al multilateralismo y que deberá ser refrendada por los países en la cumbre de septiembre de 2024. La propuesta incluye una nueva agenda para la paz.

En el sexto capítulo (Escenarios de riesgo para 2023), el informe identifica y analiza seis escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2023.

- **Rwanda:** Cuando se cumplen 30 años del genocidio de Rwanda de 1994, unos hechos que han marcado la historia africana y mundial y que se han convertido en uno de los fracasos más importantes de la comunidad internacional en lo concerniente a su responsabilidad de cara a garantizar la paz y la seguridad internacionales, se ha reabierto el enésimo episodio de esta guerra que padece la región de los Grandes Lagos y que enfrenta a la República Democrática del Congo (RDC) con Rwanda, a través de su aliado proxy local, actualmente bajo la etiqueta del grupo insurgente Movimiento 23 de Marzo (M23), situación que podría llevar incluso a un enfrentamiento abierto directo entre ambos países, como ya ocurriera en 1996 y 1998.

- **Sudán:** Tras un año del inicio de la última guerra en Sudán que enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), la violencia se ha ampliado a casi todo el país, convirtiéndose en una guerra civil a nivel nacional. Más de 15.550 personas han perdido la vida y 8,6 millones de personas se han desplazado por la violencia, convirtiendo al país en la peor crisis de desplazamiento forzado del mundo. Las previsiones para contener la violencia y volver a la senda del dialogo de 2022 para lograr una transición pacífica en el país se complican. Asimismo, la situación de inestabilidad y violencia que padecen la mayoría de los países vecinos, con conflictos armados en Egipto, Libia, Chad, RCA, Sudán del Sur o Etiopía, se puede ver agravada por el efecto contagio de la crisis sudanesa, contribuyendo de este modo a amplificar la crisis regional.

- **China – Filipinas:** Desde mediados de 2022 se ha registrado una importante escalada de la tensión política y militar entre China y Filipinas en el Mar de la China Meridional, con un aumento sin precedentes en el número de incidentes navales, un claro fortalecimiento de los lazos de seguridad y defensa entre EEUU y Filipinas; o un importante incremento del gasto militar para la modernización de las capacidades bélicas de Filipinas.

El informe analiza cinco escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden agravarse en el futuro

- **Europa:** El continente europeo asiste a un deterioro en la situación de conflictividad armada en la región y de retrocesos en las perspectivas de resolución de conflictos y tensiones por la vía del diálogo. La invasión y guerra en Ucrania han sobrepasado ya los dos años, con graves impactos en seguridad humana y medioambiental y sin perspectivas de resolución a corto plazo, mientras, a su vez, esta guerra y la confrontación entre Rusia y los actores euroatlánticos está generando una grave militarización del continente e influyendo negativamente en diversos conflictos y procesos negociadores en la región, como es el caso de Moldova. Se asiste a un repliegue en Europa en términos de negociaciones de paz y esfuerzos de apoyo al diálogo y la mediación, mientras se incrementa la militarización.

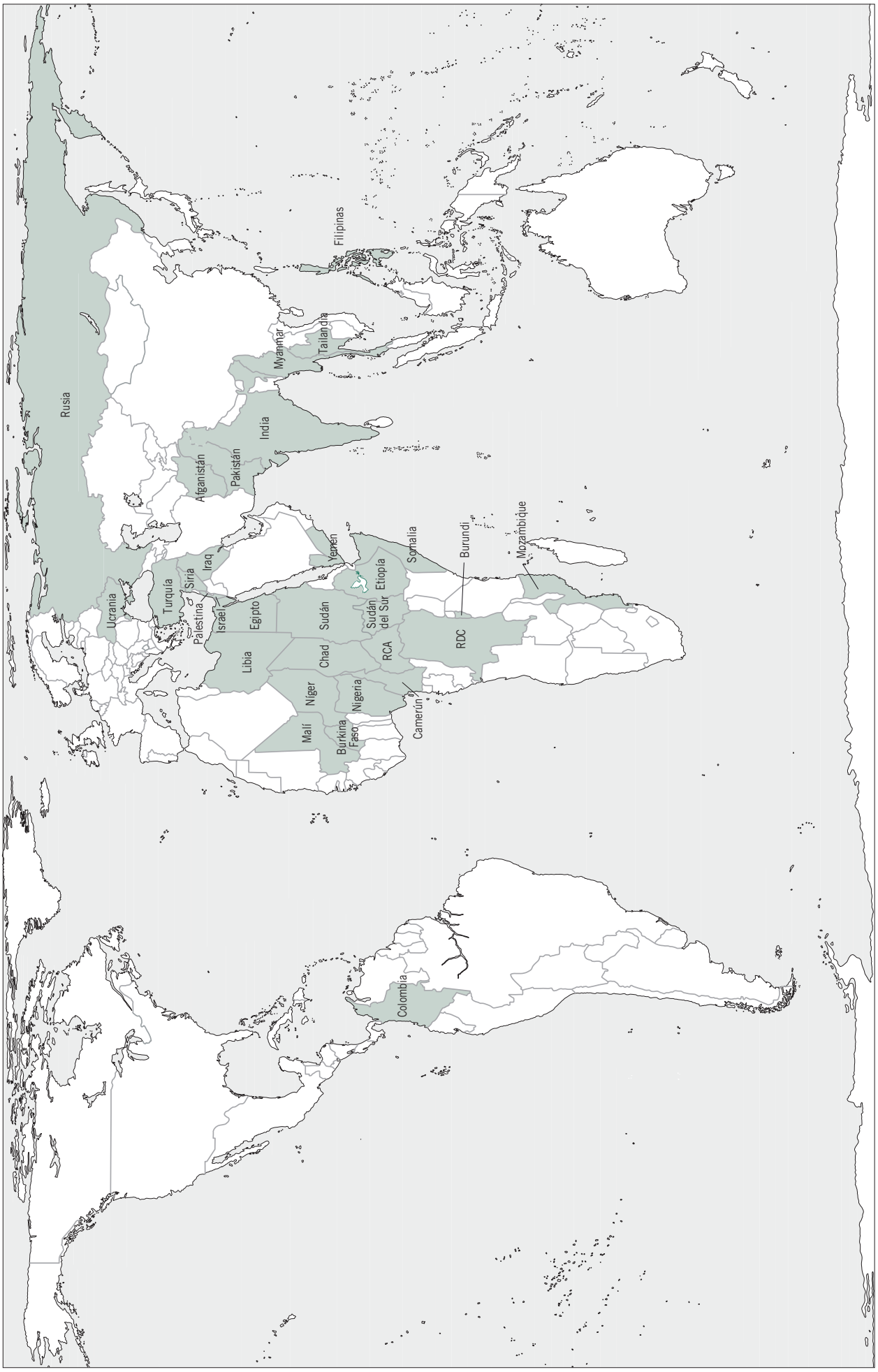
- **Gaza:** Entre las diversas tendencias preocupantes de la conflictividad armada global, una que destaca especialmente es el impacto de la violencia en la población civil y las sistemáticas transgresiones al derecho internacional y violaciones a los derechos humanos. La operación militar israelí en Gaza y el genocidio contra la población palestina han devenido en un ejemplo emblemático de estas vulneraciones, alentando la inquietud sobre las consecuencias de la impunidad y los dobles raseros para el futuro de la ley internacional y el orden global.

Resumen de la conflictividad global en 2023

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	*Etiopía (Oromiya)* *Etiopía (Amhara)* *Malí* *RDC (este)* RDC (este-ADF) Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental *Somalia* *Sudán* *Sudán del Sur*	*Camerún (Ambazonia/ Noroeste Suroeste)* *RCA* RDC (oeste)	Burundi *Libia* *Etiopía (Tigré)** Mozambique (norte) Somalia (Somalilandia – SSC Khatumo)	*Chad* *Eritrea – Etiopía* Etiopía Kenya Nigeria Nigeria (Biafra) *RDC* *RDC – Rwanda* Túnez	Benin Burkina Faso Costa de Marfil *Etiopía – Egipto – Sudán* *Etiopía - Somalia* Gabón Guinea Malí *Marruecos – Sáhara Occ.* Níger Senegal *Sudán – Sudán del Sur* Uganda	Argelia Djibouti Eritrea Etiopía – Sudán Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Madagascar *Mozambique* Nigeria (Delta Níger) Rwanda Rwanda – Burundi *Senegal (Casamance)* Sierra Leona Tanzania Togo Zimbabwe	
SUBTOTAL	**10**	**3**	**5**	**9**	**13**	**16**	**56**
América		*Colombia*		Ecuador El Salvador *Haití* Honduras México Perú *Venezuela* *Venezuela – Guyana*	Argentina Bolivia Brasil Chile Guatemala Nicaragua Panamá	Colombia Cuba EEUU Jamaica Paraguay	
SUBTOTAL		**1**		**8**	**7**	**5**	**21**
Asia y Pacífico	*Myanmar* Pakistán	Afganistán Pakistán (Baluchistán)	Filipinas (Mindanao) *Filipinas (NPA)* India (CPI-M) India (Jammu y Cachemira) *Tailandia (sur)*	Afganistán - Pakistán China – Filipinas China – Japón China – Taiwán *Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea* *Corea, RPD – Rep. de Corea* India (Manipur) India – China Indonesia (Papúa Occ.) Papúa Nueva Guinea	Bangladesh China – EEUU India – Pakistán Mar de la China Meridional Pakistán Sri Lanka Tayikistán	China (Hong Kong) China (Tíbet) China (Xinjiang) Corea, RPD Fiji *India (Nagalandia)* Indonesia (Sulawesi) Japón – Rusia (Islas Kuriles) Kazajstán Kirguistán Kirguistán – Tayikistán Lao, RPD Tailandia Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Uzbekistán Uzbekistán (Karakalpakistán)	
SUBTOTAL	**2**	**2**	**5**	**10**	**7**	**16**	**42**
Europa	*Rusia – Ucrania*		Turquía (sudeste)	*Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)* Rusia	Belarús Bosnia y Herzegovina Moldova *Moldova (Transnistria)* Rusia – EEUU, OTAN, UE *Serbia – Kosovo* Turquía Turquía - Grecia, Chipre	*Georgia (Abjasia)* *Georgia (Osetia del Sur)* Rusia (norte del Cáucaso)	
SUBTOTAL	**1**		**1**	**2**	**8**	**3**	**15**
Oriente Medio	Iraq *Israel – Palestina* *Siria* *Yemen*		Egipto (Sinaí) Israel-Palestina	Irán *Irán – EEUU, Israel*	Egipto Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Líbano	Arabia Saudita Bahrein Iraq (Kurdistán) *Palestina*	
SUBTOTAL	**4**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**	**16**
TOTAL	**17**	**6**	**13**	**31**	**39**	**44**	**150**

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas.
*Se considera que este caso estuvo activo algunos meses del 2023, pero ya no lo estaba al finalizar el año.

Mapa 1.1 **Conflictos armados**



1. Conflictos armados

- Durante 2023 se registraron 36 conflictos armados, un balance relativamente superior que el año anterior (33 casos) y la cifra más alta desde 2014.
- La mayoría de conflictos armados se concentró en África (18) –la mitad del total– mientras que el resto se distribuyó entre Asia y el Pacífico (nueve), Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).
- En el 42% de los conflictos armados se registró un deterioro asociado a mayores niveles de violencia e inestabilidad en 2023, un porcentaje significativamente superior al 30% de casos que había empeorado el año anterior.
- Se reactivó la guerra en el norte de Malí entre el Gobierno y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo de paz de Argel de 2015 organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente.
- Las fuerzas especiales amhara y las milicias Fano rechazaron su disolución e integración en la Policía y en el Ejército de Etiopía y se enfrentaron al Gobierno Federal, provocando una grave escalada de los enfrentamientos.
- La escalada de la violencia del M23 en el este de RDC provocó una de las principales crisis humanitarias y de desplazamiento a nivel mundial y amenazó con desencadenar un conflicto directo entre Rwanda y RDC.
- En Sudán, el conflicto armado iniciado el 15 de abril entre el Ejército y el grupo paramilitar Rapid Support Forces generó el desplazamiento forzoso de más de 7,5 millones de personas y la muerte de más 13.000 tras ocho meses de enfrentamientos.
- La violencia en Colombia se mantuvo en niveles elevados, aunque se redujeron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos ELN y EMC gracias a los acuerdos de alto el fuego alcanzados.
- En Myanmar se produjo la mayor ofensiva contra las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado de 2021, protagonizada por los grupos armados que conforman la Alianza de los Tres Hermanos.
- La invasión y guerra en Ucrania causó graves daños en su segundo año, con 3,7 millones de personas desplazadas internas, seis millones refugiadas en Europa y cerca de medio millón fuera de Europa.
- La campaña israelí contra Gaza en represalia por el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre fue denunciada como un castigo colectivo y genocidio, en un contexto de efectos desestabilizadores para toda la región.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2023. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2023, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2023.

Tabla 1.1. **Resumen de los conflictos armados en 2023**

Conflicto[1] -inicio-	Tipología[2]	Actores principales[3]	Intensidad[4] / Evolución[5]
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno Internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	2
	Autogobierno, Identidad		=
Etiopía (Amhara) -2023-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Amhara, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Oromiya) -2022-	Interno	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia amhárica Fano	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Etiopía (Tigré) -2020-[6]	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		Fin
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli, Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) con sede en Tobruk, grupos armados de diverso signo –incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) (también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia o ALAF), ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner–, Turquía	1
	Gobierno, Recursos, Sistema		=

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2023 con la del 2022, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2023 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
6. La situación en la región etíope de Tigré dejó de ser considerada conflicto armado a principios de 2023 por la evolución positiva de los acontecimientos en lo concerniente a la reducción significativa de la violencia y de sus impactos, así como en lo relativo a la implementación positiva del acuerdo de 2022. Veáse Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2023. Análisis* de tendencias y escenarios. Barcelona: Icaria, 2024.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ÁFRICA			
Malí -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, Marco Estratégico Permanente (CSP) -reúne a los grupos armados afiliados a CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA) y la Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción)- Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, MINUSMA, Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Mozambique (Norte) -2017-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales "Naparama"	1
	Sistema, Identidad		↓
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), coalición armada opositora Siriri, milicia étnica AAKG, milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Rusia, Grupo Wagner	2
	Gobierno, Recursos		=
RDC (este) -1998-	Internacional	RDC, Burundi, Angola, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur), SAMIDRC (Fuerza regional de la SADC, compuesta por Sudáfrica, Malawi y Tanzania), milicias progubernamentales Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP, conocidos como Wazalendo, compuestos por decenas de antiguas milicias Mai Mai y otros grupos armados de Kivu Norte y Kivu Sur, como APCLS, PARECO-FF, Nyatura, Raia Mutomboki), FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), empresas militares privadas (Agemira RDC y Congo Protection); Movimiento 23 de Marzo (M23), Twirwaneho, Rwanda; otros grupos armados no adscritos en Wazalendo, grupos armados burundeses; grupo armado de origen ugandés LRA; grupos y milicias comunitarias de Ituri (entre otros, CODECO/URDPC, FPIC, FRPI, MAPI, Zaïre)	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		=
RDC (oeste) -2023-	Interno	RDC, milicias comunitarias teke, milicias comunitarias yaka (entre otros, el grupo armado Mobondo) y otras milicias de comunidades aliadas	2
	Identidad, Recursos, Territorio		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Mali, Níger, Costa de Marfil, Togo, Benín, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Mali, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Mali, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Turquía, ATMIS, EUNAVFOR Somalia (Operación Atalanta), Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		↑
Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) -2023-	Interno	República de Somalilandia, administración SSC-Khatumo (estado de Khatumo), estado de Puntlandia, al-Shabaab	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Sudán -2023-[7]	Interno internacionalizado	Gobierno (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA, Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, Beja National Congress, Beja Armed Congress, milicias comunitarias, Grupo Wagner	3
	Gobierno, Autogobierno, Recursos, Identidad		↑

7. En años anteriores en Sudán se identificaban dos conflictos armados diferenciados: Sudán (Darfur) -2003- y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2012. Ambos conflictos, caracterizados como internos-internacionalizados y motivados por Autogobierno, Recursos e Identidad, se analizan en la presente edición conjuntamente dentro del conflicto armado Sudán -2023. Este hecho se debe a que las dinámicas del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), afectan a una gran parte del país y, de forma particular, a las regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Además, los actores armados irregulares de estas regiones también participan activamente en las hostilidades, tomando parte activa en la contienda.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ÁFRICA			
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony ("Agwalek"), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↓
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, grupos narcoparamilitares	2
	Sistema		=
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Frente Nacional de Resistencia (NRF), ISIS-KP, Afghanistan Freedom Front (AFF)	2
	Sistema		↓
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraife, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		=
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ISIS-KP	3
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, BLA, BNA, BLF y BLT; LeJ, TTP, ISIS-KP	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
EUROPA			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia – Ucrania -2022-[8]	Internacional	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania	3
	Gobierno, Territorio		=
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)	1
	Sistema		↓
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		↓

8. Entre 2014 y 2021 la guerra en el este de Ucrania era analizada como un conflicto interno internacionalizado, dentro del caso de análisis "Ucrania (este)". Véase ediciones anteriores a 2022 de este informe.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ASIA			
Israel – Hezbollah[9] -2023-	Internacional	Israel, Hezbollah	1
	Sistema, Territorio, Recursos		↑
Israel – Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar alSham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, Grupo Wagner, Israel.	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), Security Belt Forces, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), EEUU y coalición militar internacional Guardián de la Prosperidad	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;
↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2023

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2023, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

En línea con la tendencia ya observada el año anterior, **en 2023 aumentó el número de conflictos armados a nivel mundial**. En total se contabilizaron 36 contextos de conflicto, frente a los 33 de 2022 y 32 de 2021. En años previos, entre 2018 y 2020, se habían registrado 34 casos. **El total de conflictos armados de 2023 es la cifra más alta desde 2014. Las dinámicas de violencia motivaron que cinco nuevos escenarios pasaran a ser considerados como conflictos armados en 2023**. Cuatro de ellos se ubican en África. En Etiopía, en la región de Amhara, la decisión del Gobierno Federal de desarmar y disolver a las milicias paramilitares Fano para integrarlas en el Ejército y la Policía derivaron en serios enfrentamientos entre integrantes de estas milicias y miembros de las fuerzas gubernamentales.

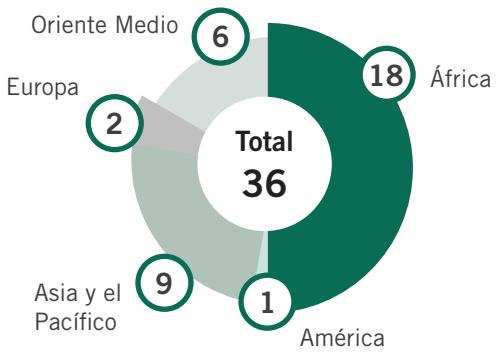
9. Este conflicto armado involucra e impacta de maneras diversas a otros actores regionales. En anteriores ediciones del informe las dinámicas de esta disputa eran analizadas en el capítulo de Tensiones bajo la denominación "Israel – Siria – Líbano" y los análisis de los últimos años destacaban la creciente implicación también de Irán en esta contienda.

En el Cuerno de África, las hostilidades entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia –región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa– y milicias de la región de Khatumo –que pretende convertirse en un nuevo estado en el seno de Somalia, aunque forma parte de Somalilandia– escalaron de manera significativa desde principios de 2023 y continuaron activas durante todo el año. Mientras, en la zona oeste de RDC, el conflicto entre las comunidades teke y yaka en torno a disputas por la propiedad de la tierra que se había iniciado el año anterior en la provincia de Mai-Ndombe se agravó y la violencia se extendió a varias provincias vecinas en 2023. En Sudán también se identificó el estallido de un nuevo conflicto armado que involucró principalmente a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) con el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF). Las dinámicas de violencia que escalaron a partir del mes de abril acabaron afectando a gran parte del país y de manera especial a la región de Darfur y a las de Kordofán y Nilo Azul, donde los actores armados de esas áreas se implicaron activamente en las hostilidades. Por ello, los conflictos armados en estas regiones sudanesas, que previamente en este informe se analizaban por separado, en esta edición se analizan conjuntamente como parte del conflicto más amplio en Sudán. El último nuevo escenario de conflicto se ubicó en Oriente Medio, donde la intensificación de tensiones en toda la región derivadas de la crisis en Gaza abrió un frente de especial relevancia en el área fronteriza entre Israel y Líbano. El incremento en la magnitud, frecuencia y alcance de las hostilidades entre las fuerzas israelíes y Hezbollah y los impactos de esta violencia motivaron que el caso pasara a ser considerado conflicto armado a finales de 2023.[10] **En comparación con 2022, también hubo un conflicto armado que finalizó durante 2023**: la significativa reducción de la violencia, el repliegue de grupos armados locales y fuerzas extranjeras y el desarme efectivo de combatientes tras la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2022 entre el Gobierno Federal de Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré motivaron que este caso dejara de ser considerado como conflicto armado en 2023.[11]

África concentró la mitad de los conflictos armados en 2023, con un total de 18 casos (50%), seguida de Asia y el Pacífico (nueve casos), Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno)

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, durante 2023 se mantuvo la tendencia observada en períodos previos y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (18) y Asia y el Pacífico (nueve), seguido de Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno). **El continente africano, por tanto, concentró la mitad de los casos de conflicto armado (50%) a nivel global**.

Gráfico 1.1. **Distribución regional del número de conflictos armados en 2023**



Respecto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internos internacionalizados e internacionales. Aunque los conflictos armados internos internacionalizados continuaron siendo la mayoría, siguiendo la tendencia de años previos, en 2023 se incrementó el número de casos tanto de conflictos internos como de internacionales. Los conflictos armados considerados eminentemente internos representaron un 17% de los casos en 2023 y su número creció en términos comparativos con el año anterior. Si en 2022 eran cuatro los casos de este tipo, en 2023 se contabilizaron seis casos. A Etiopía (Oromiya), Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur) se sumaron en 2023 los casos de RDC (oeste) y Somalia (Somalilandia-SSC Kathumo). De esta manera, si la tendencia hasta entonces era que la mayor parte de los conflictos armados internos se concentraba en Asia, en 2023 este tipo de casos se repartieron equitativamente entre el continente asiático y el africano. Otros cinco casos de conflicto armado fueron de carácter internacional, una cifra que también aumentó respecto a períodos precedentes, pasando de tres casos en 2022 a cinco en 2023. Al conflicto armado que transcurre en la región africana de Sahel Occidental, la disputa palestino-israelí en Oriente Medio y la guerra Rusia-Ucrania se sumaron en 2023 los casos de Israel-Hezbollah, vinculado a la crisis de Gaza, y el de RDC (este). Respecto al conflicto armado entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah, cabe destacar que el caso venía siendo analizado en ediciones previas del informe como una tensión de carácter internacional bajo la denominación "Israel-Siria-Líbano". Aunque Israel y Hezbollah son los protagonistas del conflicto armado, la disputa involucra de manera indirecta e impacta de diversas maneras en otros actores regionales. Esto incluye también a Irán, crecientemente implicado en la

10. Ibid.
11. Para más información, véase el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

contienda en los últimos años por su estrecha relación con Hezbollah, lazos que se han intensificado en el marco de la guerra en Siria. En cuanto a RDC (este), este conflicto armado que data de finales de los noventa del siglo XX venía siendo analizado como un caso interno internacionalizado, pero en la presente edición es considerado como internacional por la constatación de la presencia y participación directa de Rwanda en las hostilidades, información ratificada por el Grupo de Expertos de la ONU.

El resto de casos, equivalentes al 69% –25 de 36– fueron de carácter interno internacionalizado, un porcentaje que evidencia una reducción relevante respecto a años previos –en 2022 representaron el 79% y en 2021 el 81% de los casos. Estos conflictos armados se caracterizan porque, aunque parte de las dinámicas sean internas, alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados, grupos armados de acción transfronteriza y empresas internacionales de seguridad privada, entre otros.

Aunque los conflictos armados internos internacionalizados continuaron siendo mayoría, se incrementó el número de casos internos e internacionales

Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2023 continuaron teniendo un papel las misiones internacionales de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en especial en el marco de conflictos armados en el continente africano. Durante 2023, la ONU continuó operando en contextos como RCA (MINUSCA), Sudán del Sur (UNSMISS), Malí (MINUSMA) y RDC (MONUSCO), aunque en un escenario de numerosas dificultades en varios de ellos que derivaron en el inicio de la retirada o en la salida total de la misión en estos últimos dos contextos.

El caso más destacado fue el de la MINUSMA, la misión de la ONU que dejó Malí a finales de 2023 después de una década y tras haberse convertido en la segunda misión con más muertes en la historia de la ONU. El anuncio del Gobierno maliense sobre el cierre de la misión motivó los primeros enfrentamientos armados en el país entre los signatarios del acuerdo de paz de 2015, en especial en el norte del país, donde también se produjeron disputas por el control de las bases de la MINUSMA. Estos acontecimientos tuvieron como trasfondo el deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus hasta entonces aliados, tras el acercamiento del Gobierno militar a Rusia y a la empresa de seguridad privada rusa Grupo Wagner en 2022. En el caso de la RDC, tras la petición del Gobierno, a principios de 2024 también se inició la retirada de la MONUSCO –2.000 cascos azules abandonaron el país en esta primera fase–, en un contexto de críticas y protestas contra la misión, acusada de inacción ante la escalada de la violencia. En una línea similar, en el caso de Sudán, la severa crisis de seguridad en el país en 2023 motivó que en diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera poner fin al mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS) –aunque de carácter político, no militar– y dispusiera el cierre de sus operaciones para el primer trimestre de 2024.

Cabe destacar que en los últimos años se ha ido gestando un cambio de tendencia que ha culminado en 2023 con el cierre o anuncio de cierre de diversas operaciones bilaterales y multilaterales en el continente africano. Además de la retirada de tres importantes misiones de la ONU en África Subsahariana –dos de ellas con mandatos de mantenimiento de la paz (Malí y RDC) y otra misión de asistencia política (Sudán)–, las misiones de la UE y de Francia en el Sahel Occidental también han iniciado o culminado su retirada. Además, también se ha iniciado el cierre programado de la misión de la UA en Somalia, ATMIS, y la disolución de la coalición regional antiyihadista G-5 Sahel después de que Burkina Faso y Níger anunciaran en diciembre de 2023 su retirada de la alianza, siguiendo los pasos que anteriormente había realizado Malí. Los dos miembros restantes, Mauritania y Chad, reconocieron que la salida de tres de los cinco miembros fundadores representaba la disolución de facto de la alianza creada en 2014. Esta dinámica responde a un a diversos factores. Por un lado, las tensiones geopolíticas entre Occidente y Rusia derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Por otra parte, existe un componente de apropiación, en respuesta a los cambios en la jefatura de algunos Estados de África Occidental mediante golpes de Estado en los últimos años, donde las presiones y dobles raseros de las organizaciones regionales e internacionales comportaron el rechazo a la presencia de la comunidad internacional y en especial de Francia como gendarme regional postcolonial en el marco de la Françafrique. En otros casos ha pesado la percepción (más o menos cuestionable) por parte de la ciudadanía del fracaso de estas misiones a la hora de llevar a cabo sus mandatos después de años de presencia ininterrumpida en el continente. Países como RCA o Chad tampoco son ajenos a esta tendencia, que ha motivado movilizaciones de rechazo a la presencia de Occidente, más o menos instrumentalizadas políticamente o incluso instigadas desde países extranjeros.

Organizaciones regionales continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Europea (UE) –EUNAVFOR en Somalia o la misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en Mozambique. Esta última misión, SAMIM, en

colaboración con tropas ruandesas, amplió sus acciones en 2022 a Cabo Delgado y en 2023 tuvo un papel relevante en la reducción de los hechos de violencia de la insurgencia que reivindica agendas yihadistas[12] en esta región mozambiqueña. Cabe añadir también la creación de la misión de la organización SADC en RDC (SAMIDRC, compuesta por tropas de Sudáfrica, Malawi y Tanzania) en 2023 sustituyendo a la misión de la EAC en RDC, criticada por su inoperancia durante todo el año y que se retiró del país a petición del Gobierno en diciembre. **Durante 2023 también siguieron activas diversas misiones de carácter híbrido**, que involucran tanto a organizaciones regionales como a Estados. Entre ellas cabe mencionar por ejemplo la operación militar marítima en el Cuerno de África y Océano Índico, la Combined Task Force 151, que actúa en Somalia y que está liderada por EEUU en colaboración con la misión europea EUNAVFOR. Otro actor similar es la coalición internacional contra el grupo armado Estado Islámico (ISIS) -Global Coalition Against Daesh-, establecida en 2014, liderada por EEUU e integrada por múltiples actores (87 en total), incluyendo la UE y la Liga Árabe. Aunque inicialmente su foco estuvo en Iraq y Siria, esta coalición opera ahora también en África Occidental ante el incremento de la actividad de grupos con agendas yihadistas en esta zona.

En cuanto a la **participación de terceros países**, esta dimensión continuó presente en múltiples conflictos internos internacionalizados y añadió complejidad en numerosos casos. En Yemen, por ejemplo, ante el incremento de las acciones armadas de los al-houthistas en el Mar Rojo y los ataques a Israel en represalia por la ofensiva militar israelí en Gaza, EEUU se involucró militarmente. Así, en diciembre 2023, Washington anunció el establecimiento de una operación militar internacional en la zona, clave para el comercio marítimo mundial, con la intención declarada de frenar las acciones de los al-houthistas. La Operación Guardián de la Prosperidad, está integrada también por Reino Unido, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Sri Lanka. Esta dinámica de confrontación añadía incertidumbre a las perspectivas de una salida negociada en Yemen, en un año de intensificación del diálogo entre Arabia Saudita y los al-houthistas.[13] Irán continuó siendo un actor activamente implicado en conflictos armados en Oriente Medio, a través de su apoyo al régimen de Bashar al-Assad en Siria, a través de milicias afines en Iraq y de apoyo político, logístico y/o militar a otros actores de la región, como los propios al-houthistas o el grupo palestino Hamas. **Evidenciando la internacionalización e interrelación de diversos conflictos armados de la región, la crisis en Gaza también intensificó los ataques contra objetivos estadounidenses en Iraq y Siria, así como las acciones armadas de Israel y EEUU en estos dos países contra actores de la órbita iraní autodenominados como "eje de la resistencia".** Paralelamente, y en línea con la dinámica observada en años previos, Turquía continuó con su campaña militar contra el PKK a través de ataques transfronterizos contra posiciones del grupo armado kurdo en el norte de Iraq. Adicionalmente, numerosos grupos armados no estatales desplegaron ofensivas transfronterizas –como el ya mencionado grupo armado yemení al-houthistas y sus acciones armadas contra Israel y con destino a Israel en el Mar Rojo. Asimismo, en 2023 las diferentes facciones de Boko Haram continuaron operando en la cuenca del Lago Chad –que involucra territorios de Nigeria, Camerún, Níger y Chad– y se intensificaron los enfrentamientos por la supremacía en la región entre este grupo e ISWAP, filial de ISIS en el África Occidental que también actúa en varios países de la zona.

Respecto al papel de empresas de seguridad privadas, cabe destacar el papel relevante del ruso Grupo Wagner, que se desempeñó como actor en al menos siete conflictos armados en varios continentes, principalmente en África. En 2023 la organización estuvo presente en Libia, Malí, Burkina Faso, Níger, RCA, Sudán, Rusia-Ucrania y Siria. En este último país, por ejemplo, protagonizó enfrentamientos con miembros de ISIS en apoyo a las fuerzas gubernamentales sirias. En Malí también actuó de la mano del Gobierno y las fuerzas de seguridad locales en su disputa con varios grupos armados árabe-tuaregs. En el conflicto entre Ucrania y Rusia, el grupo Wagner tuvo un papel especialmente significativo en torno a Bajmut (región de Donetsk), uno de los frentes de guerra más activos de 2023 y donde la organización reconoció haber sufrido unas 20.000 bajas. Cabe destacar que en junio de 2023, y tras meses de tensiones y desencuentros con las autoridades rusas, el Grupo Wagner protagonizó un alzamiento militar contra Moscú. La acción fue desmantelada y el líder la organización, Yevgueni Prigozhin, murió dos meses después al caer el avión en que viajaba, en una acción atribuida a Moscú. **La rebelión de Wagner y sus consecuencias acabó teniendo impactos en las operaciones de las milicias del grupo.** Así, por ejemplo, la situación motivó la retirada de centenares de mercenarios de la organización que estaban desplegados en RCA.

En lo que respecta a las **causas de los conflictos armados**, en 2023 se confirmó la naturaleza multicausal de los conflictos armados contemporáneos. Siguiendo también la tendencia de años previos, **la mayor parte de los conflictos –26 de los 36, equivalentes a un 72%–**

12. El concepto de yihad tiene y ha tenido históricamente múltiples connotaciones. El término entraña la idea de "esfuerzo" y muchos musulmanes y estudiosos del Islam rechazan su uso para calificar a grupos armados por considerar que utilizan un concepto religioso para justificar una violencia ilegítima. Teniendo en cuenta estos debates y, al mismo tiempo, el extendido uso del término en el ámbito de las relaciones internacionales y estudios de paz y seguridad, en este informe se alude a "grupos con agendas yihadistas" cuando son las propias organizaciones armadas las que en sus narrativas y declaración de intenciones apelan a su particular interpretación de los preceptos islámicos.
13. Para más información, véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos. Durante 2023, y en consonancia con la tendencia observada en los últimos años, tuvo relevancia el factor causal vinculado a las disputas en torno al sistema, presente en 19 de los 36 casos (53%) y relacionado en la mayoría de ellos a la presencia de actores armados con agendas políticas que reivindican una presunta inspiración yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos se encuentran por ejemplo Boko Haram en la Región del Lago Chad, las milicias talibán pakistaníes de TTP o los distintos grupos que se han reivindicado como filiales y/o "provincias" de ISIS más allá de su área de origen en Iraq y Siria, en contextos como en la región del Lago Chad, Somalia, Libia, Egipto (Sinaí), Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Filipinas (Mindanao), o Yemen. En algunos de estos casos –como Libia, Egipto (Sinaí) o Filipinas (Mindanao)– estos grupos han reducido notoriamente sus actividades respecto a años previos. En otros tres casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con una línea ideológica vinculada al comunismo y al maoísmo. Los conflictos armados con motivaciones relacionadas a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos, que derivan en luchas por erosionar o acceder al poder, estuvieron presentes en 14 de los 36 casos (39%). Entre ellos, cabe mencionar contextos como el de Libia -donde la disputa continuó protagonizada por pugnas de poder entre gobiernos rivales-, y otros como el de RCA, Somalia, Sudán, Siria o Yemen.

En un 42% de los conflictos armados se observó un deterioro y un incremento en los niveles de violencia en 2023

Otro importante elemento a destacar entre las causas principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, presentes en 21 de los 36 conflictos armados en 2023, es decir, en un 58% de los casos. En línea con años previos, de estas dos motivaciones tuvo mayor peso el factor asociado a demandas identitarias, identificadas en 22 casos (61% del total de casos), frente a 14 casos (39%) en los que fueron relevantes las cuestiones de autogobierno. Las aspiraciones identitarias estuvieron presentes en los nuevos casos de conflictos armados en África en 2023, por ejemplo vinculados a las reivindicaciones del nacionalismo amhara en Etiopía, al interés de la administración de SSC-Khatumo de convertirse en un nuevo estado de Somalia –en el marco de la disputa histórica por regiones fronterizas entre Somalilandia y Puntlandia–, o a los enfrentamientos y luchas de poder entre las comunidades teke y yaka en RDC (oeste). Otros casos con conflictos en torno a cuestiones de autogobierno y/o identidad fueron Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (norte), la región del Sahel Occidental, RDC (este), Sudán, Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Turquía (sudeste), Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

Finalmente, respecto a los factores de causalidad, cabe mencionar que numerosos conflictos armados tuvieron entre sus motivaciones principales el control de territorio y/o de recursos. En 15 de los 36 casos (42%) se identificaron este tipo de factores. En este binomio destacó especialmente el peso de las disputas en torno a recursos, presentes en un tercio (33%) de los conflictos armados en 2023. En línea con años anteriores, **los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra**. A lo largo de 2023, las disputas en torno a estas cuestiones fueron relevantes en el conflicto de la región del Lago Chad –escenificados en enfrentamientos entre Boko Haram y la filial de ISIS, ISWAP–, Libia –con disputas por el control de recursos y territorio entre los múltiples grupos armados que operan en el país norteafricano– o en RCA –donde las milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF) recibieron derechos de explotación minera a cambio de combatir a grupos armados. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos. En 2023, la violencia generalizada en este contexto incrementó la explotación ilegal de recursos naturales, colapsaron los procedimientos de control en diversos yacimientos mineros y repercutió en un aumento del contrabando hacia Rwanda. Zonas de actividad minera también suelen ser escenario de hechos de violencia en Pakistán (Baluchistán), otro conflicto armado en el que pesa la disputa por recursos como una de sus causas, y también en la India, en el marco del conflicto con la insurgencia naxalita. Las cuestiones vinculadas al control del territorio, en tanto, estuvieron presentes en cinco casos (14% del total) y fueron especialmente significativas en el caso de Palestina-Israel. La ofensiva militaría israelí en Gaza y las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques de colonos judíos en Cisjordania, que derivaron en masivos desplazamientos forzados y expulsiones de población, fueron señalados como actos que pretendían una limpieza étnica de población palestina para consolidar el control territorial israelí. Estas políticas fueron acompañadas, además, de una multiplicación de autorizaciones para nuevos asentamientos en Cisjordania. La cuestión territorial también fue un elemento clave en el trasfondo de la disputa entre Israel y Hezbollah, con hostilidades que se concentraron en la frontera de facto entre Israel y Líbano.

En cuanto a la **evolución de los conflictos armados en 2023**, el análisis indica un **importante incremento en los casos que evolucionaron hacia mayores niveles de violencia e inestabilidad. En un 42% de los conflictos**

armados se observó un deterioro de la situación, un porcentaje significativamente superior al 30% de casos que habían empeorado el año anterior. **Los casos que presentaron esta tendencia se concentraron en África** –Burundi, Etiopía (Amhara), Malí, la región de Sahel Occidental, RDC (este), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia – SCC Kathumo), Sudán–, **en Asia** –Myanmar, Pakistán y Pakistán (Baluchistán)– **y en Oriente Medio** –Israel-Palestina, Israel-Hezbollah y Siria. En algunos de estos contextos, como por ejemplo en Malí o en Pakistán, la escalada de violencia puso fin a acuerdos de cese el fuego que habían estado vigentes –durante años en el primer caso, durante unos meses en el segundo. El resto de conflictos armados se distribuyeron de manera prácticamente similar entre aquellos que presentaron unos niveles de hostilidades y violencia similares a los del año anterior (10 casos, equivalentes a 28%) y los que presentaron niveles comparativamente más bajos (11 contextos, que representan el 30%). Entre los que evolucionaron hacia una disminución de los enfrentamientos cabe destacar que, en algunos contextos, esta tendencia estuvo vinculada al aparente debilitamiento y reducción de actividad por parte de algunos de los actores armados en disputa como resultado de las propias dinámicas de las hostilidades. Fue por ejemplo el caso de Mozambique (norte) –donde se produjo una notoria reducción en las cifras de letalidad asociadas al conflicto y en el número de episodios violentos dirigidos contra la población civil–, pero también el de otros como Filipinas (Mindanao) o Egipto (Sinaí). En otros escenarios la disminución estuvo vinculada al impacto de procesos de negociación y acuerdos de paz o de alto el fuego, como en Etiopía (Tigré) –que dejó de ser considerado como conflicto armado 2023 debido a la evolución de los acontecimientos tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2022– o en Yemen –donde se mantuvo de facto el acuerdo de alto el fuego suscrito en 2022 y se mantuvieron activos canales de negociación entre los principales actores involucrados en las hostilidades.[14]

Cabe destacar también que en muchos de estos contextos la relativa desescalada en los enfrentamientos y/o reducción de los hechos de violencia respecto al año anterior se dio en paralelo a la persistencia de crisis humanitarias y de desplazamiento forzado asociadas al conflicto y de otras graves vulneraciones a los derechos humanos, como bien ilustran los casos de Sudán del Sur o Afganistán, siendo especialmente grave en este último caso las violaciones a los derechos de las mujeres. Los casos de Egipto (Sinaí) y Tailandia (sur) siguieron siendo considerados como conflictos armados a pesar de que el número de muertes disminuyó y se situó por debajo del umbral de 100 víctimas mortales en un año debido a que la reducción relativa de la violencia en 2023 parecía estar más relacionada con cuestiones circunstanciales, en el caso de Tailandia (sur), y a los indicios de repliegue (que no desaparición) de los actores armados vinculados a ISIS en el caso de Egipto (Sinaí). En este último caso, además, la crisis en Gaza añadía incertidumbre sobre la situación de seguridad futura en el Sinaí.

En 2023, prácticamente la mitad (47%) de los casos a nivel mundial fueron conflictos armados de alta intensidad

Respecto a la **intensidad de los conflictos armados,** en 2023 los casos graves continuaron representando la mayor parte (47%) del total. **Se mantuvo así la tendencia observada**

Gráfico 1.2. **Intensidad de los conflictos armados en 2023**

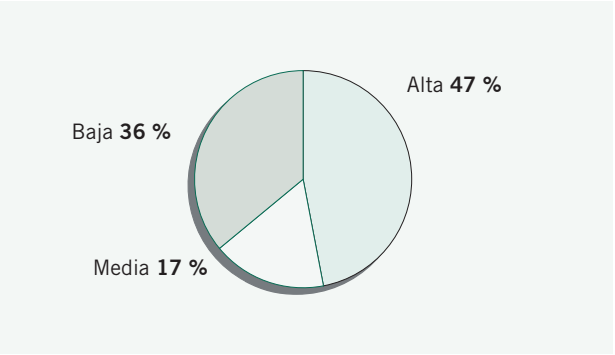


Gráfico 1.3. **Intensidad de los conflictos por regiones**

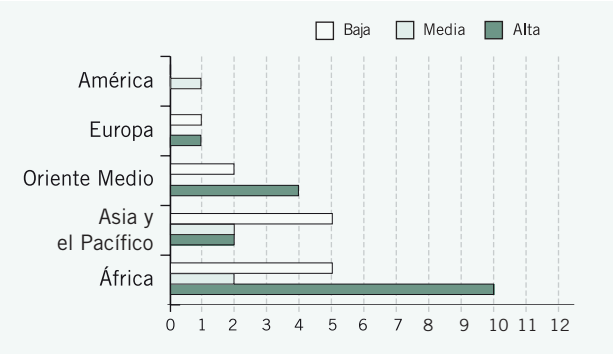


Gráfico 1.4. **Proporción de conflictos armados graves en la última década**



14. Para más información, véase el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

en los últimos años y que apunta a un aumento en el porcentaje de conflictos armados de alta intensidad, caracterizados por elevados niveles de letalidad –por encima del millar de víctimas mortales anuales–, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si consideramos los datos desde 2011 (véase gráfico 1.4), los conflictos armados de alta intensidad solían representar menos de un tercio del total de casos a nivel global –a excepción de los años 2016 y 2017 en los que se situaron en 40%. Desde 2020 el porcentaje de casos de este tipo se ha incrementado, situándose en torno a la mitad del total de conflictos armados a nivel global: 47% en 2020, 53% en 2021, 52% en 2022 y 47% en 2023. El porcentaje de 2023 representa, por tanto, una ligera reducción respecto al año anterior, pero en términos generales mantiene la tendencia. En línea con lo observado en años previos, el mayor porcentaje de casos de este tipo se concentró en África, que albergó 10 de los 17 conflictos armados de alta intensidad, es decir, el 59% del total de contextos graves que se registraron a nivel mundial. Se trata de una proporción menor respecto al año anterior, en el que los casos africanos representaron 70% del total de conflictos armados de alta intensidad. Respecto al número total de casos de conflicto armado en África, 10 de sus 18 conflictos armados eran de alta intensidad (55%), un porcentaje significativamente menor que el observado en los dos años previos –75% en 2022, 80% en 2021. La segunda región que albergó un mayor número de conflictos armados de alta intensidad fue Oriente Medio, con cuatro casos, que representan 23% del total mundial –y que equivalen a dos tercios (67%) de los casos en la región, cuatro de seis casos. En Asia aumentó de uno a dos el número de conflictos armados graves respecto al año anterior, mientras que en Europa se mantuvo en uno (50% de los casos en la región) y en América no se contabilizaron este tipo de casos. **Los 17 conflictos armados de alta intensidad en 2023 fueron**: Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

Como en años previos, **algunos de los conflictos armados de alta intensidad presentaron un patrón de hostilidades y dinámicas de violencia que provocaron niveles de letalidad muy superiores al umbral del millar de víctimas mortales anuales**, además de otros graves impactos en términos de seguridad humana y repercusiones en infraestructuras y en el territorio. Así, por ejemplo, en **RDC**, la escalada de la violencia en las cinco provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika) costó la vida a casi 3.500 personas. La reactivación de la guerra en el norte de **Malí** contribuyó a un incremento en los hechos de violencia en el país que causaron más de 4.000 muertes. En **Somalia**, la intensificación de las acciones armadas de grupos con agendas yihadistas contribuyó a un balance anual de casi 8.000 víctimas mortales. En **Sudán,** el estallido en abril de un nuevo conflicto armado protagonizado por las Fuerzas Armadas Sudanesas y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) y en el que se implicaron otros actores armados provocaron más de 13.000 fallecidos en 2023 en todo el país, en especial en la capital y en los estados de Darfur. Una cifra similar de personas fallecidas causaron los episodios violentos en la **región del Sahel Occidental**, en el área conocida como la "triple frontera" (Malí, Burkina Faso y Níger) donde murieron unas 13.500 personas en 2023. Una cifra incluso mayor de víctimas mortales se registró en **Myanmar**, donde más de 15.000 personas perdieron la vida en 2023, especialmente a partir de octubre con la escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad birmanas y diferentes grupos armados étnicos. En el caso de **Rusia-Ucrania**, algunos balances apuntaban a cerca de 2.000 civiles fallecidos por la violencia del conflicto –reconociendo que las cifras podrían ser más elevadas–, mientras que algunos balances del conjunto de víctimas mortales señalaban más de 30.000 fallecidos, civiles y combatientes durante el año.

En Oriente Medio, los conflictos armados continuaron caracterizándose por los elevados niveles de letalidad: más de 6.000 muertes en 2023 en el caso de **Siria** y más de 3.000 en el conflicto armado en **Yemen**. Se trata de cifras altas, pero comparativamente muy inferiores a las registradas en los peores años de estos conflictos armados –más de 50.000 en 2016 y 2015 y más de 70.000 en 2014 en el caso de Siria y en torno a las 20.000 muertes anuales entre 2019 y 2021 en el caso de Yemen. Mención especial amerita el caso de **Israel-Palestina** tras la acusada escalada de violencia a partir del último trimestre de 2023. El ataque sin precedentes de Hamas y otros grupos palestinos el 7 de octubre y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza derivó en la muerte de más de 34.000 personas en tan solo tres meses: cerca de 1.200 en Israel –entre israelíes y extranjeras– y 33.000 en Gaza –25.000 fallecidas y otras 8.000 sepultadas bajo los escombros–, además de más de otras 500 muertes palestinas en Cisjordania a lo largo del año. El caso destaca no solo por los gravísimos impactos en la población civil –la operación militar israelí en la Franja se convirtió en un castigo colectivo y fue crecientemente señalado como un genocidio (véase el próximo apartado)– sino por la extraordinaria magnitud de la violencia y la destrucción en un período acotado de tiempo. Israel estaba utilizando en Gaza un armamento con enorme potencial destructivo, causando estragos en un territorio de tan solo 365 kilómetros cuadrados y que se encuentra entre los más densamente poblados a nivel mundial. **Al finalizar el año, análisis advertían que la tasa de mortalidad diaria en Gaza a causa de la ofensiva israelí era más alta que la de cualquier otro conflicto armado en el mundo en el siglo XXI**.

Cuadro 1.1. **Tendencias regionales en materia de conflictividad armada**

ÁFRICA	• Siguiendo la tendencia de años previos, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 18 casos, que representan el 50% del total. • Disminuyó de manera relevante el número de conflictos armados de alta intensidad en el continente –10 de 18 casos–, que pasaron de representar el 75% en 2022 a 55% en 2023. • La mitad de los conflictos armados de la región, nueve de 18, registraron un deterioro respecto al año anterior; mientras que en otros seis contextos la situación evolucionó de manera similar. En tres casos se observó una significativa disminución en los niveles de violencia, entre ellos el de Etiopía (Tigré) que dejó de ser considerado conflicto armado en 2023. • La inmensa mayoría de los conflictos armados en el continente fueron de carácter interno internacionalizado –13 de los 18 contextos o 72%–, mientras que otros dos fueron internacionales –los conflictos en la región del Sahel Occidental y en RDC (este). Otros tres presentaban un carácter eminentemente interno: Etiopía (Oromiya), Etiopía (Amhara) y RDC (oeste), estos dos últimos nuevos conflictos armados en 2023.
AMÉRICA	• El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. • En 2023 el conflicto armado en Colombia se mantuvo en una intensidad media, con niveles de violencia relativamente elevados a pesar de los acuerdos de alto el fuego que el Gobierno ha alcanzado con varios grupos armados activos y de las negociaciones con el ELN y el EMC. • Aunque en América solo se contabilizó un conflicto armado, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.[15]
ASIA Y EL PACÍFICO	• Asia se situó en segundo lugar después de África en cuanto a número de conflictos armados, con nueve en total (25%). • En 2023 el continente albergó dos conflictos armados de alta intensidad –Myanmar y Pakistán– y otros dos de intensidad media –Afganistán y Pakistán (Baluchistán)–, mientras que la mayoría de casos –cinco de los nueve– fueron conflictos armados de baja intensidad. Entre estos últimos, algunos casos que datan de décadas, como el de Filipinas (NPA) o el de India (CPI-M). • En términos de evolución, la mayor parte de los conflictos armados en Asia presentaron una disminución o niveles similares de violencia en comparación con el año anterior –cuatro y dos casos, respectivamente. En un tercio de los contextos se observó un deterioro, que se produjo en los dos casos de alta intensidad –Myanmar y Pakistán– y también en Pakistán (Baluchistán). • Asia continuó destacando por la presencia de conflictos armados de carácter interno. En el continente asiático un tercio –tres de los nueve casos– eran de este tipo: Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur).
EUROPA	• El continente fue escenario de dos conflictos armados –Rusia-Ucrania y Turquía (sudeste)–, que representan el 5% del total de casos a nivel global. • En términos de evolución, el conflicto armado derivado de la invasión de Rusia a Ucrania presentó altos niveles de violencia similares a los del año anterior. En Turquía (sudeste) se observó una disminución en los niveles de letalidad asociados a las hostilidades entre fuerzas gubernamentales y el PKK dentro del país, en parte vinculada al cese de hostilidades unilateral del grupo armado en respuesta al grave terremoto que afectó la región.
ORIENTE MEDIO	• En la región se registraron seis conflictos armados, uno más que el año anterior, debido a la escalada de violencia entre Israel y Hezbollah vinculada a la crisis de Gaza. Los casos de Oriente Medio representaron un 17% del total mundial. • Después de África, Oriente Medio fue la región que albergó un mayor número de conflictos armados de alta intensidad y, proporcionalmente, fue la zona más afectada del mundo por este tipo de conflictos. Cuatro de los seis conflictos de la región (67%) fueron de intensidad elevada en 2023. • Respecto a la evolución de los conflictos en la región, en la mitad de casos se observó un descenso de los niveles de violencia en comparación con años previos, y en el resto una escalada, que fue especialmente significativa en el caso de Israel-Palestina.

1.2.2. Impactos de los conflictos armados en la población civil

En línea con lo observado en años previos, y tal como vienen denunciando de manera insistente tanto Naciones Unidas como otras organizaciones internacionales y locales, la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados en 2023. Estos impactos se interrelacionaron además con otras crisis, como la emergencia climática, la inseguridad alimentaria o la desigualdad, agravando las vulneraciones de derechos y la situación general de seguridad humana en estos contextos. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2023 y que analiza los hechos de 2022, dibujó un panorama que confirma las consecuencias en civiles en términos de muertes, heridas, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y desplazamiento forzado. También subrayó que la destrucción de infraestructura esencial –de salud, de electricidad, sanitaria y de agua– privó a miles y miles de personas de acceso a servicios esenciales para sobrevivir.

El informe también alertó del **impacto del uso de armas explosivas en áreas pobladas, con efectos devastadores en la población civil.** Así, en 2022, se identificó que el mayor número de víctimas civiles por este tipo de prácticas se había producido en Ucrania, seguido de Afganistán, Somalia y Siria. Paralelamente, se documentó la utilización de minas antipersonales en contextos como RCA, Colombia, RDC, Myanmar, Ucrania

15. Véase el apartado sobre América en el capítulo 2 (Tensiones).

y Yemen, así como bombas de racimo en Ucrania. A finales de 2022 se constataba una amplia contaminación por remanentes de explosivos en países como Siria e Iraq. En este último país, de hecho, se estimaba que este tipo de artefactos era responsable de un tercio de las bajas civiles. El análisis de los conflictos armados en 2023 en esta edición del informe *Alerta!* ilustran la persistencia y agravamiento de esta problemática en numerosos contextos. En Colombia, el uso de las minas antipersonales continuó provocando víctimas mortales. En Ucrania, las armas explosivas de amplio alcance fueron responsables del 84% de las víctimas mortales civiles y de 95% de los civiles heridos. **Uno de los casos más notorios y emblemáticos en 2023 fue el de Gaza, debido al uso de armamento con un enorme potencial destructivo en un área densamente poblada y sin opciones de salida para la población**. Durante los primeros meses de la campaña israelí el Ejército israelí lanzó sobre la Franja 25.000 toneladas de explosivos –equivalentes a dos bombas nucleares– sobre diversos objetivos, muchos de los cuales fueron identificados a través de sistemas de inteligencia artificial. También se alertó sobre el uso de armas prohibidas en zonas pobladas, como el fósforo blanco. Como resultado de estos ataques indiscriminados y deliberados y de otras medidas como la intensificación del bloqueo y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria –se denunció el uso del hambre como arma de guerra– y la destrucción sistemática de infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, más de 33.000 personas habían muerto en Gaza al finalizar el año, el 70% de las cuales eran mujeres y menores de edad. Los ataques israelíes también provocaron la muerte de más de un centenar de periodistas y trabajadores humanitarios. Ante un panorama de continuas y sistemáticas vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), **diversas voces alertaron sobre la erosión del sistema internacional de protección de la población civil y sobre los dobles raseros a la hora de aplicar algunas medidas de sanción contra los responsables de este tipo de vulneraciones.**[16] Cabe destacar que estos graves impactos de la violencia armada en las poblaciones civiles en numerosos contextos se produjeron además en un **escenario de creciente militarización y aumento del gasto militar a nivel mundial**. El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), referente en este ámbito, constató que en 2023 el gasto militar había aumentado –por noveno año consecutivo– hasta alcanzar los 2,44 billones de dólares.[17]

Los conflictos armados también provocaron y/o empeoraron situaciones de crisis humanitaria y continuaron siendo uno de los principales factores tras las crisis de hambre en el mundo, debido a la destrucción de cultivos, maquinaria agrícola o contaminación de territorios con explosivos. El alza en los precios de los alimentos, de los combustibles y fertilizantes –muy influido por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania–, además de los efectos del cambio climático, agravaron las necesidades de la población civil en numerosos contextos. En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, la explosión de la presa de Kajovka en Jersón (en el sur de Ucrania, en una zona ocupada por Rusia) causó una catástrofe ecológica y humanitaria, al provocar la inundación de amplios territorios, contaminar el agua, desplazar minas explosivas y extensos daños en áreas agrícolas. **Cabe destacar también las interrelaciones de los conflictos armados con fenómenos como el cambio climático provocado por la actividad humana y desastres naturales, que contribuyeron a un deterioro de la situación que afrontan poblaciones civiles en numerosos contextos** e impactaron especialmente en las condiciones de vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad. En 2023, por ejemplo, en Somalia el agravamiento de las dinámicas de violencia se produjo en paralelo a la peor sequía en décadas en el territorio, seguida de las mayores inundaciones en varias generaciones. Esta conjunción de elementos motivó un deterioro de la situación humanitaria y un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria. En Libia, las lluvias torrenciales causadas por una tormenta (Daniel) y vinculadas al cambio climático derivaron en la destrucción de una presa y en la muerte y desaparición de miles de personas en Derna (este), en un contexto marcado por los impactos del conflicto armado, la persistente fractura institucional y serios problemas de gobernanza. En Colombia, la situación humanitaria causada por el prolongado conflicto armado en el país también se vio agravada por los efectos del cambio climático en 2023, debido a las sequías e inundaciones que afectaron diferentes zonas del territorio. Una situación similar se observó en Myanmar, considerado como uno de los países con mayor riesgo de padecer eventos climáticos extremos. En el caso de Siria, la interrelación entre conflicto armado y desastres naturales fue evidente en los impactos del terremoto que sacudió la región –y también a Turquía– en febrero. El seísmo afectó especialmente la zona noroeste del país, un área controlada por la oposición y que alberga a cientos de miles de personas desplazadas internamente a causa del conflicto armado. El régimen sirio intentó controlar e instrumentalizar la ayuda humanitaria a la región, ampliamente denunciada como insuficiente por múltiples actores.

Los conflictos armados también continuaron teniendo **impactos específicos en algunos grupos de población**. En sus informes periódicos sobre las consecuencias de los conflictos en la población civil, el secretario general de la ONU viene alertando sobre los **efectos desproporcionados que padecen las personas de mayor edad, que muchas veces no pueden abandonar las zonas afectadas por las hostilidades** y se ven obligadas a afrontar un mayor riesgo de morir, resultar heridas o no tener acceso a servicios básicos o redes de apoyo. En cuanto a los impactos de los conflictos armados en los niños y las niñas, el informe periódico del secretario

16. Véase "Gaza, la erosión del derecho internacional humanitario y el futuro de orden global", en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo).
17. SIPRI, "El gasto militar mundial aumenta en medio de guerras, tensiones crecientes e inseguridad", comunicado de prensa, 22 de abril de 2024.

general publicado a mediados de 2023, y que abarca hechos acontecidos en 2022, constató un aumento en el número de vulneraciones graves contra menores.[18] Si en 2021 se habían confirmado 23.982, en el año 2022 se documentaron 27.180 vulneraciones graves, de las cuales 24.300 fueron cometidas a lo largo de 2022 y 2.880 fueron perpetradas con anterioridad, pero verificadas en 2022. Estos hechos afectaron a casi 19.000 menores, de los cuales la mayoría eran niños, en 24 contextos. El informe subraya que la información proporcionada no refleja la totalidad de violaciones cometidas contra niños y niñas en escenarios de conflicto armado a nivel global, pero sí recoge las tendencias de las vulneraciones más graves. Se identificó así que **las acciones más graves cometidas contra niños y niñas fueron las matanzas, las mutilaciones, el reclutamiento, el secuestro y la detención de menores por su vinculación real o presunta con grupos armados**. **Las normas de género condicionaron la exposición de menores a estos impactos**. Así, los niños continuaron viéndose más afectados por el reclutamiento, las mutilaciones y los secuestros, mientras que las niñas se vieron desproporcionadamente afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos armados. El informe alertó sobre el particular impacto en niños y niñas en 2022 en contextos como Myanmar –donde las hostilidades contribuyeron a que las violaciones graves se incrementaran en un 140%–, en Sudán de Sur –donde las dinámicas de violencia repercutieron en un aumento del 135% en las vulneraciones graves a menores– o el Sahel Occidental –donde las violaciones graves se incrementaron en un 85%. Otros conflictos armados en los que se identificó un aumento de las vulneraciones contra menores en 2022 fueron Colombia, Israel-Palestina, Libia, Malí, Nigeria, Siria y Sudán. En cambio, en Yemen, la tregua alcanzada en 2022 a instancias de la ONU contribuyó a una disminución del 40% de las violaciones, subrayando la importancia del trabajo por la paz para garantizar la seguridad de los menores. También en clave positiva, en 2022 casi 12.500 menores vinculados previamente a fuerzas o grupos armados recibieron protección o apoyo para su reintegración.

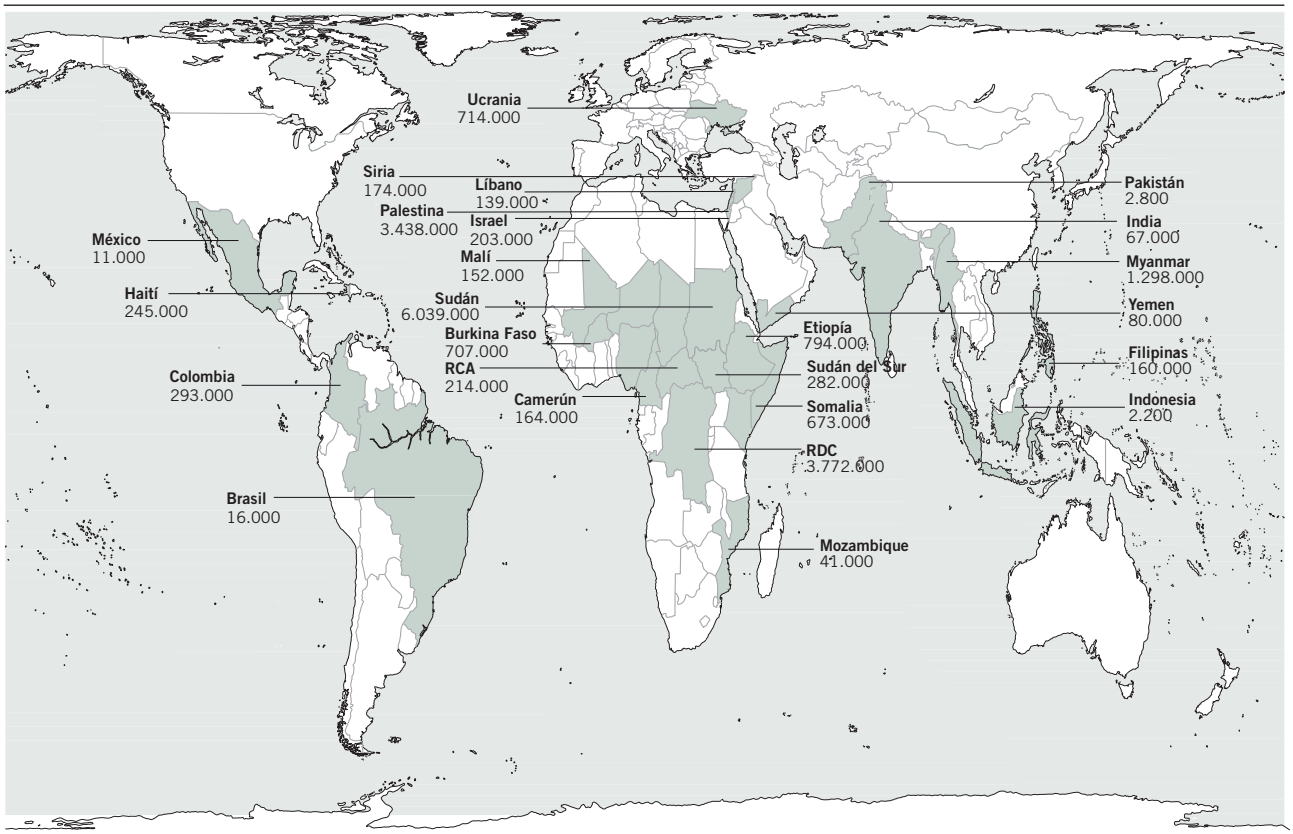
En Gaza, en tan solo tres meses, cerca de 10.000 niñas y niños palestinos murieron a causa de la ofensiva israelí, cifra que supera la de todos los menores fallecidos en conflictos armados en el mundo desde 2019

La evolución de los conflictos armados en 2023 indica una persistencia de los abusos y vulneraciones de derechos de los menores en múltiples contextos. Niños y niñas se vieron directamente afectados por ataques en contextos como Burundi, Myanmar, Ucrania o Siria, entre otros. En el caso sirio, por ejemplo, en 2023 murieron 307 menores en diversos hechos de violencia, elevando así a 24.000 el total de niños y niñas que han perdido la vida desde el inicio del conflicto armado en 2011. En el caso de Gaza, al finalizar 2023 –y en un período de tan solo tres meses– cerca de 10.000 niñas y niños palestinos habían muerto a causa de la ofensiva israelí, una cifra que superaba a todos los menores fallecidos en contextos de conflicto armado en el mundo desde 2019. Otros miles de menores resultaron heridos y/o se vieron afectados por operaciones sin anestesia –incluidas amputaciones– y afrontaban graves consecuencias en su salud mental a causa de los persistentes ataques, la continua inseguridad, la pérdida de sus padres y otros familiares y la severa crisis humanitaria. Varios menores israelíes se cuentan también entre las personas que fueron tomadas como rehenes por Hamas en los hechos del 7 de octubre y menores palestinos también estaban privados de libertad bajo la polémica figura de detención administrativa. En varios contextos se identificó un aumento del reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de los grupos armados. En Colombia, por ejemplo, 251 menores se vieron afectados en 2023, un 93% más que en 2022. En 2023 también se alertó sobre un aumento en el reclutamiento de menores en Yemen por parte de los al-houthistas y se denunció la utilización de niños por parte de las milicias tribales que apoyan a las fuerzas gubernamentales egipcias en su lucha contra ISIS en el Sinaí. En el noreste de Siria, en tanto, más de 51.000 personas, en su mayoría mujeres y menores de 12 años permanecían retenidas en los campamentos de al-Howl y Roj por su vinculación con ISIS.

Al igual que en años previos, en numerosos conflictos armados continuó perpetrándose **violencia sexual**. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos armados publicado en 2023, que documenta y analiza hechos ocurridos en 2022, alertó sobre algunas tendencias especialmente preocupantes y advirtió sobre **graves afectaciones relacionadas con la utilización de la violencia sexual en países como Ucrania, Afganistán, Malí, Myanmar, Sudán, RDC, Etiopía, Haití y Sudán del Sur**.[19] El informe identificó 49 actores como perpetradores de violencia sexual en distintos escenarios de conflicto, la mayor parte de ellos grupos armados no estatales, aunque también se registraron casos de implicación de Fuerzas Armadas y de seguridad. El informe enfatiza que el 70% de estos actores son considerados como perpetradores persistentes, al aparecer en la lista durante cinco años o más y no adoptar medidas correctivas o de reparación. La violencia sexual se utilizó como parte de la violencia política y represiva en diferentes contextos de conflicto armado y tensiones sociopolíticas y fue una de las causas del desplazamiento forzado de población, afectando también a la población previamente desplazada dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres que deben abandonar de manera forzada sus lugares de origen.

18. Secretario general de la ONU, *Informe anual sobre los niños y los conflictos armados*, A/77/895-S/2023/363, 5 de junio de 2023.
19. Secretario general de la ONU, *Informe anual sobre violencia sexual en conflictos armados*, S/2023/413, 22 de junio de 2023.

Mapa 1.2. **Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2023**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Report on Internal Displacement 2024*, 14 de mayo de 2024.

En 2023, año en que se cumplió el 15º aniversario de la resolución 1820 de Naciones Unidas (que inició una serie de resoluciones centradas específicamente en la violencia sexual en el marco de la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad) las informaciones disponibles apuntaban a una persistencia de esta problemática en numerosos contextos. Así, por ejemplo, en Somalia, las tasas de violencia sexual continuaron incrementándose, siguiendo una tendencia de deterioro que se ha acentuado desde 2020. La violencia sexual también continuó presente en los diversos conflictos armados que tienen lugar en RDC, donde actores armados como las ADF persistieron en la explotación sistemática de niñas y mujeres secuestradas, sometidas a esclavitud sexual. En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, durante 2023 diversos actores continuaron denunciando y documentando el uso de la violencia sexual, perpetrada mayoritariamente por las fuerzas rusas. En 2023 también se alertó sobre la violencia sexual en contextos como Sudán del Sur o Yemen. A nivel general, cabe destacar también que Naciones Unidas constató que entre el 70% y el 90% de los episodios de violencia sexual en contextos de conflicto armado se producen con el uso de armas ligeras, una evidencia que refuerza la necesidad de abordar los impactos de este tipo de armamento.[20]

La peor crisis de desplazamiento forzado en 2023 se produjo en Sudán, donde la intensificación de la violencia desde abril obligó a más de 7,5 millones de personas a abandonar sus hogares

Los **desplazamientos forzados de población** continuaron siendo uno de los efectos más flagrantes y dramáticos de los conflictos armados, comprometiendo las vidas de millones de personas a nivel global. Según los datos recopilados por la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas, ACNUR, este fenómeno continuó agravándose en 2023, batiendo nuevamente las cifras récord registradas en años previos. El balance global del primer semestre de 2023[21] ascendía ya a 110 millones de personas, incluyendo personas desplazadas forzosamente dentro y fuera de las fronteras de sus países como resultado de conflictos, violencia, persecución y vulneraciones a los derechos humanos. De este total, 36,4 millones de personas eran refugiadas, 62,5 millones eran desplazadas internas, 6,1 millones se contabilizaban como solicitantes de asilo y otras 5,3 se encontraban en la categoría de personas necesitadas de protección internacional.[22] Respecto a la **población refugiada** y en necesidad de

20. Ibid.
21. Al cierre de esta edición solo estaban disponibles los datos globales relativos al primer semestre de 2023.
22. ACNUR, *Mid-Year Trends 2023*, 25 de octubre de 2023.

protección internacional, a mediados de 2023 más de la mitad (52%) procedía de tan solo tres países afectados por conflictos armados: Siria (6,5 millones de personas), Afganistán (6,1 millones) y Ucrania (5,9 millones). Si se consideran tanto la población refugiada como la desplazada internamente, Siria continuaba ocupando el primer lugar –como lo ha sido durante una década– con un total de 13,3 millones de personas. Del total de población desplazada forzosamente a nivel mundial se estimaba que el 88% vivía en países de ingresos medios y bajos.

Teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos en diversos escenarios durante el segundo semestre, se anticipaba que las cifras acumuladas de desplazamiento forzado global hasta finalizar 2023 fueran aún mayores. Los balances anuales en varios contextos de conflicto armado así lo indicaban. Así, por ejemplo, los datos de la propia ACNUR apuntaban a más de 3,1 millones de personas desplazadas forzosamente a causa de la violencia en Lago Chad. En Sudán, desde que se intensificó la violencia en abril y hasta finales de 2023 se contabilizaban más de 7,5 millones de personas desplazadas a causa del conflicto, en la que se perfilaba como la peor crisis de desplazamiento de 2023. La situación en RDC, afectada por diversos conflictos armados, también ha sido considerada como una de las peores crisis humanitarias y de desplazamiento de 2023 según la OIM, alcanzando los 7 millones de personas desplazadas como consecuencia de la violencia.

El balance parcial de ACNUR también se elaboró antes de la crisis en Gaza, donde la ofensiva militar israelí había motivado el desplazamiento forzado de 1,7 millones de personas hasta finales de 2023. Aunque esta cifra es inferior a la de otros contextos, cabe destacar que representa más del 75% del total de población de la Franja (2,3 millones de personas) y que los desplazamientos forzados –hacia áreas cada vez más pequeñas y en medio de incesantes bombardeos– se produjeron en tan solo tres meses. En el último trimestre del año las hostilidades entre Israel y Hezbollah derivadas de la crisis en Gaza también llevaron al desplazamiento forzado de 100.000 israelíes –evacuados a partir de octubre por las autoridades de las zonas adyacentes a Líbano por un tiempo indefinido– y de otras 50.000 personas en Líbano.

Según el informe anual de IDMC, que se focaliza en la situación de la población desplazada internamente, hasta finales de 2023 un total de 68 millones de personas había dejado sus hogares por conflictos y violencia, una cifra que se ha incrementado en un 49% en los últimos cinco años. Conflictos y violencia habrían motivado movimientos internos de población de más de 20 millones de personas en 45 países y territorios en 2023. Sudán, RDC y Palestina representan casi dos tercios de este total (véase mapa 1.2).

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2017
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Provincia de Mozambique del Estado Islámico (ISMP) —anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22% de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones, generando el despliegue, a mediados de 2021, de fuerzas internacionales en el país para ayudar al Gobierno mozambiqueño a combatir la insurgencia –Rwanda y la Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC).

La violencia en la provincia de Cabo Delgado disminuyó significativamente durante el año, registrándose un 71% menos de acciones armadas en relación con el año anterior, y un 80% de reducción de episodios violentos dirigidos directamente contra la población civil. Durante el año, según datos de ACLED, se reportaron un total de 170 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que ocasionaron 271 muertes contabilizadas en Cabo Delgado. Estas cifras representan un importante contraste con las recogidas en el año 2022, cuando se registraron 905 muertes, o las reportadas en 2021, que ascendieron a 1.067 muertes en la provincia.[23] El Africa Center for Strategic Studies (ACSS) destacó una caída del 80% de la violencia dirigida directamente contra la población civil, con 61 muertes registradas, frente a las 437 contabilizadas en 2022 –año que había supuesto un incremento del 57% con relación al año 2021.[24] La reducción de la violencia se debió a los efectos combinados de la intervención en Cabo Delgado de la Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) y de las fuerzas rwandesas que fueron desplegadas en julio de 2021 para ayudar al Ejército de Mozambique a combatir a la insurgencia yihadista –Estado Islámico en la Provincia de África Central (ISCAP) o "Wilayah de Mozambique" (Provincia de Mozambique del Estado Islámico (ISMP). La intervención conjunta de las fuerzas nacionales e internacionales contribuyó a recuperar el control del 90% del territorio que estaba en manos de la insurgencia. Este hecho permitió, entre otros aspectos, que el 11 de septiembre se reabriese la frontera con Tanzania mediante el cruce fronterizo de Namoto entre Cabo Delgado y la provincia tanzana de Mtwara después de dos años de cierre debido a la inseguridad. Al finalizar el año el principal foco de inestabilidad en la provincia se mantenía en las zonas rurales en la parte nororiental del distrito de Macomia. Desde el inicio de la violencia en la región a finales de 2017, se estima que el conflicto se ha cobrado la vida de unas 5.000 personas y mantenía desplazadas internamente a finales de 2023 a alrededor de 850.000 personas en las cuatro provincias norteñas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula y Zambézia.

La violencia en la provincia de Cabo Delgado en Mozambique se redujo en cerca de un 70% en 2023 con respecto al año anterior

Entre los eventos más significativos registrados durante el año, el 1 de enero el Gobierno de Mozambique, conjuntamente con la SAMIM, puso en marcha una nueva operación contrainsurgente en Cabo Delgado, la operación "Vulcão IV", en un intento por controlar la cuenca del río Messalo en el distrito de Muidumbe y los bosques cercanos del distrito norte y oeste de Macomia. En febrero, la insurgencia del ISMP inició una campaña de acercamiento a comunidades para solicitarles apoyo. Este cambio de estrategia fue interpretado como un intento de obtener el apoyo de la población y asegurar líneas de suministro para compensar las pérdidas de territorio producidas desde el despliegue de las tropas de la SAMIM y Rwanda. En abril, el Gobierno de Mozambique aprobó un decreto que otorgó autoridad legal y reguló el funcionamiento de las Fuerzas Locales en Cabo Delgado –milicias comunitarias conocidas como "Naparama" surgidas en 2022 para combatir a la insurgencia. Con este decretó concluyó el proceso de legalización de estas milicias después de que el Parlamento aprobara a finales de 2022 una ley que reconoció a la milicia como fuerza vinculada al Gobierno. A mediados de año, tras una relativa calma entre marzo y abril debido a la temporada de lluvias y al Ramadán, se registró una intensificación de las acciones del ISMP, principalmente en los distritos costeros, lo que provocó que el Ejército mozambiqueño y las fuerzas internacionales redoblaran sus acciones a lo largo de la costa de Macomia. En este contexto, la SADC, el 11 de julio renovó el mandato de SAMIM por un año más. Posteriormente, en agosto, el Ejército anunció la muerte de tres altos mandos del ISMP, incluido Ibn Omar, presunto líder de la organización, en una operación desarrollada en los bosques de Macomia. A finales de año se registraron avances de la insurgencia hacia los distritos del sur de la provincia de Cabo Delgado –Meluco y Quissanga– lo que llevó al Ejército a fortificar posiciones contra un posible ataque a la capital provincial, Pemba. A finales de noviembre, el presidente del Consejo Islámico de Mozambique anunció la creación de una comisión internacional para promover conversaciones de paz entre el Gobierno y los insurgentes en Cabo Delgado.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, aliado del IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	2
Evolución:	=

23. ACLED, Dashboard [consultado el 12 de febrero de 2024].
24. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.

Síntesis:
Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

El conflicto armado entre los cuerpos de seguridad del Estado y los movimientos político-militares secesionistas en las dos provincias anglófonas del suroeste de Camerún continuó activo durante todo el año. De acuerdo con datos de International Crisis Group y de ACLED, el conflicto ha causado la muerte de unas 6.000 personas desde 2018. Según ACLED, en 2023 se produjeron 429 víctimas mortales en un total de 262 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), lo que supone una ligera reducción respecto a las cifras de 2022, cuando se produjeron 525 víctimas mortales en 343 eventos violentos. Los cuerpos de seguridad no consiguieron hacer remitir las acciones de los grupos armados, a pesar de algunas deserciones de líderes insurgentes, como David Dibo y Ekpe Jerome. A finales de 2023 seguían desplazadas dentro del país como consecuencia de la violencia en ambas regiones un total de 621.591 personas, y alrededor de 90.000 personas se encontraban refugiadas en la vecina Nigeria, según datos de ACNUR. Además, la violencia se ha extendido en los últimos años a las provincias aledañas de Litoral, Centro y Oeste, debido al objetivo por parte de los movimientos político-militares de ampliar el conflicto más allá de las dos regiones secesionistas. Cabe señalar que diferentes grupos político-militares se reunieron en Canadá para unificar su estrategia negociadora, en paralelo a los contactos exploratorios facilitados por Canadá con representantes gubernamentales de Camerún.[25] Por otra parte, los líderes del grupo insurgente de Ambazonia AgovC, Ayaba Cho Lucas, y del grupo nigeriano IPOB, Simon Ekpa, alcanzaron un acuerdo de cooperación militar en Helsinki entre sus respectivas insurgencias.

Del balance del año, aumentaron las explosiones y el uso de artefactos explosivos (IED) al nivel más alto desde noviembre de 2021. Cabe destacar especialmente el incremento de la tensión y la violencia en diversas fechas destacadas, como en vísperas de las elecciones al Senado del 12 de marzo, boicoteadas por los grupos armados –la insurgencia llevó a cabo ataques contra civiles que habían violado el boicot electoral en las provincias anglófonas–; el 20 de mayo –Día Nacional, considerado un aniversario clave que marca el inicio del conflicto cuando el referéndum constitucional derogó los estados federales de Camerún Occidental (anglófono) y Camerún Oriental (francófono) en 1972–; el inicio del año escolar en septiembre –forzando el cierre de escuelas–; así como el 1 de octubre –aniversario de la autoproclamada República Federal de Ambazonia. En paralelo, miles de personas se manifestaron en todo el país pidiendo la paz y reconciliación durante los días previos a las celebraciones del Día Nacional. Caravanas de paz encabezadas por cantantes, activistas, clérigos y gobernantes tradicionales pidieron el fin del discurso de odio y del conflicto armado. En la capital, Yaoundé, miles de cristianos de las iglesias católica, presbiteriana y bautista de Camerún se unieron a la protesta el 18 de mayo.[26] Coincidiendo con el Día Nacional, la insurgencia separatista secuestró a una treintena de mujeres que se manifestaban contra la extorsión a la que les sometían los grupos armados. El 29 de julio, el movimiento separatista exigió la suspensión de todas las actividades en Bamenda –lo que se conoce como declarar la "ciudad muerta"– para intentar entorpecer el funeral del líder opositor camerunés Ni John Fru Ndi por su apuesta por un Camerún unido.

OCHA señaló que 255 organizaciones humanitarias dieron asistencia a 2,7 millones de personas vulnerables de un total de 4,7 millones de personas necesitadas de este apoyo. Nueve de las diez regiones de Camerún siguieron viéndose afectadas por tres crisis humanitarias complejas: el conflicto de la cuenca del lago Chad (que afecta a la región del Extremo Norte), la crisis del Noroeste y Sudoeste y el impacto de la afluencia de inmigrantes de la RCA refugiados en las provincias de Este, Adamawa y regiones del Norte. En julio, Amnistía Internacional denunció que los cuerpos de seguridad, los grupos separatistas y las milicias de autodefensa de carácter étnico –promovidas o toleradas por el Ejército, que habría instigado a la comunidad fulani mbororo contra los rebeldes anglófonos– habían cometido

25. Véase el resumen de Camerún en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
26. Moki Edwin Kindzeka, 'Cameroon Calls for Peace, Reconciliation Ahead of Country's National Day', *Voice of America*, 18 de mayo de 2023.

atrocidades en la región de Noroeste, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones desde 2020.[27] Por último, ante la oleada de golpes de Estado en África Central y Occidental y tras la destitución forzada del presidente de Gabón Ali Bongo Ondimba a finales de agosto, el presidente de Camerún, Paul Biya, llevó a cabo una sustitución de diversos coroneles en el seno del Ejército. En el ámbito político, cabe destacar que el partido de Biya arrasó en las elecciones al Senado en marzo, en las que el presidente utilizó todo el poder del Estado en beneficio de su partido y limitó la libertad de expresión, pasando a controlar el 95% del Senado, mientras continuaban las especulaciones en torno a la salud y la sucesión del nonagenario.

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Marco Estratégico Permanente (CSP) –reúne a los grupos armados afiliados a CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA) y a la Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción)– Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, MINUSMA, Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendido sus dinámicas a la región central del país.

Durante el año la situación de seguridad en Malí siguió deteriorándose debido a la reactivación de la guerra en el norte del país entre el Gobierno maliense -apoyado por la empresa de seguridad privada rusa Grupo Wagner- y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo de paz de Argel de 2015, organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés). Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año 2023 se registraron 1.544 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) en todo el país, concentrados en las regiones norte y centro, que dejaron un balance de 4.288 personas fallecidas, de las cuales 1.848 se produjeron en las regiones del norte del país (Gao, Menaka, Tombuctú y Kidal).[28] Estos datos muestran una continuidad con las dinámicas de violencia registradas el año anterior (1.340 eventos violentos y 4.842 personas fallecidas). Si bien se observó un cierto descenso de la letalidad, se incrementó el número de episodios violentos en el país debido al reinicio de la guerra en el norte a mediados de agosto entre los grupos armados signatarios del acuerdo de paz organizados en la CSP –que reúne a la CMA y a la Plataforma– y el Gobierno maliense, abriendo un nuevo frente de inestabilidad. El deterioro de la situación de seguridad en el norte del país fue aprovechado por las coaliciones yihadistas activas en la región –Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS o ISWAP)– quienes aumentaron la violencia en la zona norte y la mantuvieron también en la región central (Mopti y Ségou). El aumento de la inestabilidad y la inseguridad mantuvo la tendencia en el **desplazamiento forzado de personas y la crisis humanitaria**. Según datos de ACNUR sobre la situación de desplazamiento forzado en el país, a mediados de 2023 el número de personas refugiadas se situó en 233.188, en comparación con los 200.471 registrados a mediados de 2022.[29] En materia de desplazamiento forzado interno, según datos de la OIM, durante el primer trimestre del año la cifra de personas desplazadas internas ascendía a 391.961, concentrándose en las regiones de Mopti (23%), Tombuctú (16%), Bandiagara (14%), Menaka (12 %), Gao (9%) y Ségou (9%).[30] Todos estos datos son anteriores al reinicio de las hostilidades en el norte del país, por lo que, previsiblemente, a finales de año las cifras serán mucho mayores. Por otro lado, la violencia y la inestabilidad generó que 7,1 millones de personas (el 32% de la población) necesiten asistencia y protección humanitaria, principalmente en el norte y

27. Amnistía Internacional, *Cameroon: With or against us: People of the North-West region of Cameroon caught between the army, armed separatists and militias*, 4 de julio de 2023.
28. ACLED, Dashboard [consultado el 19 de febrero de 2024].
29. UNHCR, "Refugee data Finger", [consultado el 20 de febrero de 2024].
30. IOM, "Mali Crisis Response Plan 2023 – 2024" [consultado el 20 de febrero de 2024].

el centro. En 2023, los datos de la OCHA mostraron cómo únicamente se había conseguido alrededor del 30% de los 750 millones de dólares que se necesitaban para atender a la población del país.[31]

En materia de inestabilidad, el mayor deterioro se registró en el norte del país. En la región, las tensiones entre las autoridades de transición y los movimientos armados árabe-tuareg habían comenzado desde la llegada al poder de la Junta Militar tras el golpe de Estado de mayo de 2021, y se habían intensificado a finales de 2022 con el anuncio de la suspensión por parte del CSP de su participación en la implementación del Acuerdo de Argel debido al bloqueo del mismo por parte de la Junta. El 1 de febrero de 2023, la coalición CSP se reunió con el mecanismo de mediación internacional del acuerdo de paz (liderado por Argelia) y advirtió que tomarían medidas si el Gobierno continuaba bloqueando la implementación del acuerdo de paz. En marzo las tensiones aumentaron debido a la movilización de unos 400 vehículos pertenecientes a grupos armados signatarios cerca de la ciudad de Anefis, en la región de Kidal –justificado por parte de la CSP para operaciones contra el ISGS. Posteriormente, tras la mediación de Argelia, se produjo una distensión entre las partes, provocando que el 12 de mayo el ministro de Reconciliación Nacional de Malí se reuniera con representantes de la CMA y la Plataforma en Kidal, reiterando el compromiso del Gobierno con el Acuerdo. Sin embargo, la reorganización del gabinete de Gobierno llevada a cabo por el presidente Goïta el 1 de julio –que provocó que los grupos signatarios perdieran dos de los cuatro ministerios que tenían asignados en el acuerdo de paz–, así como el anuncio del Gobierno de revocar el consentimiento y cerrar la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA), acabaron por provocar los primeros enfrentamientos armados desde la firma del acuerdo de paz en 2015. Estos estallaron a principios de agosto entre la CMA y el Ejército maliense, ayudado por miembros del Grupo Wagner, en varias regiones del norte como Tombuctú, Kidal y Gao. Más tarde, el 11 de septiembre, la CMA comunicó que se consideraba "en guerra" con Bamako. La retirada de la MINUSMA generó disputas por el control de las bases que hasta la fecha utilizaba la misión de la ONU, produciendo diferentes enfrentamientos armados entre las partes. Los más destacados se produjeron por el control de la ciudad de Anefis (Kidal) y de las bases de la MINUSMA en Ber (Tombuctú), Aguelhok, Tessalit y Kidal (Kidal). En noviembre, el Ejército anunció la toma de la ciudad estratégica de Kidal, base del CSP, que denunció que la presencia del Ejército en la región representaba una vulneración del acuerdo de paz que les otorgaba el control de esta zona. Posteriormente, la CSP anunció el bloqueo de las carreteras que conducen a las principales ciudades del norte de Menaka, Kidal, Gao, Tombuctú y Taoudeni en un esfuerzo por aumentar la presión sobre las fuerzas gubernamentales. También la coalición yihadista JNIM restableció el bloqueo a la ciudad de Tombuctú que había levantado en el mes de noviembre. A finales de año, la MINUSMA completó la retirada de tropas con la entrega de la base de Sévaré (región de Mopti) y el campamento de Tombuctú. El estallido de la violencia provocó divisiones dentro del CSP. El Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA), a finales de septiembre anunció su salida de la coalición debido a la postura belicosa del CMA, denunciando que el conflicto sólo beneficiaba a los yihadistas. Otros miembros del CSP también expresaron su compromiso con la paz.

Se reactivó la guerra en el norte de Malí entre el Gobierno y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo de paz de Argel de 2015, organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente

Por otro lado, **en la región central** (Mopti y Ségou) se mantuvieron durante el año las dinámicas de violencia. Entre los episodios más destacados, en mayo, la ONU publicó el informe sobre la masacre de Moura (Mopti) producida en marzo de 2022, concluyendo que el Ejército maliense y "elementos extranjeros" no especificados mataron a unos 500 civiles, señalando que podrían constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Por otro lado, el 6 de septiembre, JNIM anunció la muerte de una docena de miembros del Grupo Wagner en una emboscada cerca de la ciudad de Pogo, en la región de Ségou.

Un año más, la crisis de seguridad fue de la mano del **deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus ex aliados occidentales**. Estas desavenencias –que llevan años impactando en el complejo de seguridad internacional, traduciéndose, por ejemplo, en la finalización de la misión antiterrorista Barkhane liderada por Francia, o de la operación europea Takouba en el país en el 2022– se saldaron con la finalización y retirada en 2023 de la MINUSMA después de diez años de operación, convirtiéndose en la segunda misión en la historia de la ONU con más muertes registradas (311), solo por detrás de la UNFIL (333).[32] Asimismo, también derivaron en el fortalecimiento de las alianzas de la Junta Militar maliense con nuevos actores. En febrero la Junta reforzó sus relaciones con Rusia –recibiendo la visita del Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov– y con los países vecinos lidereados por Juntas militares (Burkina Faso y Níger) y firmó diferentes acuerdos de cooperación bilateral con Moscú en materia de seguridad. Posteriormente, el 16 de septiembre, Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron la creación de la Alianza de Estados del Sahel, y el 1 de diciembre la formación de una confederación de tres Estados y el establecimiento de un fondo de estabilización, un banco de inversión y, finalmente, una moneda común.

31. OCHA, "Mali" [consultado el 20 de febrero de 2024].
32. Naciones Unidas, Mantenimiento de la paz, "Víctimas mortales" [consultado el 11 de marzo de 2024]

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
La secta de inspiración yihadista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa "la educación occidental es un pecado"– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la cuenca del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province (ISWAP), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

Durante el año continuaron las actividades de las diferentes facciones de Boko Haram (BH) en la región de la cuenca del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria (principalmente los estados de Borno, y en menor medida Yobe y Adamawa), la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad, a pesar de las operaciones contrainsurgentes. La violencia provocó nuevos desplazamientos de población y violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados implicados, tal y como señalaron diferentes organismos de defensa de los derechos humanos. El conflicto ha causado alrededor de 40.000 víctimas mortales desde sus inicios en 2011. De acuerdo con el centro de investigación ACLED, en 2023 se registraron 3.828 víctimas mortales en la región de la cuenca del Lago Chad (los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa; la región de Extrême Nord en Camerún; Diffa en Níger; y la provincia de Lac en Chad), cifra similar a la de 2022 (3.782), y ligeramente inferior a las víctimas de 2021 (4.163). Durante 2023 se produjeron 1.310 eventos violentos, cifra ligeramente superior a los 1.002 de 2022 y a los 982 de 2021.[33]

El estado nigeriano de Bauchi, fronterizo con el epicentro del conflicto, en el noreste de Nigeria, también se vio afectado por la expansión geográfica del clima de inseguridad y violencia a partir de septiembre. La inseguridad se había reducido en los últimos años, pero el incremento de ataques por parte de los grupos armados que huían de las operaciones militares en los estados vecinos provocó un nuevo aumento de la violencia. En cambio, durante el año 2023 se redujeron las acciones de Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) en otros estados del centro-norte (Kano, Kogi, Níger y Taraba) en comparación con el año 2022.[34]

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)[35] señaló que durante 2023 aumentaron los eventos violentos de los grupos yihadistas en una cuarta parte durante el año (a 1.208 acciones armadas), alcanzando las 3.769 víctimas mortales, y revirtiendo la disminución de la violencia que la región había experimentado desde 2020. Entre 2020 y 2021 se había producido una reducción de la violencia de alrededor del 32%. Sin embargo, la zona de la cuenca del lago Chad siguió siendo el tercer conflicto más mortífero del continente y concentraba el 16% de todas las muertes relacionadas con militantes islamistas en el continente africano, tras la región del Sahel Occidental y Somalia, según ACSS. Boko Haram y ISWAP estuvieron implicados en casi todos los eventos extremistas violentos en la región, mientras que Ansaru, ubicada en la parte noroeste de Nigeria, estuvo prácticamente ausente. Los acontecimientos violentos vinculados a Boko Haram e ISWAP se distribuyen uniformemente, aunque varían según el tipo. ISWAP está vinculada a más batallas y violencia remota contra los cuerpos de seguridad, mientras que Boko Haram es responsable del 59% de los ataques contra civiles. Esto corrobora informes anteriores de que Boko Haram es el más violento de los dos grupos contra la población civil. En un esfuerzo por controlar el territorio, los recursos y los combatientes, Boko Haram e ISWAP estuvieron luchando entre sí y también contra los Ejércitos en la región del Lago Chad. En este sentido, **durante el año aumentaron los enfrentamientos entre Boko Haram**

33. ACLED, Dashboard [consultado el 31 de enero de 2024].
34. Véase resumen de región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2023.
35. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.

y ISWAP, en el marco de la lucha por la supremacía en la zona, escalada que se inició con la muerte del líder de Boko Haram en 2021, tras ataques en su feudo del bosque de Sambisa. En agosto se produjo la confrontación más mortífera hasta la fecha, en la que murieron alrededor de 100 combatientes de ambos bandos cerca de la localidad de Marte. Además, según constató ICG, también se produjo una escalada de la violencia en el seno de los respectivos grupos, como fue el caso de los enfrentamientos interétnicos entre combatientes de Boko Haram en agosto que causaron 82 víctimas mortales en el área de Kukawa. Por otra parte, ISWAP recibió suministros de armas y combatientes procedentes de sus aliados yihadistas del grupo Estado Islámico en el Sahel Occidental.

En el caso concreto de Nigeria, esta situación se suma a la violencia y criminalidad generalizadas experimentadas principalmente en el noroeste del país, donde 3.600 personas fueron secuestradas y muchas asesinadas en 2023. Cabe destacar que en marzo se rindieron 1.506 combatientes y sus familias, y en mayo otros 511, tras combates con el Ejército, según fuentes militares. En el noreste de Nigeria, la zona más afectada por las actividades de las facciones de BH, se estima que había 2,3 millones de personas desplazadas por la violencia, cifra que ACNUR amplía para el conjunto de la región de la cuenca del Laco Chad a prácticamente 3,1 millones de personas desplazadas y alrededor de 285.000 personas refugiadas y demandantes de asilo.[36]

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Togo, Benín, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia, EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
La región occidental del Sahel (norte y centro de Malí,norte de Burkina Faso y suroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

La situación de inseguridad en la región de la triple frontera (Malí, Burkina Faso y Níger) continuó siendo crítica, persistiendo los episodios de violencia así como la crisis de gobernanza en la región tras el golpe de Estado en Níger en julio de 2023. Según datos recopilados por ACLED, durante el año se registró un nuevo aumento de la violencia en la región de la triple frontera de Liptako-Gourma (que incluye Malí, Burkina Faso y el suroeste de Níger, regiones de Tillabéri, Dosso y Tahoua), contabilizándose 3.504 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que causaron la muerte a 13.634 personas (frente a las 9.702 registradas en 2022 o las 5.279 de 2021).[37] Por país, si bien Burkina Faso y Malí presentaron una cifra de eventos violentos similares (1.699 y 1.544, respectivamente), en Burkina Faso la letalidad de estos hechos siguió siendo muy superior (8.486 muertes frente a las 4.288 registradas en Malí), concentrando el 62% de todas las muertes producidas por el conflicto en la región. Ello representa el doble de personas fallecidas por la violencia en el país que las registradas el año anterior (4.214) –que también había duplicado las registradas en el año 2021 (2.290 víctimas mortales). En Malí la violencia siguió concentrándose en las regiones del norte y centro del país y, si bien se observó un descenso de la letalidad (4.288 muertes frente a las 4.842 de 2022) la inestabilidad aumentó debido al reinicio de la guerra en el norte a mediados de agosto entre los grupos armados

36. ACNUR, Operational Data Portal, enero de 2024.
37. ACLED, Dashboard [consultado el 19 de febrero de 2024].

signatarios del acuerdo de paz de 2015 organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés) y el Gobierno maliense.[38] Finalmente, en lo concerniente al impacto de la violencia en el suroeste de Níger (Tillabéri –principal zona afectada por la violencia–, Dosso y Tahoua), el número de eventos violentos se mantuvo similar al año anterior (261 frente a los 289 de 2022), pero la letalidad creció, registrándose 860 muertes frente a las 649 de 2022, representado el 6% de todas las muertes de la región.

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)[39] reportó que las muertes relacionadas con la violencia producida por parte de actores con agendas yihadistas en todo el continente africano[40] aumentó un 20%, pasando de las 19.412 en 2022[41] a las 23.322 en 2023, duplicando las registradas en 2021. De todas ellas, la región del Sahel Occidental concentró el 50% (11.643 muertes). Estos datos representan un aumento del 43% con relación al año anterior en la región saheliana, y de casi el triple con respecto a los niveles observados en 2020, cuando se produjo el primer golpe militar en la región. La violencia dirigida específicamente contra población civil representó el 35% de todos los eventos relacionados con actores yihadistas en el Sahel, siendo la más alta que cualquier otra región de África. Un año más, detrás de este incremento de la violencia se encuentran principalmente los grupos vinculados a la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –Jama'at Nusrat al Islam walMuslimin (JNIM o GSIM)–, en particular el Frente de Liberación de Macina (FLM) y Ansaroul Islam, mientras que el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) continuó teniendo un impacto menor, siguiendo la tendencia de 2021. Del total de muertes registradas, la coalición JNIM fue responsable del 81%, registrando un aumento del 67% de las muertes con relación al año anterior (9.195 frente a 5.499 en 2022). Por el contrario, las muertes asociadas al ISGS experimentaron una caída del 7% en 2023 (2.448 muertes). Por tercer año consecutivo, Burkina Faso experimentó la mayor parte de la violencia en la región, concentrando el 67% de todas las muertes relacionadas con actores yihadistas en el Sahel (7.762) –representado más del doble del número de muertes registradas en 2022. Por otro lado, Níger experimentó un aumento del 48% en las muertes relacionadas con este tipo de actores (793) –que incluye también la violencia perpetrada por Boko Haram en la región nigerina de Diffa, que forma parte del conflicto que afecta la región de Lago Chad–[42], la mayoría de las cuales ocurrieron después del golpe de Estado que padeció a mediados de 2023. Durante el año también se registró un aumento de la violencia de estos actores en Benín, duplicándose el número de acontecimientos violentos y muertes en el país, mientras que en Togo se estancó con 14 eventos y 69 muertes.

El golpe de Estado en Níger en julio de 2023 significó que todos los países que comparten la región de la triple frontera de Liptako-Gourma (Níger, Malí y Burkina Faso) se encuentren gobernados por juntas militares

El aumento de la violencia mantuvo la tendencia del **desplazamiento forzado de personas en la región**. Las estimaciones de ACNUR a mediados de año registraban más de 330.000 personas refugiadas y 2,5 millones de desplazadas internas en Burkina Faso, Malí y Níger. Burkina Faso siguió concentrando la mayor parte del desplazamiento, con más de 2 millones de personas desplazadas internamente, mientras que Malí (375.000) y Níger (335.000) –incluyendo todo el país– mantenían cifras más bajas.[43]

Por otro lado, la crisis de seguridad continuó yendo de la mano de las **tensiones diplomáticas y la renovación del sistema de alianzas de seguridad en la región**. En julio se produjo un golpe de Estado en Níger, que derrocó al presidente Mohamed Bazoum –el último aliado occidental en la región. El golpe significó la consolidación de juntas militares en toda la zona del Sahel, después de los golpes padecidos en Malí y Burkina Faso. La presencia de las juntas castrenses continuó tensionando las relaciones con sus vecinos de África occidental, así como con las potencias occidentales. Las desavenencias entre las juntas militares y sus exaliados occidentales –que llevan años impactando en el complejo de seguridad internacional en la región, principalmente en Malí– se saldaron con la finalización y retirada en 2023 de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Malí (MINUSMA). Níger también finalizó sus acuerdos de cooperación de defensa y seguridad con la UE y con Francia, quien retiró a sus últimos soldados el 22 de diciembre. De forma paralela, Malí, Burkina Faso y Níger fortalecieron sus alianzas con Rusia y avanzaron en el fortalecimiento de una alianza regional. El 16 de septiembre anunciaron la creación de la Alianza de Estados del Sahel; el 1 de diciembre la formación de una confederación de tres Estados y el establecimiento de un fondo de estabilización, un banco de inversión y, finalmente, una moneda común; y el 2 diciembre, Burkina Faso y Níger anunciaron su retirada de la alianza anti yihadista del G5 Sahel, siguiendo los pasos de Malí, que lo había hecho en 2022.

38. Véase el resumen sobre Malí en este capítulo.
39. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.
40. Incluye la región del Sahel Occidental, Lago Chad, Somalia, norte de África y Mozambique -Cabo Delgado.
41. Africa Center for Strategic Studies, *Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent*, 6 de febrero de 2023.
42. Véase el resumen sobre Región Lago Chad (Boko Haram) en este capítulo.
43. UNHCR, *Mid-Year Trends 2023*, 25 de octubre de 2023.

Cuerno de África

Etiopía (Amhara)	
Inicio:	2023
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Amhara, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
Durante las movilizaciones entre 2015 y 2018 que llevaron al poder a Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, se produjo un proceso de reactivación del nacionalismo amhara, grupo étnico que se ha sentido marginado dentro de esta fase de transformación del país y que vive mayoritariamente en la región Amhara, aunque está presente en otras regiones del país. La escalada de la violencia y la represión en 2023 se remonta al acuerdo de paz firmado en 2022 por el Gobierno Federal y el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) para poner fin a la guerra (2020-2022). El acuerdo suscitó preocupación en la comunidad amhara, excluida de las conversaciones a pesar de que las milicias nacionalistas Fano y las fuerzas especiales amhara –un grupo paramilitar vinculado al gobierno regional– lucharon del lado del Ejército Federal, al igual que Eritrea –que también fue excluida del acuerdo. Todos los actores implicados cometieron crímenes contra la humanidad contra la población de la comunidad tigré durante el conflicto en Tigré. La percepción de traición se extendió en la región de Amhara, especialmente después de que Abiy anunciara planes para desmantelar las fuerzas especiales presentes en cada una de las 11 regiones étnicas de Etiopía. El primer ministro propuso que las fuerzas especiales, que suman decenas de miles de combatientes, se integraran en el Ejército y la policía federales para fomentar la unidad interétnica y evitar que las fuerzas regionales fueran instrumentalizadas políticamente y se vieran arrastradas a conflictos, como fue el caso en Tigré. Pero muchos amharas vieron su plan como una señal de alerta, argumentando que los dejaría vulnerables a los ataques del vecino Tigré, sus rivales históricos en Etiopía, y también de la comunidad oromo, que forman el grupo étnico más grande de Etiopía, seguidos por los amhara. El grupo armado oromo OLA también ha sido acusado de atrocidades generalizadas contra los amharas en Oromiya, lo que genera temores de que quiera expulsarlos de la región. Aunque algunas de las fuerzas especiales amhara aceptaron integrarse en el Ejército y la Policía, muchos desertaron y se unieron a las milicias Fano. Además, este movimiento nacionalista amhara aprovechó la guerra en la región de Tigré para, a través de estas milicias paramilitares, recuperar y ocupar dos territorios en disputa histórica que forman parte de Tigré (Tigré Occidental y Meridional, llamados por el nacionalismo amhara Welkait-Tsegede y Raya, respectivamente) donde se estableció una administración provisional amhara que el Gobierno Federal declaró ilegal al finalizar el conflicto.

La inestabilidad en la región de Amhara se agravó a partir de abril, cuando el Gobierno Federal anunció el desarme y la disolución de las fuerzas especiales amhara y de las milicias Fano, y su integración en la Policía y en el Ejército. Desde entonces se produjo una escalada de violencia, represión y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y estas milicias, a las que se les unieron parte de las fuerzas de seguridad regionales que desertaron de sus puestos. El anuncio del 6 de abril desató amplias movilizaciones en la región, ya que se vio la medida como una amenaza en medio de la preocupación de que la alianza del primer ministro Abiy con los nacionalistas oromo y el fortalecimiento de los vínculos con Tigré tras el acuerdo de paz de noviembre de 2022 estuviera aislando a la región de Amhara. Algunas fuerzas especiales se negaron a cumplir la orden y, en cambio, se aliaron con la milicia Fano, y se enfrentaron con soldados federales en varias zonas.[44] También estallaron manifestaciones que se extendieron por toda la región, y en las que los manifestantes bloquearon carreteras, quemaron neumáticos y corearon consignas contra el primer ministro Abiy Ahmed y el gobernante Partido de la Prosperidad y su rama regional. El 9 de abril, Abiy prometió seguir adelante con el plan mientras el Gobierno desplegaba tropas, imponía el toque de queda y cortaba los servicios de Internet en partes de Amhara. Decenas de personas murieron en los disturbios, que empezaron a remitir a mediados de abril.

Sin embargo, el 27 de abril, hombres armados no identificados asesinaron a Girma Yeshitila, jefe de la rama amhara del Partido de la Prosperidad, junto con su escolta en la zona norte de Shewa. El Gobierno Federal lanzó duras operaciones represivas durante las cuales las fuerzas de seguridad federales fueron acusadas de cometer graves abusos que provocaron un aumento paulatino de la violencia y el inicio de una rebelión al sumarse otros movimientos nacionalistas amhara contra el gobierno regional y el Gobierno Federal. Este conflicto de baja intensidad escaló en agosto, con la toma de control de varias localidades por parte de Fano y la represión por parte de las fuerzas federales y regionales. A principios de agosto el Gobierno Federal bloqueó el acceso a internet en la región y declaró el estado de emergencia por un período de seis meses.[45] En las siguientes semanas se desató una ofensiva gubernamental para recuperar el control de las localidades ocupadas, expulsando a las milicias Fano de las ciudades, y una ola de cientos de detenciones de sospechosos acusados de vínculos con los militantes, incluyendo políticos, entre ellos el opositor crítico con el Gobierno, Christian Tadelle. Los enfrentamientos y el número de víctimas mortales se agravaron en septiembre, así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por ambas partes. En la última parte del año los cuerpos de seguridad federales incrementaron el lanzamiento de operaciones áreas con aviones de combate y drones contra las bases de Fano, causando numerosas víctimas civiles como consecuencia de los bombardeos. Grandes zonas de Amhara se encontraban esencialmente en la práctica con un vacío de poder institucional, dado el rechazo popular a los cuadros del partido gobernante alineados con Abiy Ahmed

44. Reuters, "Amhara Gunfire Over Military Merger", *VOA Africa*, 10 de abril de 2023.
45. The Guardian, "Ethiopia declares a state of emergency in Amhara amid increasing violence", *The Guardian*, 4 de agosto de 2023.

que dirigen la región, según destacó ACLED en agosto. Según datos de ACLED,[46] durante el 2023 se registraron 566 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Amhara que costaron la vida a 1.718 personas. Esta cifra combina violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil.

En paralelo, la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, con mandato de la ONU, publicó un informe en septiembre en el que se denunciaban las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas en los diferentes conflictos en Etiopía. El informe también cubrió cómo las violaciones y abusos de derechos en curso se habían vuelto cada vez más generalizados en el país, particularmente en las regiones de Oromiya y Amhara, y señaló que las hostilidades en Etiopía habían aumentado a una "escala nacional". Desde su visita inicial en 2022, a la Comisión no se le ha concedido acceso a Etiopía. A raíz de este informe y de la negativa de acceso a la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió suspender su mandato en octubre, lo que significa que ya no existe ningún mecanismo independiente que investigue las atrocidades en Etiopía.

Etiopía (Oromiya)	
Inicio:	2022
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
Etiopía es escenario de movimientos secesionistas desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surgió entre 1973 y 1974 en la región de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participaron junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, en 1992 el OLF se desmarcó del Gobierno de coalición del EPRDF e inició una rebelión contra este y contra otros movimientos nacionalistas oromos exigiendo la independencia de la región. En paralelo, Oromiya ha vivido un ciclo de protestas –iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo– que fueron fuertemente reprimidas y que causaron miles de víctimas mortales. La movilización contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018 y la designación de Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, quien emprendió una serie de reformas políticas encaminadas a la unidad y la reconciliación nacional, alcanzando un acuerdo de paz con el OLF y otros grupos político-militares lo que facilitó su retorno del exilio. Además, el nacionalismo oromo asumió que la llegada al poder de Abiy Ahmed, de su misma comunidad, significaría un impulso a la autonomía de la región; no obstante, Abiy se ha decantado por un Estado más centralizado en lugar de promover el federalismo étnico. Además, aunque el OLF se convirtió en partido político, su ala militar, el Oromo Liberation Army (OLA), rechazó el acuerdo e inició una nueva rebelión, lo que llevó al Gobierno a designarle en mayo de 2021 como grupo terrorista. Desde entonces la violencia ha ido en aumento. También cabe destacar los recurrentes enfrentamientos entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo en las zonas fronterizas entre Oromiya y Somalí por la competencia de recursos y la demarcación de los territorios de ambas comunidades, donde la emergencia climática y la intervención represiva del cuerpo policial gubernamental Liyu contribuye a exacerbar la situación.

La situación en la región etíope de Oromiya siguió siendo de extrema gravedad durante el año 2023, constatándose una persistencia de los enfrentamientos y ataques por parte el grupo armado Ejército de Liberación Oromo (OLA) y de acciones de contrainsurgencia de los cuerpos de seguridad federales. En 2023 ya no contaron con el apoyo de las milicias amhara Fano, enfrentadas al Gobierno Federal y replegadas en su mayoría a la región de Amhara, aunque algunas permanecieron en Oromiya o regresaron para perpetrar ataques. Todos los actores armados cometieron graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil. El grupo armado oromo OLA también ha sido acusado de atrocidades generalizadas contra los amharas en la región de Oromiya, en venganza por los actos de represión y violencia cometidos por parte de las milicias amhara Fano, aunque el OLA ha negado que esté persiguiendo a la comunidad amhara en la región. La escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y el OLA se intensificó en octubre de 2022, coincidiendo con las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz en noviembre de 2022 entre el Gobierno Federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré. Tras la firma del acuerdo y el inicio de su implementación, las autoridades federales escalaron las acciones bélicas contra el OLA. Las presiones del Gobierno local de la región de Oromiya, así como el interés del OLA y de las autoridades federales en alcanzar algún tipo de tregua condujeron a varios contactos exploratorios indirectos en febrero de 2023 entre ambas partes, manifestando su interés en explorar un cese de hostilidades. En medio del clima de violencia, en marzo el primer ministro Abiy Ahmed manifestó su compromiso en explorar un proceso de diálogo con el OLA y el 25 de abril se iniciaron conversaciones de paz en Zanzíbar (Tanzania) con la facilitación de Kenya –el OLA había exigido la mediación de una tercera parte– en nombre de la autoridad regional IGAD y de Noruega. Aunque

46. ACLED, Dashboard [consultado el 31 de enero de 2024].

esta primera ronda culminó sin avances a principios de mayo, ambas partes manifestaron su compromiso en buscar una solución al conflicto. Desde entonces persistió la violencia con graves consecuencias para la población civil. No obstante, en noviembre se hizo pública una segunda ronda negociadora iniciada a finales de octubre en Tanzania, bajo la mediación de la IGAD.[47] Las hostilidades se reanudaron tras el colapso de las negociaciones en noviembre, incrementando las acciones armadas con ataques aéreos con drones, así como el aumento de las tensiones entre actores armados amharas –milicias que no se replegaron a la región de Amhara, milicias locales de la comunidad amhara en la región de Oromiya y milicias amhara que lanzan sus ataques a Oromiya desde la región de Amhara– y oromos y las poblaciones civiles respectivas, lo que provocó un incremento de ataques contra la población civil. Estos ataques podrían ser calificados como de limpieza étnica por parte de las milicias Fano y por parte del OLA en territorios como en la zona de North Shewa, en la región de Oromiya, habitada por un importante número de miembros de la comunidad amhara. En este sentido, grupos de milicias Fano penetraron en la región de Oromiya, en especial en las zonas de West Shewa y North Shewa, con el objetivo de atacar a la población civil oromo.

Según datos de ACLED,[48] durante el 2023 se registraron 572 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Oromiya, que costaron la vida a 1.642 personas, cifras inferiores a las del año 2022, en el que se cometieron 707 eventos en los que murieron 4.533 personas.[49]

En paralelo, la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, con mandato de la ONU, publicó un informe en septiembre en el que se denunciaban las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas en los diferentes conflictos en el país. El informe también cubrió cómo las violaciones y abusos de derechos en curso se habían vuelto cada vez más generalizados en el país, particularmente en las regiones de Oromiya y Amhara, y señaló que las hostilidades en Etiopía habían aumentado a una "escala nacional". Desde su visita inicial en 2022, a la Comisión no se le había concedido acceso a Etiopía. A raíz de este informe y de la negativa de acceso a la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió suspender el mandato de la Comisión en octubre, lo que significa que ya no existe ningún mecanismo independiente que investigue las atrocidades en Etiopía.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Turquía, ATMIS, EUNAVFOR Somalia (Operación Atalanta), Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia continuó incrementando su intensidad respecto a años anteriores. El año se vio marcado por el aumento de las operaciones de la misión africana en el país (ATMIS)[50] y **del Ejército Nacional Somalí y sus aliados locales e internacionales así como por los ataques por parte del grupo armado al-Shabaab**. Somalia ha incrementado en los últimos años la ofensiva contra al-Shabaab con el apoyo de los clanes, las milicias locales y los aliados regionales

47. Africanews, "Second round of talks between Ethiopian government and Oromo rebels", *Africanews*, 9 de noviembre de 2023.
48. ACLED, Dashboard [consultado el 31 de enero de 2024].
49. Estas cifras deben tomarse con cautela ya que combinan violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil. En esta cifra también se incluyen actos de violencia contra la minoría de la comunidad amhara presente en la región de Oromiya perpetrados por elementos del gobierno regional de Oromiya y del OLA, así como enfrentamientos entre milicias de carácter comunitario de las comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo que cada año se cobran cientos de víctimas mortales, por lo que existen dificultades relevantes de cara a precisar el número real de víctimas mortales vinculadas a este conflicto armado.
50. La misión de la UA en el país, AMISOM, fue transformada en la Misión de Transición de la UA en Somalia, ATMIS, en abril de 2022.

e internacionales, como parte de las promesas del presidente Hassan Sheikh Mohammud de situar la guerra contra al-Shabaab en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país desde que alcanzó el poder en mayo de 2022.[51] A pesar de estos intentos por frenar a al-Shabaab, el grupo mantuvo intacta su capacidad de perpetrar atentados complejos y asimétricos en Somalia, tal y como señaló el Grupo de Expertos de la ONU en octubre. No obstante, este panel internacional observó signos "alentadores" que indican que la ofensiva había mermado la capacidad de al-Shabaab para gobernar e influir en el territorio recién liberado. Con todo, el Gobierno tendrá la doble presión de coordinar la siguiente fase de la ofensiva al tiempo que gestiona varias operaciones de "contención" en las regiones centrales de Hirshabeelle y Galmudug, según destacó el Grupo.[52] La facción del Estado Islámico (ISIS) en Somalia siguió funcionando y perpetrando atentados, pero las operaciones del grupo estaban limitadas en gran medida a la región de Bari, en el noreste de Puntlandia. Un revés para el grupo en enero de 2023 fue la muerte de Bilal al-Sudani, responsable de la recaudación de fondos de Al-Karrar (ISIS) en Somalia. En paralelo, persistió el conflicto armado entre ISIS y al-Shabaab. Por otra parte, dados los avances relativos en la ofensiva contra los grupos armados, la UA decidió aceptar la solicitud del Gobierno Federal en octubre y esta a su vez la trasladó al Consejo de Seguridad de la ONU, que aceptó en noviembre prorrogar por tres meses la fase 2 de la ATMIS. Con esta decisión se acordó retrasar la reducción de 3.000 efectivos hasta el 31 de diciembre de 2023, después de que se cumpliera la fase 1 con la retirada de 2.000 efectivos en junio de 2023 y que redujo el componente militar y policial de la ATMIS a 17.626 efectivos (incluidos 1.040 policías). El objetivo siguió siendo culminar la transición y retirada total de la ATMIS en diciembre de 2024.

La ofensiva del Gobierno federal de Somalia con apoyo local, regional e internacional no mermó las capacidades de al-Shabaab para contraatacar, aumentar el ritmo de sus acciones bélicas y efectuar atentados complejos

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)[53] señaló que durante el año 2023 aumentaron las muertes relacionadas con el conflicto en Somalia con un incremento del 22% en las muertes en 2023, alcanzando un récord de 7.643 víctimas mortales. Prácticamente toda esta violencia se atribuye a incidentes que involucraron a al-Shabaab. Esta cifra triplica las muertes desde 2020, según los cálculos de ACSS. La mayoría de los acontecimientos violentos (65%) y las muertes (77%) estuvieron relacionados con batallas, lo que refleja la continua ofensiva dirigida por el Gobierno contra al-Shabaab. Cabe destacar que en Kenya se duplicaron el número de muertes respecto al año anterior y se llegó a las 279 muertes como resultado de la violencia con al-Shabaab en 2023, principalmente en territorio de Kenya a lo largo de la frontera con Somalia, aunque el 96% de las muertes vinculadas a la guerra tienen lugar en Somalia. **Según ACLED, la cifra de letalidad ascendió a 7.912 víctimas mortales en Somalia en 2023 y se contabilizaron 2.536 eventos violentos**,[54] siguiendo la tendencia ascendente de 2022 (con 6.418 muertos), 2021 (3.286) y 2020 (3.236). El conflicto, combinado con la peor sequía en décadas en 2023 y seguida de las inundaciones más graves en generaciones (en un intervalo de pocos meses de diferencia), ha provocado que 4,3 millones de personas (21% de la población) enfrenten niveles de crisis y superiores de inseguridad alimentaria (Fase 3+ de la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria o CIF, según la FAO).[55] OCHA alertó que 2 de cada 5 menores de 5 años sufren malnutrición aguda, 3,8 millones de personas permanecían desplazadas (de las cuales el 80% eran mujeres y menores) y un brote de cólera estalló en diversos distritos del país. Además, cabe destacar que el país continuó sufriendo una situación devastadora en términos de violencia de género, tal y como destacó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en febrero. Las tasas de violencia sexual registraron un aumento alarmante desde 2020. Se duplicaron en 2022 en comparación con 2019, y siguieron aumentando. A esta situación se unieron las consecuencias del cambio climático con la peor sequía en muchas décadas, que tuvo un impacto devastador en todos los somalíes, y las mujeres y las niñas sufrieron las consecuencias de manera desproporcionada. La impunidad seguía siendo generalizada, y los grupos armados, en especial al-Shabaab, continuaron secuestrando a mujeres y niñas, obligando a las familias a darles a sus hijas para que se casen con los combatientes y ocupando hospitales y salas de maternidad, así como silenciando y amenazando a las voces locales que denuncian esta situación. Somalia continuó siendo uno de los peores países del mundo para el periodismo, según el Sindicato Somalí de Periodistas,[56] ya que este colectivo afrontó

51. ACLED, *Somalia: Conflict Expands to Galmudug State*, 24 de marzo de 2023.
52. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia*, S/2023/724, 2 de octubre de 2023.
53. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.
54. Esta cifra tiene en cuenta los eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en el conjunto de Somalia, excluyendo las cinco regiones que conforman Somalilandia (Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sool, Sanaag). Esta cifra se incrementaría a 2.662 eventos violentos y 8.341 víctimas mortales para 2023 para el conjunto de Somalia. ACLED, Dashboard [consultado el 31 de enero de 2024].
55. OCHA, Somalia, Dashboard [consultado el 31 de enero de 2024].
56. Somali Journalists Syndicate, *SJS Annual Report 2022: State of Press Freedom in Somalia*, 31 de enero de 2023.

amenazas tanto del Gobierno como de al-Shabaab y de algunas milicias de clanes, situación que no había mejorado con el cambio de Gobierno en 2022. El país siguió siendo considerado el más peligroso para el periodismo de África por noveno año consecutivo, según el Índice de Impunidad Global del CPJ y el segundo a nivel mundial tras Siria,[57] aunque la gravedad de la escalada de la violencia en Gaza a partir del 7 de octubre les relegó a la segunda y tercera posición.

El Grupo de Expertos de la ONU confirmó que la capacidad de al-Shabaab para aprovecharse de la discontinuidad geográfica en las posiciones del Ejército Nacional Somalí, asimilarse a las comunidades locales durante los repliegues tácticos y efectuar contraataques contra las milicias progubernamentales y las bases de operaciones de avanzada. Estas capacidades indicaban que al-Shabaab seguía siendo resiliente, adaptable y letal. A pesar de haber sido expulsado de amplias zonas del centro de Somalia, de que murieran diversos mandos intermedios y superiores durante el año, y de que al menos dos comandantes de al-Shabaab se entregaran, el grupo tuvo la capacidad de reemplazar a los dirigentes fallecidos por otros ya entrenados, logró aumentar su ritmo de operaciones y efectuar atentados complejos, como el atentado a gran escala perpetrado en mayo de 2023 –la acción más grave del último año– contra la base de operaciones de avanzada de ATMIS de Uganda en Buulo Mareer (región de Lower Shabelle, en el estado del Suroeste), en la que murieron 137 soldados según al-Shabaab, y alrededor de 100, según fuentes militares ugandesas. Según el panel de expertos, al-Shabaab siguió utilizando atentados suicidas (11) y coches bomba (29)[58] como principales armas contra las fuerzas de seguridad y la infraestructura del Estado, así como ataques con artefactos explosivos improvisados (IED), cada vez más sofisticados. Por otra parte, la ofensiva contra al-Shabaab dentro de Somalia y a lo largo de su frontera carecía de cooperación eficaz en los planos nacional e internacional. La ofensiva gubernamental debilitó inicialmente al grupo. No obstante, el Gobierno afrontó problemas debido a los retrasos en la movilización de tropas de los Estados situados en la primera línea de ATMIS (Djibouti, Etiopía, Kenya, en el marco de la Operación León Negro, acordada a principios de año y reafirmada en agosto), y dada la reducción de la misión ATMIS, es probable que surjan nuevos problemas.

El conflicto en Somalia se vio combinado con la peor sequía en décadas en 2023, seguida de las inundaciones más graves en generaciones, según OCHA

En términos políticos, diversos análisis señalaron los problemas de gobernabilidad y cooperación entre el Gobierno Federal y los estados miembros federados, donde las dificultades para garantizar la seguridad y los servicios públicos se unen a la voluntad de los estados miembros de prolongar su mandato. En ese contexto diversos actores instrumentalizaban las debilidades de la gobernanza en favor de sus propios intereses, proliferando los casos de corrupción, como por ejemplo con la malversación de los ingresos públicos de la pesca por intermediarios. **Cabe añadir que el anuncio el 1 de enero de 2024 de la firma de un memorando de entendimiento[59] entre Etiopía y Somalilandia desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas y Somalia,** que adquirió dimensiones regionales, por la política de alianzas regionales de Etiopía y Somalia**.** Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval y servicio marítimo comercial en el Golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente. Addis Abeba matizó que todavía debía evaluar esa petición.[60] Etiopía históricamente ha buscado diversificar su acceso al mar, ya que el 95% de su comercio se realiza a través de Djibouti, y en los últimos meses el primer ministro etíope Abiy Ahmed había señalado que esta cuestión tenía un carácter existencial para Etiopía, lo que había provocado reacciones por parte de Eritrea, país con el que se deterioraron las relaciones.

El acuerdo entre Etiopía y de Somalilandia desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas y Somalia que podría afectar a la presencia de Etiopía en la misión de la UA, ATMIS, y a su vez en la ofensiva contra al-Shabaab

Somalia declaró nulo el acuerdo e incluso amenazó a Etiopía con iniciar una guerra si fuera necesario para preservar su soberanía nacional, ya que Somalia continúa considerando a Somalilandia como parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional. Según diversos análisis,[61] aunque es improbable una confrontación entre ambos

57. Somalia ha ocupado la primera posición mundial en los últimos ocho años, y esta caída al segundo puesto no indica una mejora en el historial de impunidad del país, sino que surge del método utilizado para calcular las clasificaciones. Véase CPJ, *Global Impunity Index 2023*, 31 de octubre de 2023.
58. Cifras relativas al periodo que cubre el informe del Grupo de Expertos, entre 16 de diciembre de 2022 y 15 de agosto de 2023.
59. Faisal Ali, "Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports", *The Guardian*, 1 de enero de 2024.
60. El acuerdo gira en torno al puerto de Berbera, que recientemente fue ampliado por la compañía de logística portuaria DP World, con base en EAU. Para más información, véase el resumen sobre Somalia-Somalilandia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios,* Barcelona: Icaria, 2024.
61. Alemayehu Weldemariam, "Ethiopia's deal with Somaliland upends regional dynamics, risking strife across the Horn of Africa", The Conversation, 13 de enero de 2024.

países, este acuerdo puede dañar gravemente las relaciones entre ambos y tener consecuencias en la guerra contra al-Shabaab, ya que un clima de rechazo hacia Etiopía en Somalia podría derivar en presiones hacia la presencia etíope en Somalia que acabasen con la retirada de Etiopía de la misión de la UA, ATMIS, ya que es uno de sus principales contribuyentes de tropas.[62]En este sentido, cabe destacar que en noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de ATMIS hasta el 30 de junio de 2024.

Somalia (Somalilandia – SSC-Khatumo)	
Inicio:	2023
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Interno
Actores:	República de Somalilandia, administración SSC-Khatumo (estado de Khatumo), estado de Puntlandia, al-Shabaab
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia (región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa) y las milicias de las regiones de Sool, Sannag y Cayn, que forman parte de Somalilandia y que se han autodenominado estado SSC-Khatumo. A su vez, Somalilandia y Puntlandia han mantenido una disputa histórica desde 1998 –año en el que Puntlandia se constituyó como república autónoma– por el control de estas regiones fronterizas entre ambos estados que ha derivado en la actualidad en un conflicto armado entre las milicias de estas regiones y Somalilandia. Estas tres regiones –Sool, Sannag, Cayn– se encuentran geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de esta zona formada por Sool, Sannag y Cayn, denominada SSC (por sus iniciales) se encuentran asociados a los de Puntlandia, por lo que SSC es una aliado de Puntlandia. Desde los años noventa se han producido choques esporádicos e intentos de mediación entre Puntlandia y Somalilandia y entre Somalilandia y las milicias de SSC. En 2012 se creó el estado de Khatumo incluyendo parte de las regiones de Sool, Sanaag y Cayn, autodenominado SSC-Khatumo, lo que añadió más complejidad a la situación. SSC-Khatumo se encuentra dentro de Somalilandia, que pretende ser independiente, a lo que se oponen estas regiones, que progresivamente han manifestado su voluntad de convertirse en un nuevo estado de Somalia. En 2016 la administración de SSC-Khatumo y Somalilandia iniciaron conversaciones de paz. Sin embargo, las tensiones y enfrentamientos esporádicos continuaron de forma intermitente entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia y las milicias de SSC-Khatumo, hasta que en 2023 se produjo una escalada de la situación, con centenares de víctimas mortales.

A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia y las milicias locales, principalmente del clan Dhulbahante, lo que llevó a considerarlo un nuevo conflicto armado en 2023. El epicentro de la violencia tuvo lugar en la localidad de Las Anod, capital de la disputada región de Sool, y siguió activo durante todo el año. El desencadenante se sitúa a finales de diciembre de 2022, cuando estallaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Las Anod, con al menos 20 civiles muertos. Los manifestantes se quejaron de la falta de seguridad en la ciudad, que se había visto acosada por asesinatos regulares en los últimos años, incluido el asesinato el 26 de diciembre del líder local y miembro del opositor Partido Waddani, Abdifatah Abdullahi Abdi (alias Hadrawi). El uso de artillería pesada y el reclutamiento de nuevos combatientes por las fuerzas de seguridad de Somalilandia y por las milicias de SSC-Khatumo aumentó el riesgo de aumentar las confrontaciones entre las familias de clanes y ampliar el conflicto más allá de la región de Sool. Algunos líderes políticos de Somalilandia dimitieron para evidenciar su rechazo a la aproximación militarista del presidente de Somalilandia al contencioso. **Según ACLED, en 2023 se produjeron 367 víctimas mortales en un total de 91 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados).[63]**

Existen relatos contradictorios acerca de los orígenes y motivos del conflicto. Somalilandia señaló a diversos agentes y grupos armados en el conflicto de Las Anod, entre ellos Puntlandia, al-Shabaab y otras entidades contrarias a la paz. En las conversaciones del Grupo de Expertos de la ONU[64] con funcionarios de Somalilandia, estos señalaron que al-Shabaab estaba aprovechando el conflicto para ampliar su influencia hacia el norte de Somalia y estaba intentando construir un puente entre las montañas Galgala (Puntlandia) y Jijiga (Etiopía) que pasara por Las Anod y Buuhoodle, que daría al grupo nuevas vías desde donde perpetrar atentados externos en Djibouti y Etiopía y le ampliaría el acceso al Golfo de Adén. Somalilandia se considera un baluarte contra la expansión regional de al-Shabaab. Si bien el panel de expertos sí recibió información de Somalilandia sobre la posible implicación de al-Shabaab en el asesinato del activista y político perpetrado en diciembre de 2022, que fue el desencadenante del conflicto actual, aún no ha observado ninguna evidencia creíble de la supuesta expansión de al-Shabaab en el norte. En general, Somalilandia sostuvo que solo había actuado en defensa propia y se había abstenido de iniciar acciones ofensivas contra las milicias de los clanes dentro de

62. Véase el resumen sobre Somalia-Somalilandia en el capítulo 2, (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios,* Barcelona: Icaria, 2024.
63. ACLED, Dashboard [consultado el 31 de enero de 2024].
64. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia*, S/2023/724, 2 de octubre de 2023.

Las Anod, al tiempo que reiteraba su compromiso de buscar una solución pacífica y respaldaba las gestiones internacionales y regionales futuras para poner fin a los enfrentamientos. Por su parte, el 9 de febrero de 2023, al-Shabaab, a través de su fundación mediática Al-Kata'ib, difundió un comunicado en el que negaba toda implicación en el conflicto de Las Anod causada por el Gobierno de Somalilandia.

Del otro lado del conflicto se encuentra el clan Dhulbahante, cuyos ancianos regresaron a Las Anod en enero de 2023. Un mes después hicieron pública una declaración en la que rechazaban la reivindicación de independencia de Somalilandia[65] y anunciaban su intención de formar parte de Somalia. El 6 de julio, los ancianos de Dhulbahante nombraron un comité de 45 miembros creando el órgano ejecutivo del Estado de SSC-Khatumo (nueva administración autoproclamada por la comunidad del clan Dhulbahante), que eligió presidente a Abdiqadir Ahmed "Firdhiye", el 5 de agosto de 2023. El presidente de Somalilandia, Muse Bihi señaló en octubre que Somalilandia no aceptaría una administración separada en Sool, en referencia a SSC-Khatumo. Mientras tanto, el líder del estado SSC-Khatumo visitó del 6 al 22 de octubre la capital somalí, Mogadiscio, y reiteró su deseo de formar un nuevo estado miembro somalí durante las conversaciones con el primer ministro somalí Hamza Abdi Barre y el presidente Mohamud. Medios locales informaron el 19 de octubre que Mogadiscio había reconocido al SSC-Khatumo como administración interina. En línea con esta decisión, y para manifestar su autonomía respecto de Puntlandia, el 23 de diciembre el SSC-Khatumo rechazó la participación en las elecciones de Puntlandia en enero de 2024 e insistió en ser un estado autónomo de Somalia.

Los combates en julio afectaron al hospital de Las Anod, hiriendo a trabajadores humanitarios y personal médico, lo que provocó la retirada de la ONG MSF del hospital. Los combates, con uso de artillería pesada y fuego de mortero, se intensificaron el 25 de agosto, lo que provocó la retirada de las fuerzas de Somalilandia y la toma del control de más territorio por parte de la milicia del clan Dhulbahante. Tras los primeros enfrentamientos se iniciaron algunas iniciativas de mediación regional e internacional que fracasaron, incluso por parte de la vecina Etiopía, según destacó el Grupo de Expertos de la ONU.[66] A principios de abril, el presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud nombró a Abdikarim Hussein Guled enviado del Gobierno Federal para los asuntos de Somalilandia. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió que las fuerzas de seguridad de Somalilandia se retiraran de inmediato de Las Anod, y exhortó a las partes a que actuaran con moderación y se abstuvieran de llevar a cabo acciones provocadoras e incitar a la violencia. Somalilandia respondió que lamentaba que el Consejo no reconociera la presencia de al-Shabaab en el conflicto y todas las implicaciones que tenía su presencia para la paz y la seguridad en la región. El presidente de Puntlandia, Said Abdullahi Deni, también respondió, con la promesa de que su Gobierno apoyaría abiertamente a la población del estado de Khatumo si el Gobierno de Somalilandia hacía caso omiso de los llamamientos del Consejo de retirarse y restablecer la paz. Una delegación de ancianos de los clanes que había viajado a Las Anod y Hargeysa en mayo, con el apoyo del Gobierno Federal, para debatir un alto el fuego, regresó a Mogadiscio el 15 de julio para celebrar nuevas consultas. El 27 de agosto, ONU, UA, IGAD, y UE, entre otros, condenaron la escalada del conflicto en Las Anod y sus alrededores, y pidieron un alto el fuego inmediato, el fin de la movilización y que todos los implicados respetaran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, la ONU prosiguió sus compromisos para fomentar el diálogo y el cese de las hostilidades. A finales de año se redujeron los combates entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia y las milicias del clan Dhulbahante.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Pierre Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe

65. Véase el resumen sobre Somalia en este capítulo, y el resumen sobre Somalia-Somalilandia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África), en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios,* Barcelona: Icaria, 2024.
66. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia*, S/2023/724, 2 de octubre de 2023.

de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Évariste Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

Durante el año persistieron las acciones de los cuerpos de seguridad burundeses en la provincia congolesa fronteriza de Kivu Sur en persecución de la insurgencia burundesa, así como en la provincia congolesa de Kivu Norte en el marco de la misión regional de la EAC que debía frenar las actividades del grupo armado M23.[67] Además, continuaron las acciones insurgentes esporádicas en la frontera entre Burundi y Rwanda y en la última parte del año se incrementaron las actividades rebeldes en el interior del país. En este sentido, persistieron las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas burundesas y de las milicias juveniles Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) en la provincia congolesa de Kivu Sur en persecución de la insurgencia burundesa, en especial de RED-Tabara, de origen tutsi, que dispone sus bases en el país vecino. En agosto de 2022 Burundi había revelado la existencia de un acuerdo bilateral entre RDC y Burundi que permitía la presencia militar burundesa en territorio congolés, aunque ya desde finales de 2021 se había denunciado la presencia de cuerpos de seguridad burundeses en RDC en persecución de la insurgencia burundesa.[68] En paralelo, el grupo RED-Tabara, con base en RDC, llevó a cabo nuevas acciones insurgentes en territorio burundés, las primeras desde 2021. Desde septiembre el grupo armado lanzó diversos ataques, entre ellos al aeropuerto de Bujumbura; en diciembre se enfrentó con el Ejército burundés en la provincia de Bubanza, matando a tres soldados, y el 22 de diciembre lanzó un ataque en la ciudad de Vugizo, cerca de la frontera con RDC, donde murieron 20 personas, y Gobierno e insurgencia se acusaron mutuamente de los hechos. El Gobierno señaló que la ofensiva dejó 19 civiles y un policía muertos (entre ellos 12 menores), además de nueve heridos. RED-Tabara reivindicó la muerte de nueve militares y un policía, diciendo que el ataque tuvo como objetivo el puesto fronterizo de Vugizo, y que los civiles murieron en medio del fuego cruzado con los cuerpos de seguridad congoleses. Estos actos de violencia también provocaron nuevas tensiones con Rwanda después de meses de mejora de las relaciones entre ambos países. En el territorio burundés fronterizo con Rwanda se produjeron acciones rebeldes del grupo armado burundés FNL –también activo contra Rwanda– que contribuyeron a este incremento de la tensión. Además, los cuerpos de seguridad burundeses llevaron a cabo acciones contra la población civil de la comunidad tutsi en la provincia de Cibitoke, en persecución del grupo RED-Tabara en su feudo, en la zona del bosque de Kibira, en el noroeste del país (fronterizo con Rwanda). El presidente burundés, Évariste Ndayishimiye, acusó en diciembre a Rwanda de financiar y entrenar al grupo RED-Tabara –de origen tutsi y pro rwandés. Kigali negó, y decidió nuevamente cerrar sus fronteras con el país vecino. El centro de investigación ACLED dio un balance de 151 víctimas mortales durante el año 2023, cifra inferior a la de años precedentes (245 en 2022 y 285 en 2021).[69] Estos datos muestran una ligera mejora en comparación con los años anteriores, aunque no tienen en cuenta las acciones insurgentes y contrainsurgentes en territorio congolés. Al finalizar 2023 había 259.129 personas burundesas refugiadas, sobre todo en RDC, Rwanda, Tanzania y Uganda, según ACNUR, cifra similar a la del año anterior, con 259.279 refugiados.[70]

En paralelo, durante todo el año continuó el clima de violencia política con actos de represión, detenciones, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de miembros de la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure. En octubre fue arrestado el líder opositor Kefa Nibizi, y durante todo el año se produjeron actos de violencia y represión contra miembros del partido CNL, liderado por Agathon Rwasa. En abril se produjo la detención del ex primer ministro Guillaume Bunyoni acusado de intento de golpe de Estado en 2022 y durante el año se llevó a cabo su juicio, que culminó en diciembre con una sentencia de cadena perpetua por parte del Tribunal Supremo. Organizaciones de derechos humanos habían solicitado, en vano, que la investigación incluyera las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad durante su Gobierno, entre 2015 y 2020. En octubre la Comisión de Derechos humanos de la ONU extendió el mandato del relator especial para Burundi por otro año, citando la persistencia de las graves vulneraciones de los derechos humanos en el país, y en su informe anual el relator remarcó la progresiva restricción del espacio público y la creciente presión hacia los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2025. Además, sectores del partido en el poder, el CNDD-FDD, manifestaron su voluntad de eliminar las cuotas étnicas en el sector público tal y como establece la Constitución de 2018 y el Acuerdo de Arusha de 2000, lo que legitimaría la completa exclusión de la minoría tutsi, ya que en la actualidad la comunidad hutu ocupa la mayoría de cargos en el sector público.

67. Véase la síntesis de RDC (este) en este capítulo.
68. Véase el resumen sobre Burundi en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2023.
69. ACLED, Dashboard [consultado el 10 de enero de 2024].
70. ACNUR, Operational Data Portal, Burundi [consultado el 31 de enero de 2024].

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), coalición armada opositora Siriri, milicia étnica AAKG, milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Grupo Wagner, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:
Desde su independencia en 1960, RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, tomó el poder en 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para coordinar esta coalición rebelde, que utilizó la violencia para controlar el país, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("antibalaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del expresidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación. Nuevas iniciativas de la UA y de la CEEAC contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019. No obstante, diversos grupos abandonaron el acuerdo a finales de 2020 e iniciaron una nueva rebelión, la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). La incapacidad del Gobierno para hacer frente a la situación le llevó a solicitar el apoyo bilateral de Rwanda y de la empresa de seguridad rusa Wagner, que complejizó la situación, por la proliferación de actores armados en el país.

Durante el año **continuaron los enfrentamientos en el país, en especial en el este, en un contexto de escasa presencia de los cuerpos de seguridad gubernamentales y de persistencia de operaciones por parte de la empresa de seguridad privada rusa Wagner** contra los principales grupos armados afiliados a la coalición rebelde conocida como Coalición de Patriotas para el Cambio (CPC). La violencia causó el desplazamiento forzado de miles de personas y denuncias de graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil por parte de todos los actores implicados en el conflicto armado. Los problemas de seguridad continuaron debido a los enfrentamientos entre grupos armados, a la escasa autoridad del Estado en las zonas alejadas de la capital y a la inseguridad transfronteriza, tal y como destacó la ONU. El organismo internacional hizo un llamamiento a promover un diálogo inclusivo de cara a las elecciones locales que se celebrarán en octubre de 2024, diálogo que fue rechazado por el Gobierno. Según el centro de investigación ACLED, en 2023 se produjeron 299 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 581 personas, cifra sensiblemente inferior a la de 2022 (837) y a la de 2021 (1.700) –coincidiendo con el intento de golpe de Estado y la ofensiva rebelde que cobró un fuerte impulso a finales de 2020 y principios de 2021.[71] Según datos de ACNUR, a finales de 2023 más de 754.147 personas se encontraban refugiadas en los países vecinos, y 511.803 estaban desplazadas en el interior del país, cifras similares a las del año 2022.[72]

Las condiciones de seguridad siguieron siendo inestables en todo el país, especialmente en el este, sobre todo en la prefectura de Haut Mbomou (sureste). El despliegue de los cuerpos de seguridad centroafricanos continuó siendo limitado y una milicia étnica de reciente creación, Azande Ani Kpi Gbe (AAKG), hostigaba a las comunidades fulanis y musulmanas con amenazas, secuestros de civiles y otros actos por su presunta connivencia con la insurgencia UPC. El 20 de junio, la milicia tuvo un enfrentamiento en Mboki con la UPC que se saldó con la muerte de 48 milicianos de AAKG, cuatro combatientes de la UPC y cinco civiles. La crisis en Sudán deterioró las condiciones de seguridad en la zona fronteriza, sobre todo en torno a Am Dafok, situación a la que se sumó la afluencia de refugiados en la zona. En el centro-este, en la prefectura de Haut-Kotto, la violencia se intensificó entre la coalición armada CPC y los cuerpos de seguridad nacionales apoyados por Wagner. En el oeste, milicias antibalaka y el grupo 3R siguieron atacando a civiles, limitando su libertad de circulación y provocando desplazamientos de población; y también se produjeron operaciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad privados. En paralelo, se incrementó durante el año el uso indiscriminado de municiones y artefactos explosivos improvisados (IED), que causaron decenas de víctimas mortales. Cabe destacar la mejora de las condiciones de seguridad en la capital, Bangui y el levantamiento del toque de queda

71. Aunque las cifras de víctimas mortales de 2023 son inferiores a las cifras que hacen referencia al año 2022, el análisis de la evolución del conflicto y sus impactos en relación con el año anterior no indican una mejora de la situación o un cambio de tendencia relevante.
72. UNHCR, Operational Data Portal - CAR Situation [consultado el 31 de enero de 2024].

nacional el 7 de julio, tras lo cual el Gobierno aumentó el número de puestos de control móviles en la ciudad para prevenir actividades delictivas. En el norte, la Coalición Siriri –un grupo político y armado compuesto por varias milicias rebeldes– siguió llevando a cabo acciones armadas desde sus bases en las prefecturas de Vakaga y Bamingui-Bangoran y a principios de año anunció su voluntad de derrocar al Gobierno de Touadéra.

RCA siguió siendo un espacio de confrontación indirecta en términos geopolíticos y de tensiones en torno a la presencia de la comunidad internacional a través de la misión de la ONU en el país (MINUSCA) y de cuerpos de seguridad de Estados y de empresas de seguridad privada. Cabe destacar que la rebelión de Wagner en Rusia[73] provocó en julio la retirada de centenares de mercenarios de las prefecturas de Vakaga, Mambere-Kadei, Ouham Pende y Bangui, que forzó a las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) a abandonar diversas bases militares.[74] Con el trasfondo de los intentos del presidente Touadéra de diversificar sus apoyos en términos de seguridad, en diciembre se hizo público que existía un acuerdo de cooperación militar entre el Gobierno y la empresa de seguridad privada norteamericana Bancroft Global Development. En este sentido, a principios de año el presidente Touadéra y el vicepresidente sudanés, Mohamed Hamdan Dagalo, alcanzaron un acuerdo para que el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) operara en la prefectura de Vakaga para combatir a los grupos armados y capturar a sus líderes, a cambio de la explotación de derechos mineros. Posteriormente, tras el estallido de los enfrentamientos armados en abril entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las RSF en Sudán, los servicios de inteligencia de Francia y EEUU revelaron que Wagner habría estado enviando material militar desde RCA a las RSF en Sudán.

La situación política estuvo dominada por el referéndum constitucional que se celebró el 30 de julio. La séptima república se instauró formalmente en RCA al promulgarse la nueva Constitución el 30 de agosto. La oposición política y diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas y varios grupos criticaron la nueva Constitución, algunas de cuyas disposiciones siguieron generando controversia, como las relativas a los requisitos para presentarse a las elecciones. Algunos grupos armados y formaciones opositoras, como la coalición armada CPC, pidieron a la población del país que boicoteara el referéndum. La coalición civil opositora Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución, algunas organizaciones de la sociedad civil y varios grupos armados no signatarios del Acuerdo Político de 2019 impugnaron los resultados. En su discurso a la nación del 31 de agosto, el presidente Touadéra reiteró su voluntad de llevar adelante el proceso de paz y la transformación política del país asentándolo en la nueva Constitución que se había promulgado la víspera, e invitó expresamente a los grupos armados a que se reincorporaran al proceso de paz. Una misión de observación de la organización regional CEEAC señaló que las condiciones del proceso de consulta habían sido satisfactorias. La nueva Constitución, más presidencialista y que incorpora cambios que podrían interpretarse como retrocesos en términos de la independencia entre los poderes del Estado, amplió de cinco a siete años los mandatos de presidente y Parlamento, eliminó la limitación de mandatos sucesivos, retiró el control parlamentario de la firma de contratos mineros –esta prerrogativa estaría en manos del presidente–, eliminó el Senado –que había sido establecido por la Constitución de 2015, pero nunca había llegado a crearse– e instauró una cámara de líderes tradicionales, entre otras cuestiones. Por último, ante la oleada de golpes de Estado en África Central y Occidental y de rumores de un inminente golpe de Estado en RCA tras el sufrido en el vecino Gabón a finales de agosto –que derrocó al presidente Ali Bongo Ondimba –, a principios de septiembre la Guardia Presidencial llevó a cabo una serie de arrestos de oficiales del Ejército, lo que evidenció crecientes divisiones en su seno, según señaló el International Crisis Group (ICG).

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	RDC, Burundi, Angola, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur), SAMIDRC (Fuerza regional de la SADC, compuesta por Sudáfrica, Malawi y Tanzania), milicias progubernamentales Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP, conocidos como Wazalendo, compuestos por decenas de antiguas milicias Mai Mai y otros grupos armados de Kivu Norte y Kivu Sur, como APCLS, PARECO-FF, Nyatura, Raia Mutomboki), FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), empresas militares privadas (Agemira RDC y Congo Protection); Movimiento 23 de Marzo (M23), Twirwaneho, Rwanda; otros grupos armados no adscritos en Wazalendo, grupos armados burundeses; grupo armado de origen ugandés LRA; grupos y milicias comunitarias de Ituri (entre otros, CODECO/URDPC, FPIC, FRPI, MAPI, Zaïre)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis: El actual conflicto tiene sus orígenes en la rebelión que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu	

73. Véase la síntesis sobre Rusia en el capítulo 2 (Tensiones).
74. ACLED, *Moving Out of the Shadows. Shifts in Wagner Group Operations Around the World*, 3 de agosto de 2023.

Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Ruanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y, posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país (principalmente en las provincias de Kivu Norte y Sur) debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la deserción de los militares del antiguo grupo armado CNDP de origen tutsi integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, el Movimiento 23 de Marzo (M23). A finales de 2013 dicha rebelión fue derrotada y parte de sus combatientes se refugiaron en Uganda y Rwanda. No obstante, en 2022 el M23 se reorganizó provocando una escalada de la violencia con al apoyo de Rwanda, lo que agravó las relaciones entre RDC y Rwanda.

Aunque durante una parte del año el conflicto en el este del país se redujo en intensidad, a partir de octubre se intensificó la ofensiva por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Esta escalada en el último trimestre del año, además de las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF)[75] y otros grupos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur contribuyeron a la persistencia de un clima general de inseguridad. La ofensiva del M23 estuvo directamente vinculada al apoyo facilitado por Rwanda y fue señalado, nuevamente, por la ONU, haciéndose progresivamente eco en el resto de la comunidad internacional. Según datos de ACLED,[76] durante el 2023 se registraron 1.735 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en las cinco provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika) que costaron la vida a 3.409 personas. En el conjunto del país la violencia vinculada a los diferentes conflictos se redujo en comparación a la cifra de 2022. ACLED contabilizó 3.907 víctimas mortales en el conjunto del país en 2023, en alrededor de 2.000 episodios de violencia, por lo que el parón estratégico del M23 tuvo su reflejo en la reducción parcial de las víctimas mortales en el conjunto del año.[77] En 2022 habían sido 6.145 las víctimas mortales consecuencia de la violencia en el conjunto del país, cifras superiores a las registradas en 2021–cuando se contabilizaron más de 2.300 episodios de violencia–, de las cuales 4.723 víctimas mortales se produjeron solo en estas cinco provincias. Según la ONU, la violencia de los grupos armados se cobró la vida de más de 1.100 civiles solo en la provincia de Ituri desde enero a octubre de 2023. Esta situación se produjo en medio de la campaña electoral, marcada por un creciente clima de violencia política que condujo a la celebración de las elecciones generales en la RDC el 20 de diciembre, en las que el presidente, Félix Tshisekedi, fue reelegido para un segundo mandato tras haber conseguido más del 73% de los votos con un 43% de la participación. Las elecciones se vieron plagadas de irregularidades y denuncias de fraude que podrían haber influido en el conjunto del proceso, según diversos análisis.[78]

Acusaciones de fraude en un clima de violencia política electoral con el trasfondo de la guerra en el este de RDC amenazaron con desestabilizar aún más el país

Durante el primer trimestre del año se produjeron diferentes iniciativas diplomáticas para promover el diálogo –los esfuerzos de Angola y Qatar[79] para alcanzar un alto el fuego fracasaron– y se inició en marzo el despliegue de la presencia militar regional, la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental (EAC) –sin mandato de uso de la fuerza, compuesta por militares de Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur. No obstante, el M23 llevó a cabo una retirada estratégica y una reducción de sus actividades conforme se fue completando el despliegue de la fuerza de la EAC, que culminó en abril. En marzo Angola también desplegó 500 militares en la provincia de Kivu Norte para asegurar las áreas controladas por el grupo rebelde M23. Entre abril y octubre se redujeron los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo M23, aunque este grupo continuó llevando a cabo ataques esporádicos contra grupos armados locales progubernamentales por el control del territorio en Kivu Norte. Como consecuencia de la violencia generalizada, aumentó la explotación ilegal de recursos naturales y colapsó el procedimiento de diligencia debida en diversos yacimientos mineros nuevamente controlados por los grupos armados, y el contrabando hacia Rwanda volvió a aumentar.

En su informe parcial de mediados de año, el Grupo de Expertos de la ONU ratificó la injerencia de Rwanda en apoyo del M23 en forma de participación directa y activamente en hostilidades contra fuerzas congolesas.[80] En diciembre la ONU alertó del riesgo de confrontación militar entre RDC y Rwanda. La UE y EEUU impusieron

75. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en este capítulo.
76. ACLED, Dashboard [consultado el 8 de enero de 2024].
77. Aunque las cifras de víctimas mortales de 2023 son inferiores a las cifras que hacen referencia al año 2022, el análisis de la evolución del conflicto en relación con el año anterior refleja un empeoramiento general de la situación vinculado a la grave escalada de la violencia en la última parte del año y sus múltiples impactos.
78. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones).
79. Asmahan Qarjouly, "Violence in DRC intensifies as Qatar takes steps to mediate", *Doha News*, 20 de marzo de 2023.
80. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe final del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 2641 (2022)*, S/2023/431, 13 de junio de 2023.

sanciones a altos cargos militares rwandeses y congoleses, así como a miembros de grupos armados. Además, EEUU restringió la cooperación militar con Rwanda. En septiembre el M23 rompió con el bajo perfil que le había caracterizado durante buena parte del año y el 18 de septiembre anunció la toma de control de la localidad de Kiwanja, que nominalmente se encontraba bajo el control de la misión de la EAC. En septiembre se extendió el mandato de la misión de la EAC por tres meses, aunque su papel sobre el terreno siguió siendo testimonial. En octubre se reanudó la ofensiva por parte del M23 contra las FARDC y la coalición de grupos armados progubernamentales Wazalendo, con acciones armadas en diferentes localidades. La reapertura de las hostilidades incrementó la retórica hostil entre Kigali y Kinshasa, por lo que el enviado especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Huang Xia, destacó el riesgo real de un conflicto directo entre Rwanda y RDC, por la movilización de tropas que habían emprendido ambos países, por la ausencia de diálogo directo a un alto nivel entre ellos, y la persistencia del discurso de odio. El presidente Tshisekedi, así como otros candidatos durante la campaña electoral congolesa, utilizaron el conflicto para movilizar a la población del este del país, prometiendo una ofensiva contra Rwanda en caso de victoria electoral.

RDC enfrentaba una de las principales crisis humanitarias y de desplazamiento a nivel mundial, según la OIM

Los combates desde octubre provocaron una catastrófica situación humanitaria y más de un millón de personas desplazadas internas (alcanzando los casi 7 millones de desplazados internos en 2023), además del millón de personas refugiadas ya existentes. Esta cifra de desplazamiento interno (ACNUR había documentado 5,76 millones de personas desplazadas internas en 2022 y 5,6 millones de personas desplazadas internas de 2021) llevó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a afirmar que RDC estaba enfrentando una de las principales crisis humanitarias y de desplazamiento a nivel mundial.

La ofensiva también se sumó al clima general de violencia de la campaña electoral. Durante este periodo se celebraron diferentes iniciativas regionales para intentar relanzar las negociaciones de paz y se incrementó la presión internacional sobre Rwanda, aunque los procesos de diálogo de Luanda y de Nairobi iniciados durante 2022 permanecieron estancados.[81] EEUU intentó promover un alto el fuego durante los comicios, y estuvo facilitando contactos entre RDC y Rwanda desde mediados de noviembre. El 11 de diciembre entró en vigor una tregua de 3 días[82] que aplicaba a actores armados estatales y no estatales en determinadas zonas y rutas del este del país y que contaba con el apoyo de RDC y Rwanda, que posteriormente se prolongó por 2 semanas. Diversas fuentes señalaron que la tregua tuvo un seguimiento desigual y que fue utilizada por el M23 para reforzar sus posiciones alrededor de Sake, con apoyo de Rwanda. La misión de la EAC, criticada por su inoperancia durante todo el año, se retiró del país a petición del Gobierno, completando su salida el 21 de diciembre.

Las tropas burundesas negaron las acusaciones de que habían estado luchando contra el grupo armado M23, respaldado por Rwanda, en RDC, en apoyo del Ejército congolés y de las insurgencias congolesas, en lugar de respetar el mandato de la misión de la EAC. El mandato de la misión, compuesta por tropas de Uganda, Kenya, Burundi y Sudán del Sur, era recuperar las posiciones que anteriormente ocupaban los rebeldes del M23 tras derrotar a los soldados de las FARDC, y establecer una zona de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre el M23 y las FARDC. El 11 de diciembre, el Ejército congolés informó que todos los soldados del contingente burundés desplegados en el este de RDC como parte de la fuerza regional habían regresado a Burundi después de que terminara el mandato de la fuerza tras la decisión del Gobierno congolés de no renovar la presencia de la misión por no combatir al M23 y por las críticas de la población civil de inacción ante las acciones del M23. El mismo día, el Ejército congolés se negó a comentar sobre las acusaciones de que se habían desplegado tropas burundesas en RDC como parte de un acuerdo bilateral entre Kinshasa y Gitega, incluidos varios relatos de soldados burundeses vistiendo uniforme del Ejército congolés y combatiendo a los rebeldes del M23 respaldados por Rwanda. Sin embargo, fuentes cercanas a las FARDC, corroboradas por múltiples fuentes, informaron de que 1.070 efectivos de las Fuerzas Armadas de Burundi, vestidos con uniformes de las FARDC, permanecían desplegados de forma encubierta desde principios de octubre de 2023 a lo largo de la carretera Sake-Kitchanga con el objetivo de asegurar el territorio de Masisi contra los ataques del M23 y Rwanda, junto con las FARDC y Wazalendo. Ese despliegue se realizó fuera del marco de la misión de la EAC. En paralelo, el Gobierno congolés y Sudáfrica estuvieron negociando desde marzo el despliegue de una fuerza de la SADC en la zona con el objetivo de colaborar en las operaciones de combate de las FARDC contra el M23. En mayo fue aprobado por la SADC el despliegue de la Misión de la SADC en RDC (SAMIDRC), que se hizo efectivo el 15 de diciembre de 2023.

Por otro lado, días antes de la celebración de los comicios se creó en Kenya una nueva coalición político-militar, Alliance Fleuve Congo,[83] liderada por el antiguo presidente de la CENI, Corneille Nangaa, en alianza

81. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios,* Barcelona: Icaria, 2024.
82. Reuters, "Exclusive: Eastern Congo ceasefire extended for two weeks, US official says", *Reuters*, 15 de diciembre de 2023.
83. Africanews, "DRC: Corneille Nangaa joins forces with M23 to create political platform", *Africanews*,15 de diciembre de 2023.

con el grupo armado M23 y otros grupos del este del país. La intención del nuevo grupo –explicitada en un comunicado lanzado por el propio Nangaa desde el feudo del M23 en Rutshuru (Kivu Norte)– era derrocar el Gobierno de Tshisekedi. Kinshasa llamó a consultas al embajador de Kenya en RDC y retiró a su embajador en Nairobi en señal de protesta, ya que Kenya formaba parte de la misión de la EAC y de los esfuerzos mediadores regionales. Por otra parte, en el marco de la retirada de la MONUSCO solicitada por RDC, cabe remarcar que a principios de 2024 se hizo efectiva la primera fase de la retirada, con la partida de 2.000 cascos azules del país. Las movilizaciones de la población acusando a la MONUSCO de inacción y pasividad ante la escalada de la violencia provocaron la intervención de los cuerpos de seguridad congoleses. En agosto una protesta anti-MONUSCO organizada por un grupo religioso en Goma fue reprimida por los cuerpos de seguridad congoleses causando 43 víctimas mortales, 56 personas heridas y 150 arrestadas. La represión de hechos de este tipo envió un mensaje a todo el país de restricción del espacio para la libertad de expresión y la disidencia en el período previo a las elecciones generales de finales de 2023, según señaló el ICG.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleses que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización de signo yihadista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también por Kabila) para presionar a Uganda, y gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolesa, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congolesas en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

Cuando se cumple el segundo año del inicio de la Operación Shuja,[84] persistieron las operaciones militares de las UPDF en su ofensiva conjunta con las Fuerzas Armadas congolesas contra las ADF, principalmente en el territorio de Beni, Kivu Norte, y en el sur de Ituri. Múltiples fuentes, entre ellas excombatientes de ADF y antiguos secuestrados por las ADF, informaron de un aumento del ritmo de las operaciones de las ADF desde finales de 2022, en particular en el territorio de Beni. Según el informe del Grupo de Expertos de la ONU de diciembre de 2023,[85] las ADF continuaron ofreciendo resistencia, a pesar de la intensificación y la expansión geográfica de la Operación Shuja, que le afectó. Las UPDF, según informaron, habían dado muerte a más de 550 combatientes de las ADF desde el comienzo de la operación y afirmaron que acabarían con el grupo en breve. Según las UPDF y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, importantes líderes de las ADF, como Mulalo y Meddie Nkalubo, habían sido asesinados. Sin embargo, el Grupo de Expertos no pudo confirmar esas muertes. Las ADF continuaron desplazándose hacia el oeste, a fin de evadir la presión militar, adaptando sus tácticas, operando en pequeños grupos móviles y realizando ataques esporádicos, sobre todo en zonas remotas y a lo largo de las carreteras (en particular la carretera nacional de Beni-Komanda-Mambasa) y en los campos agrícolas, aprovechando la ausencia de la autoridad del Estado. Los dirigentes de las ADF decidieron reducir los ataques en RDC, especialmente para granjearse las simpatías y el apoyo de la población y centrarse en los ataques en Uganda, según el panel de expertos. Ello dio lugar a intermitentes pausas en los ataques de las ADF en Ituri y, en particular, en el territorio de Beni desde julio de 2023.

Desde diciembre de 2022, combatientes de las ADF se infiltraron periódicamente en Uganda, donde llevaron a cabo al menos cinco ataques mortales, entre ellos uno contra una escuela en Mpondwe en junio de 2023, en el que murieron 37 estudiantes y otros siete civiles, el peor ataque en Uganda desde la masacre de Kasese en noviembre de 2016, que causó 100 víctimas mortales. Ello marcó un importante giro en la situación, pues durante más de una década los ataques de las ADF se habían concentrado principalmente en RDC. Esos recientes ataques en

84. La operación Shuja fue una ofensiva militar de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) en territorio congolés contra el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en represalia por las explosiones perpetradas en Kampala reivindicadas por las ADF el 16 de noviembre de 2021.
85. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

Uganda también se diferenciaban desde el punto de vista operacional de los asesinatos selectivos, ataques con artefactos explosivos improvisados o intentos de atentado perpetrados en suelo ugandés en los últimos años y atribuidos a las ADF. Los cinco ataques fueron perpetrados por combatientes de las ADF que operaban en RDC y que habían cruzado la frontera con Uganda, a diferencia de otros ataques en los que la ADF movilizó a colaboradores en Uganda para llevar a cabo matanzas o colocar artefactos explosivos improvisados en RDC. Los recientes ataques de las ADF en Uganda reflejaban un doble objetivo, vengarse de las operaciones de las UDPF y las FARDC y hacer que el centro de la atención de esas operaciones se desviara de las zonas de las ADF en RDC. Además, esos ataques habrían albergado la intención de demostrar que las ADF conservaban su capacidad para llevar a cabo ataques de gran escala y de gran repercusión en los medios y avergonzar así al Gobierno de Uganda.[86]

En paralelo, según múltiples fuentes recabadas por el Grupo de Expertos de la ONU, habrían aumentado las tensiones internas en el seno de las ADF, especialmente entre la dirección central y los comandantes de las ADF destacados en Mwalika (Kivu Norte). Las tensiones también eran reflejo de algunas líneas de división entre líderes de las ADF procedentes de Uganda, especialmente comandantes históricos, por un lado, y líderes no ugandeses, como Bonge la Chuma y algunos de los líderes más radicales de las ADF que se habían unido al grupo en época más reciente, por el otro. Por ejemplo, según fuentes internas de las ADF, el ataque de Mpondwe en Uganda había sido planeado por el comandante Abwakasi de las ADF sin que hubiese recibido ni instrucciones ni la aprobación de Musa Baluku, líder general de las ADF. En lo concerniente a las tareas de reclutamiento, en lugar de valerse de la ideología, las ADF reclutaron y motivaron a sus colaboradores principalmente en RDC por medio, sobre todo, de dinero y animándolos a cooptar a nuevos colaboradores, lo que les permitió renovar constantemente sus redes. Además, prosiguieron su campaña de reclutamiento, tanto en RDC como en el extranjero y se dedicaron a la explotación sistemática de niñas y mujeres secuestradas como esclavas sexuales, bajo la supervisión de comandantes. En su informe de junio,[87] el Grupo de Expertos señaló que recientes informaciones evidenciaron que **combatientes de las ADF habían lanzado misiones exploratorias hacia nuevas zonas con el objetivo de ampliar sus operaciones a las provincias de Kinshasa, Tshopo, Haut-Uélé y Kivu Sur**.

RDC (oeste)	
Inicio:	2023
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio Interno
Actores:	RDC, milicias de la comunidad teke, milicias de las comunidades yaka y suku (entre otros, el grupo armado Mobondo) y otras milicias de comunidades aliadas
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
El origen del conflicto en la provincia de Mai-Ndombe (oeste) se remonta a mediados de 2022 a partir de un desacuerdo sobre un impuesto tradicional (en el marco de la ley consuetudinaria) sobre los productos agrícolas establecido por los llamados "nativos"[88] de la comunidad teke (comunidad considerada como los terratenientes tradicionales) que se asentaron en la zona antes que las comunidades "no nativas", en su mayoría yaka, y también los suku, mbala y songe (originarios de las provincias de Kwango y Kwilu). Estas comunidades llegaron a trabajar como agricultores a la meseta de Bateke hace más de cinco décadas. Los agricultores sobrevenidos arrendaron la tierra a los jefes teke a cambio del pago de este impuesto consuetudinario. Hasta hace poco, las comunidades convivían con normalidad y se habían generado vínculos entre ellas. Según fuentes locales recabadas por la ONU, los primeros desacuerdos surgieron ya en 2021 y se intensificaron a principios de 2022 cuando las comunidades "no nativas" se negaron a pagar el aumento del impuesto. Los teke intentaron recuperar por la fuerza el impuesto, con el apoyo de algunos miembros locales de la Policía Nacional Congoleña (PNC) y elementos de las FARDC, y los jefes teke comenzaron a pedir a los agricultores que no querían pagar que abandonaran sus tierras. A mediados de 2022 se desencadenaron los primeros enfrentamientos intercomunitarios, que han ido en aumento durante 2023. La cuestión del pago de impuestos pronto se transformó en una cuestión de control de tierras, y los agricultores, principalmente de la comunidad yaka, comenzaron a reclamar las tierras propiedad de los teke. Otra queja de los agricultores yaka fue que los terratenientes de la comunidad teke habían estado vendiendo la tierra a inversores, aunque esa tierra ya pertenecía a los yaka.[89] Los ataques de los teke contra lo que consideraban comunidades "no nativas" provocaron violentas represalias por parte de los yaka, que empezaron a organizar el grupo de combatientes Mobondo, al que se incorporaron miembros de otras comunidades aliadas, que durante 2023 elevó su grado de organización, aumentó sus capacidades militares y ejecutó ataques armados.

El brote de violencia iniciado a mediados de 2022 en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país), que enfrentaba entre sí a miembros de las comunidades teke y yaka se intensificó en 2023, por lo que pasó a ser considerado conflicto armado, y se extendió a las provincias vecinas de Kwango, Kwilu,

86. Véase el resumen de Uganda en el capítulo 2 (Tensiones).
87. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe final del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 2641 (2022)*, S/2023/431, 13 de junio de 2023.
88. La consideración de "nativos" y "no nativos" hace referencia a la denominación del Grupo de Expertos de la ONU en sus dos últimos informes sobre la cuestión, S/2023/431, 13 de junio de 2023, y en especial, al anexo 2 del informe S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.
89. Véase el Anexo 2 del informe del Grupo de Expertos. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

Kinshasa y Kongo Central, causando centenares de víctimas mortales. La violencia amenazaba con rodear a Kinshasa, la capital, donde viven miembros de las comunidades teke y yaka, entre ellos miles de civiles desplazados por el conflicto. La aparición de Mobondo, grupo armado de combatientes predominantemente yaka, obstaculizó los esfuerzos de reconciliación. Ambas comunidades permanecían armadas y movilizadas. La violencia había comenzado el 9 de junio de 2022 en la aldea de Masia-Mbe, en el sector Bateke Sud de Mai-Ndombe, donde un agricultor yaka resultó herido durante la recaudación de impuestos en nombre del jefe tradicional teke. Los agricultores yaka comenzaron a incitar a otros a negarse a pagar impuestos. Varias fuentes informaron que miembros de la comunidad yaka y otros agricultores "no nativos" comenzaron a organizar reuniones e incitar a miembros de su comunidad a afirmar que en el pasado, Kwamouth –en la provincia de Mai-Ndombe– solía pertenecer a los yaka. Intereses económicos, como el acceso a la tierra y a los bienes, e intereses políticos, como el restablecimiento del poder consuetudinario, influían notablemente en la continuación del conflicto. El aumento de los ataques de Mobondo contra las FARDC en 2023 llevó a las autoridades militares a calificar el conflicto de "insurreccional". Los mortíferos ataques de los teke y los yaka provocaron desplazamientos masivos de población, lo que agudizó la grave crisis humanitaria. Desde el inicio del conflicto, se quemaron aldeas enteras y tanto milicias formadas por miembros de la comunidad teke como de la comunidad yaka establecieron puestos de control en busca de miembros de otras comunidades consideradas hostiles. Cientos de escuelas y centros médicos habían quedado destruidos o se habían visto obligados a cerrar. Se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos, como violencia sexual, secuestros para obtener rescate y tortura.

Cientos de civiles perecieron como consecuencia del conflicto. Según ACLED, en 2023 se produjeron 346 víctimas mortales en un total de 94 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), aunque es probable que las cifras sean mucho más elevadas, según el Grupo de Expertos de la ONU,[90] ya que seguían sin denunciarse la violencia y los actos delictivos y resultaba difícil atribuir responsabilidades debido a la falta de acceso a las zonas de conflicto. Los ataques de los teke contra lo que consideraban comunidades "no nativas" provocaron violentas represalias por parte de los yaka, que empezaron a organizar el grupo de combatientes Mobondo, al que se incorporaron miembros de otras comunidades aliadas, como los suku, mbala, ndinga, songe y ngongo. A lo largo de 2023, Mobondo elevó su grado de organización, aumentó sus capacidades militares y ejecutó ataques de tipo militar, según el Grupo de Expertos. Sin embargo, aún no está claro si Mobondo es un grupo homogéneo estructurado jerárquicamente o una coalición de grupos afines sin una comandancia central. En 2023 las operaciones de las FARDC condujeron al desarme y la detención de cientos de combatientes de Mobondo. Aunque algunos fueron encarcelados y sometidos a juicio, muchos fueron trasladados a centros de capacitación de las FARDC. Además, Fabrice Zombi "Mini Kongo", designado por el presidente de RDC como jefe negociador entre las comunidades yaka y teke, movilizó a cientos de integrantes de Mobondo para que se unieran a los campos de entrenamiento de las FARDC. "Mini Kongo" es un jefe tradicional suku, reconocido como una figura ceremonial por los yaka. Por ello, los teke lo acusaron de colaborar con Mobondo. Según pudo confimar el Grupo de Expertos, más de 1.000 combatientes de Mai-Ndombe y otros lugares, incluidos combatientes de Mobondo que se habían entregado, fueron reclutados, entrenados y desplegados a Kivu Norte, en el este de RDC, para luchar contra el M23, sin que se hubiesen investigado sus antecedentes.

Sudán[91]	
Inicio:	2023
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA, Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, Beja National Congress, Beja Armed Congress, milicias comunitarias, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
Tras treinta años en el poder, el régimen de Omar al-Bashir cayó en abril de 2019 después de masivas movilizaciones populares que fueron aprovechadas por las fuerzas de seguridad para dar un golpe de Estado. Tras meses de gobierno de la Junta Militar e importantes tensiones nacionales, a finales de 2019 se logró conformar un gobierno transicional cívico-militar. Sin embargo, el 25 de octubre de 2021 un nuevo golpe militar por parte del ala militar del

90. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.
91. En años anteriores en Sudán se identificaban dos conflictos armados diferenciados: Sudán (Darfur), iniciado en 2003, y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en 2012. Ambos conflictos, caracterizados como internos-internacionalizados y motivados por Autogobierno, Recursos e Identidad, se analizan en la presente edición conjuntamente dentro del conflicto armado Sudán. Este hecho se debe a que las dinámicas del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) afectan a una gran parte del país y, de forma particular, a las regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Además, los actores armados irregulares de estas regiones también participan activamente en las hostilidades, tomando parte activa en la contienda.

gobierno transicional acabó con la transición política. Fue seguido de un periodo de amplias movilizaciones ciudadanas contra la Junta Militar (Consejo Soberano) presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y vicepresidida por el líder del grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), teniente general Mohammed Hamdan Dagalo "Hemedti". A finales de 2022, tras un año de negociaciones, se logró un acuerdo marco en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y devolverlo a actores civiles. Sin embargo, las desavenencias entre las partes militares (SAF y RSF) en las negociaciones sobre la reforma del sector de seguridad, especialmente en lo relativo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando, acabaron por detonar, el 15 de abril de 2023, un nuevo conflicto armado en el país. Este nuevo escenario de violencia se concentró en un principio en la capital, Jartum, pero con el paso de los meses se intensificó y amplió a gran parte del país, afectando a las dinámicas de conflictividad armada preexistentes en las regiones de Darfur y las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul), y a la región este del país. En la región de Darfur, el conflicto armado se remonta al año 2003 y gira en torno a demandas de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM de mayor descentralización y desarrollo de la región. El Gobierno respondió al levantamiento armado en Darfur utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed.* Por su parte, en relación a Kordofán Sur y Nilo Azul, la reconfiguración estatal de Sudán tras la secesión del sur en julio de 2011 agravó las tensiones del Gobierno sudanés con ambas regiones fronterizas, que durante el conflicto armado sudanés (1983-2005) apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. A partir de ese momento se conformó el SPLA-Norte en las Dos Áreas, iniciándose un conflicto armado en torno a la demanda de la insurgencia de reconocimiento de la pluralidad étnica y política.

En abril se produjo el estallido de un nuevo conflicto armado en el país que enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF). Durante el primer trimestre del año se incrementaron las tensiones entre los líderes militares del país, el presidente del Consejo Soberano y jefe de las SAF, teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el vicepresidente del Consejo y líder de las RSF, teniente general Mohammed Hamdan Dagalo "Hemedti", debido a diferencias entre los actores militares en las negociaciones sobre la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo referente a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando.[92] Las tensiones aumentaron a principios de abril con el crecimiento de los rumores sobre la movilización de efectivos militares de ambas partes en Jartum y Darfur. Finalmente, y tras intentos fallidos de mediación por múltiples actores, el 15 de abril las tensiones desembocaron en enfrentamientos armados entre las SAF dirigidas por al-Burhan y las RSF comandadas por Dagalo. Si bien inicialmente los enfrentamientos se concentraron en la capital, Jartum, matando a cientos de personas en los primeros días, durante el año se fueron intensificando y extendiendo a casi todo el país, en particular en todos los estados de Darfur (Septentrional, Central, Occidental, Norte y Meridional), Kordofán del Norte y del Sur, Kassala, Gedarif, Mar Rojo o Nilo Azul.[93] En un inicio el Ejército tomó el control de varias ciudades, incluidas Kassala y Port Sudan en el este, mientras que las RSF tenían ventaja en Darfur, y los combates se intensificaron por el control de Jartum. Durante el año, el conflicto armado se caracterizó por los ataques de las SAF a ciudades con artillería pesada y bombardeos aéreos, mientras que las RSF utilizaron técnicas de guerra de guerrillas y misiles tierra-aire, al no disponer de aviación.

El inicio de los combates dio lugar a diferentes esfuerzos de mediación que no lograron contener la violencia, a pesar de que se logró la firma de diferentes altos el fuego (el 24, 27-30 de abril; 4-11, 22-31 de mayo; 20, 26-27 de junio, entre otros) y treguas humanitarias, que fueron sistemáticamente incumplidas por las partes. A medida que las negociaciones fracasaban, el conflicto entre las SAF y las RSF se fue intensificando y los combates involucraron a otros grupos armados, afectando a regiones que ya presentaban dinámicas de conflictividad armada, como los casos de Kordofán Sur, Nilo Azul o Darfur. Si bien al inicio del estallido de la violencia entre las SAF y las RSF varios grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba –entre ellos Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N)-facción Malik Agar y el Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM)– declararon su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso del tiempo fueron tomando parte en las hostilidades.

En la región de Darfur el estallido de los enfrentamientos entre las SAF y RSF sumió a la región en la peor crisis desde el fin de la guerra civil. El año ya se había iniciado con nuevos ataques contra la población civil y la proliferación de milicias armadas en Darfur, que generó que el grupo armado Ejército de Liberación de Sudán (SLA) anunciara la formación de una fuerza conjunta con las RSF para poner fin a la inseguridad, excluyendo de la misma al Ejército nacional y a otros grupos armados, incluida la coalición de grupos armados de Darfur occidental, la Alianza Sudanesa. Estos hechos generaron también el cierre de la frontera terrestre con RCA, que estuvo clausurada hasta el 9 de marzo. En mayo, ya con los combates entre las SAF y las RSF intensificados en Darfur, se agravaron las tensiones entre comunidades, especialmente entre grupos árabes rizeigat (de donde proviene la mayor parte del personal de RSF) y no árabes masalit. Este incremento de la violencia motivó que el gobernador de Darfur y líder del SLA-MM, Minni Minnawi, pidiera

92. Véase el resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios,* Barcelona: Icaria, 2024.
93. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Situación en el Sudán y actividades de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán, S/2023/355, 16 de mayo de 2023.

el 28 de mayo a los habitantes de Darfur que se armaran, aumentando el riesgo de guerra civil. El 14 de junio fue asesinado el gobernador del estado de Darfur Occidental después de que éste acusara a las RSF de genocidio. Durante los siguientes meses, las RSF se hicieron con el control de amplias regiones de Darfur Central, Meridional, Oriental y Occidental, concentrando su ofensiva sobre Darfur del Sur, que fue capturada en octubre tras la conquista de su capital, Nyala, y sobre Darfur del Norte. En noviembre, tras el avance de las RSF hacia El Fasher, capital de Darfur del Norte, diferentes grupos armados darfuríes signatarios del Acuerdo de Paz de Juba (2020), cuyos miembros provienen en gran medida de la comunidad zaghawa, renunciaron a la neutralidad y se unieron a las SAF. Este hecho podría tener importantes repercusiones sobre Chad, país donde la comunidad zaghawa domina el Gobierno y el Ejército. Además, la facción no signataria del Acuerdo de Paz de Juba representada por el SLA-AW Abdul Wahid al-Nur llegó a El Fasher el 24 de noviembre con el objetivo principal de proteger los campos de desplazados en la ciudad.

El conflicto armado iniciado el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Rapid Support Forces generó el desplazamiento forzoso de más de 7,5 millones de personas y la muerte de más 13.000 tras ocho meses de enfrentamientos

En **Kordofán Sur y Nilo Azul** el deterioro de la situación de seguridad motivó que el 8 de junio el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) se movilizara. Algunos informes acusaron al SPLM-N y las RSF de atacar posiciones de las SAF en la región de al-Dalanj. A partir de ese momento y hasta finalizar el año, en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, el grupo rebelde SPLM-N siguió ampliando su presencia en la guerra, emergiendo como la tercera fuerza en el conflicto.

En el **este del país**, en las regiones de Mar Rojo, Kassala y Gedarif, también se registraron combates a lo largo del año, motivando el surgimiento o rearme de diferentes grupos armados de corte regional, como el Eastern Sudan Liberation Forces encabezado por Ibrahim Dunya, el United Popular Front for Liberation and Justice bajo el liderazgo de El Amin Daoud, the Beja National Congress liderado por Mousa Mohamed Ahmed, o el Beja Armed Congress encabezado por Omar Taher.[94]

Por otro lado, entre otros eventos destacados durante el año, a finales de agosto, después de meses de asedio de las RSF en Jartum, el jefe del Ejército, general Abdel Fattah al-Burhan, escapó del cuartel general. Los combates se mantuvieron durante el resto del año en Jartum y la vecina ciudad de Omdurman, y se fueron intensificando también en el este y otras zonas del sur del país. Debido a la crisis de seguridad en el país, a principios de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió finalizar el mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) y el inicio del cierre de sus operaciones, que finalizará el 29 de febrero de 2024.

Finalmente, y **en relación con el impacto de la guerra, los datos sobre la intensidad y letalidad del conflicto durante el año recogidos por ACLED dan muestra de más de 13.000 muertes producidas en el país** por episodios violentos desde que estallaron los primeros combates en abril, concentrándose estas en la capital y en los estados de Darfur.[95] Por otro lado, más de 7,5 millones de personas se desplazaron forzosamente de sus hogares, de las cuales 1,3 millones eran personas refugiadas y más de 6 millones eran civiles desplazados internamente, según datos de ACNUR.[96] Asimismo, la ONU alertó de que las necesidades humanitarias en el país –que ya alcanzaban niveles récord antes de los enfrentamientos, con una tercera parte de la población en situación de necesidad de asistencia humanitaria– aumentaron drásticamente durante el año hasta llegar a los 25 millones de personas, añadiendo que la magnitud de la crisis podría desestabilizar toda la región.

Durante el conflicto también se presentaron múltiples denuncias de **violación a los derechos humanos y crímenes de guerra**. A mediados de julio en Darfur Occidental –epicentro del conflicto entre comunidades árabes rizeigat y no árabes masalit– la ONU informó que se habían descubierto cadáveres de al menos 87 personas masalit en fosas comunes. La Corte Penal Internacional informó de la apertura formal de una investigación sobre presuntos **crímenes de guerra en Darfur**. Amnistía Internacional también documentó la comisión de crímenes de guerra generalizados por ambas partes en el conflicto.[97] Estos hechos generaron que el 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptase la Resolución A/HRC/RES/54/2 en la que estableció una Misión Internacional de Investigación Independiente para Sudán, con el mandato de investigar y establecer los hechos, circunstancias y causas fundamentales de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos, así como violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado.

94. Radio Dabanga, Eritrea military training camps raise concerns about security in eastern Sudan, *Radio Dabanga*, 26 de enero de 2024.
95. ACLED, *Sudan: The Rapid Support Forces (RSF) Gains Ground in Sudan, Situation Update. December 2023, 12 January 2024* [consultado el 15 de enero de 2024].
96. ACNUR, "Sudan Situation", *Operational Data Portal* [consultado el 15 de enero de 2024].
97. Amnistía Internacional, *Death Came To Our Home": War Crimes and Civilian Suffering In Sudan*, agosto de 2023.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony ("Agwalek"), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:
El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del exvicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificado en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año se mantuvieron las dinámicas de inestabilidad y violencia en el país debido, principalmente, a enfrentamientos intercomunitarios, a escisiones en el seno del SPLA-IO y al efecto contagio de la guerra en la vecina Sudán. Según datos de ACLED, durante el 2023 se registraron 464 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 1.262 personas. Estos datos muestran una desescalada de la violencia con relación al año anterior, cuando se contabilizaron 597 episodios y 1.898 muertes asociadas.[98] Pese a esta reducción relativa de la letalidad, persistieron los problemas asociados a la crisis humanitaria y de desplazamiento forzado en el país. Según los datos de ACNUR 2,2 millones de personas se encontraban refugiadas a mediados de 2023 debido a la violencia y otras 1.490.100 eran desplazadas internas.[99] Estas cifras siguen colocando a Sudán del Sur como la cuarta crisis de desplazamiento más desatendida del mundo, según la OCHA. Además, OCHA resaltó que la crisis de desplazamiento forzado se agravó debido a que Sudán del Sur ha acogido a más de medio millón de personas refugiadas de Sudán y de refugiadas sursudanesas que han retornado al país debido a la inseguridad provocada por el inicio del conflicto armado en Sudán en abril de 2023. La persistencia de la crisis humanitaria en el país hizo que OCHA mantuviera la proyección de que 9 millones de personas (de una población de 12,4 millones) necesitarán asistencia humanitaria y protección en 2024, alertando de los altos niveles de violencia, explotación y abusos que padece la población, incluida violencia sexual y de género.[100]

En lo relativo a la inseguridad, la violencia en el país volvió a estar caracterizada por enfrentamientos intercomunitarios, así como por las disputas entre el SPLA-IO y distintas facciones escindidas. **La violencia de carácter intercomunitario** se mantuvo durante todo el año afectando a diversos estados con enfrentamientos entre miembros de distintos grupos: lou nuer y bor dinka (Jonglei); nuer y dinka twic (Abyei); dinka twic (Warrap) y ngok dinka (Abyei); murle (Jonglei); kuku y bor dinka (Ecuatoria Central); luacjang y payam (Warrap); nuer y shilluk (Malakal). También se mantuvieron enfrentamientos armados entre las fuerzas étnicas shilluk "agwalek" bajo el mando del general Johnson Olony contra fuerzas nuer respaldadas por el general Simon Gatwech. Estos enfrentamientos se habían iniciado el 9 de agosto de 2022, debido a que el general Gatwech –líder de la facción Kitgwang escindida del SPLA-IO ese mismo año–, había destituido al general Olony como su adjunto, motivando la conformación de una nueva facción Kitgwang. En este sentido, el SPLA-IO siguió padeciendo importantes escisiones internas que continuaron debilitando a la formación. El 7 de junio, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y Johnson Olony acordaron integrar oficialmente a los combatientes "agwalek" en las Fuerzas Armadas.

98. ACLED, Dashboard [consultado el 26 de febrero de 2024].
99. ACNUR, *Mid-Year Trends 2023*, 25 de octubre de 2023.
100. OCHA, *South Sudan* [consultado el 26 de febrero de 2024].

Posteriormente, en el mes de octubre se registraron otras dos importantes deserciones del SPLA-IO, que pasaron a apoyar a la facción del Gobierno liderada por Kiir. Estas dos escisiones eran la de Simon Maguek Gai, comandante del estado de Unidad, y la de Michael Wal Nyak, comandante del estado de Jonglei, lo que redujo drásticamente la capacidad militar del SPLA-IO en ambos estados. Las tensiones entre las fuerzas de Machar y las de Gai provocaron durante el resto del año combates en el estado de Unidad, que generaron que el SPLA-IO perdiera todas sus posiciones militares salvo el condado de Panyijiar, su último bastión en Unidad.

Por otro lado, el estallido de la guerra en la vecina Sudán el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Rapid Support Forces (RSF), generó importantes efectos en Sudán del Sur.[101] Amenazó las exportaciones de petróleo sursudanesas, que representan el 85% de los ingresos del Gobierno de Sudán del Sur. Las RSF amenazaron, a mediados de junio, con volar el oleoducto que conecta Sudán del Sur a Sudán, lo que impediría la exportación de petróleo de Sudán del Sur a través de Port Sudan, con consecuencias económicas catastróficas. El conflicto sudanés redujo el suministro de alimentos a lo largo de la frontera entre ambos Estados, provocando escasez de alimentos y precios elevados en el norte de Sudán del Sur. En respuesta a la crisis sudanesa, el presidente Kiir encabezó los esfuerzos de mediación entre las partes del bloque regional de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en conflicto. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el 15 de marzo por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), con mayor énfasis en la protección de civiles, y el 26 de mayo prorrogó las sanciones a Sudán del Sur, incluido el embargo de armas.

Finamente, en lo que respecta a la **implementación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS)** durante el año se siguieron registrando algunos avances y se confirmó la celebración de elecciones presidenciales para diciembre de 2024. Por otro lado, en lo relativo a **las conversaciones de paz de Roma** que desde 2019 mantiene el Ejecutivo sursudanés con los grupos no signatarios del R-ARCSS, representados bajo la coalición Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG), si bien en febrero se levantó formalmente la suspensión de las mismas –que llevaban paralizadas desde finales de 2022– su reanudación no conllevó avances significativos durante el resto del año, aunque se informó de la intención de Kenya de acogerlas en 2024.[102]

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli, Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) con sede en Tobruk, grupos armados de diverso signo –incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) (también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia o ALAF), ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner–, Turquía
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la "liberación" de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

A lo largo de 2023 se mantuvo la tendencia de reducción en las cifras de letalidad asociadas al conflicto armado observada desde el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2020, pero en un contexto de impasse político, pugnas de poder entre los gobiernos rivales que controlan el país y no resolución de problemas de fondo que afectaron a las perspectivas de estabilidad política, económica y de seguridad del país. Según los datos de ACLED, en 2023 murieron 89 personas en hechos de violencia vinculados al conflicto (batallas, explosiones o violencia remota, violencia contra civiles), una cifra similar a los

101. Véase el resumen sobre Sudán en este capítulo.
102. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

balances de los últimos años –157 en 2022 y 115 en 2021– y significativamente menor a la registrada en los años inmediatamente anteriores al alto el fuego –en torno a 1.500 en 2020 y 2.000 en 2019. A lo largo del año la situación general de seguridad en el país continuó siendo frágil y se produjeron enfrentamientos en Trípoli, Bengazi y Gharyan (oeste), que ilustraron la fragmentación de los actores de seguridad, los problemas derivados de la falta de un comando central y las pugnas por el control de territorios y recursos. Así, los choques armados más graves de 2023 se produjeron en agosto, cuando dos jornadas de enfrentamientos entre la Agencia Disuasoria para el Combate del Crimen Organizado y el Terrorismo y la Brigada 444 en una zona densamente poblada de Trípoli causaron la muerte de 55 personas. Otro episodio de gravedad se produjo en octubre, cuando el grupo armado LNA de Khalifa Haftar intentó arrestar al ex ministro de Defensa del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), provocando choques armados con milicias afines al ex miembro del gabinete. El incidente acabó con un número indeterminado de muertes y personas en paradero desconocido. Durante el año también se produjeron choques por el control de actividades ilícitas, hostilidades entre varias unidades del LNA en Bengasi, y entre este último y grupos criminales. Durante 2023 se alertó sobre potenciales efectos desestabilizadores en Libia del conflicto en Sudán y sobre los impactos de la crisis en Chad en el sur del territorio libio. El Ejército chadiano y grupos armados de la oposición del vecino país protagonizaron enfrentamientos en la zona fronteriza y, en agosto, el LNA realizó ataques aéreos en la frontera y contra posiciones de la oposición chadiana.

La fragilidad de la situación en el país norteafricano también quedó expuesta en 2023 por las desastrosas consecuencias de la tormenta Daniel que en septiembre derivó en la destrucción de dos presas y en la muerte y desaparición de miles de personas en Derna (este). Los recuentos no eran precisos, pero la OMS estimaba 4.000 muertes, unas 8.500 desapariciones y el desplazamiento forzado de 43.000 personas. Las lluvias torrenciales sin precedentes –50 veces más probables en la actualidad que en el pasado a causa del cambio climático, según voces expertas– tuvieron efectos devastadores que se explican también por las consecuencias de largo plazo de la violencia, la fractura institucional y problemas de gobernanza. Grupos libios exigieron una investigación independiente de las responsabilidades derivadas del mantenimiento de las estructuras y fallos a la hora de evacuar a las comunidades en riesgo. Posteriormente, la ONU también advirtió a las autoridades libias ante las iniciativas paralelas para responder al desastre y las disputas por controlar los fondos de reconstrucción. La población migrante y refugiada continuó siendo un colectivo especialmente vulnerable en Libia, también en lo que respecta a la tormenta Daniel –500 muertes y otras 500 desapariciones–, pero no solo. El país norteafricano siguió siendo una vía para quienes intentaban cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa, una ruta extremadamente peligrosa: 939 personas muertas y 1.248 desaparecidas entre enero y noviembre de 2023. Otras 15.000 personas, incluyendo menores, fueron interceptadas y retornadas a Libia en 2023. Grupos de derechos humanos también continuaron denunciando a milicias y a las autoridades libias por vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo persecución y acoso a entidades de la sociedad civil.

A nivel político, durante 2023 continuaron las negociaciones que involucran a distintos actores locales e internacionales, pero no se consiguió un acuerdo político definitivo para la celebración de elecciones, que estaban previstas para diciembre de 2021.[103] Persistió así el impasse que a principios de 2022 había derivado en la configuración de dos gobiernos rivales, uno con sede en Trípoli –el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido por la ONU– y otro establecido en la zona este del territorio –el Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), alineado con la Cámara de Representantes (Tobruk) y con el grupo armado LNA (o ALAF) del general Khalifa Haftar. Durante 2023 los esfuerzos se centraron en la definición de una hoja de ruta para los comicios. No obstante, las controversias en torno a las normas que deben regular la votación continuaban, incluyendo sobre la configuración de un nuevo gobierno interino. En este contexto, al finalizar el año el enviado especial de la ONU para Libia intentaba promover un diálogo entre los principales actores institucionales del país. En materia de seguridad, cabe señalar que la Comisión Militar Conjunta 5+5 continuó dando seguimiento a la implementación del acuerdo de alto el fuego y de otras disposiciones de ese pacto, como la retirada de fuerzas extranjeras y mercenarios del país, aunque la puesta en práctica de este último aspecto se vio comprometida por el impasse político y por el deterioro de la situación en el Sahel y en Sudán, entre otras dinámicas.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, grupos narcoparamilitares
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis: En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional)	

103. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios,* Barcelona: Icaria, 2024.

que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del *statu quo* mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

La violencia en Colombia se mantuvo en niveles elevados durante todo el año a pesar de los diferentes acuerdos de alto el fuego que el Gobierno alcanzó con varios grupos armados activos y de las negociaciones abiertas con el ELN y el EMC.[104] Según los datos del centro de investigación ACLED, durante 2023 murieron 1.934 personas como consecuencia del conjunto de eventos violentos que tuvieron lugar en el país. Gran parte de estas muertes fueron consecuencia de acciones armadas de individuos no identificados contra población civil, sin que pudieran ser atribuidas a alguno de los diferentes grupos armados de oposición activos en el país y otras acciones fueron llevadas a cabo por grupos armados vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico. El centro de investigación CELAC señaló que 84 personas murieron como consecuencia de acciones armadas atribuidas al grupo armado ELN. Por su parte, la organización Indepaz señaló que durante 2023 se registraron 93 masacres en las que resultaron muertas 300 personas, el mismo número de víctimas que el año anterior. OCHA señaló que durante el año se constató una reducción de los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y las Fuerzas Armadas colombianas, pero que los niveles de confrontación entre los diferentes grupos armados activos mantuvieron un nivel similar al del año anterior. Además, OCHA alertó de las graves consecuencias humanitarias del conflicto derivadas del uso de minas antipersonales, que provocaron 95 víctimas mortales; de las restricciones a la movilidad de la población como consecuencia de confinamientos por la acción de los actores armados –88.000 personas afectadas– y al mismo tiempo el impacto en términos de desplazamiento forzado de población –63.200 personas desplazadas–; o del aumento del reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de los grupos armados –251 menores afectados, un 93% más que en 2022–. Tanto los confinamientos como los desplazamientos forzados de población afectaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes, que fueron las más impactadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que durante 2023 se registraron 320 víctimas de masacres, cuya autoría se atribuyó a grupos armados no estatales y organizaciones criminales y que afectaron fundamentalmente a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Además, cabe destacar que según el informe de la Defensoría del Pueblo, durante 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos (160 hombres y 21 mujeres). La situación humanitaria provocada por el conflicto armado se vio agravada por los efectos del cambio climático en el país, con sequías e inundaciones en diferentes zonas.

El año comenzó con un aumento de los enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas de seguridad colombianas, a pesar del proceso de paz en marcha, así como de las hostilidades entre el ELN y el EMC, grupo surgido como disidencia de las FARC, especialmente en el departamento de Arauca. Estos últimos enfrentamientos causaron en enero la muerte a 10 personas, y se repitieron a lo largo de todo el año, provocando decenas de víctimas mortales y graves impactos sobre la población civil. De hecho, aunque ambos grupos mantenían negociaciones de paz con el Gobierno colombiano por separado, desde las delegaciones negociadoras gubernamentales se expresó la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambos grupos que pudiese llevar a la reducción de la violencia. En marzo tuvo lugar el ataque de mayor gravedad del ELN contra las Fuerzas Armadas del último año y medio. Un vehículo del Ejército fue atacado en el Norte de Santander y 10 soldados murieron como consecuencia de la acción armada, que también dejó nueve heridos en las filas militares. También se registraron enfrentamientos armados entre diferentes grupos disidentes de las FARC, el EMC y la Segunda Marquetalia. En los meses siguientes se siguieron registrando enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas de seguridad, pero a partir de la firma del acuerdo de alto el fuego cuyo inicio se acordó para el 3 de agosto con este grupo en el marco de las negociaciones de paz se produjo una importante reducción de la violencia. No obstante, se mantuvieron los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados de oposición y organizaciones criminales. De hecho, tras la firma del acuerdo de alto el fuego entre el ELN y el Gobierno, se produjo una intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el EMC, que dejaron más de una decena de muertes en septiembre. En octubre, el Gobierno colombiano y el EMC firmaron un acuerdo de alto el fuego bilateral.

104. Véase los resúmenes sobre las negociaciones de paz con el ELN y el EMC en el capítulo 3 (Negociaciones de paz en América) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

1.3.3. Asia y el Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Frente Nacional de Resistencia (NRF), ISIS-KP, Afghanistan Freedom Front (AFF)
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:
El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidines al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral, hasta la conformación de un gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión "Resolute Support", con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión "Freedom Sentinel". En 2021, tras una importante intensificación de la violencia, los talibanes ascendieron de nuevo al poder y se produjo la retirada de todas las tropas internacionales en el país. Desde 2014 está activa en el país la rama regional de ISIS, conocida como ISIS-KP, cuya actividad ha ido en ascenso a lo largo de la última década.

La violencia continuó activa en Afganistán, pero se produjo una notable reducción durante el año. Según el centro de investigación ACLED, se registraron 998 muertes como consecuencia de la violencia armada durante 2023, cifra considerablemente inferior a las 3.970 de 2022 y muy alejada de las casi 42.000 de 2021. Una parte importante de las muertes de civiles se produjeron como consecuencia de la represión por parte de las fuerzas de seguridad talibanes contra personas que tuvieron participación activa en la anterior administración o contacto directo con organizaciones internacionales o fuerzas de seguridad internacionales desplegadas en el país después de la invasión estadounidense de 2001, así como defensores de derechos humanos y derechos de las mujeres. **La mayor parte de las acciones armadas que tuvieron lugar durante el año estuvieron protagonizadas por la filial regional de ISIS, el ISIS-KP**, que llevó a cabo numerosos atentados contra las fuerzas de seguridad afganas y contra miembros del Gobierno, aunque su actividad fue decreciente a lo largo del año. El centro de investigación International Crisis Group señaló que la mejora de la capacidad contrainsurgente del Gobierno talibán derivó en una reducción en el número de ataques por parte de ISIS-KP, así como una reducción en el número de muertes ocasionadas por las acciones armadas de este grupo.[105] Por su parte, si bien Naciones Unidas destacó durante la primera mitad del año que este grupo constituía la mayor amenaza terrorista en Afganistán y en la región de Asia meridional, y destacó que el grupo mantenía una capacidad operativa que ponía en cuestión la habilidad del régimen talibán para mantener la seguridad en el país,[106] a principios de 2024 constató una reducción de los ataques de ISIS-KP y un aumento en la respuesta contrainsurgente del Gobierno talibán durante la segunda mitad del año.[107] De hecho, las fuerzas de seguridad del Gobierno talibán llevaron a cabo múltiples operaciones de seguridad en las que detuvieron y mataron a decenas de integrantes de esta organización armada.

Entre las acciones armadas del ISIS-KP durante el año cabe destacar un atentado suicida que tuvo lugar en enero en Kabul contra un convoy del ministro de Defensa en el que murieron 20 personas –integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles–. Días después también murieron otras 20 personas en un atentado suicida en las inmediaciones del ministerio de Exteriores mientras se producía la visita al ministerio de una delegación china. En marzo ISIS-KP mató al gobernador de la provincia de Balk. Por su parte, el Gobierno talibán afirmó haber matado al número dos de ISIS-KP, así como al jefe de inteligencia y operaciones, responsable de los atentados de envergadura que tuvieron lugar en Kabul a principios de año. También persistieron algunos enfrentamientos esporádicos y acciones armadas por parte de diferentes grupos opositores al régimen talibán como el NRF y el AFF, aunque en menor medida que en años anteriores, especialmente en el caso del NRF. El secretario general de la ONU señaló en su informe del mes de diciembre sobre la situación del país que se registraron menos atentados por parte de estos actores que en otros periodos, que su acción no supuso ningún

105. International Crisis Group, *The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy with Afghanistan*, Report Nº337, 30 de enero de 2024.
106. Secretario General de la ONU, *Seventeenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat* (S/2023/568), 12 de agosto de 2023.
107. Secretario General de la ONU, *Eighteenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat* (S/2024/117), 31 de enero de 2024.

desafío de seguridad para las autoridades talibanes y que se registraron menos enfrentamientos armados que en periodos anteriores.[108] En paralelo a la violencia armada, el país continuó afectado por una importante crisis humanitaria agravada por los efectos del cambio climático. Según diferentes estudios, Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo frente a las consecuencias de la crisis climática debido al impacto de las sequías y la falta de capacidad de respuesta de las autoridades locales. Por otra parte, las mujeres y las niñas continuaron sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos como consecuencia de la legislación y las prácticas extremadamente discriminatorias impuestas por el Gobierno talibán.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

Continuó activo el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indias y la insurgencia naxalita, afectando a varios estados de la India, aunque se mantuvo en niveles de intensidad reducidos. De acuerdo con las cifras de mortalidad recopiladas por el South Asia Terrorism Portal (SATP), durante 2023 murieron 150 personas como consecuencia de violencia por este conflicto, una cifra similar a la de 2022, cuando fallecieron 135 personas. La mayor parte de las víctimas mortales como consecuencia del conflicto, 61 personas, eran civiles según los datos de SATP, superando las víctimas entre las fuerzas de seguridad (31) y los insurgentes (58). Nuevamente, el estado más afectado por la violencia fue Chhattisgarh, en el que se produjeron 88 de las muertes como consecuencia del conflicto, más de la mitad del total. Otros estados afectados fueron Jharkand, Odisha o Maharashtra, entre otros. Los datos oficiales también constataron la reducción de la violencia y la mortalidad asociada que se había producido en los años previos. Nityanand Rai, ministro de Estado para Asuntos Internos de la India, señaló que en 2022 el número de incidentes violentos se había reducido un 36% con respecto al año 2018 y que las víctimas mortales entre las fuerzas de seguridad y civiles se había reducido en un 59% durante ese periodo. Además, también disminuyó el número de estados afectados por la violencia armada. No obstante, persistieron los enfrentamientos esporádicos, atentados, operaciones de las fuerzas de seguridad y también se produjeron denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos relativas a violaciones a los derechos de la población civil en el marco del conflicto armado. El episodio de violencia más grave tuvo lugar en abril, en Dantewada, uno de los distritos del estado de Chhattisgarh más afectados por la violencia. La detonación de un explosivo en una carretera al paso de un vehículo de las fuerzas de seguridad causó la muerte de 10 policías y un civil que participaban en una operación contra la insurgencia naxalita. Se trató del atentado más grave en el estado de los últimos años. Por otra parte, también se produjeron algunos incidentes de violencia durante el transcurso de las elecciones a las asambleas estatales, especialmente en el estado de Chhattisgarh.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

108. Secretario General de la ONU, *La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Informe del Secretario General* (A/78/628-S/2023/94), 11 de diciembre de 2023.

Se redujo notablemente la violencia en el conflicto armado en Jammu y Cachemira con un descenso de las cifras de mortalidad asociadas a la violencia. Según los datos recopilados por el South Asia Terrorism Portal, durante 2023 murieron 134 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos insurgentes cachemires que operan en la región. 87 de ellas eran insurgentes, 12 civiles, 33 miembros de las fuerzas de seguridad y dos personas sin especificar. Se consolida así el descenso en el número de víctimas mortales desde el año 2020, cuando se registraron 321 muertes, cifra que se ha reducido anualmente desde entonces. El centro de investigación ACLED registraba cifras similares y señalaba que en el mismo periodo se produjeron 155 muertes como consecuencia de la violencia armada. No obstante, y a pesar de la retórica gubernamental india que da prácticamente por finalizado el conflicto –señalando que desde la suspensión de la condición de estado a Jammu y Cachemira la reducción de la violencia ha sido constante y el control de las fuerzas de seguridad sobre los grupos armados casi total–, persistieron enfrentamientos durante todo el año. Si bien en los primeros meses, durante la estación invernal, apenas se registraron enfrentamientos como consecuencia de las condiciones climáticas en el estado, especialmente en las zonas montañosas, durante la segunda mitad del año se repitieron las incursiones armadas por parte de los grupos insurgentes y las operaciones de las fuerzas de seguridad. De hecho, en febrero trascendió a los medios de comunicación que el Gobierno estaba estudiando la retirada de las Fuerzas Armadas desplegadas en Jammu y Cachemira (130.000 soldados aproximadamente), manteniendo únicamente las desplegadas a lo largo de la Línea de Control, frontera de facto con Pakistán (en torno a 80.000 soldados). Las fuerzas militares retiradas serían sustituidas por la Fuerza de Policía de Reserva Central, cuerpo policial especializado en contrainsurgencia. No obstante, en mayo, y ante el aumento de las acciones por parte de los grupos armados, se descartó esta posibilidad. En abril se había producido el ataque más mortífero en la región desde 2021. Cinco soldados murieron como consecuencia de un atentado contra un camión militar en el sector de Rajouri. En los meses posteriores se repitieron los atentados por parte de los grupos insurgentes contra objetivos militares y policiales. Además, las fuerzas de seguridad interceptaron intentos de infiltración de los grupos armados desde Pakistán, especialmente en el distrito de Kupwara. En mayo, enfrentamientos en las inmediaciones de la Línea de Control entre las fuerzas de seguridad e integrantes del People's Anti-Fascist Front causaron la muerte de seis soldados indios y, en junio, cinco insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mientras trataban de infiltrarse en el distrito de Kupwara. En diciembre, tras un ataque contra dos vehículos del Ejército en el que murieron cinco soldados y resultaron heridos otros dos, se inició una operación de las fuerzas de seguridad en la que fueron detenidos ocho civiles. Tres de ellos murieron al día siguiente de su detención, lo que llevó a denuncias de torturas y malos tratos por parte de familiares. Los grupos armados más activos fueron Lashkar-e-Tayyba, su filial Resistance Front y Hizbul Mujahideen. Decenas de integrantes de estos grupos fueron detenidos en operaciones de las fuerzas de seguridad durante todo el año. Por otra parte, el Tribunal Supremo indio mantuvo la decisión del Gobierno indio de retirar la condición de estado a Jammu y Cachemira.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ISIS-KP
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur. Tras el ascenso de los talibanes al Gobierno en Afganistán en 2021, el conflicto armado en Pakistán se intensificó.

El conflicto armado entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y la insurgencia talibán pakistaní del TTP se intensificó durante el año después de que en noviembre de 2022 el TTP pusiera fin al acuerdo de alto el fuego que habían alcanzado unos meses antes. La violencia persistió en un contexto de intensa crisis política desde la destitución del primer ministro Imran Khan en 2022. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos, ataques y operaciones de las fuerzas de seguridad, que se concentraron fundamentalmente

en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, la más afectada por la violencia de todo el país. Se consolidó así la tendencia de incremento de la violencia, acentuada en Pakistán desde el retorno al poder de los talibanes en Afganistán. El centro de investigación pakistaní Center for Research and Security Studies señaló que 2023 fue el año en que se registraron más muertes de miembros de las fuerzas de seguridad en la última década y apuntó también a un aumento de los atentados suicidas. Este centro registró una cifra total de fallecimientos como consecuencia de la violencia de 1.524 muertes en el conjunto del país, frente a 980 en 2022. La cifra total en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa fue de 979, mientras que el año anterior murieron 633 personas en esta provincia como consecuencia del conflicto armado. Por su parte, ACLED registró 2.125 muertes en 2023, de las que 1.262 se produjeron en Khyber Pakhtunkhwa. La insurgencia talibán no limitó sus acciones a esta provincia y también se registraron episodios de violencia por parte del TTP en otras zonas del país, como en Karachi, capital de la provincia de Sindh. Las acusaciones del Gobierno de Pakistán a las autoridades talibanes de Afganistán de dar apoyo al grupo armado talibán pakistaní TTP, unidas a la intensificación de la repatriación de decenas de miles de personas refugiadas y migrantes afganos residentes en Pakistán, llevaron a un incremento de la tensión entre ambos países.

Se intensificó el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad de Pakistán y el grupo armado talibán TTP

El año empezó con uno de los atentados de mayor gravedad de 2023. Un ataque contra una mezquita en Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de más de 84 personas. El atentado tuvo lugar en una mezquita dentro de unas instalaciones policiales, lo que ocasionó que la mayoría de las personas fallecidas fueran policías. El atentado fue atribuido a una facción local del grupo armado TTP. En las semanas previas y posteriores se produjeron múltiples episodios de violencia en los que murieron decenas de insurgentes, policías y soldados. De acuerdo con el análisis del centro de investigación pakistaní Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, el TTP fue el grupo armado más activo en el país durante el año, responsable de la mayoría de atentados y ataques contra las fuerzas de seguridad pakistaníes. En abril, el Gobierno anunció una operación nacional con el objetivo de poner fin a los ataques de los grupos armados, según anunció el Comité de Seguridad Nacional. Sin embargo, en las semanas siguientes continuaron las acciones armadas del TTP y otros grupos activos en el país. En agosto, un atentado suicida contra un convoy militar en el distrito de Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de nueve soldados. En diciembre también se produjo otro atentado de enorme gravedad, un ataque suicida en el distrito de Dera Ismail Khan contra instalaciones militares. Como consecuencia de las explosiones 23 soldados murieron y más de 30 resultaron heridos.

Por otra parte, también se produjeron ataques por parte de ISIS-KP, la filial de ISIS que opera en la región. Uno de los atentados más graves se produjo el 31 de julio, cuando una explosión suicida en el distrito de Bajaur, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, durante un acto político del partido islamista Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl causó la muerte a más de 63 personas e hirió a más de 100. En septiembre, un atentado en la provincia de Baluchistán durante un evento religioso en el distrito de Mastung causó la muerte de 55 personas.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, BLA, BNA, BLF y BLT; LeJ, TTP, ISIS-KP
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchis a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en Baluchistán se recrudeció a lo largo del año y aumentaron tanto los eventos violentos, como el número de personas fallecidas como consecuencia de la violencia en esta provincia pakistaní. Baluchistán fue la segunda provincia más afectada por la violencia en Pakistán durante 2023, de acuerdo con los datos recopilados por el centro de investigación pakistaní Center for Research and Security Studies. Según esta organización, durante 2023 murieron 399 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre los grupos insurgentes que operan en este territorio y las fuerzas de seguridad, de los atentados que se produjeron a lo largo de todo el año y de las operaciones de las fuerzas de seguridad. De esta forma se consolidó la tendencia de aumento de la violencia que ya se había constatado el año anterior, influida por el contexto regional tras el ascenso talibán

al poder en Afganistán y la creciente oposición a las inversiones extranjeras, especialmente chinas, en la provincia. El centro de investigación ACLED cifró en 659 las muertes como consecuencia de la violencia armada en la provincia, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2022. En paralelo a la acción de los grupos insurgentes nacionalistas baluchis, también se registraron acciones armadas de grupos talibanes y de ISIS-KP, responsable de un atentado durante un evento religioso en el distrito de Mastung en el que murieron 55 personas en septiembre. El grupo armado baluchi más activo en el conflicto fue el BLA, como sucediera en años anteriores, que protagonizó diferentes acciones armadas en contra de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Entre los atentados más graves, cabe destacar la explosión de una bomba que causó la muerte de cuatro policías en la ciudad de Quetta en marzo e hirió a otras nueve personas. Horas antes un coche de policía también había sido atacado y pocas horas después se produjo otro atentado contra una patrulla de policía también en Quetta, sin que se produjeron víctimas en estos otros dos atentados. El ataque de mayor gravedad del año se produjo en noviembre en el distrito de Gwadar. 14 soldados murieron como consecuencia de una emboscada contra dos vehículos de las fuerzas de seguridad en un ataque atribuido al grupo armado BLA. Este distrito se vio afectado por diferentes episodios de violencia a lo largo del año. En paralelo a los atentados y enfrentamientos armados, cabe señalar que persistieron las denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil relativas a graves violaciones de derechos humanos vinculadas al conflicto armado, como desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafa, Grupo Toraife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones que luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato.

Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

El Gobierno declaró que **buena parte de las organizaciones armadas que operan en varias regiones de Mindanao se habían debilitado claramente en 2023, pero en todo el año siguieron registrándose numerosos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y dichas organizaciones, así como episodios de violencia entre los diferentes grupos y también ataques contra población civil**. Aunque no existen cifras oficiales sobre la mortalidad asociada al conflicto armado, el centro de investigación ACLED señaló que se registró la muerte de 230 personas en la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM), 63 en Mindanao Central (que incluye las provincias de Cotobato, Cotobato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y General Santos) y 29 en la región de Zamboanga, que incluye el archipiélago de Sulu (una de las zonas históricamente más afectadas por la violencia). A finales de julio, **el jefe de las Fuerzas Armadas declaró que el número de combatientes de signo islamista se había reducido drásticamente desde el año 2017 y que se mostraba optimista respecto de la posibilidad de haber derrotado militarmente a los grupos armados vinculados con Estado Islámico**. A modo de ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas señaló que hacía dos años que no se registraba ningún episodio de secuestro, que se había reducido el número de combatientes extranjeros (que algunas fuentes de inteligencia militar llegaron a cifrar en entre 100 y 200 en 2023) y que se había incrementado exponencialmente el número de combatientes que se han entregado, rendido o acogido a programas de desarme y desmovilización. En este sentido, solamente en Mindanao Central, en 2023 se rindieron o entregaron 914 miembros de Dawlah Islamiya, BIFF y NPA. En la misma línea, a finales de julio, el presidente Ferdinand Marcos ordenó el levantamiento del estado de emergencia que había sido proclamado en septiembre de 2016 por parte del anterior presidente, Rodrigo Duterte, para hacer frente a los altos niveles de violencia en la región. Posteriormente, en mayo de 2017, el Gobierno había proclamado la ley marcial en Mindanao para hacer frente al asedio durante meses por parte de varios grupos armados de signo islamista de la ciudad de Marawi, algunos de cuyos barrios quedaron totalmente destruidos. La ley marcial se retiró en diciembre de 2019, después de que

el Gobierno hubiera dado por neutralizados a varios de dichos grupos. La administración de Marcos levantó el estado de emergencia alegando que las operaciones de las fuerzas de seguridad del estado habían contribuido a restaurar la paz y el orden en las regiones de Mindanao más afectadas por el conflicto.

De entre los grupos activos en las últimas décadas en Mindanao, **uno de los más afectados por las operaciones de contrainsurgencia durante 2023 fue Abu Sayyaf, hasta el punto de que, en septiembre, el gobernador de la provincia de Sulu (uno de los bastiones principales del grupo) declaró a la provincia libre de la presencia e influencia de Abu Sayyaf**. Tal declaración del gobernador fue secundada por el Grupo de Trabajo Provincial de Sulu para poner fin a los conflictos armados locales (PTF-ELAC, por sus siglas en inglés) y por las Fuerzas Armadas en la región, que señalaron que 966 combatientes de Abu Sayyaf se habían rendido voluntariamente (entregando 559 armas de fuego) y que se habían "liberado" 52 municipios afectados por la actividad del grupo. Además, los principales líderes del grupo murieron durante el año. A principios de diciembre, Mudzrimar Sawadjaan, alias Mundi, falleció en un enfrentamiento en la región de Tipo-Tipo, provincia de Basilan. Sawadjaan era el líder de una de las facciones de Abu Sayyaf que operaba en la provincia de Sulu, y el Gobierno consideraba que era la persona que había introducido el uso de atentados suicidas y que había orquestado algunos de los ataques más mortíferos del grupo en los últimos años, como el atentado con bomba en la catedral de Jolo en 2019 –en el que 23 personas murieron y varios centenares resultaron heridas- o los dos atentados con bomba de 2020 en el centro de Jolo –en los que 14 personas murieron y más de 70 resultaron heridas. Según fuentes militares, en los últimos meses Sawadjaan había estado protegido por combatientes del BIFF en la provincia de Maguindanao. Anteriormente, a finales de mayo, las Fuerzas Armadas declararon que había muerto Radullan Sahiron, uno de los fundadores del grupo y el líder más antiguo de Abu Sayyaf en activo. De hecho, Sahiron asumió el liderazgo del grupo en 2006, tras la muerte de Khadafi Janjalani, que a su vez había sucedido a su hermano y fundador del grupo, Abdurajak Abubakar Janjalani. Sahiron, que era una de las personas más buscadas por el Gobierno de EEUU desde principios de los años noventa, lideraba una de las facciones de Abu Sayyaf que no había jurado lealtad a Estado Islámico, como sí habían hecho otros grupos armados en la región. Las Fuerzas Armadas reconocieron no disponer del cadáver de Sahiron, aunque señalaron con un 90% de confianza que había muerto en la ciudad sureña de Patikul. Finalmente, cabe destacar que a mediados de junio Nurudin Muddalan murió en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Ungkaya Pukan, provincia de Basilan. Muddalan se convirtió en el líder de una de las facciones de Abu Sayyaf en Basilan tras la muerte en 2020 del líder histórico del grupo, Furuji Indama, y había participado en algunos episodios de violencia importantes, como una emboscada en la ciudad de Tipo-Tipo en la que 15 soldados murieron y otros 13 resultaron heridos.

En cuanto al BIFF, fuentes militares señalaron durante el año que el número de combatientes del grupo podría haberse reducido en los últimos años de los entre 300 y 400 a menos de 100, y que actualmente el grupo se organiza en tres facciones principales, lideradas respectivamente por Ismael Abubakar (Imam Bongos), Ustadz Karialan (Imam Minimbang) y Esmael Abdulmalik, alias Abu Toraife. Según algunos medios de comunicación, en agosto Abu Toraife fue proclamado líder de Estado Islámico en Filipinas y emir del Sudeste asiático, aunque no estaba claro si había obtenido el apoyo de todos los grupos y facciones que en los últimos años han jurado lealtad a Estado Islámico. La proclamación de Abu Toraife se produjo tras la muerte a mediados de junio de Faharudin Hadji Satar (alias Abu Zacharia) en un enfrentamiento armado en Marawi (provincia de Lanao del Sur). A su vez, en 2019 Zacharia había sucedido como líder y emir de Estado Islámico a Owaida Marohombsar (alias Abu Dar), líder del Grupo Maute (o Daulah Islamiyah). Respecto de este último grupo, uno de los más activos en Mindanao en los últimos años (especialmente en Lanao del Sur), participó en un menor número de episodios de violencia que en años anteriores, pero siguió suponiendo, según el Gobierno, una amenaza a la seguridad en determinadas partes de Mindanao. A principios de diciembre, por ejemplo, Manila le acusó de haber perpetrado un atentado durante una misa católica celebrada en la Mindanao State University, en la que cuatro personas murieron y otras 45 resultaron heridas. El presidente Marcos señaló que el atentado había sido perpetrado por terroristas extranjeros, mientras que las Fuerzas Armadas señalaron que podría ser un acto de venganza por el operativo militar que pocos días antes había provocado la muerte de 11 combatientes en la ciudad de Datu Hoffer Ampatuan. Tras el atentado en la universidad, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una ofensiva aérea y terrestre en las provincias de Maguindanao y Cotobato (especialmente en la zona de Ligawasan) en las que como mínimo nueve combatientes murieron y otros muchos resultaron heridos. En paralelo, en las mismas fechas, el grupo Maute llevó a cabo varios ataques contra miembros del MILF en la mencionada región de Ligawasan en los que murieron 11 miembros del MILF. Previamente, en el mes de septiembre, ya se habían registrado enfrentamientos entre el MILF y el Grupo Maute en la ciudad de Datu Hoffer Ampatuan. Por otra parte, durante todo el año se registraron enfrentamientos entre dos comandos base del MILF (el 105 y el 118), provocando el desplazamiento de miles de personas y la muerte de varios combatientes (en diciembre, por ejemplo, nueve militantes de ambos grupos murieron tras varios días de enfrentamientos en la localidad de Mamasapano). También se produjeron enfrentamientos esporádicos entre combatientes del comando 118 del MILF y del BIFF, como los que se produjeron en noviembre en la provincia de Maguindanao del Sur, que provocaron el desplazamiento de cientos de personas

en la región. Finalmente, cabe destacar que también se produjeron algunos enfrentamientos entre miembros de distintas facciones del MNLF, como el que en el mes de noviembre provocó la muerte de dos ex combatientes en la provincia de Cotobato Norte.

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inició la lucha armada en 1969 y alcanzó su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas (CCP) y al Frente Democrático Nacional (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

A pesar de que en noviembre el Gobierno y el NDF se comprometieron a reanudar las negociaciones de paz, interrumpidas desde 2017, a lo largo de todo el año se produjeron numerosos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y combatientes del NPA. Según estimaciones de centros de investigación, se registró la muerte de como mínimo 170 personas, aunque la cifra real podría muy superior. Se produjeron enfrentamientos en las tres principales regiones del país (Luzón, en el norte; Visayas, en el centro; y Mindanao, en el sur), especialmente en las provincias de Negros Occidental, Samar y las Islas Panay (Visayas), Abra, Mindoro, Quezón, Batangas y Bicol (Luzón) y Caraga, Sultan Kudarat, Surigao y Bukidnon (Mindanao). Los meses en los que se registró una mayor actividad armada, con más de una veintena de víctimas mortales, fueron abril, mayo, septiembre y diciembre. **El 31 de diciembre, las Fuerzas Armadas declararon que en 2023 se habían logrado desmantelar ocho frentes del NPA y debilitar otros 14, de modo que a principios de 2024 quedaban solamente 11 frentes debilitados del NPA (especialmente en Visayas y Mindanao), con una membresía estimada inferior a los 1.500 combatientes –la más baja desde la creación del grupo armado en 1969**. Según las Fuerzas Armadas, en 2023 se incautaron o entregaron 1.751 armas de fuego y se neutralizó a 1.399 miembros del NPA, entre ellos a 67 cuadros significativos de la organización. En este sentido, cabe destacar que en abril el NPA reconoció finalmente la muerte de Benito Tiamzon y Wilma Austria, dos de los líderes históricos más destacados del movimiento armado en las últimas décadas. Sin embargo, el Partido Comunista de Filipinas (CPP) señaló que estos no habían muerto en un intercambio de fuego con las Fuerzas Armadas en agosto de 2022 en Visayas, sino que habían sido capturados, torturados y posteriormente puestos en un bote que fue detonado a distancia. La muerte de ambos dirigentes se produjo cuatro meses antes que la del fundador del Partido Comunista y el NPA, Jose María Sison. Tras ambos sucesos, las Fuerzas Armadas señalaron que el debilitamiento del grupo en los últimos años estaba siendo muy acelerado, y que el NPA se hallaba en una fase de agonía y descomposición. Durante el año varios cargos gubernamentales y militares hicieron declaraciones sobre la capacidad del Estado de imponerse militarmente al NPA. En julio, por ejemplo, **el presidente Ferdinand Marcos declaró que a finales de año se habrían desmantelado todos los frentes operativos del NPA, y trasladó su convicción de que antes de finalizar el 2023 la única provincia en la que el NPA estaba activo (Samar Norte) estaría libre de la presencia e influencia del movimiento comunista**. A finales de año, un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que más de 3.400 miembros del NPA se habían entregado a las autoridades gubernamentales solamente entre enero y septiembre de 2023, y destacó el buen funcionamiento de los programas gubernamentales de desmovilización y reintegración de combatientes. En este sentido, el Gobierno declaró que tras la instauración de una nueva política de contrainsurgencia y gestión del conflicto en 2018 se habían desmantelado la práctica totalidad de los 89 frentes que entonces tenía el movimiento en todo el país y se había neutralizado a 8.654 miembros del NPA –incluyendo a 314 líderes del grupo–, consiguiendo así eliminar la presencia e influencia del grupo en más de 4.500 municipios en todo el país.

Por su parte, en diciembre, el CCP decretó un alto de fuego de dos días (25 y 26 de diciembre) con motivo de las fiestas navideñas y del 55º aniversario de la fundación del partido. El Gobierno calificó de vacío e innecesario tal anuncio de alto el fuego y criticó con contundencia un comunicado emitido por el Partido Comunista en el que declaraba la primacía de la lucha armada para lograr transformaciones, ordenaba al NPA fortalecerse e incrementar su lucha contra el Estado filipino y señalaba que las conversaciones de paz eran un campo de batalla adicional para el avance de sus objetivos. Sin embargo, el aspecto del comunicado que generó mayor controversia fue el anuncio por parte del Partido Comunista del llamado Tercer Movimiento de Rectificación –después del de los años sesenta, que culminó con la refundación del Partido Comunista en 1968, y del de principios de los años noventa. Según el Partido Comunista, el Tercer Movimiento de Rectificación tiene el objetivo de superar los errores,

debilidades y deficiencias en el campo ideológico, político y organizativo que el partido había identificado en los últimos años (especialmente desde 2016), y que habrían dificultado el crecimiento del partido y el avance de la revolución.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados. En febrero de 2021 la cúpula militar del país llevó a cabo un golpe de Estado que puso fin a la transición a la democracia en el país y dio lugar a una intensificación del conflicto armado y a la aparición de las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), organización que agrupa a decenas de grupos armados opuestos al régimen militar, mientras persistían los enfrentamientos con las insurgencias étnicas.

El conflicto armado en Myanmar se mantuvo en niveles elevados de violencia durante todo el año y en el mes de octubre tuvo lugar una grave escalada de la violencia. Durante todo el año persistieron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad birmanas y los diferentes grupos armados étnicos activos, así como las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), surgidas tras el golpe de Estado militar de 2021. De acuerdo con las cifras recopiladas por el centro de investigación ACLED, durante 2023 murieron 15.625 personas como consecuencia del conflicto armado en el país, una cifra inferior a la registrada en 2022, cuando el número de personas fallecidas por la violencia fue de 19.324. Según los datos de ACLED durante la segunda mitad del año se registró un aumento considerable del número de enfrentamientos armados. Por su parte la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) señaló que un tercio de la población de Myanmar (18,6 millones de personas, de las que 6 millones eran menores y el 52% mujeres y niñas) requería de asistencia humanitaria, lo que representaba un millón de personas más que en 2022 y 19 veces más el número de personas que requería esta asistencia antes del golpe de Estado militar de 2021. Además, casi dos millones de personas estaban en situación de desplazamiento interno, según cifras de ACNUR, medio millón más que el año anterior. La crisis humanitaria como consecuencia del conflicto armado se vio agravada también por los efectos del cambio climático, en uno de los países del mundo con más riesgo de sufrir eventos climáticos extremos, según datos de años anteriores.[109]

Desde principios de año se produjeron ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas en diversos estados que provocaron centenares de muertes y miles de desplazados forzados. No obstante, **el conflicto armado sufrió un punto de inflexión cuando, en octubre, los grupos integrantes de la Alianza de los Tres Hermanos –conformada por el MNDAA (grupo armado kokang), el TNLA (grupo armado ta'ang) y el AA (grupo armado rakáin)–, dieron comienzo a la Operación 1027 (en referencia a su inicio el día 27 de octubre) en el norte del estado Shan.** Esta operación representó la ofensiva de mayor envergadura contra las fuerzas de seguridad de Myanmar tras el golpe de Estado de 2021 y supuso para los grupos insurgentes la captura de varias ciudades y la interrupción de la circulación por diferentes rutas que comunican el país con China, con un importante impacto comercial. El objetivo inicial de esta ofensiva armada, que lideró el MNDAA, era recuperar el control de la Zona Autónoma de Kokang y Lakkain, que el grupo armado había ostentado hasta 2009. Se trata de una zona crucial para el negocio del juego ilegal y numerosas actividades ilícitas vinculadas a estafas por internet controladas por grupos criminales. Miles de miembros de grupos armados participaron en la operación, con el apoyo de varios grupos vinculados a las PDF. Los ataques se llevaron a cabo simultáneamente en varios puntos del estado, sin que las fuerzas de seguridad tuvieran la capacidad de respuesta suficiente para hacer frente a la ofensiva. Aunque se produjeron posteriormente ataques aéreos en respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, los grupos insurgentes lograron capturar numerosos emplazamientos estratégicos. La situación se vio agravada por el hecho de que, grupos armados de otras partes del país aprovecharon la debilidad militar del régimen para iniciar operaciones en otros estados,

109. Myanmar fue el segundo país del mundo con mayor riesgo climático global durante el periodo 2000-2019 según el Índice de Riesgo Climático Global 2021.

como ataques del KIO en la región Sagaing, ataques del AA en el estado Kayah e incluso ataques del AA en el estado Rakhine, lo que provocó la ruptura del alto el fuego informal que se había establecido desde 2022. La creciente violencia provocó el desplazamiento forzado de más de 300.000 personas, lo que empeoró la situación humanitaria en el país. Tras el inicio de la violencia, China fomentó una negociación entre las partes con el objetivo de lograr un alto el fuego que se acordó inicialmente el 11 de diciembre.[110] Sin embargo, este acuerdo no logró poner fin a los enfrentamientos.

En los meses previos se habían registrado enfrentamientos en los estados del norte del país, especialmente en Kachin, Chin, Shan así como en la región Sagaing, y en el este del país, en el estado Kayin. Las Fuerzas Armadas bombardearon posiciones de los grupos armados y estos respondieron con emboscadas, ataques y atentados contra infraestructuras. Especialmente grave fue el ataque aéreo que tuvo lugar en abril contra la población de Kanbalu, en la región Sagaing, a consecuencia del cual murieron al menos 170 civiles. El ataque se produjo durante la inauguración de unas oficinas establecidas por el Gobierno de Unidad Nacional, conformado tras el golpe de Estado en oposición al régimen militar. En julio, el KIO lanzó una ofensiva en el estado Shan, en las primeras acciones armadas contra las fuerzas de seguridad en varios meses y dando lugar a una escalada en los enfrentamientos que se alargó en los meses posteriores cuando también el TNLA llevó a cabo acciones armadas después de varios meses inactivo militarmente. En agosto, el KNU señaló que el Acuerdo de Alto el Fuego de Alcance Nacional (NCA) había dejado de tener efecto, aunque siete de los 10 grupos que se adhirieron seguían manteniendo contacto con el Gobierno en el marco del NCA. Por otra parte, persistía la situación de persecución a la oposición política por parte del régimen militar. Según los datos de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), desde el golpe de Estado de 2021, 25.690 personas habían resultado detenidas, de las cuales 19.891 seguían bajo detención al finalizar 2023. Otros 4.275 activistas políticos y defensores de los derechos humanos habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad.

El conflicto armado en Myanmar sufrió una grave escalada de la violencia en octubre, con la operación conjunta de varios grupos armados en la mayor ofensiva contra las FFAA desde el golpe de Estado de 2021

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En línea con la reducción clara y sostenida de la violencia en el sur del país, en 2023 el número de episodios de violencia, víctimas mortales y personas heridas a causa del conflicto armado se redujeron sustancialmente respecto del año anterior. Según el centro de investigación ACLED, más de 40 personas murieron en todo el año. Algunos análisis sostienen que tal reducción está más relacionada con los compromisos asumidos por la insurgencia en el marco del proceso negociador con el Gobierno que con un debilitamiento militar del BRN, el principal grupo armado en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana. No existe constancia de que otras organizaciones armadas protagonizaran episodios de violencia, al contrario de lo que sucedió en 2022, cuando el grupo armado PULO llevó a cabo algunas acciones. A pesar de la marcada reducción en las cifras de mortalidad, en varios momentos del año el BRN demostró una notable capacidad operativa, llevando a cabo ataques simultáneos y coordinados, operativos con decenas de insurgentes y armamento pesado contra puestos policiales y militares o acciones contra infraestructuras importantes como servicios ferroviarios o torres de electricidad y telefonía móvil. A mediados de abril, por ejemplo, el BRN llevó a cabo ataques coordinados en seis localidades de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. Más tarde, el 11 de mayo, perpetró ataques simultáneos en 30 municipios de dichas provincias, y en octubre orquestó tres ataques coordinados con explosivos y un asalto contra un puesto de control militar. Otras de las acciones de mayor repercusión durante el año fueron el ataque en septiembre contra un convoy policial en el que seis personas murieron, o el estallido de un artefacto explosivo dos días antes de que se celebraran las elecciones nacionales, en mayo. Los meses de mayor intensidad armada fueron abril y mayo,

110. Véase el resumen sobre Myanmar en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

poco después de que el BRN comunicara al Gobierno que suspendía temporalmente su participación en las negociaciones hasta que entrara en funciones un nuevo Gobierno surgido de las elecciones en el mes de mayo. El líder del partido vencedor en dichos comicios (Move Forward) había declarado que, si conseguía formar gobierno, el proceso de negociación estaría liderado por civiles (los últimos tres jefes del panel gubernamental han sido militares), que tendría más en consideración los derechos humanos en la región, que impulsaría un proceso de paz más inclusivo y participativo y que priorizaría el principio de coexistencia en una sociedad multicultural. Sin embargo, dicho partido no logró una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, de modo que, tras un impasse de más de tres meses, el líder del partido opositor Pheu Thai (segundo en los comicios de mayo), fue investido primer ministro después de lograr forjar una coalición de 11 partidos. Cabe señalar que el mismo día que Srettha Thavisin fue investido primer ministro, regresó a Tailandia el ex primer ministro y fundador y líder de facto de Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, tras permanecer 15 años en el exilio para evadir varios cargos pendientes con la justicia. Thaksin fue depuesto en un golpe de estado en 2006, y fue precisamente bajo su administración cuando el conflicto en las provincias sureñas de mayoría musulmana escaló hasta niveles sin precedentes en las décadas anteriores.

Aunque la violencia se redujo sustancialmente en 2023, a finales de agosto el Gobierno prorrogó (por 73ª vez) el decreto de emergencia que rige en el sur del país desde julio de 2005. No obstante, en octubre comunicó que dicha medida dejaba de ser vigente en tres distritos (uno de cada una de las tres provincias). En los últimos años, el estado de emergencia ha dejado de aplicarse en diez distritos. En esta línea, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional llevan años criticando el estado de emergencia –que, entre otras cuestiones, concede poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad del estado, les otorga inmunidad en sus acciones o permite la detención sin cargos de personas durante hasta 30 días– por considerar que alienta la impunidad y los abusos de las Fuerzas Armadas y erosiona la confianza de la población en las mismas y en el Estado en su conjunto. Tales organizaciones también piden la derogación de otras dos leyes que rigen en el sur del país (la Ley de Seguridad Interna y la Ley Marcial) y que conceden poderes y competencias adicionales a las fuerzas de seguridad del estado. En este sentido, a mediados de año el Gobierno declaró su intención de reducir progresivamente el número de tropas y la cobertura territorial del estado de emergencia hasta el año 2027. A finales de año, el nuevo Gobierno designó a un nuevo panel negociador y declaró que sus prioridades serían la reducción de la violencia (y en especial el fin de las hostilidades durante el mes de Ramadán, una iniciativa que ya se llevó a cabo en 2022) y la mayor inclusividad y participación en el proceso. Cabe recordar que el facilitador malasio del proceso de negociación reveló que el BRN habría aceptado la participación en las conversaciones de paz de otros grupos armados que operan en el sur del país, aunque sin ofrecer nombres ni fechas al respecto. Finalmente, cabe destacar que, en junio, un grupo de estudiantes de la universidad Prince of Songkla organizó un referéndum sobre la independencia de la región de Patani. El Gobierno declaró que era ilegal, mientras que las Fuerzas Armadas lo consideraron una amenaza a la integridad territorial del país.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Rusia - Ucrania	
Inicio:	2022
Tipología:	Gobierno, Territorio Internacional
Actores:	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
Rusia bajo liderazgo de Vladimir Putin inició en febrero de 2022 una invasión militar contra Ucrania, que resultó en la ocupación militar de áreas del sur y este del país, y afectó a otras zonas también con bombardeos y ataques, y generó graves impactos en seguridad humana, como desplazamiento forzado masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violencia sexual, inseguridad alimentaria y energética, entre otros. La invasión rusa de Ucrania estuvo precedida de ciclos anteriores de conflicto y de diálogo fallidos: protestas antigubernamentales entre finales de 2013 y principios de 2014 que llevaron a la caída del gobierno del presidente Víctor Yanukóvich; anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014 y guerra en el este de Ucrania desde abril de 2014 entre milicias locales apoyadas por Rusia y el Ejército ucraniano. La invasión de 2022 y guerra interestatal transcurrió en torno a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, puesta en cuestión por Rusia con una invasión, contraria a derecho internacional. El antagonismo entre EEUU, la UE y la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro, y la fallida arquitectura de seguridad continental influían también sobre el contexto del conflicto y las perspectivas de resolución. Entre finales de febrero y abril de 2022 Rusia y Ucrania mantuvieron negociaciones político-militares, que resultaron fallidas. La invasión tuvo repercusiones globales multidimensionales, incluyendo entre otros en inseguridad alimentaria de países de la región MENA y de África, así como en un orden internacional tensionado y mayor militarización del continente europeo.

La guerra entre Rusia y Ucrania, causada por la invasión rusa de 2022 contra el país vecino, generó en 2023 niveles elevados de víctimas mortales y graves impactos en seguridad humana y medioambiental, mientras las líneas del frente militar no registraron cambios de gran escala. Ucrania y Rusia no proporcionaron balances oficiales de víctimas militares. Según datos de ACNUDH, en 2023 murieron al menos 1.931 civiles y otros 6.508 resultaron heridos (10.191 fallecidos y

19.139 heridos desde el inicio de la invasión en 2022, un 6% de ellos menores). La propia ACNUDH señaló que las cifras reales víctimas serían considerablemente más elevadas. **Las armas explosivas de amplia área de impacto fueron causantes del 84% de las víctimas mortales civiles** y del 95% de los civiles heridos. Informaciones de prensa ofrecieron en agosto un balance –citando como fuente a funcionarios de EEUU– de medio millón de militares víctimas mortales o heridos entre ambos bandos desde 2022.[111] Por su parte, según la base de datos de ACLED, en 2023 hubo al menos 30.908 víctimas mortales (33.608 en 2022) y se produjeron 47.784 eventos de batallas, violencia contra civiles, explosiones y violencia remota (37.909 en 2022). El balance humanitario sobre 2023 de OCHA incluía 3,7 millones de personas desplazadas internas (según datos hasta septiembre de 2023), 14,6 millones de personas en situación de necesidad de asistencia humanitaria para 2024, 719.000 personas sin acceso a alojamiento seguro o en condiciones adecuadas, un 13% de instalaciones educativas destruida o dañada en 2023 y 256 ataques a instalaciones sanitarias ese año, entre otros impactos.[112] Además, 6 millones de personas ucranianas eran refugiadas en Europa y otras 475.600 fuera de Europa, según datos de ACNUR de principios de 2024.

La invasión y guerra en Ucrania causó graves impactos en su segundo año y se preveía que 14,6 millones de personas en Ucrania requieran asistencia humanitaria en 2024

Se mantuvieron las hostilidades armadas en torno a las líneas del frente militar. Una de las áreas más afectadas por la violencia en los primeros meses del año fue en torno a Bajmut (región de Donetsk). En enero Rusia tomó Soledar (norte de Bajmut). **En mayo, tras diez meses de enfrentamientos, Rusia anunció la toma de control de Bajmut.** Ucrania había ordenado a sus fuerzas confrontar a las fuerzas rusas en ese frente hasta el final. Bajmut quedó en gran parte destruida y –según el CICR– con apenas unos 10.000 habitantes de los 70.000 previos a la guerra. Aun sin balances oficiales de víctimas mortales, análisis estimaron en varias decenas de miles de víctimas mortales militares entre ambos bandos en Bajmut. El propio líder del Grupo Wagner admitió 20.000 bajas propias.

La contraofensiva militar de Ucrania de 2023 no resultó en cambios significativos en cuanto a control de territorio, mientras la guerra continuó causando graves impactos

Ucrania lanzó en junio una contraofensiva militar en el sur y este que no resultó en cambios significativos en cuanto a control de territorio, ante amplias fortificaciones de defensa y áreas minadas por parte de Rusia. En torno al inicio de la contraofensiva ucraniana, el 6 de junio, se produjo una explosión en la presa de Kajovka (en una zona de la región de Jersón –sur de Ucrania– ocupada por Rusia), que la destrozó y causó una catástrofe ecológica y humanitaria. La voladura causó la inundación de amplias áreas, provocó la contaminación del agua con productos químicos, dañó tierras agrícolas, fauna y flora, obligó a evacuaciones de población, destrozó infraestructuras y viviendas y desplazó minas terrestres. Además, disminuyó el embalse de Kajovka –uno de los mayores de Europa y fuente de agua potable para 700.000 personas–, dejando sin acceso a agua a numerosas personas. También generó riesgos añadidos en la central nuclear de Zaporiyia. Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de la voladura. Análisis periodísticos señalaron evidencias que apuntaban a la autoría rusa.[113] El Gobierno de Ucrania, la ONU y diversas ONG se involucraron en la respuesta humanitaria en las áreas bajo control de Ucrania. Rusia denegó el acceso a los actores humanitarios a las áreas bajo ocupación afectadas por las inundaciones.

En paralelo a la contraofensiva militar ucraniana, Rusia continuó con sus ofensivas. **En los últimos meses del año Rusia intensificó sus ataques en el este**, en torno a la ciudad de Avdiivka (región de Donetsk), así como al este de Kupiansk (región de Járkov) y en áreas en torno a Bajmut, entre otras. Rusia tomó la localidad de Marinka (Donetsk) en diciembre. Ucrania anunció en noviembre haber establecido varios puntos de desembarco en la margen izquierda del río Dniéper –áreas bajo ocupación de Rusia. Por otra parte, **a lo largo del año Rusia llevó a cabo bombardeos contra diversas áreas de Ucrania, que causaron numerosas víctimas mortales y heridos civiles y militares y daños en infraestructura, incluyendo civil**. Entre otros bombardeos rusos, un ataque en enero contra un edificio residencial en Dnipró causó 45 víctimas mortales civiles –seis de ellas menores– y 79 heridos. Un ataque con misil el 27 de junio en un restaurante concurrido de Kramatorsk (Donetsk) mató a 11 civiles –incluyendo tres menores– e hirió a otros 61 –incluyendo la escritora ucraniana Victoria Amelina. Otras siete personas murieron –incluyendo un menor– y 110 fueron heridos –12 menores– en otro ataque con misil en Chernihiv (norte), que impactó en una plaza central, universidad y teatro de la localidad en una festividad religiosa el 19 de agosto. Un ataque con misil el 5 de octubre en una cafetería Groza (Járkov) mató a 59 personas, en una de las matanzas más graves. En noviembre y diciembre Rusia llevó a cabo varias oleadas de ataques con drones y misiles contra la capital ucraniana y diversas ciudades, con víctimas mortales y heridos civiles y daños en infraestructura. 40 civiles murieron y más de 130 resultaron heridos en ataques aéreos de gran escala el 29 de diciembre en diversas ciudades. Otra decena murió y en torno a 40 fueron heridos en

111. VVAA, "Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say", *The New York Times*, 18 de agosto de 2023.
112. OCHA, *Ukraine: Humanitarian Situation Snapshot (December 2023)*, OCHA, 5 de febrero de 2024.
113. VVAA, "Why the Evidence Suggests Russia Blew Up the Kakhovka Dam", *The New York Times*, 16 de junio de 2023.

nuevos ataques entre el 30 y 31 de diciembre, que impactaron mayormente en la ciudad de Járkov (este) y en localidades en las líneas del frente.

Por otra parte, **Moscú suspendió en julio su participación en el acuerdo conocido como la Iniciativa sobre la exportación de cereales por el Mar Negro**, alcanzado en 2022 y renovado en diversas ocasiones, incluyendo marzo y mayo de 2023.[114] Tras la suspensión, Rusia llevó a cabo ataques aéreos contra infraestructura portuaria y de almacenamiento de grano de la costa del Mar Negro –incluyendo en Odesa–, y del río Danubio. Por su parte, **Ucrania llevó a cabo ataques contra la flota militar rusa del Mar Negro e infraestructura vinculada en Crimea**, **intensificados en la segunda mitad del año, y que forzaron la retirada de la mayor parte de la flota rusa.** Entre las principales ofensivas, Ucrania atacó el cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol el 22 de septiembre. Con la retirada de la mayoría de la flota, Ucrania retomó parcialmente la exportación de grano por vía marítima. No obstante, en noviembre Rusia atacó con misil un barco civil en el puerto de Odesa.

Rusia suspendió su participación en el acuerdo de exportaciones de cereales y atacó infraestructura portuaria y de almacenamiento de grano

Por su parte, **Ucrania incrementó en 2023 los ataques contra territorio de Rusia**. Ucrania adoptó la práctica de no reivindicar de manera explícita la autoría de esos ataques. Según datos de ACLED, entre enero y diciembre se produjeron 1.172 ataques con drones en territorio de Rusia. También se incrementó el número de drones interceptados. Se registraron también ataques contra oficinas de reclutamiento y contra infraestructura ferroviaria. Entre otros ataques, 21 personas murieron –incluyendo tres menores– y 110 resultaron heridas en ataques aéreos contra Bélgorod el 30 de diciembre (localidad rusa cercana a la frontera con Ucrania), que incluyeron –según Reuters– supuestos ataques con bombas de racimo. Estas ofensivas estuvieron precedidas de una treintena de ataques con drones contra localidades en las regiones de Moscú, Briansk, Oriol y Kursk, que fueron interceptados, según las autoridades rusas.

En otros desarrollos durante el año, **el Grupo Wagner, liderado por Yevgueni Prigozhin, protagonizó un levantamiento armado fallido en Rusia el 23-24 de junio**, precedido de meses de tensión entre el líder del grupo y las autoridades militares rusas. Combatientes de la organización armada tomaron la ciudad de Rostov del Don y avanzaron por varias regiones hacia la capital rusa. El motín, calificado de traición por Putin, fue desmantelado y Prigozhin marchó a Belarús. El líder del Grupo Wagner murió en agosto al estrellarse el avión en que viajaba, en el que fallecieron diez personas. La muerte de Prigozhin fue atribuida al régimen ruso en numerosos análisis.

Durante el año, **las partes en conflicto recibieron apoyo militar exterior e intensificaron su producción interna de armamento.** Según los datos de finales de octubre de 2023 del Kiel Institute, de octubre, EEUU era el principal proveedor de armamento, equipamiento militar y apoyo financiero vinculado a objetivos militares (46.300 millones de dólares comprometidos), seguido de Alemania (18.100 millones), Reino Unido (6.900 millones). En 2023 numerosos países occidentales aceptaron proporcionar tanques de combate, incluyendo tanques Leopard 2 y, por parte de EEUU, M1 Abrams. Washington aprobó en julio y envió ese mismo mes a Ucrania bombas de racimo, prohibidas por la Convención de Municiones de Racimo –ratificada por 111 países, en vigor desde 2010 y de la que no son parte EEUU, Ucrania ni Rusia. ONG como Amnistía Internacional criticaron la decisión, por los impactos indiscriminados y de larga duración de las bombas de racimo sobre la población civil. Por otra parte, Washington autorizó el envío por parte de Países Bajos y Dinamarca a Ucrania de aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, sujeto al entrenamiento previo de los pilotos, lo que situaba la entrega para 2024. Por otra parte, Rusia intensificó sus vínculos en el ámbito militar con Irán y Corea del Norte. EEUU acusó a ambos países de proveer armamento a Rusia. La escalada en provisión armamentística contrastó con las limitadas iniciativas de actores internacionales de búsqueda de salidas negociadas al conflicto, mayormente procedentes de actores no occidentales, mientras Rusia y Ucrania siguieron rechazando la apertura de negociaciones, con condiciones y demandas aún muy alejadas.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima

114. Véase el resumen sobre Rusia-Ucrania en el capítulo 5 (Negociaciones de paz en Europa) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto armado entre Turquía y el PKK continuó activo en el sudeste de Turquía y, principalmente, en el norte de Iraq,[115] si bien se redujo la letalidad de forma significativa. International Crisis Group cifró en 200 las víctimas mortales relacionadas con el conflicto armado en 2023 en Turquía y norte de Iraq (frente a 434 en 2022, 420 en 2021), de las cuales el 75% eran miembros del PKK. Por su parte, ACLED contabilizó 137 víctimas mortales dentro de Turquía. El PKK admitió 179 bajas propias –75 en Turquía y 104 en el norte de Iraq–, y cifró en 912 las bajas y en 128 los heridos miembros de las fuerzas de seguridad. Turquía cifró en 2.000 los combatientes "neutralizados" (muertos o detenidos) en Turquía, Iraq y Siria. Turquía continuó considerando al PKK y las fuerzas kurdas de Siria como un mismo actor. Cabe destacar que, históricamente, las alegaciones de las partes en conflicto sobre las bajas ocasionadas a la otra parte han tendido a estar sobredimensionadas.

El PKK anunció en febrero un cese de hostilidades unilateral en Turquía, con motivo de la grave situación humanitaria causada por el terremoto de ese mes de magnitud 7,8 –seguido de miles de réplicas y de otro terremoto de 7,5– que afectó al sur de Turquía y norte de Siria.[116] El balance del seísmo fue devastador, con 44.000 víctimas mortales en Turquía, en torno a 110.000 heridos en el país, 2,7 millones de personas que perdieron sus viviendas en situación sin hogar, más de 160.000 edificios colapsados o gravemente dañados y un gran trauma colectivo. Análisis también señalaron las limitaciones de la respuesta institucional y pusieron el foco en la amnistía gubernamental de 2018, que legalizó 7,4 millones de edificios con subestándares constructivos, y en deficiencias de implementación de las normativas.[117] Pese al alto el fuego del PKK, y tras una breve pausa en los primeros días tras el terremoto, el Gobierno turco mantuvo sus operaciones contra el grupo a lo largo del año, en provincias del sudeste del país y, principalmente, en el norte de Iraq, inicialmente en niveles bajos y posteriormente intensificado. Así, febrero, según los registros de ACLED, fue el mes con el nivel más bajo de ataques aéreos de Turquía desde abril de 2021. Turquía incrementó sus ataques a partir de marzo. En abril el registro de ACLED indicó un incremento del 20% de ataques aéreos de Turquía contra el PKK en el norte de Iraq. **El PKK extendió su alto el fuego hasta después de las elecciones parlamentarias y presidenciales de mayo, pero puso fin a su tregua unilateral el 13 de junio**, alegando las continuas operaciones militares de Turquía contra el grupo.

Tras el fin de la tregua se incrementaron las hostilidades armadas. Durante el año Turquía aseguró haber dado muerte o captura a diversos altos cargos del PKK. Se agravaron las hostilidades en agosto, cuando los choques en la región de Zap (norte de Iraq) causaron la muerte de seis soldados turcos, según Ankara, y de 32 soldados, según el PKK, en apenas dos días. Fueron seguidos de ataques aéreos del Ejército turco. Poco después, entre el 22 y 24 de agosto, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fida, viajó a la capital de Iraq, Badgad, y a la región kurda de Iraq, Erbil, y mantuvo reuniones con diversas autoridades. Entre otros, se reunió con el primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán de Iraq (KRG), Masrour Barzani. Según Hakan, tanto Bagdad como Erbil estaban comprometidos con eliminar al PKK del territorio de Iraq. En septiembre, las fuerzas kurdas (peshmergas) vinculadas al KDP –partido kurdo gobernante en la Región del Kurdistán de Iraq y socio comercial de Turquía– atacaron posiciones del PKK en las provincias de Erbil y Dohuk. Sobresalió como confrontación directa poco habitual, señaló ACLED. En octubre se produjo en la capital turca, Ankara, un atentado suicida con bomba ante la entrada de la sede de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de Interior, que hirió a dos policías. Un segundo atacante fue abatido por la Policía. El PKK se atribuyó el ataque y afirmó que era una señal de advertencia al Gobierno turco sobre sus operaciones militares contra el grupo en Iraq y Siria. Turquía intensificó los ataques aéreos en el norte de Iraq y Siria en represalia por el ataque en Ankara. En los últimos meses del año se produjeron nuevas hostilidades y ataques en el norte de Iraq entre el Ejército turco y el PKK. Según el Gobierno turco, 26 combatientes kurdos murieron en diciembre ataques en el norte de Iraq y Siria en diciembre en respuesta a la muerte de 12 soldados turcos en el norte de Iraq ese mes.

La reelección de Recep Tayyip Erdoğan en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de mayo y de su partido Justicia y Desarrollo en las parlamentarias de ese mismo mes supusieron continuidad en la aproximación del Gobierno al conflicto armado con el PKK a través del prisma securitario de "lucha contra el terrorismo" en Turquía y en la región (Iraq, Siria), mientras en 2023 Turquía estrechó relaciones con Damasco y con el

115. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.
116. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.
117. Gürsoy, Yaprak, "The earthquake might upend more than Turkey's elections", *Chatham House*, 31 de marzo de 2023; Horton, Jake y William Armstrong, "Turkey earthquake: Why did so many buildings collapse?", *BBC*, 9 de febrero de 2023.

KRG.[118] Se produjeron nuevas detenciones en 2023 en Turquía de actores civiles kurdos, incluyendo opositores políticos, periodistas y activistas. Solo el 25 de abril, 110 personas fueron detenidas en 21 provincias. Organizaciones de derechos humanos denunciaron un año más graves vulneraciones de derechos por parte de las autoridades. Por otra parte, continuaron dinámicas de racismo y violencia contra población refugiada siria, agravada en el contexto del terremoto. Asimismo, en 2023 se produjeron también incidentes de violencia política en el marco del año electoral. Por otro lado, decenas de supuestos miembros de ISIS fueron detenidos durante el año.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), Security Belt Forces, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), EEUU y coalición militar internacional Guardián de la Prosperidad
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:
El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shií, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno de transición, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). A partir de 2014 el grupo ha aprovechado el clima de inestabilidad en el país para avanzar en sus objetivos y sus milicianos se han visto involucrados en choques con los al-houthistas, con las fuerzas gubernamentales, con tropas de EAU y milicias tribales. Desde el ataque de al-Qaeda al USSCole en 2000, EEUU se ha visto implicado en periódicos ataques contra el grupo. El escenario de conflicto en Yemen también ha favorecido la actividad de ISIS en el territorio. En 2023 la crisis en Gaza y sus repercusiones en toda la región impactaron también en Yemen, en especial tras la decisión de los al-houthistas de lanzar ataques contra Israel y naves israelíes o con destino a Israel en el Mar Rojo, ruta que concentra el 15% del transporte marítimo mundial. Las acciones al-houthistas motivaron el establecimiento de una operación militar internacional en la zona (Guardián de la Prosperidad), integrada por una veintena de países y liderada por EEUU.

En línea con la tendencia observada el año anterior, **en 2023 se registró un significativo descenso en los niveles de letalidad asociados al conflicto armado en comparación con períodos previos. No obstante, el balance de víctimas mortales continuó siendo elevado y, por tanto, el caso yemení continuó siendo considerado como un conflicto armado de alta intensidad**. Según los datos de ACLED, durante el año murieron al menos 3.174 personas en distintos hechos de violencia (batallas, explosiones y violencia remota, violencia contra civiles),[119] cifra que representa menos de la mitad que en 2022 (6.721 muertes) y muy por debajo de los balances de años anteriores (entre 20.000 y 23.000 víctimas mortales anuales entre 2019 y 2021). Los datos de la iniciativa Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), que documenta las muertes de civiles en hechos de violencia armada en Yemen, contabilizó 501 muertes y 1.174 personas heridas en 2023, frente a 716 y 1.602, respectivamente, el año anterior. Desde 2018, el total de muertes de civiles ronda las 17.000, según CIMP.[120] **El descenso relativo en los niveles de letalidad se explica fundamentalmente por la extensión de facto del acuerdo de tregua promovido en 2022 por la ONU**. Aunque en septiembre de ese año no se renovó formalmente, en términos generales el cese de hostilidades y otros aspectos del acuerdo se mantuvieron vigentes 2023. Ello, en un año en que

118. Véase los resúmenes sobre Siria e Iraq en este capítulo.
119. ACLED Dashboard [consultado el 1 de febrero de 2024].
120. Civilian Impact Monitoring Project [consultado el 1 de febrero de 2024].

las negociaciones para abordar el contencioso tuvieron mayor protagonismo, en particular los contactos directos entre Arabia Saudita y los al-houthistas bajo la mediación de Omán, en un escenario regional marcado también por la aproximación diplomática entre Irán y Arabia Saudita –actores regionales con importantes intereses en la contienda.[121] Paralelamente, la ONU continuó promoviendo el diálogo intra-yemení y la implementación del Acuerdo de Estocolmo (2018). En el marco de este último acuerdo, en abril se produjo la liberación e intercambio de más de un millar de prisioneros –869 excarcelados por los al-houthistas y por el Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen apoyado por Arabia Saudita y otros 104 por parte de Riad.

Respecto a la situación del conflicto armado en 2023, **las hostilidades continuaron en un contexto de fragilidad y complejidad derivada de la presencia de numerosos actores armados**. Así, se produjeron choques e intercambios de fuego entre los al-houhtistas y fuerzas pro-gubernamentales a lo largo de las líneas de frente, pero también hechos de violencia entre grupos armados no asociados con los al-houthistas y enfrenamientos tribales, tanto en las áreas controladas por el Gobierno como en las que están en manos de los al-houthistas. Paralelamente, se produjeron incidentes atribuidos a la filial de al-Qaeda en el país, AQPA, que continúa presente en las provincias de Abyan, Bayda, Hadramawt y Shabwah. AQPA habría cesado sus ataques contra los al-houthistas y en 2023 focalizó sus acciones contra la principal plataforma secesionista en el sur de Yemen, Southern Transitional Council y las Security Belt Forces. Las fuerzas anti al-houthistas –incluyendo el Consejo de Liderazgo Presidencial, la institución que ha reemplazado a la figura del presidente– también continuaron exhibiendo pugnas y conflictos internos. Asimismo, persistió el uso de una retórica provocativa y belicosa por parte de diversos actores armados y los al-houthistas exhibieron su poderío militar en varios desfiles y ejercicios militares. El tipo de armamento expuesto en estas exhibiciones, junto a las denuncias sobre vulneraciones al embargo de armas a los al-houthistas, confirmaron las declaraciones del propio grupo armado sobre el refuerzo de sus capacidades militares terrestres y navales.

Diversos actores del conflicto armado continuaron siendo denunciados por vulneraciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, tal y como documentó el Panel de Expertos internacional establecido por la ONU.[122] Este panel documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, reclutamiento de menores, violencia sexual y de género, restricciones a la libertad de expresión y obstrucción de entrega de ayuda humanitaria. Los al-houthistas fueron señalados especialmente por el alarmante incremento en el reclutamiento de menores, en especial en campos de verano; por la imposición más estricta del *mahram*, sistema de control y vigilancia a través de "guardianes" masculinos impuesto a las mujeres que, entre otras cosas, continuó afectando su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y por las campañas de acoso y difamación de mujeres activistas, incluyendo de la diáspora. Durante 2023, la organización de mujeres Abductees Mothers Association informó al Consejo de Seguridad de la ONU de los resultados de sus investigaciones, que **desde 2016 y hasta mediados de 2023 constataron el secuestro de 9.568 personas por distintos actores del conflicto, la inmensa mayoría por parte de los al-houthistas** (9.130, incluyendo 130 mujeres). Miles de personas que han sido liberadas dan cuenta de torturas y al menos 140 habrían muerto fruto de malos tratos o malas prácticas médicas mientras permanecían retenidas. Al finalizar el año había en torno a 18 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria y enfrentaban inseguridad alimentaria. Los índices de malnutrición eran especialmente alarmantes entre la población infantil. 4,5 millones de personas permanecían desplazadas, algunas de las cuales como resultado de múltiples desplazamientos forzados en los últimos años.

Durante el segundo semestre de 2023 se intensificaron las negociaciones entre Riad y los al-houthistas y, según trascendió, las partes habían avanzado en la definición de una hoja de ruta para un proceso de paz en Yemen. Al finalizar el año, el enviado especial de la ONU para Yemen continuaba sus gestiones para coordinar los diferentes esfuerzos diplomáticos y conectar los resultados de la vía omaní con un diálogo que involucrara a los diversos actores yemeníes. Ello, en un contexto de inquietud entre algunos sectores por las consecuencias de un eventual acuerdo entre Riad y los al-houthistas que excluyera los intereses y preocupaciones de otros sectores yemeníes. En diciembre, las informaciones apuntaban a avances en torno a un compromiso para fijar las condiciones para un alto el fuego global y retomar el proceso promovido por la ONU. No obstante, para entonces la situación en Yemen también se había visto afectada por la crisis en Gaza y la creciente inestabilidad regional.[123] Desde mediados de octubre, **los al-houthistas decidieron lanzar una serie de ataques contra Israel y luego contra naves de propiedad israelí y/o con destino a Israel en el Mar Rojo**, condicionando el fin de sus acciones a que Israel detuviera su operación militar contra Gaza y el asedio a la Franja. Una de sus ofensivas más mediáticas tuvo lugar en noviembre, cuando los al-houthistas difundieron un vídeo de un

121. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
122. UNSC, *Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council resolution 2140 (2014), S/2023/833*, 2 de noviembre de 2023.
123. Véase el resumen sobre Israel- Palestina en este capítulo.

grupo de hombres enmascarados que desembarcaban desde un helicóptero y tomaban el control de un barco mercante que, según trascendió, era propiedad de uno de los principales magnates de Israel. En este contexto, la flota de EEUU desplegada en la zona intervino en varias ocasiones ante las acciones al-houthistas. En diciembre, Washington anunció el establecimiento de una operación militar internacional en la zona (Guardián de la Prosperidad) integrada por una veintena de países y con el objetivo declarado de proteger la ruta comercial del Mar Rojo, que concentra el 15% del tráfico marítimo mundial. Según informaciones de prensa, al finalizar el año Washington presionaba a Arabia Saudita para postergar el acuerdo con los al-houhtistas sobre el futuro de Yemen y para que Riad se sumara a la coalición militar internacional contra el grupo armado yemení.[124]

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona. La crisis en Gaza en 2023 añadió incertidumbre y desafíos a la situación en el Sinaí.

Durante 2023 el conflicto armado que se focaliza en el área del Sinaí en Egipto registró un significativo descenso en los niveles de violencia letal. Pese a las habituales dificultades para obtener información sobre las dinámicas en la región, **los datos disponibles apuntan a una reducción de los incidentes violentos** que en los últimos años han involucrado a miembros de la filial del grupo armado Estado Islámico (ISIS), autodenominada Provincia del Sinaí (Wilayat Sinai), y al Ejército egipcio con el apoyo de milicias tribales. Apenas trascendieron informaciones sobre enfrentamientos o acciones armadas, entre ellas un incidente en instalaciones policiales en la zona de Arish que resultó en la muerte de cuatro personas, y otro en septiembre, que acabó con siete personas fallecidas en la provincia de Sinaí Norte, aunque no existía claridad de si se trataba de un ataque o un accidente. Según ACLED, una decena de personas murió en Egipto en hechos vinculados a enfrentamientos o ataques explosivos durante 2023. Esta cifra representa un importante descenso en los niveles de letalidad respecto a años anteriores, donde las estimaciones apuntaban a un total de 272 (2022) o entre 150 y 220 (2021) personas fallecidas en hechos de violencia armada y en los que trascendió información sobre diversos episodios violentos con varias decenas de víctimas mortales en el Sinaí. Ya a principios de año, altos cargos egipcios –el primer ministro y el jefe del Estado Mayor– visitaron la zona de Sinaí Norte y recalcaron que la situación de seguridad era estable y que las instituciones estatales funcionaban plenamente. **El presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, aseguró en enero que Egipto "había logrado en gran medida eliminar al terrorismo en el Sinaí".** En los meses siguientes, trascendió que milicianos de ISIS se habrían replegado a una zona montañosa en el centro del Sinaí.

En paralelo a estos desarrollos, **continuaron las denuncias de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos sobre los abusos cometidos por las autoridades egipcias en el marco de su campaña militar en el Sinaí.** Así, por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) denunció a las fuerzas de seguridad egipcias por **detenciones arbitrarias de mujeres y niñas relacionadas con presuntos miembros de ISIS.**[125] Tras documentar más de una veintena de casos ocurridos entre 2017 y 2022, HRW alertó que más de la mitad de las mujeres y niñas habían estado incomunicadas durante períodos de entre dos semanas y seis meses y que algunas de ellas habían sido golpeadas y sometidas a electroshocks por miembros de la Agencia Nacional de Seguridad. Las detenciones pretendían obtener información sobre sus familiares y/o presionar a los presuntos sospechosos para que se entregaran. La organización destaca que algunas de estas mujeres habían sido víctimas de la filial de ISIS, en forma de violaciones o matrimonios forzados, y que habían sido arrestadas después de escapar y buscar la ayuda de las autoridades. Sinai

124. Véase "Yemen: escalada de tensión en el Mar Rojo" en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgos y oportunidades de paz*, enero de 2024.
125. Human Rights Watch, *Egypt: Women Abused Over Alleged ISIS Ties*, 17 de mayo de 2023.

Foundation for Human Rights también denunció que **las milicias tribales que colaboran con el Ejército egipcio en la campaña contra ISIS habían reclutado a menores**, incluso de 16 años, para actividades logísticas y de combate, algunos de los cuales habían muerto o resultado heridos.[126] Adicionalmente, varias organizaciones de derechos humanos egipcias condenaron **el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las protestas pacíficas organizadas por cientos de personas desplazadas forzosamente por la campaña contra ISIS** en la zona noreste del Sinaí desde 2013, en particular en las áreas de Rafah y Sheikh Zuwaid.[127] Las manifestaciones reivindicaron el derecho a retornar a sus hogares y denunciaron el incumplimiento de las autoridades, que se habían comprometido a que estas personas pudieran regresar antes del 20 de octubre de 2023. Las entidades recordaron que, bajo el pretexto de la campaña antiterrorista, el Gobierno egipcio había cometido múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las poblaciones de la zona, provocando el desplazamiento forzado de cerca de 150.000 residentes de Sinaí Norte, destruyendo miles de hogares y degradando miles de hectáreas de tierras agrícolas. También reiteraron que la colaboración por parte de milicias tribales para erradicar a ISIS de la zona respondía en parte a promesas de las autoridades sobre el retorno de población desplazada.

Las protestas en el Sinaí se intensificaron en el último trimestre en medio de temores sobre los planes de Israel de forzar el desplazamiento de población palestina de Gaza a este territorio egipcio. **La crisis en Gaza también alentaba incertidumbre sobre el futuro del Sinaí**. Según trascendió, El Cairo rechazó en diciembre una petición del Gobierno de Benjamin Netanyahu para acceder militarmente al corredor Philadelphi/Salaheddin –se le conoce por ambos nombres–, una franja de territorio de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto, desmilitarizada según el acuerdo de paz entre Israel y Egipto de 1979. El Gobierno israelí asegura que Hamas utiliza esta zona para ingresar armas a la Franja, acusación que niegan las autoridades egipcias. **Las tensiones en torno a este corredor amenazaban con deteriorar las relaciones entre Israel y Egipto, mientras análisis advertían sobre una posible remilitarización del Sinaí.** Una remilitarización que ya se había producido gradualmente en los últimos años por parte de Egipto en el marco de su campaña contra ISIS, con la anuencia –no pública– de Israel. Cabe destacar que, ante la escalada de violencia desde octubre, El Cairo se implicó en iniciativas para intentar mediar entre Hamás e Israel, motivado por evitar las repercusiones de la crisis de Gaza en su territorio, en particular el posible ingreso de población refugiada palestina al Sinaí y la reactivación de grupos armados.[128]

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes Unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:
La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Saddam Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio del Gobierno de victoria contra ISIS el año anterior, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes y, desde finales de 2023, por las repercusiones en toda la región de la crisis en Gaza.

En 2023 Iraq siguió siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, con participación de numerosos actores armados y persistentes impactos en civiles, aunque los niveles de letalidad asociados a la violencia en el país fueron relativamente inferiores respecto al año anterior y a los períodos de mayor intensidad en las hostilidades (2003-2008 y 2014-2017). Según los datos de ACLED, durante el último año se registraron 1.334 muertes en Iraq en diversos hechos de violencia e incidentes asociados al conflicto

126. Sinai Foundation for Human Rights, *I Was Afraid…I Was Only 17*, 8 de agosto de 2023.
127. Sinai Foundation for human Rights, *Egypt: Authorities must stop security violence against civilians in northeastern Sinai, and allow the displaced to return to their lands*, 26 de octubre de 2023.
128. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

armado, una cifra inferior a las 4.427 contabilizadas el año anterior.[129] Los datos de Iraq Body Count (IBC) sobre víctimas civiles apuntan a una tendencia similar: 537 en 2023 frente a 740 en 2022.[130] La misión de la ONU en el país, UNAMI, también informó de la muerte de decenas de civiles en 2023 como resultado de remanentes de la guerra, artefactos explosivos, incidentes armados, intercambios de fuego y ataques aéreos, entre otros incidentes. Hasta finales de año la cifra de personas desplazadas por la violencia que había regresado a sus hogares era de 4,9 millones, pero otras 1,12 millones permanecían desplazadas dentro del país en asentamientos formales e informales y se estimaba que desde 2016 más de 100.000 personas se enfrentaban también a situaciones de desplazamiento por cuestiones relacionadas con el clima.

A partir del último trimestre, como consecuencia de la crisis en Gaza, se intensificaron los ataques contra intereses de EEUU en Iraq y las ofensivas estadounidenses contra milicias pro-iraníes en el país

Las dinámicas de violencia en el país continuaron implicando a numerosos actores locales, regionales e internacionales. El grupo armado ISIS siguió activo y protagonizó acciones principalmente en las provincias de Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninawa y Sala al-Din. Las fuerzas de seguridad iraquíes continuaron también sus operaciones contra la organización. Según UNAMI, en el primer semestre del año se contabilizaron 178 ataques de ISIS, frente a 526 en 2022. La cifra sería la más baja desde que las autoridades iraquíes declararon su victoria contra ISIS en 2017 y se interpreta como una señal del declive de las acciones del grupo en el país. El propio ISIS a través de sus medios de propaganda reivindicó 141 ataques en Iraq (hasta noviembre) frente a 401 en 2022 (en el mismo período), frente a una mayor proporción de acciones en África. No obstante, según estimaciones de personas expertas de la ONU dadas a conocer a mediados de año, **ISIS aún contaría con entre 5.000 y 7.000 combatientes entre Siria e Iraq**. Paralelamente, Turquía continuó con sus incursiones armadas terrestres y aéreas en el norte de Iraq en el marco de su conflicto armado con el PKK y grupos afines, principalmente en las zonas de Erbil, Dohuk y Suleimaniya. Ankara insistió en enmarcar sus acciones en el ejercicio del "derecho a la autodefensa", frente a la posición de Bagdad que formalmente las considera como vulneraciones a la soberanía iraquí. Entre otros hechos, Turquía decretó el cierre del espacio aéreo con destino o procedencia de Suleimaniya tras denunciar una intensificación de las actividades del PKK en la zona y lanzar un ataque contra el responsable de las fuerzas kurdas de Siria (YPG).[131] A lo largo del año también se registraron tensiones intra-kurdas –entre los grupos KPD y PUK–, disputas y enfrentamientos entre facciones shiíes –entre los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr y miembros de Asaib Ahl al-Haq (AAH), de órbita iraní, entre otros episodios–, y choques tribales, principalmente en el sur del país. En 2023, Irán también presionó a Iraq para forzar el repliegue de varios grupos de la oposición kurda iraní de la zona fronteriza.

Durante el último trimestre, la situación en el país también se vio afectada por la crisis de Gaza. Desde octubre **se intensificaron tanto las amenazas como los ataques por parte de numerosos actores armados iraquíes contra personal, intereses e instalaciones de EEUU en Iraq, en represalia por su apoyo político y militar a Israel**. Las ofensivas también alcanzaron posiciones de la coalición militar internacional contra ISIS liderada por Washington. La mayor parte de las acciones fueron reivindicadas por la autodenominada "Resistencia Islámica de Iraq", que reúne a varios grupos pro-iraníes. Washington también intensificó sus acciones en el país, principalmente contra grupos como Kataib Hizbullah, Harakat Hizbullah y la Resistencia Islámica de Iraq, causando la muerte de varios miembros de estos grupos. En este contexto, al finalizar el año se incrementaban las críticas de diversos actores iraquíes a las ofensivas militares de EEUU en el país y los cuestionamientos a que Washington mantenga una presencia militar en Iraq (de unos 2.500 efectivos). Cabe recordar que en 2023 se cumplieron 20 años de la invasión al país liderada por EEUU, ocasión que alentó diversos análisis y balances sobre la situación en el país y alertaron sobre la persistencia de las dinámicas de violencia y la frágil e inestable situación económica que afronta. Respecto a los hechos de 2023, cabe destacar también que a mediados de año se produjeron una serie de protestas en Bagdad y otras ciudades del país en reacción a la quema de ejemplares del Corán en Europa. Los incidentes motivaron una crisis diplomática de Iraq con Suecia. En algunas de las manifestaciones en Iraq se quemaron banderas LGTBIQ+.[132]

Israel – Hezbollah[133]	
Inicio:	2023
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Hezbollah
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto tiene como telón de fondo la cuestión palestino-israelí y sus consecuencias en la región. Por una parte, la

129. ACLED Dashboard [consultado el 3 de febrero de 2024].
130. Iraq Body Count [consultado el 3 de febrero de 2024].
131. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) y sobre Siria en este capítulo.
132. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).
133. Este conflicto armado involucra e impacta de maneras diversas a otros actores regionales. En anteriores ediciones del informe las dinámicas de esta disputa eran analizadas en el capítulo de Tensiones bajo la denominación "Israel – Siria – Líbano" y los análisis de los últimos años destacaban la creciente implicación también de Irán en esta contienda.

presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país. Las fuerzas israelíes invadieron el sur del Líbano en 1978 y de nuevo en 1982 bajo el argumento de expulsar a las milicias palestinas que usaban la región para lanzar ataques a Israel. El nacimiento del grupo político y armado shií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano –en el marco de la guerra civil en el país–, con una agenda de oposición a Israel, rechazo a la presencia occidental en Oriente Medio y liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala contra Líbano de julio de 2006. Considerado como uno de los actores armados no estatales más poderosos de la región, Hezbollah cuenta con Irán como su principal respaldo exterior y en los últimos años se ha implicado en operaciones bélicas en Siria e Iraq y en la asistencia militar a otros grupos armados con agendas afines en la región. En 2023, la crisis en Gaza y la consiguiente intensificación de las tensiones en todo Oriente Próximo derivaron en una nueva fase del conflicto armado entre Israel y Hezbollah. Desde 1978, en la zona fronteriza de facto entre Líbano e Israel se encuentra desplegada una misión de la ONU, la UNSMIL, con un mandato que ha ido evolucionando y que incluye la supervisión del repliegue de las fuerzas israelíes del sur de Líbano (2000) y del cese de hostilidades (tras la guerra de 2006).

La intensificación de las tensiones en todo Oriente Próximo como resultado de la crisis en Gaza abrió un frente de especial relevancia en la zona fronteriza de facto entre Israel y Líbano. **El incremento en la magnitud, frecuencia y alcance de las hostilidades entre las fuerzas israelíes y Hezbollah y las repercusiones de la violencia motivaron que la situación pasara a ser considerada como un conflicto armado a finales de 2023**. La tensión entre Israel y el partido-milicia shií se había escenificado ya desde principios de año en una retórica hostil, belicista y en intercambios de amenazas. Uno de los principales elementos de fricción fue Jerusalén y, en particular, las acciones de autoridades israelíes en la Explanada de las Mezquitas, que fueron rechazadas por Hezbollah (y también por otros actores árabes y musulmanes). En enero, ante la polémica visita a la zona del nuevo ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el líder del grupo shií libanés, Hassan Nasrallah, advirtió que las infracciones al status quo en la explanada podrían alentar un caos regional. En abril, la represión de la Policía israelí a palestinos y palestinas en la mezquita de Al-Aqsa[134] motivó el lanzamiento de más de una treintena de cohetes desde el sur de Líbano al norte de Israel, en un episodio que fue considerado como el mayor bombardeo transfronterizo desde la guerra de 2006. Israel atribuyó el ataque a Hamas y lanzó ataques aéreos contra presuntas instalaciones del grupo palestino en Líbano. En los meses siguientes se informó de diversos intercambios armados en las áreas fronterizas en disputa, incluyendo las Granjas de Shebaa y Ghajar. Este tipo de incidentes se habían incrementado desde mediados de 2022. En junio, Hezbollah aseguró haber derribado un dron israelí que había ingresado al espacio aéreo libanés en la zona de Zibqin (sur).

La situación se deterioró a partir de octubre. **Desde los ataques de Hamas y el inicio de la campaña militar israelí en Gaza, se advirtió sobre las repercusiones en la zona fronteriza de facto entre Israel y Líbano y de una intensificación de la frecuencia y el alcance de los intercambios de fuego a lo largo de la Línea Azul**.[135] En los hechos participaron las fuerzas israelíes, Hezbollah y esporádicamente también miembros de grupos palestinos como las Brigadas al-Qassam de Hamas y la Jihad Islámica, que reivindicó intentos de infiltración desde Líbano. Diversos análisis subrayaron entonces que, pese al incremento de las hostilidades, tanto las acciones de Israel como las Irán y sus actores próximos, incluyendo Hezbollah, parecían indicar que ninguna de las partes deseaba escalar la situación hasta una confrontación directa de mayor alcance regional. La milicia libanesa intentó demostrar su solidaridad con el pueblo palestino, pero al mismo tiempo, no traspasar un umbral que pudiera arrastrar a Líbano a una nueva guerra con Israel en un momento especialmente crítico para el país, afectado por una severa crisis política y económica. A pesar de esta aproximación, a finales de octubre los intercambios armados prácticamente diarios entre Hezbollah y las fuerzas israelíes ya habían causado la muerte a más de cincuenta personas además de importantes desplazamientos de población. **En noviembre, en su primer mensaje público tras los hechos de octubre, Nasrallah señaló su apoyo a Hamas, denunció las acciones de Israel en Gaza y la complicidad de EEUU,** pero evitó comprometer a Hezbollah en una mayor implicación en el conflicto. Cabe mencionar que tras el 7 de octubre Washington desplegó dos portaaviones en el Mediterráneo Oriental e incrementó su presencia militar en la región, en un movimiento que justificó como una medida "para disuadir a cualquier país o grupo que quisiera aprovechar la inestabilidad y confusión" en la zona, en aparente alusión a Irán y Hezbollah. En este contexto, el acuerdo temporal de tregua entre el Gobierno de Israel y Hamas mediado por Qatar a finales de noviembre fue respetado también de facto en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. No obstante, el colapso de la tregua y la reanudación de las hostilidades derivó en una significativa intensificación de la violencia desde principios de diciembre.

A finales de año, los balances de letalidad a causa del conflicto apuntaban a un total de al menos 165 personas: 134 milicianos de Hezbollah, un soldado libanés y una veintena de civiles libaneses, además de al menos nueve soldados y un civil israelí. La violencia y frágil situación de seguridad en el área fronteriza también había motivado el **desplazamiento forzado de unos 100.000 israelíes –evacuados por las autoridades desde octubre y por un tiempo indefinido– y de otros 50.000 libaneses residentes en el sur del país**. Paralelamente, cabe destacar que durante el último trimestre también **se incrementaron**

134. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en este capítulo.
135. La Línea Azul (Blue Line) es la línea que marca la zona de repliegue de las fuerzas israelíes del sur de Líbano en 2000. Aunque no es una frontera internacional, en la práctica opera como límite entre Líbano e Israel.

los hechos de violencia en Siria en los que se vieron involucrados Israel, milicias pro-iraníes y Hezbollah.[136] Fuerzas de la milicia libanesa lanzaron ataques desde territorio sirio hacia Israel, mientras que ofensivas aéreas israelíes habrían causado la muerte de más de una quincena de miembros de Hezbollah en Damasco, Homs y Quneitra. Al finalizar el año el contexto general en la región era de mayor volatilidad y menor contención por parte de diferentes actores armados, más proclives a hacer demostraciones de fuerza. El asesinato en Beirut del número dos de Hamas y de otros dos dirigentes de Hezbollah en el sur de Líbano en sendos ataques israelíes la primera semana de enero de 2024 anticipaban una posible escalada de la violencia en el año entrante. Cabe mencionar que durante 2023 la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL) continuó desarrollando sus tareas y se vio afectada también por la escalada de violencia y los intercambios de fuego a partir de octubre, incluyendo la caída de un proyectil en su centro de mando en Naqoura y heridas de dos miembros de la misión en acciones armadas que afectaron las posiciones de UNIFIL. La Coordinadora especial de la ONU para Líbano mantuvo reuniones con altos cargos libaneses y representantes diplomáticos en las que subrayó la necesidad de reducir la tensión y evitar que el país se viera arrastrado a un conflicto de mayor magnitud teniendo en cuenta la fragilidad de la situación política y económica en el país –el mandato del presidente expiró en octubre de 2022 y el Gobierno sigue siendo de carácter provisional. Un elemento adicional que considerar en esta dinámica son las tensiones entre grupos palestinos radicados en Líbano. Durante 2023, varios enfrentamientos entre facciones armadas de Fatah y grupos islamistas palestinos en el campo de refugiados de Sidón entre julio y septiembre provocaron al menos 30 muertes y cientos de personas heridas. Tras la intervención del portavoz del Parlamento libanés se alcanzó un acuerdo de cese el fuego a mediados de septiembre que derivó en el despliegue de una fuerza conjunta dentro del campo y de las Fuerzas Armadas Libanesas en su perímetro.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo (1993) que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se vio impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

La violencia se intensificó de manera exponencial a partir del último trimestre 2023, alcanzando niveles inéditos en décadas, y con efectos de amplio alcance no solo para la cuestión palestino-israelí, sino en todo Oriente Medio. La situación ya había dado señales de deterioro en los primeros meses del año, con una multiplicación de incidentes y hechos de violencia, un aumento de las incursiones israelíes en Cisjordania, retórica y acciones provocativas de miembros del gabinete israelí en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, entre otros hechos. En mayo, se produjeron intercambios de fuego entre las fuerzas israelíes y la Jihad Islámica en Gaza que se saldaron con la muerte de 33 palestinos y un israelí. **A mediados de año, la ONU advertía que las muertes palestinas en distintos hechos de violencia en Cisjordania ya superaban todas las registradas en 2022 y suponían el peor balance desde 2005**. También alertaba que los ataques de colonos israelíes habían aumentado un 40% en el primer semestre, situándose en el peor nivel desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2006. En este contexto**, el 7 de octubre un ataque sin precedentes de Hamas y la Jihad Islámica contra varias localidades israelíes y un festival de música en áreas adyacentes a Gaza acabó con la muerte de unas 1.200 personas, entre israelíes y extranjeras, mientras que cerca de 200 fueron tomadas como rehenes**. El Gobierno de Benjamin Netanyahu se declaró en "estado de guerra" y emprendió una operación militar con el objetivo declarado de eliminar a Hamas. Las autoridades israelíes impusieron un asedio total contra Gaza, bloqueando el acceso de todo tipo de suministros y endureciendo aún más el bloqueo al que ya sometía a la Franja desde 2007. Paralelamente, Israel inició una incesante ofensiva militar aérea y, desde finales de octubre, también terrestre desde el norte hacia el sur de Gaza, con una intensidad de fuego y potencia destructiva de extraordinaria magnitud. **Al finalizar el año, más de 25.000 palestinos y palestinas habían muerto en Gaza a causa de la operación israelí –y se estimaba que otras 8.000 personas estaban sepultadas bajo los escombros**, mientras análisis advertían que la tasa de mortalidad media en la Franja era más alta que la de cualquier otro conflicto armado en el mundo en el siglo XXI.

136. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

Según balances basados en fuentes israelíes, unos 175 soldados habían muerto en enfrentamientos con Hamas y otras milicias desde el inicio de la operación terrestre. Las fuerzas israelíes aseguraban haber dado muerte a unos 8.000 miembros del grupo palestino y detenido a otros millares más.

La ofensiva israelí contra Gaza fue crecientemente denunciada como un castigo colectivo por su devastador impacto para toda la población de la Franja: el 70% de las víctimas mortales de la ofensiva israelí eran mujeres y menores palestinos –revirtiendo así la tendencia observada en los últimos 15 años en los que la mayoría (67%) de las víctimas civiles eran hombres.[137] Cerca de 10.000 niñas y niños palestinos habían muerto en los ataques, una cifra que supera a todos los menores fallecidos en contextos de conflicto armado en el mundo desde 2019. La cifra de personas heridas superaba las 60.000, algunas de ellas producto del uso de armas prohibidas en zonas pobladas, como el fósforo blanco, como denunció HRW. Los ataques israelíes sistemáticos contra los hospitales de la Franja –menos de la mitad estaban operativos a fines de 2023– y la falta de medicinas a causa del bloqueo –incluyendo anestésicos y antibióticos– repercutieron directamente en las posibilidades de atención a víctimas, personas enfermas y embarazadas.[138] Hasta finales de año los bombardeos israelíes habían destruido total o parcialmente el 60% de las viviendas de Gaza y habían forzado el desplazamiento de un 75% de la población –1,7 de 2,3 millones. **La población palestina se vio obligada a desplazarse en varias ocasiones –primero de norte a sur y luego hacia el oeste–, atacada en rutas identificadas como "seguras" por Israel, y obligada a concentrase en áreas cada vez más reducidas**. A fines de 2023 cerca de la mitad de la población gazatí se concentraba en Rafah (fronteriza con Egipto) en condiciones de extrema precariedad, con graves carencias de higiene, alimentos, combustible y medicinas, y en un contexto invernal que alentaba aún más la proliferación de enfermedades. Agencias y ONG advertían al finalizar el año que prácticamente toda la población gazatí afrontaba un riesgo de hambruna. Los ataques israelíes también causaron la muerte de más de un centenar de periodistas y numerosos trabajadores humanitarios en Gaza, entre ellos más de un centenar de trabajadores de la UNRWA. En paralelo, la situación en Cisjordania empeoró significativamente, con una intensificación de los ataques israelíes –incluyendo ofensivas aéreas–; imposición de restricciones de movimiento; numerosas detenciones –se duplicó el número de palestinos detenidos por Israel–; una escalada en los ataques perpetrados por colonos; desplazamientos forzados de más de 2.000 personas –la mitad de ellas menores–; y la muerte de otras 200 personas, elevando a 551 el balance de muertes violentas en Cisjordania en 2023. Ante estos hechos, **diversas voces alertaron sobre la comisión de crímenes de guerra y actos de genocidio. A finales de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándole de vulnerar la Convención contra el Genocidio.** En enero de 2024, la CIJ dio curso a la demanda tras identificar indicios plausibles de genocidio y dispuso una serie de medidas cautelares.[139] Desde el inicio de la escalada en octubre se activaron canales diplomáticos para intentar abordar la crisis, tanto para intentar garantizar el acceso de ayuda humanitaria como para conseguir un alto el fuego. **No fue hasta noviembre que, con la mediación de Qatar –apoyado por EEUU y Francia– que Israel y Hamas acordaron un cese temporal de hostilidades que estuvo vigente durante una semana**. En este período fueron liberados más de un centenar de rehenes –israelíes y extranjeros– y fueron excarceladas 240 mujeres y menores que permanecían detenidos en cárceles israelíes, buena parte de ellos bajo la figura de "detención administrativa". Hasta finales de 2023 proseguían los intentos por establecer una nueva tregua o un alto el fuego. Paralelamente, la crisis en Gaza motivó intensos debates y tensiones a nivel internacional, en especial en el seno de la ONU, en los que se evidenció el peso del apoyo político –además de militar– de EEUU a Israel, así como el de otros países europeos que se negaron a exigir un cese el fuego bajo el argumento de no comprometer el presunto derecho de Israel a la autodefensa. Washington vetó o amenazó con vetar varios proyectos de resolución y durante 2023 el Consejo de Seguridad solo aprobó dos que se limitaron a pedir pausas y el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, además de la liberación sin condiciones de los rehenes –unos 136 permanecían en Gaza–, pero no exigieron un alto el fuego sostenido e inmediato en los términos que venían reclamando numerosas voces, incluyendo el secretario general de la ONU. **La crisis en Gaza también motivó un significativo incremento de las tensiones y hostilidades en Oriente Medio**. Entre otras dinámicas, favoreció una creciente confrontación entre Hezbollah y fuerzas israelíes[140] y una intensificación de los ataques a objetivos estadounidenses en Iraq y Siria por parte de milicias pro-iraníes y de los ataques de Washington contra estos grupos.[141] Desde Yemen, los ataques de los al-houhtistas contra Israel en respuesta a su ofensiva sobre Gaza y luego contra las naves

La ofensiva israelí contra Gaza fue denunciada como un castigo colectivo contra la población de la Franja y alentó la presentación de una demanda contra Israel por vulneración de la Convención contra el Genocidio por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia

137. UN Women, *Statement on Gaza by UN Women Executive Director Sima Bahous*, 19 de enero de 2024.
138. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).
139. International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) - The Court indicates provisional measures*, 26 de enero de 2024.
140. Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en este capítulo.
141. Véase el resumen sobre Iraq y Siria en este capítulo.

que tuvieran relación con o destino a Israel en el Mar Rojo motivaron el despliegue de una operación militar internacional liderada por EEUU y abrieron otro frente de inestabilidad.[142]

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, Grupo Wagner, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Siria continuó siendo escenario de uno de los conflictos armados de mayor intensidad a nivel mundial. **En 2023 los niveles de violencia registraron un ligero repunte respecto a los últimos años**, **aunque las cifras de mortalidad continuaron lejos del peor período de confrontación**, hace ya un lustro, cuando se contabilizaban decenas de miles de personas fallecidas anualmente. Según las cifras de ACLED**, durante el último año se registraron 6.254 muertes a causa de hechos de violencia** vinculados al conflicto, un número superior si se compara con las 5.649 de 2022 y 5.735 de 2021.[144] El balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) indica un total de 4.361 víctimas mortales, pero apunta la misma tendencia: la cifra sería la más alta en tres años y revierte la evolución descendiente observada. De hecho, los recuentos de SOHR señalaron que 2022 había sido considerado como el año con menor número de víctimas desde el inicio del conflicto armado en 2011. Los datos de SOHR también indican que, del total de personas fallecidas en 2023, 1.889 eran civiles, incluyendo 307 menores, que elevan a casi 24.000 el número de niñas y niños muertos desde el comienzo de las hostilidades. Durante el año **continuaron registrándose vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en todo el país**, tanto en las áreas controladas por el régimen de Bashar al-Assad como en las que están bajo control de actores no estatales. **La situación económica y humanitaria continuó deteriorándose, con más de 15 millones de personas necesitadas de asistencia**. Los retos en este ámbito se agravaron también por las consecuencias de devastadores terremotos que afectaron a Turquía y Siria a principios de año.

Los sismos ocurridos en febrero causaron entre 6.000 y 8.500 muertes y una ingente destrucción en el noroeste sirio, un área controlada por fuerzas opositoras al régimen y que alberga a una numerosa población desplazada internamente a causa del conflicto armado. La respuesta internacional, incluyendo de la ONU, fue denunciada como insuficiente, mientras que Damasco impuso obstáculos para la entrega de ayuda. El régimen intentó aprovechar el impacto del terremoto para rehabilitarse internacionalmente y controlar los flujos de asistencia humanitaria y se vio beneficiado por un levantamiento parcial de las sanciones. De hecho, la catástrofe permitió a Damasco intensificar los contactos diplomáticos con varios países árabes y facilitó la readmisión de Siria en la Liga Árabe en mayo. El cambio de postura de la organización hacia Damasco se explicaría, entre otros factores, por el deseo de frenar el flujo de drogas –en particular captagon– que sale del país con la complicidad del régimen y de abordar la cuestión de la población refugiada siria en varios Estados de la región. Ante esto último, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria subrayó que la reducción (relativa) en los niveles de violencia no es por sí solo un criterio para garantizar un regreso seguro, teniendo en cuenta las frecuentes denuncias de persecución, agresiones y represalias contra las personas retornadas.

Pese a la devastación causada por los terremotos, tras una breve tregua los combates entre las partes en conflicto se reanudaron y las hostilidades se intensificaron, en especial en el último trimestre del año. El país continuó dividido en distintas áreas de influencia que registraron diversas dinámicas de violencia con implicación de numerosos actores armados. Entre las dinámicas y hechos de violencia más destacados del año, cabe mencionar que en el noroeste continuaron los enfrentamientos, principalmente entre Hay'at Tahrir al-

142. Véase el resumen sobre Yemen en este capítulo.
143. ACLED Dashboard [consultado el 5 de febrero de 2024].

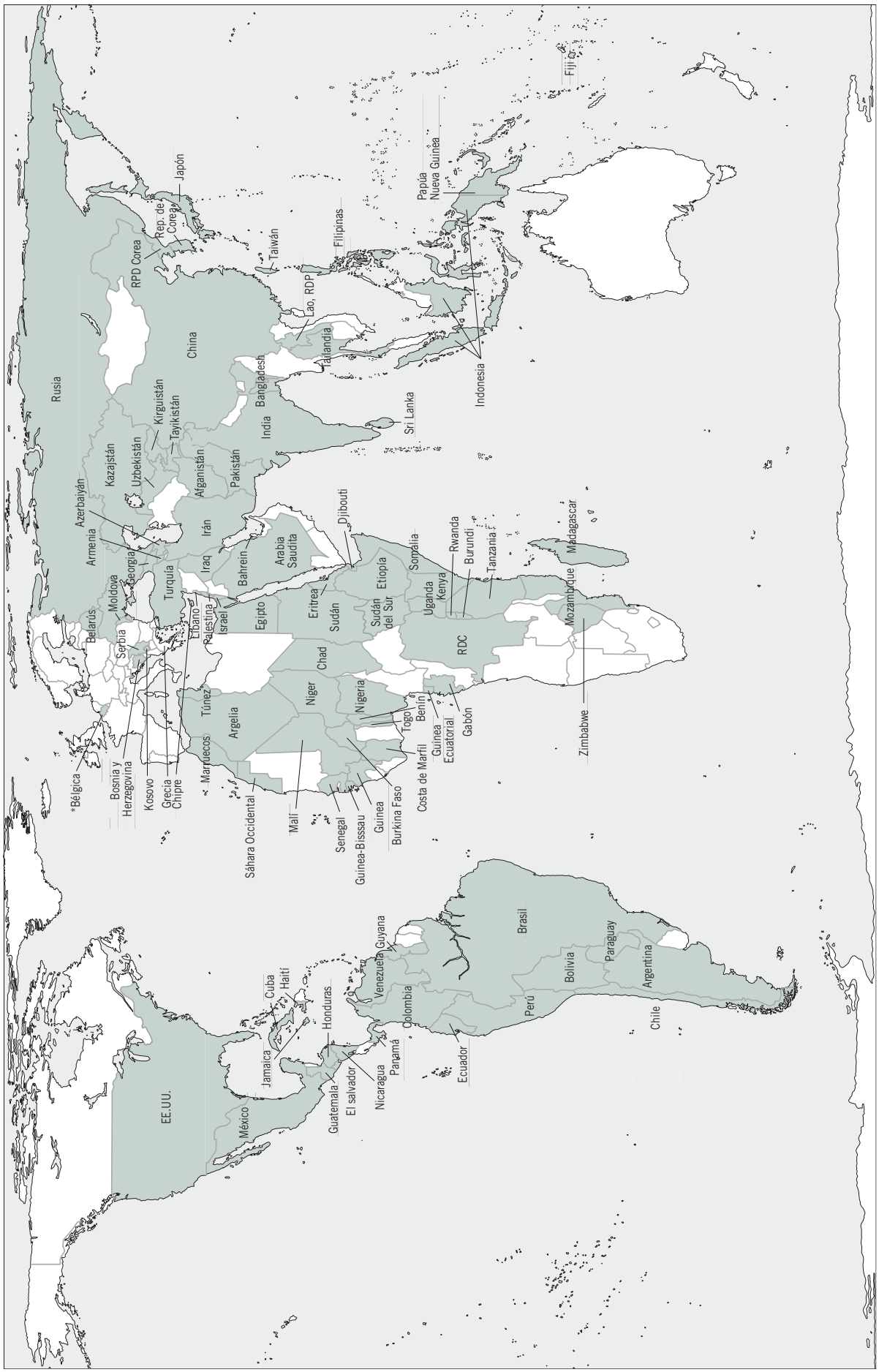
Sham (HTS) y fuerzas progubernamentales en zonas de Idlib, Alepo, Hama y Latakia. Tras la muerte de un coronel ruso en un ataque de HTS en mayo, fuerzas de Moscú y del régimen lanzaron una intensa ofensiva aérea en el sur de Latakia. También prosiguió la competencia en la zona entre distintas facciones por intereses materiales y territoriales. **Las hostilidades se intensificaron en la región noroeste a principios de octubre, después de que un ataque contra una academia militar en Homs causó la muerte de más de un centenar de personas**. Este hecho derivó en nuevos enfrentamientos y en el desplazamiento forzado de más de 120.000 personas, en la escalada más grave en la zona desde 2019. En el noreste persistieron los intercambios armados entre las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), lideradas por las fuerzas kurdas YPG/YPJ, y las fuerzas militares turcas en zonas de Alepo, Al-Hasaqa y Raqqa.[144] Al finalizar el año también se produjeron enfrentamientos entre las SDF y grupos tribales árabes, que causaron el desplazamiento forzado de unas 27.000 personas. Durante 2023 las SDF y las fuerzas de EEUU también anunciaron diversas operaciones contra milicianos de ISIS. Paralelamente, **ISIS continuó perpetrando ataques en el este y sur del país**. Uno de los ataques más cruentos del grupo se produjo en febrero en la provincia de Homs y causó la muerte a más de 60 personas. En mayo, la organización reivindicó su primer ataque en Damasco desde 2021. ISIS también protagonizó enfrentamientos con fuerzas del régimen y mercenarios del grupo Wagner. Mientras tanto, en el sur del país continuaron los ataques contra miembros y personas afines al régimen, ex combatientes de la oposición que han suscrito acuerdos de "reconciliación" con el Gobierno y civiles. En la provincia de Deraa, en junio, las fuerzas sirias lanzaron una serie de ataques aéreos e incursiones militares contra grupos opositores armados que se niegan a "reconciliarse" con el Gobierno, en los primeros ataques de este tipo en la zona en cinco años. Adicionalmente, se multiplicaron los incidentes de inseguridad asociados al tráfico de drogas, motivando una incursión directa de Jordania que causó la muerte de siete civiles en mayo. Ammán, que había advertido que emprendería acciones militares en Siria para hacer frente al tráfico de drogas, se sumó así a los otros cuatro ejércitos extranjeros que intervinieron y/o estuvieron presentes en Siria: Irán, Rusia, EEUU e Israel. **Las fuerzas israelíes llevaron a cabo numerosas incursiones aéreas durante el año, incluyendo ataques contra los aeropuertos de Alepo y Damasco**. Ya en el primer semestre el Gobierno israelí reconocía haber duplicado sus ataques contra objetivos iraníes en Siria desde diciembre de 2022. **La inestabilidad derivada de la crisis en Gaza también tuvo repercusiones en el contexto sirio**. Así, se intensificaron las acciones israelíes en territorio sirio contra objetivos de Irán y Hezbollah,[145] los ataques de presuntas fuerzas respaldadas por Irán desde territorio sirio y también las ofensivas –más de cincuenta solo desde octubre y hasta finales de año– de milicias pro-iraníes contra fuerzas de EEUU estacionadas tanto en Siria como en Iraq, que derivaron a su vez en acciones armadas de Washington.[146] A finales de diciembre, Teherán advirtió a Israel de represalias tras la muerte de un alto cargo militar iraní, el general Razi Mousavi, en un ataque israelí en Siria. Durante todo el año las minas y otros artefactos explosivos provocaron la muerte a numerosos civiles en diferentes regiones del país.

Pese a la devastación causada por los terremotos, tras una breve tregua los combates entre las partes en conflicto se reanudaron en Siria y las hostilidades se intensificaron en el último trimestre del año

En otros hechos destacados, en junio, y como resultado de iniciativas de la sociedad civil siria –en especial de organizaciones de familiares–, **la Asamblea General de la ONU resolvió establecer una institución independiente para esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas en Siria**. En 2023, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria también publicó un extenso informe sobre los continuos malos tratos y torturas en el país en el período 2020-23 y denunció más casos de muerte de personas detenidas. El informe analiza casos ocurridos en centros de detenciones del Gobierno y de tres grupos armados que controlan territorio y mantienen personas detenidas (HTS, SNA, FDS) y concluye que, si bien las formas de tortura y patrones de detención arbitraria y desapariciones forzadas son similares, la escala es significativamente mayor en las áreas controladas por el régimen.[147] Cabe destacar también que en el noreste de Siria más de 51.000 personas, en su mayoría mujeres y menores de 12 años –incluyendo unas 35.000 personas extranjeras– permanecían retenidas en los campamentos de al-Howl y Roj. Respecto a los impactos de género del conflicto y las repercusiones específicas en las mujeres y las niñas, durante 2023 se alertó sobre las ingentes dificultades de las mujeres cabeza de familia para satisfacer sus necesidades básicas, las dificultades de acceso a salud reproductiva, el incremento de matrimonios forzados y precoces en todo el país y el agravamiento de situaciones de discriminación y violencia tanto en los espacios públicos como privados.[148]

144. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.
145. Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en este capítulo.
146. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.
147. ACNUDH, *No End in Sight: Torture and ill-treatment in the Syrian Arab Republic 2020-2023*, 10 de julio de 2023.
148. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

Mapa 2.1. **Tensiones**



* La tensión Rusia – EEUU, OTAN, UE aparece señalada en este mapa de manera simplificada, por razones de representación gráfica. No se han marcado todos los países que integran la OTAN ni los que integran la UE, sino Bélgica como país que acoge las sedes de la UE y de la OTAN, Rusia y EEUU.

2. Tensiones

- Durante 2023 se registraron 114 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (38) y Asia y el Pacífico (33), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (20), Europa (13) y Oriente Medio (10).
- Durante el año se incrementó la crisis política en Senegal entre el Gobierno y la oposición, provocando múltiples protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron decenas de muertos.
- La situación en RDC se agravó durante el 2023 como consecuencia de la violencia política electoral y de la escalada de la violencia en los conflictos armados en el país.
- Etiopía continuó en una grave situación de inestabilidad como consecuencia de las crisis regionales, la frágil implementación del acuerdo de paz en Tigré y de los impactos de las guerras en Oromiya y en Amhara.
- En Túnez se agravó la deriva autoritaria del presidente y se incrementaron los ataques y políticas contra la población migrante y solicitante de asilo subsahariana.
- En Haití se deterioró gravemente la situación de seguridad y la crisis humanitaria, con un incremento sustancial en la tasa de homicidios y un creciente control territorial de los cientos de bandas armadas que operan en el país.
- Ecuador experimentó una grave crisis política y un incremento sin precedentes en los niveles de violencia, motivando la declaración del estado de emergencia.
- Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se deterioraron notablemente y Pakistán inició la deportación de cientos de miles de personas refugiadas afganas.
- Escaló gravemente la tensión en el estado indio de Manipur, con enfrentamientos intercomunitarios entre población meitei y kuki que ocasionaron la muerte a más de 170 personas.
- En la región indonesia de Papúa Nueva Guinea se incrementaron significativamente la frecuencia, letalidad y alcance territorial de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado OPM.
- Una ofensiva militar azerbaiyana llevó al desmantelamiento de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, a su reintegración por la fuerza en Azerbaiyán y al éxodo forzado de la práctica totalidad de su población armenia.
- En 2023 las autoridades iraníes continuaron con sus políticas represivas para intentar sofocar el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” y voces críticas

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2023. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2023. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2023.

2.1 Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y

Tabla 2.1. **Resumen de las tensiones en 2023**

Tensión[1]	Tipología [2]	Actores principales	Intensidad[3] / Evolución[4]
ÁFRICA			
Argelia	Interno	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados con agendas yihadistas	1
	Gobierno, Sistema		↓
Benín	Interna internacionalizada	Gobierno, actores armados regionales	2
	Gobierno		=
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad	2
	Gobierno		↓
Chad	Interna internacionalizada	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Tansformateurs), grupos armados chadianos (entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas, Francia	3
	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad		↓
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupo armado FRUD-armé	1
	Gobierno		=
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	3
	Territorio		↑
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		=
Etiopía – Egipto – Sudán	Internacional	Etiopía, Egipto, Sudán	2
	Recursos		↓
Etiopía – Somalia	Internacional	Etiopía, Somalia, Somalilandia	2
	Gobierno, Territorio, Recursos		↑
Etiopía – Sudán	Internacional	Etiopía, Sudán, milicias comunitarias	1
	Recursos		↓
Gabón	Interna	Gobierno, oposición política sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad	2
	Gobierno		↑
Guinea	Interna	Gobierno, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad, partidos políticos de oposición, sindicatos	2
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		↓

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2023 con la del año 2022 apareciendo el símbolo (↑) si la situación general durante 2023 es más grave que la del año anterior, (↓) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ÁFRICA			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Madagascar	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Malí	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, CEDEAO	2
	Gobierno		↓
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional[5]	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Mozambique	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, sistema		↑
Niger[6]	Interna	Gobierno, oposición política y social, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad	2
	Gobierno		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		=
Nigeria (Biafra)	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)	3
	Identidad, Autogobierno		=
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social	3
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda[7]	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR, grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP)	3
	Identidad, Gobierno, Recursos		↑
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Rwanda - Burundi	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	1
	Gobierno		=
Senegal	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		↓
Sierra Leona	Interna	Gobierno, oposición política y social, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad	1
	Gobierno		↑

5. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.
6. Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión en Níger, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de Región Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).
7. Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión RDC-Rwanda, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de RDC en este capítulo, en el resumen RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y en el análisis incluido en el escenario de riesgo "Rwanda, ¿Nunca más?" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ÁFRICA			
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur, milicias comunitarias	2
	Recursos, Identidad		↑
Tanzania	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna		↓
Togo	Interna internacionalizada	Gobierno, actores armados regionales	1
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados con agendas yihadistas	3
	Gobierno, Sistema		↑
Uganda	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ADF	2
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
AMÉRICA			
Argentina	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Brasil	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
	Gobierno		↑
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Colombia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Cuba	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		↑
Ecuador	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno, Recursos		↑
EEUU	Interna	Gobierno, oposición política y social, milicias ciudadanas	1
	Gobierno		↓
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	3
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
	Gobierno		↑
Haití	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno		↑
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno		↑
Jamaica	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno		↓
México	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
AMÉRICA			
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Panamá	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Paraguay	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	3
	Gobierno, Recursos		↑
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↓
Venezuela-Guyana	Internacional	Venezuela, Guyana	3
	Territorio, Recursos		↑
ASIA Y EL PACÍFICO			
Afganistán – Pakistán	Internacional	Afganistán, Pakistán	3
	Gobierno		↑
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	2
	Gobierno		=
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China - EEUU	Internacional	China, EEUU	2
	Sistema, Gobierno, Territorio		↑
China - Filipinas	Internacional	China, Filipinas, EEUU	3
	Territorio, Recursos		↑
China – Japón	Internacional	China, Japón, Taiwán, EEUU	3
	Territorio, Recursos		↑
China – Taiwán	Internacional	China, Taiwán, EEUU	3
	Territorio, Recursos, Sistema		↑
Corea, RPD	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		=
Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea[8]	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	3
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	3
	Sistema, Territorio		↑
Fiji	Interna	Gobierno, oposición política	1
	Gobierno		=

8. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano y afecta a otros países más allá de los que aparecen en la denominación del caso.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ASIA Y EL PACÍFICO			
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		=
India – China	Internacional	India, China	3
	Territorio		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	2
	Identidad, Territorio		↓
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Indonesia (Sulawesi)	Interna	Gobierno, grupo armado MIT	1
	Identidad, Sistema		=
Japón - Rusia (Islas Kuriles)	Internacional	Japón, Rusia	1
	Territorio, Recursos		=
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		↓
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Kirguistán - Tayikistán	Internacional	Kirguistán, Tayikistán	1
	Territorio, Recursos		↓
Lao, RDP	Interna	Gobierno, oposición política y social, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	2
	Territorio, Recursos		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Papúa Nueva Guinea	Interna	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville	3
	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno		↑
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Tayikistán (Gorno-Badakhshan)	Interna	Gobierno, líderes locales informales de la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO), oposición social al Gobierno central en la GBAO, China	1
	Identidad, Gobierno		↓
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, Territorio		↑
Uzbekistán (Karakalpakistán)	Interna	Gobierno, oposición social en la región autónoma de Karakalpakistán	1
	Autogobierno, Identidad		↓

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
EUROPA			
Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Belarús	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, Letonia, Lituania, EEUU, Ucrania, OTAN, Rusia	2
	Gobierno		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Instituciones estatales, instituciones de las entidades sub-estatales (República Sprska y Federación de Bosnia y Herzegovina), alto representante de la comunidad internacional, EEUU, UE, OTAN, Serbia, Rusia	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Moldova	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, Rusia, UE, Ucrania, OTAN	2
	Gobierno		↑
Moldova (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia, Ucrania	2
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia	Interna internacionalizada	Gobierno, Grupo Wagner, oposición política y social, actores armados de oposición	3
	Gobierno		↑
Rusia (norte del Cáucaso)	Interna	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS), oposición social en la diáspora	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↑
Rusia – EEUU, OTAN, UE	Internacional	Rusia, Belarús, EEUU, OTAN, UE, Reino Unido, Ucrania	2
	Sistema, Gobierno, Territorio, Recursos		↑
Serbia – Kosovo	Internacional[9]	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		↑
Turquía - Grecia, Chipre	Internacional	Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre	1
	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad		↓
ORIENTE MEDIO			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados (PJAK, PDKI, Komala) Gobierno Regional del Kurdistán iraquí (KRG), Iraq	2
	Autogobierno, Identidad		↓

9. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia emitió en 2010 una opinión consultiva en la que estableció que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
ORIENTE MEDIO			
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Irán – EEUU, Israel[10]	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social	2
	Gobierno, Sistema		=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Essedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.
Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2023

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2023, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

En 2023 se volvió a incrementar el número de tensiones, registrándose 114, lo cual supone 31 casos más desde el año 2018

Durante 2023 se identificaron 114 escenarios de tensión en todo el mundo, seis más que en 2022, en línea con la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (31 casos más desde el año 2018). África y Asia y el Pacífico fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (38 y 33 respectivamente), seguidas de América (20), Europa (13) y Oriente Medio (10). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 13 nuevos casos, concentrados principalmente en África y América: Etiopía-Somalia; Gabón; Madagascar; Senegal; Sierra Leona; Togo; Argentina; Panamá; Paraguay; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Filipinas; y Rusia-EEUU, OTAN, UE. Por otro lado, otros siete casos dejaron de ser calificados como tensión, la mayoría en África: África Central (LRA); Eswatini; Sudán; Somalia (Somalilandia – Puntlandia); India; India (Assam); e Israel-Siria-Líbano. De ellos, los casos de África Central (LRA), Eswatini, India e India (Assam) lo hicieron debido a la reducción de la intensidad, mientras que los casos de Sudán, Somalia (Somalilandia – Puntlandia)[11] e Israel-Siria-Líbano[12] pasaron a ser considerados conflictos armados.

Un año más, uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones en 2023 es que, si bien en un 28% de los casos no se observaron cambios significativos y en un 23% la tensión se redujo respecto del 2022, **la mitad de los casos identificados en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior**. Ello se tradujo, en parte, en un **incremento de los casos de alta intensidad, que pasaron de 28 en 2022 a 31 en 2023**: Chad; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Kenya; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC; RDC-Rwanda; Túnez; Ecuador; El Salvador; Haití; Honduras; México; Perú;

10. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.
11. A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia (región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa) y las milicias de las regiones de Sool, Sannag y Cayn, que forman parte de Somalilandia y que se han autodenominado estado SSC-Khatumo. A su vez, Somalilandia y Puntlandia han mantenido una disputa histórica desde 1998 –año en el que Puntlandia se constituyó como república autónoma– por el control de estas regiones fronterizas entre ambos estados que ha derivado en la actualidad en un conflicto armado entre las milicias de estas regiones y Somalilandia. Este caso pasa a denominarse Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo). Para más información, véase el resumen sobre Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
12. Las dinámicas de este contexto son analizadas en el capítulo 1 (Conflictos armados) bajo la denominación "Israel-Hezbollah".

Cuadro 2.1. **Tensiones de alta intensidad en 2023**

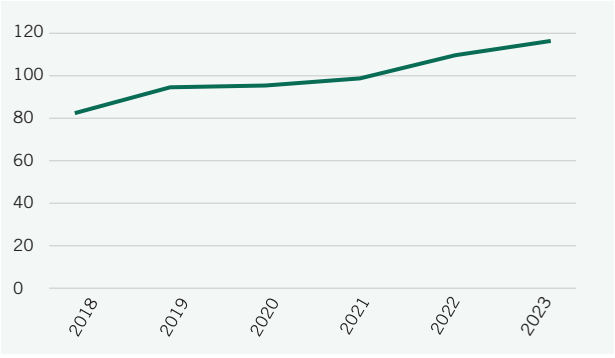
ÁFRICA (9)	ASIA Y EL PACÍFICO (10)	ORIENTE MEDIO (3)
Chad	Afganistán – Pakistán	Irán
Eritrea – Etiopía	China – Japón	Irán – EEUU
Etiopía	China – Taiwán	Israel
Kenya	China – Filipinas	**AMÉRICA (8)**
Nigeria	Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur	Ecuador
Nigeria (Biafra)	Corea del Norte – Corea del Sur	El Salvador
RDC	India (Manipur)	Haití
RDC – Rwanda	India – China	Honduras
Túnez	Indonesia (Papúa Occidental)	México
	Papúa Nueva Guinea	Perú
		Venezuela
		Venezuela – Guyana
		EUROPA (2)
		Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj)
		Rusia

Venezuela; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India (Manipur); India-China; Indonesia (Papúa Occidental); Papúa Nueva Guinea; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); Rusia; Irán; e Irán-EEUU, Israel. Además de los 31 casos de alta intensidad, que supusieron cerca de un tercio del total, el 39% de los 114 casos de tensión fueron de intensidad baja (en 2022 eran el 42%) y el 33% de intensidad media (32% en 2022). Por tanto, **en 2023 se volvió a observar la tendencia del año anterior, incrementándose el número de tensiones y también su intensidad media**. El incremento de la intensidad de las tensiones se concentró especialmente en Europa (donde el 85% de los casos escalaron) o en América (donde lo hizo un 75%). En Oriente Medio el 80% de las tensiones mantuvieron una dinámica similar al año anterior.

La mitad de los casos identificados en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior y solo en un 23% se observó una reducción

En cuanto a los principales **factores de causalidad**, las tensiones continuaron siendo predominantemente multicausales, identificándose en el 56% de los casos dos o más causas. La oposición al **sistema** político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un **Gobierno**, estaba presente en un 75% de las tensiones analizadas; las demandas de autodeterminación y **autogobierno**, o las aspiraciones **identitarias** lo estaban en un 35%; y el control de los **recursos** o del **territorio** lo estaba en un 31%. Tales cifras mantienen una cierta continuidad respecto de las del año anterior. En un análisis desagregado de factores, la oposición a las políticas internas o internacionales del **gobierno** volvió a ser la causa con mayor preponderancia y estuvo presente en el 69% de los 114 escenarios de tensión, siendo un porcentaje similar al año anterior. En este sentido, en África se identificaron 30 casos, que equivale al 79% de los casos de la región; en América 19 casos, que equivale al 95% (solo en el caso de Venezuela-Guyana no estuvo presente); 14 en Asia y el Pacífico (42%); nueve en Europa y siete en Oriente Medio, que representan el 69% y el 70% respectivamente. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de **aspiraciones de tipo identitario (33%),** especialmente relevante en regiones como Europa (62%) u Oriente Medio (50%)**.** A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las cuestiones relacionadas con **el control de los recursos (24%), las demandas de autodeterminación y autogobierno (22%**), **la oposición** al **sistema** político, social o ideológico del Estado en su conjunto (20%) y el control del **territorio** (20%). Los distintos factores de causalidad asociados a las tensiones también observan una gran oscilación entre regiones. A modo de ejemplo, la oposición al Gobierno está presente en el 95% de las tensiones en América, mientras que en Asia y el Pacífico representan el 64% de los casos. Por otro lado, las demandas de autodeterminación y/o autogobierno

Gráfico 2.1. **Evolución del número de tensiones 2018-2023**



solo lo están en un 15% de los casos en América, en un 29% en África, frente al 62% de los casos registrados en Europa. En relación con demandas vinculadas al control y acceso a los recursos y al territorio, casi la mitad de los casos en Asia y el Pacífico tenían vinculación (45%).

La mayor parte, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvo un **carácter interno (49%)**, aunque con una pronunciada variabilidad geográfica (90% de los casos en América y 8% en Europa). Aproximadamente casi una cuarta parte de las tensiones (23%) fueron **internacionales**, pero algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo: Eritrea-Etiopía; RDC-Rwanda; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); e Irán-EEUU, Israel. Finalmente, más de una cuarta parte (28%) de las tensiones fueron **internas internacionalizadas** –aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos–, pero, nuevamente, se observaron importantes variaciones entre regiones (en Europa el 62% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina solo se registró uno, el caso de la tensión en Ecuador).

En un análisis geográfico más pormenorizado, algunas de las **subregiones** con un mayor número de casos fueron, por este orden, África Occidental (14 casos); Asia Oriental (12); África Central y Grandes Lagos (11); América del Sur (10); Asia Meridional, Cuerno de África y el Golfo (siete cada una); Rusia y Cáucaso (seis); Centroamérica (cinco); y Mashreq, Sudeste de Europa, Asia Central y Sudeste Asiático (cuatro cada una). Los **países** que padecieron más tensiones en su territorio o cuyos gobiernos fueron actores principales en un mayor número de disputas foráneas fueron, por este orden, Rusia (12 casos); China (11); EEUU (diez); Etiopía, Irán y Tayikistán (cinco cada uno); India, Ucrania, Turquía, Pakistán, Uzbekistán y Kirguistán (cuatro); o Nigeria, Sudán, Rwanda, Indonesia, Japón y Corea del Norte (tres).[13]

2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, **África** fue la región que concentró un mayor número de tensiones (38), manteniendo el mismo porcentaje que el año anterior sobre el total de casos (33%). Durante el año, cuatro casos dejaron de ser considerados como tales –África Central (LRA), Eswatini, Sudán y Somalia (Somalilandia y Puntlandia)– mientras que se incluyeron otros seis casos nuevos: Etiopía-Somalia; Gabón; Madagascar; Senegal; Sierra Leona; y Togo. Los casos de Gabón y Sierra Leona se relacionan con los golpes de Estado que tuvieron lugar, que en el que caso del primero fue efectivo y en el segundo un intento fallido. Por otro lado, la entrada de Senegal y Madagascar se relaciona con el aumento de la tensión política entre el Gobierno y la oposición política. El caso de Togo se incluye debido al creciente impacto en el país de las dinámicas transfronterizas del conflicto armado en Sahel Occidental. Finalmente, la tensión entre Etiopía y Somalia se debe al deterioro de la relación entre ambos vecinos, derivado del acuerdo entre Etiopía y Somalilandia –región que forma parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional– que incluía el futuro reconocimiento internacional de Somalilandia por parte de Etiopía, entre otros elementos. Por subregiones, África Occidental fue, con 14 casos, la zona de África (y del mundo) con un mayor número de casos, incluyendo Benín; Burkina Faso; Costa de Marfil; Guinea; Guinea-Bissau; Malí; Níger; Nigeria; Nigeria (Biafra); Nigeria (Delta Níger); Senegal; Senegal (Casamance); Sierra Leona; y Togo. En segundo lugar África Central y Grandes Lagos (11): Chad; Gabón; Guinea Ecuatorial; RDC; RDC-Rwanda; Kenya; Rwanda; Rwanda-Burundi; Sudán-Sudán del Sur; Tanzania; Uganda. Le siguen el Cuerno de África (7) –Djibouti; Eritrea; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Etiopía-Egipto-Sudán; Etiopía-Sudán; Etiopía-Somalia–; África del Sur (3) –Madagascar; Mozambique

Gráfico 2.2. **Distribución regional del número de tensiones en 2023**

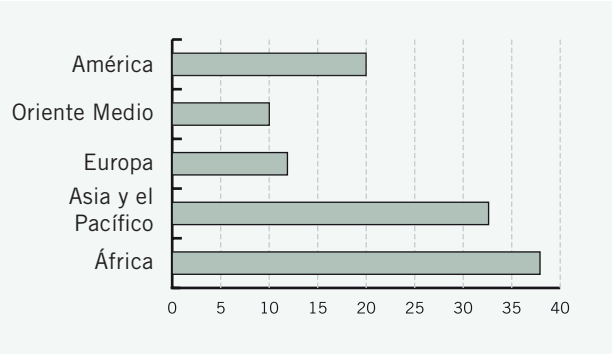
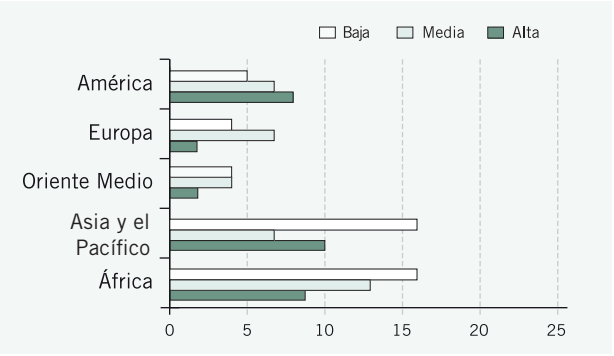


Gráfico 2.3. **Intensidad de las tensiones por regiones**



13. Se incluyen en el recuento los actores que aparecen en la tabla como actores principales de la tensión.

y Zimbabwe– y el Norte de África-Magreb (3) –Argelia; Marruecos-Sáhara Occidental; y Túnez. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que padecían varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos) o Nigeria, Sudán y Rwanda (tres casos).

África fue la segunda región, por detrás de Asia y el Pacífico, en la que se registró un mayor número de casos de alta intensidad (nueve de 38), lo que equivale a un 24% del total de casos en la región, representando un caso menos de los identificados el año anterior (10 de 36). En su conjunto, el 42% de las tensiones fueron de intensidad baja, el 34% de intensidad media y el 24% de intensidad alta. Estas últimas involucraron los casos de: Chad; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Kenya; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC; RDC-Rwanda; y Túnez. En cuanto a la evolución de las tensiones, el 42% se agravaron, el 32% no registraron cambios fundamentales, y el 26% restante se redujo. En este sentido, durante el año el número de tensiones que se agravaron en África pasó de los 13 casos registrados en 2022 a los 16, en donde destacaron los casos de las tensiones de Etiopía-Eritrea, Etiopía-Somalia y RDC-Rwanda; los países que padecieron golpes de Estado –exitosos o fallidos– como Gabón o Sierra Leona; o aquellos que estuvieron sumidos en profundas crisis políticas como RDC, Mozambique, Senegal o Uganda, entre otros. Asimismo, durante el año hubo dos tensiones que escalaron significativamente –Sudán y Somalia (Somalilandia y Puntlandia)– y pasaron a ser consideradas conflictos armados, por lo que en términos globales se incrementó la intensidad de la violencia respecto del año anterior.

La subregión de África Occidental fue la zona del mundo que concentró un mayor número de tensiones (14 casos)

En relación con las causas de las disputas más preponderantes en la región fueron, nuevamente la oposición al Gobierno o al sistema, que estuvo presente en la gran mayoría de los casos, un 79% (30 de 38 casos); mientras que el control de los recursos y/o territorio (12) y las cuestiones relacionadas con la identidad o demandas de autogobierno y autodeterminación (11) representaron el 32 y el 29% respectivamente. Estos datos guardan continuidad con los del año anterior. Finalmente, las tensiones de naturaleza interna supusieron el 47% de los casos (un 50% en 2022), las internas internacionalizadas un 32% (un 28% en 2021) y las internacionales un 21% (un 22% en 2021), en todos los casos porcentajes muy parecidos a la media mundial.

En **América** se registraron 20 escenarios de tensión (18% del total), cuatro casos más que en 2022: Argentina, Panamá, Paraguay y Venezuela-Guyana. De los 20 casos, la gran mayoría se ubicaron en América del Sur (10), seguida de Centroamérica (5), el Caribe (3) y América del Norte (2). Una característica significativa de la región es que en el 75% de los casos se produjo una escalada de la tensión, mientras que solo en el 20% se observó una reducción de la violencia. Ello generó que la intensidad media de los casos en la región se incrementase significativamente con respecto del año anterior, pasando del 31% de casos de máxima intensidad en 2022, al 40% durante el 2023. Por el contrario, los casos de intensidad baja se redujeron a la mitad, registrándose un 25% de los casos en 2023 frente al 50% que mostraron una disminución de la tensión en 2022. Del mismo modo, los casos de intensidad media también crecieron en 2023 hasta representar el 35%, frente al 19% del 2022. En términos comparativos, América volvió a ser la región del mundo con una mayor proporción de casos de máxima intensidad: Ecuador; El Salvador; Haití; Honduras; México; Perú; Venezuela; y Venezuela-Guyana. De todos ellos, los casos de Ecuador, Haití, México, Perú y Venezuela ya habían sido catalogados como escenarios de alta intensidad en 2022 y en años precedentes, mientras que El Salvador y Honduras padecieron importantes incrementos de las dinámicas de conflictividad en 2023, y la disputa entre Venezuela-Guyana por la región del Esequibo (un territorio históricamente revindicado por Venezuela pero que está formalmente bajo el control efectivo y administración del Gobierno de Guyana) aumentó la tensión entre los dos Estados. En El Salvador se redujo claramente el número de homicidios, pero siguió registrándose la detención de decenas de miles de personas al amparo del estado de excepción y numerosas organizaciones denunciaron el deterioro de la situación de derechos humanos, una concentración del poder sin precedentes por parte de Bukele y una creciente deriva autoritaria en el país. En Honduras, durante el año se vivió un incremento de las protestas sociales y políticas, un alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, así como una importante crisis política que paralizó el Parlamento durante cuatro meses. Finalmente, la decisión del Gobierno de Venezuela de convocar un referéndum sobre la anexión del Esequibo y de poner en práctica acciones para hacer efectivos los resultados de la consulta provocaron una importante crisis política y diplomática en la región y una importante movilización militar por parte de varios países.

En cuanto a las causas, 19 de los 20 casos identificados estaban vinculados a la oposición a las políticas domésticas o internacionales del gobierno, salvo la tensión entre Venezuela-Guyana, relacionada con el control de recursos y territorio. Además, factores como el control de los recursos y las cuestiones identitarias estuvieron asociadas a tres casos cada uno de ellos; mientras que las dinámicas unidas al autogobierno fueron un factor explicativo en otros dos casos y la oposición al sistema en un solo caso (Cuba). Por otra parte, cabe destacar que 18 de las 20 tensiones en la región fueron internas, lo que contrasta

con los datos agregados a nivel internacional, según los cuales aproximadamente la mitad de los casos en todo el mundo son tensiones de naturaleza interna. Únicamente el caso de Ecuador se caracterizó por ser de naturaleza interna internacionalizada y el de Venezuela-Guyana por ser de carácter internacional.

En **Asia y el Pacífico** se volvieron a registrar 33 tensiones, el 29% del total a nivel global. En relación con el 2022, se contabilizaron dos casos adicionales –Afganistán-Pakistán y China-Filipinas– mientras que otros dos casos dejaron de ser considerados en situación de tensión: India e India (Assam). Por subregiones, 12 de las tensiones estaban en Asia Oriental –China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), China-Filipinas, China-Japón, China-Taiwán, Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea; Mar de la China Meridional–, siete en Asia Meridional –Afganistán-Pakistán, Bangladesh, India (Manipur), India (Nagalandia), India-China, India-Pakistán y Pakistán–; cuatro en Asia Central –Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán–, y en el Sudeste asiático –Indonesia (Sulawesi), Indonesia (Papúa Occidental), Laos y Tailandia– y dos en el Pacífico –Papúa Nueva Guinea y Fiji. Como en años anteriores, hubo algunos países que fueron escenario de varias tensiones, como China (9 casos), India (cuatro) o Indonesia, Japón, Pakistán, Tayikistán y Corea del Norte (tres). Prácticamente la mitad de los casos (48%) fueron de intensidad baja, el 21% de intensidad media y el 30% restante de alta intensidad. Por otra parte, el 42% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2023 respecto del año anterior, mientras que un 27% de los casos disminuyeron en intensidad y en el 30% restante no se observaron cambios. Cabe destacar especialmente la escalada de aquellos escenarios que en 2023 pasaron a ser considerados de máxima intensidad. Afganistán-Pakistán pasó a ser considerado un nuevo escenario de tensión ya que a lo largo de 2023 se incrementó la tensión entre los dos países, registrándose algunos episodios de violencia en la frontera, constantes enfrentamientos diplomáticos y la expulsión de Pakistán de centenares de miles de personas refugiadas afganas. Por otro lado, también se incrementaron las tres tensiones que mantiene China con Japón, Taiwán y Filipinas. En relación con esta última, durante el año se incrementó sustancialmente la tensión política y militar entre China y Filipinas, con algunos de los incidentes marítimos más graves de los últimos años, un incremento de la retórica belicista y una profundización de las alianzas en materia de defensa entre Manila y varios países, especialmente con EEUU. Finalmente, en el estado indio de Manipur, la tensión escaló con enfrentamientos intercomunitarios entre grupos meitei y kuki, que provocaron la muerte de 163 personas.

En el 75% de los casos de América aumentó la tensión, volviendo a convertir a la región en la mayor a nivel global en proporción de casos de alta intensidad (40%)

Casi la mitad (48%) de los casos identificados en Asia y el Pacífico fueron de baja intensidad, sin embargo, en un 42% se observó una escalada con relación al año anterior

En cuanto a las causas de fondo, los factores con mayor relevancia en la región fueron la oposición al Estado y/o al Gobierno, que estuvo presente en el 64% de los casos, seguida de las cuestiones vinculadas al control del territorio y/o recursos (45%) y por último los factores vinculados con demandas de autogobierno y/o identitarias, presentes en el 39% de los casos. En relación con el tipo de escenario, casi la mitad de las tensiones fueron de carácter interno (45%), un poco menos de una quinta parte (18%) de carácter interno internacionalizado, y un 36% internacionales, siendo así Asia y el Pacífico la región con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; la tensión entre China-Taiwán; el contencioso entre China y EEUU, que tiene uno de sus principales escenarios en Asia Oriental; la disputa histórica entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles, o la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam.

En **Europa** se registraron 13 casos, el 11% del total. Respecto del año anterior, la disputa entre Rusia-EEUU, OTAN y la UE pasó a ser analizada como tensión. Precisamente la subregión con un mayor número de casos activos (6) fue Rusia y el Cáucaso, seguida del Sudeste de Europa (4) y Europa Oriental (3). Además de las dos tensiones que acontecen en su territorio –Rusia y Rusia (norte del Cáucaso)–, y de la que mantiene con EEUU, OTAN y la UE, Rusia fue claramente el país con una mayor participación en disputas en la región, tanto en escenarios de Europa Oriental –Belarús, Moldova o Moldova (Transnistria)– como del Cáucaso –Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Georgia (Osetia del Sur), Georgia (Abjasia). Turquía fue actor en tres de los casos de la región –Turquía; Turquía-Grecia-Chipre; y, en menor medida, en Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj).

Un año más, el aspecto más destacado del análisis de las tensiones en esta región es que en 2023 se registró una escalada de la tensión en el 85% de los casos de la región, y en solo dos casos la tensión o bien desescaló –Turquía-Grecia, Chipre, a causa del acercamiento entre Ankara y Atenas– o se mantuvo sin cambios –

Moldova (Transnistria), aunque en un contexto de incertidumbre y fragilidad. Por tanto, Europa volvió a ser la región que registró un mayor porcentaje de casos que empeoraron en 2023, manteniendo la dinámica del año anterior, donde el 92% de los casos registraron una evolución negativa. El deterioro estuvo vinculado tanto a repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania en el continente como a otras dinámicas locales y regionales. Por otro lado, esta escalada de las tensiones no ha significado un aumento de su intensidad, ya que el 31% de los casos fueron de baja intensidad, el 54% de intensidad media y el 15% de alta intensidad, datos similares a los registrados en 2022. Las dos tensiones de mayor intensidad fueron los casos de Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Rusia. En relación con el primero, una ofensiva militar azerbaiyana llevó al desmantelamiento de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, a su reintegración por la fuerza en Azerbaiyán y al éxodo forzado de la práctica totalidad de su población armenia. Y en lo concerniente a Rusia, en 2023 se deterioró la situación en el país, incluyendo una insurrección armada fallida por parte del Grupo Wagner.

Europa volvió a ser la región que registró un mayor porcentaje de casos que empeoraron en 2023 (85%)

En cuanto a las causas, la oposición al Gobierno y/o al sistema estuvieron presentes en el 69% de los casos, seguidas de las disputas vinculadas a la identidad y/o a las demandas de autogobierno (62%) y las de control del territorio y/o recursos (23%). Cabe destacar que Europa sigue siendo la región del mundo con mayor porcentaje de demandas vinculadas con la identidad y/o autogobierno, duplicando la media mundial que es del 35%. En todo caso, son elementos presentes en contextos de tensión complejos insertos en dinámicas más amplias e internacionalizadas en los que tienen peso otros elementos como las disputas geoestratégicas e intereses de actores externos, como es el caso de Rusia en relación con Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria o la ascendencia de Turquía sobre la autoproclamada república turca del norte de Chipre. Finalmente, cabe destacar que el 62% de los casos fueron tensiones internas internacionalizadas, un 31% internacionales y un caso interno, Rusia (norte del Cáucaso). Respecto de esta cuestión, lo más significativo es la gran disparidad que existe entre el porcentaje de tensiones internas a nivel global (una media del 49%) y en Europa (8%). De manera complementaria, las tensiones internas internacionalizadas tenían más del doble de prevalencia en Europa (62%) que en el conjunto de las regiones (28%). Así, en 2023 se puso de manifiesto un año más la proyección de dinámicas y agendas externas en las tensiones en el continente, dimensión acentuada desde la guerra en Ucrania, en combinación con factores internos.

La crisis en Gaza influyó en las dinámicas de los conflictos armados y tensiones de la región y repercutió también en las discusiones en torno al programa nuclear iraní

En **Oriente Medio** se identificaron 10 escenarios de tensión, lo que representa el 9% del total. Con relación al año anterior, un caso, Israel-Siria-Líbano, dejó de ser considerado tensión y pasó a ser considerado como conflicto armado (Israel – Hezbollah) debido al incremento de las hostilidades y los efectos de la violencia en el último trimestre de 2023 derivado de la crisis en Gaza. De los 10 casos identificados, siete se concentraron en el Golfo y los tres restantes en el Mashreq. La mayor parte (80%) de los casos no registraron cambios significativos respecto al año anterior, aunque se observó una desescalada relativa de la tensión en dos casos (20%): Irán (noroeste) e Irán (Sistán Baluchistán) que en 2022 habían sido escenario de mayores niveles de violencia en el marco de la respuesta de Teherán a la contestación interna. En cuanto a la intensidad de las tensiones, estas presentaron niveles similares que en 2022, con cuatro escenarios (40%) de baja intensidad –Arabia Saudita, Bahréin, Iraq (Kurdistán) y Palestina (tensión interna entre Fatah y Hamas)–; otros cuatro casos (40%) de intensidad media –Egipto, Irán (noroeste), Irán (Sistán Baluchistán) y Líbano–; y dos casos (20%) de alta intensidad –Irán e Irán-EEUU, Israel.

Cabe destacar que la crisis de Gaza repercutió de manera directa e indirecta en las dinámicas de conflicto armado y tensiones en la región. En el último trimestre se multiplicaron los ataques de grupos del autodenominado "Eje de Resistencia" (integrado por Hezbollah, milicias pro-iraníes en Iraq y Siria y los al-houhtistas en Yemen, entre otros) contra fuerzas de EEUU en Iraq y Siria, las ofensivas estadounidenses contra estas organizaciones y los ataques de Israel contra posiciones e intereses de Hezbollah e Irán, entre otras dinámicas. Junto a estas repercusiones –que se analizan en el capítulo de conflictos armados– las consecuencias de la crisis en Gaza también influyeron en la tensión en torno al programa nuclear iraní.

En cuanto a las causas de las tensiones, el panorama fue muy parecido al del año anterior: el 70% de los casos estuvieron relacionados con la oposición al Gobierno o al sistema; el 50% a cuestiones relacionadas con la identidad y/o el autogobierno; y solo en el 10% de los casos hubo demandas relativas al control del territorio y/o recursos. Finalmente, en relación con la naturaleza de las tensiones, como en los últimos años, el 50% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el 40% internas, y el 10% (un caso) internacionales, la tensión entre Irán-EEUU, Israel.

2.3 Tensiones: evolución anual

2.3.1 África

África Occidental

Guinea	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Interna Gobierno
Actores:	Gobierno, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad, partidos políticos de oposición, sindicatos

Síntesis:
La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantuvieron durante años al país en una situación de inestabilidad. En 2021 la tensión política en el país se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de finales de 2020 que dieron al presidente Alpha Condé su tercer mandato, señalado por la oposición como inconstitucional. La crisis política derivó en un nuevo golpe de Estado el 5 de septiembre de 2021, encabezado por el coronel Mamay Doumbouya, que derrocó al Gobierno presidido por Condé.

Las tensiones entre la Junta Militar y la oposición política se mantuvieron a lo largo del año tras no lograrse avances en el dialogo nacional, y se incrementaron las señales de división en las fuerzas de seguridad. El año se inició con el mantenimiento de los esfuerzos del bloque regional de África Occidental (CEDEAO) para relanzar el llamado diálogo inclusivo interguineano que se había celebrado a finales de 2022 con el objetivo de reducir las tensiones entre la Junta Militar y los grupos políticos y de la sociedad civil, pero el Gobierno presidido por el teniente coronel Doumbouya lo rechazó, afirmando que el diálogo había concluido. Posteriormente, a principios de marzo se puso en marcha una nueva iniciativa para lograr la reanudación del diálogo nacional encabezada por líderes religiosos, que si bien logró celebrar varias rondas de negociaciones en la capital, Conakry, no logró avances tangibles para aliviar la crisis política. Las demandas de las Fuerzas Vivas de Guinea (FVG) –coalición opositora que incluye al ilegalizado Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), la Agrupación del Pueblo Guineano (APG) del ex presidente Condé y la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) de Cellou Dalein Diallo– giraron en torno a la liberación de las figuras de la oposición detenidas, el levantamiento de la prohibición de protestar y la creación de un nuevo diálogo nacional supervisado por la CEDEAO. A principios de mayo las FVG cancelaron su participación en el diálogo y se manifestaron en Conakry, en un acto que fue reprimido por las fuerzas de seguridad y que provocó la muerte de siete manifestantes y otros 32 resultaron heridos, según denunció las FVG. La tensión en la capital provocó que a finales de mayo las autoridades desplegasen el Ejército. En junio las FVG anunciaron la suspensión de las manifestaciones debido a la celebración del Eid al-Adha –la fiesta del sacrificio, una de las dos celebraciones más importantes del calendario islámico–, hecho que distendió provisionalmente la tensión. Posteriormente, un tribunal absolvió a tres líderes de la plataforma de la sociedad civil FNDC —entre ellos Oumar Sylla, alias Foniké Mengué— de todos los cargos que se les imputaban a mediados de 2022, aunque el fiscal apeló la decisión. La absolución era una de las principales condiciones previas de las FVG para reanudar las negociaciones con la Junta Militar. Durante el resto del año no se reanudaron las conversaciones y se mantuvieron las movilizaciones de la oposición contra el Junta.

De forma paralela a las tensiones con la oposición, **se produjeron diversos eventos vinculados con el crecimiento de la oposición a la Junta Militar en las fuerzas de seguridad**. Entre los más destacados, a finales de abril y principios de mayo, el presidente Doumbouya destituyó al jefe de la inteligencia militar, el teniente coronel Ismaël Keïta y a la principal figura de la Junta, el general Sadiba Coulibaly, como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Asimismo, disolvió el batallón a cargo de la seguridad presidencial. A finales de agosto se produjeron rumores de un intento de golpe de Estado en el país que habría enfrentado a las fuerzas de la Junta y la Guardia Nacional, provocando el arresto de un número indeterminado de oficiales militares. Finalmente, el 4 de noviembre, individuos armados liberaron de la prisión de Conakry al expresidente militar de Guinea, Moussa Dadis Camara, y a tres colaboradores cercanos que estaban siendo juzgados desde 2022 por la masacre del estadio de Conakry en 2009, aunque días después fueron capturados por las fuerzas de seguridad, con la excepción del ex ministro de Seguridad Presidencial, el coronel Claude Pivi, quien seguía prófugo al acabar el año. Estos hechos provocaron nuevas purgas en el estamento militar, siendo destituidos más de 60 soldados, gendarmes y funcionarios de prisiones acusados de colaboradores.

Por otro lado, durante el año **se fueron deteriorando las relaciones entre la Junta Militar y la CEDEAO**. A principios de febrero, los ministros de Relaciones Exteriores de Guinea, Malí y Burkina Faso se reunieron en Uagadugú, capital de Burkina Faso, y solicitaron a la CEDEAO y la UA el levantamiento de las suspensiones impuestas a los tres países tras los golpes militares de 2021 y 2022. Paralelamente, la Junta Militar guineana creó de forma unilateral un comité para supervisar la transición política en el país, ignorando los esfuerzos de la CEDEAO para crear un comité inclusivo. En octubre, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO dictaminó que las continuas detenciones del ex primer ministro Ibrahima

Kassory Fofana y dos ministros de la era Condé eran "arbitrarias" y ordenó su liberación inmediata, dando un plazo de tres meses para cumplir con la sentencia.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN

Síntesis:
Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el noroeste del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

En Nigeria persistió el clima de violencia política y de violencia criminal por parte de grupos criminales en el noroeste y centro-norte del país, mientras que la violencia con relación a la cuenca del Lago Chad (noreste) se incrementó respecto a 2022.[14] La celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 25 de febrero de 2023 contribuyó a agravar esta situación. A esto se añade el clima recurrente de violencia intercomunitaria entre ganaderos y agricultores del cinturón central del país, la persistencia de los enfrentamientos y acciones insurgentes en la región de Biafra[15] así como la proliferación de milicias y cuerpos de seguridad privados locales que ha tenido lugar en los últimos años.[16] En el conjunto del país se contabilizaron 3.272 eventos violentos que provocaron 8.510 víctimas mortales en 2023, según ACLED, si bien estas cifras incluían también la violencia asociada al conflicto armado con Boko Haram.[17] En los cuatro estados del noroeste del país (Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) –epicentro de la violencia de los grupos criminales– los actos de violencia provocaron 2.344 víctimas mortales, según ACLED –cifra que ascendía a 2.869 víctimas mortales si se incluye los estados de Kebbi y Sokoto–, prácticamente la mitad de las víctimas mortales en estos estados en relación con el año 2022 (4.481 víctimas mortales, 4.920 incluyendo a Kebbi y Sokoto) y en año 2021 (3.918, cifra que aumenta a 4.484 incluyendo a Kebbi y Sokoto). Las cifras evidenciaban una disminución de la violencia en estos estados durante 2023 en comparación con los años anteriores.[18] Entre los hechos más relevantes, cabe destacar un ataque con drones perpetrado por el Ejército que confundió una celebración religiosa con una concentración de grupos criminales en el estado de Kaduna en diciembre en el que murieron 85 civiles, hecho que recibió críticas nacionales e internacionales[19] hasta el punto que el Gobierno anunció la apertura de una investigación. Las acciones del Ejército, como el uso de bombardeos aéreos para perseguir a los grupos criminales, fueron duramente criticadas durante el año por su inefectividad y sus consecuencias hacia la población civil. Según ACNUR, las cifras de desplazamiento forzado en el conjunto del país se elevaron a casi 3,5 millones de personas, de las cuales casi 1,2 millones correspondían a los estados del noroeste y centro-norte.[20]

En lo concerniente a la evolución de la situación política y social, las elecciones tuvieron lugar en un clima de violencia política elevado, sobre todo en los estados del sur. La comisión electoral en enero advirtió que la inseguridad podría hacer descarrilar las elecciones generales previstas para el 25 de febrero y el 11 de marzo. El All Progressives Congress (APC) consolidó su poder al imponerse en las elecciones presidenciales y posteriormente amplió su control obteniendo victorias electorales –ratificadas en los tribunales a favor del APC– en las elecciones a gobernadores de estados, obteniendo un total de 22 de los 36 estados. El antiguo gobernador del estado de Lagos y candidato por el partido All Progressive Congress (APC) Bola Tinubu alcanzó la victoria en las presidenciales con el 36,61% de los votos (8,8 millones de votos), en un proceso electoral que

14. Véase el resumen sobre Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
15. Véase el resumen sobre Nigeria (Biafra) en este capítulo.
16. Véase el resumen sobre Nigeria en el capítulo 2 (Tensiones) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2023.
17. ACLED, Dashboard [consultado el 19 de febrero de 2024]. Esta cifra incluye tres tipos de eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados). Si incluimos las categorías de disturbios, protestas y eventos estratégicos, la cifra asciende a 8.764 víctimas mortales.
18. Esta cifra, no obstante, se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de bandas de criminales de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles.
19. Amnistía Internacional, Nigeria: Military attempting to cover up mass killing of civilians, 7 de diciembre de 2023.
20. UNHCR, Operational Data Portal – Nigeria, 30 de junio de 2023.

fue muy cuestionado por acusaciones de fraude. Los principales contendientes eran el antiguo vicepresidente Atiku Abubakar, del Peoples Democratic Party (PDP), y el antiguo gobernador del estado de Anambra, Peter Obi, por el Labour Party. Las elecciones generales se caracterizaron por un clima de violencia política, y el proceso se vio empañado por informes de compra de votos, intimidación de votantes, ataques a personal y oficinas electorales en ciertas áreas y acusaciones de fraude absoluto por parte de la oposición, lo que restó credibilidad al proceso. La Comisión Electoral (INEC) cometió errores en el proceso de visualización de resultados, según reconoció la propia comisión, lo que generó importantes críticas y desconfianza hacia los resultados y nuevas acusaciones de fraude. Estas circunstancias, junto con las declaraciones críticas hacia el INEC por parte de observadores y grupos de la sociedad civil, llevaron a las campañas de Abubakar, Obi y Rabi'u Kwankwaso a cuestionar y luego rechazar oficialmente los resultados electorales anunciados antes del 28 de febrero. Las tres principales candidaturas de la oposición, además de algunos grupos de la sociedad civil y el ex presidente Olusegun Obasanjo, pidieron a la INEC que volviera a celebrar las elecciones. El 29 de mayo Tinubu fue nombrado oficialmente presidente, aunque los recursos presentados por la oposición política y social no fueron desestimados hasta septiembre por el Tribunal de Peticiones para Elecciones Presidenciales, y nuevamente recurridos y rechazados definitivamente a finales de octubre por el Tribunal Supremo.

Tinubu sustituyó a todos los jefes de los servicios de inteligencia, nombró un gabinete de 48 ministros (uno de los más amplios de la historia reciente del país, incluyendo figuras relevantes de anteriores gobiernos)[21], intentó llevar a cabo reformas económicas impopulares y el año se vio marcado por una creciente inestabilidad social y económica,[22] debido al incremento de la inflación –cercana al 29%, cifras que no se veían en el país desde los años noventa, vinculada a la subida de precios de los productos básicos y la retirada del subsidio a la gasolina–, que provocó importantes protestas y movilizaciones sindicales. Además, la moneda oficial, la naira, había perdido un 41% de su valor (un 30% en el mercado paralelo) respecto al dólar entre mayo y diciembre.

Nigeria (Biafra)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)

Síntesis:
Tras la independencia en 1960, el Estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad, alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en el sureste del país -denominado como Biafra por los movimientos independentistas- a través de organizaciones noviolentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB.

En el sureste de Nigeria continuaron los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la insurgencia, que causaron decenas de víctimas mortales. El brazo armado del movimiento independentista IPOB, la Red de Seguridad del Este (ESN), continuó llevando a cabo acciones armadas durante todo el año. Según el centro de investigación ACLED, en 2023 se produjeron 660 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 776 personas en el conjunto de los 10 estados que componen la región de Biafra (Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Delta y Cross River, aunque fue en los cinco primeros, en los que la comunidad ibo es mayoritaria, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales vinculadas al conflicto). En 2022 el número de eventos ascendía a 703 y las víctimas mortales a 985. Esta cifra de ACLED incluía la violencia vinculada a los enfrentamientos armados de Biafra entre el Gobierno y grupos armados independentistas, que causaron decenas de víctimas mortales, pero también los múltiples ataques en esos estados cometidos por grupos criminales, así como los enfrentamientos de carácter intercomunitario por los usos y la propiedad de la tierra, así como por el acceso al agua, que causan cada año centenares de víctimas mortales.

Decenas de personas murieron durante el año como consecuencia del clima de inestabilidad, la recurrencia de las operaciones militares y los ataques contra puestos de policía y destacamentos militares, que supusieron

21. Adekaiyaoja, Afolabi, Tinubu's cabinet nominees: Renewed hope or recycled tropes?, African Arguments, 8 de Agosto de 2023.
22. Busari, Stephany, "Nigeria's Bola Tinubu sworn in as president, facing divided nation and economic woes," *CNN*, 29 de mayo de 2023.

un grave obstáculo para el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2023. Entre los hechos más destacados del año, en diciembre en un ataque en la localidad de Oba (estado de Anambra) contra una milicia de autodefensa murieron siete civiles y miembros de la milicia, y en septiembre un comando del IPOB llevó a cabo una emboscada en Ehime Mbano (en el estado de Imo) en la que murieron ocho miembros de los cuerpos de seguridad. A finales de septiembre, las Fuerzas Aéreas bombardearon dos lugares identificados como posibles bases de entrenamiento y armerías del IPOB en el área de Nnewi North (estado de Anambra) y en el área de Okigwe (Imo). En noviembre, el Gobierno del estado de Abia descubrió una fosa con 70 cuerpos, supuestamente de personas secuestradas para exigir rescate.

Cabe destacar unas declaraciones que se produjeron en octubre que podrían evidenciar tensiones en el seno del IPOB. Dos facciones importantes del IPOB emitieron mensajes contradictorios sobre planes futuros. El autoproclamado primer ministro del Gobierno de la República de Biafra en el exilio, Simon Ekpa, quien en agosto se había declarado comandante del nuevo Ejército de Liberación de Biafra (BLA), el 5 de octubre dijo que las autoridades de Biafra "pronto iniciarían un gobierno pleno". Sin embargo, dos días después, la facción dominante del IPOB afirmó que el grupo estaba abierto a conversaciones con el Gobierno Federal sobre la independencia de Biafra a través de un referéndum supervisado por la ONU, ofreciendo a Tinubu la oportunidad de iniciar un diálogo sobre la cuestión.[23] Además, el Tribunal Supremo reinstauró en diciembre de 2023 los cargos de terrorismo contra el líder del IPOB, Nnamdi Kanu, cargos que le había retirado el 13 de octubre de 2022 el Tribunal de Apelaciones de Abuja.[24] Esta decisión del Tribunal Supremo de diciembre podría hacer cambiar los anuncios previos realizados por los diferentes sectores del IPOB. El Tribunal Supremo señaló que Nnamdi Kanu debía ser juzgado por terrorismo aunque su extradición desde Kenya hubiera sido ilegal. Se teme que esta decisión provoque una escalada de la violencia por parte del IPOB.

Senegal	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Interna Gobierno
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Senegal obtuvo su independencia en 1960. Desde ese momento hasta el año 2000, el país estuvo gobernado por un sistema de partido único de Estado encabezado por el Partido Socialista de Senegal. A partir de ese momento Senegal inició un régimen multipartidista, y en las elecciones presidenciales del año 2000, el líder de la oposición, Abdoulaye Wade, logró la presidencia a manos del Partido Democrático Senegalés. Wade se mantuvo en el poder hasta el año 2012, siendo derrotado por Macky Sall, candidato de Alianza por la República. En el año 2019, Ousmane Sonko, un joven proveniente de la región sureña de Casamance, se presentó a las elecciones liderando el partido Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF por sus siglas en francés), con un programa político anticolonialista que ponía el foco en la falta de oportunidades para la juventud senegalesa. En las elecciones Sonko quedó tercero en la contienda, pero su figura creció en todo el país, que demandaba un cambio de Gobierno. Este hecho marcó el inicio de importantes movilizaciones encabezadas por la juventud senegalesa. Posteriormente, en febrero de 2021 Sonko es detenido, provocando que sus seguidores tomasen las calles en lo que consideraron un movimiento para anularle de la carrera presidencial. A partir de ahí se abrió una importante crisis política en el año 2022 entre el Gobierno presidido por Macky Sall y la oposición política y social.

Durante el año se incrementó la crisis política en el país entre el Gobierno y la oposición, provocando múltiples protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que provocaron la muerte de decenas de personas. En el mes de mayo las tensiones políticas que se habían iniciado en el país en el año 2022 aumentaron significativamente cuando el Tribunal de Apelación amplió de dos a seis meses la condena de prisión condicional impuesta a Ousmane Sonko, líder del partido opositor Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF por sus siglas en francés) por un caso de difamación. Este hecho podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales previstas, inicialmente, para febrero de 2024. La sentencia provocó protestas y enfrentamientos entre los seguidores de Sonko y las fuerzas de seguridad tanto en la ciudad de Ziguinchor –bastión de Sonko en la región de Casamance– como en la capital, Dakar, dejando al menos dos muertos. Posteriormente, en el otro juicio que enfrentaba Sonko acusado de violación, el 24 de mayo el fiscal solicitó al tribunal que declarara a Sonko culpable, solicitando una pena de diez años de cárcel. La petición volvió a movilizar a los seguidores de Sonko en una marcha de Ziguinchor a Dakar encabezada por el líder opositor. Posteriormente, el 1 de junio Sonko fue condenado a dos años de prisión por "corromper a la juventud", lo que le inhabilitaba de facto para las elecciones presidenciales, siendo absuelto del cargo de violación. El fallo motivó nuevas movilizaciones y protestas en el país –principalmente en Ziguinchor y Dakar– por parte de partidarios de Sonko, que denunciaron que el veredicto tenía motivaciones políticas. El 2 de junio, el Gobierno desplegó el Ejército en Dakar, y días después cerró el acceso a Internet. Las movilizaciones fueron

23. Ugwu, Chinagorom, 'We're now ready for dialogue with Nigerian govt,' – IPOB, Premium Times Nigeria, 7 de octubre de 2023.
24. Véase el resumen sobre Nigeria (Biafra) en el capítulo 2 (Tensiones) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2023.

duramente reprimidas, contabilizándose, según datos del Gobierno, 16 manifestantes muertos, mientras que Amnistía Internacional reportó 23 víctimas mortales, y el PASTEF elevó a 30 el número de personas muertas. Otras decenas de personas resultaron heridas y se detuvo a unas 500 personas en todo el país.

En este contexto de tensión, el 3 de julio el presidente, Macky Sall anunció que no se presentaría a la reelección, en lo que hubiese representado su tercera candidatura a la presidencia. El anuncio distendió provisionalmente las tensiones en el país, ya que era una de las principales demandas de la oposición. Sin embargo, a finales de julio, la Policía arrestó a Sonko bajo la acusación de planear una insurrección, el Gobierno disolvió el PASTEF y volvió a restringir el acceso a Internet desatando nuevas protestas sociales y enfrentamientos que dejaron dos personas muertas. En respuesta, Sonko anunció el inicio de una huelga de hambre, siendo ingresado en el hospital el 6 de agosto. Múltiples personalidades senegalesas, entre ellas el ex ministro Serigne Diop y el presidente de la Liga Senegalesa de Derechos Humanos, Alassane Seck, firmaron una petición exigiendo la liberación de Sonko y el retorno a la legalidad del PASTEF. Posteriormente, el 14 de diciembre, el tribunal de primera instancia de Dakar reincorporó a Sonko al registro electoral, permitiéndole poder presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el Gobierno impugnó ante el Tribunal Supremo la decisión judicial. La coalición "Sonko President 2024" nominó a Sonko como candidato presidencial en una ceremonia realizada de forma virtual el 31 de diciembre, luego de que las autoridades prohibieran la reunión de nominación inicialmente programada para el 30 de diciembre en Dakar, citando riesgos para el orden público.[25] Al finalizar el año, la tensión política en el país se mantenía a las puertas de la convocatoria de las elecciones presidenciales, y Sonko mantenía los cargos de incitación a la insurrección, conspiración con grupos terroristas y amenaza a la seguridad del Estado.

Cuerno de África

Eritrea – Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	Eritrea, Etiopía

Síntesis:
En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía. Desde entonces persistió un clima de alta tensión, con miles de soldados en la frontera común, enfrentamientos esporádicos y una retórica beligerante. En 2018 se alcanzó un acuerdo histórico entre ambos Estados, dando inicio al restablecimiento de relaciones diplomáticas, reapertura de vuelos y de sus fronteras. No obstante, el optimismo inicial decayó al poco, ya que después de unos meses, en 2018 la frontera volvió a cerrarse y quedaron numerosos asuntos sin resolver. La guerra entre Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré entre 2020 y 2022 contribuyó a que los antiguos enemigos se aliaran para luchar contra el TPLF, pero viejos agravios y nuevas disputas podrían amenazar con reanudar el conflicto.

En el caso de Eritrea y Etiopía, cinco años después de la firma del histórico acuerdo de paz entre ambos Estados, la guerra entre Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré entre 2020 y 2022 contribuyó a que los antiguos enemigos se aliaran para luchar contra el TPLF, pero viejos agravios y nuevas disputas podrían amenazar con revivir el conflicto, según diversos análisis. El hecho de que ni las milicias y fuerzas especiales de la región de Amhara ni Eritrea participaran del acuerdo de Sudáfrica de noviembre de 2022 entre Etiopía y el TPLF, y que ambos actores hubieran deseado eliminar la resistencia del TPLF en lugar de alcanzar un acuerdo, entre otras cuestiones, contribuyeron a incrementar la tensión entre Eritrea y Etiopía.[26] Durante 2023 movimientos de tropas en la frontera común y la ausencia de contactos entre las partes, además de informes sobre un posible apoyo de Eritrea a las milicias amhara Fano y a la insurgencia oromo del OLA, que combaten a los cuerpos de seguridad etíopes, elevaron las alarmas.[27] En paralelo, aunque se había anunciado la práctica retirada de las tropas eritreas de territorio etíope, diferentes análisis alertaron también de la presencia de tropas eritreas en localidades etíopes cercanas a la frontera común.

Fuentes militares eritreas[28] sugirieron que su país se estaba preparando para una posible guerra. Según

25. Le Monde, "*Senegal's authorities prohibit nomination meeting planned for opposition leader Sonko*", 30 de diciembre de 2023.
26. Kheir Omer, Mohammed, "How Eritrea Could Derail the Ethiopian Peace Deal", *Foreign Policy,* 10 de noviembre de 2022.
27. Kheir Omer, Mohammed, "Are Ethiopia and Eritrea on the Path to War?", *Foreign Policy,* 7 de noviembre de 2023.
28. Ibid.

análisis, Etiopía acumuló tropas cerca de la frontera con Eritrea en la localidad etíope de Zalambessa, que está a 100 millas de la capital eritrea, Asmara, y cerca de la frontera con la Región Sureña del Mar Rojo, que incluye el puerto eritreo de Assab, que está a 45 millas de la frontera con Etiopía y que podría resultar difícil de defender para Eritrea. Esas zonas recientemente fueron testigos de una mayor actividad aérea y movimientos de tropas.

Las tensiones aumentaron en octubre, cuando Abiy manifestó el "derecho" de Etiopía al acceso al mar, enfatizando sus reclamos históricos sobre la costa del Mar Rojo.[29] Los líderes regionales vieron sus comentarios, que Abiy había expresado durante mucho tiempo en privado, como una amenaza implícita de apoderarse de parte de Eritrea, cuya secesión de Etiopía en 1991 dejó a este último sin salida al mar. La desconfianza creciente, así como la movilización de fuerzas y acumulación de armamento en la zona fronteriza generaron un clima de preocupación. El acuerdo de principios de 2024 entre Etiopía y Somalilandia en torno al posible acceso etíope a la costa de esta región en disputa con Somalia puso de manifiesto que Etiopía seguía empeñada en maximizar sus intereses estratégicos, a costa de un deterioro de las relaciones con sus vecinos,[30] acuerdo que podía contribuir a reducir el interés etíope hacia los puertos de Eritrea.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:
El régimen que ha gobernado Etiopía desde 1991 se ha enfrentado a una serie de movimientos opositores que reclamaban avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) estuvo controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que gobernó el país entre 1991 y 2019 con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. El régimen federal étnico implantado por el EPRDF no resolvió la cuestión nacional, lo que alimentó la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas –entre las cuales, disolver la coalición EPRDF y refundarla en un nuevo partido de ámbito nacional, el Prosperity Party (PP), que rehuía el federalismo étnico– dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal controlado por el PP y el TPLF, que culminó con una guerra (2020-2022), en la que Eritrea y las milicias de la región de Amhara apoyaron al Gobierno Federal. El acuerdo entre el Gobierno y el TPLF que puso fin a la guerra no hizo partícipes a Eritrea y a las milicias amhara. Estas milicias, al verse forzadas a desarmarse se rebelaron, iniciando un nuevo conflicto. En paralelo, otros movimientos político-militares, como el grupo armado oromo OLA, cuestionan el proyecto nacional de Abiy Ahmed. Por último, otros focos de tensión hacen referencia a su proyecto de hegemonía regional y la defensa de sus intereses nacionales (competencia por los recursos hídricos con sus vecinos Egipto y Sudán y diversificación del acceso al mar vía sus vecinos Djibouti, Eritrea y Somalilandia).

El país continuó afectado por numerosos retos y focos de inestabilidad y violencia internos y de dimensiones regionales.[31] Entre los retos de carácter interno cabe destacar, en primer lugar**, las consecuencias de la guerra en la región de Tigré**, una de las más graves de los últimos años en términos de víctimas mortales y otros múltiples impactos como desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otros. Durante el año el Gobierno Federal y el movimiento político-militar de la región continuaron implementando el acuerdo de paz de noviembre de 2022, a pesar de los numerosos retos abiertos, de la fragilidad de la situación, de las vulneraciones de los derechos humanos y la hambruna que seguía afectando a la región.[32] En segundo lugar, **la situación en la región de Oromiya siguió siendo de extrema gravedad durante el año 2023**, constatándose una persistencia de los enfrentamientos y ataques por parte el grupo armado Ejército de Liberación Oromo (OLA) y de acciones de contrainsurgencia de los cuerpos de seguridad federales.[33] En 2023 los cuerpos de seguridad federales ya no contaron con el apoyo de las milicias amhara Fano para combatir al OLA, ya que el anuncio en abril por parte del Gobierno Federal de desarmar y disolver las fuerzas especiales en todo el país y en especial las fuerzas especiales amhara y las milicias amhara Fano, y su integración en la Policía y en el Ejército, fue rechazado por estas milicias. Este anuncio desencadenó

29. The Economist, "Ethiopia's prime minister wants a Red Sea harbour", *The Economist*, 2 de noviembre de 2023.
30. Véase el resumen sobre Etiopía-Somalia en este capítulo.
31. Véase los resúmenes sobre Eritrea-Etiopía y de Etiopía-Somalia en este capítulo.
32. Véase el resumen sobre Etiopía (Tigré) en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África). Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
33. Véase el resumen sobre Etiopía (Oromiya) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

una escalada de los enfrentamientos entre estas y los cuerpos de seguridad federales. Las milicias amhara se replegaron en su mayoría a la región de Amhara, donde iniciaron una guerra de guerrillas contra el Gobierno Federal. Desde entonces se produjo una escalada de violencia, represión y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y estas milicias, a las que se les unieron parte de las fuerzas de seguridad regionales que desertaron de sus puestos.[34] Cabe destacar también que sectores disidentes de la región de Benishangul-Gumuz se opusieron al acuerdo de desarme de 2022 del Movimiento Democrático Popular de Gumuz, lo que derivó en un incremento de las actividades de grupos secesionistas y acciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad en Benishangul-Gumuz y también en Gambella, entre otras regiones. El Gobierno Federal continuó lidiando con demandas y movilizaciones de actores político-militares vinculados a los más de 80 grupos étnicos de Etiopía.

En el plano regional, **Etiopía, Egipto y Sudán** acordaron reanudar las conversaciones de cara a alcanzar un acuerdo respecto del contencioso relativo a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés), pero no se produjeron avances en las diferentes rondas de negociación celebradas durante el año, y Etiopía consiguió llevar a cabo el llenado de la presa a pesar de la oposición de sus vecinos Egipto y Sudán.[35] Por último, cabe destacar el memorando de entendimiento alcanzado entre Etiopía y Somalilandia que desencadenó una grave crisis diplomática entre Somalilandia y Somalia y, en especial, una escalada de la tensión entre **Etiopía y Somalia** que podría tener consecuencias regionales.[36] Además, se produjo un paulatino deterioro de las relaciones entre **Eritrea y Etiopía**, países que hace cinco años firmaron un histórico acuerdo de paz y que apenas hace dos años estuvieron colaborando en el conflicto armado contra el TPLF, movimiento político-militar de la región de Tigré. El fin de la guerra y la marginación de Eritrea en el acuerdo de paz entre el TPLF y el Gobierno Federal etíope podría amenazar con reanudar el conflicto entre ambos, según diversos análisis.[37]

Etiopía-Somalia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Territorio, Recursos Internacional
Actores:	Etiopía, Somalia, Somalilandia

Síntesis:
El conflicto entre Etiopía y Somalia se remonta al siglo XIV, cuando los gobernantes de las tierras altas cristianas de Etiopía llevaron a cabo expediciones militares en las tierras costeras donde predominaba el Islam, particularmente en lo que hoy es el norte de Somalia, para abrir rutas comerciales que les dieran acceso al mar. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el emperador etíope Menelik conquistó la ciudad somalí de Harar y en 1891 anunció un ambicioso programa de expansión, y tras la I Guerra italo-etíope (1895-1896), en la que derrotó a la Italia colonial, consiguió el reconocimiento de su independencia ante los poderes coloniales. En respuesta a la amenaza expansionista de Menelik, muchos clanes de lo que se convirtió en la Somalilandia británica aceptaron la protección británica. Tras la derrota en la II Guerra italo-etíope contra la Italia de Mussolini y el posicionamiento etíope en la IIGM, Etiopía consiguió a finales de la década de los 1940, para consternación de los somalíes, que la región somalí de Ogadén fuera entregada a Etiopía por el Imperio británico. Tras la independencia de Somalia en 1960, ambos países se enfrentaron en diversas guerras (1964, 1977-1978, 1982) en las que Somalia fue derrotada. La guerra civil somalí de finales de los años ochenta y el colapso de Somalia en 1991 situaron a Etiopía en clara ventaja militar y económica y convirtieron a Somalia en una cuestión de seguridad nacional para Etiopía, interviniendo en los asuntos internos somalíes para promover la paz y la seguridad en Somalia en defensa de sus propios intereses, no siempre coincidentes con los intereses somalíes. Etiopía apoyó a unos actores político-militares en detrimento de otros y mantuvo presencia militar permanente unilateral y no pública y posteriormente dentro de marcos multilaterales (AMISOM y actualmente ATMIS), hecho que ha sido instrumentalizado por el grupo armado de Somalia al-Shabaab para justificar en parte su campaña armada.

La firma de un memorando de entendimiento[38] entre Etiopía y Somalilandia el 1 de enero de 2024 desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas entidades y Somalia y, en especial, una escalada de la tensión entre Etiopía y Somalia que podría tener consecuencias regionales. Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de cincuenta años, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente. Addis Abeba matizó que todavía debía evaluar esa petición, y prometió "una evaluación en profundidad[39]. El acuerdo, según diversos análisis, podría girar en torno al puerto de Lugaya, cerca de la frontera con Djibouti, o al puerto de Berbera, que recientemente fue ampliado por la compañía de logística portuaria DP World, con base en EAU. Etiopía históricamente ha

34. Véase el resumen sobre Etiopía (Amhara) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
35. Véase el resumen sobre Etiopía-Egipto-Sudán en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África). Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
36. Véase el resumen sobre Etiopía-Somalia en este capítulo.
37. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en este capítulo.
38. Faisal, Ali, "Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports", *The Guardian*, 1 de enero de 2024.
39. Ehl, David, "Polémico acuerdo: salida al mar a cambio de reconocimiento", *DW*, 4 de enero de 2024.

buscado diversificar su acceso al mar, ya que el 95% de su comercio se realiza a través de Djibouti. Las tensiones entre Etiopía y Djibouti, en parte debido a las quejas etíopes sobre las tarifas portuarias de Djibouti y la excesiva burocracia, podrían haber influido en el cálculo de Abiy Ahmed de cara a promover este acuerdo. El acuerdo también incluía arrendar terreno de Somalilandia para construir una base naval. A cambio, Somalilandia recibiría el valor equivalente en forma de acciones de la aerolínea Ethiopian Airlines. La oficina del primer ministro etíope celebró el acuerdo pero no hizo ninguna mención al reconocimiento de la independencia de Somalilandia, solo hizo mención a un compromiso de avanzar en intereses mutuos sobre la base de la reciprocidad. Somalia declaró nulo el acuerdo e incluso amenazó a Etiopía con iniciar una guerra si fuera necesario para preservar su soberanía nacional, ya que Somalia continúa considerando a Somalilandia como parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional. Se convocaron manifestaciones contrarias al acuerdo en Somalia. En la propia Somalilandia el acuerdo fue recibido con protestas y la dimisión del ministro de Defensa. EEUU, UE, UA, IGAD y la Liga Árabe, entre otros, hicieron un llamamiento al diálogo y a reducir la tensión. La organización regional IGAD, a través del Gobierno de Djibouti, que ocupa la presidencia rotatoria, convocó de urgencia una reunión extraordinaria el 18 de enero de 2024 para abordar las tensiones diplomáticas, a la que Etiopía anunció que no podría asistir por solapamiento con la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Según diversos análisis,[40] aunque es improbable una confrontación entre ambos países, debido al poder militar etíope frente al somalí, este acuerdo puede dañar gravemente las relaciones entre ambos países y tener consecuencias en la guerra contra el grupo islamista somalí al-Shabaab. Un clima de rechazo hacia Etiopía en Somalia podría cuestionar la presencia de tropas etíopes en la misión de la UA en el país, ATMIS, de la que Etiopía es uno de los principales países contribuyentes.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:
La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. El padre de la independencia y fundador de KANU, Jomo Kenyatta, gobernó el país desde 1964 hasta su muerte en 1978, y fue sucedido por el autocrático Daniel Arap Moi. En 1991 Moi inició una transición hacia el fin del régimen de partido único, y en 1992 se celebraron las primeras elecciones multipartidistas, también ganadas por KANU. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder a Moi se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki, que junto a desafectos de KANU y otros, crearon la National Alliance of Rainbow Coalition (NARC) y derrotaron a Uhuru Kenyatta, hijo del líder de la independencia y candidato oficialista de KANU. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política instrumentalizado durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.500 personas y unas 600.000 se vieron desplazadas. Tras ese proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibabi y Raila Odinga (hijo del histórico líder opositor Oginga Odinga). En las elecciones de 2013 Uhuru Kenyatta obtuvo la presidencia del país y William Ruto la vicepresidencia, proceso electoral cuestionado por la oposición liderada por Raila Odinga, al igual que en 2017, cuando Kenyatta revalidó el poder. Ruto y Odinga se enfrentaron en las elecciones de 2022, también afectadas por irregularidades y en medio de un clima de violencia política, como en los anteriores procesos, en las que obtuvo la victoria Ruto. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por el robo de ganado y la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenya en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, y tensiones entre Kenya y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

La situación en el país se vio marcada por la persistencia de los ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en el este y el noreste y de la violencia intercomunitaria y de la criminalidad principalmente en el norte y el centro-norte, vinculada a disputas estructurales en torno a robos de ganado y los usos y la propiedad de la tierra agravadas por la extrema sequía y las inundaciones derivada de las consecuencias del cambio climático. En este sentido, el Gobierno anunció que las inundaciones vinculadas al fenómeno climático El Niño habrían causado la muerte de 120 personas y el desplazamiento de decenas de miles de personas entre octubre y finales de noviembre.[41]

Según datos de ACLED,[42] durante 2023 se registraron 147 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en los cuatro condados fronterizos con Somalia (Mandera, Wajir, Garissa y

40. Weldemariam, Alemayehu, "Ethiopia's deal with Somaliland upends regional dynamics, risking strife across the Horn of Africa", *The Conversation*, 13 de enero de 2024.
41. Reuters, "Death toll from Kenya's El Nino floods jumps to 120", *Reuters*, 28 de noviembre de 2023.
42. ACLED, en línea [consultado el 15 de febrero de 2024].

Lamu), donde se concentra la mayoría de los hechos de violencia vinculados con acciones del grupo armado de corte yihadista al-Shabaab, que costaron la vida a 297 personas. Estas cifras suponen un incremento con respecto al año anterior (109 eventos violentos y 170 víctimas mortales en los cuatro condados fronterizos). En relación con las acciones de al-Shabaab, en la primera parte del año el grupo estuvo más inactivo y a partir de abril reanudó la intensidad de acciones de años anteriores. EEUU en octubre lanzó una alerta sobre posibles atentados inminentes del grupo armado en la capital. Además, en septiembre EEUU y Kenya firmaron un acuerdo de cooperación militar para hacer frente a las acciones de al-Shabaab en el país y colaborar en otros aspectos nacionales e internacionales de mutuo interés. Si a la cifra de víctimas mortales como consecuencia de las acciones de al-Shabaab se le añade la violencia intercomunitaria (principalmente en el centro y norte del país, aunque no exclusivamente) y otros hechos de violencia en el conjunto del país, el balance asciende a 541 eventos violentos que causaron 741 víctimas mortales., En 2022 en el conjunto del país se habían producido 440 eventos y 482 víctimas mortales.[43] Entre las disputas intercomunitarias más destacadas del año se encuentran los enfrentamientos transfronterizos entre los condados de Kericho y Kisumu, que causaron decenas de víctimas mortales y que provocaron la intervención de operativos policiales, así como las disputas en otros condados donde las disputas tienen un carácter más estructural, como en Turkana, Marsabit, Samburu e Isiolo.

En paralelo, en diferentes momentos del año se produjeron importantes movilizaciones y protestas de la oposición contra el Gobierno en las que la intervención policial causó diversas víctimas mortales y detenciones de centenares de opositores. Cabe destacar que la discusión previa y la posterior aprobación en junio del proyecto de ley de finanzas de 2023, que duplicaba el impuesto al combustible, incrementaba los precios del maíz e introducía un nuevo impuesto a la vivienda, eliminando subsidios previos, provocó importantes movilizaciones y protestas durante todo el año. El partido del líder opositor Raila Odinga, de la coalición Azimio la Umoja, hizo un llamamiento al boicot de las nuevas medidas introducidas. El Gobierno defendió la necesidad de introducir estas tasas de cara a estabilizar la economía ante la grave volatilidad impuesta por la evolución de la situación a nivel internacional. Además, en diciembre el secretario del Tesoro, Njuguna Ndun'gu, admitió que el Gobierno había sido incapaz de hacer frente a los pagos de los funcionarios públicos durante cinco meses. Por otra parte, la alianza Kenya Kwanza (partido gobernante del presidente William Ruto) y la principal coalición opositora, Azimio la Umoja, mantuvieron contactos bilaterales durante el año hasta que en agosto acordaron la creación del Comité de Diálogo Nacional (NDC) con una agenda de diálogo para hacer frente a diversos desacuerdos y bloqueos entre ambos, entre ellos el alto coste de la vida en el país y los resultados de las elecciones de 2022. El NDC se reunió con otros partidos políticos y grupos de la sociedad civil a partir de septiembre, y a finales de noviembre publicó un informe con recomendaciones entre las que destacaba un llamamiento a la restructuración y reconstitución de la comisión electoral, una auditoría de las últimas elecciones presidenciales, la solicitud de revisión de la política impositiva, la racionalización del gasto público, la expansión de la protección social y la reducción del coste de la vida. El Gobierno celebró las recomendaciones. No obstante, el 28 de noviembre el Tribunal Superior dictaminó que el impuesto salarial introducido por Ruto en junio era ilegal, lo que asestó un golpe a los esfuerzos del Gobierno por aumentar los ingresos fiscales, y uno de los líderes de Azimio, Kalonzo Musyoka, celebró lo que calificó como la victoria de la coalición opositora.

Por último, cabe destacar que Nairobi retiró sus tropas de RDC en el marco de su participación en la misión de la EAC y estuvo preparando el despliegue de tropas en Haití,[44] aunque esta cuestión seguía pendiente a finales de año a la espera de la su aceptación por parte del Tribunal Supremo de Kenya.

Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Tansformateurs), grupos armados chadianos (entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas, Francia

Síntesis:
Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un complejo clima de inestabilidad y violencia desde su independencia en 1960. La diversidad étnica del país se ha visto instrumentalizada por una tradición de faccionalismo. El colonialismo francés también exacerbó la animosidad entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista, división instrumentalizada políticamente y que forma parte del núcleo del conflicto. Los sucesivos gobiernos desde 1966 se han visto confrontados por insurgencias que pretendían

43. Si a esta cifra se le añade la violencia vinculada a protestas y a movilizaciones con disturbios en 2023, el número de eventos violentos alcanzó la cifra de 2.248 eventos y las 1.011 víctimas mortales, cifra superior a los 1.660 eventos y a las 698 víctimas mortales para 2022.
44. Véase el resumen sobre Haití en este capítulo.

acceder al poder. Libia y Francia históricamente han estado presentes en los asuntos internos chadianos, apoyando, respectivamente, a insurgencias y gobiernos. Idriss Déby alcanzó el poder tras un golpe de Estado en 1990. La reforma de la Constitución en 2005 le permitió convertirse en uno de los líderes más longevos del continente, pero fue el germen de una insurgencia compuesta por desafectos al régimen. Tras su muerte en 2021 una junta militar dio un golpe de Estado e instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente. Durante 2022 Déby hijo alcanzó un acuerdo con parte de la insurgencia en Doha y celebró el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) que le permitió prolongar su mandato más allá de la promesa inicial de una transición de 18 meses. A esta situación se añaden otros focos internos de inestabilidad como son los periódicos brotes de violencia intercomunitaria por robo de ganado y la propiedad y usos de la tierra, la persistencia de acciones insurgentes en el norte y la minería ilegal. Y desde una perspectiva regional, el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra de la vecina Sudán, así como la participación en la ofensiva regional contra Boko Haram en la región del Lago Chad.

Chad continuó inmerso en un clima de inestabilidad y violencia tras la prolongación del mandato presidencial en octubre de 2022 y la celebración del referéndum constitucional en diciembre de 2023. El periodo de transición de 18 meses adoptado en abril de 2021 por el consejo militar que ocupó el poder mediante un golpe de Estado –y que suspendió la Constitución e instaló a Mahamat Idriss Déby, hijo de Idriss Déby, tras la muerte de este– fue prolongado por un nuevo periodo de 24 meses. Esa decisión de la junta militar desencadenó movilizaciones en su contra, que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad, causando decenas de víctimas mortales (50 según el Gobierno, incluyendo a 10 policías, y 100 según la oposición, mayoritariamente civiles), en lo que se ha conocido como el Jueves Negro chadiano, el 20 de octubre de 2022.[45] Tras este nuevo periodo de transición se prevé la celebración de elecciones en octubre de 2024 a las que se podrá presentar Mahamat Déby. La actuación represiva de los cuerpos de seguridad, los brotes esporádicos de violencia en el norte por parte del grupo armado FACT y los enfrentamientos en torno al robo de ganado y usos de la tierra fueron una constante durante 2023, aunque se redujeron respecto al año 2022. En el conjunto del país se contabilizaron 148 eventos violentos que provocaron 264 víctimas mortales en 2023, según ACLED,[46] cifras inferiores a los 239 eventos violentos y 742 víctimas mortales de 2022.

Durante 2023 el Gobierno de transición puso en marcha el comité organizador del referéndum constitucional –una de las recomendaciones derivadas del proceso de diálogo (DNIS) celebrado en 2022[47]– que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023. El referéndum fue boicoteado por varias figuras de la oposición política y de la sociedad civil[48] que continuaron denunciando que el proyecto de Constitución se centraba en un Estado unitario en detrimento del federal, la falta de participación de los principales actores políticos y la rapidez en la elaboración del censo, que no abarcó a todo el electorado, especialmente en las provincias del sur. La nueva Constitución, elaborada bajo la tutela de la Junta Militar, fue aprobada con baja participación sobre todo en las principales ciudades y en particular el sur del país. La Comisión Electoral dictaminó el 24 de diciembre que la Constitución contó con el apoyo del 86% de los votos, con una participación del 63,75%. Figuras como el antiguo primer ministro Pahimi Padacké y el antiguo ministro Yaya Dillo cuestionaron los resultados. Según la oposición, este referéndum constitucional pretendía reforzar los poderes del presidente, y legitimar un Estado más centralista y el proceso de transición iniciado con el golpe de Estado cometido en abril de 2021 al facilitar que el líder de la Junta Militar, Mahamat Déby, pueda presentarse a las elecciones que deberán celebrarse en 2024.

La aprobación de la nueva Constitución comportó la renovación del Gobierno de transición del antiguo líder opositor cooptado por la Junta Militar, Saleh Kebzabo, y el nombramiento del antiguo líder opositor Succès Masra el 2 de enero de 2024 como nuevo primer ministro.[49] Masra había retornado el 3 de noviembre después de un año en el exilio, donde había vivido desde octubre de 2022 tras la represión a la movilización civil que causó decenas –alrededor de 300, según la oposición– de víctimas mortales. El acuerdo para su regreso, facilitado por la CEEAC, se alcanzó en Kinshasa e incluye una amnistía para todos los actores militares y civiles involucrados en los actos violentos del 20 de octubre de 2022, y el compromiso de Masra de apoyar el proceso de transición y promover la reconciliación. El 5 de noviembre, las autoridades liberaron a 72 miembros del partido opositor Les Transformateurs que habían estado detenidos desde 2022. El 19 de noviembre, Masra se dirigió a cientos de seguidores en la capital, N'Djamena, e instó a la reconciliación con la cúpula militar. El movimiento de la plataforma opositora civil Wakit Tama se negó a reconocer la amnistía y el líder del partido Les Démocrates rechazó el acuerdo e instó a que se hiciera justicia para las víctimas de la represión policial de 2022. A pesar de las amnistías e indultos, numerosos opositores seguían encarcelados como consecuencia de

45. Véase el resumen sobre Chad en el capítulo 2 (Tensiones). Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2023.
46. ACLED, Dashboard [consultado el 19 de febrero de 2024]. Esta cifra incluye cinco tipos de eventos violentos (batallas, violencia contra civiles, acciones con artefactos explosivos improvisados, disturbios y protestas). Si se excluye los disturbios y protestas, la cifra de eventos violentos cae a 86 y, en cambio, se mantiene una cifra similar de víctimas mortales (259).
47. Para profundizar en la cuestión, véase Josep Maria Royo, "Claves y retos de la transición en Chad (2) esperanzas frustradas con el proceso de paz y el diálogo nacional", Escola de Cultura de Pau, *Apunts ECP de Conflictos y Paz Nº23*, Diciembre de 2022; Josep Maria Royo, "Claves y retos de la transición en Chad (1) Cambio climático, inestabilidad y conflicto", Escola de Cultura de Pau, *Apunts ECP de Conflictos y Paz Nº19*, Noviembre de 2022.
48. Josep Maria Royo, "Chad, ante un referéndum constitucional que perpetúa la dinastía Déby", *Africaye,* 16 de diciembre de 2023.
49. Al-Jazeera, "Former Chad opposition leader appointed as PM of transitional government", *Al-Jazeera*, 1 de enero de 2024.

las movilizaciones de octubre de 2022. En este sentido, la aceptación de Masra del cargo generó opiniones encontradas en sectores opositores y de la sociedad civil.[50] Sin embargo, tal y como destacó el International Crisis Group (ICG) en enero de 2024, Déby afirmó en los días siguientes su autoridad, ya que el nuevo gobierno mantuvo figuras clave del gobierno anterior, mientras que Masra aseguró sólo tres ministerios para su partido. En un probable intento por reforzar el control sobre las acciones de Masra, según el ICG, Déby el 8 de enero de 2024 nombró a otra figura que había abandonado Les Transformateurs, Moustapha Masri, como jefe adjunto de su gabinete civil. El partido gobernante Movimiento Patriótico de Salvación del difunto presidente Idriss Déby nominó al presidente Mahamat Déby como candidato para las elecciones presidenciales previstas para el 13 de octubre de 2024.

El presidente golpista de Chad reforzó sus poderes mediante el referéndum constitucional de diciembre de 2023 que le permitirá presentarse a las elecciones de octubre de 2024

Por otra parte, diversos análisis también señalaron que Déby había fracasado en la puesta en marcha del comité que debía llevar a cabo el seguimiento de las resoluciones de las conversaciones de paz de Doha y que no estaba implementando las recomendaciones del diálogo nacional. Entre junio y julio Déby retiró a un centenar de generales y promovió a un número similar de jóvenes oficiales próximos a él al rango de general (alrededor de 500 generales en el país, una de las cifras más altas a nivel mundial en proporción al Ejército). En paralelo, el presidente de la Comisión de la UA, el chadiano Moussa Faki, reiteró que los militares chadianos no deberían poder presentarse a las elecciones de 2024 y deberían entregar el poder a los civiles. A principios de julio el Gobierno de transición estableció la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, en consonancia con el Acuerdo de Doha, así como también estableció otra comisión sobre reconciliación nacional y cohesión social. El 16 de octubre, las autoridades de transición declararon que se había dado comienzo al proceso de desarme, desmovilización y reintegración, según señaló la ONU en noviembre.

El Gobierno de transición llevó a cabo diversos indultos y decretó una amnistía de los responsables de las protestas antigubernamentales del 20 de octubre de 2022 así como de diversos actores político-militares en diferentes fases. En diciembre de 2022 la fiscalía del país había condenado a 262 personas arrestadas durante las protestas y decretado la libertad de otras 139 personas en un juicio que no contó con las garantías procesales según estándares internacionales. En febrero de 2023 se celebró el juicio de alrededor de 400 miembros del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT, por sus siglas en francés) capturados en abril de 2021 durante los combates que condujeron a la muerte del presidente Idriss Déby, y que fueron sentenciados a cadena perpetua. El presidente Mahamat Déby indultó a 380 de ellos, así como a otros 259 activistas encarcelados por su participación en las movilizaciones de octubre de 2022. El líder del FACT, Mahamat Mahdi Ali, sentenciado junto a otros *in absentia*, no recibió el indulto. En julio otras 110 personas fueron indultadas por su participación en las movilizaciones del 20 de octubre de 2022.

El FACT rompió en agosto el alto el fuego unilateral que mantenía desde abril de 2021 como consecuencia de la ofensiva iniciada ese mes por parte del Ejército Nacional de Libia y las Fuerzas Armadas chadianas en la región de Tibesti (norte). Aunque el Gobierno no había acordado ningún alto el fuego con el grupo, sí que había liberado a cientos de sus miembros de cara a facilitar su participación en el proceso de Doha, y también tras la sentencia de marzo. Esta ofensiva debilitó al grupo armado hasta el punto de que el secretario general del FACT, Mahamat Barh Béchir Kendji, se entregó a principios de noviembre a las autoridades chadianas junto con centenares de combatientes. El 9 de noviembre el FACT acusó de traición a Kendji. Los miembros de la coalición opositora Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), compuesta por los 18 grupos armados que no firmaron el acuerdo de Doha (entre ellos, el FACT), manifestaron su voluntad de negociar con las autoridades de transición con el apoyo de una mediación neutral e imparcial, aunque no recibieron respuesta del Gobierno de transición.

En el plano regional, cabe destacar que se deterioraron las relaciones bilaterales entre Chad y Sudán por acusaciones del Ejército de Sudán y de su ministro de Exteriores de que Chad estaba facilitando que Emiratos Árabes Unidos pudiera dar apoyo al grupo paramilitar sudanés Rapid Support Forces. En paralelo, en el marco de la disolución de la misión de la ONU en Malí (MINUSMA), Chad llevó a cabo el retorno de su contingente en la misión. Por otra parte, Mauritania y Chad, los dos últimos miembros de la misión G5-Sahel, alianza creada en 2014 para hacer frente al yihadismo y otros desafíos en la subregión, anunciaron su disolución el 6 de diciembre, tras el anuncio de la retirada de Níger y de Burkina Faso. En paralelo, cabe destacar que la muerte de un soldado chadiano a manos de un soldado francés en la base militar francesa de la localidad de Faya, en la provincia de Borkou, en septiembre, provocó movilizaciones sociales exigiendo la retirada de las tropas francesas del país. Las autoridades establecieron una comisión de investigación conjunta francesa-chadiana. Estas protestas incrementaron la hostilidad hacia la presencia francesa, lo que derivó en octubre en una carta de 20 líderes de partidos políticos y organizaciones sociales locales y de la diáspora, entre ellos la plataforma Wakit Tama, exigiendo a Déby la retirada de las tropas francesas de Chad.

50. Africanews, "Tchad : Masra nommé Premier ministre, réactions mitigées à N'Djamena", *Africanews*, 2 de enero de 2024.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social

Síntesis:
RDC vive inmersa en un ciclo de inestabilidad y violencia que tiene sus orígenes en la época colonial bajo la tutela primero del rey belga Leopoldo II y posteriormente de Bélgica. El país no escapó de las dinámicas internacionales de la Guerra Fría por lo que la crisis persistió tras su independencia en 1965, a partir del golpe de Estado y posterior dictadura de Mobutu Sese Seko (1965-1997). Se vio afectado también por las dinámicas regionales de conflicto en los países vecinos durante los años ochenta y noventa, en especial el genocidio de Ruanda de 1994 y su injerencia en RDC. La rebelión con apoyo ruandés de 1996 contra el régimen de Mobutu condujo a la caída del régimen en 1997, seguida por la "primera guerra mundial africana" (1998-2003) en la que participaron una decena de países de la región.[51] La transición entre 2003 y 2006 contribuyó a afianzar en el poder a Joseph Kabila, que mediante el control del aparato del Estado, fraude e irregularidades en las elecciones de 2006 y 2011, consiguió prolongar su mandato de 2016 (cuando debía celebrarse un nuevo proceso electoral) a 2018. En la profunda y persistente crisis que afecta al país confluyen las promesas frustradas de democratización, un elevado clima de corrupción y clientelismo, la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno se ejerce a través del a menudo recurrente uso excesivo de la fuerza y de graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. En 2018 se celebraron nuevas elecciones que significaron la primera transición pacífica en el país y comportaron la controvertida subida al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor Étienne Tshisekedi, mediante una frágil coalición en la que los partidarios de Joseph Kabila (la coalición FCC) siguieron ejerciendo su determinante influencia. Este clima de inestabilidad política convive con la persistencia del conflicto en el este de RDC, atravesado por dinámicas locales, regionales e internacionales.

La situación en RDC se agravó durante el 2023 como consecuencia de la violencia política vinculada a la contienda electoral, a lo que se sumó la escalada de la violencia en los diferentes escenarios de conflictividad. En primer lugar, a partir de octubre se intensificó la ofensiva por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte.[52] Esta escalada en el último trimestre del año, además de las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF)[53] y otros grupos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, contribuyeron a la persistencia de un clima general de inseguridad. La ofensiva también se sumó al clima general de violencia política vinculada a la campaña electoral que culminó con las elecciones generales del 20 de diciembre. Por último, cabe constatar el conflicto armado iniciado a mediados de 2022 en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país), que se intensificó en 2023, y se extendió a las provincias vecinas de Kwango, Kwilu, Kinshasa y Kongo Central, causando centenares de víctimas mortales.[54]

El 20 de diciembre se celebraron las elecciones generales en la RDC, en las que el presidente Félix Tshisekedi fue reelegido para un segundo mandato tras haber conseguido más del 73% de los votos con un 43% de la participación, según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), resultado ratificado por el Tribunal Constitucional. El presidente Félix Tshisekedi era el favorito en la carrera electoral, con la oposición fragmentada. Asumió el cargo en 2019 después de elecciones disputadas que, según diversas fuentes, podrían haber sido ganadas por otro candidato, Martin Fayulu. Las elecciones de 2023 se vieron plagadas de irregularidades, según numerosos analistas y la Conferencia Episcopal congolesa, y varios de los principales candidatos pidieron una repetición y denunciaron la existencia de fraude, entre ellos Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege y el partido del ex presidente Joseph Kabila.[55] Problemas logísticos, acusaciones de fraude, recuento opaco de votos, equipos defectuosos y retrasos en la entrega del material electoral obligaron a una extensión no programada de las elecciones, que los líderes de la oposición dijeron que era inconstitucional. La Iglesias católica y protestante de RDC, que actuaron como observadores locales de los comicios, informaron que los numerosos casos de irregularidades detectados podrían afectar a la integridad de los resultados. El Gobierno descartó la repetición electoral y prohibió las protestas de la oposición en los días posteriores a los comicios. En paralelo, los resultados provisionales de las elecciones legislativas fueron publicados por la CENI el 14 de enero y dieron como ganador al partido de Félix Tshisekedi, Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), que obtuvo 66 de los 500 escaños, incrementando el resultado obtenido en 2018 (35 escaños). Se espera que UDPS, junto al resto de los partidos aliados de la coalición Union Sacré, que en el Parlamento saliente controlaba 390 escaños, pueda configurar el nuevo Gobierno. Los partidos de algunos aliados de Tshisekedi, como el del presidente del Senado Modeste Bahati Lukwebo, el del ministro de Defensa Jean Pierre Bemba, y el del

51. Véase la síntesis sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
52. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
53. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
54. Véase el resumen sobre RDC (oeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
55. Kombi, Yassin y Rolley, Sonia, Congo's Katumbi says election should be annulled as opposition plans protest, *Reuters*, 23 de diciembre de 2023.

ministro de Economía Vital Kamerhe, obtuvieron 35, 17 y 32 escaños, respectivamente. Esta grave situación postelectoral alimentó una disputa que amenaza con desestabilizar el país y la región.

En el período previo a las elecciones, grupos de derechos humanos habían acusado a las autoridades de restringir el espacio político, y la ONU documentó violencia contra actores de la sociedad civil.[56] Desde octubre, organizaciones como Human Rights Watch alertaron de enfrentamientos en todo el país entre partidarios de partidos políticos rivales que resultaron en agresiones y violencia sexual.[57] Dichos incidentes de violencia política persistieron tras la celebración de las elecciones. Los partidarios del gobernante partido UDPS se vieron implicados en amenazas y ataques contra líderes opositores y periodistas. Los partidarios de la oposición también estuvieron implicados en actos de violencia. Los combates entre los cuerpos de seguridad y sus aliados y el M23 en el este del país también impidieron que 1,5 millones de personas desplazadas internas se registraran para votar.

En este sentido, la seguridad en el este se deterioró durante el mandato de Tshisekedi[58] y a finales de 2023 había una cifra récord de siete millones de personas desplazadas internamente.[59] Aunque entre abril y octubre se redujeron los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo M23, tras culminar en el primer trimestre el despliegue de la misión militar de la organización regional Comunidad de Estados de África Oriental (EAC), iniciado en noviembre de 2022, este grupo continuó combatiendo contra grupos armados locales progubernamentales por el control del territorio en la provincia de Kivu Norte. No obstante, en octubre se intensificó la ofensiva del M23 en Kivu Norte, con apoyo de Rwanda.[60] La misión de la EAC completó su retirada del país el 21 de diciembre, a petición del Gobierno debido a su inoperancia. En paralelo, se produjeron conversaciones entre el Gobierno congolés y Sudáfrica, iniciadas en marzo, y que culminaron con el despliegue de una fuerza de la SADC en la zona con el objetivo de colaborar en las operaciones de combate de las FARDC contra el M23. En mayo fue aprobado por la SADC el despliegue de la Misión de la SADC en RDC (SAMIDRC), que se hizo efectivo el 15 de diciembre de 2023. Cabe remarcar que a principios de 2024 se hizo también efectiva la primera fase de la retirada de la MONUSCO, con la partida de 2.000 cascos azules del país.

Uganda	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, ADF

Síntesis:
El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió la toma del poder al derrocar al Gobierno de Tito Okello. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria, con todo el poder concentrado en sus manos y en su partido, el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRA, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema multipartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de 2011 y 2016 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental contra las demandas de cambio democrático y las protestas contra el incremento del coste de la vida. En 2021 volvió a ganar las elecciones enfrentándose al nuevo líder de la oposición, el joven Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine. En paralelo, las intervenciones militares de Uganda en Somalia y RDC (este) incrementaron las amenazas del grupo armado somalí al Shabaab y del grupo armado ugandés con base en RDC, ADF, hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias y agravios instrumentalizados en período electoral.

La situación en RDC se agravó durante el 2023 como consecuencia de la escalada de la violencia en los diferentes frentes abiertos en el país, a los que se sumó la violencia política vinculada a la contienda electoral

El año estuvo marcado por la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición política, el incremento de la inseguridad provocada por los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), así como por la aprobación de la ley que criminaliza y persigue a la comunidad LGTBIQ+. Durante el año, en lo que respecta a las tensiones políticas que mantiene el Gobierno de Yoweri Museveni con la oposición política, estas se volvieron a intensificar en el último trimestre después de que el Gobierno restringiera el derecho de reunión del principal partido opositor, Plataforma de Unidad Nacional (NUP). Este hecho se produjo tras el anuncio del NUP del inicio de una gira de campaña

56. Security Council Report, "Democratic Republic of the Congo: Briefing and Consultations", *SCR*, 27 de septiembre de 2023.
57. Human Rights Watch, "DR Congo: Electoral Violence Threatens Vote", *HRW,* 16 de diciembre de 2023.
58. The News Humanitarian, "Gaza's historic toll, DR Congo elections, and a city falls in Sudan: The Cheat Sheet", 22 de diciembre de 2023.
59. IOM, "Record High Displacement in DRC at Nearly 7 Million", *IOM,* 30 de octubre de 2023.
60. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) de este informe y en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

por todo el país, llamada "marcha de un millón". Posteriormente, el 5 de octubre, la Policía arrestó a su líder, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, en el aeropuerto de Entebbe cuando regresaba de un viaje al extranjero. En respuesta, el 26 de octubre, la oposición abandonó el Parlamento por tercera vez en dos semanas, exigiendo un debate sobre los derechos humanos y el fin de la represión de los partidos de la oposición y provocando el bloqueo del Parlamento hasta el mes de diciembre.

Más allá de crisis política, Uganda también tuvo que hacer frente al deterioro de la situación de seguridad en el país debido al incremento de las acciones armadas de ADF y a la violencia provocada por el robo de ganado en las regiones septentrional y oriental del país, incluyendo la frontera con Kenya. **En relación con la inseguridad provocada por las ADF y por la inestabilidad en la vecina RDC,**[61] en febrero, los jefes militares de la Comunidad de África Oriental (EAC) acordaron que Uganda (así como Burundi y Sudán del Sur) desplegaran tropas en la provincia de Kivu Norte (este de RDC) para luchar junto a las fuerzas kenianas contra los rebeldes del M23 y otras insurgencias como las ADF. A finales de marzo, unos 1.000 soldados ugandeses fueron desplegados en la ciudad de Bunagana, en la provincia de Kivu Norte. A mediados de junio, presuntos miembros de las ADF atacaron una escuela secundaria en la ciudad de Mpondwe, cerca de la frontera con RDC, matando al menos a 44 personas, en su mayoría niños y niñas. En respuesta, los Ejércitos de Uganda y RDC intensificaron las operaciones contra las ADF en el valle de Mwalika, territorio de Beni (Kivu Norte), y según los informes, mataron a 16 combatientes, entre ellos a varios líderes del grupo. Posteriormente, el 13 de octubre, presuntos miembros de las ADF emboscaron un vehículo civil en Katojo, cerca de la frontera con RDC, matando a dos personas, y días después mataron a dos turistas extranjeros y a su guía local en el Parque Nacional de la Queen Elisabeth. Si bien el 25 de octubre el Gobierno anunció una amnistía para los miembros de las ADF que estuvieran dispuestos a rendirse, en diciembre las ADF intensificaron los ataques en suelo ugandés, llevando a cabo dos atentados con bombas en Kampala que hirieron a una persona, y un ataque en la aldea de Kitehurizi, en el distrito de Kamwenge, en el cual diez civiles fueron asesinados y cientos se desplazaron de sus hogares.

Por otro lado, **en relación con incidentes violentos relacionados con el robo de ganado**, en la región de Karamoja, fronteriza con Kenya y Sudán del Sur, durante el año persistieron los ataques de presuntos ladrones de ganado que dejaron decenas de muertos. El 11 de mayo el Ejército desplegó tropas adicionales en Karamoja, en un intento por contener los robos de ganado y la violencia entre pastores y agricultores. También a mediados de mayo el presidente Yoweri K. Museveni promulgó una orden ejecutiva por la que se prohibía la entrada en Uganda a los pastores turkanas kenianos, acusados de múltiples robos de ganado y asesinatos en suelo ugandés.

Finalmente, en otros eventos destacados del año, en febrero el Gobierno anunció el cierre de la oficina de ACNUDH en Uganda, hecho que fue criticado por activistas y grupos de defensa de los derechos humanos ugandeses, en particular, por el Foro de Concienciación y Promoción de los Derechos Humanos. Por otro lado, el 21 de marzo el Parlamento aprobó casi por unanimidad un **proyecto de ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo**, que fue ratificado y promulgado en ley por el presidente Museveni a finales de mayo, lo que provocó una amplia condena a nivel internacional. En particular, el presidente de EEUU, Joe Biden, condenó la medida como una "trágica violación" de los derechos humanos, anunciando restricciones de visado a personas que "socavan el proceso democrático" en Uganda y excluyó al país de la iniciativa comercial africana por violaciones de los derechos humanos. Grupos de derechos humanos ugandeses instaron al Banco Mundial (BM) a suspender los préstamos a Uganda, y el 8 de agosto este organismo anunció la congelación de nuevos préstamos a Uganda, provocando que el shilling ugandés cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi ocho años.

Magreb – Norte de África

Túnez	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados con agendas yihadistas

Síntesis:
Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición

61. Para más información, véase el resumen sobre RDC (ADF-este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS. Desde mediados de 2021, Túnez está inmerso en una nueva crisis, en un contexto caracterizado por los intentos de concentración del poder por parte del presidente Kais Saïed.

Durante 2023 **se intensificó la deriva autoritaria del presidente Kais Saïed y la represión de voces críticas y también se registraron preocupantes ataques contra la población migrante subsahariana**. En línea con las medidas observadas desde mediados de 2021, a lo largo del año Saïed siguió concentrando poder y disminuyendo los mecanismos de equilibrio de poderes y control al Ejecutivo. Tras la segunda ronda de las elecciones legislativas celebrada en enero, un nuevo Parlamento se instauró en marzo en medio de críticas de la principal coalición opositora. El Frente de Salvación Nacional (FSN) no reconoció la legitimidad del nuevo Legislativo, surgido de comicios con una tasa de participación del 11% y que, según denunciaron diversas voces, cuenta con muchos menos poderes según lo establecido en la Constitución promovida por el propio Saïed y adoptada en 2022. El mismo mes de marzo el presidente tunecino decidió unilateralmente disolver los concejos municipales electos democráticamente y reemplazarlos por nuevas autoridades locales, escogidas con nuevas normas. Estas elecciones locales celebraron su primera ronda en diciembre –la segunda estaba prevista para febrero de 2024–, y también contaron con una bajísima tasa de participación (11%) en medio de llamamientos al boicot. Figuras de la oposición e intelectuales insistieron en que esta votación solo contribuiría a consolidar el sistema represivo en el país. Durante todo el año, se produjeron constantes y numerosas acciones legales, detenciones y condenas contra representantes de la oposición y otras voces críticas, empresarios y periodistas. Figuras del partido de inspiración islamista Ennahda se vieron especialmente afectadas por esta campaña. Su líder, **Rachid Ghannouchi, fue detenido en abril tras alertar de que la persecución a las fuerzas islamistas podía derivar en una guerra civil y fue condenado en mayo a un año de cárcel por cargos de terrorismo**. Las autoridades tunecinas ordenaron el cierre de las oficinas centrales y varias regionales de Ennahda, en lo que fue considerado como una prohibición no oficial del partido. Las medidas contra la oposición fueron denunciadas por entidades de la sociedad civil tunecina y actores internacionales, entre ellos ACNUDH, que exigió la liberación de las personas detenidas arbitrariamente en el país norteafricano. Durante todo el año se produjeron manifestaciones para demandar la excarcelación de personas detenidas y protestar por la deriva antidemocrática, el incremento en el coste de la vida y el deterioro de la situación socioeconómica, que a finales de año se reflejaba en las carencias de productos básicos y tensiones en algunas zonas del país.

Otra dinámica destacada de la tensión en el país estuvo relacionada con la situación de la población negra migrante, refugiada o solicitante de asilo, que padeció un incremento de la persecución y agresiones, en especial tras unas polémicas declaraciones de Saïed. En febrero, **el presidente tunecino aseguró que el flujo de migrantes subsaharianos formaba parte de un "plan criminal" destinado a cambiar la composición demográfica del país y relacionó a la población migrante con violencia y criminalidad**.[62] Las palabras de Saïed motivaron una reprobación de actores dentro y fuera de Túnez, incluyendo de la UA –que se mostró "preocupada y consternada por la forma y fondo de las declaraciones"–, así como denuncias de racismo por parte de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tras las declaraciones del mandatario hubo una oleada de detenciones –más de 800 migrantes solo en febrero– y **se intensificaron los ataques violentos, que se sucedieron en los meses siguientes dejando una treintena de personas muertas y decenas heridas**. Los incidentes más violentos se produjeron en Sfax, localidad que fue escenario de protestas contra la población migrante y enfrentamientos hasta finales de año y en la que murieron dos jóvenes subsaharianos (uno en mayo y otro en julio). Paralelamente, se denunciaron masivas expulsiones de migrantes subsaharianos –más de 2.000 de 16 nacionalidades– a remotas áreas fronterizas con Argelia y Libia en las que habrían muerto dos y 28 personas, respectivamente, algunas de hambre y sed, según denunció ACNUDH.[63] Otras fuentes elevaron a 4.000 la cifra de expulsiones y entre 50 y 70 las víctimas mortales.[64] Voces expertas de la ONU instaron a las autoridades tunecinas a detener las deportaciones, recordaron que las expulsiones colectivas están prohibidas por el derecho internacional y alertaron sobre el incremento de los discursos racistas y de odio en el país. En agosto, el secretario general de la ONU exigió que se reubicara a la población deportada a sitios seguros. A pesar de estas controvertidas acciones contra la población migrante, la UE suscribió a mediados de año un memorando de entendimiento con el Gobierno tunecino para que pudiera intensificar los controles fronterizos y frenar los flujos de personas hacia Europa. El acuerdo motivó críticas a la UE por parte de diversas voces, incluyendo desde el Parlamento Europeo y organizaciones como HRW, que subrayaron que el pacto no incluía garantías sobre los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo ni provisiones para evitar que las ayudas europeas llegaran a entidades responsables de vulneraciones.[65] En octubre, Saïed

62. Lilia Blaise, Tunisia's President Saied claims sub-Saharan migrants threaten country's identity, *Le Monde*, 23 de febrero de 2023.
63. ACNUDH, Türk: Los derechos humanos son un antídoto contra las políticas imperantes de distracción, engaño, indiferencia y represión, 11 de septiembre de 2023.
64. Lorenzo Tondo, 'I had to drink my own urine to survive': Africans tell of being forced into the desert at Tunisia border, *The Guardian*, 28 de septiembre de 2023.
65. Human Rights Watch, Tunisia, *World Report 2024*, 2024.

optó por devolver el dinero que había recibido de la UE en el marco de este convenio. En otro ámbito, durante el último trimestre la crisis en Gaza también tuvo eco en Túnez, con un ataque de manifestantes contra una instalación judía (en octubre) y una iniciativa legal para criminalizar la normalización de relaciones con Israel que no prosperó tras ser objetada por Saïed. Según trascendió, el Gobierno tunecino recibió presiones de EEUU para frenar la propuesta. Finalmente, respecto a la acción de grupos armados en el país, en 2023 se registró una actividad limitada.

En diciembre las autoridades informaron de la muerte de tres personas identificadas como "terroristas" en la zona de Kasserine. En mayo se produjo un incidente violento en una sinagoga que dejó cinco personas muertas, pero las autoridades lo atribuyeron a un acto criminal y no lo calificaron como un acto terrorista. **Algunos análisis subrayaron el declive de la actividad yihadista en el norte de África, incluyendo en Túnez, en contraste con la mayor actividad reciente de grupos con este tipo de agendas en** África subsahariana.[66] La rama de AQMI en Túnez no ha reivindicado un ataque desde 2019 y balances indican que las ofensivas de grupos de inspiración yihadista en Túnez -de ISIS, AQMI u otros actores- pasaron de 47 en 2017 a tan solo cuatro en 2022. Ninguno de estos últimos cuatro ataques fue atribuido a ningún grupo. Especialistas advierten, no obstante, que el deterioro de la situación política y socioeconómica en el país podría favorecer una mayor actividad futura de este tipo de organizaciones.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

Haití	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:
La grave crisis multidimensional que atraviesa el país –con altos niveles de violencia, movilizaciones masivas, parálisis institucional, fragilidad económica, crisis sociopolítica y humanitaria, control de áreas significativas del país por parte de bandas armadas– se agudizó con el asesinato del Jovenel Moïse en 2021 y el fortalecimiento y alianza de las numerosas bandas armadas que operan en el país. Sin embargo, la fragilidad sociopolítica e institucional del país se remonta a la dictadura de François y Jean-Claude Duvalier (1957-86), el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide en 1991 tras las primeras elecciones democráticas en la historia del país, la deriva autocrática del mismo Aristide tras su reinstauración en el poder (1994) y su salida abrupta y forzada del país en 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de varias fuerzas y misiones internacionales –Fuerza Multinacional Provisional (2004), MINUSTAH (2004), MINUJUSTH (2017,) BINUH (2019), Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (2023)–, la aplicación de sanciones y embargos de armas por parte de Naciones Unidas, o el desembolso de cuantiosos recursos por parte de la cooperación internacional no han logrado revertir la inestabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

En 2023 se agudizó la crisis política, humanitaria y de seguridad sin precedentes que vive el país tras el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. En 2023 se registraron 4.789 homicidios, un aumento del 119,4 % respecto al año anterior, con una tasa de 41 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo y un incremento notable respecto del 2022 (18 homicidios cada 100.000 habitantes). El número de secuestros en 2023 se incrementó en un 83% respecto de 2022 y alcanzó los 2.490. **Según Naciones Unidas, a finales de año las bandas de crimen organizado –más de 300– controlaban más del 80% de la región metropolitana de la capital, así como las principales rutas de connexión de Puerto Príncipe con el resto del país y algunas infraestructuras clave para la prestación de servicios básicos**. Más allá de la región metropolitana de la capital, varios informes señalaron que las bandas de crimen organizado habían expandido notablemete su cobertura territorial, especialmente hacia el valle del Artibonite y las regiones de las ciudades de Gonaives (noroeste) y Cabo Haitiano (norte). A finales de 2023, unos dos millones de personas vivían en áreas controladas por las bandas criminales. La situación de violencia y de enfrentamientos entre las dos principales coaliciones de organizaciones criminales (llamadas G9 y GPèp) se incrementó notablemente en la segunda mitad del año, especialmente tras la muerte de uno de los líderes y fundadores de la coalicion G9 a mediados de noviembre. Según ACLED, el número de víctimas mortales por enfrentamientos entre bandas rivales fue de más de 450, mientras que los enfrentamientos entre dichos grupos armados y las fuerzas de seguridad del Estado ascendieron a más de 460. También cabe destacar la proliferación de grupos civiles y milicias de autodefensa en las principales zonas urbanas del país, y especialmente la creación del grupo Bwa Kale en abril de 2023 para prevenir la implantación de las bandas criminales en determinados barrios de la capital. Según datos oficiales, solamente entre abril y septiembre de 2023, se habrían registrado 388 linchamientos de presuntos miembros de bandas criminales. Según ACLED, las muertes reportadas por actos de milicias de autodefensa (alrededor de 300) representaron el 15% de la violencia política en 2023. A modo de ejemplo,

66. Aaron Zelin, All Quiet on the North African Jihadi Front, The Washington Institute for Near East Policy, 6 de junio de 2023.

el 24 de abril, grupos civiles de autodefensa mataron al menos a 57 miembros de bandas armadas en varios barrios de Puerto Príncipe.

En cuanto a la situación humanitaria del país, **Naciones Unidas advirtió en diciembre que Haití era uno de los nueve países del mundo que enfrentan riesgo de hambruna, con 4,35 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria**, una de las peores tasas del mundo en proporción a la población del país. El número de personas que necesitaban ayuda humanitaria casi se ha duplicado en los últimos tres años. OCHA también advirtió sobre el riesgo de colapso de los servicios básicos, como la atención sanitaria y la educación. En cuanto a este último aspecto, Naciones Unidas también declaró que los ataques contra escuelas por parte de miembros de pandillas se habían multiplicado por nueve en 2023 y la OCHA estima que un millón de menores no van a la escuela, lo que aumenta el riesgo de reclutamiento por parte de las pandillas. En cuanto al impacto de la violencia de las bandas en el sistema de salud, se multiplicaron los ataques contra personal sanitario y hospitales, algunos de los cuales tuvieron que cerrar (como el de Médicos Sin Fronteras en Puerto Príncipe) o no pudieron funcionar por falta de combustible, material médico o personal. **ACLED estima que más de 650 civiles murieron a manos de las decenas de bandas armadas que operan en el país**. Además, **en las zonas controladas por dichas bandas, varias ONG denunciaron la utilización de la violencia sexual contra mujeres y niñas como arma de guerra**, intimidación, control territorial y dominación. Solamente entre enero y agosto de 2023 se denunciaron un total de 3.056 casos de violación, un aumento del 49% en comparación con 2022, aunque la cifra podría ser mucho mayor. Según otras estimaciones, la violencia sexual se incrementó un 80% respecto del año anterior. Según la OACNUDH y la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, otras de las prácticas que padece la población civil en áreas controladas por grupos armados son, además de la violencia sexual, los secuestros a usuarios de transporte públicos, saqueos de casas, granjas, campos y ganado, así como destrucción de canales de riego. Finalmente, cabe destacar que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que en diciembre de 2023 había más de 310.000 personas desplazadas internamente, y que el 60% de las mismas lo había hecho en 2023, especialmente en la región metropolitana de la capital. Además del desplazamiento interno, la situación de violencia y de precariedad económica motivó un incremento sin precedentes en el número de personas que abandonaron el país. Solamente en 2023, se estima que más de 100.000 personas haitianas entraron de forma irregular en EEUU.

En 2023 se agudizó la crisis política, humanitaria y de seguridad sin precedentes que vive Haití tras el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en julio de 2021

Ante tal situación, el 2 de octubre **el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad** (MSS, por sus siglas en inglés) con el objetivo principal de apoyar a la Policía Nacional Haitiana a restaurar la seguridad, proteger infraestructuras y rutas de comunicación vitales para el país y crear las condiciones propicias para la celebración de elecciones. Aunque fue el Consejo de Seguridad quien aprobó la resolución que crea la MSS para un período de 12 meses bajo mandato del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, esta no es una misión de dicha organización, sino una coalición ad hoc de países liderada por Kenya y que se financiará a través de contribuciones voluntarias mediante un fondo fiduciario de Naciones Unidas. A petición del Gobierno haitiano, Naciones Unidas llevaba más de un año discutiendo formatos de intervención para hacer frente al agravamiento de la situación de seguridad. El secretario general de la ONU había hecho varios llamamientos en ese sentido, y el propio Consejo de Seguridad había establecido previamente en 2022 un régimen de sanciones y un embargo de armas que prorrogó en 2023. Además, paises como EEUU y Canadá habían enviado equipamiento militar a la Policía para reforzar sus capacidades. A principios de 2024, más de tres meses después de la aprobación de la resolución que creaba a la MSS, todavía había serias dudas sobre algunas cuestiones operativas de la misión. Algunos análisis sostienen que la MSS estará conformada por entre 2.500 y 5.000 efectivos de una docena de países, pero algunos de los países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados o Belice) que habían expresado su compromiso con la misión todavía no habían concretado su contribución a la misma. Incluso la participación de Kenya, el país que lidera la MSS y en el que la oposición al Gobierno cuestionó tal despliegue de tropas en el extranjero, estaba pendiente de una resolución judicial de la Corte Suprema.

En el plano político, la situación también se deterioró notablemente en el último trimestre del año. Cabe recordar que **en Haití no se han celebrado ningunas elecciones desde el año 2016, que ninguna de las dos Cámaras del Parlamento sesiona desde enero de 2020** (cuando finalizó el mandato de la mayor parte de diputados y senadores) y que el mandato de los últimos 10 senadores finalizó en enero de 2023. El primer ministro de facto, Ariel Henry, asumió el cargo a mediados de 2021 tras el asesinato de Jovenel Moïse sin ser elegido directamente en unos comicios y, desde entonces, ha liderado el Gobierno con el apoyo de una parte significativa de la comunidad internacional pero con una importante oposición política y social interna y unos altos niveles de movilización y protestas. Ante tal situación, a mediados de año CARICOM convocó al Gobierno y a la oposición a una cumbre en Kingston (Jamaica) para tratar de lograr un acuerdo que facilitara una transición más inclusiva y la celebración de unas nuevas elecciones. Una delegación de ex mandatarios de CARICOM facilitó las conversaciones en la segunda mitad del año (con cinco visitas al país), pero al

finalizar el año no solamente no se había logrado ningún acuerdo, sino que varias de las organizaciones políticas y sociales participantes en el diálogo abandonaron las conversaciones, exigieron la renuncia inmediata de Henry y se unieron a los partidos opositores que lideran las protestas antigubernamentales.

Honduras	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:
En las últimas décadas Honduras ha tenido una de las tasas de homicidios más altas de la región y del mundo, llegando en 2011 a ser el país con una mayor tasa de homicidios del mundo. Las autoridades hondureñas atribuyen buena parte de los altos niveles de violencia que experimenta el país a las llamadas maras (como la Mara Salvatrucha o la Mara 18), que se han expandido en las dos últimas décadas, y a organizaciones de crimen organizado y de narcotráfico, que se fortalecieron significativamente durante los dos mandatos del ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado, juzgado y condenado en EEUU por delitos vinculados al narcotráfico. Paralelamente, el país ha experimentado notables crisis políticas y altos niveles de polarización social, especialmente durante el mandato de Manuel Zelaya (2006-2009) y tras el golpe de Estado de 2009 que le derrocó y provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya. Este, tras retornar al país en 2011, ha liderado una de las principales formaciones políticas del país. En diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro decretó el estado de emergencia para hacer frente a los altos niveles de criminalidad del país, provocando numerosas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

En 2023 el país vivió un incremento de las protestas sociales y políticas, un alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, así como una importante crisis política que paralizó el Parlamento durante cuatro meses y agudizó las tensiones entre el Gobierno y la oposición. Además, aunque en Honduras hubo una ligera disminución en el número de homicidios respecto de 2022, el país siguió teniendo una de las tasas de homicidios más altas de América Latina (y del mundo) y varios análisis observaron un incremento de los enfrentamientos entre bandas de crimen organizado y entre éstas y las fuerzas de seguridad del Estado. El Gobierno declaró que en 2023 se habían registrado 3.030 homicidios, 631 menos que en 2022. En línea con la reducción paulatina en la tasa de homicidios que observa el país desde que alcanzara su pico histórico en 2011 (85 cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios en 2023 (31,1) fue inferior a la de los años precedentes (38,1 en 2022; 41,7 en 2021; 38,9 en 2020; y 44,7 en 2019). Sin embargo, tal tasa sigue siendo de las más altas de América Latina (solamente superada por Ecuador, si no se contempla el Caribe) y del mundo. La presidenta, Xiomara Castro, declaró en varias ocasiones que la reducción en el número de homicidios y otros delitos durante el 2023 se debía principalmente a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, que se fue renovando sucesivamente a lo largo de 2023 y que es aplicable en 17 de los 18 departamentos del país –concretamente en 158 de los 298 municipios del país. El estado de emergencia permite a la Policía Militar apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad pública, permite a las Fuerzas Armadas y de seguridad llevar a cabo detenciones y allanamientos sin orden judicial y suspende algunos derechos constitucionales como la libertad de asociación, reunión y circulación. Según el Gobierno, solamente en el primer mes de aplicación de la medida extraordinaria, se desarticularon 39 bandas de crimen organizado y se detuvo a 652 personas. Castro también señaló que gracias al estado de emergencia había 48 municipios del país (de un total de 298) en los que no se había registrado ningún homicidio.

Sin embargo, la organización ACLED señaló que las medidas desplegadas por el Gobierno habían tenido resultados ambivalentes en los niveles de seguridad del país. Por un lado, con respecto al año anterior, el número de ataques de grupos armados contra población civil se redujo en un 14%, mientras que el número de civiles asesinados en tales ataques también se redujo en un 7%. Por otra parte, según ACLED, entre enero y noviembre de 2023 se incrementaron en un 45% respecto del año anterior los enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y grupos armados, especialmente en los departamentos de San Francisco Morazán y Cortés (donde están Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente), en los que el Gobierno desplegó 20.000 policías en diciembre de 2022 para apoyar las operaciones contra las pandillas. Además, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, en 2023 se incrementó tanto el número de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado como el número de homicidios múltiples –concretamente, en 2023 se registraron 44 masacres (o homicidios múltiples, con un mínimo de tres víctimas mortales) que provocaron la muerte de 209 personas, un 27% más que en el año anterior. Por tanto, según ACLED, la disminución en el número de muertes violentas afectó significativamente a los homicidios relacionados con la violencia interpersonal y no tanto a los homicidios atribuidos a bandas armadas y actividades de extorsión. En este sentido, en diciembre la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señalo que el 11% de la población hondureña fue víctima de extorsión en 2023, dos puntos porcentuales más que hace un año. Por otra parte, algunos análisis sostienen que las bandas armadas de crimen organizado no solamente incrementaron su actividad en 2023, sino también su alcance territorial. Si bien históricamente estas se habían concentrado en áreas urbanas, recientemente se observa un claro incremento de la criminalidad en áreas rurales. Tal

tendencia podría estar motivada por la mayor presión de las fuerzas de seguridad contra bandas armadas de crimen organizado tras la imposición del estado de emergencia y la creciente militarización de la seguridad pública del país, pero algunos análisis también apuntan a una reorganización de las redes criminales a raíz de la extradición en julio de 2022 del expresidente Juan Orlando Hernández a EEUU por tráfico de drogas y armas.

También cabe destacar que Honduras, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, tuvo la tasa de feminicidios más alta de América Latina (6 cada 100.000 habitantes), más del doble que el segundo país, República Dominicana (2,9). En diciembre la CEPAL señaló que una mujer era asesinada cada 21 horas. Estos datos son consistentes con los del Centro de Derechos de Mujeres, que en 2023 registró la muerte violenta de 386 mujeres. En noviembre, organizaciones de derechos humanos denunciaron que en 2023 habían sido asesinadas 47 personas LGTBI+, 194 desde el año 2001. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras denunció que 97 periodistas, comunicadores sociales y propietarios de medios han muerto de manera violenta en Honduras desde 2001. Por su parte, OACNUDH denunció que entre enero y septiembre de 2023 fueron asesinadas 15 personas defensoras de los derechos humanos, la mayoría (más de un 81%) vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y que en el mismo período se documentaron 297 agresiones contra 267 defensores de derechos humanos y 105 periodistas en Honduras. Además, en 2023 también se registró un incremento sin precedentes en el número de personas refugiadas y migrantes en territorio hondureño, muchas de las cuales sufrieron violencia, extorsión y otras prácticas. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el número de personas refugiadas y migrantes que ingresaron, se registraron y transitaron por Honduras en 2023 se elevó hasta las aproximadamente 545.000, casi el triple que en 2022 y máximo histórico en el país. Según ACNUR, el 38% de estas personas reportó haber sufrido algún tipo de maltrato o abuso durante el viaje desde su país de origen o última residencia hasta Honduras, y el 16% indicó que experimentó maltrato u otra forma de abuso en Honduras. Más de la mitad de estas personas –siendo las cinco nacionalidades más numerosas Venezuela, Cuba, Guinea, Ecuador y Haití– eran mujeres y menores, en consonancia con la tendencia de los últimos años. Por otra parte, según Naciones Unidas, unos 3,2 millones de personas en Honduras necesitan asistencia y ayuda alimentaria.

Durante 2023 varios organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la militarización de la seguridad pública en Honduras y por las consecuencias de la imposición del estado de emergencia. Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, declaró que la estrategia de seguridad que está implementando la presidenta Castro, que según AI está imitando a la impuesta por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, está teniendo un impacto notable en el deterioro de la situación de derechos humanos. Únicamente entre diciembre de 2022, fecha de la declaración del estado de emergencia, y septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos. Algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Policía Nacional y la Policía Militar llevaron a cabo constantes operativos en determinadas zonas con altos niveles de exclusión social contra jóvenes a los que acusan de pertenencia a organización criminal; y también que desde la imposición del estado de emergencia se habían incrementado las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en todo el país. En este sentido, el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, declaró tras visitar Honduras entre finales de mayo y principios de junio que las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo un fenómeno generalizado en el país, constatando una situación de impunidad generalizada en el país debido a graves deficiencias en el sistema judicial, incluyendo demoras procesales injustificadas, nula o limitada posibilidad de participación de las víctimas en el proceso penal, falta de investigaciones efectivas, negativa u obstrucción de las autoridades investigadoras a aceptar las denuncias de las víctimas, o falta de coordinación entre las fiscalías especializadas. Otros mecanismos expertos de las Naciones Unidas que visitaron Honduras durante el año también expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos. El ACNUDH expresó su seria preocupación por la decisión del Gobierno de transferir el mando y el control del sistema penitenciario a la Policía Militar, anunciada en junio poco después de que un grave episodio de violencia entre bandas en la Prisión Nacional de Mujeres de Tamara provocara la muerte de 46 internas. Desde entonces, la Policía Militar llevó a cabo operaciones en todos los centros penitenciarios del país, en los que se denunciaron distintas formas de maltrato y tortura contra reos a los que se vincula con maras y bandas delictivas.

En 2023 Honduras vivió un incremento de las protestas sociales y políticas, un alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, así como una importante crisis política

Finalmente, cabe destacar la crisis política e institucional que se inició en agosto tras la finalización de las sesiones ordinarias del Parlamento y la constitución de una Comisión Permanente del Congreso (conformada por nueve parlamentarios, solamente uno de la oposición), bajo cuyo mandato se designaron a altos cargos, como el fiscal general del Estado. Tal crisis provocó la parálisis del Parlamento durante cuatro meses (de agosto a

diciembre), el incremento notable de la tensión política entre el Gobierno y la oposición y un aumento en el número de protestas de corte social y político (alrededor de 800, un número similar al de 2022 pero claramente superior al de 2021 (31) o 2020 (45). Cabe destacar especialmente las movilizaciones antigubernamentales masivas que se produjeron a mediados de agosto y en noviembre, y que estuvieron lideradas por el Bloque de Oposición Ciudadana, conformado por los partidos Nacional, Alianza Patriótica y Salvador de Honduras (PSH) y por organizaciones de la sociedad civil. Algunos análisis destacaron los altos niveles de polarización social y política en los que estaba inmerso el país y advirtieron de que la actual situación guarda algunos paralelismos con la situación política y social que culminó con un golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, marido de la actual presidenta.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición

Síntesis:
Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada "guerra al narcotráfico", tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la "guerra contra el narcotráfico" había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2023 hubo una leve reducción en el número de homicidios respecto del año anterior, pero los niveles de violencia en el país siguieron contándose entre los más altos del mundo y varios análisis constataron un fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –órgano autónomo que agrega los datos de las fiscalías estatales–, en 2023 se registraron 30.253 homicidios, 1.431 menos que en 2022. Casi la mitad de tales homicidios se concentraron en seis estados –en orden de mayor a menor número de homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Según datos del Gobierno (concretamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), en 2023 se registraron 29.675 homicidios, un 4,2% menos que en 2022, siendo el cuarto año consecutivo en el que se produce una disminución en tal cifra (34.696 en 2019; 34.554 en 2020; 33.308 en 2021; y 30.968 en 2022). Según el Gobierno, desde el inicio en diciembre de 2018 del mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, los homicidios se han reducido en un 20%, los secuestros en un 70% y los feminicidios un 39% (un 19% respecto del 2022). El Gobierno también señaló que se habían producido bajadas significativas tanto en el número de delitos del fuero común (como hurtos o robos) como en el de crímenes vinculados a la delincuencia organizada. La tendencia a la disminución en el número de homicidios respecto de años anteriores también fue identificada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, la principal fuente de referencia en esta materia, pero que publica los datos con mayor retraso que las otras dos fuentes citadas anteriormente), según la que en los primeros seis meses de 2023 se produjeron 15.082 homicidios, un 7,6% menos que en 2022, siendo la cifra más baja desde el 2017. Sin embargo, algunas voces cuestionan tales cifras porque no incluyen a las personas halladas en fosas comunes por parte de colectivos de búsqueda ni tampoco a las personas desaparecidas. A pesar de la disminución de homicidios observada en 2023, el número de personas asesinadas en México durante el mandato del actual presidente (166.278, incluyendo 4.760 casos de feminicidio) ya era claramente superior al de sus dos predecesores en el cargo –156.066 bajo el Gobierno de Peña Nieto (2012-18) y 120.613 bajo el de Felipe Calderón (2006-12). Según algunos análisis, al finalizar el sexenio del actual presidente en diciembre de 2024, el número de homicidios en México podría acercarse a los 200.000. Cabe destacar un incremento en la muerte de policías en servicio (412 en 2023, 381 en 2022). Por otra parte, a mediados de diciembre, la ONG Causa en Común publicó un informe en el que señala que **en 2023 se produjeron 427 masacres –definidas como asesinato de tres o más personas en un mismo hecho violento–, acumulando 2.130 desde el 1 de enero de 2020**. Los estados que concentraron mayor número de masacres en 2023 fueron Guanajuato (57), Zacatecas (43) y Guerrero (41). Además, desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2023 Causa en Común también registró 22.930 'atrocidades' –eventos que incluyen masacres, hallazgos de fosas clandestinas, trata de personas, tortura, calcinamiento, violencia contra migrantes o asesinato de menores. Solamente en los primeros seis meses del 2023 se registraron 1.453 casos de torturas y 729 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

Por su parte, OACNUDH documentó el asesinato de al menos trece personas defensoras de los derechos humanos en posible relación con su labor durante 2023. En la misma línea, la organización Comité Cerezo México declaró que en 2023 se registró el asesinato de 14 personas defensoras de derechos humanos por parte de agentes del Estado, ascendiendo a un total de 93 durante el mandato del actual presidente –muchos menos que durante el sexenio de Peña Nieto (189),

pero muchos más que en el mandato de Calderón (67). En cuanto al número de periodistas asesinados por el ejercicio de su labor, la ONG Artículo 19 señaló que en 2023 se registraron cinco casos (un claro descenso respecto de los 13 registrados en 2022, 163 desde el año 2000), pero también advirtió que durante el año se produjeron 561 agresiones contra periodistas o medios de comunicación, como ataques armados o secuestros. En la misma línea, **la ONG Reporteros Sin Fronteras consideró a México el país con el mayor número de periodistas desaparecidos en activo en el mundo** (con 31 de un total de 84 casos, desde 1995 hasta el 1 de diciembre de 2023) y también lamentó que **México fuera el segundo país más peligroso para el periodismo en 2023, después de Palestina**. Por otra parte, la organización Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señaló que la violencia en el país había provocado el desplazamiento forzado de casi 8.000 personas solamente en los seis primeros meses del 2023, estimando que el número de personas que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia ascendía a unas 410.000 desde el año 2006.

Además del alto número de homicidios, en 2023 se incrementó significativamente el número de personas desaparecidas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2023 se registraron 12.301 casos, un incremento de un 30% respecto de 2022 y de un 155% en la última década. Desde que se iniciara el mencionado registro a principios de los años sesenta hasta finales de diciembre de 2023, se han contabilizado 113.820 casos, un 42% de las mismas en el sexenio del actual presidente y casi un 10% solamente en 2023. **Desde que se inició la llamada guerra contra las drogas en 2006, se ha registrado la desaparición de más de 100.000 personas.** Los estados que concentran un mayor número de casos son Jalisco (14.927), Tamaulipas (12.931), Estado de México (12.212), Veracruz (6.966) y Ciudad de México (6.934), y los dos estados con un mayor número de casos en 2023 fueron Estado de México (2.136) y Ciudad de México (1.808). Además, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señaló que a esta situación se suma una crisis forense, pues a finales de 2023 había más de 52.000 personas sin identificar. En este sentido, **durante 2023 se hizo público que se han identificado 5.696 fosas clandestinas en 570 municipios del país (casi una cuarta parte del total) desde el 2007**, año en que se empezó a incrementar drásticamente el fenómeno de las fosas comunes. Del total de fosas identificadas, aproximadamente la mitad (2.864, hasta abril de 2023) se han localizado durante el mandato del actual presidente, siendo su primer año de mandato (2019) en el que se identificaron un mayor número de fosas (970). Desde entonces, las localizaciones han ido a la baja, pero ello no implica una disminución de los entierros ilegales, pues podría ser que los lugares de ocultamiento sean más inaccesibles para los colectivos de buscadoras y las autoridades, o bien que las fiscalías no reporten sus hallazgos a la Comisión Nacional de Búsqueda, o bien que se haya reducido el número de búsquedas de campo. En noviembre, el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México denunció que solamente en las fosas comunes de la capital hay más de 18.000 personas sin reclamar o sin identificar. En cuanto a las personas desaparecidas, en diciembre de 2023 el Gobierno declaró que solamente un 11% de los casos incluidos en el mencionado Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (es decir, 12.377 personas) eran casos confirmados de desaparición, mientras que el resto correspondían a personas localizadas y ubicadas, no había datos suficientes para la identificación o la búsqueda. Este cambio metodológico del Gobierno comportó no solamente las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos, sino también la dimisión de la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Poco antes de dicha renuncia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –que investigaba la desaparición en 2014 de 43 personas en Ayotzinapa– anunció su salida del país y criticó bloqueos, presiones, limitaciones y falta de colaboración de las autoridades competentes para esclarecer completamente el caso.

Al finalizar el sexenio del actual presidente en diciembre de 2024, el número de homicidios en México podría acercarse a los 200.000

En cuanto al rol de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en los niveles de violencia en el país, el informe Índice de Paz México 2023, elaborado por el Institute for Economics and Peace, señaló que **entre 2015 y 2021 el número de homicidios relacionados con el crimen organizado creció de alrededor de 8.000 a más de 23.500 (un incremento de aproximadamente el 190%)**, mientras que el número de homicidios no relacionados con el crimen organizado se había mantenido relativamente estable, en alrededor de entre 10.000 y 12.500 casos por año. En la misma línea, según la Universidad de Uppsala, **el número total de muertes por violencia no estatal aumentó drásticamente entre 2011 y 2021, pasando de 2.657 a 18.783 casos**. Según dicha universidad, uno de los factores que explica este incremento tan pronunciado es la gran expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desde 2017 se ha expandido a 28 de los 32 estados del país y que actualmente está asociado a más del 80% de los homicidios provocados por enfrentamientos entre cárteles. En este sentido, cabe destacar el incremento de la rivalidad entre los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, que solamente en 2021 (últimos datos disponibles) habría provocado la muerte de 4.890 personas, más de una cuarta parte del total de víctimas mortales asociadas a la violencia entre cárteles. Si en 2015 el número de enfrentamientos en los que participaba alguna de las dos organizaciones suponía el 42% del total de víctimas mortales por violencia entre cárteles, en 2021 tal porcentaje se había elevado

hasta el 95%. En 2023, un equipo de investigación publicó un influyente artículo en la revista Science en el que sostenía que actualmente en México existen unos 150 cárteles, que cuentan con entre 160.000 y 185.000 miembros, unos 60.000 más que en 2012. El cartel más numeroso sería el CJNG (un 20% del total aproximadamente), seguido del de Sinaloa (un 10%) y la Familia Michoacana. Según este artículo, que tuvo una gran repercusión, **los cárteles de la droga son la quinta fuente de empleo del país y necesitan reclutar a unas 19.000 personas cada año para sustituir a aquellas que son detenidas (unas 6.000 al año) o que mueren (un 17% del total de personas reclutadas)**. Estos datos están en sintonía con las declaraciones que hizo a mediados de año la directora de la agencia de antinarcóticos de EEUU (DEA), según la cual el CJNG y el Cártel de Sinaloa tendrían unos 45.000 miembros y colaboradores en alrededor de 100 países del mundo. Según algunos analistas, la mayor parte de los cárteles cada vez cuentan con un armamento más sofisticado. A mediados de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró que desde 2021 hasta marzo de 2023 se habían decomisado 23 drones presuntamente pertenecientes a cárteles de la droga que iban a ser usados en ataques con explosivos. A modo de ejemplo, a principios de enero de 2024, unas 30 personas murieron en el estado de Guerrero después de que el cártel La Familia Michoacana atacara a la organización delictiva rival Los Taclos con vehículos aéreos no tripulados cargados con explosivos. En 2023, uno de los eventos más significativos en la lucha contra la delincuencia organizada fue la detención en enero y posterior extradición a EEUU de Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, hijo de uno de los fundadores del mismo ("Chapo" Guzmán). El operativo de captura en el nordeste del estado de Sinaloa provocó la muerte de 29 personas (incluyendo diez militares) y la quema de vehículos y edificios en la zona. Dos días antes de la detención de Guzmán, 17 personas (incluyendo diez funcionarios de prisiones) murieron tras el motín en un penal de Ciudad Juárez que provocó la huida de 30 personas, incluyendo al líder del grupo delictivo Los Mexicles –una organización que varios análisis vinculan con el Cártel de Sinaloa. Por otra parte, en varios momentos del año, el Gobierno autorizó el despliegue de efectivos militares y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas (tanto en la zona de San Cristóbal de las Casas como en la región fronteriza de Comalapa) para hacer frente al incremento de los enfrentamientos entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y del CJNG. En este sentido, el presidente López Obrador declaró que buena parte de la reducción en el número de homicidios que se ha registrado en los últimos años obedece principalmente a la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado y, muy especialmente, al rol desempeñado por la Guardia Nacional. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política criticaron nuevamente una creciente militarización de las tareas de seguridad pública. En este sentido, en marzo el Senado creó una comisión para supervisar y controlar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y en abril la Corte Suprema declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa.

Panamá	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Las protestas masivas de 2023 tienen que ver con la actividad de la empresa canadiense First Quantum Minerals –y su subsidiaria Minera Panamá– en una mina a cielo abierto de cobre, oro, plata y otros minerales de unas 13.600 hectáreas –una de las mayores del mundo, según algunos análisis–, situada en la provincia de Colón, a escasos quilómetros del Mar Caribe, en pleno Corredor Biológico Mesoamericano. En 1997, el Gobierno panameño otorgó a la empresa minera Petaquilla Minerals la explotación del mencionado yacimiento, provocando desde el inicio las protestas por el impacto medioambiental de la misma y la interposición de recursos de inconstitucionalidad. En 2017, pocos meses después de que el Gobierno de Juan Carlos Varela prorrogara la extensión del contrato por otros 20 años, la concesión fue declarada inconstitucional, pero el fallo no fue publicado hasta finales de 2021, de modo que la empresa pudo seguir operando aún sin contar con un contrato legal vigente. A principios de 2022 el Gobierno de Cortizo y la empresa iniciaron negociaciones para la ampliación del contrato, pero ante la falta de acuerdo y las acusaciones de incumplimiento de compromisos del Gobierno a First Quantum Mineral hizo que en diciembre de 2022 el Ejecutivo ordenara la suspensión de las actividades de la empresa. Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes continuaron en los primeros meses de 2023.

En Panamá se vivieron las protestas más importantes de las últimas décadas, en las que cinco personas murieron, decenas resultaron heridas y más de 1.000 fueron detenidas. Además, los bloqueos de carreteras en varias partes del país, incluyendo la carretera Panamericana –que conecta el país de norte a sur y con el resto del istmo centroamericano– provocaron el desabastecimiento de productos básicos en varias partes del país. Las protestas se iniciaron en octubre de 2023, poco después de que el Parlamento aprobara y el presidente promulgara por la vía rápida una ley que prolongaba la extensión de la concesión de explotación minera a First Quantum Minerals por otros 20 años –con opción de renovación por otros 20–, alegando que la actividad de la empresa suponía el 5% del PIB del país (Panamá es el 14º exportador de cobre a nivel internacional). Tras conocerse la decisión, **decenas de miles de personas se manifestaron ininterrumpidamente en la capital y en varias partes del país para protestar contra la mencionada extensión de la concesión**, por entender que esta comporta graves daños medioambientales en una región de una especial importancia para la biodiversidad del país, que atenta contra la soberanía nacional y que lesiona los intereses económicos del Estado (por considerarse que la tributación de la

empresa es insuficiente). Las movilizaciones masivas durante varios días comportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los que decenas de personas resultaron heridas y en los que se produjeron importantes desperfectos materiales, así como numerosos cortes de carreteras en todo el país. Ante esta situación, a principios de noviembre el Gobierno declaró una moratoria a la actividad minera en el país –excluyendo las concesiones ya aprobadas–, lo que provocó una cierta disminución en la intensidad de las protestas. Además, el Gobierno también anunció su intención de conocer el fallo de la Corte Suprema sobre los recursos de inconstitucionalidad de la extensión del contrato para evitar que una derogación del mismo pudiera comportar penalizaciones millonarias en un eventual proceso judicial o de arbitraje con la empresa. A finales de noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y First Quantiun Minerals (y su filial Minera Panamá) y, poco después, el Estado anunció la finalización progresiva y ordenada de las actividades de la empresa y la renuncia del Ministro de Comercio e Industrias.

América del Sur

Ecuador	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:
En los últimos años, Ecuador ha experimentado uno de los incrementos de la violencia más pronunciados de toda América Latina. En 2022, el Gobierno sostenía que desde el año 2017 la tasa de homicidios se ha multiplicado casi por cinco, y que más del 80% de los asesinatos en el país están vinculados al narcotráfico. Si bien Ecuador había sido históricamente un lugar de tránsito de drogas ilícitas, algunos análisis sostienen que el país cada vez juega un rol más prominente en la cadena de suministro de drogas a escala internacional, especialmente de cocaína, con una mayor participación en el almacenaje, el procesamiento, la producción y la distribución internacional de estupefacientes, muy principalmente a través de las rutas del Pacífico –la ciudad costeña de Guayaquil concentra casi un porcentaje importante de los homicidios– y de la Amazonía, gracias a su frontera con Brasil. Tal contexto ha dado lugar a un incremento sustancial de los enfrentamientos por el control de lugares y rutas estratégicas entre grupos locales de crimen organizados (como Los Lobos, Los Choneros o Los Lagartos), cárteles mexicanos (especialmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), facciones disidentes de las FARC (como el Frente Oliver Sinisterra o la columna Urías Rondón) u organizaciones criminales internacionales.

En 2023 Ecuador enfrentó una grave crisis política, que provocó la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas, así como un incremento sin precedentes en los niveles de violencia, motivando la imposición del estado de emergencia en varios momentos del año. Según datos oficiales, **en 2023 se registraron 7.878 muertes violentas, con una tasa de 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de América** (exceptuando el Caribe). Durante el mandato de Lenin Moreno (2017-2021), la tasa de homicidios se mantuvo entre seis y ocho homicidios cada 100.000 habitantes, pero en 2021, fecha en la que asumió la presidencia Guillermo Lasso, dicha tasa creció hasta los 14 y posteriormente escaló hasta los 25,9 en 2022. Las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo sumaron 86,44% de los homicidios de 2023, regiones que varios análisis consideran clave en las cadenas de valor del narcotráfico y en el tráfico internacional de armas. Destaca especialmente la provincia del Guayas (en la que se concentraron casi la mitad de los homicidios intencionales del país) y, en concreto, su capital, Guayaquil, que alberga barrios como Nueva Prosperina, con una tasa de 114 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones denunciaron una tasa de impunidad de más del 91%. **Según la Policía, el 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales** –como Los Choneros, Los Lobos o Tiguerones– que buscan obtener el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína. Ante esta situación, en abril el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró oficialmente como terroristas a los Grupos de Delincuencia Organizada que mantienen vínculos con cárteles colombianos y mexicanos (especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación) y con otras organizaciones de crimen organizado internacionales. Tal medida permite la movilización de las Fuerzas Armadas sin la previa declaración del estado de excepción y podría afectar, según algunos medios, a unas 20 organizaciones delictivas. Al día siguiente de tal declaración, 10 personas fueron asesinadas en Guayaquil en un ataque armado que el Estado vinculó a la lucha por el control territorial entre bandas. Además de esta medida, el Gobierno también declaró el estado de excepción en los meses de julio y agosto (prorrogados posteriormente) para hacer frente a la crisis de violencia que padece el país.

En consonancia con el incremento de la violencia que se observa en el sistema penitenciario desde el año 2020 (se estima que alrededor de 500 personas han sido asesinadas en dicho periodo), **en 2023 también se produjeron varios episodios de violencia importantes en algunos centros penales**. En julio, 31 reos murieron y otros 14 resultaron heridos durante los enfrentamientos entre bandas rivales en la cárcel del Litoral (en Guayaquil). Dos días más tarde, después de que reos de 13 penales del país iniciaran una huelga de hambre y tomaran como rehenes a varios funcionarios de prisiones, el presidente Lasso decretó un estado de emergencia en todo el sistema penitenciario del país y autorizó el despliegue de 2.700 militares para retomar el control del centro penal del Litoral. En la misma prisión, en abril, 18 internos y tres funcionarios de

prisiones habían muerto en otro episodio de violencia entre bandas rivales. Según el Gobierno, en 2023 se registraron 67 muertes violentas en las cárceles del país.

Además de los altos niveles de violencia vinculada al crimen organizado y en el seno del sistema penitenciario, **durante el año se registró un incremento drástico de la violencia política**, hasta el punto de que el Observatorio Ciudadano de Violencia Política declaró que los comicios presidenciales del mes de agosto habían sido el proceso electoral más violento de la historia del país. Según dicho centro de investigación, en 2023 se registraron 88 casos de violencia política, el 86% de los cuales contra líderes políticos (candidatos y cargos públicos) y el 14% restante contra sus familiares y personas cercanas. El informe atribuyó la mayoría de tales episodios de grupos de delincuencia organizada, especialmente relacionados con el narcotráfico. Los asesinatos que tuvieron un mayor impacto social y político fueron los del alcalde de Manta (la tercera ciudad del país, situada en la provincia de Manabí), a finales de julio, y el del candidato presidencial Fernando Villavicencio a mediados de agosto, en Quito. En el primer caso, el presidente Lasso decretó el estado de emergencia en las provincias de Manabí y Los Ríos y en la ciudad de Durán (Guayas), así como el toque de queda en Manta. Dicho toque de queda coincidió con el estado de emergencia decretado en el sistema penal para que las autoridades recuperaran el control sobre las cárceles del país. En el caso del asesinato de Villavicencio a mediados de agosto, a diez días de la celebración de las elecciones, también motivó el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional y la imposición del estado de excepción, que preveía, entre otras cuestiones, que la Policía y Fuerzas Armadas pudieran hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público y seguridad ciudadana o bien realizar inspecciones y requisas que tuvieran como objetivo el hallazgo de armas y sustancias ilícitas. Además, el Gobierno ordenó un macrooperativo militar y policial de unos 4.000 efectivos para proceder al traslado a un centro de máxima seguridad de José Adolfo "Fito" Macías, líder de Los Choneros –una de bandas criminales más poderosas del país– y que había proferido amenazas contra Villavicencio. Tales medidas no lograron poner fin a los motines ni los episodios de violencia en las cárceles del país. A modo de ejemplo, a finales de agosto, poco después del asesinato de Villavicencio y de la celebración de las elecciones presidenciales, 50 guardias carcelarios y siete policías fueron retenidos forzosamente durante varios motines en seis penales del país como respuesta de la banda criminal Los Lobos contra una intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga para requisar armas y también en protesta contra una serie de traslados de presos.

Ecuador enfrentó una grave crisis política que provocó la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas, así como un incremento sin precedentes en los niveles de violencia, motivando la imposición del estado de emergencia en varios momentos del año

En paralelo al incremento sin precedentes en los niveles de violencia, en 2023 el país también vivió una importante crisis política. A mediados de mayo, al día siguiente de que la Asamblea Nacional iniciara un juicio político contra Guillermo Lasso por acusaciones de una trama de corrupción, este firmó un decreto en el que, alegando una situación de conmoción interna y de grave crisis política, se disolvía el Parlamento y se convocaban unas elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias, para que tanto Lasso como la Asamblea Nacional fueron elegidos. Además, Lasso ordenó a las Fuerzas Armadas que rodearan la sede del Parlamento, de modo que este no pudiera seguir sesionando ni proseguir el juicio político recientemente iniciado. Dicha decisión provocó algunas protestas en los días inmediatamente posteriores, así como las críticas de numerosos partidos de la oposición y organizaciones sociales, que consideraron que la disolución del Parlamento solamente buscaba evitar el enjuiciamiento del presidente y evidenciaba la involución democrática del país. Algunas organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que históricamente ha demostrado una gran capacidad de movilización, consideraron que la decisión de Lasso era un autogolpe de Estado encubierto y abría la puerta a un escenario de dictadura. Finalmente, en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de agosto (primera vuelta) y el 15 de octubre (segunda vuelta) en el marco del estado de excepción, Daniel Noboa se impuso por un estrecho margen a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. En las elecciones legislativas, se impuso el Movimiento Revolución Ciudadana, quedando en segundo lugar el Movimiento Construye (formación de la que Fernando Villavicencio era su candidato presidencial).

Perú	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:
En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el

Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso, posteriormente redenominado como Militarizado Partido Comunista del Perú, se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

Perú siguió sumido en una de las mayores crisis políticas de la historia reciente el país, motivada principalmente por las protestas masivas antigubernamentales que se registraron entre enero y marzo en varias partes del país, en las que unas 50 personas murieron, más de 700 resultaron heridas y cientos más fueron detenidas. Tales protestas, especialmente intensas en Quito y en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, fueron la continuación de las que se habían producido desde principios de diciembre de 2022 tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado. Algunas de las demandas que exigían las personas manifestantes eran la dimisión de la presidenta Dina Boluarte –en tanto que vicepresidenta del país, asumió la presidencia tras la destitución de Castillo– el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la conformación de un Gobierno transitorio para que pueda adelantar las elecciones, el fin de la represión de las protestas por parte de la Policía y, también por parte de algunos sectores, la liberación del ex presidente Castillo. Desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 hasta el 20 de febrero de 2023 la OACNUDH registró 1.327 protestas a nivel nacional, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones y 60 marchas por la paz. Según las cifras reconocidas por la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) o Naciones Unidas, 77 personas murieron desde el inicio de las protestas en diciembre, 70 de las cuales civiles, un policía y seis militares. De entre las víctimas mortales civiles, 49 murieron por la represión estatal y en el marco de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y 11 durante el bloqueo de carreteras. Además, el número de personas heridas oscilaría alrededor de las 1.880. El episodio de violencia más letal se produjo el 9 de enero de 2023 en Juliaca, cuando, 18 personas manifestantes y transeúntes murieron por impactos de bala y perdigones y, además, según algunos medios, un policía murió por quemaduras. Naciones Unidas, la OEA y organizaciones como Human Rights Watch o AI denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la contención de las protestas, e instaron al Gobierno a iniciar un diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas por la violencia, adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública, iniciar investigaciones exhaustivas e independientes sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y agilizar los procesos judiciales para que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia. En el mes de mayo, la CIDH concluyó que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza y que algunas de las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, AI denunció que la respuesta del Estado ante las protestas tuvo un sesgo racista, pues el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de las protestas fueron de la población indígena y campesina. En la misma línea, el relator especial de las ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, denunció que la exclusión, el racismo y la discriminación que existen de manera muy arraigada en Perú, afectaron la respuesta gubernamental a las movilizaciones y lamentó que las comunidades indígenas que protestaron fueron estigmatizadas.

Perú siguió sumido en una de sus mayores crisis de la historia reciente, con protestas masivas antigubernamentales en las que unas 50 personas murieron

En un contexto de condenas nacionales e internacionales por el uso excesivo de la fuerza, el 11 de enero la Fiscalía inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola, los ministros de Interior y Defensa y dos exministros. Boluarte se negó a dimitir y a convocar una asamblea constituyente y amplió a Lima y a varias regiones del país el estado de emergencia que se había decretado en diciembre. Boluarte criticó la violencia ejercida por determinados grupos de manifestantes, denunciando que algunas de las protestas pretendían romper y sabotear el estado de derecho y que algunos de los grupos que habían alentado las protestas tenían vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Sin embargo, días más tarde, instó a una tregua nacional a las organizaciones convocantes, pidió perdón a las familias de las víctimas mortales de las protestas y solicitó al Congreso que adelantara las elecciones al 2023 (en octubre la primera vuelta y en diciembre la segunda), petición posteriormente rechazada por el Parlamento, de modo que en principio Boluarte debería mantenerse en el cargo hasta 2026. Además, la presidenta anunció su intención de reformar la Constitución de 1993 –promulgada durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori. Sin embargo, tales anuncios no lograron poner fin a las movilizaciones, y fueron seguidos por graves enfrentamientos entre policías y manifestantes en Lima. Finalmente, las protestas remitieron notablemente desde principios de marzo, pero volvieron a reactivarse a mediados de julio, con motivaciones parecidas a las de diciembre de 2022 y principios de 2023, pero con mayor énfasis en la renuncia de la presidenta. Según la

Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64. En Lima se registraron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y cientos de personas que intentaban entrar en el Congreso. A finales de julio, se registró una nueva oleada de protestas en todo el país –según la Defensoría del Pueblo, manifestaciones en 18 provincias y 14 puntos de bloqueo de carreteras. Ante tal situación, Boluarte ofreció un pacto de reconciliación nacional, garantizó que se haría justicia con las víctimas de la represión estatal y pidió perdón a las familias de las víctimas. Boluarte también pidió al Congreso la delegación de facultades legislativas al poder Ejecutivo por el plazo de 120 días para poder enfrentar la delincuencia y la criminalidad. En diciembre, con motivo del primer aniversario de la detención del expresidente Castillo, la Defensoría del Pueblo señaló que se registraron movilizaciones en 20 provincias de 15 de las 25 regiones de Perú, pero el alcance de las mismas fue claramente inferior a las de principios y mediados de año y no se registraron incidentes de gravedad.

Por otra parte, **durante el año se registraron algunos enfrentamientos entre efectivos policiales y militares y miembros del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP)**, nombre con el que se autodenomina la facción remanente de Sendero Luminoso en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Cabe destacar la muerte de siete policías a mediados de febrero tras una emboscada del grupo en Cuzco (VRAEM) liderada por el llamado Camarada Carlos, que forma parte de la primera generación de combatientes del grupo y que, según algunos medios, habría participado en la masacre de 16 personas en el departamento de Junín en mayo de 2021, a escasos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pocos días más tarde, otros dos militares murieron en otro enfrentamiento en Vizcatán del Ene (provincia de Satipo, departamento de Junín). En septiembre, cuatro soldados y dos miembros del MPCP murieron y otros tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento en el VRAEM, concretamente en la provincia de Huanta (departamento de Ayacucho). En noviembre, el ministro del Interior declaró haber dado uno de los golpes más duros contra el MPCP de los últimos años, tras la detención de cuatro de los dirigentes del grupo, incluyendo al hijo del líder de MPCP, Víctor Quispe Palomino.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

En Venezuela no se registraron protestas antigubernamentales masivas y continuadas, como sí había sucedido en años anteriores, y **el Gobierno y la parte mayoritaria de la oposición alcanzaron un importante acuerdo político en el mes de octubre**, pero **el país siguió registrando altos niveles de homicidios y movilizaciones sociales, denuncias sobre la precaria situación humanitaria y de derechos humanos y críticas de formaciones políticas y organismos internacionales sobre los obstáculos impuestos por el Gobierno** para avanzar en una reforma política que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales. Aunque no constan datos oficiales sobre el número de homicidios, la organización Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) señaló que en 2023 se registraron 6.973 muertes violentas, un 25% menos que en 2022 (9.367) y 2021 (9.447) y un 75% menos respecto del año en el que se alcanzó el máximo de muertes violentas (28.475 en 2016). A pesar de que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 (26,8) fue claramente inferior a las de 2021 (34,9) y 2022 (35,3), siguió siendo de las más altas del continente, solamente superada por las de Ecuador y Honduras. Además, las cifras del OVV no incluyen las desapariciones, que en 2023 (1.443) se incrementaron ligeramente respecto de las del año anterior (1.370). A pesar de la disminución en el número de homicidios, varios análisis advirtieron sobre el creciente rol de los grupos de delincuencia organizada en los últimos años. En este sentido, el Índice 2023 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional situó a Venezuela en el octavo lugar entre los países del continente con mayor nivel de criminalidad organizada y en el último lugar en cuanto a la capacidad estatal para combatirla. Según el mencionado informe, actualmente los grupos armados de crimen organizado están presentes en, al menos, 22 de los 24 estados del país, controlando los mercados de narcotráfico, oro y trata de personas, entre otras actividades ilícitas, y ejerciendo mayores niveles de control social y territorial en las zonas fronterizas. Ante tal situación, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que en 2023 se había desmantelado a 1.844 organizaciones de crimen organizado y que el número de los efectivos policiales se incrementó en un 12%,

pasando de 160.000 a 179.000. Además, a mediados de año el Gobierno declaró que en 2023 los casos de secuestro se redujeron en un 54,2 % con relación al 2022.

En cuanto a la situación humanitaria y migratoria, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) –conformada entre otras por ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– señaló que **en 2023 más de medio millón de personas se vieron forzadas a abandonar Venezuela**, aumentando de 7.180.000 en enero de 2023 a 7.720.000 en noviembre de 2023. Sin embargo, según algunas fuentes la cifra es incluso superior. Concretamente, el Observatorio de la Diáspora Venezolana declaró que la cifra total de personas migrantes venezolanas era de unos 8,5 millones –distribuidas en 90 países–, de modo que, en el último cuarto de siglo, Venezuela podría haber experimentado una reducción poblacional superior al 25%. Según R4V, el 85% (6.540.000) de la diáspora venezolana se concentra en países de la región –principalmente en Colombia (44%), Perú (23%), Brasil (8%), Ecuador (7%) y Chile (7%)–, el 90% si se incluye EEUU. En este sentido, la OIM declaró que en 2023 unos cuatro millones de personas venezolanas en la región de América Latina tenía necesidades humanitarias y de protección urgentes. Además, a finales de 2023 había más de un millón de personas venezolanas solicitantes de asilo en el mundo y más de 230.000 personas venezolanas reconocidas como refugiadas. En cuanto a la situación de precariedad económica, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que el 88% de las protestas a nivel nacional reivindicaban bienes y servicios básicos como el acceso a agua, electricidad o combustible, o servicios de salud y pensiones suficientes.

El Observatorio de la Diáspora Venezolana declaró que la cifra total de personas migrantes venezolanas era de unos 8,5 millones

En cuanto a las movilizaciones y protestas sociales y políticas, según el OVCS en 2023 se registraron 6.956 protestas, la mayor parte de las cuales (5.583) relacionadas con derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, y muy específicamente por reivindicaciones laborales (4.100), mientras que las protestas restantes (1.373) estuvieron vinculadas con derechos civiles y políticos. El número de protestas en Venezuela fue ligeramente inferior al del año pasado (7.032 protestas), y sensiblemente superior al del 2021 (8.560 manifestaciones). En el plano político, a pesar de los avances que se produjeron en las negociaciones entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria, que cuentan con la facilitación de Noruega, en varios momentos del año se produjeron acusaciones cruzadas entre las partes. El momento de máxima tensión entre las partes se produjo a finales de octubre, coincidiendo con la celebración de las primarias de la oposición para elegir a la persona que concurrirá a las elecciones presidenciales de 2024. Según la oposición, unos 2,4 millones de personas participaron en dicho proceso, en el que María Corina Machado –inhabilitada en 2015 por 15 años para concurrir a cargos públicos– logró el 93% de los votos. Sin embargo, el Gobierno consideró que el proceso había sido fraudulento y, a finales de octubre, la Corte Suprema invalidó los resultados de las primarias. Por su parte, **EEUU advirtió sobre la posibilidad de revertir la flexibilización de sanciones anunciada pocos días antes si antes del 30 de noviembre no se retiraban las inhabilitaciones contra personas candidatas de la oposición**. Más tarde, en diciembre, dos días después del referéndum sobre el Esequibo organizado por el Gobierno, el fiscal general de Venezuela dictó una orden de arresto contra 13 personas (incluyendo a destacados líderes en el extranjero, como Juan Guaidó, Julio Borges o Leopoldo López, y también a tres personas del equipo de Machado) acusados de traición a la patria por participar en una conspiración nacional e internacional para boicotear el referéndum. Otro de los momentos del año de incremento de la tensión entre Gobierno y oposición fue la renovación por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional del Consejo Nacional Electoral. A pesar de que éste ya estaba conformado previamente por una clara mayoría de personas consideradas cercanas al Gobierno, la oposición criticó tal decisión como un intento por parte de Caracas de controlar aún más el proceso electoral, mientras que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) expresaron su preocupación sobre el impacto que tal medida podría tener en la celebración de unas elecciones libres y competitivas.

Al igual que HRW, en 2023 hubo otras organizaciones de derechos humanos que denunciaron la situación de derechos humanos en el país. Organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón estiman que, en la actualidad, hay entre 286 y 319 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) señaló que persistía el uso de las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una estrategia de represión del Gobierno y como parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población. En su momento, AI señaló que tales acciones –que incluyen detenciones sin órdenes judiciales; períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto; imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad; limitaciones al acceso al derecho a la defensa; o el uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes– podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Según AI, el objetivo de las detenciones arbitrarias, dirigido contra opositores políticos, pero también contra personas defensoras de derechos humanos o sindicalistas, es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del Gobierno. En la misma línea, en septiembre de 2023 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), señaló que, si bien en los últimos tiempos ha habido una disminución cuantitativa en la comisión de violaciones de derechos humanos y de que

estas se llevan a cabo de manera más selectiva contra determinados colectivos –como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos–, en Venezuela sigue habiendo numerosos casos de violaciones graves de los derechos humanos y no se ha desmantelado la estructura represiva del Estado. Además, según la MIIV, recientemente el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos de menoscabar el espacio cívico y democrático, incrementando su control sobre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos y utilizando las amenazas, la vigilancia y el hostigamiento, la difamación o la censura para silenciar y desalentar a la oposición al Gobierno.

Venezuela – Guyana	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Venezuela, Guyana

Síntesis:
La tensión entre Venezuela y Guyana por la Guayana Esequiba (o Esequibo) --un territorio de casi 160.000 km2 rico en minerales y otros recursos naturales, controlado y administrado formalmente por Guyana—se remonta la falta de acuerdo a finales del siglo XIX sobre la delimitación fronteriza entre Venezuela y el Imperio Británico. Mientras que Guyana, ex colonia británica, sostiene que el un Laudo Arbitral emitido en París en 1899 adjudicó el territorio en disputa al Imperio Británico, Venezuela no reconoció tal fallo y sustenta su posición en Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela y Reino Unido (en consulta con el Gobierno de Guyana, que obtuvo la independencia de Reino Unido ese mismo año), por el que las partes se comprometían a resolver el contencioso mediante negociaciones amistosas. La tensión se incrementó significativamente después de que en 2020 la Corte Internacional de Justicia se declarara competente para resolver y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión --y Venezuela rechazara la jurisdicción de la CIJ en la materia--, de que Guyana concediera a varias empresas la exploración de yacimientos de hidrocarburos en aguas en disputa con Venezuela y de que, en diciembre de 2023, Caracas celebrara un referéndum sobre la soberanía del Esequibo.

La decisión del Gobierno de Venezuela de convocar un referéndum sobre la anexión del Esequibo (un territorio históricamente revindicado por Venezuela pero que está formalmente bajo el control efectivo y administración del Gobierno de Guyana) **y de poner en práctica acciones para hacer efectivos los resultados de la consulta provocaron una importante crisis política y diplomática en la región y una importante movilización militar por parte de varios países**. Según Caracas, la participación en el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre fue de alrededor del 50% y el 95% de las personas que votaron su apoyo a las cinco preguntas planteadas en el referéndum acerca, entre otras, del no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba; la creación del estado Guayana Esequiba, el otorgamiento de la ciudadanía a la población de ese territorio y la incorporación de dicho estado en el mapa del territorio venezolano; o la oposición a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente por delimitar. Sin embargo, varios análisis cuestionaron las cifras de participación ofrecidas por el Gobierno y señalaron que ni siquiera Hugo Chávez en los momentos de máxima popularidad obtuvo más de 10,4 millones de votos. Pocos días antes, la CIJ había emitido un fallo instando a Venezuela a abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa, aunque sin prohibir la celebración del referéndum, tal y como solicitaba previamente el Gobierno de Guyana por considerar que el objetivo de ese referéndum es preparar el terreno para la anexión a Venezuela del Esequibo. El fallo de la CIJ también instó a ambas partes a abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la controversia o hacerla más difícil de resolver. La CIJ fijó para abril de 2024 la audiencia en la que Venezuela debería argumentar y documentar su posición para una resolución de fondo de la controversia (que según algunos análisis podría tardar años), pero a finales de 2024 Venezuela seguía rechazando firmemente la jurisdicción y competencia de la CIJ para dirimir el contencioso.

Dos días después de la celebración del referéndum, Nicolás Maduro anunció la incorporación del Esequibo al mapa oficial de Venezuela y la activación de un plan de atención "humana" y "social" a la población de la Guayana Esequiba, con el inicio de un censo, la expedición de cédulas de identidad y la apertura de una oficina del Servicio Administrativo de Identificación y Migración (SAIME) en la región. Maduro también pidió al Parlamento que empezara el trámite legislativo para convertir a la Guayana Esequiba en un nuevo estado de la república. Además, también anunció que la localidad de Tumeremo (estado Bolívar, fronterizo con el Esequibo) será provisionalmente la sede de la Zona de Defensa Integral (ZODI) y la sede político-administrativa del nuevo estado, del que el mayor general Alexis Rodríguez Cabello fue nombrado como autoridad única. Además, Maduro ordenó la creación de la división Petróleos de Venezuela Esequibo (PDVSA) y Corporación Venezolana de Guayana Esequibo (CVG), la realización de un mapa de exploración y explotación de los recursos en la región y la concesión de licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en la Guayana Esequiba. En la misma línea, concedió un período de tres meses para que las compañías petroleras autorizadas por Guyana para operar en aguas en disputa pusieran fin a sus actividades.

Además de estas decisiones, **el Gobierno de Venezuela envió un contingente militar hasta Puerto Barima,** en el estado de Delta Amacuro, en la frontera atlántica de Venezuela, muy cerca del Esequibo. Al día siguiente, EEUU llevó a cabo maniobras aéreas con la Fuerza de Defensa de Guyana y declaró su disposición a cooperar para mejorar las capacidades de defensa de Guyana. A principios de enero, el subsecretario de Defensa de

EEUU visitó Guyana, provocando las especulaciones de Venezuela –negadas por Georgetown— acerca de la instalación de una base militar estadounidense en la región. Por otra parte, **los Gobiernos de Brasil y Surinam movilizaron a sus Ejércitos en sus respectivas fronteras con Guyana**. Aunque ambos países mostraron su solidaridad con la posición de Guyana, cabe destacar que la frontera entre Brasil y Guyana fue delimitada a través de un tratado de arbitraje y que Guyana y Surinam mantienen un contencioso territorial fronterizo por la región de Tigri, ocupada de facto y administrada por Guyana. En este sentido, algunos partidos en Surinam lamentaron que Guyana no había cumplido con sus compromisos hechos en los años sesenta de desmilitarizar la región de Tigri y habían exigido al Gobierno elevar una protesta diplomática ante la Corte Internacional de Justicia, CARICOM y Naciones Unidas. Además, la oposición expresó su deseo de llevar a cabo un referéndum parecido al que llevó Venezuela en diciembre e incorporar oficialmente la región de Tigri al mapa de Surinam. También en el plano militar, la tensión escaló a finales de diciembre cuando el Reino Unido, antigua potencia colonial en la región, envió un buque de guerra a las costas de Guyana. Venezuela consideró esta acción como una provocación hostil extremadamente grave, instó a Guyana a no involucrar a potencias militares en el contencioso territorial e inició ejercicios militares de una magnitud considerable en el Atlántico. En tal contexto, el Gobierno de Brasil expresó su preocupación por la dinámica de escalada militar en la región y señaló que las demostraciones militares en favor de cualquiera de las partes en conflicto debían ser evitadas y eran contrarias al acuerdo que alcanzaron Maduro y el presidente de Guyana en la cumbre bilateral organizadas por la CELAC, CARICOM y el Gobierno brasileño a mediados de diciembre en San Vicente y las Granadinas. Aunque fue en el mes de diciembre cuando se produjo la escalada de la situación diplomática y militar, ya en el último trimestre del año había habido un importante incremento de la tensión entre Venezuela y Guyana. En octubre, el Gobierno de Guyana denunció la movilización de tropas y la realización de maniobras militares de las Fuerzas Armadas venezolanas cerca de su frontera común, comunicó tal preocupación a CARICOM y a varios de sus aliados internacionales y puso a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta. Poco antes, el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria (que mantienen una negociación con la facilitación de Noruega) habían acordado en Barbados una defensa conjunta de la Guayana Esequiba. En este sentido, algunos líderes opositores (como los ex candidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales) se manifestaron a favor de la celebración del referéndum, mientras que otros, entre ellos Juan Guaidó o la principal líder opositora María Corina Machado se mostraron en contra de tal iniciativa. Machado, de hecho, solicitó la suspensión del referéndum y la conformación de un equipo que eleve el contencioso ante la CIJ. Dos días después del referéndum, **el fiscal general de Venezuela dictó una orden de arresto contra 13 personas** (incluyendo a destacados líderes en el extranjero, como Juan Guaidó, Julio Borges o Leopoldo López, y también a tres personas del equipo de Machado) **acusados de traición a la patria por participar en una conspiración nacional e internacional para boicotear el referéndum**.

2.3.3. Asia y el Pacífico

2.3.3.1 Asia

Asia Meridional

Afganistán - Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Afganistán, Pakistán

Síntesis:
Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se han caracterizado históricamente por la complejidad y las disputas en torno a la demarcación fronteriza establecida durante la colonización británica de Pakistán y conocida como Línea de Durand y que dividió a la población pashtún a los dos lados de la frontera. En 1996 se estableció en Afganistán el Emirato Islámico, gobernado por los talibanes, movimiento religioso y militar conformado en 1994 por hombres que se habían formado en escuelas religiosas en Pakistán e impulsado por los servicios secretos de este país. Pakistán fue uno de los pocos países en reconocer al Gobierno talibán de Afganistán. Tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y la caída del régimen talibán, Pakistán se alineó junto al Gobierno de EEUU, aunque los talibanes continuaron recibiendo apoyo pakistaní y establecieron importantes bases operativas en Pakistán. Si bien Pakistán siempre negó de manera oficial haber ayudado a los talibanes, sectores del Gobierno, los servicios secretos y de las Fuerzas Armadas prestaron apoyo logístico, militar y político a los talibanes durante las dos décadas de conflicto armado y presencia militar extranjera en Afganistán. Con el retorno de los talibanes al poder en Afganistán en 2021, el Gobierno de Pakistán presionó al nuevo Ejecutivo afgano para que ejerciera un control sobre la insurgencia talibán pakistaní –el grupo armado TTP. A su vez el Gobierno talibán afgano trató de mediar entre el Gobierno pakistaní y el TTP, pero tras el fracaso de las negociaciones, se incrementó la tensión entre Afganistán y Pakistán.

A lo largo de 2023 se incrementó la tensión entre los dos países, con algunos episodios de violencia en la frontera, constantes enfrentamientos diplomáticos y la expulsión de Pakistán de centenares de miles de personas refugiadas afganas. Tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Pakistán y el grupo armado talibán pakistaní TTP en noviembre de 2022 y la escalada de la violencia en Pakistán durante 2023, el Gobierno pakistaní incrementó sus presiones sobre el Gobierno talibán de Afganistán, exigiendo a este que cesara su apoyo a la insurgencia. Afganistán se había ofrecido como mediador y facilitó los contactos entre el Gobierno pakistaní y el TTP. No obstante, tras el fracaso de las negociaciones, el Gobierno pakistaní acusó al afgano de permitir al TTP operar desde suelo afgano para llevar a cabo sus ataques contra las fuerzas de seguridad

pakistaníes. Ante la negativa del Gobierno afgano a llevar acciones contra el TTP, señalando que se trata de un problema interno pakistaní, la tensión escaló entre ambos Ejecutivos. En octubre se produjo un incremento considerable de la tensión cuando Pakistán anunció un plan de deportaciones masivas de personas extranjeras que se encontraban residiendo en este país, un plan diseñado específicamente para la población afgana. El anuncio se produjo después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y el TTP en Chitral– en la frontera entre ambos países– en los que murieron cuatro soldados y al menos 12 insurgentes. Entre tres y cuatro millones de personas afganas residen en Pakistán, de las que 600.000 llegaron procedentes de Afganistán tras el ascenso de los talibanes al poder en 2021. Según International Crisis Group, 1,3 millones de personas afganas están registradas legalmente como refugiadas y 850.000 cuentan con la Carta de Ciudadanía Afgana que les otorga algunas protecciones. A estas se unen cerca de dos millones de personas que no cuentan con ninguna documentación que autorice su residencia en Pakistán, cifra que podría ser superior debido a la porosidad de las fronteras entre ambos países, lo que favorece el tránsito frecuente de población. Tras el anuncio del plan, se iniciaron las deportaciones y los retornos voluntarios de población, ante las amenazas del Gobierno pakistaní de expropiaciones, detención y castigo incluso contra quienes prestaran apoyo a las personas afganas residiendo en el país de forma ilegal. Al finalizar el año, 500.000 personas habían sido deportadas a Afganistán en condiciones de gran vulnerabilidad, ya que las autoridades pakistaníes limitaron la cantidad de ganado y dinero que las personas retornadas podían llevar a un valor de 175 dólares.

En noviembre, el primer ministro interino de Pakistán, Anwar ul-Haq Kakar, encargado de liderar el país hasta la celebración de elecciones previstas para el primer trimestre de 2024, afirmó que el Gobierno talibán de Afganistán estaba dando apoyo a la insurgencia del TTP y que había contribuido a la escalada de la violencia en Pakistán, en unas declaraciones sin precedentes por la falta de ambigüedad en las acusaciones. Kakar es considerado como próximo a las Fuerzas Armadas de Pakistán y exigió a Afganistán que entregase a aquellos responsables de actos de terrorismo en Pakistán, señalando que a pesar de que Pakistán esperaba que el cambio en el Gobierno de Afganistán llevase a la paz, se había producido un incremento de la violencia del TTP en Pakistán. Estas acusaciones fueron negadas por el Ejecutivo afgano, que a su vez exigió al Gobierno de Pakistán un comportamiento que se adhiriese a los "principios del Islam", en un intento de frenar el retorno forzado de decenas de miles de personas. En paralelo a las deportaciones, el Gobierno de Pakistán también incrementó los obstáculos al comercio, lo que podría tener un serio impacto en la deteriorada economía afgana, que es escenario de una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial. El retorno de cientos de miles de personas a Afganistán también estaría teniendo un importante impacto sobre la situación humanitaria del país, aunque el Gobierno afgano anunció el establecimiento de campos para recibir a las personas retornadas.

India – China	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	India, China

Síntesis:
La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuya demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido. En 2020 se produjo una grave escalada de la tensión, con los primeros enfrentamientos directos entre los Ejércitos de ambos países en los que murieron 20 soldados indios.

La tensión entre ambos países permaneció estancada durante todo el año y, aunque hubo diálogo político y militar a diferentes niveles, no se produjo ningún avance positivo. Si bien no hubo enfrentamientos directos ni ningún episodio de escalada de la crisis como había sucedido en 2022, la tensión se mantuvo y diferentes analistas apuntaron al riesgo de que esta pueda reactivarse a gran escala. Entre los factores de riesgo que se señalan se apunta al enorme despliegue militar que mantienen ambos países, así como a las construcciones militares que se han ido levantando desde la crisis de 2020 y al desarrollo de infraestructuras por parte de ambos países para posibilitar un rápido despliegue de tropas en caso de que la tensión militar escalase nuevamente. International Crisis Group estimaba el número de tropas chinas desplegadas en la zona en entre 50.000 y 60.000, con la posibilidad de sumar 120.000 soldados adicionales en el plazo de una semana.[67] Por su parte, India cuenta con 50.000 soldados en la zona y ha desplegado armamento

67. International Crisis Group, *Thin Ice in the Himalayas: Handling the India-China Border Dispute*, Asia Report N°334, 14 de noviembre de 2023.

pesado. Durante todo el año continuó el diálogo político y militar sin que se llegara a ningún acuerdo para la retirada militar completa de las zonas en disputa sobre las que se han acordado zonas de separación militar para impedir el choque directo entre ambos Ejércitos. Desde la escalada de la crisis en 2020 se han llevado a cabo 20 rondas de diálogo militar de alto nivel, pero en ninguna de las que tuvieron lugar en 2023 se lograron avances concretos, aunque sí se acordó proseguir con el diálogo militar. Además del diálogo militar a un nivel técnico, durante el año se produjeron algunos encuentros políticos de alto nivel, como la conversación informal que mantuvieron Narendra Modi, primer ministro de India y Xi Jinping, presidente de China, con motivo de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica a finales de agosto. Tras este encuentro, el mandatario chino señaló que las disputas fronterizas no representaban la totalidad de las relaciones bilaterales entre los dos países, aunque días después de la cumbre de los BRICS, China hizo público un nuevo mapa estandarizado de su territorio en el que incluía zonas en disputa con India en Arunachal Pradesh y Aksai Chin. India respondió desacreditando la demarcación fronteriza mostrada por China. El presidente Xi no asistió a la cumbre del G20 en Delhi, de la que India era anfitriona por primera vez. Se trataba también de la primera vez que un presidente chino no asistía a esta cumbre que reúne a las 19 mayores economías del mundo y la UE. La ausencia de Xi de la cumbre del G20 mostró la distancia entre ambos Ejecutivos y el riesgo de escalada de la tensión, aunque numerosos medios de comunicación señalaron que la cumbre había sido un éxito diplomático para Modi. A pesar de que no se produjeron incidentes militares graves durante el año, si hubo algunos episodios de tensión. En abril, el ministro de Interior indio anunció un aumento de recursos para la seguridad en Arunachal Pradesh en respuesta a la construcción por parte de China de numerosas poblaciones en zonas cercanas a la Línea Actual de Control, frontera de facto entre ambos países. Se trata de poblaciones de nueva construcción, conocidas como "localidades modelo" en las que el Gobierno chino involucra a los nuevos pobladores en tareas de patrullaje conjunto en zonas cercanas a la frontera. En julio, las autoridades indias señalaron que China había plantado algunas tiendas en la zona de separación militar de Ladakh este, que fueron retiradas tras las protestas indias.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:
La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgieron varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcó el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y fueron constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

La tensión escaló en el estado indio de Manipur, con enfrentamientos intercomunitarios entre grupos meitei y kuki, que provocaron la muerte de 163 personas, según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal. Por su parte, International Crisis Group señaló en octubre que, desde el inicio de la crisis en mayo, al menos 176 personas habían muerto como consecuencia de la violencia, siendo las cifras de mortalidad asociada a la crisis sociopolítica más elevadas desde 2009. Además, la violencia ocasionó el desplazamiento forzado de más de 67.000 personas. La crisis se inició después de que el Tribunal Supremo de Manipur emitiera una orden en la que emplazaba al Gobierno a recomendar el estatus de "tribu registrada" *(scheduled tribe)* para la población meitei del estado –grupo étnico mayoritario en Manipur que profesa la religión hindú y que habita en la capital y las zonas planas del estado–, generando la oposición fundamentalmente de las comunidades kukis y también nagas –comunidades minoritarias que habitan en las zonas montañosas del estado y mayoritariamente cristianas. El estatus de "tribu registrada" facilita, entre otras cuestiones, el acceso a cuotas reservadas en empleos y servicios públicos. La orden del Tribunal Supremo también daba pie a que la población meitei pudiera adquirir tierras en las zonas habitadas por población kuki, lo que incrementó el temor a la pérdida de control sobre el territorio en las zonas en las que esta población está establecida. Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, la organización All Tribal Students' Union Manipur convocó movilizaciones en 10 distritos montañosos del estado, en los que vive mayoritariamente la población kuki. Durante **las protestas hubo disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en los que numerosas personas resultaron heridas**. Además, se produjo la quema de casas por parte de milicias meiteis integradas por miles de personas. Como consecuencia de esta violencia, se estableció un toque de queda y el Ejército se desplegó con orden de disparar sin previo aviso. Además, se produjo la evacuación de 20.000 personas, población meitei que habitaba en zonas mayoritariamente kukis y viceversa, que fueron trasladadas a campos para personas desplazadas.

En julio se hizo viral un vídeo en el que se mostraban escenas de violencia sexual contra dos mujeres de la comunidad kuki, perpetrados por un grupo de hombres meitei, lo que desencadenó nuevos enfrentamientos y disturbios. El vídeo no se había difundido con anterioridad como consecuencia de las restricciones en internet que el Gobierno indio impuso tras los disturbios de mayo. Además, numerosas mujeres se manifestaron en defensa de las víctimas. Posteriormente emergieron múltiples denuncias sobre otros casos de violencia sexual y se acusó a la Policía de complicidad con los perpetradores. Además, organizaciones de derechos humanos señalaron que se habían difundido noticias falsas sobre violencia sexual contra mujeres meitei que derivaron en una intensificación de los disturbios. No se produjeron denuncias formales sobre esta violencia contra mujeres meitei y sí se registraron más de una decena de denuncias de violencia sexual contra mujeres kukis. Como consecuencia de la violencia se incrementó notablemente la segregación entre las comunidades kukis y meiteis, reduciéndose drásticamente las zonas habitadas por personas de ambos grupos. En los meses siguientes continuaron la violencia y los enfrentamientos. La Policía, integrada mayoritariamente por población meitei, acusó al cuerpo de seguridad federal Assam Rifles de dar apoyo a la insurgencia kuki en el estado y se incrementaron las demandas por parte de la población meitei para que el Gobierno retirara a los Assam Rifles de Manipur. Por otra parte, cabe señalar que en marzo el Gobierno puso fin al acuerdo de alto el fuego que mantenía desde 2008 con los grupos armados kukis Kuki National Army and Zoumi Revolutionary Front, acusando a las insurgencias de estar detrás de las protestas sociales que habían tenido lugar en los distritos de Churachandpur, Kangpokpi y Tengnoupa exigiendo al estado que respetase los derechos territoriales tribales.

Asia Oriental

China – Filipinas	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Filipinas, EEUU

Síntesis:
En el marco del conflicto entre varios estados en el Mar de la China Meridional, en los últimos años el contencioso territorial entre China y Filipinas que ha tenido mayores implicaciones militares, políticas y diplomáticas ha sido la disputa entre ambos países por dos formaciones terrestres que se hallan en la zona económica exclusiva de Filipinas (a 200 millas náuticas de la costa , dentro de lo que Filipinas denomina el Mar Oriental de Filipinas) y que Beijing reivindica que como propias, al estar incluidas en la llamada "línea de diez puntos" –una región que abarca aproximadamente el 90% del Mar de la China Meridional. La primera de dichas formaciones, el atolón de Scarborough, estaba ocupado por Filipinas hasta 2012, cuando un incidente naval entre ambos países derivó en un control de facto del banco de arena desde entonces por parte de China. El segundo elemento en disputa es el Second Thomas Shoal (también conocido como Ayungin en tagalo y Renai en chino), un banco de arena de las Islas Spratly que se halla a unas 100 millas náuticas de la isla de Palawan (Filipinas) y a 620 de China, pero solamente a unas 20 millas del arrecife de Mischief, controlado y militarizado por Beijing. Desde 1999, Filipinas mantiene tropas permanentemente a bordo de un barco de la Segunda Guerra Mundial varado en Second Thomas para garantizar su control. En paralelo a los incidentes marítimos que se han registrado en las inmediaciones de ambas formaciones terrestres en disputa, en 2016 un tribunal de arbitraje de la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) dictaminó que no existía base legal para que China apele a derechos históricos sobre los recurso que están dentro de la "línea de los diez puntos", señaló que China había violado los derechos de soberanía de Filipinas con respecto a su zona económica exclusiva y también recalcó que los elementos geográficos en disputa en el archipiélago de las Spratly no generan una zona económica exclusiva, como sostiene Beijing. Sin embargo, China (ni tampoco Taiwán) no reconoció la validez del fallo por considerar que las disputas territoriales no están sujetas a la CNUDM y por considerar que estas deben resolverse a través de negociaciones bilaterales. Por otra parte, en varias ocasiones EEUU ha recordado públicamente sus obligaciones militares hacia Filipinas en virtud del tratado bilateral de defensa mutua de 1951.

En 2023 se incrementó sustancialmente la tensión política y militar entre China y Filipinas, con algunos de los incidentes marítimos más graves de los últimos años, un incremento de la retórica belicista y una profundización de las alianzas en materia de defensa entre Manila y varios países, especialmente con EEUU. En cuanto a los incidentes marítimos entre ambos países, Manila denunció que a principios de febrero la Guardia Costera china realizó maniobras peligrosas a menos de 140 metros de varios barcos filipinos y utilizó un láser de grado militar contra a uno de sus navíos cerca del banco de arena Second Thomas, cegando temporalmente a la tripulación. Según algunos medios, un ataque con láser suele considerarse hostil porque puede preceder el disparo de proyectiles contra un objetivo. Manila también denunció en febrero que alrededor de 30 buques chinos permanecían en su zona económica exclusiva y que la Guardia Costera china llevó a cabo advertencias por radio a varios aviones filipinos que sobrevolaban el banco de arena Second Thomas. El Gobierno filipino llamó a consultas al embajador chino para expresar su seria preocupación por el aumento de la frecuencia e intensidad de las acciones de China y por lo que consideró una clara violación de los derechos soberanos de Filipinas en el Mar de Filipinas Occidental. **Algunos analistas consideran que la decisión del Gobierno filipino de hacer público el uso del láser y de llamar a consultas al embajador supuso un punto de inflexión respecto de la política exterior que había seguido Manila hasta el momento, en especial la administración de Rodrigo Duterte**. Esta estrategia de China, catalogada como "transparencia asertiva" por parte algunos medios, consiste principalmente denunciar abiertamente las transgresiones chinas en su

zona económica exclusiva y en intensificar las patrullas en la zona. Poco después, en marzo, Manila volvió a denunciar que más de 40 navíos de la Guarda Costera china, la Armada y la llamada milicia marítima china (barcos pesqueros que según algunos análisis operan en coordinación con las autoridades chinas) permanecían en las inmediaciones de la isla de Thitu/Pagasa, administrada por Filipinas. En la misma línea, a finales de abril Manila afirmó que más de 100 embarcaciones chinas fueron avistadas en la región, y también denunció que varias de sus patrulleras costeras casi colisionaron con un barco de la marina china a finales de abril. En agosto la tensión militar entre ambos países volvió a incrementarse después de que la Guardia Costera china disparara cañones de agua contra barcos filipinos en misión de reabastecimiento del buque BRP Sierra Madre en el banco de arena Second Thomas. Algunos analistas consideran que la alta presión de los cañones de agua tiene la capacidad de hundir embarcaciones y también de infringir graves daños humanos (incluso la muerte) a su tripulación. En octubre, un barco de la guardia costera china chocó con un barco de reabastecimiento filipino a unos 25 km de Second Thomas, en paralelo a otra colisión entre un navío de la milicia marítima china y un buque de la Guardia Costera filipina. Poco antes, un barco chino se había acercado a unos 320 metros de un barco filipino al suroeste de la isla de Thitu, el mayor puesto de avanzada de Manila en el Mar de China Meridional. En la misma línea, en diciembre se produjeron otros dos incidentes considerados como graves por parte del Gobierno filipino. En el primero de ellos, barcos chinos utilizaron cañones de agua en ocho ocasiones contra barcos filipinos de una misión humanitaria para distribuir productos a los pescadores cerca del banco de arena Scarborough, controlado desde 2012 por China. En el segundo, Manila denunció que navíos chinos utilizaron cañones de agua contra barcos en una misión de reabastecimiento en Second Thomas, dañando gravemente uno de los barcos y poniendo en peligro la vida de su tripulación. Por otra parte, la guardia costera filipina declaró que fue acosada por un total de 13 barcos de la guardia costera y la milicia china y también que detectó más de 48 buques chinos en la zona, el mayor número de fuerzas marítimas en relación a misiones de reabastecimiento. Como en anteriores incidentes en las inmediaciones del banco de arena Second Thomas, el Gobierno chino declaró haber tenido que tomar medidas defensivas legítimas después de que los mencionados barcos en misión de reabastecimiento ignoraran repetidas advertencias por haber ingresado ilegalmente en las aguas adyacentes a Second Thomas, cuya soberanía Beijing reivindica.

En paralelo a un claro incremento en los incidentes y episodios de conflictividad entre China y Filipinas en el Mar de China Meridional, **el presidente Marcos anunció su intención de modernizar e incrementar la dotación presupuestaria de las Fuerzas Armadas**, alegando los retos que enfrenta el país en el Mar de la China Meridional. Además, **en 2023 Filipinas incrementó significativamente su cooperación con varios países que también disputas territoriales con China**, como India, Vietnam, Malasia o Indonesia. Cabe destacar especialmente el incremento de la cooperación en cuestiones de seguridad y defensa con Australia, EEUU y Japón. En cuanto a Australia, en noviembre ambos países llevaron a cabo por primera vez patrullajes marítimos y aéreos conjuntos en el Mar de la China Meridional. En cuanto a Japón, en 2023 los Gobiernos de ambos países decidieron iniciar negociaciones para un Acuerdo de Acceso Recíproco, con el objetivo de facilitar la presencia de fuerzas visitantes y realizar actividades conjuntas de entrenamiento militar. El Acuerdo sería el primero de Japón con un estado miembro de ASEAN y el tercero que suscribe en su historia después de los acuerdos con Australia y Reino Unido. Algunos analistas no descartan que ambos países puedan incluso llegar a firmar un pacto más amplio, como un Acuerdo de Fuerzas Visitantes, parecido al que tienen desde hace años EEUU y Filipinas, por los que algunos medios consideran la relación actual entre Filipinas y Japón como de "cuasi-alianza". En este sentido, cabe destacar las maniobras conjuntas que realizaron las guardias costeras Filipinas, Japón y EEUU en junio en el Mar de la China Meridional, las primeras de este tipo.

En cuanto a la cooperación en materia de defensa entre Filipinas y EEUU, en febrero de 2023 **EEUU y Filipinas anunciaron un pacto para ampliar su Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (EDCA, por sus siglas en inglés) para permitir el acceso militar estadounidense a cuatro instalaciones militares adicionales en Filipinas**. Varios analistas consideraron tal acuerdo como uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos tiempos en las relaciones entre EEUU y Filipinas, y señalaron que puede tener importantes implicaciones geoestratégicas en el Mar de la China Meridional y en el Mar de la China Oriental y en las relaciones entre China y EEUU. El 3 de abril Manila anunció la ubicación de las cuatro bases adicionales accesibles a las fuerzas estadounidenses en virtud del EDCA, tres de los cuales en el norte, frente a Taiwán, y la otra cerca de las islas Spratly. Por su parte, Washington anunció que asignaría más de 100 millones de dólares para finales del año fiscal 2023 para mejorar la infraestructura en los cinco sitios existentes de la EDCA y apoyar la rápida puesta en funcionamiento de los cuatro nuevos sitios. Aunque el propio Marcos señaló que las nuevas bases tenían un propósito puramente defensivo y que no deberían generar preocupación a nadie que no ataque la soberanía nacional y la integridad territorial del país, Beijing advirtió que la expansión de EDCA dañará gravemente los intereses nacionales filipinos y pondrá en peligro la paz y la estabilidad regionales. Por su parte, en varias ocasiones durante el año el Gobierno de EEUU reiteró el compromiso militar de EEUU hacia Filipinas en virtud del Tratado de Defensa Mutua de 1951. Además, en abril EEUU y Filipinas llevaron a cabo el mayor ejercicio militar conjunto realizado hasta el momento, con la participación de más de 17.000 tropas. Además, en noviembre y a principios de enero de 2024, ambos países llevaron a cabo patrullajes conjuntos desde los estrechos de Taiwán hasta el Mar de la China Meridional.

Finalmente, cabe destacar que la relación entre ambos países se deterioró a raíz de la publicación en agosto por parte de China de un mapa actualizado del país que incluía reclamos territoriales –impugnados por otros países– en la frontera occidental con la India, el Mar de la China Meridional y Taiwán. La nueva "línea de diez puntos", que abarca el 90% del Mar de China Meridional, incluye toda la isla de Taiwán (el décimo trazo), así como también varias islas pequeñas e islotes reclamados por países como Vietnam, Filipinas, Brunei, Malasia e Indonesia. El Gobierno de Filipinas denunció que la publicación de dicho mapa tenía como objetivo legitimar la supuesta soberanía y jurisdicción de China sobre zonas marítimas y territoriales de Filipinas y que dicha posición no tenía sustento en el derecho internacional ni en el fallo de arbitraje internacional de 2016 que invalidaba los reclamos de China en el Mar de China Meridional.

China – Japón	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Japón, Taiwán, EEUU

Síntesis:
La disputa entre China y Japón por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/ Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de la China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. El contencioso territorial entre China y Japón se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta, pero la tensión entre ambos se incrementó significativamente desde que el Gobierno japonés comprara en 2012 tres de las islas en disputa a un propietario privado, y de que China en 2013 declarase unilateralmente una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluye el espacio aéreo de las islas. En los años siguientes a tales decisiones se incrementó significativamente el número de incursiones de patrulleras de la Guarda Costera china y navíos chinos en las aguas contiguas e incluso territoriales (12 millas náuticas desde la costa) de las islas Senkaku/Diaoyu, así como el número de cazas desplegados por Japón en control y supervisión de su espacio aéreo. Por su parte, Japón adoptó una estrategia de seguridad nacional crecientemente asertiva en la región, incrementó notablemente su gasto militar y consolidó alianzas de defensa con otros países activos en la región como EEUU, que repetidamente ha manifestado su compromiso militar con la soberanía e integridad territorial de Japón en virtud del tratado bilateral de defensa de 1951. Taiwán (oficialmente la República de China) también considera las islas Senkaku/Diaoyu forman parte inherente de su territorio –por razones históricas, geográficas y de derecho internacional–, aunque su política respecto del contencioso ha generado comparativamente menor atención internacional y fricción con Japón, que detenta el control de las islas.

En 2023 se incrementó la tensión entre China y Japón acerca del contencioso sobre las islas Senkaku/Diaoyu, tanto en lo concerniente al número de incidentes en las aguas y el espacio aéreo en las cercanías de dichas islas, como con relación a las alianzas, estrategias y maniobras militares de ambos países en la región. En cuanto al primer aspecto, el Gobierno japonés denunció que en 2023 un total de 1.287 barcos del Gobierno chino operaron en la zona contigua a las islas Senkaku/Diaoyu –entre 12 y 24 millas náuticas– durante 352 días, la cifra más alta desde que existen registros al respecto (en 2008). Según algunos medios de comunicación japoneses en 2024 el Gobierno chino tiene la intención de incrementar el número de incursiones a todos los días del año y de autorizar a la Guardia Costera china a realizar inspecciones in situ de los buques pesqueros japoneses cuando lo considere necesario. Además, Tokio también denunció que los barcos de la Guardia Costera china mantuvieron una presencia ininterrumpida en la zona contigua de las Senkaku/Diaoyu durante 134 días consecutivos entre agosto y diciembre y que incluso se adentraron en las aguas territoriales japonesas (12 millas náuticas desde la costa) durante 42 días. El número de tales incursiones chinas en aguas territoriales de las Senkaku/Diaoyu se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pasando de una entre 2009 y 2011 a 23 en 2012, y manteniéndose en alrededor de la treintena en los últimos años. Cabe destacar que cada vez que los barcos de la Guardia Costera de China se adentran en las aguas territoriales de las Senkaku/Diaoyu, el Gobierno japonés envía a la Guardia Costera a la zona en disputa para exigir a los navíos chinos que la abandonen y en ocasiones eleva una protesta diplomática a Beijing. En este sentido, en varios momentos del año, pero especialmente entre los meses de octubre y diciembre, ambos países se acusaron mutuamente de incursionar en las inmediaciones de las islas Senkaku/Diaoyu y se registraron incidentes, maniobras peligrosas y movimientos de intimidación entre patrulleras guardacostas de ambos países y barcos chinos y japoneses.

En cuanto a la tensión respecto del espacio aéreo, en abril de 2023 el Gobierno japonés declaró que entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 desplegó 778 cazas, la gran mayoría (575) contra aviones chinos (575) y rusos (116). La cifra total supuso una disminución respecto de los más de 1.000 cazas desplegados en 2021, aunque algunos medios apuntan a que el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una disminución en el número de aviones rusos que volaron cerca de Japón. Desde el año 2013, la media anual del número de cazas que han despegado para supervisar el espacio aéreo o la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Japón ha sido superior a 700. A modo de ejemplo, en diciembre de 2023 Tokio desplegó varios cazas en respuesta al vuelo conjunto de 17 aeronaves chinas y rusas cerca de Japón y, poco después, al vuelo conjunto de cuatro bombarderos (dos chinos y dos rusos) en el Mar de Japón. Por otra parte, durante el año el Gobierno chino realizó varios avisos

contra aviones japoneses que volaban cerca de las islas Senkaku/Diaoyu. Tal situación se ha incrementado exponencialmente desde que el 2013 Beijing incluyera el espacio aéreo de tales islas en su ADIZ, exigiendo a cualquier avión extranjero que solicite autorización a entrar en su ADIZ y reservándose el Gobierno chino la posibilidad de tomar medidas defensivas de emergencia.

Por otra parte, en varios momentos durante el 2023 el primer ministro japonés, Fumio Kishida, advirtió que la creciente agresividad de China en la región, así como las actividades militares de países como Rusia y Corea del Norte, hacían que Japón se enfrentara al entorno de seguridad más peligroso y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, Kishida acusó a China de hostigar permanentemente a sus países vecinos en el Mar de la China Oriental y Meridional y advirtió que el desarrollo militar de China es un desafío estratégico sin precedentes para Japón y la comunidad internacional. En esta línea, en 2023 Japón incrementó sus alianzas de defensa con otros países, aumentó su presupuesto militar y siguió desplegando la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada en diciembre de 2022, que muchos analistas interpretaron como un punto de inflexión importante respecto de la estrategia de autodefensa que ha seguido el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en buena medida por las restricciones en materia de defensa impuestas por las potencias vencedoras en dicha guerra. Entre otras cuestiones, la nueva estrategia de seguridad incluye la adquisición a 10 años vista de capacidades de contraataque para interrumpir mucho antes y a mayor distancia agresiones contra el país, así como doblar su gasto en defensa para el 2027, dotándose para entonces del tercer mayor presupuesto militar del mundo, solamente por detrás de EEUU y China. Además, en 2023 Japón incrementó sustancialmente el presupuesto de su Guardia Costera –la agencia gubernamental más activa en el control de las islas Senkaky/Diaoyu– y llevó a cabo ejercicios entre la Guardia Costera, la Policía y las Fuerzas de Autodefensa para mejorar la coordinación entre estos cuerpos ante la eventualidad de que Japón sufriera un ataque y la Guardia Costera tuviera que ser integrada en el Ministerio de Defensa. Finalmente, cabe destacar que a mediados de marzo Japón desplegó a sus Fuerzas de Autodefensa, y también misiles, en la isla de Ishigaki (en la prefectura de Okinawa), cerca de las islas Senkaku/Diaoyu y de Taiwán, y al día siguiente llevó cabo por primera vez ejercicios para evacuar a más de 100.000 personas de las islas cercanas a Taiwán.

Además, en 2023 Japón incrementó sustancialmente sus alianzas y pactos de defensa con numerosos actores activos en la región. Además de los ejercicios militares conjuntos con EEUU que suelen llevarse a cabo rutinariamente cada año y de la adquisición de cuantioso equipamiento bélico procedente de EEUU, cabe destacar la firma de un pacto de defensa entre Japón y Reino Unido en enero –el primero de estas características con un país europeo, que incluye la posibilidad de entrenamientos y ejercicios militares conjuntos e incluso de despliegue de tropas en sus respectivos países–; el anuncio en enero de un partenariado estratégico entre Japón e Italia; la realización en enero y marzo de los primeros ejercicios militares y aéreos conjuntos con India; la realización en marzo de ejercicios militares conjuntos en la región con EEUU, Canadá, India y Corea del Sur; la conducción en octubre de ejercicios militares conjuntos con EEUU y Corea del Sur; el inicio en noviembre de negociaciones entre Japón y Filipinas para el despliegue de tropas en sus respectivos países; la propuesta en noviembre de altos cargos políticos japoneses de incluir a Japón en AUKUS –la alianza estratégica de defensa entre EEUU, Reino Unido y Australia–; o los primeros ejercicios militares trilaterales entre EEUU, Australia y Japón en diciembre. Además, cabe destacar la aproximación entre Japón y la OTAN. En julio, durante la cumbre de la OTAN en Lituania, ambas partes anunciaron su intención de incrementar su cooperación en varias áreas de defensa (como la ciberseguridad) y de incrementar la presencia de la OTAN en la región del Indo-Pacífico, generando importantes críticas por parte del Gobierno chino.

China – Taiwán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos, Sistema Internacional
Actores:	China, Taiwán, EEUU

Síntesis:
El conflicto entre la República Popular de China (China) y Taiwán (oficialmente República de China) se remonta al año 1949, tras la victoria del Partido Comunista en la guerra civil (1927-36 y 1945-49) contra el Gobierno de la República de China (creado en 1912 y liderado por el partido Kuomintang). Dicha victoria condujo a la proclamación por parte de Mao Tse Tung de la República Popular de China y a la huida del líder del Kuomintang, Chiang Kai Chek, y cientos de miles de personas a la isla de Formosa (Taiwán), donde el Kuomintang estableció un régimen autoritario de partido único y ley marcial hasta la democratización del país a finales de los años 80. Desde su creación en 1949, la República Popular China ha considerado a Taiwán como una provincia rebelde, negándose a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán y exigiendo a cualquier país que quiera mantener relaciones diplomáticas con Beijing que no reconozca a Taiwán. En sucesivas ocasiones, distintos mandatarios chinos han expresado su voluntad de lograr la reunificación bajo el principio de "un país, dos sistemas", pero a la vez no han descartado el uso de la fuerza para lograr tal objetivo. Por su parte, la República de China, con control efectivo sobre sobre Taiwán, Penghu, Kinmen, Matsu e islas más pequeñas, mantuvo su pretensión de ser el único representante legítimo de China y su territorio hasta 1991, cuando dejó de considerar al Partido Comunista como un grupo rebelde y reconoció su jurisdicción sobre la China continental. Hasta 1971, la República de China (Taiwán) detentó la representación de China en Naciones Unidas (ocupando un asiento permanente en el Consejo de Seguridad), pero en tal fecha Naciones Unidas reconoció a Beijing como el único y legítimo representante de China, posición que también adoptó EEUU en 1979 en el marco de la normalización de sus relaciones diplomáticas. En paralelo

a las tensiones políticas asociadas al estatus político de Taiwán, en el plano militar ha habido principalmente tres episodios bélicos significativos. En 1954-55, Beijing bombardeó las islas de Kinmen, Matsu y Tachen y tomó el control efectivo de las islas Yijiangshan, motivando la firma en 1954 del Tratado de Defensa Mutua Sino-Estadounidense. En 1958, la República Popular de China bombardeó nuevamente las islas de Kinmen y Matsu y hubo un enfrentamiento naval entre ambos países alrededor de la isla Dongding. En 1995 y 1996, Beijing lanzó varios misiles, coincidiendo con los comicios presidenciales de 1996, los primeros de elección directa tras el período de régimen autoritario.

En 2023 se incrementaron notablemente tanto la presión militar de China sobre Taiwán como la tensión política entre ambos países vinculada a la cercanía de las elecciones presidenciales en Taiwán en enero de 2024, el incremento de la cooperación militar entre Taiwán y EEUU y las relaciones exteriores de Taiwán con EEUU y otros países. **En el aspecto militar, cabe destacar el alto número de aviones chinos (1.714) que incursionaron en la Zona de Identificación de la Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) de Taiwán**, una zona mucho mayor que el espacio aéreo de Taiwán y que algunos países han establecido para disponer de mayor tiempo en el proceso de identificación de una aeronave potencialmente hostil. El aspecto que generó mayor preocupación, sin embargo, fue el claro incremento de aviones que cruzaron la llamada "línea media" entre China y Taiwán, una demarcación marítima de facto (no oficial ni sancionada por ningún tratado) trazada en 1955 para minimizar el riesgo de enfrentamientos y colisiones fortuitas en los Estrechos de Taiwán. A excepción de alguna incursión esporádica en 1999 –derivada de un breve incidente diplomático–, hasta el año 2019 China había respetado tácitamente la línea media, pero a raíz de la elección de Tsai Ing-wen como presidenta de Taiwán en enero de 2020, se produjo un drástico incremento tanto de incursiones en la ADIZ de Taiwán como en el cruce de la "línea media". Si **en 2022 se produjeron 565 cruces de la línea media, que se halla a escasos quilómetros de las aguas territoriales de Taiwán, en 2023 se produjeron 703**. En septiembre, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró haber detectado un número récord de aviones de combate chinos (103) sobrevolando en el espacio aéreo alrededor de Taiwán en solo un día. Además, durante el 2023, Taipei advirtió haber detectado entre 150 y 200 barcos chinos al mes en aguas cercanas. En respuesta a todas estas acciones por parte de China, en particular las incursiones de aviones en su ADIZ y el cruce de la "línea media" por parte de aviones o barcos chinos, **el Gobierno de Taiwán desplegó sus aviones a reacción y barcos guardacostas cientos de veces, y en alguna ocasión incluso activó su sistema de misiles.**

Por otra parte, **durante el 2023 también se incrementó la frecuencia, alcance y complejidad de los ejercicios militares de China**. Cabe destacar especialmente los ejercicios militares que Beijing llevó a cabo a principios de abril, en las que decenas aviones de combate y buques de guerra chinos simularon ataques contra Taiwán y rodearon la isla. Dichos ejercicios fueron una respuesta a la reunión que mantuvieron pocos días antes en EEUU la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, en las que ambos reafirmaron la sólida alianza entre los dos países. A finales de abril, Taiwán declaró que durante ese mes se habían registrado 548 incursiones de aviones chinos en su ADIZ. En el mes de julio, China también llevó a cabo ejercicios con cazas, bombarderos y barcos de guerra en el sur y el suroeste de la isla. Pocos días más tarde, Taiwán llevó a cabo sus ejercicios militares anuales. También cabe destacar que en el mes de abril China envió un avión no tripulado alrededor de Taiwán por primera vez, repitiendo tal acción durante otras cinco veces a lo largo del año. Algunos analistas también advirtieron sobre la creciente presencia de portaaviones chinos el Océano Pacífico, desde donde despegan aviones en dirección a la costa oriental de Taiwán –mucho menos protegida que la occidental– y llevan a cabo ejercicios militares sobre cómo repeler a EEUU ante la eventualidad de una invasión de Taiwán. En esta línea, durante el año EEUU, Taiwán y otros países denunciaron la creciente agresividad de China hacia barcos que llevan a cabo operaciones de libertad de navegación en aguas internacionales. En junio, por ejemplo, los Gobiernos de Canadá y EEUU denunciaron que dos barcos suyos que navegaban por los Estrechos de Taiwán casi colisionan con un barco de guerra chino por una maniobra peligrosa de este último. En la misma línea, **Washington denunció que el Ejército chino ha intensificado su comportamiento agresivo contra los aviones de vigilancia estadounidenses en el Pacífico, realizando más de 180 intercepciones de riesgo –300 si se incluyen otros países– desde 2021, más que en toda la década anterior.**

Otro de los ejes de tensión durante el año fue el **incremento de la cooperación militar entre EEUU y Taiwán**. En febrero, por ejemplo, varios medios informaron sobre la intención de Washington de incrementar el número de tropas desplegadas en Taiwán –de los 30 efectivos actuales a los entre 100 y 200. En las mismas fechas, una delegación bicameral del Congreso de EEUU se reunió en Taipei con la presidenta Tsai, comprometiéndose ambas partes a seguir fortaleciendo los vínculos en materia de defensa. Pocos días más tarde, el ministro de Exteriores de Taiwán y el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés se reunieron en Washington con el subsecretario de Estado y otros altos cargos del Gobierno estadounidense para discutir la cooperación militar entre ambos países. Además de la suscripción de numerosos contratos entre el Gobierno de Taiwán y empresas estadounidenses para la modernización o fortalecimiento de las capacidades militares de Taiwán y de la aprobación por parte de EEUU de varios paquetes de ayuda militar a Taiwán, cabe destacar la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de EEUU (en julio) y del Senado (en diciembre) de una ley que permite el desembolso de cuantiosos recursos para mejorar las capacidades de

defensa de Taiwán, incluyendo la formación y ejercicios militares, una mayor interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses o una mayor cooperación entre ambos países en ciberseguridad o inteligencia militar. La ley también incluye un informe semestral del secretario de Defensa al Congreso sobre las actividades militares de China en Taiwán, el Sudeste Asiático y el Mar de la China Meridional. **En 2023, el gasto en defensa de Taiwán alcanzó una cifra récord de más de 19.000 millones de dólares, pero expertos en la materia estiman que el gasto militar de China es alrededor de doce veces mayor que el de Taiwán**. Taiwán tiene alrededor de 169.000 fuerzas en servicio activo (y unos 2 millones en la reserva), mientras que el Ejército de China tiene más de dos millones de efectivos activos, el mayor del mundo. Finalmente, cabe destacar que en agosto, durante un encuentro con parlamentarios de Estonia, Letonia y Lituania, la presidenta Tsai solicitó la participación de Taiwán en los Centros de Excelencia de la OTAN en los países bálticos, que abordan cuestiones como ciberseguridad, comunicaciones y seguridad energética. (Destacado) **Cabe destacar el alto número de aviones chinos (1.714) que incursionaron en la Zona de Identificación de la Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) de Taiwán.**

Finalmente, cabe destacar que l**a celebración de las elecciones presidenciales en Taiwán en enero de 2024 también provocó una escalada de la retórica y la presión militar de China sobre Taiwán**, incrementándose el número de barcos que cruzaban la "línea media" y de aviones que se adentraban en la ADIZ de Taiwán. En el plano retórico, a finales de año el Gobierno chino declaró que la independencia de Taiwán significaría guerra, y Xi Jinping reiteró nuevamente la inevitabilidad histórica de la reunificación de Taiwán con China durante su discurso de fin de año. En la misma línea, el Gobierno chino declaró que el resultado de las elecciones no haría variar el hecho de que Taiwán, a la que considera una provincia rebelde desde 1949, es una parte innegociable de China. De hecho, algunos medios sostienen que la tensión entre China y Taiwán está en su punto más álgido desde 1996, cuando Beijing disparó misiles frente a la costa de Taiwán coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas de Taiwán tras el período de autoritarismo ejercido durante décadas por el Kuomintang.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea[68]	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:
La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado "eje del mal". Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

En paralelo al notable deterioro de las relaciones intercoreanas, la tensión entre Corea del Norte y varios países (especialmente EEUU, Corea del Sur y Japón) acerca del programa armamentístico norcoreano se incrementó claramente durante el año. De igual modo, también generaron preocupación la creciente cooperación en materia de defensa entre Corea del Norte y Rusia, las demandas del Gobierno surcoreano sobre el desarrollo de capacidades nucleares, el incremento de los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur, o la profundización de la alianza militar trilateral entre EEUU, Japón y Corea del Sur. En cuanto al desarrollo armamentístico de Corea del Norte, a finales de año el líder norcoreano Kim Jong Un señaló que el 2023 había sido un año de grandes transformaciones y avances en el terreno militar. **Además del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto y medio alcance durante todo el año, los dos aspectos más destacados fueron el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y la puesta en órbita de un satélite de reconocimiento militar**. En cuanto al primer aspecto, cabe señalar que **en 2023 se realizaron cinco ensayos con misiles balísticos intercontinentales, tres de los cuales con el modelo Hwasong 18, según Kim Jong Un el arma más poderosa del arsenal nuclear norcoreano**. Tales misiles son propulsados con combustible sólido (mucho más difíciles de detectar que los de combustible líquido) y, según algunos analistas, tienen la capacidad de transportar una cabeza nuclear y alcanzar una distancia de unos 15.000 kilómetros, alcanzando numerosos objetivos del territorio estadounidense. Según estos mismos análisis, el ensayo que Pyongyang llevó a cabo en diciembre, logrando una altitud de unos 6.000 kilómetros, fue el más exitoso. Previamente, la publicación de fotos sobre una carcasa de una ojiva nuclear por parte de Pyongyang provocó especulaciones sobre los avances de Corea del Norte en su capacidad de miniaturizar ojivas nucleares para poder ser adosadas

68. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano y afecta a otros países más allá de los que aparecen en la denominación del caso.

a misiles balísticos. El segundo avance tecnológico más destacado del año por parte de Corea del Norte fue la puesta órbita a finales de noviembre de un satélite de reconocimiento militar, una de las cinco prioridades militares para el quinquenio 2021-2026 anunciadas por Kim Jong Un en enero de 2023. Aunque el Gobierno surcoreano expresó un cierto escepticismo acerca del avance que pueda suponer tal tecnología, algunos análisis sugieren que el funcionamiento exitoso de tal satélite podría suponer un punto de inflexión en la capacidad de Corea del Norte de obtener información sobre los recursos y estrategias militares tanto de Corea del Sur como de EEUU. Pyongyang había llevado a cabo dos intentos anteriores de lanzamiento de dicho satélite en mayo y en agosto, provocando en ambos casos la condena de la comunidad internacional por considerar que contraviene varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho de que la puesta en órbita del mencionado satélite se produjera poco después de que se hiciera público un encuentro en Rusia entre Kim Jong Un y el presidente ruso, Vladimir Putin, generó especulaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno ruso hubiera colaborado en el desarrollo de la tecnología de lanzamiento satelital. Según estas mismas especulaciones, el Gobierno norcoreano había aportado cuantiosa munición para la guerra de Rusia contra Ucrania, tal y como fuentes de inteligencia de EEUU confirmaron en el mes de octubre. Además del asesoramiento en cuestión de lanzamiento de satélites, algunos análisis señalan que Pyongyang también tendría interés en colaborar con Rusia para obtener submarinos nucleares, modernizar su flota de cazas u obtener misiles tierra-aire. Antes del encuentro ente Kim Jong Un y Putin, en julio el ministro de Defensa ruso había viajado a Pyongyang para asistir los actos por el 70º aniversario del armisticio de la guerra de Corea (1950-1953), junto con un miembro del Politburó chino, en una de las visitas de mayor rango a Corea del Norte en los últimos años. Posteriormente, en octubre el ministro de Exteriores ruso se reunió con el líder norcoreano, mientras que en noviembre el ministro de Recursos Naturales ruso se reunió en Corea del Norte con el ministro de Relaciones Económicas Exteriores norcoreano para firmar un acuerdo de exploración geológica conjunta en Corea del Norte.

En varias ocasiones el presidente de Corea del Sur expresó su voluntad de desarrollar capacidades nucleares propias para hacer frente al programa armamentístico norcoreano

Otra de las cuestiones que generó mayor tensión en la península coreana fue la profundización de la cooperación militar de Corea del Sur con EEUU y Japón, tanto en clave bilateral como trilateral. En cuanto a la alianza trilateral entre Corea del Sur, EEUU y Japón, en agosto se celebró una cumbre en Camp David (EEUU) entre los líderes de los tres países en la que se comprometieron a profundizar su cooperación militar, compartir información de inteligencia, coordinar sus respuestas y políticas respecto de Corea del Norte, y celebrar anualmente una cumbre del llamado Diálogo Trilateral Indo-Pacífico. Además, en distintos momentos del año (febrero, octubre y diciembre), los tres países llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos, en algunos casos en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Las relaciones entre Corea del Sur y Japón, históricamente afectadas por la anexión de la península coreana al Imperio japonés entre 1910 y 1945, también se vieron notablemente fortalecidas durante el año. Los máximos dirigentes de ambos países, que se reunieron en marzo y mayo en Tokio y Seúl respectivamente, acordaron la compensación de algunas de las víctimas de la época colonial y el reforzamiento de su cooperación militar y una mayor integración de sus respectivos sistemas de defensa.

En cuanto a las relaciones entre Corea del Sur y EEUU, cabe destacar la firma de la llamada Declaración de Washington a finales de abril tras la cumbre entre Joe Biden y Yoon Suk-yeol, en la que ambos mandatarios se comprometieron, entre otras cuestiones, a fortalecer su histórica alianza en materia de defensa (que en 2024 cumplió su 70º aniversario), a desarrollar las capacidades disuasorias de EEUU en la península, a incrementar la magnitud de los ejercicios militares conjuntos, a desplegar submarinos nucleares en puertos surcoreanos y, especialmente, a crear el llamado **Grupo Consultivo Nuclear**. Dicho grupo, que se reunió en dos ocasiones durante el año, tiene el **objetivo conceder un mayor protagonismo al Gobierno surcoreano en la estrategia nuclear de EEUU en la península coreana y de dar salida a la voluntad expresada en varias ocasiones por Yoon Suk-yeol de que Corea del Sur desarrollara capacidades nucleares propias para hacer frente al programa armamentístico norcoreano**. Tras la Declaración de Washington del mes de abril, en dos ocasiones (en junio y diciembre), EEUU envió un submarino nuclear al puerto surcoreano de Busan. Además, durante el 2023 EEUU y Corea del Sur llevaron a cabo algunos de los mayores ejercicios militares (navales, terrestres y aéreos) de los últimos tiempos, destacando especialmente por su magnitud los que se llevaron a cabo en marzo (Freedom Shield), mayo y junio (los de mayor envergadura jamás realizados cerca de la frontera) o agosto (Ulchi Freedom Shield). Finalmente, cabe destacar el incremento de la tensión militar entre Corea del Norte y EEUU a mediados de año. En julio, Corea del Norte amenazó con derribar aviones de reconocimiento estadounidenses que según Pyongyang había cruzado la demarcación fronteriza marítima e incursionado en su zona económica exclusiva, mientras que a mediados de agosto el Gobierno norcoreano desplegó aviones militares en respuesta a lo que consideró una nueva incursión de EEUU en su zona económica exclusiva, tildando dicha acción de provocación militar.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Territorio Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera *de facto* en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental.

En paralelo al incremento de la tensión política y militar entre Corea del Norte y EEUU y al notable desarrollo armamentístico de Corea del Norte durante 2023, varios análisis señalaron que las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron su etapa más tensa y delicada de los últimos años. Aunque no se registraron episodios bélicos significativos entre ambos países, Kim Jong Un en varias ocasiones advirtió sobre la posibilidad de una guerra en la península coreana. Además, la suspensión por parte de ambos países en noviembre de un acuerdo de 2018 sobre la mejora de las relaciones bilaterales obstaculizó cualquier contacto o negociación entre ambas partes y posibilitó un incremento de la militarización y la ocurrencia de episodios bélicos en la frontera terrestre y marítima. Ya en el mes de enero, la tensión se incrementó notablemente después de que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, advirtiera sobre la posibilidad de desarrollar armamento nuclear propio si persistía o se incrementaba la amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, señalando que las capacidades científicas y tecnológicas del país permitían augurar un rápido desarrollo de tal armamento. Previamente, Kim Jong Un había prometido un incremento exponencial del armamento nuclear durante 2023 en respuesta a la amenaza que suponían para su país EEUU y Corea del Sur. Además, a finales de enero el Comando de las Naciones Unidas (UNC, por sus siglas en inglés) –la misión de la ONU bajo competencia de EEUU que supervisa el armisticio desde 1953– señaló, tras llevar a cabo una investigación, que tanto Corea del Norte como Corea del Sur habían violado el armisticio de 1953 desplegando drones al otro lado de la frontera (a finales de diciembre, Corea del Norte envió cinco de dichos drones al espacio aéreo surcoreano, propiciando que Seúl enviara otro dron a Corea del Norte). Más tarde, en abril las Fuerzas Armadas surcoreanas realizaron disparos de advertencia para expulsar a una patrullera norcoreana que traspasó la Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés), la frontera marítima de facto entre los dos países trazada por el UNC al final de la Guerra de Corea (1950-53). Corea del Sur ha patrullado las aguas alrededor de la NLL desde hace décadas porque Corea del Norte no reconoce la NLL y considera que la frontera se halla en aguas controladas por Corea del Sur. Además, durante el operativo de expulsión del navío norcoreano, un barco patrullero surcoreano colisionó con un barco pesquero chino cercano debido a la mala visibilidad, provocando leves heridas a parte de la tripulación surcoreana.

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron su etapa más tensa y delicada de los últimos años, según diversos análisis

El episodio de mayor repercusión política del año se produjo a finales de noviembre, cuando la puesta en órbita de un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte –tras dos intentos fallidos en 2023– fue respondido por Seúl con la reanudación la vigilancia aérea a lo largo de la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) y **la suspensión parcial del acuerdo entre ambos países firmado 2018** por Kim Jong Un y el entonces presidente surcoreano Moo Jae In, en un momento de aproximación de posiciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como entre Corea del Norte y EEUU. Al día siguiente, Pyongyang suspendió completamente tal acuerdo –denominado oficialmente la Declaración de Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la Península de Corea–, considerado por algunos análisis como la máxima expresión de las perspectivas de alcanzar la reunificación y desnuclearización de la península coreana a través del diálogo. Entre otras cuestiones, dicho acuerdo preveía la transformación de la DMZ en una zona de paz –cesando por completo desde el 2 de mayo de 2018 todos los actos hostiles en tierra, aire y mar–; el diseño conjunto de un plan para convertir las áreas alrededor de la NLL en el Mar Occidental en una zona marítima de paz con el fin de evitar enfrentamientos militares accidentales y garantizar actividades pesqueras seguras; o la celebración de manera periódica de reuniones militares al más alto nivel, incluyendo a los ministros de Defensa de ambos países. Además, el acuerdo de 2018 también reafirmaba el Acuerdo de No Agresión –que excluye el uso de la fuerza en cualquier forma entre sí–; instaba a llevar a cabo el desarme de manera gradual, a medida que se aliviara la tensión militar y se lograran avances sustanciales en el fomento de la confianza militar, y confirmaba el objetivo común de lograr una península de Corea libre de armas nucleares. En este sentido, ambos países se comprometían a llevar a cabo activamente reuniones trilaterales con EEUU, o cuadrilaterales con China, con miras a declarar el fin de la guerra y establecer un régimen de paz permanente en la península coreana, así como a impulsar medidas de fomento de la confianza (como el establecimiento de una oficina de enlace conjunta para facilitar el diálogo entre autoridades; la gestión conjunta de cuestiones

humanitarias y del programa de reunión de familias separadas por la guerra; la participación conjunta en eventos deportivos internacionales; o la conexión y modernización de los ferrocarriles y las carreteras fronterizas).

A finales de año, Kim Jong Un declaró que su Gobierno ya no buscaría ni aceptaría ningún tipo de diálogo acerca de la reunificación y la reconciliación por considerar que Corea del Sur era el principal enemigo del país y que Seúl solamente buscaba la "unificación por absorción". El líder norcoreano ordenó la eliminación de los símbolos de la reconciliación intercoreana –a modo de ejemplo, exigió derribar un monumento en honor a la búsqueda de la reunificación en Pyongyang–, así como la abolición de conceptos como 'reunificación', 'reconciliación' y 'compatriotas' de la historia nacional. En la misma línea, Corea del Norte también cortó las vías ferroviarias transfronterizas y abolió las agencias gubernamentales de gestión de las relaciones y el diálogo con Corea del Sur. Además, Kim Jong Un también pidió a la Asamblea legislativa reescribir la Constitución de Corea del Norte para especificar que el país buscará "ocupar, subyugar y reclamar" Corea del Sur como parte del territorio de Corea del Norte si estalla otra guerra en la península coreana, y declaró que las Fuerzas Armadas aniquilarían completamente a EEUU y Corea del Sur si Corea del Norte era provocada. De hecho, en su habitual discurso a finales de año con motivo del congreso del Partido de Trabajadores, el líder norcoreano señaló que la guerra en la península podía estallar en cualquier momento.

Sudeste asiático

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús

Síntesis:
Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

En 2023 siguieron registrándose numerosos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el grupo armado de oposición OPM, así como denuncias de importantes violaciones de derechos humanos en el marco de la estrategia de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas y acusaciones al OPM de ataques contra población civil. Según datos oficiales del Gobierno, a lo largo de 2023, hubo 209 incidentes de violencia política en Papúa, en los que 79 personas murieron, entre ellas 37 civiles, 20 soldados y tres policías y 19 miembros de grupos armados. Según estos mismos datos, la cifra de víctimas mortales se incrementó respecto del año anterior, en la que registraron 53. Sin embargo, según otras fuentes la intensidad del conflicto fue superior. **El centro de investigación ACLED señaló que en 2023 se registraron 187 eventos de violencia política, que provocaron 152 víctimas mortales, un número notablemente superior al del año 2022**, en el que se registraron 81 víctimas mortales en 104 episodios de violencia. En 2022, las dinámicas de violencia ya habían registrado un incremento cuantitativo importante respecto de los años anteriores. En tal año, por ejemplo, murieron un número de civiles (43) claramente superior al de los dos años precedentes (27 y 28 respectivamente). Según las autoridades, la zona de Papúa que en 2023 experimentó un mayor número de incidentes de violencia fue la regencia de Yahukimo, en la provincia de Alta Papúa (o Papúa de las Tierras Altas). Según varias organizaciones de derechos humanos, en septiembre de 2023 había más de 76.000 personas desplazadas internas a causa del conflicto, una cifra notablemente superior a las 60.000 que se estima había a principios de año. En marzo de 2022, Naciones Unidas afirmó que entre 60.000 y 100.000 papúes occidentales habían tenido que abandonar de manera forzada sus hogares desde 2018. Las dinámicas del conflicto en 2023 están en consonancia con las tendencias observadas desde el año 2018. Aunque en los años anteriores ya se había observado un incremento en el número de incidentes protagonizados por la insurgencia (de 11 en 2010 a 52 en 2017), varios análisis sostienen que el punto de inflexión se produjo en 2018, primero con la declaración de guerra al Estado indonesio por parte del OPM –que también llamó a incrementar las acciones contra empresas extranjeras que operan en Papúa– y posteriormente con el asesinato de 19 trabajadores de la construcción en diciembre de 2018 en la regencia de Nduga (provincia de Alta Papúa). Según dichos análisis, desde entonces se ha observado un incremento en el número, frecuencia, sofisticación, letalidad y alcance territorial de las acciones armadas del OPM, que históricamente se limitaban en gran medida a las tierras altas centrales de la región (especialmente en los distritos o regencias de Puncak Jaya y Mimika, en la provincia de Papúa Central, y Lanny Jaya, en la provincia de Alta Papúa) y que se han expandido a zonas tradicionalmente menos afectadas por la insurgencia, como Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, Deiyai y Keerom.

En cuanto a los episodios de violencia en 2023, uno de los eventos con mayor repercusión política fue el ataque a principios de febrero por parte del OPM contra una avioneta indonesia que había aterrizado en la regencia de Nduga y el posterior secuestro de sus cinco pasajeros indonesios y un piloto neozelandés. Los pasajeros fueron inmediatamente liberados, pero el OPM mantuvo rehén al piloto (a finales de 2023 no había sido liberado) y exigió públicamente al Gobierno que reconociera la soberanía de Papúa y pusiera fin al colonialismo indonesio en la región y a varios países que dejaran de vender armas y formar a las Fuerzas Armadas indonesias. La avioneta en cuestión, que fue incendiada, transportaba material para la región de Timika (donde opera una de las minas de oro y cobre más grandes del mundo) y trataba de evacuar a 15 trabajadores de la construcción que habían sido amenazados de muerte por parte del OPM, y que fueron rescatados por las Fuerzas Armadas al día siguiente del ataque al avión. A mediados de abril, el OPM declaró haber matado a 15 soldados en la regencia de Nduga durante una emboscada a un contingente militar en tareas de rescate del piloto neozelandés secuestrado, aunque días más tarde el Gobierno reconoció la muerte de solamente cinco militares. En otro incidente de violencia significativo ocurrido a principios de octubre, el Ejército declaró que cinco rebeldes murieron durante un operativo militar en la región montañosa de Serambakon, en la provincia de Alta Papúa. Días más tarde, a mediados de octubre, el Gobierno declaró que siete personas murieron y otras 11 resultaron heridas tras un ataque del OPM a una mina ilegal de oro en Serdala, en la regencia de Yahukimo. El OPM declaró que los trabajadores de la mina eran espías de las Fuerzas Armadas y que previamente al ataque había advertido a la población civil que abandonara la zona. A finales de agosto, dos trabajadores murieron y otros siete resultaron heridos tras un ataque del OPM a una mina de oro en la regencia de Pegunungan Bintang.

En este sentido, **el Gobierno y algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento de las amenazas y ataques del OPM contra civiles en los últimos años**. Cabe destacar especialmente el asesinato de la activista Michelle Kurisi a finales de agosto en la regencia de Lanny Jaya (provincia de Tierras Altas), reivindicado por el OPM en un comunicado en el que alegó que la víctima había colaborado con las fuerzas de seguridad y había participado en actividades de espionaje, incluida información relacionada con la liberación del piloto neozelandés secuestrado. A mediados de agosto, el Gobierno declaró que tres personas (dos ellas trabajadores gubernamentales) murieron tras un ataque del OPM contra el camión en el que viajaban, en la regencia de Nduga. Por otra parte, en varios momentos durante el año, el OPM advirtió que los ciudadanos extranjeros en la región podían ser objetivo de las acciones del grupo y anunció su intención de incrementar sus ataques contra determinados aviones que aterrizaran en la región. Durante el año, además del mencionado ataque a mediados de febrero, el OPM llevó a cabo varios ataques contra aviones. En marzo, las aerolíneas indonesias Wings Air y Trigana Air suspendieron sus operaciones en el aeropuerto de la regencia de Yahukimo (provincia de Alta Papúa), tras ser atacada por parte del OPM una aeronave con 66 pasajeros a bordo. En abril, el OPM disparó contra una avioneta que aterrizaba en la regencia de Intan Jaya (provincia de Papúa Central). En julio, el OPM atacó a un avión que transportaba personal militar en el aeropuerto de Pogapa, en la misma regencia de Intan Jaya.

Por otra parte, tanto el OPM como organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental durante el 2023 e instaron al Gobierno y a la comunidad internacional a revertir tal situación. El 5 de mayo de 2023, **cinco Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas iniciaron una comunicación con el Gobierno de Indonesia sobre casos de violencia, incluidas ejecuciones extrajudiciales en Papúa Occidental**. Más tarde, a principios de julio, la Asesora Especial del secretario general de la ONU para la Prevención del Genocidio, expresó en el seno Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su preocupación por la situación de los derechos humanos en Papúa, destacando prácticas como el acoso, el arresto arbitrario o la apropiación de tierras, y alentando al Gobierno de Indonesia a garantizar la asistencia humanitaria. En agosto, varias organizaciones de derechos humanos pidieron al Gobierno que, en su intento de ser elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2024 a 2026, asumiera algunos compromisos en materia de derechos humanos, como cooperar plenamente con los Procedimientos Especiales del Consejo, erradicar la impunidad, garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, permitir el acceso a la región a periodistas extranjeros y observadores internacionales, ratificar varios instrumentos internacionales en la materia –especialmente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ICPPED). En este sentido, también a mediados de agosto, una organización de derechos humanos con sede en Alemania, Human Rights Monitor, señaló que las Fuerzas Armadas podrían haber cometido crímenes contra la humanidad en las operaciones de contrainsurgencia que llevaron a cabo en septiembre y octubre de 2021 en el distrito de Kiwirok, y en las que utilizaron helicópteros, drones y armamento pesado. En cuanto a eventos específicos del año 2023, tanto el OPM como algunas organizaciones de derechos humanos acusaron al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de importantes violaciones de los derechos en la región. En finales de febrero, nueve personas murieron y otras 14 resultaron heridas en la ciudad de Wamena (la mayor de la provincia de Tierras Altas) durante un operativo policial y militar para dispersar las protestas provocadas por los rumores sobre el secuestro de un menor. En septiembre, cinco menores aparentemente asesinados con disparos fueron

hallados en la desembocadura del río Brasa, en Dekai, capital de la regencia de Yahukimo (provincia de Tierras Altas). Aunque el Ejército señaló que su muerte se produjo en el marco de un enfrentamiento con el OPM, este grupo declaró que las personas fallecidas eran civiles y no miembros de su grupo. En la misma línea, algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que unas 20 personas resultaron heridas durante una manifestación en Jayapura –la ciudad más grande de toda Papúa Occidental– con motivo del 61º aniversario del Acuerdo de Nueva York en 1962, que posibilitó la posterior anexión de Papúa a Indonesia. Según estas mismas organizaciones, decenas de personas fueron detenidas en 2023 durante las numerosas manifestaciones que se produjeron en toda Papúa en favor de la autodeterminación de la región y en contra de las violaciones de derechos humanos en Papúa.

2.3.3.2 El Pacífico

Papúa Nueva Guinea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville

Síntesis:
En las últimas décadas, se han registrado altos niveles de tensión y violencia intercomunitaria, clánica y tribal en varias regiones de Papúa Nueva Guinea, un país conformado por más de 600 islas y con una gran diversidad cultural (se hablan más de 850 lenguas). La mayor parte de tal violencia intercomunitaria, que afecta especialmente a provincias como Enga, Hela, Southern Highlands y Western Highlands, está vinculada a conflictos por la tenencia de la tierra –que en un porcentaje muy elevado se regula a través del derecho consuetudinario–, aunque históricamente también se han registrado episodios de violencia relacionados con otras cuestiones, como el control de los recursos, las rivalidades familiares o clánicas o las acusaciones de brujería y magia negra, que han provocado la muerte de decenas de personas. Las tensiones comunitarias se agudizan en periodos electorales (tal y como sucedió en 2022) y cada vez se tornan más letales por el creciente acceso a armas de fuego. Además, las regiones más afectadas por la violencia intercomunitaria se cuentan entre las que sufren mayores tasas de pobreza, menores niveles de educación formal y ausencia y fragilidad de instituciones vinculadas a la seguridad, la aplicación de la ley y el acceso a la justicia o la resolución de conflictos.

Durante el 2023 se registró un incremento significativo de la violencia comunitaria, clánica y tribal en varias partes del país, especialmente en la provincia de Enga, en la región de Tierras Altas. Según ACLED, en dicha provincia se registró la muerte de 208 personas, una cifra claramente superior a las del año 2022 (58) y 2021(52). Sin embargo, algunas fuentes sostienen que tal cifra es más cercana a las 300 víctimas mortales. Cabe destacar especialmente los enfrentamientos tribales que se registraron durante todo el mes de agosto, y que según varios medios de comunicación provocaron la muerte de unas 150 personas. Otros de los episodios de violencia comunitaria más importantes en la provincia de Enga se registraron en enero –cuando milicias de las comunidades sangu, mun y malee atacaron el municipio de Tole, matando a 11 personas y secuestrando a otras 11–, marzo –cuando 44 personas murieron como consecuencias de los enfrentamientos entre clanes pyakaili–, junio –los enfrentamientos clánicos en la región de Wapenamanda provocaron a muerte de 10 personas–, julio –los enfrentamientos entre tribus kaekin y sikin contra las comunidades ambulin, antiokon, lungupin y saus provocaron la muerte de 15 personas–, noviembre –cuando los enfrentamientos entre los clanes maimai y pokale provocaron la muerte de un número desconocido de personas y la declaración de los distritos de Wapenamanda y Wabag como zonas de guerra, con medidas como el toque de queda– o diciembre –los episodios de violencia entre una quincena de tribus y los clanes sau walep y itiokon neninein provocaron la muerte de una treintena de personas. En otras provincias aledañas de la misma región de Tierras Altas también se registraron episodios de violencia comunitaria durante el 2023, que según ACLED provocaron la muerte de otras 44 personas. Según este mismo centro de investigación, en el conjunto del país se registró la muerte de 347 personas en brotes de violencia política y comunitaria. Según la Policía, aunque en determinadas regiones del país ha habido históricamente enfrentamientos de raíz clánica y tribal, los altos niveles de violencia y mortalidad que se han observado en los últimos años están relacionados con el desarrollo y resultado de las elecciones del 2022 y con el mayor acceso a armamento sofisticado. En cuanto al primer factor, la Policía señaló que, aún si se suele observar un incremento de la violencia en periodos electorales, en las elecciones del pasado año sí hubo una mayor alineación de determinadas comunidades con determinados candidatos locales, detección de prácticas de clientelismo y rumores y acusaciones de secuestro de urnas y fraude y soborno en el escrutinio de votos. En cuanto al segundo factor, el Gobierno declaró que si bien los episodios de violencia en el pasado se habían llevado a cabo con armas muy rudimentarias, **en los últimos tiempos se había observado un mayor uso de armamento de fuego automático y sofisticado**. Además, **las autoridades regionales también declararon el creciente uso de "mercenarios" o de personas foráneas a la zona de conflicto que habían sido contratadas para participar en determinados ataques** –en este sentido, la Policía registró la muerte de como mínimo 20 de estas personas no locales que habían participado en la espiral de violencia en Enga. En este sentido, las autoridades también señalaron que el aumento del tráfico de drogas procedente de Indonesia también podría ser un factor en el aumento de la violencia y en la participación de mercenarios externos a sueldo. Además, las autoridades pusieron el acento sobre otros factores para explicar la dificultad para prevenir y poner fin a los episodios de violencia comunitaria, como la dispersión geográfica de

la población, el difícil acceso a determinadas regiones o, especialmente, la falta de policías (en Enga, hay unos 200 efectivos policiales para una población de unas 300.000 personas). Por su parte, el Gobierno desplegó efectivos policiales adicionales en Enga y se comprometió a hacer las reformas legislativas necesarias para dotar a las fuerzas de seguridad del Estado con los recursos y las competencias necesarias para hacer frente a lo que calificó de "terrorismo doméstico". En el plano político, los altos niveles de violencia provocaron numerosas críticas por parte de la oposición, así como la retirada de apoyo parlamentario al Gobierno por parte de varios partidos que hasta entonces habían conformado la coalición gubernamental.

2.3.4. Europa

Europa Oriental

Belarús	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, Letonia, Lituania, EEUU, Ucrania, OTAN, Rusia

Síntesis:
La exrepública soviética de Belarús alcanzó su independencia en 1991, convirtiéndose en una república presidencialista. Desde 1994 ha estado gobernada por Alexander Lukashenko, cuyos poderes presidenciales y límite de mandatos se ampliaron en referéndum en 1996 y 2004. Con una economía centralizada, heredera de la etapa soviética, y dependiente energéticamente de Rusia, Belarús ha oscilado entre relaciones de alianza estratégica con Rusia y una política de afirmación de la soberanía nacional que le ha reportado etapas de crisis con su país vecino. El régimen de autoritarismo político y de vulneración de derechos humanos ha dejado escaso margen para la oposición política y social al tiempo que ha sido motor de tensión de baja intensidad. En 2020 la reelección de Lukashenko generó movilizaciones antigubernamentales masivas. La represión masiva del régimen a las movilizaciones desencadenó una grave crisis política y social. La guerra en Ucrania –desencadenada por la invasión de Rusia en 2022, incluyendo a través del despliegue de tropas rusas desde Belarús– incrementó la tensión en Belarús y entre esta y Ucrania y actores occidentales.

Se mantuvo elevada la tensión, con la continuación de la represión desencadenada desde la grave crisis electoral de 2020, y un incremento de la militarización en el país, influida por la guerra en Ucrania y la tensión entre Rusia y actores euroatlánticos. En enero el Ministerio de Defensa del país anunció la llegada de más tropas, armamento y equipamiento, lo que incrementó alertas a principios de año sobre riesgos de un nuevo frente de guerra en Ucrania si Rusia atacaba desde Belarús –como hizo al inicio de la invasión en 2022–, pero que no se concretó. En todo caso, en 2023 Belarús siguió acogiendo tropas rusas y campos de entrenamiento para estas, con estimaciones dispares sobre la cifra de tropas, con entre un millar y varios miles de tropas. Asimismo, en enero el Ejército bielorruso llevó a cabo ejercicios militares conjuntos con Rusia en territorio de Belarús. Por su parte, Ucrania siguió denunciando el uso del espacio aéreo de Belarús por parte de Rusia para el lanzamiento de ataques con drones y con misiles. Asimismo, el presidente de Belarús, Alexander **Lukashenko, ordenó en febrero la creación de una fuerza territorial de defensa**, con voluntarios y que, según el Ministerio de Defensa, tendrá entre 100.000 y 150.000 miembros. Lukashenko, advirtió de que en caso de agresión, el país respondería de manera severa y rápida. En paralelo, en abril Belarús solicitó a Rusia garantías de seguridad. Asimismo, **Belarús y Rusia anunciaron en junio el primer despliegue de armas nucleares "tácticas" de Rusia en Belarús**. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió en julio de que cualquier ataque contra Belarús equivaldría a atacar a la Federación rusa.

Por otra parte, tras el levantamiento armado fallido del Grupo Wagner en Rusia en junio, su líder, Yevgeny Prigozhin, y miles de sus mercenarios marcharon a Belarús, en el marco de las condiciones impuestas por el Kremlin al grupo, con supuesta intermediación de Lukashenko. Ucrania cifró en unos 5.000 los combatientes del Grupo Wagner en Belarús en julio. Algunos análisis señalaron que su llegada causó tensión social y cierta oposición, incluso en las Fuerzas Armadas del país.[69] El Ministerio de Defensa de Belarús y el propio grupo informaron de entrenamientos militares conjuntos cerca de la frontera con Polonia en julio. En todo caso, algunos análisis señalaron que tras la muerte de Prigozhin en agosto,[70] la presencia de efectivos de Wagner se redujo de forma significativa y algunos medios de comunicación cifraron en un millar el número de mercenarios del grupo a principios de 2024.

En paralelo, **se incrementó la tensión política y militar entre Belarús, por un lado, y Polonia, Lituania y Letonia, por otro**. La llegada a Belarús de combatientes del Grupo Wagner, así como los ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Polonia, fue respondida con despliegue de fuerzas militares junto a la frontera de Belarús por parte de Polonia –con en torno a un millar de efectivos, según algunos medios de comunicación– y de Letonia. Polonia advirtió de que el país estaba preparado para diferentes escenarios y que podrían cerrar la frontera con Belarús y con el enclave de Kaliningrado en caso de incidentes críticos.

69. Harhalyk, Tatsiana. "What are Wagner Group mercenaries still doing in Belarus?". *DW*, 25 de enero de 2024.
70. El líder del Grupo Wagner murió en agosto al estrellarse el avión en que viajaba, en el que fallecieron diez personas. La muerte de Prigozhin fue atribuida al régimen ruso en numerosos análisis.

En diversas ocasiones Polonia y Belarús se acusaron de violaciones de sus respectivos espacios aéreos. Lituania cerró dos pasos fronterizos con Belarús en agosto y revocó los permisos de residencia a 910 ciudadanos de Belarús y a otros 254 de Rusia bajo consideraciones de amenaza a la seguridad nacional. Asimismo, población migrante fue objeto de instrumentalización, violencia y deshumanización en el marco de la disputa entre Belarús y Polonia, Lituania y Letonia. Polonia desplegó tropas adicionales, expulsó a personas migrantes y esgrimió la narrativa securitaria de que Belarús empujaba a migrantes con fines de desestabilización de Polonia. HRW denunció que las autoridades polacas llevaban a cabo expulsiones sumarias ilegales, en ocasiones con violencia, de migrantes y solicitantes de asilo que llegaban desde Belarús. Además, según denunció HRW, migrantes, incluyendo menores, permanecían atrapados en la frontera bielorrusa y afrontaban graves vulneraciones de derechos humanos por parte de agentes bielorrusos así como riesgo de muerte.[1] El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González Morales, publicó en mayo un informe resultante de su visita a Belarús en 2022 y de su evaluación de la situación de derechos de las personas migrantes en la frontera entre Belarús y Polonia, en el que concluyó que la situación en dicha frontera reflejaba la crisis geopolítica en la región y condenó la instrumentalización política de las personas migrantes.[72]

Por otra parte, en relación con la disputa entre el régimen y sectores de la población en torno a derechos y libertades políticas y civiles, 1.500 personas continuaban encarceladas en 2023 con acusaciones motivadas políticamente, según el informe anual de HRW.[73] La cifra incluía a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, sindicalistas, opositores políticos, entre otras. Según HRW, de manera creciente las autoridades sometieron a las personas presas a un régimen de incomunicación, tortura y otras formas de malos tratos. Entre otros muchos hechos de persecución durante el año, el Tribunal Supremo ordenó en agosto la disolución del partido Frente Popular de Belarús y el Partido Cívico Unido. En conjunto, según algunos análisis, las autoridades habían disuelto todos los partidos opositores y algunos pro-régimen, y a finales de año de 11 partidos políticos el número se había reducido a cuatro.[74] En noviembre Lukashenko anunció elecciones parlamentarias y locales para febrero de 2024. A través de un cambio introducido en la Constitución en 2022, también estaba prevista para 2024 la creación de una Asamblea Popular de Belarús, un nuevo órgano que tendrá autoridad sobre todas las ramas del Gobierno.[75]

Moldova	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, Rusia, UE, Ucrania, OTAN

Síntesis:
Moldova se proclamó república independiente en 1991, en el contexto de disolución de la URSS. Históricamente, su territorio actual a la izquierda del río Dniéster formó parte del principado medieval de Moldavia –integrado también por áreas de la actual Rumanía y Ucrania. Atravesó etapas bajo control de diferentes poderes, incluyendo el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, Rumanía y la URSS. Durante la II Guerra Mundial y tras el pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi, la Rusia soviética estableció la RSS de Moldova en 1940 (que pasaría a ser una más de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que formaron parte de la URSS) uniendo parte de la región histórica de Besarabia y Transnistria –franja territorial al este del río Dniéster y anteriormente parte de una región autónoma de la RSS de Ucrania. La actual Moldova, país de 2,6 millones de habitantes y una tasa de pobreza absoluta del 24,5% (2021), es escenario de tensión en diferentes ámbitos entrecruzados. Por una parte, mantiene un conflicto no resuelto en torno al estatus de Transnistria, área de mayoría rusoparlante, independiente de facto desde 1992, apoyada por Rusia y reconocida internacionalmente como parte de Moldova. Por otra parte, el país se ha visto afectado por etapas de inestabilidad y división política, incluyendo en relación con la orientación del país en política exterior, así como por graves problemas de corrupción. Ha mantenido neutralidad respecto a la OTAN, junto a una relación de cooperación con la alianza militar. En diferentes etapas se ha incrementado la tensión entre Rusia y Moldova, incluyendo en la esfera energética, en la que tradicionalmente Moldova ha dependido del gas ruso. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la tensión e incertidumbre en la vecina Moldova por los riesgos de extensión del conflicto.

Continuó la situación de tensión multidimensional, incrementada desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania en 2022. La situación de crisis incluyó durante el año alertas en el Gobierno y actores internacionales aliados, como Ucrania, la UE y EEUU, sobre riesgos de acciones hostiles de Rusia contra Moldova; medidas gubernamentales contra actores locales políticos y medios de comunicación considerados pro-rusos; advertencias de Rusia al país; y medidas hostiles entre ambos, como la expulsión de diplomáticos. A su vez, actores locales como algunas ONG expresaron preocupación por riesgos de vulneraciones de derechos humanos como la libertad de expresión ante medidas del Gobierno de cierre de medios de comunicación considerados pro-rusos. Por otra parte, Moldova denunció en febrero dos violaciones del espacio aéreo por misiles rusos disparados desde

71. Human Rights Watch. "Belarus", en *World Report 2024*, HRW, 2024.
72. Consejo de Derechos Humanos. *Visita a Belarús. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales*. A/HRC/53/26/Add.2, 18 de mayo de 2023.
73. Human Rights Watch. "Belarus", en *World Report 2024*, HRW, 2024.
74. Shraibman, Artyom. "Belarus Gears Up for Elections and Powerful New People's Assembly". Carnegie, 14 de noviembre de 2023.
75. Ibid.

el Mar Negro y dirigidos contra Ucrania, e impactos de fragmentos de misiles rusos en su territorio.

En febrero de 2023, la presidenta moldava, Maria Sandu, denunció en base a información de inteligencia compartida por Ucrania, planes de Rusia de un golpe de Estado en Moldova mediante individuos con experiencia militar de Rusia, Belarús, Serbia y Montenegro que se infiltrarían como civiles y tomarían edificios gubernamentales. Según Sandu, el intento de golpe preveía contar con apoyo de grupos locales como el partido opositor pro-Kremlin Shor –liderado por el magnate y político Ilan Shor, sentenciado en abril de 2023 *in absentia* por fraude masivo en el sistema bancario en 2014 (caso en el marco del cual se condenó a otros actores económicos y políticos de diferente signo). En los últimos meses de 2022 ya se habían incrementado los temores de riesgo de injerencias externas de la mano de las protestas antigubernamentales organizadas por el partido Shor en septiembre y que se prolongaron a 2023 y en la que se reclamó la dimisión del Gobierno y la presidenta moldava. Entre otras medidas, Moldova denegó la entrada al país a un equipo de boxeadores de Montenegro y en marzo realizó diversas detenciones. La Policía moldova también advirtió en junio que los servicios de inteligencia rusos estaban utilizando las protestas promovidas por el partido Shor para desestabilizar el país. Rusia negó las alegaciones sobre un plan contra el Gobierno moldavo. Las protestas en los primeros meses de 2023 tuvieron alcance limitado, con la participación de entre algunos cientos y algunos miles de personas, incluyendo personas pensionistas contrarias al alza de precios. Se produjeron protestas también, con participación reducida, contra el cambio del nombre oficial del idioma del país, de "moldavo" a "rumano". Esta modificación se adoptó en marzo, a través de un proyecto de ley promovido por el Gobierno y aprobado en segunda lectura con 58 votos de los 101 escaños parlamentarios. Algunos analistas lo señalaron como una medida errónea y que enviaba una señal negativa para la población que se identifica como moldava.[76]

Por otra parte, **el Tribunal Constitucional de Moldova ordenó en junio la disolución del partido opositor pro-ruso Shor**, al considerarlo inconstitucional, en una sentencia que determinaba que el partido actuaba contrario a los principios del estado de derecho y que suponía una amenaza a la soberanía e independencia del país,[77] decisión ratificada por el tribunal en septiembre, en dictamen final e inapelable. El líder del partido, Ilan Shor, anunció en junio la creación de un nuevo bloque político, "Șansă, Obligații, Realizări" (S.O.R, por sus siglas en moldavo), que aglutinase a diversos partidos, ante el ciclo electoral entrante (elecciones locales de noviembre de 2023, presidenciales de 2024 y parlamentarias de 2025). A su vez, las elecciones a gobernador de la región de Gagauzia de abril de 2023 habían otorgado el triunfo en segunda ronda (mayo) a la candidata del partido Shor, Eugenia Gutul.

Por otro lado, Moldova ordenó en julio la salida del país de 18 diplomáticos rusos del cuerpo diplomático de la Embajada rusa y de otras 27 personas del cuerpo técnico, con lo que solo permanecerán 10 diplomáticos y 15 técnicos (nota para traducción: en el original salía mencionado como "technical personnel"). Con relación a la decisión, Moldova alegó acciones hostiles de Rusia. La expulsión se produjo tras la publicación de una investigación periodística que identificó 28 antenas en los edificios diplomáticos rusos en el país, ubicados junto a la sede de la Presidencia, el Parlamento y el Gobierno moldavos. En respuesta, Rusia anunció la prohibición de entrada al país de 20 representantes de Moldova.

En los comicios locales de noviembre, el partido gubernamental PAS ganó en torno al 40% de los votos, pero no obtuvo la victoria en grandes localidades, como la capital, donde Ion Ceban –del partido Miscarea Alternativa Nationala (MAN)– resultó reelegido. Una semana antes de las elecciones locales, las autoridades de Moldova suspendieron las licencias de seis canales de TV propiedad o afiliados a Ilan Șhor y Vladimir Plahotniuc –oligarca y ex líder del Partido Demócrata, huido del país en 2019, acusado de corrupción, incluyendo en el fraude masivo de 2014–, y también bloquearon 31 portales de internet –Tass e Interfax, entre otros. El Servicio de Información y Seguridad (ISI) les acusaba de difundir información falsa y el Gobierno enmarcó el cierre en la respuesta a lo que considera guerra híbrida de Rusia contra Moldova**. Diversas ONG de Moldova (Centre for Independent Journalism, the Electronic Press Association, RISE Moldova, Access-Info Centre, entre otras) expresaron preocupación por las medidas ante lo que consideraron como falta de explicaciones suficientes sobre las circunstancias legales y de hechos que justificasen la suspensión**. Además, días antes de los comicios la Comisión Nacional de Situaciones de Emergencia excluyó de estos al partido Șansă –partido integrante del bloque S.O.R., anteriormente conocido como "Ai Noștri", creado en 2020 y renombrado como Șansă coincidiendo con la creación del bloque S.O.R., en el que se integró. Su exclusión impidió la concurrencia de 652 candidatos. La OSCE señaló que las elecciones transcurrieron en calma, que la mayoría de los y las candidatas pudieron realizar sus campañas con libertad, pero que los amplios poderes de la Comisión Nacional de Situaciones de Emergencia fueron usados para restringir la libertad de expresión y asociación y la libertad de presentarse a elecciones.[78] La misión también señaló que interferencias externas

76. De Waal, Thomas. "Time to Get Serious About Moldova", *Carnegie Europe*, 11 de mayo de 2023.
77. Novaya Gazeta Europe. "Moldova: pro-Russian Șor Party ruled unconstitutional", *Novaya Gazeta*, 19 de junio de 2023.
78. OSCE. "Moldova's elections peaceful and efficient, but marred by sweeping restrictive measures amid national security concerns: international observers", *OSCE*, 6 de noviembre de 2023.

y denuncias de compra de votos durante la campaña fueron elementos de preocupación. Por otra parte, la UE estableció en abril una nueva misión civil en Moldova (Misión de Cooperación de la UE en la República de Moldavia, EUPM Moldavia), en respuesta a petición de apoyo de Moldova, con el objetivo de "reforzar las estructuras de gestión de crisis" y su resiliencia ante las "amenazas híbridas", incluyendo ciberseguridad, manipulación de información e injerencias de "agentes externos". En diciembre la UE aprobó el inicio de negociaciones para la adhesión de Moldova –país que recibió el estatus de país candidato en 2022. Ese mismo mes, el Parlamento moldavo aprobó –con el apoyo de 59 votos de un total de 101 escaños– una nueva estrategia de seguridad nacional que identifica a Rusia como amenaza, y que reemplaza a la anterior, de 2011. Durante el año se mantuvo elevada también la tensión en torno a la disputa con la región de Transnistria.[79]

Moldova (Transnistria)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdnistria, Rusia, Ucrania

Síntesis:
Transnistria, un territorio de 4.000 km^2 y medio millón de habitantes, con mayoría de población rusoparlante, legalmente bajo soberanía de Moldova y de facto independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transnistria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía –ambas con vínculos históricos y culturales–. Transnistria rechazó la soberanía de Moldova y se declaró independiente de esta. Se asistió a una escalada de incidentes, que derivaron en un conflicto armado en 1992. Un acuerdo de alto el fuego ese mismo año puso fin a la guerra y dio paso a un proceso de paz, con mediación internacional. Entre las principales cuestiones en disputa se incluye el estatus del territorio –defensa de la integridad estatal y aceptación de un estatus especial para la entidad, por parte de Moldova; y demanda de modelos de amplias competencias, como confederalismo e independencia plena, por parte de Transnistria. Otros ejes de disputa en la negociación incluyen la dimensión cultural y socioeconómica y la presencia militar rusa en Transnistria. La cuestión de Transnistria es uno de los ejes de tensión en un escenario de fragilidad más amplio en Moldova, exrepública soviética, uno de los países más pobres de Europa y afectado por divisiones políticas en el eje pro-UE y pro-Rusia y por problemas históricos de corrupción. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la incertidumbre en la región de Transnistria y en el conjunto de Moldova, fronterizas con Ucrania.

Se mantuvo elevada la tensión en la región de Transnistria, influida por la situación de guerra en la vecina Ucrania y los riesgos de extensión del conflicto. En febrero Rusia amenazó con un escenario militar como el de Ucrania en Transnistria en caso de que Moldova intentase resolver por la fuerza la disputa sobre el estatus de la región y advirtió a Moldova contra los llamamientos de esta a la "desmilitarización" de la región. Además, en una retórica que recordaba a la utilizada por Rusia en Ucrania para justificar la invasión, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió de que defenderían a la ciudadanía de Rusia que vive en Moldova en caso de cualquier riesgo procedente de Moldova, EEUU o la UE. En la presentación en febrero de las prioridades del nuevo Gobierno, el nuevo primer ministro moldavo, Dorin Recean, había señalado en relación con Transnistria la retirada de las tropas rusas de la región y la desmilitarización de la franja. Según analistas, otros elementos prioritarios para el Gobierno incluían la búsqueda de una solución diplomática que permita la recuperación de la soberanía plena de Moldova sobre Transnistria. El Gobierno moldavo instó a la calma ante las advertencias de Rusia sobre un posible escenario militar. Por otra parte, Rusia revocó en febrero un decreto de 2012 que recogía el concepto de política exterior rusa de entonces y en que se explicitaba el compromiso de Rusia de buscar maneras de resolver la cuestión de Transnistria sobre la base del respeto a la soberanía, la integridad territorial y el estatus de neutralidad de Moldova, y en el que también se sugería el desarrollo de relaciones de proximidad con EEUU y la UE. En marzo Moscú presentó su nuevo concepto de política exterior, con relación al cual el liderazgo de Transnistria destacó la cláusula de apoyo a la seguridad de los aliados de Rusia.

Otros momentos de tensión durante el año incluyeron las denuncias de las autoridades de Transnistria en marzo sobre un supuesto plan de Ucrania de asesinar a representantes de la región mediante un atentado con coche bomba junto a una comitiva presidencial en la capital. El Kremlin acusó a Ucrania de estar preparando provocaciones como parte de un plan para invadir la región. El Gobierno de Moldova y medios de comunicación señalaron la falta de evidencias de las denuncias. Ucrania rechazó las acusaciones, que calificó de provocaciones dirigidas por Moscú. Por otra parte, Moldova expresó preocupación por unas maniobras militares en abril no anunciadas con antelación y llevadas a cabo por el contingente ruso de las fuerzas de mantenimiento de paz en Transnistria y que, según Moldova, habrían incumplido los términos del régimen que regula la llamada zona de seguridad. Rusia mantiene en Transnistria en torno a 1.500 tropas, una parte de ellas en el marco de las fuerzas trilaterales de mantenimiento de la paz (Moldova, Transnistria, Rusia) y otra parte como miembros del Grupo Operativo de Fuerzas Rusas (OGRF, por sus siglas en inglés), estas últimas consideradas ilegales por Moldova. Por su parte, también Moldova llevó a cabo ejercicios militares cerca de Transnistria, en diciembre.

79. Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en este capítulo.

La reforma del código penal por parte de Moldova, con enmiendas aprobadas por el Parlamento en febrero, fue otra área de confrontación entre las partes en conflicto. Los cambios aprobados prevén sanciones en casos de financiación e incitación al "separatismo", conspiración contra Moldova u obtención o robo de información que pueda dañar la soberanía, independencia e integridad del país. A lo largo del año, las autoridades de Transnistria criticaron la reforma y denunciaron la falta de garantías para sus representantes. En respuesta a una petición de la Misión de la OSCE en Moldova, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR) se pronunció sobre la reforma, advirtiendo de que tipificar el "separatismo" como delito criminal tenía el riesgo de criminalizar la mera expresión de ideas y podía ser usado como pretexto para suprimir la movilización pacífica u opiniones sobre diferentes arreglos territoriales, autonomía o incluso independencia. En su pronunciamiento incluía también una serie de recomendaciones.[80] En el plano interno de Transnistria, en julio murió asesinado un destacado líder opositor político de Transnistria, Oleg Khorzhan, líder del Partido Comunista en Transnistria desde 2004, miembro del Parlamento de la región entre 2010 y 2019, crítico con las autoridades locales y encarcelado entre 2018 y 2022. ONG de derechos humanos de Moldova instaron al Gobierno moldavo a investigar su muerte. Moldova, a su vez, solicitó el apoyo de la OSCE para investigar el caso.

Por otra parte, durante el año diversos análisis alertaron sobre los desafíos que afrontan Moldova y Transnistria en el nuevo contexto abierto desde la guerra en Ucrania. Entre otros, a finales de 2023, **Transnistria continuaba siendo dependiente del gas de Rusia para su población y su economía, pero estaba en duda la continuidad futura del contrato entre Rusia y Ucrania de tránsito de gas**, que expira en diciembre de 2024. Algunos análisis señalaron que la finalización de este acuerdo o la falta de alternativas podría generar shock económico y una crisis humanitaria en la región en disputa.[81] En paralelo, Moldova continuaba siendo dependiente de la electricidad procedente de Transnistria –producida con gas ruso. Se añadían desafíos e incerteza relativos al proceso de adhesión de Moldova en la UE –con estatus de país candidato en 2022 y luz verde en diciembre de 2023 al inicio de negociaciones– y a cómo la disputa no resuelta en torno a Transnistria afectará y se verá afectada por ese proceso.[82] En paralelo, las negociaciones de paz entre Moldova y Transnistria continuaron afrontando numerosos obstáculos, también por influencia de la guerra en Ucrania.[83]

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía

Síntesis:
Armenia y Azerbaiyán afrontan una tensión interestatal con diversas dimensiones. Por una parte, han mantenido una disputa en torno a la soberanía de Nagorno-Karabaj, un territorio habitado históricamente por población local armenia mayoritariamente, pero que fue integrado en 1923 por la URSS como región autónoma dentro de Azerbaiyán. A finales de los años 80, la población armenia de Nagorno-Karabaj y sus autoridades locales iniciaron una campaña para unirse a Armenia. Precedido de incidentes y violencia civil desde 1988, y en el contexto de descomposición de la URSS e independencia de Armenia y Azerbaiyán, el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj escaló a un conflicto armado entre las fuerzas locales del enclave, apoyadas por Amenia, y Azerbaiyán. Finalizó con un alto el fuego en 1994. En esa guerra, las fuerzas de Nagorno-Karabaj tomaron el control del enclave y de los siete distritos de alrededor, pertenecientes a Azerbaiyán y cuya población azerbaiyana fue expulsada. Más de 24.000 personas (más 30.000, según algunas estimaciones) murieron y más de un millón de personas se desplazaron de Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán. Un proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán en años sucesivos no logró resolver el conflicto. Desde el alto el fuego de 1994 hubo diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. El conflicto se reabrió en 2020 con una ofensiva militar de Azerbaiyán y una guerra de 44 días, en la que Bakú retomó los distritos alrededor de Nagorno-Karabaj y un tercio de este. Varios miles de personas murieron y decenas de miles se desplazaron. Se alcanzó un acuerdo de cese de hostilidades, que autorizó el despliegue de tropas rusas de mantenimiento de la paz, pero dejó irresuelto el estatus político del territorio en disputa. Azerbaiyán lanzó una nueva ofensiva militar de un día en 2023 contra Nagorno-Karabaj, que llevó al éxodo a su población armenia y con la que Bakú forzó su reintegración en Azerbaiyán. En paralelo, Bakú y Ereván mantienen una disputa en torno a la delimitación de su frontera y apertura de rutas de transporte, agravada por su hostilidad histórica en torno a Nagorno-Karabaj. La disputa política va acompañada de incidentes de violencia transfronterizos.

Tres años después de la guerra del 2020, una ofensiva militar de Azerbaiyán de un día de duración en septiembre llevó al éxodo de la práctica totalidad de la población de Nagorno-Karabaj, más de 100.000

80. ODIHR. *Comments on the criminalization of "separatism" and related criminal offences in Moldova.* Opinion-Nr.: CRIM-MDA/490/2023, 4 de diciembre de 2023.
81. Ibragimova, Galiya. "Is Moldova Ready to Pay the Price of Reintegrating Transnistria?". *Carnegie*, 24 de enero de 2024; Ceban Evghenii. "Time is running out to solve Moldova's Transnistria question". *Open Democracy*, 23 de agosto de 2023.
83. Ibid.
84. Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de Paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*,Barcelona: Icaria, 2024.

personas, y a la reintegración por la fuerza del enclave en Azerbaiyán. En el periodo de 2023 previo a la ofensiva militar, se produjeron incidentes de violencia tanto en la frontera interestatal, como entre fuerzas de Azerbaiyán y de Nagorno-Karabaj, con alegaciones por las partes en conflicto de diversas víctimas mortales y heridos. En respuesta a una petición de Armenia, la UE desplegó en febrero una misión civil de observación en el lado armenio de la frontera con Azerbaiyán (EUMA), que tomó el relevo de EUMCAP (octubre-diciembre de 2022). Azerbaiyán y Rusia criticaron el establecimiento de la misión. Pese a su despliegue continuaron produciéndose incidentes fronterizos entre fuerzas de seguridad armenias y azerbaiyanas, con diversas víctimas mortales y heridos. Por otra parte, junto a las hostilidades armadas, en los meses previos al ataque de septiembre, continuó el bloqueo del corredor Lachin –única vía que conectaba Nagorno-Karabaj con Armenia. El cierre se inició en diciembre de 2022 por supuestos activistas medioambientales azerbaiyanos, mientras Armenia responsabilizó a Azerbaiyán –cuyo régimen no tolera la protesta independiente. Azerbaiyán instaló en abril de 2023 un puesto de control militar en el corredor. **Expertos de la ONU instaron a Azerbaiyán a levantar el bloqueo, que generó una situación de emergencia humanitaria**, con graves restricciones de bienes básicos –incluyendo alimentos y medicamentos, entre otros– e impactos en el funcionamiento de centros médicos y educativos y que se fue agravando con el trascurso de los meses.[85] Desde mitad de junio, bloqueó todo el transporte de productos humanitarios e impidió el paso del CICR periódicamente, según denunció HRW.[86] Bakú también cortó líneas eléctricas y de gas, causando apagones.[87] En agosto el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia sobre Nagorno-Karabaj, solicitada por Armenia, invocando el artículo 35(1) de la Carta de Naciones Unidas.

Una ofensiva militar azerbaiyana llevó al desmantelamiento de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, a su reintegración por la fuerza en Azerbaiyán y al éxodo forzado de la práctica totalidad de su población armenia

La tensión escaló en septiembre. **Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar sobre Nagorno-Karabaj. Tras 24 horas de enfrentamientos, las autoridades de Nagorno-Karabaj capitularon y firmaron un acuerdo de cese completo de hostilidades, con facilitación de Rusia y en los términos impuestos por Azerbaiyán**. El acuerdo incluía la retirada de todas las Fuerzas Armadas de Armenia presentes en Nagorno-Karabaj –inexistentes según el Gobierno de Armenia– y la disolución y desarme completo de las Fuerzas Armadas de Nagorno-Karabaj. Estimaciones situaron en varios centenares las víctimas mortales entre el 19 y 20 de septiembre (en torno a 200 militares azerbaiyanos, según su Ministerio de Defensa; en torno a 200 soldados de Nagorno-Karabaj, según el portavoz de servicios de emergencia de la región; 10 civiles, de los cuales 5 menores, según el Defensor del Pueblo de Nagorno-Karabaj). Según el Defensor del Pueblo del enclave, otras 400 personas resultaron heridas, incluyendo en torno a 40 civiles –13 de ellas menores. Al menos otras 218 personas murieron y 120 resultaron heridas a causa de una explosión e incendio en un depósito de gasolina en torno al cual se habían congregado centenares de vehículos para repostar y huir a Armenia. Las autoridades de Nagorno-Karabaj atribuyeron la explosión a un incumplimiento de las normas de seguridad. **La ofensiva militar de Azerbaiyán causó el desplazamiento forzado de la práctica totalidad de la población armenia de Nagorno-Karabaj**. A principios de octubre en torno a 100.500 personas ya se habían desplazado a Armenia. Una misión de la ONU visitó zonas de Nagorno-Karabaj el 1 de octubre y señalaron que, según sus interlocutores, solo permanecían en la región entre 50 y 1.000 personas armenias. La población previa estimada era de unos 120.000 habitantes.

En días posteriores al cese de hostilidades se produjeron diversas reuniones entre representantes de Nagorno-Karabaj y de Azerbaiyán, en que se abordaron cuestiones humanitarias, de desarme y de integración de la población armenia de Nagorno-Karabaj, al menos algunas sin acuerdos. El presidente de Nagorno-Karabaj, Samvel Shajramanián, emitió un decretó el 28 de septiembre de disolución de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, por el cual esta dejará de existir el 1 de enero de 2024. En las semanas posteriores a la ofensiva se produjeron algunos incidentes y violaciones del cese de hostilidades. En paralelo, entre finales de septiembre y principios de octubre Azerbaiyán detuvo a varios dirigentes políticos y militares de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán presentó a principios de octubre su plan de integración, que contemplaba cinco ámbitos (esfera legal y administrativa; seguridad; economía; ámbito social; cultura; educación y religión) y que afirmaba garantías de derechos educativos, culturales, lingüísticos y religiosos. No obstante, el plan contrastaba con las acciones y retórica bélicas de Bakú y con la falta de garantías de derechos en el propio Azerbaiyán, así como con las inciertas perspectivas para el derecho al retorno de la población armenia de Nagorno-Karabaj. Entre otros hechos, el presidente azerbaiyano visitó en vestimenta militar la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, el 15 de octubre, alzó la bandera de Azerbaiyán, pisó la bandera de la extinta república de Nagorno-Karabaj en la antigua sede de su Gobierno, y emitió un discurso triunfalista en el cual acusó a los mediadores internacionales de falta de interés durante décadas en la resolución del conflicto, y de preferir congelarlo.

85. ACNUDH. "UN experts urge Azerbaijan to lift Lachin corridor blockade and end humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh", *ACNUDH*, 7 de agosto de 2023.
86. Human Rights Watch, *World Report 2024*, 2024.
87. Ibid.

Por otra parte, en Armenia se produjeron movilizaciones antigubernamentales, en protesta por lo que se consideró inacción de Armenia ante la ofensiva militar de Bakú y sus consecuencias, con demandas de dimisión del presidente, Nikol Pashinián. A finales de octubre Shajramanián renegó del documento de disolución de la región. **Representantes del Gobierno de Nagorno-Karabaj promovieron la idea de establecer un gobierno en el exilio, rechazada por las autoridades de Armenia**. Además, se deterioraron gravemente las relaciones entre Armenia y Rusia –que no condenó la ofensiva azerbaiyana y cuyas fuerzas de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj no intervinieron.

Con posterioridad a la invasión, Armenia y Azerbaiyán mantuvieron su proceso de diálogo en torno a la normalización de relaciones, con dificultades.[88] En diversos momentos, Armenia señaló riesgos de nuevas operaciones militares de Azerbaiyán que llevasen a la toma por la fuerza de partes de Armenia, incluyendo para conectar el enclave azerbaiyano de Najicheván con el resto del país. Entre octubre y diciembre se produjeron algunos incidentes en la frontera entre ambos países, con alguna víctima mortal y diversos heridos. La UE acordó en diciembre incrementar de 138 a 209 los efectivos de la EUMA. Por otra parte, **la Corte Internacional de Justicia ordenó a Azerbaiyán establecer medidas provisionales urgentes, de obligado cumplimiento, en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial**, y en respuesta a la solicitud de medidas a la Corte por parte de Armenia. Las medidas requeridas incluían, entre otras, garantizar que las personas que hayan abandonado Nagorno-Karabaj y deseen regresar puedan hacerlo de manera segura; que las personas que deseen quedarse estén libres del uso de la fuerza o intimidación que pueda obligarlas a huir; y proteger y preservar los documentos y registros de identidad y propiedad privada de las personas afectadas. El dictamen, de 17 de diciembre, requería a Bakú presentar informe sobre las medidas en ocho semanas.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional[89]
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX

Síntesis:
La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia. En 2011 las partes iniciaron un nuevo proceso negociador facilitado por la UE y con apoyo de otros actores. No obstante, continúa la disputa política entre Serbia y Kosovo, así como la tensión política y social entre las instituciones de Kosovo, por un lado, y actores políticos y sociales y población serbokosovar, por otro lado, con expresiones de violencia intermitentes.

Se incrementó la tensión entre Serbia y Kosovo y en el norte de Kosovo, incluyendo con incidentes violentos. Pese a los avances a principios de año en el proceso negociador –con el respaldo verbal de Kosovo y Serbia al Acuerdo sobre la senda de normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia, el 27 de febrero, y a su anexo de implementación, del 18 de marzo–, continuó la tensión política y social en los meses siguientes, junto a obstáculos en las negociaciones.[90] El principal partido en las áreas de mayoría serbia del norte de Kosovo, Srpska Lista, llamó al boicot de las elecciones municipales de abril de las cuatro municipalidades del norte de Kosovo. Había supeditado su participación al establecimiento de la asociación de municipios de mayoría serbia de Kosovo –cuestión sustantiva del proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo y dilatada por Pristina– y a la retirada de las unidades especiales de policía en el norte de Kosovo. Sin su participación, los comicios dieron la victoria –con solo un 3,4% de participación– a partidos albanokosovares, que tomaron posesión en medio de fuertes despliegues policiales y algunos choques, mientras Serbia puso a su Ejército en situación de alerta y ordenó el despliegue de tropas cerca de la frontera con Kosovo**. Se produjeron protestas postelectorales con graves incidentes de violencia a finales de mayo, con más de un centenar de heridos, incluyendo manifestantes serbokosovares, policía y fuerzas de la KFOR**. A raíz de los choques, la OTAN anunció un despliegue adicional de 700 efectivos para incrementar la misión. Además, dispuso

88. Véase el resumen sobre el proceso negociador Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
89. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia emitió en 2010 una opinión consultiva en la que estableció que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional.
90. Véase el resumen sobre Serbia-Kosovo en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

a un batallón adicional de fuerzas de reserva en estado de "alta disponibilidad". EEUU y la UE impusieron algunas sanciones a Kosovo, a cuyo Gobierno la UE instó a adoptar medidas de desescalada de la crisis, incluyendo, entre otras, la retirada de unidades de operaciones especiales de la Policía del entorno de las instalaciones municipales y la convocatoria anticipada de elecciones en esas alcaldías. En junio se registraron nuevos incidentes y choques. Entre julio y agosto, Kosovo retiró parte de las unidades especiales de Policía, pero seguían pendientes otras medidas, como nuevas elecciones.

La tensión escaló de nuevo en septiembre. Una emboscada paramilitar el 24 de septiembre contra una patrulla de Policía en Banjska (norte de Kosovo, a 15 km de la frontera con Serbia) y el atrincheramiento posterior en el monasterio ortodoxo de la localidad de los asaltantes –una treintena de hombres armados, según Kosovo–, resultó en un balance de un policía y tres asaltantes muertos y la incautación de armas pesadas, explosivos, uniformes, entre otros. Kosovo acusó a Serbia de organizar el asalto, que según las autoridades kosovares habría perseguido la anexión del norte de Kosovo. Belgrado negó su implicación. El embajador estadounidense en Kosovo señaló que el ataque había sido coordinado y sofisticado, que los atacantes parecían tener formación militar y que la cantidad de armamento sugería que había un plan para desestabilizar la seguridad en la región, y que todavía tenían que determinar si Serbia era responsable del mismo. A finales de septiembre, el vicepresidente de Srpska Lista, Milan Radoičić, se atribuyó la responsabilidad del ataque, afirmando haber planeado la operación sin apoyo de Serbia, y dimitió de su cargo en el partido serbokosovar. Fue detenido en Belgrado y puesto en libertad, y Serbia afirmó que sería procesado. Kosovo reclamó su extradición y la Interpol emitió en diciembre orden de arresto contra él y otras 18 personas. La OTAN incrementó su presencia de tropas en Kosovo tras el ataque, con varios cientos de efectivos adicionales, y en noviembre la organización señaló que valoraba incrementar de forma permanente sus tropas. El ataque del 24 de septiembre supuso un salto cuantitativo en cuanto a desafíos, por su envergadura. Además, se produjo en un contexto local tensionado, en el que también se proyecta la disputa internacional entre Rusia y actores euroatlánticos. El informe de octubre del secretario general de la ONU alertó de que el incremento de las tensiones en Kosovo siguió erosionando la frágil confianza entre comunidades y entre instituciones y comunidades, por lo que anunció que la misión de la ONU priorizaría iniciativas de construcción de confianza e intercambios intercomunitarios. Una veintena de organizaciones de la sociedad civil de Serbia y de Kosovo alertaron del impacto profundo de los hechos de violencia del 24 de septiembre en las ya deterioradas relaciones dentro de Kosovo y de Serbia y entre ambos, e hicieron un llamamiento conjunto en octubre a la construcción de paz y a la normalización de las relaciones en la región e instaron a las autoridades en todos los niveles a apoyar la construcción de vínculos y cooperación dentro y entre Kosovo y Serbia.[91] Actores internacionales con papel de terceras partes en el proceso de diálogo instaron a Kosovo y Serbia a retomar el proceso negociador[92] y señalaron que la ausencia de diálogo podría llevar a una nueva escalada.

2.3.5 Oriente Medio

Golfo

Irán	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando el presidente Mahmoud Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persistieron. Movimientos de protesta recientes, en especial en 2019, 2022 y 2023, han evidenciado el malestar político y social en la población iraní y han sido duramente reprimidos por el régimen.

Después de un 2022 caracterizado por masivas movilizaciones populares alentadas por la muerte de la joven kurda Jîna Mahsa Amini en custodia policial[93] y de una dura respuesta del régimen que habría causado la muerte de más de 500 personas,[94] **en 2023 las**

91. VVAA, Renewing commitments to the cause of peace, 26 de octubre de 2023.
92. Véase el resumen sobre Serbia-Kosovo en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
93. Véase el resumen sobre Irán en la edición 2023 de *Alerta!* y Pamela Urrutia, La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista, *Apunts ECP de Conflictos y Paz,* no.27, marzo de 2023.
94. Un año después del inicio de las protestas, los balances más consolidados apuntan a 551 muertes, incluyendo 68 menores. El Gobierno también informó de la muerte de otros 75 agentes de seguridad.

autoridades iraníes persistieron en sus políticas represivas para sofocar la contestación. Las medidas adoptadas por Teherán para hacer frente al movimiento conocido por el lema "Mujer, Vida, Libertad" derivaron en una reducción de las protestas en espacios públicos en comparación con el año anterior –en 2022, solo entre mediados de septiembre y principios de diciembre se contabilizaron más de 1.600 manifestaciones– y en múltiples vulneraciones a los derechos humanos. Varias ONGs y la misión de investigación internacional establecida por la ONU constataron los abusos y denunciaron el uso de violencia física, psicológica y sexual y el acoso judicial, entre otras prácticas, para impedir y disuadir el disenso pacífico que, si bien disminuyó en las calles, continuó plasmándose en otras formas de protesta.[95] **Durante 2023 continuaron los arrestos arbitrarios e intimidaciones a manifestantes y voces críticas, sus familiares, personas que les prestaban ayuda (abogados y personal de salud) y figuras que expresaron solidaridad con el movimiento.** Se documentaron detenciones durante protestas, en escuelas, en accesos a hospitales e incluso durante funerales de las víctimas de la represión. Muchas de las personas procesadas y condenadas fueron acusadas de cargos como "difusión de propaganda contra el sistema", "crímenes contra la seguridad", "disrupción del orden público", "difusión de mentiras para alterar el orden público" o "insultos contra el líder supremo", entre otros. En febrero, el Gobierno anunció un "perdón" a 22.000 personas que habían sido detenidas en el marco de las protestas. No se conocen cifras oficiales sobre el total de arrestos durante y después de las movilizaciones, pero grupos de derechos humanos estiman que la cifra podía elevarse hasta las 60.000 personas. Tampoco hay cifras oficiales sobre las sentencias a muerte en estos casos, pero **informaciones apuntan a que al menos 28 personas recibieron condenas a la pena capital en relación con las protestas, de las cuales al menos nueve –todos hombres– ya fueron ejecutados** (entre de diciembre de 2022 y enero de 2024). Estas sentencias de muerte se enmarcaron en una intensificación de la aplicación de la pena de muerte, con más de 700 ejecuciones entre enero y noviembre de 2023, según datos de Iran Human Rights Organization citados por HRW.[96]

Durante 2023 diversas voces alertaron sobre el extenso uso de torturas contra las personas detenidas, algunas con resultado de muerte. Asimismo, **se denunció el uso de la violencia sexual y de género, incluyendo violaciones, torturas en los genitales y desnudos forzados, entre otras prácticas. Desde finales de 2022 y hasta noviembre de 2023, pero en especial en el primer trimestre del año, se denunciaron también numerosos envenenamientos de niñas en escuelas** que afectaron a miles de estudiantes. No se reportaron víctimas mortales y la información oficial sobre los hechos fue confusa, pero estos episodios se interpretaron como una forma de intimidación y castigo a las menores por su implicación en el movimiento "Mujer, Vida, Libertad". En paralelo, durante 2023 también se informó de la suspensión o expulsión de más de 400 estudiantes universitarios por su implicación en las protestas, mientras que otros 2.800 fueron sometidos a comités disciplinarios. También se anunciaron cambios de directores en más de 20.000 escuelas en el marco de un proceso de "purificación" del sistema educativo. **Las autoridades también intensificaron las normas y medidas para obligar a las mujeres a usar el hiyab según los estándares del régimen, incrementando los castigos, las intimidaciones y la campaña de acoso y vigilancia** contra mujeres y niñas. El régimen impulsó normas para hacer responsables a actores privados de la vigilancia de uso del hiyab, amplió el uso de cámaras en espacios públicos para perseguir a las "infractoras" e incluso desarrolló una aplicación para facilitar las denuncias. En este contexto, el 1 de octubre se produjo un nuevo caso muy similar al de Jîna Masha Amini. Ese mismo día la joven estudiante Armita Garavand murió tras un altercado por el uso del hiyab con un grupo de personas en el metro. Las autoridades detuvieron a numerosas personas durante su funeral, incluyendo periodistas y la reconocida abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. En este contexto, varios premios internacionales reconocieron la lucha de las mujeres iraníes contra la opresión y por los derechos humanos y libertades del conjunto de la población iraní. El Nobel de la Paz de 2023 recayó en la activista encarcelada Narges Mohammadi, mientras que el Parlamento Europeo concedió el Premio Sakharov a Jîna Mahsa Amini y al movimiento "Mujer, Vida, Libertad". Cabe destacar que tras un 2022 con una represión especialmente intensa en las zonas baluchis y kurdas del país,[97] Teherán continuó con sus políticas represivas aunque con menores niveles relativos de violencia en 2023. En el caso de Baluchistán, que en 2022 fue escenario de masivas movilizaciones y graves hechos de violencia, en 2023 continuó viéndose afectado por el clima general de represión en el país. Amnistía Internacional denunció hechos ocurridos en Zahedan, incluyendo detenciones, maltratos, torturas y desapariciones forzadas.[98] Adicionalmente también en esta zona, al finalizar el año, en diciembre, el grupo armado Jaish al-Adl reivindicó un ataque contra una estación policial en la localidad de Rask, en el que murieron 11 efectivos.

95. Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran, A/HRC/55/67, 2 de febrero de 2024.
96. Human Rights Watch, Iran, *World Report 2024*.
97. Véase el resumen sobre Irán (noroeste) en este capítulo.
98. Amnesty International, Iran: New wave of brutal attacks against Baluchi protesters and worshippers, 26 de octubre de 2023.

Irán (noroeste)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Komala, KDP, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Iraq

Síntesis:
A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria. Según trascendió, en 2011 el PJAK y el Gobierno iraní habrían pactado un cese el fuego que comprometería al grupo armado a cesar sus ataques y a las autoridades a suspender la ejecución de prisioneros kurdos, pero las hostilidades y los enfrentamientos de baja intensidad persisten.

Después de un 2022 en que la represión fue especialmente intensa en las zonas habitadas por minorías étnico-religiosas -de manera particular en las áreas kurdas y baluchis (suníes)- ante la contestación contra el régimen en todo el país,[99] en 2023 continuaron las acciones represivas e incidentes, aunque con menores niveles relativos de violencia respecto al año anterior. La situación continuó determinada por los efectos de la represión de las movilizaciones populares tras la muerte en custodia policial de la joven kurda Jîna Mahsa Amini. Organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando persecución judicial por motivos políticos y detenciones. Según la Kurdistan Human Rights Network, solo en julio más de un centenar de personas habían sido arrestadas por las fuerzas de seguridad a causa de motivos políticos.[100] Ese mismo mes, un total de 55 abogados que habían firmado una declaración ofreciendo asistencia legal a la familia de Mahsa Jîna Amini fueron requeridos por la fiscalía de Bukan, en la provincia del Kurdistán con motivo de este apoyo. **Ad portas del primer aniversario de la muerte en custodia de la joven kurda, las autoridades iraníes desplegaron a miles de efectivos en las áreas con mayor presencia kurda, donde las manifestaciones fueron especialmente masivas durante el año anterior**. Paralelamente, durante 2023 Iraq continuó teniendo en la mira a los grupos político-armados kurdos. **Teherán y Bagdad alcanzaron un acuerdo fronterizo por el cual el Gobierno iraquí se comprometió a desarmar y reubicar a las organizaciones kurdas iraníes que actúan en la zona fronteriza con Irán** (principalmente desde el norte del país) antes del 19 de septiembre.[101] En julio, representantes militares iraníes advirtieron que recurrirían al uso de la fuerza en el norte de Iraq contra estas organizaciones opositoras -a las que ha calificado de secesionistas y terroristas- si las autoridades de Bagdad no actuaban de acuerdo con lo establecido en el pacto en el límite establecido. En 2022, en el marco de la respuesta a las protestas tras la muerte de Mahsa Jina Amini, Irán lanzó varios ataques contra las posiciones de varios de estos grupos kurdos en el norte de Iraq. En la fecha acordada, el Gobierno iraquí anunció que había cumplido con los términos del acuerdo. En diciembre, tras una reunión de altos representantes de ambos países en Bagdad, Irán agradeció a Iraq por remover a estas organizaciones de la zona limítrofe, pero aseguró que mantenían la preocupación por las evidencias sobre la presencia de grupos opositores kurdos iraníes en el área fronteriza.[102] En el caso de Baluchistán, que en 2022 fue escenario de masivas movilizaciones y graves hechos de violencia, en 2023 continuó viéndose afectado por el clima general de represión en el país. Amnistía Internacional denunció hechos ocurridos en Zahedan, incluyendo detenciones, maltratos, torturas y desapariciones forzadas.[103] Adicionalmente, también en esta zona, en diciembre el grupo armado Jaish al-Adl reivindicó un ataque contra una estación policial en la localidad de Rask, en el que murieron 11 efectivos.

Irán – EEUU, Israel[104]	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:
Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del "eje del mal" y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus

99. Para más información, véase La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista, *Apunts ECP de conflictos y paz*, Núm.27, marzo 2023.
100. Human Rights Watch, Iran: World Report 2023, enero de 2024.
101. Maziar Motamedi, Iran says deal agreed with Iraq for disarming, relocation of Kurdish rebels, Al-Jazeera, 28 de agosto de 2023.
102. Rudaw, Iranian general says concerns remain over Kurdish groups on border, Rudaw, 3 de diciembre de 2023.
103. Amnesty International, Iran: New wave of brutal attacks against Baluchi protesters and worshippers, 26 de octubre de 2023.
104. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

Siguiendo la tendencia del año anterior, **la tensión en torno al programa nuclear iraní se mantuvo elevada a lo largo de 2023, en un escenario caracterizado por el bloqueo de las negociaciones diplomáticas** para restablecer el cumplimiento del acuerdo de 2015 –conocido por sus siglas en inglés como JCPOA– **y por los incidentes de seguridad que involucraron principalmente a fuerzas de Irán, EEUU e Israel y que se intensificaron en el último trimestre**. En 2023 no hubo nuevas rondas directas en el marco del llamado proceso de Viena, aunque continuaron los contactos por vía diplomática.[105] En los primeros meses del año los señalamientos internacionales a Irán por sus actividades nucleares se produjeron en paralelo a las crecientes críticas a la república islámica por su dura respuesta represiva a la contestación interna en el país, que se intensificó tras la muerte en custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022.[106] En este contexto, se aprobaron nuevas sanciones contra Teherán en represalia por los abusos en materia de derechos humanos y también por la provisión de material militar a Rusia –en especial drones que se estarían utilizando en Ucrania–, en vulneración de lo establecido en la resolución 2231 de Naciones Unidas (que formalizó el respaldo de la ONU al JCPOA). El OIEA continuó denunciando la transgresión de los límites establecidos en el acuerdo nuclear y aunque a mediados de año se identificaron algunos progresos y se clarificaron algunas actividades, al finalizar el año las expectativas en torno al diálogo nuclear volvieron a empeorar, en parte como consecuencia indirecta de la crisis en Gaza, pero también por otras variables, como el retiro por parte de Teherán de la autorización a varios inspectores para la realización de tareas de verificación. En este escenario, la UE y Reino Unido decidieron mantener las restricciones y sanciones al programa de misiles balísticos de Irán –que expiraban en octubre de 2023– argumentando incumplimientos por parte de Teherán desde 2019. EEUU también anunció nuevas sanciones a entidades y personas vinculadas a este programa iraní y otras por la presunta transferencia de armas a Hamas.

La tensión en torno al programa nuclear iraní se mantuvo elevada en 2023, en un contexto de bloqueo en las negociaciones diplomáticas y de incidentes de seguridad que involucraron a Irán, EEUU e Israel, en especial en el último trimestre como consecuencia de la crisis en Gaza

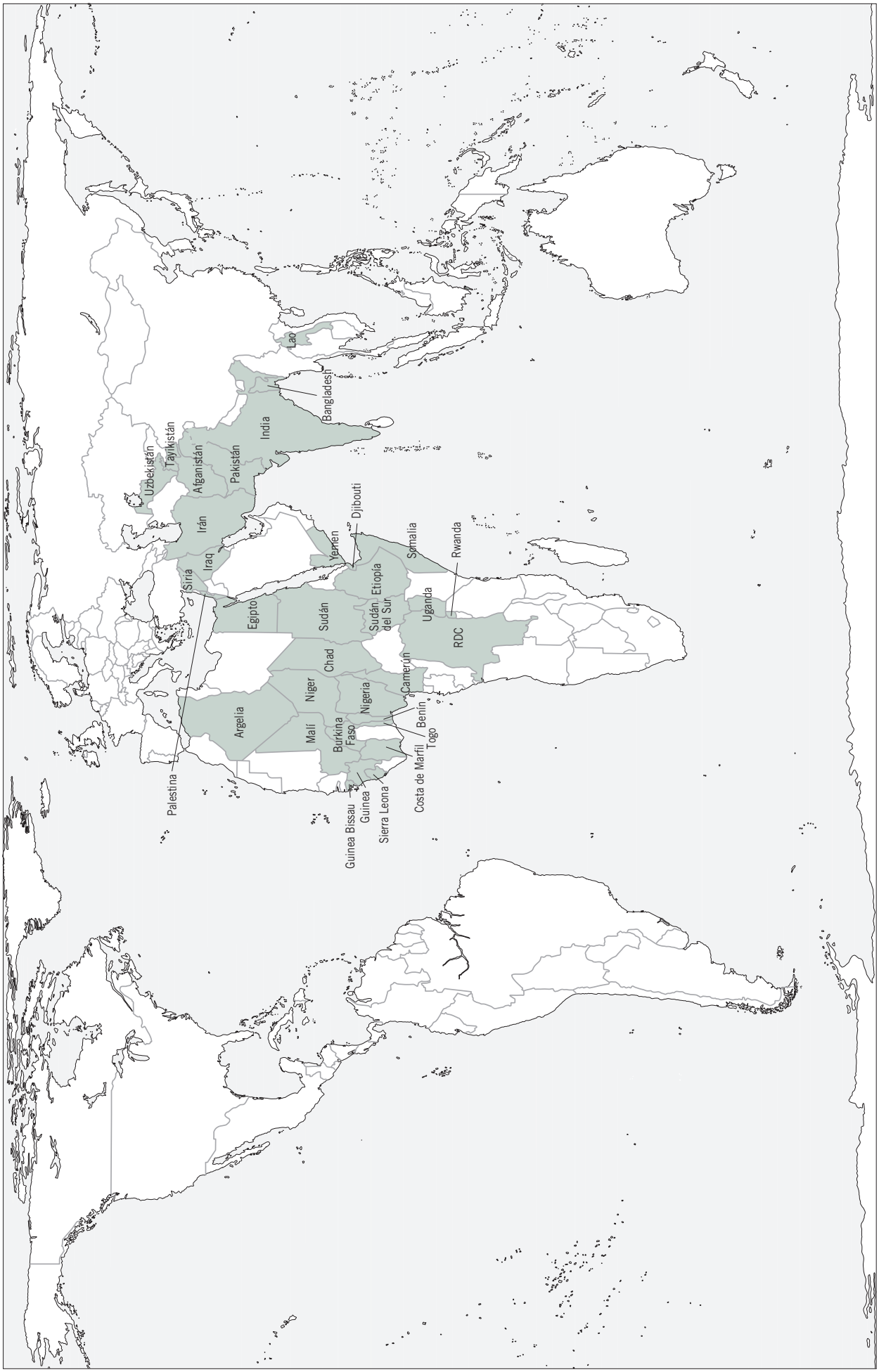
Respecto a los incidentes de seguridad entre distintos actores implicados directa o indirectamente en esta tensión, a lo largo del año continuaron registrándose episodios como un ataque con dron en la central de Isfahan atribuido a Israel (enero), ataques contra fuerzas de EEUU presuntamente por fuerzas de la órbita de Teherán en Iraq y Siria, y ofensivas estadounidenses contra estos grupos en ambos países. Las fricciones también derivaron en tensiones marítimas que se produjeron principalmente en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz e involucraron a algunos barcos petroleros. También se informó de la intercepción de embarcaciones desde Irán rumbo a Yemen, presuntamente con armas para los al-houthistas. En este contexto, a mediados de año EEUU anunció un refuerzo de sus capacidades navales, incluyendo tropas, aeronaves y unidades anfibias. Los incidentes se redujeron relativamente tras la distensión regional motivada por el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita (mayo) –tras años de ruptura diplomática– y en paralelo a las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington mediadas por Omán que condujeron a una exención temporal de sanciones (julio) y a un acuerdo para la liberación por Teherán de cinco estadounidenses encarcelados en Irán a cambio del acceso de la república islámica a 6.000 millones de dólares que estaban retenidos en cuentas bancarias en Corea del Sur (septiembre). **Desde octubre de 2023, los incidentes se incrementaron a consecuencia de la crisis en Gaza, dado el apoyo de Irán a Hamas y el respaldo de EEUU a Israel.** Hasta finalizar el año se habían multiplicado los ataques de grupos del autodenominado "Eje de Resistencia" (integrado por Hezbollah, milicias pro-iraníes en Iraq y Siria y los al-houhtistas en Yemen, entre otros) contra fuerzas de EEUU en Iraq y Siria, las ofensivas estadounidenses contra estas organizaciones y los ataques de Israel contra posiciones e intereses de Hezbollah e Irán.[107] En diciembre, Irán advertió de consecuencias por la

105. Véase el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
106. Véase el resumen sobre Irán en este capítulo.
107. Véase los resúmenes sobre Iraq, Israel-Palestina y Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

muerte de un alto cargo de la Guardia Republicana (IRGC por sus siglas en inglés) en Siria en un ataque aéreo atribuido a Israel. EEUU e Israel también señalaron a Teherán por las acciones emprendidas por los al-houthistas en el último trimestre, incluyendo los ataques desde Yemen a Israel y contra naves en el Mar Rojo.[108] En este contexto regional altamente volátil, al finalizar el año el secretario general de la ONU insistía en defender el JCPOA como la mejor opción disponible para abordar la cuestión nuclear iraní, garantizar su naturaleza pacífica y trabajar por la no proliferación y seguridad en la región.

108. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 1 (Conflictos armados) y "Yemen: escalada de tensión en el Mar Rojo" en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz*, enero de 2024.

Mapa 3.1. **Género, paz y seguridad**



Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género 2023

3. Género, paz y seguridad

- 23 de los 36 conflictos armados que tuvieron lugar en 2023 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género.
- El 88% de los conflictos de alta intensidad transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género.
- Naciones Unidas advirtió del deterioro en la situación en países como Afganistán, Malí, Myanmar y Sudán en lo que respecta a la utilización de la violencia sexual en conflictos armados.
- La República Centroafricana (RCA) se vio afectada por una escalada de la violencia de género como consecuencia del conflicto y la crisis climática, en lo que se calificó como de "crisis de protección y género".
- En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz inició la apertura de un macrocaso sobre todas las violencias sexuales y de género que se cometieron durante el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano.
- El informe de la misión internacional independiente sobre Irán identificó un patrón de violencia sexual perpetrado por agentes del Estado en los lugares de detención.
- En Gaza, el uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil palestina provocó más de 30.000 muertes hasta finales de 2023, 70% de ellas mujeres y menores.
- El secretario general de la ONU constató un nuevo retroceso en la participación de las mujeres en los procesos de paz.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.[1] Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre la población como consecuencia de las desigualdades de género y la intersección con otros ejes de desigualdad y también cuáles son las aportaciones que las mujeres y la población LGTBIQ+ están haciendo a la construcción de la paz. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Desarrollo de Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Desarrollo de Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales. Esta aproximación debe ir unida a un análisis interseccional que relacione el género con otros factores que estructuran el poder en una sociedad, como la clase social, la raza, la etnicidad, la edad, o la sexualidad, entre otros aspectos que generan desigualdades, discriminaciones y privilegios.

Tabla 3.1. **Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género[2]**

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán **Burkina Faso** Región Sahel **Chad** Región Lago Chad **Egipto** Egipto (Sinaí) **Iraq** **India (2)** India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M)	**Malí (2)** Malí Región Sahel Occidental **Níger (2)** Región Lago Chad Región Sahel Occidental **Nigeria** Región Lago Chad **Palestina** Israel-Palestina **Pakistán (2)** Pakistán Pakistán (Baluchistán)	**RDC (3)** RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (oeste) **Siria** **Somalia (2)** Somalia Somalia (Somalilandia-SCC Khamuto) **Sudán** **Yemen**
Nivel medio-bajo de igualdad		
Camerún (2) Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) Región Lago Chad	**Etiopía (3)** Etiopía (Amhara) Etiopía (Oromiya) Etiopía (Tigré)	

3.1. Desigualdades de género

Para evaluar la situación de desigualdad de género en los países afectados por conflictos armados y/o tensiones se han utilizado los datos proporcionados por el Índice de Desarrollo de Género (IDG) elaborado por el PNUD. Este índice mide las disparidades con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH)[3] entre los géneros. El valor del Índice de Desarrollo de Género se calcula a partir de la proporción entre los valores del IDH para mujeres y hombres.[4] El IDG incluye cinco agrupaciones de países según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH.

23 de los 36 conflictos armados que tuvieron lugar en 2023 se dieron en países donde existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género

De acuerdo con el IDG, los niveles de igualdad entre hombres y mujeres fueron medio-bajos o bajos en 46 países, la mayoría situados en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **23 de los 36 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2023 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de** género **–** Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, [5] RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo), Sudán, Afganistán, India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Egipto (Sinaí), Iraq, Israel-Palestina, Siria, Yemen– **y nivel medio-bajo de igualdad de género –** Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré)**–. No existían datos** sobre RCA y Sudán del Sur, países **en los que transcurre un conflicto armado respectivamente. En cuanto a intensidad de los conflictos**, 15 de los 17 conflictos armados de violencia de alta intensidad de 2023 (88% de los casos) transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad y en el caso de Sudán del Sur no había datos del IDG. Asimismo, en otros ocho países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con

2. Tabla elaborada a partir de los datos de conflictos armados de la Escola de Cultura de Pau y de los datos sobre países con nivel bajo y medio-bajo en igualdad del Índice de Desarrollo de Género del PNUD señalados en Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024. Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica el conflicto o conflictos armados en ese país en 2023. Entre paréntesis se señala el número de conflictos armados en ese país cuando hay más de uno.
3. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable (longevidad), el conocimiento (educación) y un nivel de vida decente (ingreso per cápita). Para más información, véase PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. Tiempos inciertos, vidas inestables: Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación*, PNUD, 2022.
4. Para establecer los diferentes niveles de desigualdad en los países se ha utilizado la clasificación que propone el PNUD, por la que los países se dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH. Grupo 1: países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta inferior al 2,5%); grupo 2: países con un nivel medio-alto de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 2,5% y el 5%); grupo 3: países con un nivel medio de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 5% y el 7,5%); grupo 4: países con un nivel medio-bajo de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 7,5% y el 10%); y grupo 5: países con un bajo nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de la paridad de los géneros superior al 10%).
5. El conflicto de Región Sahel Occidental se ha contabilizado como uno de los 20 conflictos armados en países con niveles bajos de igualdad. Este conflicto involucra a tres países con nivel bajo de igualdad (Malí, Costa de Marfil y Níger) y un país con nivel medio-bajo (Burkina-Faso).

Tabla 3.2. **Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género**[6]

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán Afganistán - Pakistán **Argelia** **Benín** **Burkina Faso** **Chad** **Costa de Marfil** **Djibouti** **Egipto (2)** Egipto Etiopía – Egipto –Sudán **Guinea** **Guinea Bissau** **India (4)** India (Manipur) India (Nagalandia) India – China India – Pakistán	**Irán (4)** Irán Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Irán – EEUU, Israel **Iraq** Iraq (Kurdistán) **Malí** **Marruecos** Marruecos – Sáhara Occidental **Níger** **Nigeria (3)** Nigeria Nigeria (Biafra) Nigeria (Delta del Níger) **Palestina**	**Pakistán (3)** Pakistán Afganistán - Pakistán India – Pakistán **RDC (2)** RDC RDC – Rwanda **Rwanda (3)** Rwanda Rwanda – Burundi RDC - Rwanda **Sierra Leona** **Sudán – Sudán del Sur** **Togo** **Uganda**
Nivel medio-bajo de igualdad		
Bangladesh **Etiopía (5)** Etiopía Etiopía – Egipto –Sudán Etiopía – Somalia Etiopía – Sudán Eritrea – Etiopía	**Lao, RPD** **Tayikistán (3)** Tayikistán Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Kirguistán – Tayikistán	**Uzbekistán (2)** Uzbekistán Uzbekistán (Karakalpakistán)

niveles altos de igualdad (Libia, Colombia, Tailandia, Rusia, Ucrania, Israel) o medios (Burundi, Mozambique, Filipinas, Myanmar, Türkiye,), de acuerdo con el IDG. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, **46 de las 108 tensiones activas durante el año 2023 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad**.

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2023 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.[7] Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada

6. Tabla elaborada a partir de los datos de escenarios de tensión de la Escola de Cultura de Pau y de la información sobre países con nivel bajo y medio-bajo en igualdad del Índice de Desarrollo de Género del PNUD señalados en el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024. Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica la tensión o tensiones en ese país en 2023. Entre paréntesis se señala el número de tensiones en ese país cuando hay más de una.
7. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los "incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego". UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

Tabla 3.3. **Actores armados y violencia sexual en conflictos**[8]

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en marzo de 2022 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.[9]

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Haití		Familia G9 y aliados – Jimmy Cherizier (alias Barbeque)
Iraq		Dáesh
Malí		Al-Qaida en el Magreb Islámico, parte de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Ansar Eddine; Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgads y sus Aliados, parte de la Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel; Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, parte de la Coordinadora de Movimientos de Azawad
Myanmar	Tatmadaw (Fuerzas Armadas), incluida la guardia de fronteras integrada	
Nigeria		Grupos afines a Boko Haram y grupos escindidos, incluidos Jama'atu Ahlis-Sunna; Lidda'Awati Wal Jihad y Provincia de África Occidental del Estado Islámico
RCA	Fuerzas armadas nacionales	Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC): el ex-Presidente François Bozizé; Retorno, Reclamación y Rehabilitación: General Bobbo; antibalaka: MokomMaxime Mokom; antibalaka Ngaïssona-Dieudonné Ndomate; Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana: Noureddine Adam y el comandante de zona Mahamat Salleh; Movimiento Patriótico por la República Centroafricana: Mahamat Al-Khatim; Unión por la Paz en la República Centroafricana: Ali Darrassa; Ejército de Resistencia del Señor; Facciones ex-Seleka; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano: Abdoulaye Miskine;Revolución y Justicia
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congolesa	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Janvier; Cooperativa para el Desarrollo del Congo; Ejército de Resistencia del Señor; Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri; Fuerzas Democráticas Aliadas; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerzas Patrióticas Populares-Ejército del Pueblo; Mai-Mai Apa Na Pale; Mai-Mai Kifuafua; Mai-Mai Malaika; Mai-Mai Perci Moto; Mai-Mai Raia Mutomboki; Mai-Mai Yakutumba; Milicias twas; Movimiento 23 de Marzo (M23); Nduma Defensa del Congo Renovado – facción liderada por el "General" Guidon Shimiray Mwissa y facción liderada por el Comandante Gilbert Bwira Shuo y el Comandante Adjunto Fidel Malik Mapenzi; Nduma Defensa del Congo; Nyatura; Unión de Patriotas para la Defensa de los Ciudadanos.
Siria	Fuerzas gubernamentales, incluidas las Fuerzas de Defensa Nacional, los servicios de inteligencia y las milicias partidarias del Gobierno	Dáesh; Hay'at Tahrir al-Sham; Ejército del Islam; Ahrar al-Sham
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional Somalí y sus milicias aliadas; Fuerzas de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Sudán-Abdul Wahid
Sudán del Sur	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, incluidas las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur aliadas de Taban Deng; Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur	Ejército de Resistencia del Señor; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición - pro-Machar

en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En julio se celebró el **debate abierto anual en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados** y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión. En 2023 se produjo el 15º aniversario de la aprobación de la resolución 1820, que marcó el inicio de una serie de resoluciones en el marco de la agenda mujeres, paz y seguridad especialmente centradas en la cuestión de la violencia sexual en los conflictos armados.

El secretario general en su informe de 2023 –que abarcaba el periodo entre enero y diciembre de 2022– advirtió de algunas tendencias preocupantes en lo que respecta a la utilización de la violencia sexual en el contexto de conflictos armados y advirtió sobre el

8. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.
9. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2023/413, 22 de junio de 2023.

deterioro de la situación en países como Afganistán, Malí, Myanmar y Sudán, donde los cambios de gobierno mediante violencia y golpes de Estado han puesto en peligro los avances anteriores en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres y donde estas se han visto gravemente afectadas por la violencia sexual. Además, el informe apunta a un agravamiento en los patrones de utilización de la violencia sexual en República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití y Sudán del Sur. La violencia sexual se utilizó como parte de la violencia política y represiva en diferentes contextos de conflicto armado y tensiones sociopolíticas y fue una de las causas del desplazamiento forzado de población, afectando también a población previamente desplazada, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres que deben abandonar de manera forzada sus lugares de origen, bien sea en situaciones de desplazamiento interno o refugio.

El informe anual presentado en 2023 por el secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.[10] La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales aunque también se señalaron actores armados gubernamentales, en un total de 11 contextos (Haití, Iraq, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur).

10 de los 11 contextos señalados por el secretario general de la ONU por violencia sexual, eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad

De los 11 contextos analizados en el informe del secretario general de la ONU, según las clasificaciones de la Escola de Cultura de Pau 10 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad durante 2022 –Iraq, Malí, Myanmar, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (este), RDC (este – ADF), Siria, Somalia, Sudán (Darfur) y Sudán del Sur– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. Esos 10 conflictos siguieron activos en 2023 y con niveles de alta intensidad. Además, en seis de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2023 con respecto al año anterior –Malí, Myanmar, RDC (este), Siria, Somalia y Sudán. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general de la ONU como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

En la región etíope de **Tigré**, a pesar de que el acuerdo de paz de 2022 incluía cuestiones relativas a la violencia de género perpetrada en el transcurso del conflicto e instaba a las partes a condenar cualquier acto de violencia sexual y violencia de género, en 2023 continuaron cometiéndose atrocidades y actos de violencia sexual por parte de las fuerzas eritreas y de las milicias Fano, tal y como detalló la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, cuyo mandato fue suspendido por el Consejo de Derechos Humanos a finales de 2023.

La **República Centroafricana (RCA)** se vio afectada en 2023 por una escalada de la violencia de género como consecuencia del conflicto y la crisis climática. El NGO Working Group on Women, Peace and Security remarcó en que el propio representante especial adjunto del secretario general de la ONU en el país y coordinador humanitario de la MINUSCA, Mohamed Ag Ayoya, había señalado que la crisis que padece el país –en la que se constaban graves violaciones de los derechos humanos que incluían múltiples formas de violencia de género, cambio climático, desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria para más de la mitad de la población– debería calificarse no solo como una crisis humanitaria, sino una **"crisis de protección y género"**.[11] El NGO Working Group destacó que la violencia de género, incluida la violencia sexual, aumentó, exacerbada por el conflicto y la crisis climática, perpetrada no solo por actores armados, sino también por civiles a escala masiva. Además, los desplazamientos a gran escala siguieron tanto en RCA como en los países vecinos. Por ejemplo, desde junio de 2023, más de 37.000 personas, principalmente mujeres y menores, llegaron a las jefaturas de Ouham y Ouham-Pendé huyendo de la violencia en el sureste de Chad, agravando su riesgo de explotación y violencia. Por último, las décadas de conflicto en RCA han destruido su capacidad para ofrecer asistencia sanitaria, con resultados especialmente nefastos para la salud sexual y reproductiva.

En **RDC**, en el marco del conflicto armado en el este del país, las mujeres y las niñas se han visto gravemente afectadas por los elevados niveles de violencia sexual y de género, que siguieron en aumento. Al respecto, representantes de la sociedad civil local e internacional se dirigieron en diciembre de 2023 al Consejo de Seguridad de la ONU remarcando la necesidad de que los esfuerzos de negociación política en marcha –los procesos de Luanda y Nairobi– fueran más inclusivos y estuvieran liderados por constructores de paz locales y de la sociedad civil, en especial por mujeres y jóvenes. Por otra parte, a pesar de la política de tolerancia cero emprendida por Naciones Unidas, durante el año la MONUSCO registró nuevas denuncias de explotación y abusos sexuales por hechos ocurridos entre 2011 y 2023 que involucraban a miembros del componente militar y civil de la misión.

10. Ibid.
11. NGO Working Group on Women, Peace and Security, *Monthly Action Points. Women, Peace and Security,* noviembre de 2023.

La situación en **Somalia** continuó siendo muy grave y se produjeron retrocesos en términos de violencia de género y de aplicación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, tal y como destacó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en febrero, quien reveló una situación devastadora. El incremento de la violencia en el país y la actual sequía, que repercutía en desplazamientos forzados y en la inseguridad alimentaria de la población, expuso al país a un mayor riesgo de hambruna -la última hambruna declarada en Somalia, en 2011, mató a un cuarto de millón de personas- y exacerbó la violencia de género.Tal y como señaló Sima Bahous,[12] las tasas de violencia sexual registraron un aumento alarmante desde 2020. Se duplicaron en comparación con 2019, y siguieron aumentando, ya que la peor sequía en muchas décadas tuvo un impacto devastador en todos los somalíes, y las mujeres y las niñas fueron impactadas de manera desproporcionada. La impunidad seguía siendo generalizada, y los grupos armados, en especial al Shabaab, continuaron secuestrando a mujeres y niñas, obligando a las familias a darles a sus hijas para que se casen y ocupando hospitales y salas de maternidad, así como silenciando y amenazando a las voces locales que denuncian esta situación, como fueron los casos de las ejecuciones de la joven parlamentaria Amina Mohamed Abdi y de la asesora en asuntos de mujeres en la oficina del Primer Ministro Hibaq Abukar, entre otras mujeres activistas y mujeres que trabajan en la política local y nacional, así como de la sociedad civil.

El informe de la misión internacional independiente sobre Irán identificó un patrón de violencia sexual perpetrado por agentes del Estado en los lugares de detención

Con relación a la invasión de **Rusia** en **Ucrania** y guerra entre ambos países, diversos actores continuaron documentando y denunciando violencia sexual. Por una parte, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania –establecida por el Consejo de Derechos Humanos a través de la resolución 49/1 de marzo de 2022, integrada por tres personas expertas y en coordinación con ACNUDH– señaló en su informe de octubre de 2023 que sus investigaciones recientes estuvieron centradas en las provincias de Jersón y Zaporiyia. En informes anteriores había documentado casos en nueve provincias de Ucrania y en territorio de Rusia.[13] En esta fase, documentó violaciones y otras formas de violencia sexual por parte de las fuerzas rusas en un distrito de la provincia de Jersón, cometidas entre marzo y julio de 2022, principalmente durante incursiones de las fuerzas rusas en las casas de las personas víctimas.[14] En algunos casos se documentaron situaciones de violencia sexual y amenazas de violencia sexual en instalaciones de detención de las autoridades rusas. En los casos documentados por la comisión internacional, las víctimas eran mujeres de entre 19 y 83 años y una chica de 16 años. El órgano internacional documentó que la violencia sexual fue cometida con uso de la fuerza y coerción psicológica, que los perpetradores fueron en su mayoría soldados rusos y en algunos casos miembros de las fuerzas rebeldes de Donetsk y Lugansk y que llevaron a cabo actores de violencia añadida contra las víctimas, incluyendo golpes, estrangulamientos, prácticas de asfixiar y de disparar cerca de la cabeza.La Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) siguió documentando violencia sexual relacionada con el conflicto armado en Ucrania. Entre el 24 de febrero y 30 de noviembre la misión documentó 169 casos de violencia sexual perpetrada por miembros de las fuerzas militares y agentes rusos. El 60% eran casos de violencia sexual contra hombres, el 37% contra mujeres, un 2% contra niñas y un 1% contra niños (101, 63, 4 y 1 casos respectivamente).[15] La mayor parte de los casos (80%) ocurrió en lugares de detención, tanto contra civiles (56 civiles, incluyendo 37 hombres, 18 mujeres y un niño) como contra prisioneros de guerra (63 hombres y 16 mujeres). En el periodo entre el 1 de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024, la misión documentó 66 casos de detención arbitraria de civiles (55 hombres, 10 mujeres, 1 niño) por parte de las fuerzas rusas, algunas de las cuales podrían equivaler a desapariciones forzadas, y que en la mayoría de los casos las personas víctimas reportaron haber sido sometidos a tortura, malos tratos o violencia sexual contra hombres y mujeres.[16] La misión señaló que eran violaciones de las obligaciones de Rusia como poder ocupante identificadas ya en anteriores periodos como un patrón documentado. Por otra parte, el 65% de un grupo de prisioneros de guerra ucranianos (39 de 60) a quienes la HRMMU pudo entrevistar tras su liberación, reportó haber sido sometido a violencia sexual durante su internamiento, incluyendo a través de intentos o amenazas de violación y castración, golpes y electroshocks en los genitales y desnudos forzados. A su vez, dos de 44 prisioneros de guerra rusos (4,5%) a quienes la HRMMUU entrevistó reportaron amenazas de violencia sexual por parte de las fuerzas ucranianas. Un número mayor de ellos proporcionaron testimonios de tortura o malos tratos en lugares de tránsito –entre otros datos, 13 de ellos relataron golpes, electroshocks o simulaciones de ejecuciones.

12. Bahous, Sima, "Speech: Seize the opportunity for decisive action in Somalia", UN Women, 22 de febrero de 2023.
13. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria.
14. Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*, Human Rights Council, A/78/540, 19 de octubre de 2023.
15. OHCHR, *Report on the human rights situation, 1 August 2023 to 30 November 2023, OHCHR,* 12 de diciembre de 2023.
16. OHCHR, *Report on the human rights situation, 1 December 2023 to 29 February 2024*, OHCHR, 26 de marzo de 2024.

En **Kazajstán** se documentó y denunció en 2023 el uso de violencia sexual por parte de las autoridades contra hombres y mujeres detenidos en el marco de la represión de las protestas de enero de 2022.[17] Según señaló Human Rights Watch, grupos de derechos humanos documentaron uso de violencia sexual, incluyendo violaciones y amenazas de violaciones, junto a otras prácticas de tortura y malos tratos como palizas, quemaduras, electroshocks. Al menos 23 policías fueron condenados por tortura, pero decenas de casos fueron archivados con consideraciones de acusaciones infundadas, según alertó HRW en su informe anual sobre la situación de derechos humanos.[18]

En **Irán**, tras un 2022 convulso por las protestas protagonizadas por el movimiento "Mujer, Vida, Libertad" y la durísima represión del régimen, 2023 se caracterizó por una disminución de las manifestaciones y nuevas medidas restrictivas que afectaron especialmente a las mujeres y las niñas. Durante el año se llevaron a cabo las investigaciones sobre las circunstancias de la muerte de Jîna Mahsa Amini –la joven kurda cuyo fallecimiento desencadenó las movilizaciones populares en septiembre de 2022– y también sobre el uso de la violencia en la represión y persecución de las voces disidentes, incluyendo violencia sexual. El informe de la misión internacional independiente sobre la República Islámica de Irán identificó un patrón de violencia sexual perpetrado por agentes del Estado en los lugares de detención.[19] Estos incluyeron violaciones, amenazas de violación, torturas con electricidad en los genitales, desnudos forzados y tocamientos, entre otras formas de violencia sexual. La misión documentó el uso de violencia sexual y de género contra mujeres, hombres y menores que habían sido detenidos, incluyendo también personas LGTBQI+ arrestadas por su vinculación con las protestas. El informe señala que las fuerzas de seguridad iraníes también apelaron a estigmas sociales y culturales vinculados a temas sexuales y de género con el fin de atemorizar, humillar y castigar a las personas involucradas en las movilizaciones de contestación contra el régimen. En el caso de las mujeres manifestantes, la violencia sexual y de género a menudo estuvo acompañada de insultos que cuestionaban su honor y la moralidad y en ocasiones fue justificada por las autoridades como un resultado de "la libertad que desean".

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En relación a la **respuesta de Naciones Unidas frente a la explotación y abusos sexuales por parte de personal que desempeña servicio bajo su mandato**, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, desde 2017, centrada en cuatro áreas de acción: dar prioridad a los derechos y dignidad de la víctimas; poner fin a la impunidad mediante el fortalecimiento de la presentación de denuncias; colaborar con los Estados, sociedad civil y actores asociados; y mejorar las comunicaciones. En su informe relativo a 2023 el secretario general[20] señaló que durante ese año se presentaron 100 denuncias en misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales. Esta cifra representa un incremento, ya que en 2022 se presentaron 79 denuncias. En el marco de estas denuncias se identificó a 143 víctimas, 115 de ellas adultas y 28 menores. Nuevamente, tal y como sucediera en 2022, dos misiones de mantenimiento de la paz concentraron el 90% de las denuncias, las mismas que el año anterior: la MONUSCO en RDC con 66 denuncias y la MINUSCA en RCA, con 24 denuncias. A estas denuncias se añadieron las que tuvieron lugar relativas a las misiones en Sudán del Sur, Líbano, Haití (la antigua Misión de Estabilización de las Naciones Unidas) y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq, así como la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán, que ya no continúa activa. El secretario general apuntó los retos pendientes que obstaculizan el fin de la explotación y los abusos sexuales en Naciones Unidas, especialmente en el ámbito humanitario y de las operaciones de mantenimiento de la paz, como la falta de financiación, las incoherencias entre operaciones y programas, la ausencia de canales de denuncia seguros y confidenciales, la necesidad de mejorar la capacidad técnica del personal, particularmente de los puntos focales designados para garantizar la protección frente a la explotación y los abusos sexuales y retos acerca de los procedimientos para denunciarlos. Además, se producían retrasos en las investigaciones, dificultando la rendición de cuentas antes las víctimas, así como el apoyo adecuado a estas.

Las misiones de mantenimiento de la paz MONUSCO y MINUSCA volvieron a concentrar el 90% de las denuncias por abuso y explotación sexual

17. Véase el resumen sobre Kazajstán en el capítulo 2 (Tensiones) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria: Barcelona, 2023.
18. Human Rights Watch, *World Report 2024*, HRW, 2024.
19. Human Rights Council, *Report of the independent International fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran*, HRC, A/hrc/55/67, 2 de febrero de 2024.
20. Secretario General de la ONU, *Special measures for protection from sexual exploitation and abuse. Report of the Secretary-General*. A/78/774, 2024.

La oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional presentó un documento de orientaciones sobre crímenes de género "Política sobre Crímenes de Género. Crímenes que incluyen violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género".[21] Este documento tiene como objetivo mejorar el trabajo del fiscal en la persecución de los crímenes de género, clarificando y orientado la aplicación del Estatuto de Roma, y contribuir al desarrollo de la jurisprudencia internacional en este ámbito. El documento señala que todos los crímenes contemplados bajo el Estatuto (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión) pueden implicar elementos de género en su comisión y provocar daños de género específicos como resultado de dicha comisión. La terminología "crímenes de género" pasa a sustituir la utilizada en 2014 "crímenes sexuales y de género". Crímenes de género incluye delitos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros tipos de violencia de género y su relación entre sí.

En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz[22] inició la apertura de un macrocaso denominado "Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano", con el objetivo de abordar todas las violencias sexuales y de género que se cometieron durante el conflicto armado cometidas por las diferentes partes implicadas en este. De esta manera, se establecieron tres subcasos para abordar las violencias cometidas por integrantes del grupo armado FARC-EP contra población civil, por miembros de la Fuerza Pública contra población civil, y por estos dos actores en el interior de cada una de estas entidades. La investigación no está solo centrada en los crímenes y conductas, sino también en los motivos y lógicas de los actores armados. La JEP señaló que se habían registrado 35.178 víctimas de violencia de género, sexual y reproductiva entre 1957 y 2016, de las que prácticamente el 90% eran mujeres. Además, la JEP identificó que una parte importante de los crímenes fueron cometidos contra población LGTBIQ+. La JEP identifica dos años en los que hubo un pico en la perpetración de violencia sexual: 2002 y 2014. La apertura del macrocaso se produjo puesto que el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP incluyeron la violencia sexual como un crimen no amnistiable, después de un importante proceso de incidencia por parte de la sociedad civil, que con posterioridad a la firma del acuerdo también abogó por la apertura de un caso en el marco de la JEP. Organizaciones de la sociedad civil involucradas en las campañas de incidencia celebraron la apertura del macrocaso, señalando que se trata de una victoria para las víctimas de la violencia sexual en el conflicto.

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente.

En 2023 los impactos de género fueron especialmente notorios y graves en **Gaza.** El ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre motivó el inicio de una ofensiva militar israelí contra el conjunto de la Franja caracterizada por un enorme poder destructivo y un uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil palestina. Hasta finales de 2023, en menos de tres meses, la campaña israelí –denunciada como un castigo colectivo y crecientemente como un genocidio contra el pueblo palestino– había causado la muerte a más de 25.000 palestinos y palestinas, mientras que se estimaba que otras 8.000 permanecían bajo los escombros. De este total, un 70% eran mujeres y menores de edad. Tal y como destacó ONU Mujeres, este porcentaje es especialmente significativo porque revierte la tendencia observada en los últimos 15 años en los que la mayoría (67%) de las víctimas civiles eran hombres.[23] La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, subrayaba en su informe "Anatomía de un genocidio" que no se puede asumir que todos los hombres adultos son combatientes de Hamas.[24] Y destaca que a principios de diciembre Israel anunciaba que había dado muerte a "7.000 terroristas" en una fase de la campaña militar y hostilidades en la que solo 5.000 hombres adultos habían sido identificados entre las víctimas mortales. Eso quiere decir, puntualiza Albanese, que el Gobierno israelí asumía que todos los hombres palestinos muertos como resultado de su ofensiva eran "terroristas" lo que revelaría una intención de atacar indiscriminadamente, asumiendo que tienen un estatus de combatientes activos por defecto.

70% de las muertes a causa de la campaña militar israelí en Gaza eran mujeres y menores de edad

Las consecuencias no solo se limitan a la letalidad. Al finalizar 2023 la campaña aérea y terrestre israelí había forzado el desplazamiento de más del 75% de la población, obligada a huir primero hacia el sur y luego al oeste mientras era atacada en rutas

21. Office of the Prosecutor, *Policy On Gender-Based Crimes, Crimes involving sexual, reproductive and other gender-based violence.* International Criminal Court, 2023.
22. La Jurisdicción Especial para la paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, establecido en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP firmado en 2016.
23. UN Women, *Statement on Gaza by UN Women Executive Director Sima Bahous*, 19 de enero de 2024.
24. Francesca Albanese, *Anatomy of a Genocide*, HRC, A/HRC/55/73, 25 de marzo de 2024.

identificadas previamente como seguras por Israel. La destrucción de viviendas, hospitales y todo tipo de infraestructuras civiles y la intensificación del bloqueo contribuyeron a configurar una crisis humanitaria de extraordinarias proporciones que abocaba a la hambruna a más de la mitad de la población gazatí. En este contexto caracterizado por gravísimas carencias –de agua, alimentos, medicinas, combustibles–, por el hacinamiento y la inseguridad constante por los persistentes ataques, las mujeres palestinas intentaban sostener la vida. Paralelamente, las mujeres afrontaban múltiples impactos relacionados, por ejemplo, a la vulneración del derecho a la salud: enfermedades derivadas del hacinamiento y la falta de higiene, la falta de acceso a productos básicos de higiene menstrual –lo que motivó que muchas de ellas optaran por recurrir a pastillas para evitar la menstruación–, y a tratamientos médicos. Las más de 50.000 mujeres embarazadas en Gaza se han visto especialmente afectadas por la crisis por la imposibilidad de acceder a la atención de salud necesaria en la fase de pre y post parto. Así, miles de mujeres se han visto obligadas a parir en condiciones extremas, algunas de ellas sometidas a cesáreas sin anestesia, mientras aumentaba entre 25% y 30% el porcentaje de nacimientos prematuros. Debido a la falta de suministros médicos básicos, muchas mujeres jóvenes han sido sometidas a histerectomías innecesarias como una forma de salvarles la vida, pero dejándolas incapaces de procrear en el futuro. Miles de madres palestinas de la Franja padecían a diario por la muerte o mutilaciones de sus hijos e hijas –al finalizar el año más de un millar había perdido una o las dos piernas–, por las innumerables privaciones y la incapacidad de ofrecerles seguridad, protección, alimentos o acceso a sus derechos más básicos, como la educación. En este contexto, múltiples voces alertaban también sobre los impactos en la salud mental y sobre el trauma colectivo que afectará a generaciones de palestinos y palestinas como consecuencia del genocidio.

La cuestión de la violencia sexual también ha sido un elemento en este contexto. La representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos armados y directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, viajó a Israel a principios de 2024 para indagar en las denuncias sobre la comisión de actos de violencia sexual perpetrados por miembros de Hamas y otros grupos palestinos durante la ofensiva del 7 de octubre. Naciones Unidas ha subrayado que la misión, que tuvo una duración limitada, no era de investigación y que por tanto no pudo verificar las denuncias, determinar la prevalencia de los incidentes o atribuirlos a un grupo específico, e insistió en que ello requeriría una investigación independiente con las atribuciones necesarias para indagar.[25] Pese a ello, la misión de la representante especial declaró haber recibido indicios sobre incidentes de violencia sexual en al menos tres localizaciones –el festival Nova, una carretera y un kibutz–, y contra personas mantenidas como rehenes. Paralelamente, Bahous también recopiló informaciones y evidencias sobre el uso de violencia sexual contra mujeres y hombres palestinos detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza y Cisjordania tras los hechos del 7 de octubre, incluyendo golpes en los genitales, amenazas de violación y desnudos forzados.

En **Afganistán** persistieron las prácticas, políticas y leyes discriminatorias contra las mujeres, que se vieron expuestas a niveles de violencia muy elevados sin gozar de protección por parte de las autoridades, que por el contrario, promovieron su exclusión y discriminación. Por ejemplo, durante 2023, se anularon numerosas sentencias de divorcio aprobadas durante el Gobierno anterior, exponiendo a muchas mujeres a situaciones de violencia de género al ser forzadas a regresar. De hecho, la situación de las mujeres afganas fue objeto de atención por el Consejo de Seguridad, que mediante la aprobación de la resolución 2679 encargó una evaluación independiente sobre la situación de Afganistán y recomendaciones para abordar las relaciones con este país.[26] La evaluación señaló que la situación de las mujeres y las niñas en el país fue una cuestión grave señalada por todos los actores que participaron en la investigación para la elaboración del informe, constatando cómo las políticas promovidas por el régimen talibán suponen graves violaciones a los derechos humanos y la contravención de múltiples tratados internacionales, incluyendo la CEDAW. Entre los pasos que la administración talibán debería adoptar para una eventual normalización diplomática en el futuro, se señaló la derogación de la legislación discriminatoria contra las mujeres y la protección de los derechos de mujeres y niñas.

En **Somalia**, además de la violencia sexual, el conflicto armado continuó teniendo otros graves impactos de género. La representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos armados y directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en febrero de 2023, reveló una situación devastadora. Bahous señaló que en Somalia no se alcanzó la cuota del 30% para las mujeres en las elecciones ni en el Gobierno, la representación de las mujeres disminuyó, la violencia sexual aumentó y el Parlamento aún no había aprobado el proyecto de ley sobre delitos sexuales adoptado por unanimidad por el Consejo de ministros hace cinco años. En cambio, los oponentes a esa ley presionaron por una legislación alternativa que legalice el matrimonio infantil, omita la edad de consentimiento, reduzca los tipos de pruebas admisibles y elimine los derechos de los sobrevivientes. Bahous destacó que las mujeres somalíes invitadas a informar ante el Consejo de ministros habían advertido de esta situación, pero no se tomaron las medidas oportunas.

25. UNSC, *Report of the secretary general on conflict-related sexual violence*, S/2024/292, 4 de abril de 2024.
26. Independent Assessment Mandated by Security Council Resolution 2679 (2023).

En materia de violencia de género, en **Sudán**, la Dependencia sobre la Violencia contra las Mujeres integrada en el Ministerio de Asuntos Sociales, denunció un aumento de los actos de violencia de género presuntamente perpetrados por el grupo paramilitar Rappid Suport Forces (RSF) y combatientes afines en Jartum, Darfur Meridional y Darfur Occidental. También organizaciones de derechos humanos estimaron que, a raíz del conflicto armado iniciado en abril de 2023, el número de personas que necesitaron durante el año servicios de prevención de la violencia de género y respuesta a ella aumentó en más de un millón, situándose la cifra en 4,2 millones de personas en todo el país. Asimismo, denunciaron que el crecimiento de la inseguridad y los ataques contra hospitales redujeron drásticamente la capacidad de prestar servicios a las supervivientes. También Amnistía Internacional denunció que decenas de mujeres y niñas, algunas de tan solo 12 años, han sufrido violencia sexual por parte de las facciones en conflicto, y algunas incluso han sido mantenidas en cautiverio prolongado en condiciones de esclavitud sexual. El Grupo Sudanés de Víctimas de Desapariciones Forzadas registró 96 casos de mujeres que probablemente hayan sufrido violación, esclavitud sexual o explotación para el trabajo doméstico.[27]

16 de los 17 conflictos armados de alta intensidad de 2022 (94% de los casos) tuvieron lugar en países donde ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+

En 2023, 27 de los 36 conflictos armados activos transcurrieron en países en los que ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra población LGTBIQ+, agravando los impactos de la violencia en estos contextos. 16 de los 17 conflictos armados de alta intensidad de 2023 (94% de los casos) tuvieron lugar en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+. Fueron los conflictos de Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen. En el caso de la invasión rusa y conflicto armado entre Rusia y Ucrania, solo Rusia era señalada como país con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+, y no Ucrania, según los datos de ILGA.

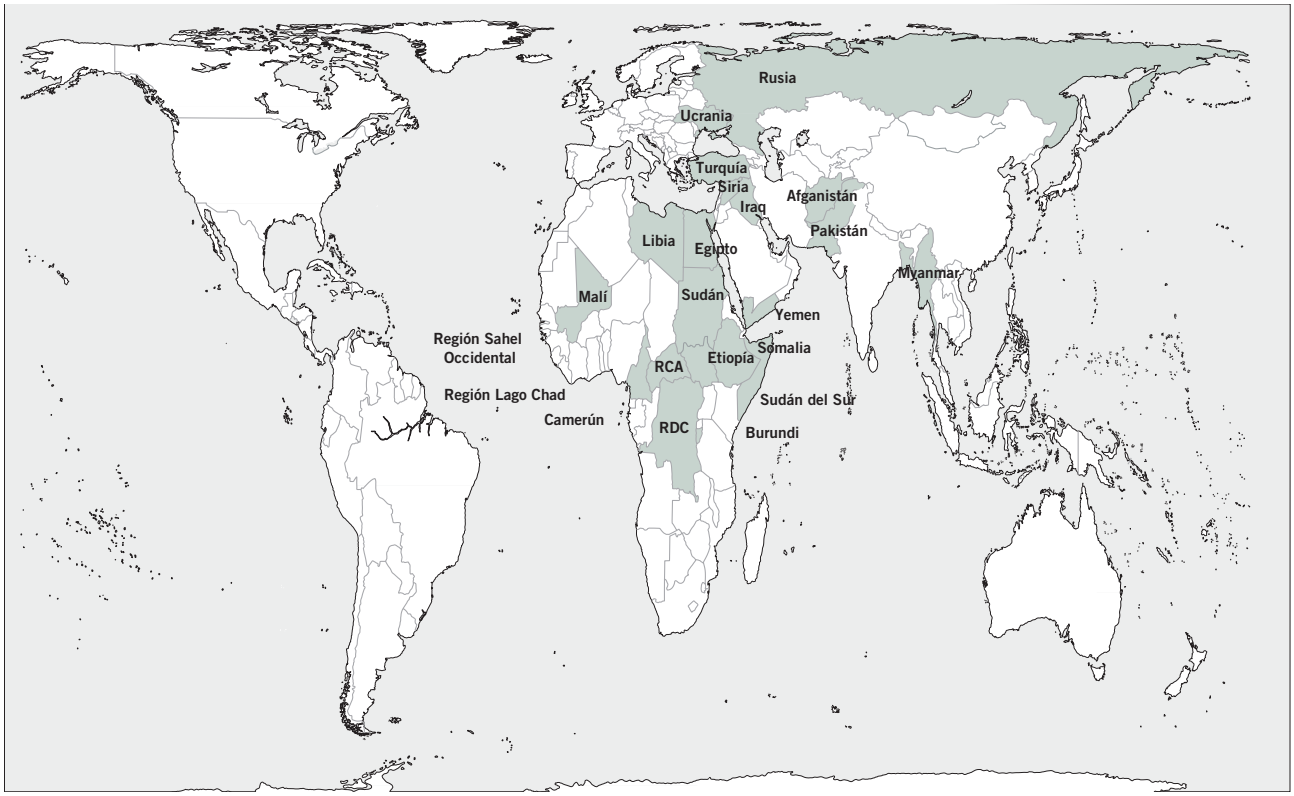
En **Rusia** el Tribunal Supremo avaló en noviembre de 2023 prohibir al "movimiento internacional LGTBI" y sus actividades y calificarlo de "extremista", a petición del Ministerio de Justicia, sentencia que puede suponer penas de cárcel para participantes y organizadores de actividades en defensa de los derechos LGTBIQ+ y que prohíbe el uso de símbolos LGTBIQ+. A su vez, durante el año las autoridades políticas y judiciales rusas adoptaron otras diversas medidas de represión y restricción de derechos de la población LGTBIQ+.[28] Por otra parte, **el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó en diversas ocasiones que la guerra en Ucrania era también una guerra por la defensa de los "valores tradicionales"**. Activistas feministas rusas continuaron oponiéndose a la guerra. En diciembre de 2022, el Ministerio de Justicia de Rusia había incluido al movimiento feminista ruso Resistencia Feminista contra la Guerra en la lista de "agentes externos". Activistas y coordinadoras de este movimiento afrontaban prácticas de hostigamiento por las autoridades como identificaciones frecuentes, multas, arrestos, registros de domicilios e incautación de ordenadores. Pese a ello, más de 45 grupos feministas continuaban activos en diferentes partes de Rusia, y el movimiento contaba con activistas también en 28 países.[29]

En **Uganda** se siguieron produciendo retrocesos en los derechos las personas LGTBIQ+ con la aprobación del Parlamento, el 21 de marzo, de un proyecto de ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley busca ampliar la Ley de Delitos Sexuales aprobada por el Parlamento en 2021, que penaliza cualquier "acto sexual entre personas del mismo género", así como el sexo anal entre personas de cualquier género, con hasta 10 años de prisión. A finales de mayo el texto fue ratificado y promulgado en ley por el presidente Yoweri Museveni, provocando una amplia condena internacional. Activistas ugandesas impugnaron la ley ante los tribunales, debido a que, entre otras cuestiones, la misma permite la pena de muerte por "homosexualidad agravada", definida como casos de relaciones homosexuales entre un menor y otras categorías de personas vulnerables, o cuando el perpetrador está infectado con el VIH. Por otra parte, EEUU condenó la medida como una "trágica violación" de los derechos humanos, anunciando restricciones de visado a personas que "socavan el proceso democrático" y excluyó al país de la iniciativa comercial africana por violaciones de los derechos humanos. También el Banco Mundial suspendió los préstamos al país y anunció la congelación de nuevos préstamos a Uganda, provocando que la moneda ugandesa (shilling) cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi ocho años.

En **Iraq,** a lo largo del último año tuvo lugar una intensa controversia en torno al uso del concepto de género, se observó una mayor hostilidad hacia las personas LGTBIQ+ y también generó alerta la presentación de una iniciativa que pretende criminalizar la homosexualidad. El secretario general de la ONU fue una de las voces que expresó preocupación por el incremento de

27. Samar Suleiman, "Living Through Hell: Sudanese Women Pay the Highest Price of War", Carnegie, 26 de marzo de 2024.
28. Human Rights Watch, *World Report 2024*, 2024.
29. Meridiano 13, "Russian dissident Liliya Vezhevatova: 'Women are the face of protest in Russia'", *Voxeurop*, 4 de octubre de 2023.

Mapa 3.2. **Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+**



Conflictos armados en 2023 en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+

Tabla 3.4. **Conflictos armados en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+**[30]

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO	EUROPA
Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West) Etiopía (Amhara) Etiopía (Tigré) Etiopía (Oromiya) Libia Malí Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental República Centroafricana RDC (este) RDC (este-ADF) RDC (oeste) Somalia Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) Sudán Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Iraq Siria Yemen	Turquía (sudeste) Rusia – Ucrania

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2024 y de Kellyn Botha, *Nuestras Identidades Bajo Arresto. Un panorama global de la aplicación de normas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo y las expresiones de género diversas*, ILGA, 2023.

30. Esta tabla incluye conflictos armados en 2023 en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+.

la desinformación y los intentos de instituciones gubernamentales de prohibir el uso del término "género". En un contexto de cuestionamientos y críticas en las redes sociales sobre la utilización del término "género" por considerar que el concepto promueve valores que entran en conflicto con las tradiciones sociales y religiosas de Iraq, varios ministerios difundieron instrucciones con sus propias definiciones de género o disponiendo la eliminación del concepto. Ante estos desarrollos, en julio la secretaría del Consejo de Ministros emitió una circular con una clarificación del término y ordenó que en todos los documentos oficiales el concepto fuera seguido, entre paréntesis, por la frase "hombres y mujeres". En paralelo, la autoridad que regula los medios de comunicación en Iraq emitió en agosto instrucciones para prohibir el uso del término "género" y para reemplazar la palabra "homosexualidad" por "desviación sexual". La medida se produjo mientras el Consejo de Representantes completaba la primera revisión de una propuesta que pretende reformar la Ley Anti-Prostitución para rebautizarla como Ley Anti-Prostitución y Homosexualidad y criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Según la iniciativa presentada, las personas condenadas por conductas homosexuales podrían enfrentar prisión perpetua y pena de muerte. También en torno a este tema, cabe mencionar que previamente, en junio, después de que un hombre quemara un ejemplar del Corán fuera de una mezquita en Estocolmo, se registraron manifestaciones en Bagdad frente a la embajada sueca. En estas protestas se quemaron banderas con el arcoíris, símbolo de la comunidad LGTBIQ+. Según informaciones de prensa, el clérigo shií Muqtada al-Sadr habría alentado a sus seguidores a continuar con este tipo de acciones.[31] En mayo, el Gobierno Regional del Kurdistán también dispuso la clausura de la ONG Razan Organization argumentando sus "actividades en el campo de la homosexualidad". En 2022 parlamentarios kurdos también habían presentado n una propuesta para castigar el activismo individual y colectivo que intentara defender los derechos de la población LGTBIQ+.[32]

Cabe destacar que durante 2023 los debates terminológicos en Iraq también pusieron en la mira el concepto de "empoderamiento de la mujer". Por ello, durante su visita al país el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos enfatizó que los conceptos de "género" y "empoderamiento de la mujer" no están en contradicción con ninguna cultura, religión o tradición y subrayó la necesidad de que hubiera más mujeres en puestos de decisión e implicadas en las medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Pese a estos llamamientos, en noviembre el secretariado del Consejo de Ministros iraquí volvió a emitir una instrucción en la que indica que el término género debía ser reemplazando por la frase "justicia entre mujeres y hombres". Algunas ONG iraquíes y personas defensoras de los derechos humanos, especialmente organizaciones de mujeres, manifestaron su inquietud por la controversia y la adopción de estas medidas. Estas voces temen que el clima político en torno a este asunto afecte su trabajo programático y en el ámbito de incidencia. La ONU también advirtió que estas medidas comprometen la igualdad de género y propician las intimidaciones y el acoso a las activistas por los derechos de las mujeres.

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

En octubre se celebró una nueva sesión del debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión.[33] El tema central del año 2023 fue la participación de las mujeres en la paz y la seguridad internacionales, en un debate en el que se advirtió sobre los retrocesos a nivel internacional en materia de participación política de las mujeres y avance del autoritarismo, con la misoginia con parte central del discurso y las políticas de numerosos gobiernos autoritarios, situación de la que se hizo eco el propio secretario general en su informe anual sobre las mujeres, la paz y la seguridad. El secretario general señaló, además, que en 2022 –año al que hacen referencia los datos recogidos en el informe presentado en 2023– 614 millones de mujeres y niñas vivían en contextos afectados por la conflictividad armada. Con respecto a las cifras de participación en procesos de paz, el informe señaló que en 2022 hubo participación de mujeres como negociadoras o delegadas representando a las partes en conflicto en cuatro de los cinco procesos que contaron con la facilitación de Naciones Unidas. En todos estos procesos hubo espacios de consulta con organizaciones de mujeres de la sociedad civil y se dispuso de asesoramiento experto en género. No obstante, a pesar de esta representación en los procesos de paz dirigidos o codirigidos por Naciones Unidas, por segundo año se registró un retroceso en la participación, ya que esta fue del 18%, frente al 19% de 2021 y el 23% de 2020. Así pues, este retroceso puso nuevamente de manifiesto el deterioro en la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad y la falta de compromiso de los Gobiernos y

31. Ahmed Saad, "Koran burning in Sweden sparks protest in Baghdad", *Reuters*, 29 de junio de 2023.
32. Human Rights Watch, "Iraq", *World Report 2024*, Human Rights Watch. 11 de enero de 2024.
33. Secretario General, *Women and peace and security. Report of the Secretary-General*, S/2022/740, 5 de octubre de 2022.

Tabla 3.5. **Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz**

Camerún (2017)	Filipinas (2009)
Chad (2023)	Armenia (2019)
Malí (2012)	Azerbaiyán (2020)
Marruecos (2022)	Chipre (2020)
Mozambique (2019)	Georgia (2018)
RCA (2014)	Moldova (2018)
RDC (2010)	Serbia (2017)
Senegal (2011)	Kosovo (2014)
Somalia (2021	Ucrania (2016)
Sudán (2020)	Palestina (2015)
Sudán del Sur (2015)	Yemen (2019)
Corea (2014)	

*Entre paréntesis año de aprobación del Plan de Acción Nacional

los actores en conflicto. En paralelo, el informe recogía que el 33% de los acuerdos de paz que se firmaron en 2022 (6 de los 18 acuerdos alcanzados ese año) incluían cláusulas en las que se hacía referencia a las mujeres, las niñas o el género. Así pues, el balance del informe con respecto a la participación de las mujeres en los procesos de paz y la inclusión de las cuestiones de género en los diferentes acuerdos de paz alcanzados no era en absoluto positiva, ya que más allá del retroceso identificado para el año 2022, los datos apuntaban a una tendencia regresiva en este ámbito, en un contexto internacional de fuerte conflictividad armada e incremento de la violencia.

El informe del secretario general constató la tendencia de retroceso en la participación de las mujeres en las negociaciones de paz

En 2023, 23 países que protagonizaban negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos. Once de estos países estaban en África (Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mozambique, RCA, RDC, Senegal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur); dos en Asia (Corea y Filipinas); ocho en Europa (Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Moldova, Serbia, Kosovo y Ucrania) y dos en Oriente Medio (Palestina y Yemen). Ninguno de los países en el continente americano con unas negociaciones en curso contaba con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325. Así, en 27 de las 45 negociaciones activas durante 2023 al menos uno de los actores gubernamentales negociadores contaba con un plan de acción que debía guiar su actuación en materia de inclusión de la perspectiva de género y de participación de las mujeres. Las 27 negociaciones y procesos de paz fueron: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste); Chad; Etiopía-Egipto-Sudán; Malí; Marruecos–Sáhara Occidental; Mozambique; RCA; RDC; Senegal (Casamance); Somalia; Somalia-Somalilandia; Sudán; Sudán del Sur; Sudán-Sudán del Sur; Corea, RPD–Corea, Rep. De; Filipinas (MILF); Filipinas (MNLF); Filipinas (NDF); Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj); Chipre; Georgia (Abjasia, Osetia del Sur); Moldova (Transnistria); Rusia–Ucrania; Serbia–Kosovo; Israel-Palestina; Palestina y Yemen. Sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, la mayoría de negociaciones de paz continuaron excluyendo a las mujeres y tampoco se incorporó la perspectiva de género en las dinámicas de los procesos de paz, poniendo en entredicho la eficacia de los planes de acción como herramientas de construcción de paz inclusiva.

El Gobierno de **Chad** presentó a principios de año su Plan de Acción Nacional para el periodo 2023-2027 para promover la agenda de mujeres, paz y seguridad, cuya elaboración contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Cooperación Suiza y la Cooperación Española. El proceso se basó en propuestas hechas por más de 200 mujeres líderes que participaron en sesiones de capacitación sobre mujeres, paz y seguridad y prevención del extremismo violento. A lo largo de varios años, el plan fue redactado y validado por varios ministerios y partes interesadas, que también recibieron capacitación sobre la resolución 1325 y la agenda mujeres, paz y seguridad.

El Gobierno de **Moldova** aprobó en marzo de 2023 su segundo plan de acción nacional sobre mujeres, paz y seguridad (2023-2027). El plan de acción dedica dos de los cinco "objetivos generales" del nuevo plan al sector de la seguridad y la defensa, mientras no contenía ningún "objetivo general" relacionado con el ámbito de la prevención y resolución de conflictos o la construcción de paz.[34] Los objetivos generales del nuevo plan de acción eran: 1) incrementar la participación y representación de mujeres en el sector de seguridad y defensa; 2) prevenir las desigualdades, violencia y acoso en el sector de seguridad y defensa reduciendo los riesgos

34. Gobierno de Moldova, *Action Plan implementing the National Programme on the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security for 2023-2027*, 2023.

y eliminado las consecuencias de la discriminación; 3) protección a través de buena gobernanza y desarrollo de capacidades; 4) rehabilitación de la población afectada a través de medidas efectivas, sostenibles e inteligentes; 5) provisión de apoyo humanitario para mujeres y niñas de áreas de conflicto y posconflicto; y 6) comunicación y rendición de cuentas. Como parte del "objetivo específico 1" del "objetivo general 1", el plan incluía una acción destinada a incrementar la capacidad profesional a través de la formación y transferencia de conocimiento y experiencias para mujeres y mujeres mediadoras, mujeres y hombres en equipos mixtos o multidisciplinares sobre resolución de conflictos. El alcance de esta acción se medía en un indicador referente a el establecimiento de un curso de formación, en el que al menos 50 mujeres se forman e involucran en resolución de conflictos. Por otra parte, el plan sí incluye acciones dirigidas a la promoción de los derechos de las mujeres en tiempos de paz o conflicto, el respeto a los derechos de las mujeres, niñas y mujeres con niñas/os en situaciones de conflicto y posconflicto, entre otras. Por otra parte, el Ministerio de Interior de Moldova señaló que el nuevo plan de acción nacional incluía por primera vez acciones a implementar conjuntamente con gobiernos locales. La estimación del coste del plan de acción, según el Ministerio de Interior, era de 23,6 millones de lei, a financiarse por los presupuestos estatales y asistencia de actores de desarrollo.

En 2023 se presentó al Consejo de Igualdad de Género del Parlamento de **Georgia** el informe temático sobre implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad, liderado por la parlamentaria y relatora Teona Akubardia. Según informó el Parlamento georgiano, el informe incluía, entre otras recomendaciones, facilitar el involucramiento efectivo de mujeres en las Discusiones Internacionales de Ginebra (GID, por sus siglas en inglés, nombre del proceso de negociaciones de paz que involucra a Georgia, Abjasia, Osetia del Sur y Rusia, así como a la ONU, UE y EEUU como co-facilitadores), así como en los mecanismos de prevención y respuesta a incidentes (IPRM, por sus siglas en inglés).[35] Las recomendaciones abordaban también otras dimensiones, como la participación de las mujeres en niveles de decisión en el sector de seguridad y defensa; la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad humana, incluyendo en relación a la población desplazada interna; el desarrollo de una política de prevención del acoso sexual relacionado con el conflicto; y garantías de supervisión parlamentaria del cumplimiento de las recomendaciones e involucramiento con la sociedad civil en ese proceso.

Sudán del Sur aprobó en marzo bajo el liderazgo del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar, el segundo plan de acción nacional sobre la agenda de mujeres, paz y seguridad (2023-2027). El nuevo plan de acción solicita al Gobierno que financie su implementación, en lugar de depender de los donantes, y también prevé su desarrollo a nivel estatal y local, de modo que las actividades se centren más en las realidades de las comunidades locales. También ratificó el Protocolo de la UA de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África (conocido como el Protocolo de Maputo).[36] La ratificación obliga a un compromiso con la igualdad de género e insta a las autoridades del país a adoptar políticas y estrategias efectivas para garantizar que el protocolo marque una diferencia en la vida de las personas.

En **Filipinas**, a mediados de diciembre, la Oficina del Consejero Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad, la Comisión Filipina de Mujeres, ONU Mujeres y varias organizaciones nacionales e internacionales de promoción de los derechos de las mujeres anunciaron públicamente el Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el período entre 2023 y 2033. Dicho plan es el cuarto desde que se aprobó el primero en el año 2010. La OPRARU destacó que el Plan Nacional también abordaba realidades emergentes como la acción climática y la seguridad cibernética y marítima, y llamó a las organizaciones de la sociedad civil a apoyar su implementación. Según algunos análisis, el nuevo Plan de Acción presta especial atención a la creación de espacios y mecanismos para que la mitigación de la violencia sexual y de género refuerce y alimente la participación activa de mujeres con identidades diversas e interseccionales en la prevención, resolución y transformación de conflictos, y también en la consolidación de la paz. Varias de las autoridades que intervinieron en el acto de lanzamiento del plan destacaron que Filipinas había sido uno de los países pioneros en Asia en tener un instrumento de este tipo y en abordar la agenda de mujeres, paz y seguridad.

En **Haití**, según el Informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la BINUH presentado en el mes de octubre, en 2023 se iniciaron esfuerzos para poner en marcha un plan de acción nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000) con el establecimiento de comités de paz y mediación en los departamentos de Occidente, Centro y Artibonite. La BINUH y ONU Mujeres involucraron a organizaciones y redes de mujeres para mejorar los esfuerzos de consolidación de la paz y mediación y mejorar la participación en la elaboración de políticas públicas para reducir la violencia comunitaria. En este sentido, en julio ONU Mujeres celebró 12 reuniones consultivas sobre la reducción de la violencia comunitaria en los departamentos de Occidente, Artibonite y Centro, a las que asistieron el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer, dirigentes políticas y organizaciones de mujeres, y en las que se acordó el establecimiento de tres redes de mujeres mediadoras y constructoras de paz.

35. Parlamento de Georgia, "Presentation by the Gender Equality Council of the report on 'Implementation of the Women, Peace and Security Agenda in Georgia'", 27 de septiembre de 2023.
36. Nyagoah Tut Pur, "South Sudan Ratifies Crucial African Women's Rights Treaty", *Human Rights Watch*, 8 de junio de 2023.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2023.[37] Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

En relación con el contencioso entre **Somalia y Somalilandia**, bloqueado durante tres décadas y tras múltiples iniciativas frustradas para aproximar a las partes, a finales de 2022 se relanzaron los contactos y las iniciativas internacionales promovidas por Turquía y Noruega, que culminaron con una reunión en diciembre de 2023 entre los presidentes de ambas administraciones en Djibouti. En este sentido, cabe destacar que en la delegación de Noruega participó la representante especial Heidi Johansen. Por parte de Somalilandia, el Gobierno designó como enviada al proceso a la ex ministra de Sanidad y de Exteriores de Somalilandia, Edna Adan, figura reconocida a nivel nacional e internacional, lo que supuso un impulso al proceso. Edna Adan es considerada un símbolo en la lucha por los derechos de las mujeres en Somalia y es, a su vez, presidenta de la UNPO, la organización de naciones sin Estado del mundo (desde 2022). Edna Adan ha sido laureada con numerosos premios, entre ellos el Templeton Prize en junio de 2023 por su labor en la construcción de la paz y su lucha contra la mutilación genital femenina en el Cuerno de África desde el hospital que lleva su nombre en Hargeysa, la capital de Somalilandia. En este sentido, este premio puso en valor el tradicional papel de las organizaciones de mujeres somalíes en el impulso de iniciativas de construcción de paz y de diálogo con el objetivo de intentar superar las divisiones en torno al conflicto en Somalia. Los contactos exploratorios a finales de 2022 y durante 2023 culminaron con una reunión entre los presidentes de Somalia y Somalilandia entre el 28 y el 29 de diciembre de 2023 en Djibouti, lo que generó un clima de optimismo. No obstante, esta histórica reunión se vio ensombrecida por el anuncio el 1 de enero de 2024 por parte de Etiopía y de Somalilandia de la firma de un memorando de entendimiento entre ellos que desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas entidades y Somalia.[38]

En **Sudán del Sur**, en lo relativo a la implementación de las disposiciones del acuerdo de paz (R-ARCSS) relacionadas con el género,[39] si bien el mismo incluye una cuota del 35% de participación de mujeres en todas las instituciones y procesos ejecutivos y de transición, esta medida siguió sin cumplirse en la mayoría de las comisiones creadas para implementar el acuerdo de paz, ni en el Gobierno y el Parlamento actuales. En los órganos creados durante el 2023, la cuota acordada de representación de las mujeres solo era respetada en el Consejo de Partidos Políticos (40%), pero no en la Comisión Nacional de Revisión de la Constitución (32%) ni en el Comité Electoral Nacional (22%). Tampoco se cumplía en la elección de gobernadores de los estados, donde sólo uno de los diez gobernadores de Sudán del Sur es mujer.

En **Haití**, como parte del proceso de diálogo intrahaitiano para tratar de solventar la crisis política que atraviesa el país, a finales de mayo se celebró en Puerto Príncipe un foro político nacional sobre reforma electoral y constitucional, la gobernabilidad democrática y la situación socioeconómica y de seguridad. En la conferencia participaron líderes comunitarios de todos los departamentos del país y más de 350 representantes (entre ellos unas 130 mujeres) de organizaciones políticas y sociales del país. En sus intentos de facilitar el mencionado diálogo político, la Representante Especial del secretario general de la ONU, María Isabel Salvador se reunió con algunas de dichas mujeres y, a principios de junio, informó sobre los progresos del proceso de diálogo y sobre los resultados del foro político nacional celebrado en el mes de mayo al Grupo Informal de Expertos del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad. Durante dicho foro, el entonces primer ministro, Ariel Henry y la presidenta del Alto Consejo de Transición, Mirlande Manigat, enfatizaron la necesidad de continuar el diálogo nacional liderado por Haití para crear las condiciones políticas y de seguridad necesarias para permitir la celebración de elecciones. La senadora Mirlande Manigat había sido nombrada a principios de años presidenta del Alto Consejo de Transición, un organismo que tiene como uno de sus objetivos promover el diálogo nacional en la búsqueda de un consenso sobre las principales líneas de acción para el período de transición, en particular en materia de seguridad pública, Constitución y elecciones, reformas económicas, justicia y Estado de derecho, seguridad social y alimentaria.

En cuanto al **Sáhara Occidental**, cabe destacar que en septiembre de 2023 el enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, finalmente pudo realizar una visita al territorio controlado por Marruecos y reunirse con organizaciones de mujeres. El Gobierno de Rabat había planteado objeciones a los encuentros del representante diplomático con entidades de la sociedad

37. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
38. Véase el resumen de Somalia-Somalilandia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
39. UN Women, "Members of the Security Council's Informal Expert Group on Women, Peace and Security visit South Sudan", *UN Women*, 15 de diciembre de 2023.

civil saharaui. Ante ello, De Mistura se había negado a viajar al territorio, como una manera de enfatizar la necesidad de coherencia con los principios de la ONU y, en particular, con los compromisos en el ámbito de la participación de mujeres en la promoción de la paz y la seguridad.

En el caso de **Libia**, la situación de las mujeres continuó viéndose influida por la fractura institucional y el bloqueo que, un año más, impidió la celebración de elecciones previstas en el marco de las negociaciones para buscar una salida política en el país y que debían haberse realizado en diciembre de 2021. Las mujeres libias continuaron exigiendo garantías de una mayor participación en el proceso político electoral. El panel de alto nivel para las elecciones organizó en mayo una conferencia en Trípoli sobre el fortalecimiento de la participación de las mujeres en comicios a la que asistieron representantes de 12 países árabes. En este espacio se enfatizó la necesidad de garantizar la inclusión de mujeres en todas las etapas del proceso electoral. Grupos de mujeres se reunieron con distintos representantes políticos para subrayar su demanda de que las normas electorales permitieran una representación significativa de las mujeres en el futuro Parlamento. No obstante, las leyes aprobadas en la segunda mitad del año fijaron una cuota mínima de tan solo seis escaños para mujeres de los 60 del Senado, un porcentaje muy inferior al 20% que se había establecido tras la reforma electoral.

En **Siria**, como en el caso de Libia, las posibilidades de participación de las mujeres en los espacios de diálogo político sobre el futuro del país se vieron determinadas por el persistente bloqueo en las negociaciones, en particular en la vía promovida por la ONU conocida como proceso de Ginebra. El Comité Constitucional establecido en el marco de este proceso –donde las mujeres constituyen un 29% de las delegaciones representadas– continuó sin reunirse, desde la suspensión de sus debates en junio de 2022. Durante 2023, el enviado especial de la ONU para Siria continuó reuniéndose con mujeres delegadas en el Comité Constitucional y con las que integran el consejo consultivo de mujeres sirias, el Women's Advisory Board (WAB, por sus siglas en inglés). Este último espacio siguió siendo objeto de algunas críticas por su nivel de representatividad. Tras ocho años de trabajo del WAB, la oficina del enviado especial puso en marcha una convocatoria para renovar a las integrantes de este espacio consultivo. En 2023 ONU Mujeres también enfatizó la importancia de respaldar el papel de las mujeres sirias en iniciativas diplomáticas de *Track* 2 y 3, en mediación comunitaria y diálogos a nivel local.

En lo que respecta a **Yemen**, activistas del país persistieron en sus denuncias de exclusión de los espacios formales de negociación y, junto a otros colectivos marginalizados, expresaron su inquietud por la marcha de las negociaciones entre Arabia Saudita y los al-houthistas sin participación de otros componentes de la sociedad yemení. En este contexto, diversas representantes mantuvieron una reunión en Jordania con el enviado especial de la ONU para Yemen e insistieron en que su demanda de inclusión en las deliberaciones sobre el futuro de Yemen no es un privilegio, sino un derecho y una garantía para una paz sostenible. Entre las prioridades que identificaron para un futuro acuerdo político para el país señalaron un alto el fuego, la reapertura de carreteras, el pago a los trabajadores del sector público. Asimismo, subrayaron la necesidad de medidas de confianza como la liberación de todas las personas prisioneras, mapas que faciliten el desminado, compromiso de no realizar nuevas detenciones arbitrarias, entre otras medidas. Algunos análisis subrayaron la crucial labor de construcción de paz que han continuado desarrollando las mujeres yemeníes a pesar de los numerosos obstáculos e impactos del conflicto armado, por ejemplo, en materia de apoyo a los programas para la reintegración de menores soldado, la apertura de corredores humanitarios y mediación en disputas tribales.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2023 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de ellas.

En **Sudán**, desde el inicio de los enfrentamientos armados en abril entre las Fuerzas Armadas (SAF) y el grupo paramilitar Rappid Suport Forces (RSF) surgieron diferentes iniciativas de diálogo impulsadas por mujeres que pedían un alto el fuego, ponían de relieve las necesidades humanitarias y condenaban la violencia sexual relacionada con el conflicto. Estas iniciativas también exigieron la participación de las mujeres en las negociaciones para lograr el cese de la violencia, así como en todo proceso político futuro, denunciando la falta de inclusividad de las mujeres en estos espacios. También, a finales de octubre, ONU Mujeres, en asociación con la IGAD, la UA y el Centro Internacional de Mujeres por la Paz, organizaron una conferencia con mujeres sudanesas constructoras de paz en Kampala (Uganda) que contó con la participación de más de 400 mujeres de 14 estados sudaneses. La conferencia tuvo como objetivo construir puentes entre las mujeres en Sudán y en los países de la región y destacó el papel de liderazgo que están desempeñando las mujeres y las jóvenes sudanesas en el movimiento por la paz.[40]

En **Haití**, a principios de diciembre unas 300 personas de todo el país, principalmente mujeres, participaron en la "Conferencia nacional sobre la prevención y la gestión

40. UN Women, "Sudanese women advocate for peace at conference in Uganda", *UN Women*, 22 de diciembre de 2023.

de la violencia electoral y política contra las mujeres en Haití" que contó con la participación y colaboración de ONU Mujeres. El principal objetivo de la conferenciaera contribuir a estructurar el diálogo nacional interhaitiano en torno a la cuestión de la sensibilidad de género en el proceso democrático nacional. Uno de los aspectos que se abordaron en la conferencia fueron las medidas y mecanismos para reducir la violencia contra las mujeres en procesos electorales y analizar el impacto de la misma en la participación política de las mujeres y en las dinámicas de desarrollo en Haití.

En 2023 se incrementaron los esfuerzos de trabajo en red de constructoras de paz de **Europa del Este, Sur del Cáucaso y Asia Central,** sobre un trasfondo de deterioro en los últimos años de situaciones de tensión y conflicto en estas regiones. Por una parte, varias decenas de mujeres activistas por la paz participaron en una conferencia inter-regional e intergeneracional de dos días en junio en Estambul (Türkiye) organizada por la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) y con apoyo de la OSCE.[41] Incluyó participantes de Moldova, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El encuentro tenía el objetivo de fortalecer las redes que trabajan en el ámbito de mujeres, paz y seguridad así como de igualdad de género en estas regiones. La conferencia tuvo continuidad en un segundo encuentro en febrero de 2024 en Austria (Viena), en que profundizaron en las estrategias de fortalecimiento del trabajo en red. Entre otras recomendaciones, señalaron la importancia del apoyo financiero, flexible y de larga duración en apoyo a mujeres constructoras de paz y mediadoras. Por otra parte, mujeres de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán participaron conjuntamente en un proyecto liderado por la Fundación para la Tolerancia Internacional (FTI, miembro de la red internacional Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC), de Kirguistán, con el objetivo de promover diálogo entre ellas y el empoderamiento para tratar de influir en los procesos de negociación de paz y de decisión política en la región. El trabajo en red incluyó metodologías de facilitación del diálogo con sensibilidad al trauma.[42]

La Red de Mujeres Mediadoras del **Sur del Cáucaso** continuó involucrada en la promoción de la transformación de los conflictos en la región y en la promoción de la participación de mujeres en la construcción de paz en la zona. En 2023 publicaron un estudio que recogía análisis sobre la situación actual de los diversos conflictos en la región y recomendaciones, a partir de entrevistas individuales y de grupo con actores de la sociedad civil involucrados en construcción de paz desde diferentes sectores. Entre muchos otros elementos, identificaron una falta profunda de confianza; la reactivación del trauma en las distintas poblaciones a raíz de la guerra en Ucrania; y preocupaciones en torno a seguridad humana, degradación de recursos, reintegración incluyendo de excombatientes, violencia contra las mujeres y la infancia, impactos de la militarización, cuestiones económicas. Asimismo, identificaron recomendaciones de necesidad de diálogo directo entre las partes en conflicto y de diplomacia pública.[43]

Por otra parte, en **Rusia y en Ucrania** se produjeron protestas de mujeres familiares de soldados, con demandas de su desmovilización y retorno. En Rusia, el reclamo tomó más visibilidad a partir de la participación de una treintena de mujeres en una marcha en Moscú en noviembre del Partido Comunista, en la que visibilizaron sus demandas de retorno de sus familiares movilizados para la guerra, aunque especificando que no se oponían a esta. Según medios, tras ese acto, cientos de mujeres se habrían organizado a través de redes sociales en torno a esta demanda.[44] En diciembre el canal de Telegram *Put Domoy* ("El camino a casa"), creado en septiembre, contaba con 35.000 miembros. Las autoridades rusas habrían evitado medidas como hostigamiento o encarcelamiento de las participantes, según análisis, dado que buena parte de ellas procedían de posiciones de defensa del Kremlin.[45] Algunas de sus participantes señalaron que se trataba de un movimiento heterogéneo, con opiniones diferentes respecto a la guerra, pero que la falta de respuesta del Kremlin a sus peticiones habría incrementado las opiniones contrarias a esta.[46] Las familiares de soldados vinculadas a *Put Domoy* llevaron a cabo diversos actos y acciones, como envío de cartas, colocación de adhesivos y algunas protestas en la calle. En septiembre de 2022 Rusia emitió un decreto de movilización, que afectó a decenas de miles de hombres –hasta 300.000, según algunos medios de comunicación. Las autoridades no permiten su desmovilización ni han establecido un sistema de rotación, lo que obliga a los hombres movilizados a permanecer en el frente de guerra. Las autoridades rusas denegaron permisos para la organización de movilizaciones de protesta, incluyendo con alegaciones de restricciones por la pandemia de la COVID-19. A su vez, para contrarrestar a *Put Domoy*, el Gobierno ruso estaría promoviendo dos movimientos de mujeres pro-

41. Kostava, Natia y Sophia Farion, "GNWP Reports from Istanbul, Türkiye: 'Women's Networks WIN Together' Regional Conference on Networks across Women Peacebuilders and Mediators in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia", GNWP, 24 de agosto de 2023; OSCE, "OSCE brings together women peacebuilders and mediators from Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia to discuss common priorities and advocacy strategies", OSCE, 12 de febrero de 2024.
42. GPPAC, "Beyond borders in Central Asia: Why is women's involvement in regional peacebuilding crucial?", *GPPAC*, 4 de marzo de 2024; GPPAC, "Women Leading Peace. Raising women's voices in peace processes in Central Asia", GPPAC, 2023.
43. Network of Women Mediators of South Caucasus, *Is there a key to conflict resolution in the South Caucasus?*, NWMSC, 2023.
44. Vitkine, Benoît, "Russian women's groups protest against 'endless mobilization' of soldiers", Le Monde, 23 de noviembre de 2023.
45. Sauer, Pjotr, "'We're tired of being good girls': Russia's military wives and mothers protest against Putin", *The Guardian*, 25 de diciembre de 2023.
46. Ibid.

guerra y pro-régimen, *Katyusha y Zhenskoe Dvizhenie.*[47] Por otra parte, en Ucrania también se produjeron algunas protestas de mujeres familiares de militares, en demanda de relevos y su retorno.

En el caso de **Siria**, cabe destacar que en junio de 2023, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la creación de un organismo específico destinado a esclarecer el destino y de miles de personas desaparecidas en Siria desde el inicio del conflicto armado en 2011. La Institución Independente para Personas Desaparecidas fue establecida por la resolución 301/77 gracias a la iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil siria. Entre ellas, entidades como Families for Freedom, Caesar Families y Syrian Campaig con una implicación destacada de mujeres en las tareas de activismo e incidencia, dado que la gran mayoría de las personas desaparecidas son hombres. Se estima que más de 155.000 personas habrían desaparecido en el marco del conflicto armado sirio entre marzo de 2011 y agosto de 2023, la inmensa mayoría atribuidas al régimen de Bashar al-Assad (más de 135.000, incluyendo 8.500 mujeres), mientras que el resto sería responsabilidad de grupos armados.

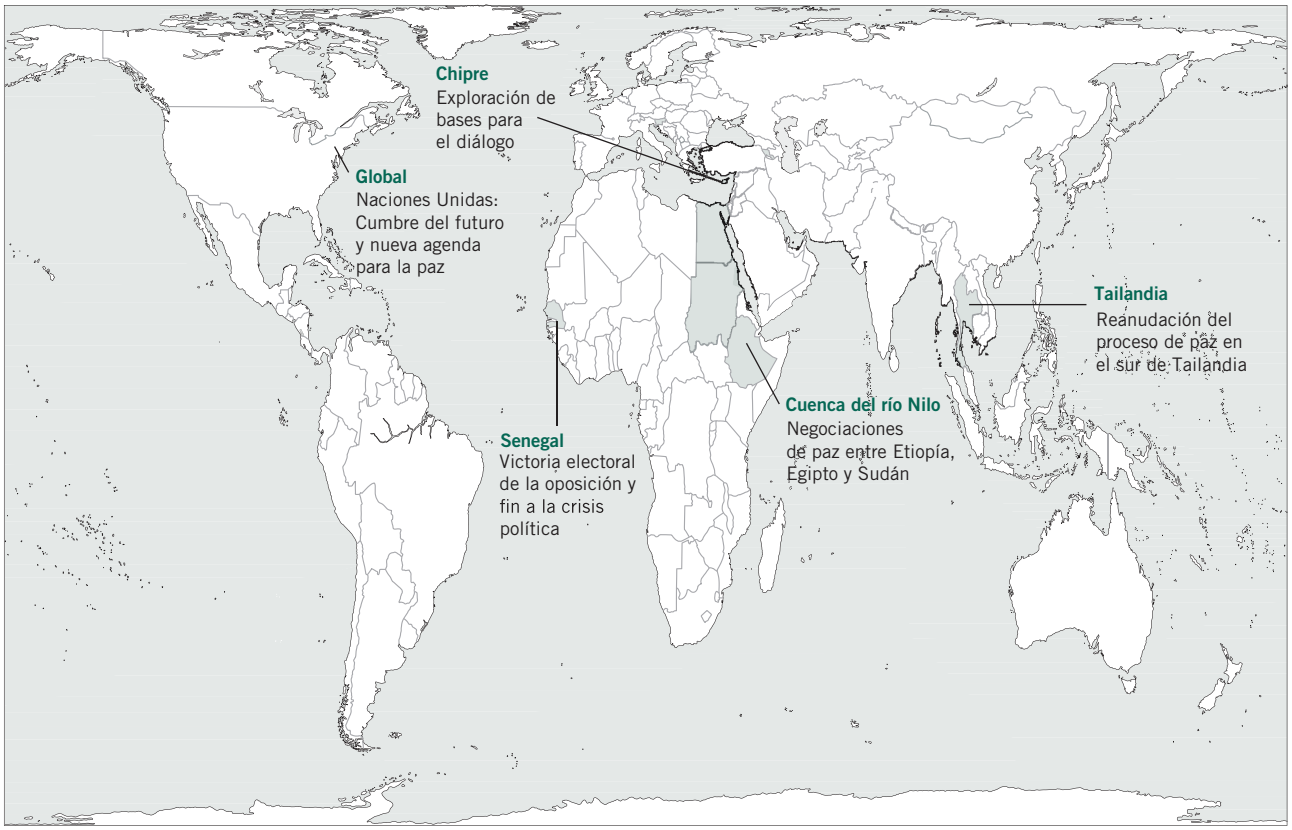
47. The Moscow Times, "Authorities Fund Kremlin-Loyal Women's Movements to Foil Protesting Families of Mobilized Soldiers – Holod", The Moscow Times, 26 de diciembre de 2023.

4. Oportunidades de paz

Tras analizar el año 2023 en materia de conflictividad y construcción de paz,[1] la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades de paz identificadas hacen referencia a la reanudación de los contactos entre Etiopía, Egipto y Sudán sobre la gestión de las disputas históricas en relación con la cuenca del Nilo; el impacto que pueda tener la victoria de la oposición en los comicios presidenciales de marzo de 2024 en la crisis política que ha atravesado Senegal en los últimos años; la reanudación del proceso de diálogo en el sur de Tailandia tras casi una década de Junta Militar (2014-2019) o de un Gobierno surgido de la misma (2019-2023); las opciones de diálogo respecto del estatus de la isla dividida de Chipre a partir del acercamiento entre Grecia y Türkiye en 2023 o del nombramiento de una enviada personal del secretario general de la ONU, con el mandato de llevar a cabo buenos oficios para explorar bases de acuerdo para avanzar en la resolución del conflicto; o el potencial de la llamada Cumbre del Futuro –convocada por el secretario general de la ONU para 2024– para impulsar el multilateralismo, la gobernabilidad de crisis globales, la construcción de paz o la agenda de mujeres, paz y seguridad.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. **Oportunidades de paz**



1. El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2023 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2024.

4.1. ¿Esperanzas de paz en la Cuenca del río Nilo?

El río Nilo ha sido epicentro de disputas en el Cuerno de África y África del Este durante décadas.[1] Históricamente, la cuenca del Nilo se ha visto dominada por políticas unilaterales y de exclusión por parte de Egipto y Sudán, quienes a su vez han utilizado la herencia colonial para justificar su monopolio sobre la utilización del recurso hídrico compartido, en lugar de analizarlo como un ecosistema complejo y frágil ante la gravedad de la emergencia climática existente. La construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés) en el cauce del Nilo Azul, afluente del Nilo en territorio etíope, proyecto emprendido por Etiopía desde 2011, ha exacerbado la situación y el clima de tensión entre Etiopía y Egipto, y en menor medida, Sudán. No obstante, en 2023 se reanudaron los contactos directos entre los tres países, lo que podría significar una oportunidad para empezar a sentar las bases de la resolución de este contencioso histórico. Aunque el contexto regional no contribuye al optimismo, debido a la escalada de las tensiones entre Etiopía y Somalia y entre Eritrea y Etiopía, así como los diferentes conflictos armados abiertos –en las regiones etíopes de Oromiya y Amhara, la devastadora guerra en Sudán, la denuncia de genocidio en curso por parte de Israel en Gaza, con consecuencias directas en Egipto– este mismo deterioro puede ser una oportunidad que empuje a estos tres países a avanzar en la resolución de un contencioso que requiere de cooperación entre ellos.

En los últimos años han proliferado las iniciativas de cara a reducir la tensión entre los tres países. No obstante, las partes no sólo no se ponen de acuerdo sobre un resultado, sino que ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre el mecanismo de mediación. Egipto prefiere internacionalizar la cuestión mientras que Etiopía prefiere la mediación regional de la UA. Egipto y el Sudán de Al Burhan quieren un acuerdo jurídicamente vinculante que repercuta en la forma en que Etiopía llene la presa en tiempos de sequía, lo que es considerado inaceptable por Etiopía. En 2015 los líderes de los tres países firmaron la Declaración de Principios del GERD, que destacaba su compromiso en cooperar y en resolver pacíficamente sus diferencias, pero sin resultados hasta la fecha. A finales de 2019, los tres países reanudaron las conversaciones con la observación de EEUU y el Banco Mundial (BM), aunque en 2020 dicha iniciativa fue rechazada por Etiopía argumentando que EEUU y el BM estaban incumpliendo el marco de imparcialidad en la observación al proponer medidas que favorecían a El Cairo. Durante 2020 se unieron a la observación la UE y Sudáfrica (como país que ostenta la presidencia de la UA). La UA tomó el liderazgo en la facilitación del diálogo. Sin embargo, las conversaciones tripartitas facilitadas por la UA permanecieron estancadas desde 2021, y también fracasó la iniciativa de Abu Dhabi de 2022.

La escalada de la tensión se evidenció en 2022 cuando Etiopía anunció haber completado la tercera fase del llenado del embalse y el inicio de producción de energía hidráulica de forma unilateral, lo que provocó la reacción de Sudán y de Egipto. Este último amenazó a Etiopía con poner en marcha todas las medidas a su alcance para frenar este proceso y protestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero y julio de ese año por la decisión etíope, y responsabilizó a Etiopía de cualquier impacto que esta situación pudiera tener en Egipto. No obstante, después de meses de parálisis, en los márgenes de la Cumbre de Estados Vecinos de Sudán celebrada en El Cairo el 12-13 de julio de 2023, con el objetivo de contribuir a la promoción de la paz en lo relativo a la inestabilidad que afecta Sudán, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, se reunieron el 13 de julio por primera vez desde la cumbre de Sochi de 2019. Hicieron un comunicado conjunto en el que acordaron reiniciar las conversaciones sobre el GERD, con el objetivo de llegar en cuatro meses a un acuerdo final sobre el llenado y la gestión de la presa, lo que fue considerado como un anuncio histórico.[3] El pacto se produjo después de que Etiopía prometiera garantizar que Egipto y Sudán recibieran suficiente flujo de agua durante el cuarto llenado anual, que podría durar hasta septiembre. Así, acordaron reanudar las conversaciones directas de cara a alcanzar un acuerdo. Sin embargo, en las cuatro rondas negociadoras celebradas desde entonces (27-28 de agosto, El Cairo; 23-24 de septiembre, Addis Abeba; 23-24 de octubre, El Cairo; 17-19 de diciembre, Addis Abeba) las partes fracasaron sin conseguir avances en las conversaciones.[4] En septiembre, dos semanas después de la celebración de la primera ronda, el primer ministro etíope anunció haber llevado a cabo el cuarto y final llenado del embalse, decisión calificada como unilateral e ilegal y condenada por Egipto. Egipto y Sudán insistían en llegar primero a un acuerdo vinculante con Etiopía respecto del llenado y funcionamiento de la presa para garantizar el flujo continuo de agua del río Nilo.

En 2022 Etiopía anunció que había empezado a producir electricidad. Así, en febrero de ese año la presa produjo electricidad a través de su primera turbina y la entregó a la red a una velocidad de 375 MW, y en agosto de ese mismo año se puso en servicio una segunda turbina de 375 MW, aunque se preveía la instalación de otras 11 turbinas con una producción de 400 MW cada una.[5] No obstante, la red de Etiopía no está lo suficientemente desarrollada como para absorber la capacidad adicional que puede producir el GERD, que según análisis, se elevaría a una capacidad instalada de 5,15 GW (16.000 GW/hora al año). Las redes de transmisión y distribución son inexistentes en la mayor

2. Véase "La Cuenca del Nilo: cooperación o conflicto" en el capítulo 5 (Escenarios de Riesgo) en Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2021.
3. Addis Standard, "Ethiopia, Egypt agree to finalize GERD filling, rules of operations agreement in four months", *Addis Standard*, 13 de julio de 2023.
4. Reuters, "Egypt says talks over Grand Ethiopian Renaissance Dam have failed -statement", *Reuters*, 20 de diciembre de 2023.
5. BBC, "Ethiopia starts generating power from River Nile dam", *BBC*, 20 de febrero de 2022; Africanews, "Ethiopia announces that second turbine in GERD is in operation", *Africanews*, 11 de agosto de 2022.

parte del país o se encuentran en fase de construcción y faltan enlaces de alto voltaje adecuados con sus vecinos para respaldar las exportaciones de electricidad.[6] Más allá de los componentes técnicos, el proyecto requeriría cooperación e integración entre las economías vecinas, cosa que por el momento no está sucediendo. Además, un elemento primordial es que no se ha realizado ningún estudio de impacto ambiental creíble sobre la presa, pese a la gran retención de sedimentos que genera, en un momento en el que los impactos negativos de la acción humana sobre el clima son cada vez más evidentes.[7]

Por otra parte, los tres países se están viendo sometidos a situaciones de inestabilidad y conflicto y dinámicas regionales de división y creación de bloques.[8] El deterioro de la situación de seguridad en Sudán y Etiopía durante 2023, así como la guerra en Gaza, se han convertido en elementos de distracción para los esfuerzos de negociación de los tres países. Además, las partes han ahondado en ejes de disputa. Egipto ha negociado con el Gobierno de Somalia durante 2023 el establecimiento de una base militar en el país.[9] Aunque se prevé que la base sea un campo de entrenamiento para el Ejército somalí, será a la vez una base para el Ejército egipcio en Somalia, desde donde se desarrollarán actividades de los servicios de seguridad de Egipto (GIS) como puesto de avanzada sobre la vecina Etiopía ante una hipotética ofensiva militar, quien vio con preocupación la construcción de esta base militar. Según análisis, Egipto quería que esta base se estableciera en Puntlandia, pero los sucesivos gobiernos locales de Puntlandia se negaron, viendo en esta base un potencial foco de inestabilidad por sus implicaciones regionales. En este sentido, la respuesta etíope no se hizo esperar y el 1 de enero de 2024 Etiopía alcanzó un memorando de entendimiento con Somalilandia –que como región autoproclamada independiente de Somalia con un estatus motivo de disputa, no tiene capacidad legal a nivel internacional para decidir sobre su territorio–[11] por el que Etiopía supuestamente reconocía la independencia de Somalilandia a cambio de la cesión de parte de su territorio.[11] La oferta de Etiopía de reconocimiento de Somalilandia a cambio de un arrendamiento de más de 20 kilómetros de la costa de Somalilandia para darle acceso portuario y naval en el Golfo de Adén a Etiopía provocó un nuevo enfrentamiento diplomático entre Somalia y Etiopía, aliados de conveniencia en la lucha contra al-Shabaab. En paralelo, en la actual guerra civil sudanesa, Egipto, Eritrea, Sudán del Sur y Somalia apoyan al general de las Fuerzas Armadas de Sudán Al Burhan,[12] mientras que Etiopía y EAU respaldan a su rival Hemedti, líder de la fuerza paramilitar Rapid Support Forces, lo que dibuja nuevas líneas de división a nivel regional sobre las ya existentes.[13] Aunque Egipto cuenta con el apoyo de la mayoría de la Liga Árabe, lo que se puso de manifiesto en la declaración de Jeddah tras la cumbre de la Liga Árabe de mayo de 2023 –en la que condenaron el llenado unilateral y exigieron al Consejo de Seguridad de la ONU una mayor implicación en la cuestión– las presiones sobre Etiopía no surtieron efecto.

Tras el fracaso de las cuatro rondas tripartitas entre agosto y diciembre de 2023, no hay previstos a corto plazo nuevos contactos de cara a la resolución del conflicto. No obstante, a medida que el GERD entre en pleno funcionamiento y las aguas del Nilo se vuelvan aún más susceptibles al cambio climático, la disputa podría volverse aún más importante para los tres países y la región en general, por lo que la negociación política será imprescindible. La inestabilidad en Etiopía y ahora Sudán y Gaza ha sido claramente una distracción de los esfuerzos de negociación, permitiendo a Etiopía continuar sin obstáculos para establecer el GERD como un hecho cada vez más inamovible sobre el terreno. A principios de 2024 Etiopía anunciaba que la presa ya estaba completada en un 94%.[14] El hecho de que el estatus quo sobre el terreno haya cambiado sugiere que las tres partes en conflicto necesitan impulsar las negociaciones con un nuevo mandato, o al menos una nueva actitud más científica y menos política y confrontacional, basada en la realidad de que el GERD no va a desaparecer, según diversos análisis.[15] Egipto debería dejar atrás su política de amenazas y empezar a estudiar los aspectos positivos del GERD. Por el contrario, Etiopía debería ser menos unilateral en su gestión de la presa y más receptiva a las necesidades de Egipto y Sudán de tener garantías sobre su vital suministro de agua. Etiopía es consciente de que el llenado de la presa ha llegado a un punto en el que cualquier amenaza de acción militar para dañarla es totalmente improbable ya que provocaría la inundación de Sudán, por lo que la realidad sobre el terreno está forzando una negociación favorable a sus intereses. No obstante, uno de los objetivos y argumentos iniciales de Etiopía para animar a las partes a apoyar el GERD como era la exportación de energía y la gestión ordenada de las aguas del río Nilo en favor de la región ha quedado aplazada y sometida a las decisiones etíopes. El GERD puede convertirse en un proyecto *de elefante blanco*,[16] similar a las presas INGA I, II y el proyecto de INGA III en RDC, de no utilizar y desarrollar todo su potencial. El GERD se ha construido en un momento en que se ha demostrado que estos megaproyectos pueden ser peligrosos para cuencas como la del Nilo, que es frágil, especialmente a la luz del creciente impacto del cambio climático.

6. Woldemariam, Yohannes y Genevieve Donnellon-May, "The politics of the Grand Ethiopian Renaissance Dam", *Climate Diplomacy*, 2 de febrero de 2024.
7. Ibid.
8. Véase el apartado Cuerno de África en el capítulo 2 (Tensiones).
9. Qoobey, Jibril, "INFORMATION: Egypt is establishing a military base in central Somalia", *Idilnews*, 16 de agosto de 2023.
10. Somalilandia sigue siendo oficialmente parte de la República de Somalia, aunque el Gobierno central no tiene capacidad de control sobre Somalilandia desde 1991 y la región reivindica su estabilidad y democracia (con la coexistencia de instituciones políticas de tipo occidental con instituciones tradicionales) en comparación con la vecina Somalia.
11. Faisal, Ali, "Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports", *The Guardian*, 1 de enero de 2024.
12. ADF, "Al-Burhan Tries Shuttle Diplomacy to Achieve What Has Failed Militarily," *ADF*, 3 de octubre de 2023.
13. Al Jazeera, "Leader of Sudan's RSF visits Ethiopia in rare foreign trip as war rages", *Al Jazeera*, 28 de diciembre de 2023.
14. Actaç, Tufan, "Ethiopia completes 94% of controversial Renaissance Dam", *Anadolu Agency*, 5 de enero de 2024.
15. Fabricius, Peter, "GERD is a fait accompli, so it's time to get real", *ISS*, 28 de abril de 2023.
16. Concepto utilizado en arquitectura en la que popularmente se le denomina a una construcción no terminada aquella que por sus altos costos es difícil de mantener y se encuentra en desuso, y que pueden ser focos de corrupción, característicos del África de los años sesenta y setenta.

4.2. Senegal: La victoria de la oposición en las elecciones presidenciales parece poner fin a la crisis política en el país

Tras tres años de tensiones entre el Gobierno de Senegal, presidido por Macky Sall, y la oposición, que abrieron una importante crisis política, el país celebró el 24 de marzo de 2024 los comicios presidenciales que dieron como ganador al líder opositor, Bassirou Diomaye Faye. De este modo, Senegal parece cerrar uno de los capítulos más difíciles y controvertidos de su historia política, abriendo paso a un nuevo Ejecutivo que afronta importantes retos políticos, económicos y sociales.

El origen de la crisis política en el país se remonta al año 2019, cuando Ousmane Sonko, un joven proveniente de la región sureña de Casamance, se presentó a las elecciones liderando el partido Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF por sus siglas en francés). Destaca por su programa político anticolonialista, en donde critica el control económico que ejerce Francia y promete mayor soberanía, eliminar el franco CFA y renegociar los acuerdos mineros y petrolíferos. Sonko quedó tercero en la contienda, pero su figura creció en todo el país. Posteriormente, en febrero de 2021 Sonko fue acusado de violación y detenido, provocando que sus seguidores tomasen las calles al considerar que se trataba de un movimiento para anular su participación en la carrera presidencial. Durante 2023, Sonko, si bien fue absuelto del cargo de violación, fue condenado a dos años de prisión por "corromper a la juventud", lo que le inhabilitaba de facto para las elecciones presidenciales. Posteriormente el Gobierno disolvió el PASTEF. Todo ello motivó nuevas movilizaciones y protestas en el país que fueron duramente reprimidas. Este aumento de la tensión hizo que el presidente Macky Sall anunciase que renunciaba a presentarse a la reelección, en lo que hubiese representado su tercera candidatura a la presidencia. Este tema había sido uno de los elementos centrales de la movilización de la oposición, que acusaban a Sall de violar la Constitución, ya que esta solo permite dos mandatos.

En tan solo 11 días el candidato opositor Bassirou Diomaye Faye pasó de estar en prisión a ganar las elecciones y ser nombrado el presidente más joven de la historia de Senegal

En medio de la crisis política, tres semanas antes de la fecha de la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero de 2024, Sall anunció que los comicios se pospondrían por un período no especificado, siendo la primera vez en la historia del país que se posponía una votación presidencial. Sin embargo, el 5 de febrero, el Parlamento de Senegal aprobó retrasar las elecciones presidenciales hasta el 15 de diciembre en un caótico proceso de votación que tuvo lugar después de que los legisladores de la oposición fueran expulsados por las fuerzas de seguridad de la Cámara cuando intentaban bloquear el proceso de votación. Asimismo, el Parlamento aprobó la extensión del mandato de Sall, que debía finalizar el 2 de abril, hasta la celebración de las nuevas elecciones. La decisión provocó fuertes manifestaciones de protesta en varios puntos del país. El Gobierno restringió el acceso a Internet. El aumento de las protestas y de la crisis política en el país generó que el bloque regional de África Occidental (CEDEAO) y otros países instasen a Sall a revertir la decisión.

Posteriormente, el 15 de febrero, en una decisión histórica, el Consejo Constitucional de Senegal anuló un decreto presidencial emitido por el mandatario saliente para posponer las elecciones presidenciales, dictaminando que el artículo 103 de la Constitución prohíbe alterar el número o la duración del mandato presidencial. El Consejo determinó que el hecho de que el presidente Sall permaneciera en el poder después de que finalizara su mandato el 2 de abril constituiría una violación de la Carta Magna. Asimismo, el Consejo reconoció que si bien no sería posible organizar las elecciones el 25 de febrero, como estaba previsto inicialmente, dio la orden de organizar las elecciones lo antes posible. Al respecto, 15 de los 20 candidatos que fueron aprobados para presentarse a las elecciones presidenciales, solicitaron que la nueva votación se celebrase a más tardar el 2 de abril, día que finalizaría oficialmente el mandato de Sall. El documento fue firmado por algunos de los principales contendientes, incluido el candidato opositor detenido Bassirou Diomaye Faye y el ex alcalde de Dakar Khalifa Sall, pero no por el primer ministro Amadou Ba, candidato oficialista.

En respuesta a la resolución del Consejo, Sall instó a un diálogo nacional para acordar una fecha para celebrar las elecciones, anunciando que de no lograrse, solicitaría al Consejo que encuentre su reemplazo cuando finalice su mandato el 2 de abril. El diálogo nacional se celebró con la asistencia de diversos líderes civiles, políticos y religiosos, pero fue boicoteado por casi todos los candidatos presidenciales. El mismo acordó celebrar la votación el 2 de junio. La propuesta fue nuevamente rechazada por el Consejo Constitucional, anunciando la convocatoria para los comicios primero para el 31 de marzo, y posteriormente para el 24 de marzo, con el fin de no coincidir con la Semana Santa. De este modo, los candidatos aprobados para presentarse a los comicios tendrían 17 días para hacer campaña, en lugar de los 21 previstos normalmente por el código electoral. El Consejo también dictaminó que no se podía revisar la lista de 19 candidatos aprobados, entre los cuales no figuró el líder opositor Sonko ni Wade. Con esta decisión se puso fin a la crisis electoral en al país.

Paralelamente, en un intento por reducir la crispación política, Sall propuso un proyecto de ley de amnistía general para los manifestantes políticos arrestados desde 2021 durante la crisis política que, según algunos grupos de derechos humanos, podrían ser más de mil personas. Entre ellos, Sonko, encarcelado desde julio por "incitación a la insurrección" y sin posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales, y el candidato presidencial suplente de su partido, Bassirou Diomaye Faye, también en prisión, pero autorizado como candidato presidencial. El proyecto de ley de amnistía fue aprobado en el Parlamento senegalés por 94 votos contra 49. Los críticos denunciaron que el proyecto de ley abre la puerta a la impunidad, ya que se incluyen en el mismo a las fuerzas de seguridad, responsables de la muerte de unas 60 personas durante las protestas. El Gobierno de Sall, sin embargo, sostuvo que la amnistía permitiría al país salir de una crisis política de tres años de duración. El Ministerio de Justicia afirmó que corresponderá a un juez decidir quién se beneficia de la ley. Una semana después de la aprobación de la norma, Ousmane Sonko y Bassirou Diomaye Faye, fueron liberados de la prisión de Camp Manuel, en Dakar, generando que miles de personas salieran a las calles a celebrarlo.

Tal y como había determinado el Consejo Constitucional, el 24 de marzo de celebraron las elecciones presidenciales en el país. Bassirou Diomaye Faye, mano derecha de Sonko, se presentó en representación del partido PASTEF. La jornada fue pacífica y contó una alta participación. Más de 7 millones de personas estaban registradas para votar en un país de aproximadamente 17 millones de habitantes. Los resultados dieron la victoria a Faye con un 54,28% de los votos, evitando así la celebración de una segunda ronda. Su principal rival, Amadou Ba, candidato de la coalición Benno Bokk Yakaar (BBY) que contaba con el respaldo del presidente saliente Sall, obtuvo el 35,47% de los votos emitidos. El resto de los candidatos no obtuvieron ninguno más del 3%, reflejando la polarización en el voto. Ba y Sall admitieron la derrota, felicitaron a Faye y lo nombraron ganador. Esta es la cuarta transferencia democrática de poder en Senegal desde que se independizó de Francia hace más de seis décadas.

En tan solo 11 días Faye pasó de estar en prisión a ganar las elecciones y ser nombrado el presidente más joven de la historia de Senegal con 44 años. Tras tomar posesión como presidente, en su primera acción en el cargo, nombró el 2 de abril a Ousmane Sonko como primer ministro, quien anunció que presentaría a Faye una lista de nombramientos ministeriales para su aprobación.

El nuevo Gobierno se enfrenta ahora a importantes retos, empezando por superar la crisis política en el país y hacer frente a la deteriorada situación económica, con una elevada tasa de desempleo y un enorme incremento migratorio. En este escenario, Faye ha prometido luchar contra la corrupción y reformar la economía, así como mejorar el control de Senegal sobre sus recursos naturales mediante la promoción de empresas nacionales, renegociar los contratos de petróleo y gas e introducir una nueva moneda. En política exterior, ha anunciado la reforma de la CEDEAO, después de las diferentes crisis abiertas entre el organismo con múltiples países de la región: Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger (véase el apartado sobre Sahel Occidental). Sin embargo, analistas senegaleses sostienen que la falta de una mayoría en el Parlamento de Senegal y las condiciones financieras impuestas por el FMI podrían impedir el desarrollo de su programa. De hecho, Faye tuvo que dar marcha atrás en su promesa de crear una moneda nacional, anunciando que primero buscará reformar la moneda regional CFA, compartida entre 14 naciones de África occidental y central.

4.3. La reanudación del proceso de paz en el sur de Tailandia tras una década de autoritarismo

En el sur de Tailandia, las delegaciones negociadoras del Gobierno y del grupo armado de oposición BRN se reunieron en febrero de 2024 en Kuala Lumpur tras un impasse de 12 meses en el proceso de paz. Posteriormente, a finales de febrero y a principios de marzo –y se esperaba que lo hicieran nuevamente a finales de abril–, los equipos técnicos se reunieron para concretar los compromisos asumidos por ambas partes. Aunque oficialmente no trascendieron detalles sobre los acuerdos alcanzados en la reunión, algunas voces señalaron que ambas partes están negociando y desarrollando una hoja de ruta (denominada oficialmente Plan Global Conjunto hacia la Paz) que se centra principalmente en dos cuestiones: por un lado, la reducción de los niveles de violencia en el sur del país y, por otra parte, las consultas públicas con actores políticos, sociales y religiosos relevantes y representativos en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) para abordar las soluciones políticas al conflicto y las cuestiones sustantivas de la negociación, como la forma de gobernanza en el sur del país, o aspectos relacionados con la identidad, la religión, la educación, el modelo económico o los derechos humanos. Al finalizar la ronda de negociación de febrero –la séptima desde el inicio del proceso de paz en 2013–, el facilitador del diálogo en nombre del Gobierno de Malasia, Zulfiki Zainal Abidin, realizó una rueda de prensa acompañado de los jefes de los paneles negociadores del Gobierno y el BRN en la que declaró que al acuerdo entre las partes suponía un avance significativo y un punto de inflexión importante en el proceso de paz. A pesar de que un buen número de voces han identificado una serie de importantes obstáculos al proceso de diálogo y se muestran escépticos sobre el futuro del mismo, actualmente hay varios factores que permiten albergar ciertas esperanzas sobre la resolución de un conflicto que se remonta hasta principios del siglo XX –concretamente, al acuerdo fronterizo de 1909 entre el Imperio Británico y el entonces Reino de Siam que incluía a las tres provincias meridionales de mayoría musulmana en el territorio de lo que hoy es Tailandia– y en el que, solamente desde su reactivación en 2004, más de 7.500 personas han muerto y más de 14.000 han resultado heridas.

En primer lugar, cabe destacar que la ronda de negociación del mes de febrero no solamente puso fin a la parálisis del proceso de diálogo, sino que fue la primera tras casi una década de Junta Militar (2014-2019) o de un Gobierno surgido de la misma (2019-2023). De hecho, la práctica totalidad del proceso de negociación –se inició en 2013, poco antes del golpe de Estado de 2014 que impuso la mencionada dictadura– ha transcurrido bajo la dirección del país de las Fuerzas Armadas, por lo que existen expectativas de que el primer gobierno civil en la última década tenga una aproximación política distinta al proceso de negociación y a las opciones de resolución política del conflicto armado. En este sentido, es ilustrativo señalar que el jefe negociador del BRN, Anas Abdul Rahman, señaló en febrero que tenía expectativas de logar una paz duradera con el nuevo Gobierno de Srettha Tahvisin, que tomó posesión del cargo en septiembre de 2023 tras un largo proceso de negociación entre partidos después de las elecciones de mayo de 2023. Poco más tarde, en noviembre, el nuevo Ejecutivo designó como jefe del panel negociador a Chatchai Bangchuad, vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional y el primer civil en desempeñar el cargo.

En segundo lugar, el Gobierno de Malasia parece estar dispuesto a jugar un papel más proactivo en la facilitación del diálogo entre el Gobierno y el BRN. Cabe destacar que, según algunos observadores, Malasia no solamente ha ejercido la facilitación del diálogo desde 2013, sino que históricamente ha brindado apoyo al movimiento nacionalista patani y ha albergado a algunos dirigentes históricos de las distintas insurgencias que han operado en las últimas décadas en el sur de Tailandia, por lo que Kuala Lumpur tendría cierta ascendencia sobre dichos grupos armados. La toma de posesión del cargo en noviembre de 2022 del nuevo primer ministro malasio Anwar Ibrahim generó importantes expectativas, confirmadas por sus visitas menudeadas a Tailandia y apelaciones directas a ambas partes para avanzar en una solución política que respete la integridad territorial de Tailandia y a la vez permita la pervivencia de la identidad patani a través del establecimiento de alguna fórmula de autonomía o autogobierno en el sur del país. En sintonía con el relanzamiento de las negociaciones que estaría buscando Kuala Lumpur, en enero de 2023 el Gobierno malasio designó a un nuevo mediador, Zulfiki Zainal Abidin, y poco después, en febrero de 2023, anunció que ambas partes acordaron el denominado "Plan Global Conjunto hacia la Paz", una suerte de hoja de ruta compartida para lograr un acuerdo de paz hacia finales de 2024. Además, el facilitador del proceso de negociación también reveló que el BRN habría aceptado la participación en las conversaciones de paz de otros grupos armados que operan en el sur del país, una declaración que, aunque posteriormente no se ha concretado públicamente, parecía denotar buena voluntad del BRN hacia el proceso de negociación. Cabe recordar que, entre 2013 y principios de 2019, el Gobierno estuvo negociando con MARA Patani, una organización paraguas que agrupaba a las distintas insurgencias que históricamente habían operado en el sur del país.

El tercer aspecto que permite albergar ciertas expectativas en el proceso de diálogo es que a principios

de marzo de 2024, por primera vez se hizo público un comunicado de las cuatro personas expertas en procesos de paz que, desde 2019 y a petición de ambas partes, han observado y acompañado las negociaciones, tanto en su dimensión oficial y como también en las conversaciones informales y exploratorias entre las partes. Las cuatro personas observadoras, de nacionalidad tailandesa, británica, alemana y noruega, hicieron público el comunicado para destacar la importancia y significación de los compromisos logrados y para poner en valor la determinación de las partes en alcanzar un acuerdo político a través del diálogo. Desde el inicio del proceso de diálogo en 2013, tanto MARA Patani como posteriormente el BRN habían exigido un acompañamiento y observación internacional del proceso para dotarlo de mayor credibilidad y garantías. Sin embargo, el Gobierno siempre se había mostrado muy reacio a aceptar cualquier formato de acompañamiento de las negociaciones por temor a que el conflicto pudiera internacionalizarse. Según el centro de investigación International Crisis Group[17], tras varios años de contactos exploratorios entre el Gobierno y el BRN auspiciados por el Centro del Diálogo Humanitario, en noviembre de 2019 –una vez habían finalizado las negociaciones entre Bangkok y MARA Patani– ambas partes suscribieron la llamada Iniciativa de Berlin, en la que se establecen el marco y los principios de una negociación directa entre el Gobierno y el BRN. En la siguiente ronda de negociación que se celebró bajo en nuevo formato negociador (abril y mayo de 2022), ambas partes acordaron los llamados Principios Generales del Diálogo de Paz, en los que se comprometían a buscar soluciones políticas al conflicto de acuerdo con la voluntad del pueblo de Patani y también en el marco del estado unitario y la Constitución de Tailandia. Tal compromiso de las partes dio lugar a una serie de negociaciones formales e informales que desembocaron, a principios de 2023, en el "Plan Global Conjunto hacia la Paz". De los dos ejes principales de tal hoja de ruta –reducción de la violencia y exploración de opciones políticas para la resolución del conflicto– algunas voces consideran que el nuevo Gobierno civil de Srettha Tahvisin se halla en mejor posición que los anteriores gobiernos liderados por (o herederos de) la junta militar para crear las condiciones necesarias para un proceso de consulta con personas y organizaciones con representatividad y legitimidad en el sur del país sobre posibles propuestas en materia de gobernanza y autogobierno, seguridad, modelo económico, educación, cultura o religión.

Por otra parte, otros análisis se muestran más cautos respecto del futuro del proceso de paz. En primer lugar, porque las Fuerzas Armadas han tenido una relación históricamente compleja y tensa con el partido del primer ministro –Puea Thai–, hasta el punto de perpetrar dos golpes de Estado contra dirigentes de dicho partido –uno en 2004 contra el líder del partido, Thaksin Shinawatra, y otro en 2014 contra Yinluck Shinawatra, hermana de Thaksin y entonces primera ministra. Según algunos análisis, determinados sectores de las Fuerzas Armadas se oponen a la resolución del conflicto a través del diálogo y se muestran partidarios de incrementar las operaciones de contrainsurgencia. En la mayor parte de las tres provincias de mayoría musulmana todavía rigen la ley marcial y el estado de emergencia decretados en 2004, y la región cuenta con casi 3.000 puntos de control militar. Algunas voces críticas sostienen que, a pesar del carácter civil del Gobierno y de que aparentemente es el Consejo de Seguridad Nacional quien lidera el panel negociador, las decisiones operativas en el terreno siguen siendo tomadas por el Ejército.

La reanudación del diálogo entre el Gobierno y el BRN tras casi una década de Junta Militar (2014-2019) o de un Gobierno surgido de la misma (2019-2023), así como la drástica reducción de la violencia en los últimos años, ofrecen algunas perspectivas positivas de solución del conflicto armado a través de la negociación

En la misma línea, algunos análisis consideran que, más allá del poder del Ejército y de su relación históricamente tensa con el actual partido de gobierno, el actual Ejecutivo hasta el momento no ha dado muestras inequívocas de voluntad política y compromiso sólido con el proceso de paz. En este sentido, cabe señalar que Puea Thai no ganó los comicios de mayo de 2023 y que solamente pudo formar gobierno después de un impasse de tres meses y de ganarse el apoyo de partidos y senadores vinculados a las Fuerzas Armadas –en Tailandia la elección del gobierno necesita el voto conjunto de ambas cámaras, y los 250 senadores no son elegidos democráticamente, sino nombrados por la junta militar. Además, recientemente ha habido numerosas denuncias sobre la situación de derechos humanos en el sur del país y sobre la represión hacia activistas y organizaciones de la sociedad civil, lo cual reduce el llamado espacio cívico y, consecuentemente, la posibilidad de que la sociedad civil se involucre activamente en la concertación de propuestas para la resolución del conflicto (uno de los aspectos clave del proceso de diálogo). En enero de 2024, por ejemplo, Human Rights Watch declaró que el nuevo gobierno no había emprendido reformas en materia de derechos humanos y que las autoridades continuaban restringiendo los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y la reunión pacífica. También en enero, más de 30 grupos de derechos humanos y ONG del sur del país mandaron una carta abierta a las Naciones Unidas donde alegaron que los cuerpos de seguridad del Estado acosan a grupos de la sociedad civil por celebrar reuniones públicas. En junio de 2023, varias agencias de seguridad presentaron cargos contra un

17. International Crisis Group, Sustaining the Momentum in Southern's Thailand Peace Dialogue, Briefing, Asia, 19 de abril de 2022.

grupo de activistas estudiantiles que llevó a cabo un simulacro de referéndum de autodeterminación en la Universidad Príncipe de Songkla, hecho que provocó una fuerte reacción por parte de varios partidos políticos y sectores en la sociedad tailandesa.

Otro de los aspectos que generan incertidumbre respecto del proceso de diálogo es la aparente división interna en el seno del BRN entre aquellas facciones que son partidarias de priorizar la senda del diálogo y las consultas con la sociedad civil y aquellas facciones que consideran inadmisible que el Gobierno haya circunscrito los límites de la negociación a la Constitución y el Estado unitario en Tailandia y que abogan por la continuidad de la lucha armada. A modo de ejemplo, a finales de marzo de 2024, en uno de los mayores ataques coordinados en los últimos años, se registraron 44 incidentes de violencia en el lapso de una hora en las cuatro provincias sureñas (incluyendo Songkhla), que las autoridades locales atribuyeron a grupos armados que querían expresar distancia con los acuerdos alcanzados en febrero y marzo. En ocasiones anteriores en los últimos años, también se produjeron episodios de violencia significativos tras acuerdos entre las partes. Uno de los aspectos que ha generado más situaciones de impasse y bloqueo en el diálogo desde el año 2013 ha sido la falta de voluntad del BRN de reducir los niveles de violencia, o bien la incapacidad de los representantes políticos del movimiento insurgente de demostrar al Gobierno que tiene control sobre las decisiones operativas del BRN en el terreno.

En cualquier caso, cuando se cumplen 20 años del inicio (o reactivación) del conflicto armado en el sur de Tailandia, por primera vez en las últimas dos décadas parecen darse algunas de las condiciones necesarias para hallar una solución política al conflicto: la drástica reducción de la violencia en los últimos años; la superación del período de autoritarismo liderado por la Junta militar y la expectativa de que una creciente democratización del país repercuta en la negociación; una infraestructura de facilitación del diálogo estable (con mediación de Malasia, y acompañamiento y observación internacional); mayor participación de la sociedad civil en la identificación de agravios y en la propuesta de alternativas; el acuerdo entre las partes sobre los principios, mecanismos y agenda sustantiva de la negociación y, en última instancia, la constatación por parte del Gobierno y el BRN de que el uso de la lucha armada y de las operaciones de contrainsurgencia y militarización del sur del país no han sido efectivos en la consecución de sus objetivos políticos, la independencia de Patani y la erradicación de la insurgencia en el sur del país, respectivamente.

4.4. Chipre: ¿hacia una nueva oportunidad fallida u ocasión para construir vías de acercamiento?

La disputa en torno al estatus de la isla dividida de Chipre acumula décadas de negociaciones fallidas. El conflicto continúa además imbricado en tensiones multidimensionales más amplias en el Mediterráneo oriental, en torno a cuestiones como el acceso a hidrocarburos y la delimitación de zonas económicas exclusivas y fronteras marítimas, que enfrentan a Grecia y la República de Chipre, por una parte, con Türkiye y la República del Norte de Chipre, por otra, en un contexto regional y global más militarizado. En ese escenario de complejidad, convergen pese a todo algunos elementos actuales de oportunidad, de la mano de un cierto momentum generado por el nombramiento de la figura de enviada personal del secretario general de la ONU, con el fin de explorar si puede haber base de acuerdo para avanzar en el estancado proceso de resolución. No obstante, convergen también factores desfavorables de peso. Por ello, se requieren de múltiples esfuerzos locales, regionales e internacionales para generar bases para el acercamiento y la construcción de confianza.

La isla de Chipre, habitada por una mayoría griega y por población turca y otras minorías, y con una historia reciente de colonialismo británico (1878-1960) tras tres siglos bajo dominio otomano, afronta una situación de conflicto no resuelto de larga duración. Precedida de violencia paramilitar e intercomunal en los años cincuenta del siglo XX, Chipre se independizó en 1960, con una Constitución que establecía un Estado bicomunal, con reparto de poder entre las dos principales comunidades de la isla y representación con cuotas. Con ello, la carta magna descartaba dos visiones contrapuestas en la isla, la de unión a Grecia (enosis) y la de partición de la isla (taksim) con protección de Turquía, defendidas respectivamente por sectores greochipriotas y turcochipriotas. No obstante, el conflicto se intensificó tras la independencia. Medidas grecochipriotas para un Estado más unitario y violencia intercomunitaria llevaron a los representantes turcochipriotas a una salida del Gobierno en 1963, alegando falta de seguridad,[18] con lo que quedó desmoronada la frágil arquitectura de un Gobierno compartido con reparto de poder. La ONU desplegó en 1964 una misión de mantenimiento de la paz (UNFICYP), si bien la violencia continuó. Un golpe de Estado en 1974 con el objetivo de promover la unificación con Grecia, apoyado por la Junta Militar griega, desencadenó una invasión militar de la isla por Türkiye. La isla quedó dividida entre el tercio norte, bajo control turcochipriota y con tropas de Türkiye, y los otros dos tercios, controlados por la parte grecochipriota, separados por una zona desmilitarizada, conocida como la zona de amortiguación o "Línea Verde", supervisada por la ONU. Aquellas diferentes fases de violencia conllevaron graves impactos en la población civil de ambas comunidades, con víctimas mortales, desplazamiento forzado, saqueos y violencia sexual, entre otros. Por otra parte, para la RTNC y Türkiye se dio paso a un grave sesgo de la comunidad internacional en la consideración de que la República de Chipre, encarnada en el Gobierno grecochipriota sin participación turcochipriota, era la única administración legítima y reconocida internacionalmente. En 1983, la parte turcochipriota se declaró República Turca del Norte de Chipre (RTNC).

A lo largo de las décadas de isla dividida, los liderazgos de ambas partes han mantenido negociaciones, con el apoyo de Naciones Unidas, sin lograr acuerdos de resolución del conflicto. Los procesos negociadores han pivotado en torno a un horizonte de solución de federación bizonal y bicomunal para la isla, y en el pasado reciente tuvieron momentos de avances críticos, finalmente fallidos, como la propuesta de reunificación conocida como el Plan Annan, apoyado en referéndum en 2004 por la población turcochipriota pero rechazada por la grecochiopriota. Pese a ello, la República de Chipre (encarnada solo en la parte grecochipriota) ingresó ese año en la UE, mientras la parte turcochipriota quedó aislada política y económicamente, y dependiente de Turquía. Más recientemente, las negociaciones de 2015-2017 produjeron acercamientos y avances, pero quedaron rotas al no lograrse un acuerdo en la 2ª conferencia internacional de Crans-Montana de julio de 2017. En paralelo, frente al foco en las cuestiones como gobernanza y reparto de poder, propiedad, territorio, seguridad y garantías, y cuestiones relacionadas con la UE y economía, otras esferas como el esclarecimiento de la verdad, la memoria y la reconciliación han estado infraatendidas en las décadas de procesos negociadores.

Desde 2017 no se han reanudado las negociaciones formales de alto de nivel, con diálogo solo en niveles inferiores. Entre las dificultades, destaca el alejamiento de las posiciones entre las partes y la falta de confianza. La posición del liderazgo turcochipriota desde la subida al poder en 2020 de Ersin Tatar ha sido la defensa de una solución de dos Estados, apoyada por Turquía, y que entra en conflicto con el horizonte de solución de federación bicomunal y bizonal, que ha sido hasta ahora el marco de Naciones Unidas y que defiende también la parte grecochipriota. La posición turcochipriota sostiene que este último es un marco caduco, y defiende que no puede haber solución sin igualdad de soberanía y un estatus internacional igualitario. A su vez, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado ante la Asamblea General de la ONU al reconocimiento internacional de la RTNC. En este nuevo contexto de profunda dificultad ante el alejamiento entre las partes, pese a todo, han emergido algunos factores de oportunidad.

18. International Crisis Group, *An Island Divided: Next Steps for Troubled Cyprus*, Europe Report Núm. 268, 17 de abril de 2023.

Por una parte, destaca la designación de la ex ministra de Exteriores colombiana María Ángela Holguín Cuéllar como enviada personal para Chipre, con el mandato de llevar a cabo buenos oficios para buscar una base común sobre cómo avanzar en la cuestión chipriota. El propio nombramiento ponía de manifiesto la consecución de acuerdo entre las partes para ello, superando divergencias recientes.[19] Además, Holguín Cuéllar es una diplomática de larga experiencia, incluyendo como negociadora plenipotenciaria en el proceso negociador entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (2015-2016), que finalizó con acuerdo de paz. La designación de Holguín Cuéllar llega tras unos años sin una figura a ese nivel en la disputa chipriota, lo que renueva y da cierto impulso a la búsqueda de soluciones. No obstante, el propio nombramiento tiene limitaciones, y las autoridades turcochipriotas y de Türkiye insisten en que su condición era un mandato limitado a seis meses.

Desde su nombramiento, Holguín Cuéllar ha desplegado un enfoque inclusivo y participativo, con consultas con un amplio ecosistema de actores (liderazgos de las partes, negociadores, miembros de los comités técnicos conjuntos, partidos políticos, alcaldías, cámaras de comercio, periodistas, líderes religiosos, think tanks y asociaciones, incluyendo grupos de mujeres, actores internacionales involucrados en la disputa, entre otros). Análisis destacaron también la experiencia de su equipo de asesores, así como el tratar de trascender el marco binario de solución de federación vs solución de dos estados y ampliar el marco a la distinción entre paz mutuamente beneficiosa o un estatus poco sostenible.[20] En todo caso, está por ver si el creciente alejamiento de posiciones entre las partes actuará de muro o si puede haber espacio para la reanudación de un proceso negociador. Cuando menos, la labor de Holguín Cuéllar podrá haber servido para clarificar en detalle las posiciones en esta nueva etapa, necesaria para alejar el ruido de la retórica acusatoria y desgranar posibles nuevos márgenes de entendimiento.

En la longeva disputa chipriota, y pese a grandes dificultades, convergen algunos elemento de oportunidad, de la mano del nombramiento de una enviada personal del secretario general de la ONU

Aun en escenarios en que no sea posible el reinicio de las negociaciones a corto plazo, el reimpulso a explorar márgenes de base común, podría facilitar avances de mínimos, como nuevas medidas de confianza o cooperación en ciertas áreas. A inicios de 2024, el líder grecochipriota, Nikos Christodoulides, anunció nuevas medidas de confianza, incluyendo el otorgamiento de la ciudadanía para niños/as en que uno de los progenitores sea turcochipriota y otro de Türkiye. No obstante, el anuncio recibió críticas del liderazgo turcochipriota, al considerarlos derechos y no medidas de confianza. Por otra parte, las referencias de Tatar en 2024 a la necesidad de acción concreta para acabar con el aislamiento, y sus alusiones a cuestiones como vuelos directos, comercio directo y deportes indican necesidad y margen posible para nuevas medidas de cooperación y de construcción de confianza, en caso de existir voluntad y posibilidad de diálogo y acuerdos en ciertos ámbitos, algo que aún es incierto.

Por otra parte, otro elemento de oportunidad reside en el acercamiento en 2023 entre Grecia y Türkiye. Ambos países mantienen una disputa multidimensional (cuestión chipriota, delimitación de fronteras marítimas, de sus zonas económicas exclusivas, sus plataformas continentales y espacio aéreo, acceso a hidrocarburos y la disputada soberanía de diversas islas) que en los últimos años ha conllevado una mayor militarización del Mediterráneo oriental y graves momentos de crisis, como en 2020 cuando dos buques de guerra de Grecia y Türkiye colisionaron, si bien también la disputa ha sido canalizada a través de mecanismos de diálogo, con dificultades. En 2023 ambos países dieron pasos de acercamiento, que culminaron en diciembre en una reunión en Atenas entre el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan –en su primera visita al país desde 2017–, en el marco del llamado Consejo de Cooperación Grecia-Türkiye. Ambos firmaron una declaración de "buenas relaciones vecinales", no vinculante, con 10 puntos, en que se comprometieron entre otros aspectos a resolver cualquier disputa por vías pacíficas.[21] El acercamiento puede contribuir a unas relaciones regionales más distendidas. No obstante, tiene sus límites, ya que no hubo mención explícita a la cuestión chipriota, y no necesariamente repercutirá en favorecer las negociaciones chipriotas. Además, continúa la dinámica de militarización en marcha de la región y en la isla. Y, está por ver cómo repercute ese acercamiento en la seguridad humana en la región, ya que la agenda incluía esferas de securitización de la migración y el desplazamiento.

Otro elemento que podía actuar como facilitador era una cierta distensión reciente en las relaciones entre la UE y Türkiye que, a su vez, pudiera repercutir positivamente en la cuestión chipriota. No obstante, este elemento parece ya difuminarse. En las Conclusiones del Consejo de la UE de abril de 2024, la UE condiciona el fortalecimiento de la cooperación UE-Türkiye a que se reanude el proceso de diálogo chipriota y se

19. International Crisis Group, "How to Reinvigorate the UN's Mediation Efforts in Cyprus", *ICG Commentary*, 18 de Agosto de 2023.
20. Kaymak, "Erol, Reviving Peace Talks in Cyprus: Diplomatic Innovation and the New UN Envoy", SWP Comment Núm.7, Centre for Applied Turkey Studies, febrero de 2024.
21. Véase el texto completo de la declaración en Kokkinidis, Tasos, "Full Text of the Friendship Declaration Between Greece, Turkey", *Greek Reporter*, 7 de diciembre de 2023.

produzcan avances.[22] Türkiye rechazó categóricamente aceptar la estrategia de la UE de vincular el progreso de las relaciones UE-Türkiye a la cuestión chipriota.[23] Desde su elección en 2023, el líder grecochipriota ha hecho llamamientos a un papel más activo de la UE en la resolución del conflicto, incluyendo la demanda de creación de un enviado especial –por ahora descartado en la UE. No obstante, y a la vista del Consejo de la UE de abril de 2024 y las reacciones de Ankara, está por ver si la UE será un actor que aporte a la construcción de confianza y cooperación intra-chipriota o si predominarán dinámicas de confrontación Türkiye-UE.

Finalmente, actores de la sociedad civil de la isla, incluyendo organizaciones de mujeres, continúan movilizadas en favor del diálogo y promoviendo y participando en iniciativas intercomunitarias. El proceso negociador cuenta también con vías complementarias, como el diálogo entre partidos políticos (apoyado por Eslovaquia) y entre actores religiosos (con respaldo de Suecia). No obstante, la capacidad de la sociedad civil pro-diálogo de incidir en los liderazgos era limitada. Se suma, además, el legado de décadas de separación entre poblaciones y de limitado abordaje en el ámbito de la verdad, la memoria y la reconciliación. Se añaden otros retos actuales, como la creciente presión del cambio climático sobre la isla, el aumento de la desigualdad y la situación de vulnerabilidad y violencia al alza en la isla contra la creciente población migrante y solicitante de asilo, que añaden otros desafíos, y necesidades, aunque también otras vías de potencial cooperación.

En conjunto, confluyen algunos factores de oportunidad en el contexto actual, pero son limitados y tienen fuertes contrapesos de factores que alejan las perspectivas de base común para un reinicio de negociaciones que pueda resultar en acuerdo.

22. Consejo de la UE, *European Council conclusions, 17 and 18 April 2024*, 2024.
23. Ministerio de Exteriores de Turquía, *Regarding the Conclusions of the Extraordinary European Council of 17-18 April 2024*, Comunicado de Prensa Núm.63, de 18 de abril de 2024.

4.5. La cumbre del futuro y la nueva agenda para la paz de Naciones Unidas, una oportunidad para fortalecer el multilateralismo

Los primeros años de la década de 2020 han sido escenario de importantes crisis globales y cuestionamiento del sistema multilateral global. El avance del autoritarismo y el retroceso en igualdad de género en numerosos países, el agravamiento de la crisis climática, la pandemia por la COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y el genocidio en Gaza unidas a tres decenas de conflictos armados o el crecimiento exponencial del gasto militar, son algunas de las manifestaciones de esta crisis internacional. En paralelo, el cumplimiento para 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se está viendo seriamente comprometido por la falta de avances sostenidos. A modo de ejemplo, en su último informe sobre el avance de los ODS, Naciones Unidas señala que de mantenerse las actuales tendencias, 575 millones de personas seguirán en situación de pobreza extrema en 2030; desde 2005 no había una situación de hambre global como la actual y de seguir en la misma tendencia serán necesarios 286 años para cerrar las brechas de género relativas a las leyes discriminatorias. Además, con el rumbo actual 84 millones de niños y niñas seguirán sin escolarizar en 2030.[24] Sin embargo, en 2024 está prevista la celebración de la conocida como Cumbre del Futuro, convocada por el secretario general de la ONU con el objetivo de impulsar el multilateralismo y la gobernabilidad global para dar respuesta a estas crisis globales. Además, esta cumbre tiene también como objetivo dar un impulso a la consecución de los ODS, cuyo logro está en entredicho por los escasos avances.

En este contexto de crisis global, en el que además, el sistema multilateral se está viendo fuertemente cuestionado por diferentes Gobiernos y actores globales, incluyendo a través de incumplimientos flagrantes del derecho internacional y del Derecho Internacional Humanitario –el ejemplo más reciente es la campaña militar israelí en Gaza, que ha sido considerada por múltiples juristas y organizaciones de derechos humanos como un genocidio y ha sido llevada ante la Corte Internacional de Justicia por este motivo–, el secretario general de la ONU plantea el conocido como Pacto para el Futuro, documento que podría abrir una oportunidad para dar un nuevo impulso al multilateralismo. Se trata de una propuesta de agenda internacional que deberá ser refrendada por los países en la cumbre de septiembre de 2024, partiendo de su informe Nuestra Agenda Común, en el que planteaba doce compromisos para hacer frente a los retos de los próximos años. Estos compromisos habían quedado previamente establecidos con motivo de la conmemoración en 2020 con motivo del 75 aniversario del establecimiento de Naciones Unidas y hacen referencia la protección del medioambiente, la promoción de la paz y la prevención de los conflictos, garantías para la justicia y el derecho internacional, mejoras en la cooperación digital, la modernización de Naciones Unidas, la priorización de las mujeres y las niñas o la inclusión de la juventud entre otras. De forma más concreta, el Pacto para el Futuro abarcara cinco temas: Desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo; Paz y seguridad internacionales; Ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital; Jóvenes y generaciones futuras; y Transformar la gobernanza global.

En el ámbito de la construcción de la paz, cabe destacar que el secretario general presentó su propuesta de una nueva agenda de paz, en la que identifica algunos de los más importantes retos globales en materia de paz y seguridad y plantea medidas en cinco ámbitos. Varias de las medidas propuestas van encaminadas a hacer frente a cuestiones de paz y seguridad que en los últimos años han cobrado una mayor importancia en el contexto de crisis global al que se apuntó anteriormente, como la eliminación de las armas nucleares o el impulso de la diplomacia preventiva, que el secretario general vincula con un contexto de fuertes divisiones geopolíticas. Además, también se pone un gran énfasis en el refuerzo de las herramientas de prevención y se incluye el fortalecimiento de la implementación de la Agenda 2030 como una cuestión de paz y seguridad, ya que debería permitir abordar las causas profundas de la violencia y la inseguridad. Además, plantea cuestiones como las interrelaciones entre clima, paz y seguridad, así como la necesidad de repensar las operaciones de mantenimiento de la paz

En lo que respecta al fortalecimiento de la construcción de paz feminista y la agenda de mujeres, paz y seguridad, que en los últimos años se ha visto debilitada por la falta de avances y compromisos por parte de los Gobiernos y por el avance de movimientos políticos y Gobiernos misóginos que han puesto en cuestión derechos fundamentales de las mujeres, la nueva agenda de paz de Naciones Unidas podría ser una buena plataforma para fortalecer una participación activa y significativa de las mujeres y la sociedad civil en la construcción de la paz a nivel internacional. Esta agenda hace una apuesta clara por el desmantelamiento de las estructuras de poder patriarcal y por la promoción de la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones sobre paz y seguridad e identifica algunas amenazas a la paz que son claramente relevantes para las mujeres y la sociedad civil en general, como la violencia que no tiene lugar en contextos de conflicto armado, la reducción de los espacios de participación para la sociedad civil,

24. Naciones Unidas, *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planeta*, Naciones Unidas, 2023.

la emergencia climática, entre otros y además, apuesta por soluciones globales dirigidas a hacer frente a las causas profundas de la violencia y a no priorizar las respuestas securitarias.

En línea con el cuestionamiento internacional del sistema multilateral, también las instituciones responsables de la promoción de los derechos de las mujeres se han visto cuestionadas y criticadas, en un intento de frenar los avances en igualdad y reconocimiento de derechos de las últimas décadas y como parte de estrategias globales de cuestionar la legitimidad de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, en la última década el movimiento feminista global se ha fortalecido, logrando que su discurso impregne a buena parte de la opinión pública global, con hitos importantes, movilizando a cientos de miles de mujeres en cuestiones transversales como el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente derecho al aborto, la lucha contra las violencias de género, la defensa y el impulso de los derechos de las personas LGTBIQ+, y en el ámbito de la construcción de la paz, la participación de las mujeres y las agendas feministas de construcción de paz. Así, diferentes Gobiernos han calificado sus políticas exteriores como feministas, en procesos no exentos de crítica por parte de la sociedad civil por la falta de ambición, pero que dan cuenta de la capacidad de incidencia del feminismo en cuestiones de agenda internacional. En esta tensión entre los avances de movimientos políticos contrarios al orden multilateral y defensores de proyectos patriarcales y misóginos y la fortaleza del movimiento feminista, junto con la creciente institucionalización de políticas denominadas feministas, se abre una oportunidad y el marco desarrollado por el secretario general de la ONU se revela como favorable a un enfoque más inclusivo y transformador.

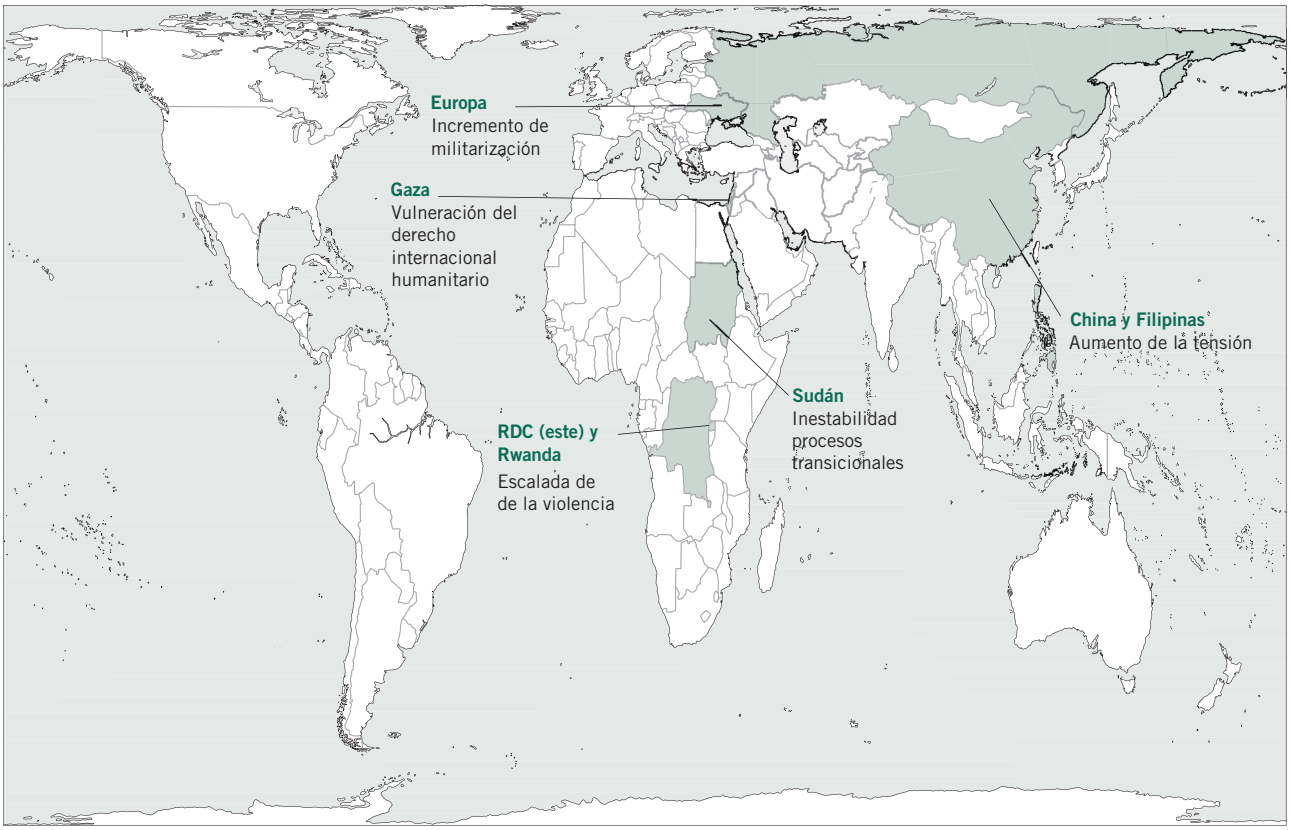
La Nueva Agenda para la Paz, así como el Pacto para el Futuro, han sido objeto de algunas críticas, por no ser lo suficientemente ambiciosos con aspectos como la crisis climática, que constituye una de las principales amenazas para la seguridad humana en el momento actual. Así, se apuntan a compromisos más bien retóricos y repetitivos, pero no a transformaciones profundas del sistema económico y militar internacional que permita revertir los cada vez más graves efectos del cambio climático. Además, también se señala que hubiera sido necesario un compromiso específico de mayor calado con los derechos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género, que quedan relativamente invisibilizados a través de un enfoque transversal. Se trata de críticas que atienden a algunas de las principales carencias de esta nueva agenda, y que deberán ser abordadas para dotar al Pacto para el Futuro de un verdadero carácter transformador que aborde en profundidad las causas de las crisis globales que amenazan el bienestar de la mayor parte de la población mundial y que pueden agravarse todavía más si se mantienen las tendencias apuntadas.

Sin embargo, la Cumbre del Futuro puede servir de revulsivo en un momento político convulso a nivel internacional si el secretario general logra aglutinar suficientes apoyos por parte de Gobiernos que deseen reforzar sus compromisos con el sistema multilateral, abordando las transformaciones pendientes y reforzando compromisos necesarios con la paz y los derechos humanos.

5. Escenarios de riesgo

A partir del análisis del año 2023 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial,[1] la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2024 o incluso a más largo plazo. Los escenarios de alerta hacen referencia a la amenaza de una nueva confrontación directa entre RDC y Rwanda cuando se cumplen 30 años del genocidio de Rwanda de 1994, hechos que marcaron la historia africana y mundial y que se convirtieron en uno de los fracasos más importantes de la comunidad internacional; al riesgo de cronificación del conflicto armado en Sudán y de un efecto contagio en la región de graves consecuencias; el aumento de la tensión política y militar entre China y Filipinas en el Mar de la China Meridional; a la grave militarización en Europa derivada del deterioro de la conflictividad y los retrocesos en el ámbito negociador en la región, como consecuencia de la invasión y guerra en Ucrania y la confrontación entre Rusia y los actores euroatlánticos; y por último, a la erosión del derecho internacional humanitario en Gaza y el futuro del orden global como consecuencia de ello.

Mapa 5.1. **Escenarios de riesgo**



1. El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2023 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2024.

5.1. Rwanda, ¿Nunca más?

Cuando se cumplen 30 años del genocidio de Rwanda de 1994, unos hechos que han marcado la historia africana y mundial y que se han convertido en uno de los fracasos más importantes de la comunidad internacional en lo concerniente a su responsabilidad de cara a garantizar la paz y la seguridad internacionales, se ha reabierto el enésimo episodio de esta guerra que padece la región de los Grandes Lagos y que enfrenta a la República Democrática del Congo (RDC) con Rwanda, a través de su aliado local, actualmente bajo la etiqueta del grupo insurgente Movimiento 23 de Marzo (M23), situación que podría llevar incluso a un enfrentamiento abierto directo entre ambos países, como ya ocurriera en 1996 y 1998.[2]

Durante poco más de 100 días, entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, alrededor de 800.000 personas, la mayoría de ellas miembros de la minoritaria comunidad tutsi y también sectores moderados de la mayoritaria comunidad hutu, que se oponían al régimen, fueron asesinadas en un genocidio planificado y patrocinado por el Estado y ejecutado por las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), las milicias Interahamwe ('aquellos que trabajan juntos', en kinyarwanda, originalmente las juventudes del partido en el poder, el MRND), y también miles de civiles que se sumaron al exterminio, organizado por los sectores más extremistas del Gobierno, el llamado Hutu Power. La ONU abandonó el país a pesar de las alertas y las atrocidades en curso. Además de las víctimas mortales, alrededor de 250.000 mujeres fueron violadas. El presidente actual, Paul Kagame, liderando la rebelión del Frente Patriótico Ruandés (FPR) desde Uganda, derrocó el régimen genocida en 1994. Kagame, que emprendió la reconstrucción física y psíquica del país, se convirtió en el líder exitoso en la lucha contra la pobreza que ha contado con el apoyo de la comunidad internacional, gracias a las ayudas recibidas, y ha conseguido en estos 30 años construirse una imagen de líder fuerte y de buen gestor que se une al clima de culpabilidad que aqueja a la comunidad internacional por no haber intervenido para poner fin al genocidio.

Estas dos cuestiones —la imagen de líder fuerte y buen gestor, y el clima de culpabilidad— han contribuido a empequeñecer e incluso justificar los crímenes cometidos por Kagame al frente del FPR para derribar al Gobierno genocida, crímenes que no fueron investigados y que causaron, según análisis, miles de víctimas mortales. Las terribles circunstancias que había vivido el país justificaban ante la comunidad internacional, sin reconocerlo abiertamente, la necesidad de un líder fuerte que hiciera frente a la terrible situación y contribuyeron a permitir que Rwanda estableciera un régimen autoritario que reprimiera y vulnerara los derechos humanos de su propia población como freno ante una posible repetición de los hechos, pero 30 años después este argumento podría contribuir a una posible involución de la situación. El proceso de justicia y reconciliación llevado a cabo[3] evidenciará sus resultados en los próximos años por el hecho de que las penas de prisión de algunos de los autores del genocidio están llegando a su fin, lo que implica que unas 30.000 personas serán puestas en libertad en los próximos años, suponiendo un importante reto en términos de reconciliación a nivel comunitario y de gestión de la tensión subyacente. Los impactos múltiples del genocidio se encuentran presentes en el imaginario colectivo del país, han marcado Rwanda durante estos 30 años y lo seguirán haciendo de forma permanente.[4]

La imagen del presidente Paul Kagame como líder fuerte y buen gestor, así como el clima de culpabilidad de la comunidad internacional por su inacción ante el genocidio de 1994, han contribuido a justificar los crímenes cometidos por Kagame y el autoritarismo de su régimen

El presidente Kagame ha gobernado de forma autoritaria, instaurando un clima de persecución y represión de la disidencia política con el argumento de que esta oposición política y social promueve un discurso genocida, y ha eliminado y silenciado adversarios dentro y fuera de las fronteras del país.[5] Las organizaciones de derechos humanos han demostrado a menudo que el Gobierno de Rwanda viola los derechos de aquellos que se atreven a desafiar su narrativa o contradecirla. Además de los 250.000 refugiados ruandeses y los grupos armados responsables del genocidio —las ex FAR y las milicias Interahamwe, que crearon tras 1994 el Ejército de Liberación de Rwanda (ALIR I y II); y a partir del año 2000, rebautizado como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR), su brazo armado FOCA y sus escisiones, entre las principales, CNRD-Ubwiyunge y RUD-Urunana— que operan en el este de la RDC, hay más refugiados ruandeses dispersos por los Estados vecinos de Burundi, Tanzania y Uganda. Hay grupos

2. Véase Royo, Josep Maria, Grandes Lagos: ¿a las puertas de una tercera guerra congolesa?, Africaye, 13 de junio de 2023.
3. Véase Royo, Josep Maria, "Never again" turns 30 in Rwanda, Nationalia, 5 de abril de 2024. El proceso de justicia y reconciliación emprendido por Rwanda combinó una respuesta judicial a tres niveles, dada la enormidad de los crímenes cometidos: el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, el sistema judicial nacional y el sistema de justicia comunitaria tradicional, los llamados tribunales gacaca, llevando ante la justicia a más de un millón de personas, entre las cuales gran parte de los principales responsables del genocidio.
4. Xinhua, Remains of over 100 victims of genocide in Rwanda retrieved from mass graves, 25 de enero de 2024. Para más información, véase Ibuka [en línea].
5. Human Rights Watch, "'Join Us or Die'. Rwanda's Extraterritorial Repression", 10 de octubre de 2023.

políticos ruandeses que se oponen al partido gobernante en Rwanda y reclaman un retorno voluntario y seguro a su patria para poder ejercer los derechos políticos sin ninguna restricción, así como la diáspora que se encuentra por Europa, América y África.

Rwanda ha marcado la agenda política y militar de la región en la defensa de sus intereses nacionales, que afectan directamente a la vecina RDC. Ha intervenido en los asuntos congoleses bajo el argumento de que este país no protege a la población de origen ruandés presente en RDC y de que sigue acogiendo a los responsables del genocidio, las FDLR, que han sido también instrumentalizadas por los sucesivos gobiernos congoleses para frenar a Rwanda. Las relaciones entre Rwanda, Burundi, Uganda y la RDC se han visto permanentemente marcadas por las acusaciones de complicidad con los grupos rebeldes que pretenden derribar el liderazgo ruandés; Rwanda, a su vez, moviliza y arma a la población ruandesa presente en el este de la RDC. Rwanda, a pesar del hecho de haber sido señalada por la ONU desde 2001 por haber participado directa o indirectamente en la expoliación de los recursos naturales congoleses de "forma sistemática y sistémica"[6] —también Uganda y decenas de empresas de todo el mundo— y por haber armado y organizado rebeliones para proteger a la comunidad banyarwanda y banyamulenge (comunidades ruandesas de las provincias de Kivu Norte y Sur) y sus intereses en los Kivus, continúa sin ser sancionada por la propia ONU y el resto de la comunidad internacional.

El último episodio se inició en 2022, cuando se produjeron choques entre los cuerpos de seguridad de Rwanda y la RDC en la zona fronteriza, y por las acusaciones contra Rwanda –evidenciadas por Naciones Unidas– de dar apoyo militar y logístico a la ofensiva del grupo armado M23 en el Kivu Norte, e incluso de participar directamente en combates junto al M23. El M23 es el principal grupo armado proxy de Rwanda dentro de la RDC, que con diferentes nombres (el RCD-Goma durante la "Guerra Mundial de África" en los años noventa, el CNDP de Laurent Nkunda entre 2006 y 2009 y el M23 desde 2012) lucha por los derechos de la población ruandesa en el Congo, se encuentra bajo la tutela ruandesa y contribuye a la expoliación de los recursos naturales congoleses en favor propio y de Rwanda. En los últimos meses la situación se ha agravado hasta el punto de que no se descarta que se pueda desencadenar una nueva conflagración entre los dos países.

A pesar del legado que pesa sobre Rwanda y las heridas aún abiertas, es imprescindible un análisis más profundo para comprender las dinámicas locales, regionales e internacionales que se encuentran en la génesis del conflicto entre ambos países que pueda contribuir a su resolución. Rwanda conmemora en 2024 el Kwibuka 30.[7] Pero recordar, que es el significado de kwibuka en kinyarwanda, no debería significar reescribir la historia para justificar la política actual, que invisibiliza una parte de las víctimas del genocidio, los hutus ejecutados por el Hutu Power y, en los años posteriores a 1994, muchos otros que fueron asesinados por el Gobierno de Kagame, amén de establecer un régimen que restringe las libertades. 30 años después, a pesar de las enormes dificultades y retos que supone, no se han dado los pasos suficientes para construir una reconciliación verdadera en el seno de la sociedad ruandesa, incluida la diáspora y la población exiliada, que aleje los fantasmas de 1994.

Los actuales esfuerzos regionales de la EAC y de la UA por el momento han fracasado.[8] Las iniciativas que sigue impulsando Angola,[9] bajo mandato de la UA, necesitan el apoyo y la presión de la comunidad internacional para conseguir una negociación efectiva y evitar una escalada de la situación, en el momento en el que el M23 se encuentra a las puertas de Goma, capital de Kivu Norte. Entre algunos de los factores que contribuirían a desencallar la situación se encuentra el legítimo derecho a la seguridad de Rwanda, que debe encontrar una respuesta de la comunidad internacional que fuerce un diálogo político con las FDLR y otros grupos políticos opuestos al Gobierno de Rwanda que incluya su desarme, enjuiciamiento con garantías y retorno voluntario desde RDC, así como el legítimo derecho a la seguridad de las comunidades ruandesas que viven en RDC y el reconocimiento pleno de su ciudadanía, además del legítimo derecho a la paz y seguridad de RDC y a la inviolabilidad de sus fronteras. La caída de Goma en manos del M23 representaría un desastre de impredecibles consecuencias.

6. Consejo de Seguridad de la ONU. Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la explotación ilegal de recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo. Anexo de la Carta del Presidente del Consejo de Seguridad al Secretario General de la ONU. (S/2001/357), 12 de abril de 2021.
7. Kigali Genocide Memorial, Kwibuka 30, 7 de abril de 2024.
8. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023, y Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.
9. Afolake Oyinloye , Rwanda's President agrees to meet Felix Tshisekedi over eastern Congo crisis, Africanews, 12 de marzo de 2024.

5.2. Sudán, ante el riesgo de cronificación del conflicto armado y de un efecto contagio en la región de desastrosas consecuencias

El 15 de abril se cumplió un año del inicio de la última guerra en Sudán que enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el presidente del Consejo Soberano, general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), comandadas por el vicepresidente del Consejo y teniente general Mohammed Hamdan Dagalo "Hemedti". Si bien en un inicio el conflicto afectó principalmente a Jartum, con el tiempo la violencia se ha transformado ampliándose a casi todo el país, convirtiéndose en una guerra civil a nivel nacional. En este año, la violencia ha sido devastadora, cobrándose la vida de más de 15.550 personas;[10] generando el desplazamiento forzado de 8,6 millones de personas –1,8 de las cuáles se han refugiado en países vecinos– convirtiendo al país en la peor crisis de desplazamiento forzado del mundo según ACNUR;[11] y provocando que cerca de 25 millones de personas, que representan más de la mitad de la población sudanesa, se encuentren en situación de necesidad de asistencia humanitaria, con altos índices de hambruna mientras la ayuda humanitaria sigue bloqueada por las partes.[12] Tras un año de guerra, las previsiones para contener la violencia y volver a la senda del dialogo de 2022 para lograr una transición pacífica en el país se complican, y el riesgo de que la crisis sudanesa afecte a otros Estados vecinos aumenta. Las razones son diversas. Por un lado, debido a la creciente participación de múltiples actores en la contienda, que dificulta su resolución. Por otro, las diferentes iniciativas de negociación se han mostrado ineficaces al superponerse unas con otras sin lograr ningún avance significativo hasta la fecha. Y finalmente, la situación de inestabilidad y violencia que padecen la mayoría de los países vecinos, con conflictos armados en Egipto, Libia, Chad, RCA, Sudán del Sur o Etiopía, se puede ver agravada por el efecto contagio de la crisis sudanesa, contribuyendo de este modo a amplificar la crisis regional.

En relación a los actores beligerantes, si bien al inicio del conflicto armado entre las SAF y las RSF, los movimientos armados de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, entre ellos Justicia e Igualdad (JEM), el Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM) y el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N)-facción Malik Agar –algunos ellos signatarios del Acuerdo de Paz de Juba (2020)– declararon su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso del tiempo, y a medida que la guerra se extendía a sus estados, fueron tomando partida en las hostilidades. También en el este del país, en las regiones de Mar Rojo, Kassala y Gedarif, a medida que la guerra se ha extendido han surgido nuevos actores armados (Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, the Beja National Congress, Beja Armed Congress) que se han alineado con alguna de las partes. Grupos islamistas derrocados de la era al-Bashir también han movilizado milicias en los estados de Río Nilo, Norte y Kassala, para combatir junto al Ejército. Todos estos actores complejizan la contienda y, a medida que surjan nuevos grupos y milicias armadas, provocarán no solo un recrudecimiento de las hostilidades, sino también mayores dificultades para resolver la disputa y reconstruir el país. Asimismo, la creciente participación de estos actores está incidiendo en que la guerra adquiera cada vez más una dimensión interétnica, con discursos de odio que instrumentalizan las identidades. Especialmente crítico se muestra el escenario en toda la región de Darfur que está agravando las tensiones intercomunitarias, especialmente entre grupos árabes rizeigat (de donde proviene la mayor parte del personal de las RSF) y no árabes masalit, amenazando con ampliar el conflicto a dimensiones étnicas. Además, entre los grupos armados darfuríes han surgido divisiones que podría incubar un conflicto entre facciones que han declarado su lealtad a las RSF y las que los han hecho con las SAF.

Por otro lado, con relación a la vía de negociación, desde el estallido de la violencia en abril de 2023 se han puesto en marcha diferentes iniciativas de mediación desplegadas por diferentes actores regionales e internacionales con el objetivo de obligar a las partes a poner fin a las hostilidades y retornar a la mesa de negociaciones. Sin embargo, a pesar de los intentos iniciales de la UA de garantizar un proceso de mediación coordinado, los espacios de mediación se han superpuesto de forma descoordinada y sin resultados tangibles. Entre las iniciativas de mediación más destacadas, resaltaron la liderada por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la impulsada por EEUU y Arabia Saudita, aunque también Emiratos Árabes Unidos (EAU) o Egipto impulsaron sus propios espacios. De todas ellas, las rondas de negociación en Jeddah (Arabia Saudita) han sido las más significativas, pero ni siquiera en ellas los líderes militares de ambas partes han tenido un cara a cara.[13] Si bien algunos actores han revitalizado su diplomacia mediante el nombramiento de nuevos enviados (ONU, EEUU, UA, IGAD), los principales obstáculos para avanzar en las negociaciones siguen siendo la falta de coordinación entre los distintos espacios de mediación, así como la incapacidad de las partes para acordar las

10. ACLED, One Year of War in Sudan, Situation Update, 15 de abril 2024.
11. UNHCR, Operational Data Program, Sudan Situation. [Fecha de consulta 17 de abril de 2024]
12. OCHA, Sudan Situation Report, Last updated: 15 Apr 2024 Fecha de consulta 17 de abril de 2024]
13. Véase el caso de Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

condiciones para lograr un alto el fuego y el desacuerdo sobre el proceso transicional posconflicto, en donde el aspecto relativo a la integración de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), las RSF y los diversos grupos armados en un futuro Ejército unificado –hecho que desencadenó el inicio de la guerra– seguirá siendo un tema especialmente delicado. Otros aspectos que también serán complejos de resolver remiten a los temas que habían quedado pendientes en la negociación pactada a finales de 2022, entre ellos la revisión del Acuerdo de Paz de Juba (2020) –al cual se oponen los grupos armados signatarios–, el desmantelamiento del anterior régimen de Omar al-Bashir –que en la actual crisis ha tenido un papel relevante en apoyo de las SAF– y la crisis en el este de Sudán.

La guerra no solo está socavando las esperanzas de lograr una transición pacífica y democrática en Sudán, sino que, con el paso del tiempo, representa una importante amenaza para la estabilidad regional por su posible efecto contagio a países fronterizos con dinámicas propias de inestabilidad y violencia. En Chad, el conflicto sudanés ya está teniendo efectos debido a que de ese país provienen muchos de los combatientes de las RSF. También representa una importante amenaza para Sudán del Sur, que vive un delicado proceso transicional no exento de violencia, y tiene previsto la realización de elecciones presidenciales para diciembre 2024. Particularmente preocupa su alta dependencia de Sudán para la comercialización del petróleo debido al paso por los oleoductos sudaneses que, de bloquearse, como pasó en el mes de febrero de 2024, puede tener un importante impacto en la economía nacional que podría llevarla al colapso, desestabilizando al país y provocando una involución del proceso de transición que está llevando a cabo Sudán del Sur en los últimos años. En la vecina Etiopía, con delicados procesos de paz en Tigré y Oromiya, el efecto de la violencia en Sudán podría repercutir en los mismos. Finalmente, diferentes analistas han subrayado que si la guerra se cronifica en Sudán, el vacío de gobernanza podría atraer a nuevos actores externos, entre ellos a actores yihadistas o países del entorno, debido a la posición estratégica que representa Sudán en el Mar Rojo.[14]

14. International Crisis Group, "Sudan: A Year of War", 11 de abril de 2024.

5.3. El aumento de la tensión política y militar entre China y Filipinas en el Mar de la China Meridional

Desde mediados de 2022, y especialmente en 2023 y los primeros meses de 2024, se ha registrado una importante escalada de la tensión política y militar entre China y Filipinas en el Mar de la China Meridional, concretamente en relación a dos formaciones terrestres que se hallan en la zona económica exclusiva de Filipinas (a 200 millas náuticas de la costa filipina, dentro de lo que Manila denomina el Mar de Filipinas Occidental) y que Beijing reivindica como propias, al estar incluidas en la llamada "línea de diez puntos" –una región que abarca aproximadamente el 90% del Mar de la China Meridional. A pesar de que en 2023 se produjeron dos reuniones directas entre los mandatarios de China y Filipinas –Xi Jinping y Ferdinand Marcos, respectivamente– en la que ambos se comprometieron a intentar rebajar la tensión entre los países, y a pesar de que ambos Gobiernos han mantenido varias reuniones de carácter militar para intentar evitar colisiones en las regiones en disputa, numerosos análisis han advertido sobre el riesgo de escalada bélica entre ambos países, con la posible participación de EEUU. Algunos medios sostienen que las relaciones entre los Gobiernos de Filipinas y China en el Mar de la China Meridional (y en particular en el Mar de Filipinas Occidental) se tensaron progresivamente tras la elección de Ferdinand Marcos en mayo de 2022 por la decisión de este de impulsar una cierta reorientación estratégica de la política exterior filipina en dicha región respecto de la anterior administración de Rodrigo Duterte. Según estos análisis, Duterte intentó minimizar las disputas con China para propiciar una mejor relación económica y estratégica con Beijing y diversificar las asociaciones estratégicas en la región, resultando ello en un cierto alejamiento de la alianza tradicional con EEUU. Según algunas voces, el nuevo enfoque del Gobierno de Filipinas aboga por la modernización de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los retos de Filipinas en el Mar de la China Meridional; el fortalecimiento de la cooperación militar y defensa con EEUU y el acercamiento estratégico a países en la región que tienen disputas territoriales con China; la aceleración de la discusión en el seno de ASEAN del código de conducta en el Mar de la China Meridional para evitar incidentes fortuitos y escaladas de la tensión; o la denuncia y confrontación de los comportamientos agresivos y peligrosos de barcos chinos en el Mar de Filipinas Occidental; apelando a la libertad de navegación y la resolución de disputas de acorde al derecho internacional.

El primer aspecto en el que se ha explicitado el incremento de la tensión política y militar entre ambos países ha sido un aumento sin precedentes en el número de incidentes navales, sobre todo en el atolón de Scarborough –ocupado por Filipinas hasta que una confrontación naval de varios meses en 2012 provocó que este pasara a estar bajo control efectivo de China– y, muy especialmente, en banco de arena Second Thomas (también conocido como Ayungin en tagalo y Renai en chino), situado en las Islas Spratly –archipiélago cuya soberanía total o parcial es reivindicada por seis países. En cuanto al banco de arena Second Thomas, que se halla a unas 100 millas náuticas de la isla de Palawan (Filipinas) y a 620 de China, pero solamente a unas 20 millas del arrecife de Mischief –controlado y militarizado por Beijing–, en 2023 y 2024 se produjeron incidentes de gravedad entre barcos guardacostas chinos y navíos filipinos en misión de reabastecimiento de un barco de la Segunda Guerra Mundial varado desde 1999 en dicho banco de arena para garantizar su control. Tales incidentes de gravedad, especialmente en febrero, octubre y diciembre de 2023 y también a principios y finales de marzo de 2024, incluyeron colisiones entre barcos –provocando la inutilización de barcos–; el uso por parte de barcos chinos de un láser de grado militar –un movimiento que, según algunos medios, suele considerarse hostil porque puede preceder el disparo de proyectiles–, así como la utilización de cañones de agua, una medida que llegó a provocó heridas en parte de la tripulación filipina, y que según algunas personas expertas, tiene la capacidad de hundir embarcaciones y de infringir graves daños humanos (incluso la muerte) a su tripulación. En algunos de estos incidentes, Manila elevó protestas diplomáticas y llamó a consultas a representantes del Gobierno chino en Filipinas.

Otro de los elementos que acrecentó la tensión en la región fue la publicación en agosto de 2023 por parte de China de un mapa actualizado del país que incluía reclamos territoriales –impugnados por otros países– en la frontera occidental con la India, el Mar de la China Meridional y Taiwán. La nueva "línea de diez puntos", que abarca el 90% del Mar de China Meridional, incluye toda la isla de Taiwán (el décimo trazo), así como también varias islas pequeñas e islotes reclamados por países como Vietnam, Filipinas, Brunei, Malasia e Indonesia. Manila denunció que la publicación de dicho mapa tenía como objetivo legitimar la supuesta soberanía y jurisdicción de China sobre zonas marítimas y territoriales de Filipinas y que dicha posición no tenía sustento en el derecho internacional ni en el fallo de 2016 por parte de un tribunal de arbitraje de la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Dicho tribunal dictaminó que no existía base legal para los reclamos territoriales de China en el seno de la "línea de los diez puntos", señaló que Beijing había violado la soberanía de Filipinas con respecto a su zona económica exclusiva y también recalcó que los elementos geográficos en disputa en el archipiélago de las Islas Spratly no generan una zona económica exclusiva, como sostiene Beijing. Sin embargo, China (ni tampoco Taiwán) no reconoció la validez del fallo por considerar que las disputas territoriales no están

sujetas a la CNUDM y por considerar que estas deben resolverse a través de negociaciones bilaterales. Por su parte, en enero de 2024 el jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas anunció su intención de desarrollar las nueve islas y otras formaciones geológicas que Filipinas ocupa en el Mar de la China Meridional, y que son dependientes de misiones regulares de reabastecimiento y sumamente vulnerables al bloqueo de los buques chinos. Entre dichas se hallan se hallan la isla Thitu (conocido en Manila como Pag-asa) –la isla más grande ocupada por Filipinas en el Mar de la China Meridional, cuenta con una pista de aterrizaje y un muelle y alberga a una población de alrededor de 200 personas– y el atolón Second Thomas –en el que Manila prevé instalar una desalinizadora para reducir el número de misiones de reabastecimiento para los sodados que viven en el barco varado. Sin embargo, el Gobierno de Filipinas negó cualquier opción de fortificar o militarizar dicho banco de arena, que Beijing ha señalado en varias ocasiones como una línea roja. Beijing sostiene que el ex presidente Joseph Estrada prometió en su momento retirar dicho barco, aunque Manila lo niega.

Un tercer aspecto que genera preocupación internacional sobre la disputa entre ambos países ha sido la mayor asertividad de EEUU respecto de sus obligaciones militares hacia Filipinas; el fortalecimiento de los lazos de seguridad y defensa entre ambos países; el acercamiento de Filipinas a países de la región críticos con el comportamiento de China; o el importante incremento del gasto militar para la modernización de las capacidades bélicas de Filipinas. Respecto de la primera cuestión, el 11 de abril, con motivo de una cumbre presidencial en Washington entre EEUU, Japón y Filipinas para reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa, el presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a declarar públicamente que el Tratado de Defensa Mutua entre EEUU y Filipinas de 1951 obliga a EEUU a defender a Filipinas en caso de ataques armados contra sus Fuerzas Armadas, aviones o embarcaciones públicas, incluidas los de su Guardia Costera, en cualquier parte del Mar de China Meridional. En numerosas ocasiones Washington ha expresado su preocupación por el comportamiento agresivo de China. En octubre de 2023, el Pentágono denunció que desde el año 2021 se habían producido más de 180 incidentes aéreos peligrosos entre aviones militares estadounidenses y chinos en el Mar de la China Meridional y en el Mar de la China Oriental, un número superior al de las dos décadas precedentes. Filipinas y otros países también han denunciado en varias ocasiones que China utiliza la intimidación marítima y aérea o la ocupación de facto y posterior militarización de islas y otras formaciones geológicas para alterar el estatus quo en sus disputas territoriales en la región. En este sentido, Manila incrementó significativamente su cooperación con varios países que tienen disputas territoriales con China –como India, Vietnam, Malasia o Indonesia– y, especialmente, con Corea del Sur, Australia –en noviembre de 2023 llevaron a cabo por primera vez patrullajes marítimos y aéreos conjuntos en el Mar de la China Meridional–y Japón, con quien se iniciaron negociaciones para un Acuerdo de Acceso Recíproco para facilitar la presencia de Fuerzas Armadas visitantes y realizar actividades militares conjuntas.

Sin embargo, el aspecto que provocó mayor inquietud en el Gobierno chino fue el fortalecimiento de la alianza militar entre Filipinas y EEUU. En abril de 2023 EEUU y Filipinas llevaron a cabo el mayor ejercicio militar conjunto realizado hasta el momento –con la participación de más de 17.000 tropas– y, en noviembre de 2023 y enero de 2024, llevaron a cabo patrullajes conjuntos desde los estrechos de Taiwán hasta el Mar de la China Meridional. Además, en febrero de 2023 EEUU y Filipinas anunciaron un pacto para ampliar su Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada para permitir el acceso militar estadounidense a cuatro instalaciones militares adicionales en Filipinas, tres de las cuales en el norte, frente a Taiwán, y la otra cerca de las Islas Spratly. Aunque Marcos señaló que las nuevas bases tenían un propósito puramente defensivo y que no deberían generar preocupación a nadie que no ataque la soberanía nacional e integridad territorial del país, varios analistas consideraron tal acuerdo como uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos tiempos en las relaciones entre EEUU y Filipinas. Beijing advirtió que tal acuerdo dañará gravemente los intereses nacionales filipinos y pondrá en peligro la paz y la estabilidad regionales. Además, en mayo de 2023 ambos países anunciaron la renovación de las nuevas directrices del Tratado de Defensa Mutua de 1951 para explicitar que las provisiones de defensa del tratado se activarían ante cualquier ataque en el Mar de China Meridional, y también para reforzar las capacidades conjuntas ante tácticas de zona gris (acciones de coerción e intimidación que normalmente no suelen considerarse un acto de guerra) y ante un escenario de amenazas multidimensionales (tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio) y de formas varias de guerra asimétrica, híbrida e irregular.

Ante el claro incremento de la tensión entre ambos países, en diciembre de 2023 Ferdinand Marcos denunció que la política exterior de China en el Mar de la China Meridional era agresiva y que no respetaba la soberanía de Filipinas ni el derecho internacional, declaró que la gestión política y diplomática del contencioso estaba teniendo escasos resultados y abogó por lo que él denominó como un "cambio de paradigma" en el Mar de la China Meridional. Dos días más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores chino acusó a Filipinas de incursionar repetidamente en su territorio, señaló que las relaciones entre ambos países se hallaban en una encrucijada y advirtió a Manila que cualquier error de cálculo en su disputa en el Mar Meridional de China comportaría una respuesta decidida por parte de Beijing, aunque sin detallar el tipo de medidas que se adoptarían.

5.4. El incremento de la militarización en Europa

El continente europeo asiste a un deterioro en la situación de conflictividad armada en la región y de retrocesos en las perspectivas de resolución de conflictos y tensiones por la vía del diálogo. La invasión y guerra en Ucrania han sobrepasado ya los dos años, con graves impactos en seguridad humana y medioambiental y sin perspectivas de resolución a corto plazo, mientras, a su vez, esta guerra y la confrontación entre Rusia y los actores euroatlánticos están generando una grave militarización del continente e influyendo negativamente en diversos conflictos y procesos negociadores en la región, como es el caso de Moldova. Además, están teniendo muchas otras repercusiones globales en el ámbito de la paz y la seguridad internacional, como es el incremento de la militarización en términos globales –y no solo en Europa–, la crisis de los esfuerzos multilaterales de construcción de paz y repercusiones en términos humanitarios, entre otros aspectos. Se asiste a un repliegue en Europa en términos de negociaciones de paz y esfuerzos de apoyo al diálogo y la mediación, mientras se incrementa la militarización y los discursos belicistas que menosprecian los esfuerzos e iniciativas de promoción del diálogo, las negociaciones y la construcción de paz. Se identifican a continuación algunos de los escenarios de riesgo en el continente europeo con dinámicas entrelazadas entre ellos, y que ponen de manifiesto la necesidad de esfuerzos multinivel para desescalar la guerra en Ucrania, promover vías de resolución negociada del conflicto y revertir la grave dinámica de militarización del continente.

Por una parte, la invasión rusa y guerra en Ucrania continúan sin visos de finalización. Este conflicto armado de alta intensidad –uno de los 17 de alta intensidad en 2023 en el mundo– acumula decenas de miles de víctimas mortales, principalmente militares. Además, 14,5 millones de personas en Ucrania afrontaban situación de necesidad de ayuda humanitaria, 5,9 millones de personas permanecían refugiadas en Europa y otros 3,4 millones seguían en situación de desplazamiento interno dentro de Ucrania, según datos de abril de 2024.[15] En el ámbito militar continúan las hostilidades de alta intensidad y estas aún pueden escalar más, incluyendo en relación a una nueva ofensiva de Rusia lanzada en 2024, en paralelo a los persistentes riesgos de extensión territorial del conflicto y de escalada nuclear –hasta ahora contenida. Mientras, en el ámbito diplomático persiste el bloqueo, sin perspectivas aparentes de movimiento en las posiciones políticas de las partes que indiquen la posibilidad a corto plazo de explorar nuevas vías de negociación. Desde el fin de las negociaciones de marzo-abril de 2022, por parte de Rusia se ha expresado la exigencia de reconocimiento de la "nueva realidad territorial" como requisito para nuevas negociaciones o para la finalización de las hostilidades. Esa "nueva realidad" alude a las áreas tomadas y ocupadas militarmente en cuatro provincias de Ucrania. Por parte de Ucrania, y en contraste con las negociaciones de 2022 –en que se contemplaba la posibilidad de compartimentalizar y postergar algunos temas, como Crimea, así como un estatus de neutralidad–, desde la finalización de esas conversaciones la posición pública ha sido la de exigencia de retirada de las tropas rusas de las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente como condición previa para unas negociaciones. En paralelo, Ucrania también se ha volcado en promover su "Fórmula de Paz" con actores aliados. En todo caso, una parte de ese plan pivota en torno a la arquitectura de seguridad euroatlántica y transferencia masiva de apoyo militar a Ucrania, en contraste con aproximaciones que pudiesen abordar arquitecturas de seguridad continentales y promover a futuro compromisos continentales de seguridad compartida.

En el ámbito negociador, los actores internacionales occidentales parecen haber infraatendido la dimensión de búsqueda de salidas políticas y negociadas al conflicto, centrando en cambio buena parte de su acción en el ámbito militar con masivas transferencias en asistencia militar, transferencia de armamento y formación militar; si bien también en la asistencia económica y humanitaria. En 2023 diversos actores, principalmente de fuera de Occidente, intensificaron los contactos con las partes, con propuestas, encuentros, documentos y llamamientos al diálogo, pero estos no tuvieron efecto inmediato. Un elemento en positivo es la conferencia internacional de paz que Suiza acoge en junio de 2024. Aun si en mayo de 2024 no estaba aún prevista la participación de Rusia, el Gobierno suizo ha reiterado la importancia de la participación de Rusia en el proceso de paz. El empuje de Suiza, de la mano de esta conferencia y otros esfuerzos, puede ser un elemento que contribuya a generar bases para el acercamiento y la negociación. Junto a Suiza, también China se ha mostrado como actor que ha apelado a la negociación y que ha llevado a cabo algunas medidas, como contactos con las partes, elaboración de una posición propia sobre la resolución del conflicto, designación de una figura de enviado especial, entre otros. Está por ver si estos esfuerzos internacionales generan avances y si más actores empujan en la dirección de vías de resolución negociada. Sin mayores esfuerzos y recursos en el ámbito político y diplomático se corre el riesgo de abocar al conflicto exclusivamente al terreno militar, perpetuando una guerra con graves impactos multidimensionales y profundizando el rumbo actual de militarización del continente derivado de la guerra en Ucrania.

De la mano de la invasión rusa y guerra en Ucrania y de la tipología de respuestas a estas, se asiste a otro escenario de riesgo o tendencia preocupante, el de la

15. OCHA, *Ukraine. Situation report*, *OCHA*, 18 de abril de 2024.

militarización en el continente europeo. Según datos de SIPRI, el gasto militar en Europa en 2023 fue de 588.000 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 16% respecto al año anterior, y de un 62% desde 2014, año del inicio del conflicto interno internacionalizado en el este de Ucrania.[16] Rusia tuvo un gasto militar en 2023 de 109.000 millones de dólares, un 24% más elevado que en 2022 y un 57% mayor que en 2014. En 2023 supusieron un 5,9% del PIB y un 16% de todo el gasto público. El SIPRI señala que se trata de los niveles más altos de gasto militar ruso desde la disolución de la URSS y se prevé que su gasto militar continúe incrementándose. Por otra parte, Ucrania alcanzó en 2023 los 64.800 millones de dólares (un 51% más elevado que en 2022 y un 1.272% más que en 2014). Como señaló el Centre Delàs en base a esos datos del SIPRI, los países fronterizos con Rusia fueron los que más incrementaron su gasto militar, con un aumento del 75% en 2023 con respecto a 2022 por parte de Polonia, y un aumento del 51% por Finlandia.[17] Además, los miembros europeos de la OTAN representaron conjuntamente el 28% del gasto total de la organización en 2023, un nivel récord en el periodo 2014-2023, según el SIPRI. Esta escalada de gasto militar en Europa va de la mano de una escalada militar global (2,44 billones de dólares en 2023, que supuso un 6,8% de incremento en términos reales con relación a 2022, incremento por noveno año consecutivo y la mayor subida interanual desde 2009). El gasto militar de los países miembro de la OTAN representó el 55% del gasto militar global ese año. Su gasto combinado (1,34 billones) fue un 5,2% mayor que en 2022 y un 19% mayor que en 2014. Además, en 2023, los países de la OTAN ampliaron su objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar –horizonte acordado en 2014–, pasando a considerarlo como un objetivo de mínimos.

Además del aumento del gasto militar se añaden otros elementos de militarización en el continente, como una mayor militarización de fronteras, incluyendo la frontera entre Belarús y Polonia, escenario en 2023 de despliegues de fuerzas, retórica acusatoria y vulneraciones de los derechos humanos de población migrante y solicitante de asilo;[18] el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, en 2023 y 2024, respectivamente; los planes de muchos países europeos de expandir el número de sus Fuerzas Armadas;[19] o las discusiones en algunos países sobre la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio, como en Alemania y Serbia. Otros factores incluyen retrocesos en los mecanismos de control de armamento, en el continente y a escala global. Rusia abandonó de manera definitiva el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE) en 2023, participación que ya había dejado en suspenso en 2007 alegando la expansión de la OTAN hacia el este. En 2023 culminó esa salida, con retórica en que acusaba a la OTAN de "incitar al conflicto en Ucrania" –obviando la responsabilidad rusa como país invasor. A su vez, Moldova anunció en marzo de 2024 su decisión de suspender su participación en el FACE, alegando un cambio fundamental en las circunstancias que llevaron a su firma. El Ministerio de Defensa moldavo señaló la retirada de Rusia en 2023 del tratado y la invasión de Rusia en Ucrania. Todo este proceso de militarización en el continente se manifiesta en parte en forma de dinámica de confrontación de bloques (Rusia – actores euroatlánticos), que antecede, alimenta y se ve a su vez alimentado por la invasión rusa en Ucrania. Esa dinámica global de conflicto se refleja a su vez en deterioros en el escenario global como la suspensión del diálogo sobre seguridad y estabilidad estratégica de EEUU y Rusia desde 2022.

Se asiste a dinámicas múltiples de militarización y retrocesos en el ámbito negociador en Europa, que se retroalimentan

Por otra parte, la invasión de Rusia en Ucrania y la confrontación Rusia-EEUU, UE, OTAN ha permeado y deteriorado el contexto en que trascurren diversos conflictos no resueltos y procesos negociadores en el continente, como es el caso de Moldova. La República de Moldova es escenario de un incremento de tensiones multidimensionales y entrecruzadas, influidas por la invasión de Rusia contra Ucrania. En 2023 esta tensión siguió deteriorándose. La situación de crisis incluyó durante el año alertas en el Gobierno y actores internacionales aliados, como Ucrania, la UE y EEUU, sobre riesgos de acciones hostiles de Rusia contra Moldova; medidas gubernamentales contra actores locales políticos y medios de comunicación considerados pro-rusos; advertencias de Rusia al país; y medidas hostiles entre ambos, como la expulsión de diplomáticos. A su vez, actores locales como algunas ONG expresaron preocupación por riesgos de vulneraciones de derechos humanos como la libertad de expresión ante algunas medidas del Gobierno. En paralelo, se deterioró el contexto del proceso negociador relativo al conflicto no resuelto sobre el estatus de Transnistria –un territorio de 4.000 km^2 y medio millón de habitantes, con mayoría de población rusohablante, legalmente bajo soberanía de Moldova y de facto independiente, y apoyado política y económicamente por Rusia. En su conjunto, el proceso negociador atraviesa una fase de incertidumbre sobre su dirección futura. El formato negociador 5+2 (OSCE como mediadora, Ucrania y Rusia como mediadores-garantes, y EEUU y la UE como observadores, además de las partes en conflicto) permanecía bloqueado,

16. Tian, Nan, Diego Lopes da Silva, Xiao Liang y Lorenzo Scarazzato, *Trends in World Military Expenditure, 2023*. SIPRI Factsheet, abril de 2024.
17. Calvo, Jordi, "Más gastos militares en casi todas partes", *EIDiario.es*, 24 de abril de 2024.
18. Véase el resumen sobre Belarús en el capítulo 2 (Tensiones).
19. The Economist, "Would you really die for your country?", *The Economist*, 17 de abril de 2024.

a causa de la confrontación entre Rusia y Ucrania, y el resto de formatos de la negociación (1+1 y grupos técnicos de trabajo) afrontaban dificultades. Además, otros elementos de contexto que involucraban a Rusia y al antagonismo Rusia-UE contribuían a la gravedad e incerteza sobre la situación.[20] Junto a Moldova, procesos negociadores como el de Georgia también se han visto negativamente afectados por la guerra en Ucrania y la dinámica de confrontación entre Rusia y EEUU, la UE y la OTAN.[21]

En conjunto, se asiste a dinámicas múltiples de militarización y retrocesos en el ámbito negociador en Europa, que configuran escenarios de riesgo a corto, medio y largo plazo y que se retroalimentan. Frente a este panorama, se requieren de esfuerzos concertados de actores políticos que abanderen la agenda de la prevención y el apoyo al diálogo y la mediación como vía de transformación de conflictos, así como de empuje social y ciudadano para reorientar el rumbo actual de militarización y tensiones en el continente.

20. Véase el resumen sobre Moldova y Moldova (Transnistria) en el capítulo 2 (Tensiones).
21. Véase el resumen sobre el proceso de paz de Georgia en Escola de Cultura de Paz, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

5.5. Gaza, la erosión del derecho internacional humanitario y el futuro del orden global

Desde hace unos años la evolución de la conflictividad armada global presenta algunas tendencias preocupantes. El incremento de casos de alta intensidad, con gravísimos impactos en términos de letalidad y seguridad humana, que en la actualidad representan prácticamente la mitad de los conflictos armados en el mundo. La intensificación en los niveles de violencia –en 2023 más del 40% de los casos empeoraron respecto al año anterior. Un escenario general de creciente militarización tanto en las narrativas como en la práctica, con un aumento incesante del gasto militar que no se redujo ni siquiera por los retos que impuso la pandemia y que se produce en un trasfondo de mayores tensiones geopolíticas globales. Un aumento exponencial en las cifras de desplazamiento forzado a causa de conflictos, violencia y violaciones a los derechos humanos en la última década, que ya han expulsado de sus hogares a más de 110 millones de personas. Junto a estas tendencias, uno de los asuntos que viene generando mayor preocupación son las innumerables y profundas consecuencias de los conflictos armados en la población civil y la persistente erosión del derecho internacional humanitario y del respeto a los derechos humanos. En 2023 la situación en Gaza intensificó los debates sobre los impactos de unas vulneraciones cada vez más sistemáticas en un contexto de impunidad y sobre los desafíos que comporta la aplicación de dobles raseros para el futuro del orden internacional.

La ofensiva israelí contra Gaza tras el ataque sin precedentes de Hamas y otros grupos palestinos se ha convertido en un ejemplo emblemático de los atropellos al derecho internacional humanitario. Prácticas denunciadas en conflictos armados en otras latitudes en los últimos años alcanzaron una magnitud inédita en un período temporal extremadamente breve. Decenas de miles de civiles palestinos muertos en ataques indiscriminados y deliberados, a un ritmo sin parangón entre los conflictos armados del siglo XXI. Miles de niñas y niños fallecidos en los ataques israelíes –en tres meses se superaba la cifra de todos los menores fallecidos por violencia en conflictos armados en todo el mundo en los cuatro años previos- y otros tantos mutilados, traumatizados de por vida y abocados al hambre y la desnutrición. Uso de armas prohibidas en áreas densamente pobladas. Cientos de miles de personas obligadas a huir una y otra vez a zonas y por rutas declaradas supuestamente como seguras, objeto en la práctica de continuos ataques. Utilización del hambre o del acceso al agua como armas de guerra, bloqueo sistemático del acceso a la ayuda humanitaria, masacres de civiles durante entregas de alimentos y otros artículos de primera necesidad para una población cercada y al límite. Destrucción masiva de infraestructuras civiles: hospitales, viviendas, universidades, escuelas y bibliotecas –en inglés se usa ya el término *scholasticide*[22]. Asesinatos a niveles inéditos de centenares de periodistas, personal médico y trabajadores humanitarios.

El castigo colectivo al que Israel está sometiendo a la población palestina, y en particular a la de Gaza, ha sido crecientemente señalado por voces expertas como un genocidio. Y se ha denunciado también que Israel está utilizando deliberadamente la terminología del derecho internacional humanitario –incluyendo conceptos como escudos humanos, daños colaterales, zonas seguras, evacuaciones– para intentar justificar su violencia contra la población palestina, subvirtiendo el propósito de protección de este marco normativo, intentando difuminar la distinción entre civiles y combatientes y alterar la aplicación de principios de distinción, proporcionalidad y precaución. En palabras de la relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los territorios ocupados, "Israel ha tratado de camuflar la intención genocida con la jerga del derecho humanitario".[23]

Israel ha persistido en prácticas que incontables voces expertas señalan como violaciones flagrantes del derecho internacional ante la inacción, y con la complicidad, de poderosos actores de la comunidad internacional. Actores principalmente de Occidente o Norte Global que como EEUU, Alemania, Reino Unido y parte de la UE –entre otros– han continuado otorgándole cobertura política, diplomática y/o militar a pesar de los indicios de genocidio, crímenes de guerra y sonadas vulneraciones a los derechos humanos. Actores que han aplicado dobles raseros evidentes para valorar y actuar. Las numerosas medidas contra la Rusia de Putin tras la invasión de Ucrania contrastan con la ausencia de sanciones contra Israel. Y la falta de voluntad política para frenar a Israel y presionar por una demanda tan básica como un alto el fuego ha enviado un mensaje peligroso sobre las vidas que importan -"las vidas que merecen ser lloradas", en palabras de Judith Butler. Desde octubre, EEUU vetó sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas que exigían un alto el fuego y sólo se abstuvo en una nueva votación en marzo después de que un ataque israelí acabara con la vida de varios cooperantes occidentales. Y aun así, relativizó luego el impacto de la resolución, generando intensas discusiones en círculos diplomáticos y entre expertos en derecho internacional.

En este escenario, diversas voces vienen alertando que lo está ocurriendo en Gaza está sentando peligrosos

22. UNOHCHR, *UN experts deeply concerned over 'scholasticide' in Gaza*, 18 de abril de 2024.
23. Francesca Albanese, *Anatomy of a Genocide,* A/HRC/55/73, 25 de marzo de 2024.

precedentes y amenaza no solo a la población palestina, sino también el futuro del derecho internacional y el orden global construido desde mediados del siglo pasado.[24] Amnistía Internacional ha advertido que Gaza simboliza el fracaso de muchos de los artífices del sistema internacional generado tras la Segunda Guerra Mundial por sus fallos a la hora de mantener un compromiso con la humanidad común, la universalidad y el "nunca más" y por la deshonra a los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra, la Convención sobre el genocidio y el derecho internacional de los derechos humanos.[25] Las actitudes del Norte Global en torno a Gaza transmiten el mensaje de que solo se utiliza la ley internacional cuando es políticamente conveniente para las potencias occidentales, que solo sirve para aplicársela a otros, y que no existe un compromiso inequívoco para detener o perseguir crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. En suma, como apuntan voces palestinas, que en Occidente se está dispuesto a distorsionar la ley internacional en favor de Israel a pesar de sus acciones y su régimen de apartheid.[26]

La crisis de Gaza también ha escenificado las dificultades de Naciones Unidas para actuar como garante de la paz y seguridad internacional, en un contexto de bloqueo crónico del Consejo de Seguridad que se arrastra ya desde hace algunos años, en especial tras la invasión rusa de Ucrania. En lo que respecta a Palestina, la impotencia del secretario general de la ONU a las afueras del paso de Rafah ante la imposibilidad de romper el bloqueo a la Franja en las primeras semanas de la operación israelí, las airadas críticas a su figura por parte de Israel, la apelación infructuosa a recursos extraordinarios –como el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas– para intentar promover un alto el fuego y evitar una catástrofe humanitaria, o las acciones de persecución y criminalización por parte de Israel a una de sus principales agencias, la UNRWA (responsable de la asistencia a la población refugiada palestina), son algunas de las estampas de los últimos meses que ilustran los límites e ingentes retos de la acción de la ONU en este ámbito. Hechos que se inscriben también en la constante vulneración durante décadas de las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Israel, que ha persistido en sus políticas de ocupación, ampliación de asentamientos ilegales y hechos consumados. Existe la preocupación, por tanto, de que la impunidad ante las violaciones del derecho internacional y el debilitamiento de la ONU acaben de asentar un escenario donde las normas se aplican de manera discrecional y en el que se impone la ley del más fuerte. La cuestión palestino-israelí no es el único caso. La anexión de territorios por parte de Rusia o la toma de control de Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán a través de una expulsión masiva de población son otros ejemplos recientes en los que se ha puesto en jaque el marco del derecho internacional. Y si se amplía la perspectiva temporal, en un 2023 en el que se cumplieron 20 años de la invasión de Iraq liderada por EEUU, cabe recordar que la operación se realizó sin la cobertura de la ONU y con argumentos que se han demostrado falsos, sin que nadie rinda cuentas hasta ahora por esta acción.

Pese a estas problemáticas, parece indudable que Naciones Unidas sigue siendo un foro que permite exponer las disonancias y contradicciones entre la práctica y los discursos de quienes dicen enarbolar la defensa del derecho internacional y los derechos humanos entre sus principios. Las votaciones en torno a la cuestión palestina en la Asamblea General y las iniciativas impulsadas por países del llamado Sur Global a propósito de Gaza son ejemplo de ello. Las mayores expectativas, sobre todo en términos de lucha contra la impunidad, están centradas, por ahora, en la acción de las máximas instituciones de justicia internacional. Tras la interposición de la demanda contra Israel por parte de Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ)[27] ha decidido iniciar una investigación tras considerar que es plausible la comisión de actos constitutivos de genocidio. Paralelamente, el máximo tribunal de Naciones Unidas ha dispuesto una serie de medidas provisionales que, entre otros aspectos, exigen que Israel facilite el acceso de ayuda humanitaria y, más recientemente, también que suspenda sus operaciones militares en Rafah. El pronunciamiento de la CIJ refuerza los argumentos de las múltiples voces que exigen un alto el fuego, el acceso irrestricto de ayuda humanitaria y el fin de los suministros de armas a Israel, y que recuerdan a los Estados que, según lo que establece la Convención, tienen la obligación de prevenir y no contribuir al genocidio, ya que se arriesgan a ser cómplices. A esto se suman las acciones en el seno de la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscalía de este tribunal –que juzga a personas, y no a Estados, por la comisión de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio y que ha sido objeto de críticas en el pasado por centrar sus actuaciones en países del Sur Global, en especial en África–, emitió en mayo órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás y contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. El recorrido de este proceso aún está por verse, pero es la primera vez que la fiscalía de la CPI solicita una orden de detención contra dirigentes de un país aliado de Occidente.

24. Olga Rodríguez, "La impunidad israelí en Gaza difumina las líneas del derecho internacional y alcanza a víctimas occidentales", *El Diario.es*, 2 de abril de 2024.
25. Agnès Callamard, *Reflections from the Secretary General on the state of human rights in 2023/24*, Amnesty International, 24 de abril de 2024.
26. Olga Rodríguez, "Entrevista a Ahmed Abofoul: 'Occidente está distorsionando la ley internacional al servicio de Israel'", *El Diario*.es, 18 de abril de 2024.
27. Todos los documentos de la Corte Internacional de Justicia en este caso están disponibles en el apartado de la web de la CIJ Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel).

Glosario

11S: 11 de septiembre
3R: Retour, Réclamation et Réhabilitation
AA: Arakan Army (Ejército de Arakan)
AAPP: Asociación de Asistencia a los Presos Políticos
ABSDF: All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
ABM: Ansar Beit al-Maqdis
ACLED: Armed Conflict Location and Event Data Project
ACNUDH: Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACSS: Africa Center for Strategic Studies
ACT: Ambazonia Coalition Team
ADF: Allied Democratic Forces (Fuerzas Democráticas Aliadas)
ADF: Ambazonia Defence Forces
ADF-NALU: Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda
AFF: Afghanistan Freedom Front
AFL: Afghanistan Liberation Movement
AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia
AGovC: Ambazonia Governing Council
AI: Amnistía Internacional
AIEA: Agencia Internacional de la Energía Atómica
AKP: Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
ALAF: Fuerzas Armadas Árabes de Libia
ALBA: Alianza Bolivariana para las Américas
ALDEA: Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo
ALP: Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
AMISOM: Misión de la Unión Africana en Somalia
ANP: Autoridad Nacional Palestina (También Autoridad Palestina -AP-)
ANRHI: Arab Network for Human Rights Information
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
APCLS: Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain (Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano)
AQMI: Al-Qaeda en el Magreb Islámico
AQPA: Al-Qaeda en la Península Arábiga
ARS: Alianza para la Reliberación de Somalia
ARSA: Arakan Rohingya Salvation Army (Ejército de Salvación Arakan Rohingya)
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
ASWJ: Ahlu Sunna Wal Jama'a
ATMIS: Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia
AUBP: Programa de Fronteras de la Unión Africana
BDB: Brigadas de Defensa de Bengasi
BH: Boko Haram
BIFF: Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (Luchadores por la libertad islámica de Bangsamoro)
BINUH: Oficina Integrada de la ONU en Haití
BJP: Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio)
BLA: Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
BLF: Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
BLT: Baluch Liberation Tigers (Tigres de Liberación Baluchi)
BM: Banco Mundial
BRA: Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
BRN: Barisan Revolusi Nasional
BRP: Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
CCMSR: Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (Consejo de Comando Militar para la Salvación de la República)
CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África Occidental
CEEAC: Comunidad Económica de Estados de África Central
CENCO: Conferencia Episcopal Congolesa
CERAC: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
CHD: Centre for Humanitarian Dialogue
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas
CJNC: Cártel Jalisco Nueva Generación
CJTF: Fuerza de Tarea Conjunta Civil
CMA: Coordinadora de Movimientos de Azawad
CMC: Coalition of Movements for Change
CMDPH: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
CMPFPR: Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
CMT: Consejo Militar de Transición
CNDD-FDD: Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
CNDP: Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
CNF: Chin National Front (Frente Nacional Chin)
CNL: Congrès National pour la Liberté (Congreso Nacional por la Libertad)
CNRD-Ubwiyunge: Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie
CODECO: Coopérative pour le développement du Congo
CODNI: Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
COP 27: 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022
CPA: Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
CPC: Coalición de Patriotas por el Cambio
CPCR: Cade permanent de concertation et de réflexion
CPI: Corte Penal Internacional

CPI-M: Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
CSFA: Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
DAG: Dyck Advisory Group
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración
DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar
DIH: Derecho Internacional Humanitario
DKBA: Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
DMLEK: Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
DNIS: Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano
DPA: Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
EAC: East African Community (Comunidad de África del Este)
EAU: Emiratos Árabes Unidos
EDA: Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
EEUU: Estados Unidos de América
EFDM: Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)
EHRC: Ethiopian Human Rights Comission
EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)
EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)
ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)
ELK: Ejército de Liberación de Kosovo
ELN: Ejército de Liberación Nacional
ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)
EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)
EPL: Ejército Popular de Liberación
EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)
EPR: Ejército Popular Revolucionario
EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope)
ERPI: Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
ESL: Ejército Sirio Libre
ESN: Red de Seguridad del Este
ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)
ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)
ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)
EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África
EUCAP SAHEL Mali: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Malí
EUCAP SAHEL Niger: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Níger
EUFOR: Fuerza de la Unión Europea
EULEX: Misión Civil de la Unión Europea en Kosovo
EUNAVFOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta
EUTM Mali: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí
EUTM Mozambique: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Mozambique
EUTM Somalia: Misión Militar de la Unión Europea para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia
EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FACT: Frente para el Cambio y la Concordia en Chad
FADM: Fuerzas Armadas Mozamiqueñas
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal
FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina
FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)
FDS: Fuerzas Democráticas Sirias
FFC: Forces for Freedom and Change (Fuerzas para la Libertad y el Cambio de Sudán)
FFC-CC: Forces for Freedom and Change-Central Command (Fuerzas para la Libertad y el Cambio -Comando Central de Sudán)
FIS: Frente Islámico de Salvación
FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)
FMI: Fondo Monetario Internacional
FML: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)
FPB: Forces Populaires du Burundi (Fuerzas Populares de Burundi)
FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina
FPR: Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)
FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (Frente Patriótico por el Renacimiento de la República Centroafricana)
Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro
FRELIMO: Frente de Liberación de Mozambique
FRUD-armé: Front uni pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie-Armé
G20: Grupo de los Veinte
G5 SAHEL: Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel
G7: Grupo de los Siete
GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados
GBAO: Región Autónoma de Gorno-Badakhshan
GERD: Gran Presa del Renacimiento Etíope

GFT: Gobierno Federal de Transición
GNA: Gobierno de Acuerdo Nacional
GSIM: Group to Support Islam and Muslims (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes)
GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad
HIMARS: Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad
HM: Hermanos Musulmanes
HRMMU: Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania
HRW: Human Rights Watch
HTS: Hay'at Tahrir al-Sham
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
IDG: Índice de Desarrollo de Género
IDH: Índice de Desarrollo Humano
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IG SAKO: Interim Government - Sako
IG SISIKU: Interim Government - Sisiku
IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
IISS: International Institute for Strategic Studies
ILGA: Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
IMN: Islamic Movement of Nigeria (Movimiento Islámico de Nigeria)
INEC: Comisión Electoral Nacional Independiente
IPAC: Institute for Policy Analysis of Conflict
IPI: International Press Institute
IPOB: Pueblo Indígena de Biafra
IRGC: Guardia Revolucionaria Iraní
ISCAP: Estado Islámico Provincia de África Central
ISGS: Estado Islámico en el Gran Sáhara
ISIS: Estado Islámico
ISIS-KP: Estado Islámico de la Provincia de Jorasán
ISMP: Estado Islámico Provincia de Mozambique
ISWAP: Estado Islámico en la Provincia de África Occidental
IWF: Iduwini Volunteers Force (Fuerzas Voluntarias de Iduwini)
JAS: Jama´atu Ahlus-Sunna Lidda´Awati Wal Jihad
JAS-Abubakar Shekau: Jama´atu Ahlus-Sunna facción Abubakar Shekau
JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action (Plan de Acción Integral Conjunto)
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JNIM: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistán
KDPI: Partido Democrático Kurdo de Irán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNDF: Karenni Nationalities Defence Force
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistán
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LAAF: Fuerzas Armadas Árabes de Libia (también conocido como LNA)
LDU: Lahu Democratic Union
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LGTBIQ+: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersex, Queer y más
LNA: Ejército Nacional de Libia ((también conocido como LAAF)
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M-19: Movimiento 19 de Abril (Colombia)
M23: Movimiento 23 de Marzo (RDCongo-Rwanda)
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MARA Patani: Majlis Amanah Rakyat Patani (Consejo Amanah para el Pueblo Patani)
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDM: Movimiento Democrático de Mozambique
MENA: Medio Oriente y Norte de África
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINUJUSTH: Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MIT: Mujahidin Indonesia Timur (Muyahidines de Indonesia Oriental)

MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)
MLCJ: Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia)
MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
MLRS: Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple
MNDAA: Myanmar National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar)
MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)
MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)
MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Superviviencia del Pueblo Ogoni)
MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique (Movimiento Patriótico por la República Centroafricana)
MPSR: Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración
MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)
MS13: Mara Salvatrucha
MSF: Médicos Sin Fronteras
MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental
NAS: Frente de Salvación Nacional
NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)
NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)
NDAA: National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Nacional Democrática)
NDC-R: Nduma défense du Congo-Rénové
NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)
NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)
NDFB (IKS): National Democratic Front of Boroland (IK Songbijit)
NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate (Mandato de Justicia de Greenland del Delta del Níger)
NDM-PF: National Democratic Movement-Patriotic Front (Movimiento Nacional Democrático-Frente Patriótico)
NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)
NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)
NLAW: Arma Antitanque Ligera de Próxima Generación
NLL: Línea Límite Norte
NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)
NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)
NGO WGWPS: NGO Working Group on Women, Peace and Security (ONG Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Paz y Seguridad)
NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)
NRF: Frente Nacional de Resistencia
NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))
NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)
NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Khaplang)
NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)
NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal
NSF: Fuerzas de Seguridad de Nigeria
NSSSOG: Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios
NST: Nigeria Security Tracker
NTF-ELCAC: Grupo de Trabajo Nacional para Terminar com el Conflicto Armado Comunista Local
OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
OCI: Organización para la Cooperación Islámica
OEA: Organización de los Estados Americanos
OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)
OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)
OLP: Organización para la Liberación de Palestina
OMC: Organización Mundial de Comercio
ONG: Organización No Gubernamental
ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OPC: Oromo People's Congress (Congreso Nacional Oromo)
OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)
OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte
OTAN KFOR: Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo liderada por OTAN
OTSC: Organización del Trabajo de Seguridad Colectiva
OVCS: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
OVV: Observatorio Venezolano de Violencia
OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief
PANDEF: Pan Niger Delta Forum
PCF: Partido Comunista de Filipinas
PDF: Popular Defence Forces (milicias sudanesas)
PDKI: Partido Democrático Kurdo
PIJ: Jihad Islámica Palestina
PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán
PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army
PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
PML-N: Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz
PNLO: Pa-O National Liberation Organisation
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PP: Partido de la Prosperidad (Prosperity Party)
PPP: Pakistan People's Party
PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)
PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)
PROVEA: Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos
PS: Provincia de Sinaí
PULO: Patani United Liberation Organisation (Organización Unida de Liberación de Patani)
PYD: Democratic Union Party (Partido Unión Democrática)
R-ARCC: Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur
RASD: República Árabe Saharaui Democrática
RCA: República Centroafricana
RCSS: Restoration Council of Shan State
RDC: República Democrática del Congo
RED-Tabara: Résistance pour un État de Droit au Burundi (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi)
RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña
REWL: Red Egbesu Water Lions
RFI: Radio Francia Internacional
RNLF: Rabha National Liberation Front
RPD Corea: República Democrática Popular de Corea
RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)
RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)
RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)
RSF: Rapid Support Forces (Fuerzas de Apoyo Rápido)
RUD-Urunana: Ralliement pour l'unité et la démocratie (RUD)-Urunana
SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)
SAMIM: Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral
SCACUF: Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (Frente Unido del Consorcio de Ambazonia del Sur de Camerún)
SCDF: Southern Cameroons Restoration Forces (Fuerzas de Restauración del Sur de Camerún)
SCF: Shiite Coordination Framework
SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)
SLA: Sudan Liberation Army (Ejército de Liberación de Sudán)
SLA-AW: Sudan Liberation Army-Abdul Wahid (Ejército de Liberación de Sudán – Abdul Wahid)
SLA-MM: Sudan Liberation Army- Minni Minnawi (Ejército de Liberación de Sudán – Minni Minnawi)
SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)
SNNRPS: Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS (Naciones, Nacionalidades y Estado Popular del Sur, SNNPS)
SOCADEF: Southern Cameroons Defence Forces (Fuerzas de Defensa del sur de Camerún)
SOHR: Observatorio Sirio de Derechos Humanos
SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLA-IO: Sudan People's Liberation Army in Opposition (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición)
SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLM/A: Sudan People's Liberation Movement/Army (Movimiento-Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLM-FD: Sudan People's Liberation Movement-Freed Detainees (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Detenidos liberados)
SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)
SRF: Sudan Revolutionary Forces (Fuerzas revolucionarias de Sudán)
SSA: Shan State Army (Ejército del Estado de Shan)
SSA-N: Shan State Army – North (Ejército del Estado de Shan - Norte)
SSC: Sool, Saanag y Cayn
SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)
SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)
SSOMA: South Sudan Opposition Movements Alliance (Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur)
SSPDF: Ejército de Sudán del Sur
SSPP/SSA: Shan State Progress Party/ Shan State Army
SSPP: Shan State Progress Party (Partido del Progreso del Estado Shan)
SSUF: South Sudan United Front (Frente Unido de Sudán del Sur)
STC: Southern Transitional Council
TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán
TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)
TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigré)
TRF: The Resistence Front
TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan
UA: Unión Africana
UDA: United Democratic Alliance
UDRM/A: United Democratic Revolutionary Movement/ Army (Movimiento/Ejército Revolucionario Democrático Unido de Sudán del Sur)

UE: Unión Europea
UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)
UFR: Unión de Fuerzas de Resistencia
ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)
ULFA-I: United Liberation Front of Asssam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)
UMP: Unidades de Movilización Popular
UNAMA: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán
UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq
UNAMID: Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (o FPNUL)
UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei
UNITAMS: Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán
UNJHRO: Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (RDCongo)
UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)
UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNOWAS: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel
UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo
UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia
UPC: Union pour la Paix en Centrafrique (Unión por la Paz en la República Centroafricana)
UPDF: Fuerzas Armadas Ugandesas
UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
UTI: Unión de Tribunales Islámicos
UTS: Unión Tribal del Sinaí
UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)
VRAEM: Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)
YBS: Unidades de Resistencia de Sinjar
YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)
YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)
YPS: Civil Protection Units (Unidades Civiles de Protección)
ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- **Investigación.** Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.

- **Educación y formación.** El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.

- **Diplomacia paralela.** La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.

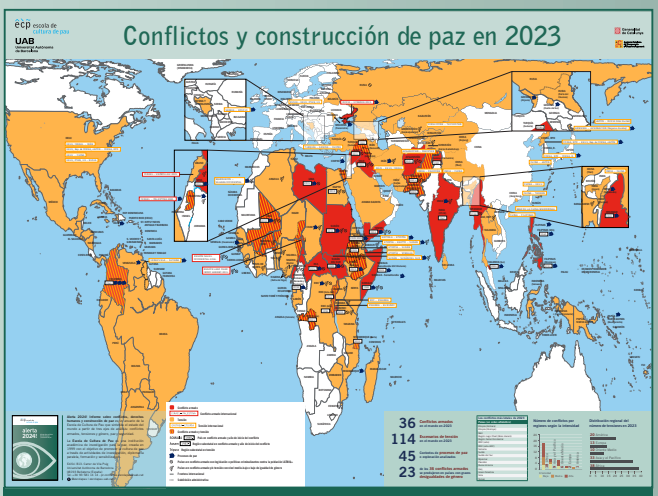
- **Servicios de consultoría.** La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.

- **Sensibilización.** Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau
Edificio B13, Carrer de Vila Puig, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra (España)
Tel: +34 93 581 14 14
Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat / Web: http://escolapau.uab.cat

Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2023 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios del conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

9 788410 328143



MAPA de conflictos y construcción de paz desplegable en el interior

Con la colaboración de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

Durante los últimos 22 años, la Escola de Cultura de Pau ha ofrecido al mundo una visión extensa y reflexiva de las tensiones y conflictos que nos separan. A medida que entramos en una nueva era de competencia global, guerras de agresión, grandes daños a la población civil, retroceso democrático y reacción global contra la igualdad de género, el tipo de análisis y percepción que nos proporciona el informe *Alerta!* es más necesario que nunca para mantener los ojos abiertos y el cerebro pensando en el mundo que queremos transmitir a la próxima generación. Este es el tipo de informe que debería conducir a acciones para preservar y promover nuestros bienes colectivos más preciados: la paz, la seguridad y el estado de derecho, dentro de un sistema global más justo.

Ornella Moderan,
investigadora independiente, asesora principal de RSS, Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)

El vasto panorama de los conflictos armados que asolan el sistema internacional es difícil de aprehender en toda su complejidad. Sin embargo, gracias al trabajo minucioso y riguroso de la Escola de Cultura de Pau en su informe *Alerta!*, podemos entender hoy mejor qué está pasando en el mundo en el ámbito de la conflictividad y cómo éste ha ido evolucionando en los últimos años. A través de la recopilación de datos, la discusión de criterios, la aplicación de clasificaciones o la propuesta de nuevos temas conocemos mejor la realidad. Y éste es el primer paso para transformarla. ¡Sólo tenemos que esperar a que *Alerta!* nos siga acompañando durante mucho tiempo, proveyéndonos de argumentos muy potentes para descartar la vía violenta como recurso.

Laura Feliu Martínez,
profesora de Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La mayor fortaleza del informe *Alerta!* se encuentra en el equipo que lo elabora, en su larga y sólida experiencia realizando análisis reputados y rigurosos que ayudan a comprender las tendencias, las dinámicas y los escenarios de los conflictos armados y las tensiones políticas en todo el mundo. Esa fuerza emana, también, del convencimiento de que esos problemas pueden y deben abordarse con maneras constructivas, alertando de las consecuencias de optar por la vía de la violencia y contra el oportunismo de una geopolítica que rara vez sitúa a las personas en el centro de las preocupaciones. Con una mirada de cultura de paz, este informe proyecta más allá del ruido de las armas y antepone la justicia y el respeto de las diferencias. La guerra nace en la mente de las personas; el informe Alerta! nos recuerda cada año que también es cosa nuestra desacreditarla y proporcionar alternativas viables y duraderas.

Alejandro Pozo Marín,
investigador del Centre Delàs y de Médicos Sin Fronteras